

Jordi Gracia

Javier Pradera o el poder de la izquierda



Medio siglo de
cultura democrática



ANAGRAMA
ARGUMENTOS

Índice

PORTADA	
PRÓLOGO SOBRE EL HOMBRE INVISIBLE	
1. CUANDO ERA EL LARGO	
2. EL VALOR DE LA CONSPIRACIÓN	
3. DE LA RESISTENCIA A LA REVOLUCIÓN	
4. A LA SOMBRA DE CUBA	
5. NUEVAS AMISTADES	
6. LOS NUEVOS PODERES	
7. TRANSICIÓN SIN TRAUMAS	
8. HACIA LA SOCIALDEMOCRACIA	
9. VÍSPERAS DEL GOZO	
10. VOLVER A EMPEZAR	
11. EL SOTOBOSQUE GOLPISTA	
12. EN EL REINO DE DIOS	
13. EL ARTE DE LA INDEPENDENCIA	
14. UN BIENIO NEGRO	
15. EN LA BORRASCA INTERMINABLE	
16. MEMORIA Y MELANCOLÍA	
EPÍLOGO SENTIMENTAL	
PIES DE ILUSTRACIONES	
CRÉDITOS	

Para Jordi Herralde y su medio siglo de revolución

Maquiavelo sigue siendo útil a quienes pretenden entender el mundo del poder, bien sea para explotarlo en favor de sus intereses, bien sea para civilizar su ejercicio.

JAVIER PRADERA

En un despachito con un teléfono y una máquina de escribir, pilota Alianza Editorial, controla Siglo XXI, asesora al FCE y escribe editoriales para *El País*.

JORGE HERRALDE, *Por orden alfabético*

Es fácil ser más listo cuando todo ha pasado.

HANS MAGNUS ENZENSBERGER

PRÓLOGO SOBRE EL HOMBRE INVISIBLE

Con algo de hechicero de la tribu y algo de tótem enigmático, Javier Pradera fue sobre todo un peligroso hombre de acción y pensamiento. Entre un Malraux sin novelería y un Fouché sin codicia, manejó sus múltiples poderes de modo con frecuencia abrasivo pero nunca intransitivo. Su imaginación funcionaba de manera programática y apenas nada de lo que hizo estuvo animado por la seguridad estática o la prevención cobarde y conservadora. Casi todas sus aventuras vitales nacieron improvisadas, como trenes cogidos al vuelo y a menudo sin cálculo y sin miedo al riesgo. Había saltado a sus veinte años desde la confortable cavidad intrafranquista de una familia de la Victoria hacia la intemperie pura de la militancia comunista. Pero cuando sintió que esa nueva familia política dejó de ser operativa y creíble la abandonó para buscar a ciegas o a tientas las rutas que sacaran a la sociedad española de la ucronía franquista y la instalaran en los circuitos de las democracias occidentales.

Nadie podía garantizar el menor éxito a la editorial Fondo de Cultura Económica en el territorio comanche que era la España de 1963, pero él se sumó al invento con veintinueve años; nadie preveía que la editorial Alianza se convertiría enseguida en un portaaviones civilizador para varias generaciones desde 1966, y también estuvo Pradera en el vientre de esa empresa. Menos previsible iba a ser aún la relevancia de su papel cerca del cofundador de PRISA, Jesús Polanco, antes incluso de crear el nuevo periódico de la democracia en 1976, *El País*, en cuya matriz iba a estar también Pradera. Tampoco el peso creciente de su opinión desde el anonimato editorial y desde el mismo consejo del periódico estuvo previsto ni programado por nadie.

Y sin embargo Pradera no se agota en esta síntesis biográfica. Late detrás de los datos un enigma a menudo indescifrable incluso para sus mejores amigos, una suerte de doble fondo que trasciende la anécdota e instala a Pradera en una zona borrosa, inapresable e inmaterial pero insustituible. Este libro trata del poder de la izquierda porque a Pradera no puede explicársele sin él y porque la izquierda lo tuvo a él como uno de sus nódulos más productivos y eficientes. Casi toda su actividad se explica por la intimidad autista del lector y editor, fraternalmente combinada con el impulso político de lo colectivo, del horizonte común y de largo recorrido como justificación de sí mismo y sus múltiples actividades. La opacidad pública de su figura es solidaria o hermana de la construcción del poder de la izquierda cuando la izquierda era una provincia marginal y exigua de la vida pública española. Pero a la vez pocos intelectuales españoles suscitaron en democracia enemistades tan enquistadas como Pradera, y también pocos desdeñaron tan visiblemente como él la fama de cartón piedra del poder frente al poder desnudo. Estuvo siempre mejor informado de lo que exhibía y fue tan escéptico como desdeñoso ante los presuntamente informados o los infatuados por clase y rango; fue ajeno a la cabriola del jactancioso pero también víctima, casi siempre consecuente, de sus sarcasmos corrosivos.

Casi he confesado ya que este libro contiene dos libros y es que, como casi todos los míos, también este ha ido mutando mientras lo escribía. De la semblanza de un editor fundamental pasó a ser también el envés de un crucial conspirador antifranquista. Al final, creo que ha acabado siendo otra cosa todavía: la crónica subterránea del poder de la izquierda, antifranquista primero y democrático después, a partir de Pradera como centro de una red de vínculos, colaboraciones, enlaces potencialmente efectivos entre múltiples esferas políticas y culturales. En público y en

privado ha dicho más de una vez Felipe González que para él Pradera sigue siendo lo que fue *cuando entonces*: el «disco duro de la Transición», el que todo lo sabía y todo lo recordaba, el que no olvidaba quién, cuándo y por qué dijo o hizo esto o lo otro en cada conato conspirativo antifranquista o en cada episodio crítico de la democracia. Otra metáfora menos atrevida pero igual de persuasiva llega de Joaquín Estefanía para hablar de la plasticidad asociativa de Pradera a través de sucesivos círculos concéntricos. A un núcleo cerrado de íntimos acceden de forma selectiva, transitoria o permanente, los miembros de los círculos sucesivamente más alejados del núcleo duro.

Este dibujo tiene algo de centro de operaciones militares con las antenas conectadas en distintos radios de acción y distintas disciplinas –escritores, editores, juristas, economistas, políticos, periodistas–, pero también tiene mucho de laboratorio de gestión de ideas ajenas, de malla productiva de complicidades creadoras. No dejó de crecer con los años esa red y acabó siendo una especie de programa de acción fractal e interconectado, como un insólito pionero de las redes sociales, o como si fuera él mismo una precoz y poderosa red social. La búsqueda incansable de sinergias fue buena parte de su temperamento vital y militante detrás de una mesa y de un teléfono fijo, cableando los dispositivos profundos para una nueva sociedad. Contarlo a él es, en el fondo, contar los avatares de la izquierda antes y después de Franco. Por eso en el fondo este libro es menos la biografía de Pradera que la historia del poder de la izquierda en la España contemporánea. Entre sus virtudes estuvo imaginar las condiciones para la conquista del poder y la vigilancia crítica sobre ese mismo ejercicio: neutralizó desde muy temprano las tentaciones utópicas y estériles de la izquierda y buscó su reeducación para convertirla en instrumento de cambio, primero moral e intelectual, después político y ejecutivo. La añoranza sentimental de la revolución no aplastó la defensa programática de las condiciones de posibilidad para una izquierda de gobierno. Solo desde los despachos del poder y desde la producción legislativa, la izquierda podría materializar un programa de transformación social, más allá de la reivindicación callejera, la movilización obrera y la fantasía utópica.

La laberíntica recolecta de testimonios ha propiciado una combinación desaforada de ángulos luminosos y sombras impenetrables sobre Pradera y sus batallas. Han sido muchos, y casi todos aparecen mencionados en el libro, pero quiero destacar por distintas razones a Natalia Rodríguez-Salmones –la primera y más transparente ruta a la intimidad personal y profesional de Javier–, a Joaquín Estefanía, Miguel Ángel Aguilar, José María Maravall, María Cifuentes, Santos Juliá, Juan Cruz, Rocío Martínez-Sempere y José María Ridaó (que empujó al libro para que dejase de ser la semblanza de un editor y buscase el retrato integral). Ha sido vital el auxilio de Mercedes Chuliá desde el servicio de documentación de *El País*, y Jordi Herralde sale de un modo u otro en múltiples entre líneas de este libro, incluida la primera página, pero se sumó a la aventura sin saber todavía, ni él ni yo, que la aventura acabaría en Anagrama.

Pese a la pluralidad de los testigos, en todos resaltaba de forma fulminante una solemnidad que trascendía los méritos objetivos de Pradera para tasar la complejidad de la persona, sin atenuar ni sus excesos ni sus injusticias flagrantes. Parecían contagiados de la veracidad intransigente del mismo Pradera, o seducidos por la ejemplaridad de quien dijo lo que tenía que decir cuando tenía que decirlo y donde debía decirlo. Los testigos adversos, aquellos que han identificado en Pradera una suerte de *deus ex machina* de sus múltiples desgracias o frustraciones, a veces con razón, proceden sobre todo de la prensa escrita, del memorialismo o del periodismo con propensión canallesca y comisarial. Expresan por oposición la sustancia del poder de Pradera como intelectual y editor pero también como abrasivo polemista con firma y a cara descubierta. Su

inventiva para los apodosos crueles ha sido legendaria, y alguno no ha desaparecido todavía del léxico común (o podría volver en cualquier momento, como la «esfinge sin secreto» que fue José María Aznar).

Quizá la razón más secreta y sobrevenida de este libro está en el intento de entender el funcionamiento del poder, o al menos una dimensión del poder que escapa a la institucionalización bendecida por la burocracia de un Estado, el poder que emana a veces con violencia y a veces con la ejemplaridad de una figura sin títulos, sin nombramientos, sin ceremonias: como si de veras el poder y la autoridad fuesen un atributo innato y no una atribución transitoria. Sigue arraigadísima en mí la impresión de que solo de forma retroactiva hemos empezado a entender, quienes vivimos de niños la Transición, la trascendencia de Javier Pradera como brújula de la izquierda e ideólogo de la socialdemocracia. Para entender algo de su historia y de la historia de la izquierda tenía que deshacerme de buena parte de su memoria. Hube de desandar el camino que la tribu había trazado para entronizar a un tótem, y desplegar después la topografía más veraz posible de quien seguiría siendo hasta el final un enigma o un tótem impenetrable. Por eso este libro es todavía dos cosas más: una meditación insatisfecha sobre las pasiones de un editor sabio y un asalto al mejor antropólogo de la fauna política de la democracia y de la política como medio antropofágico.

1. CUANDO ERA *EL LARGO*

De la edad más menuda conservó pocos recuerdos pero muchas malas sensaciones. La infancia de Javier Pradera no transcurrió propiamente en su casa, sino en casa de sus tíos, y ni siquiera creció en la ciudad donde nació el 28 de abril de 1934, sino en una ciudad ajena, Madrid. Siempre quedó San Sebastián como refugio y consuelo para los veranos mientras se instalaban *recogidos* en Madrid tras el final de la guerra. Como recordó años después, aquella familia estaba «realmente muy cerca del cogollo de la vida política del país», y con él se cumplió alguno de los ritos de paso: vivió su escolarización de niño aplicado en el colegio de El Pilar en los años cuarenta mientras convivían la madre, Carmen de Gortázar, y los tres hijos con su tío Juan José Pradera. Era hermano de su padre y en casa regía el mando de una abuela tremenda –María *la Brava* era su apodo–, como no era extraño tampoco recibir año tras año la visita a domicilio, y también tremenda, de Carmen Polo. La mujer de Franco acudía allí para honrar la memoria de los muertos y saludar a los tres hermanos, *pobrecitos, los huerfanitos*, con la afectada pronunciación piadosa que imitan todavía hoy los Pradera y que yo le oí a Javier reteniendo una carcajada explosiva.

Era verdad, por una vez, lo que decía Carmen Polo. El 6 y el 7 de septiembre de 1936 detuvieron en San Sebastián a su abuelo un día y a su padre al otro para mandarlos a la cárcel de Ondarreta, antes de la toma de la ciudad por las tropas sublevadas. A ambos los fusilaron expeditivamente y arrojaron sus cuerpos en fosas comunes del cementerio de Polloe. Su abuelo Víctor Pradera había sido un relevante e icónico político del carlismo más tradicionalista (con calles por todos los sitios y referencia ineludible). Lo habían matado poco después de publicar en 1935 *El Estado nuevo*, partidario de todos los reaccionarismos posibles, desde la Falange de José Antonio hasta el Bloque Nacional de José Calvo Sotelo, y firme adversario del nacionalismo de Sabino Arana. Para matar al padre, Javier, debieron encontrar menos fundamento pero idéntica pulsión: era funcionario técnico del Ayuntamiento de San Sebastián, y una doble delación lo condenó a muerte sin más y sin otros cargos que ser hijo de Víctor Pradera y un tanto «jatorra», según Pradera. Contaba Javier dos años y pico, y desde entonces «rezaba todas las noches por mi padre y mi abuelo», y seguiría siendo durante años niño de rosario y comunión, aunque todavía no desfilase como Pelayo de las juventudes tradicionalistas. Lo haría en cuanto cumplierse la edad reglamentaria.

No era un entorno doméstico especialmente dotado para el diálogo o la negociación, y quizá con nadie menos que con la familia llegada de San Sebastián tras terminar la guerra. A un joven sociólogo recién establecido en Oxford, José María Maravall, le contaba Pradera hacia 1972 en una entrevista, suspendiendo la respuesta durante varios segundos mientras inhalaba el humo de un cigarrillo, que aquella era una familia diezmada y en «circunstancias bastante especiales». No parece muy seguro de querer seguir por ese camino confesional, el silencio se prolonga, los titubeos se multiplican, y Pradera acaba escurriendo el bulto ante un asunto que todavía le incomoda a sus casi cuarenta años: «En esto de los recuerdos hay tanta selectividad, ¿verdad?» Y ahí termina la respuesta sobre su medio familiar, al menos de momento.



Los niños Pradera (1938).

El enredo no era pequeño, en realidad, y la excusa para eludir ese pasado se antoja legítima o natural: la madeja de sentimientos arraigados en la infancia fue en su caso una suerte de lastre o de foco de tensión que estallaría en distintas direcciones, incluso contradictorias, durante su vida adulta. Apenas conservaría amigo alguno de su paso por el dichoso colegio de El Pilar, pero sí algún recuerdo de su indolencia: «Usted, Pradera, ni ve, ni oye, ni entiende, ni se entera, ni comprende», le decía uno de los padres educadores, poco antes de que Pradera viviese como continuidad natural su salida del colegio y su ingreso en la universidad. Las huidas a los billares de los *luisés* seguirían siendo poco menos que las mismas tanto si salía del Pilar como si salía de San Bernardo, en una suerte de prolongación de la infancia indolente o de un mismo mundo inmóvil donde nada era cuestionable y los marcos de comprensión del franquismo resultaban inalterables. Tanto él como su hermano mayor, Víctor, fueron destacados estudiantes, además de hermanos con todas las de la ley, incluidos los abusos físicos y psíquicos del mayor sobre el menor, hasta que el menor devolvió una santa bofetada derribando al mayor al suelo. Ahí se reequilibró una relación que fue siempre estrecha y cómplice a lo largo de los años, y mucho más distante con su hermana, Machi (María Milagrosa).

Pradera podía no haber escapado nunca a la atmósfera oscura y opresiva de una familia privilegiada de la Victoria. Podía haber seguido la ruta natural de contramaestre jurídico del régimen y dócil instrumento de la prosperidad franquista, pero escapó al molde desde muy temprano. A principios de los años cincuenta pisa por primera vez la universidad para cursar la carrera de Derecho sin vocación ni convicción. Pero empezó entonces a configurar una tupida red de contactos que desembocaría a la vez en una pluralidad de papeles y experiencias inesperadas, casi experimentales y en gran medida solo imaginarias. Con él llegaban a las aulas otros jóvenes (casi todos varones) de buena posición, como él mismo, todos con sus trajes graves y sus corbatas estrechas, su formalidad de pelo recortado y sus gafas de pasta negra.

Que él procedía de la zona más turbia del régimen era seguro porque su apellido pesaba más que él. Figuraba tan alto en las vitrinas de los mártires de guerra como su propia estatura: su abuelo Víctor Pradera era mucho abuelo como ideólogo y portavoz del reaccionarismo tradicionalista de antes de la guerra. Su temprana e innata propensión al humorismo, sin embargo, podía complicar la imperiosa religiosidad de aquel régimen en las aulas del nacionalcatolicismo. Clemente Auger recuerda sin ningún titubeo el origen de su perdurable complicidad con Pradera en una de sus provocaciones: ninguno de los dos supo reprimir la risa cuando el auxiliar del doctor Puigdollers, el beato José María Ruiz Gallardón, acababa de santiguarse para empezar la clase. La fulminante expulsión del aula los dejó esa tarde en el caserón de San Bernardo deambulando para fraguar una alianza vital y biográfica que recorrería múltiples etapas pero ya no iba a romperse desde entonces.

A Pradera no le brotó la pasión por el Derecho en la universidad pero sí la pasión por las ideas y la política. Empezó entonces a cuajar la fantasía de ser algún día catedrático de Ciencias Políticas sin la menor aspiración a reformar nada, o perfectamente adaptado a los usos de una universidad cloroformizada. Al mismo José María Maravall le contaba Pradera hacia 1972 que su primera vocación había sido la Medicina pero que en la familia se impuso el Derecho sin margen de discusión y seguramente tutelado, como brillante estudiante con excelentes calificaciones, por un tío inhóspito que no se había movido del carrusel de cargos desde el inicio de la Victoria. Juan José Pradera era en ese momento vicesecretario de Secciones del Movimiento y vicepresidente primero de la Asociación de la Prensa de Madrid, había sido director del muy católico *Ya* hasta 1951, y seguía siendo homosexual disciplinadamente discreto. La familia era, de hecho, puro régimen con dos mártires de la Cruzada.

PRIMERA INTEMPERIE

Ese mundo universitario sin embargo albergaba aguas movedizas invisibles y zonas de tráfico imprevistamente agitadas. En ellas quedará atrapado el muchacho confuso durante los dos años posteriores a 1953, cuando Pradera fecha una crisis íntima y profunda, suya y de su grupo inmediato de amigos. Tiene diecinueve años y esa crisis no atañe solo a la fe religiosa, que entra en quiebra definitiva para no volver en ninguna de sus versiones, sino también a la fe ideológica de un joven socializado en el corazón del franquismo. Nada era lo que debía ser ni nada era tampoco lo que parecía para quienes cursaron a pies juntillas, como serios y estudiosos muchachos, la fe del falangismo y la convicción en la revolución social. La disparidad irreductible entre la letra del régimen y la paupérrima realidad franquista dejaba inerme ante las contradicciones. Cebaban sin saberlo una traición ideológica monstruosa.

No fue nunca cargo del falangista Sindicato Español Universitario (SEU) porque ese sindicato encarnaba una aclimatación deshonrosa a la vulgaridad franquista, sin ideal de vida y sin proyecto creíble alguno. Su rebeldía de cariz joseantoniano o ledesmiano fue antifranquista, y tan displicente con la Falange fósil de su casa como con el franquismo granítico. Se siente su entorno de amigos reserva genuina del «falangismo puro» y muy consciente a la vez de que «los marcos del sistema eran absolutamente inamovibles». La Guerra Civil pertenecía a un pasado «lejanísimo» y Franco, sin duda «un enorme corruptor de todo», era un puro «traidor» irrecuperable, como le contaba a Maravall en 1972.

Pero como huérfano de guerra y mártir de la Cruzada el proceso fue más complicado, más torturado y venenoso: esa instalación en el falangismo abstracto, ideológico y joseantoniano podía ser la antesala para una vivencia más radical del desapego, de la disidencia o incluso de la crítica al propio régimen. Ese lugar pedregoso y desafiante era a la vez un lugar culpable: la familia se había roto de forma trágica por la violencia revolucionaria de 1936 y los rojos eran el auténtico enemigo incuestionable. Por eso podía entrar entonces en terreno pantanoso: acentuar la acritud hacia el mundo familiar comportaba la traición a los muertos de casa, a su padre y a su abuelo, pero también a su madre, a su tío, al resto de una familia con complicidades fundadas en la sangre y el duelo.

Sus primeros encuentros con un vasco parlanchín y descarado, Enrique Múgica, pavimentaron esa ruta incierta ligándola a lo que entonces era, o dijo que era Enrique Múgica, «un demócrata-liberal». Se dirigió a él y a su grupo hacia 1953 como agitador e inconformista, como personaje

dispuesto a sacudir la modorra de un entorno sin nervio ni ilusión alguna. No era verdad porque la verdad es siempre mucho peor: el enemigo, el auténtico enemigo, había vuelto a casa o había resucitado. Hacía apenas unos meses que actuaba en Madrid una microcélula comunista impulsada por Federico Sánchez, clandestinamente instalado en la capital desde la primavera de 1953. Y uno de sus miembros más activos era Enrique Múgica como aerolito lanzado desde las espesuras del pasado o desde las tinieblas exteriores.

A nada semejante pertenecía Pradera porque su fascismo era reflexivo y político, no mimético o epidérmico. Fue fascista porque las cosas se las tomaba en serio ese joven inteligente, convencido de que el Estado era «el elemento dinámico y reformador» capaz de enfrentarse «a una sociedad pragmática, inerte, egoísta». Defendía con su falangismo «una opción por la interpretación de la historia» y no los intereses de una familia o un botín de guerra. En una facultad fundamentalmente apolítica, convivían con alguna estridencia dos subgrupos minoritarios e ideologizados, los falangistas (que eran «los plebeyos») y los monárquicos (que eran «los señoritos»). Él no estaba cómodo en ninguno de los dos porque había encontrado una tercera opción: los falangistas que vestían la camisa azul no por imperativo de uniformidad sino como expresión de un ideario, los falangistas disidentes e inconformistas, los desengañados del franquismo y movilizados contra el inmovilismo del Movimiento, del SEU y de sus cargos.

En unos pocos meses del verano de 1953 se fraguó la crisis de conciencia que conduciría, dos años después, a su ingreso natural en el Partido Comunista con veintiún años. Todavía la papeleta de los exámenes finales de la carrera le temblaba en una mano en junio de 1955 cuando en la otra empezaban los temblores de la clandestinidad desde septiembre. El tránsito había sido traumático y doloroso, madurado lentamente desde el desengaño del falangista joseantoniano hasta la *inversión totalitaria* que lo lleva hacia la militancia comunista de sus nuevos amigos, y en particular Enrique Múgica. La movilización de una exigua minoría de universitarios estaba en marcha para crecer con cuidado, con astucia e incluso con engaños. Pradera y los suyos fueron carne de cañón sensible al discurso de aquel presunto «demócrata-liberal», capaz de promover una agitación real en forma de encuentros literarios, lecturas de poesía, charlas de discusión ideológica y política. Por eso Múgica entró a Pradera y su grupo de falangistas puros con un largo volantazo de reproche a Rafael Calvo Serer y su reaccionarismo tradicionalista: estaba en boca de todos un artículo suyo de ese mismo 1953, publicado en la ultraconservadora *Écrits de Paris*, en torno a una Tercera Fuerza apadrinada por el Opus Dei.

Ya no dejarían de discutir y debatir desde entonces, pese a las broncas y las desconfianzas. Empezó entonces un terremoto global, vivido lenta y tortuosamente en la intimidad de la conciencia, en la intimidad familiar y entre los amigos socializados en parecidas ideas joseantonianas y ledesmistias. A Maravall le confiesa que ahí cuajó una «crisis muy gorda de tipo personal, de tipo privado», junto a una «crisis política», también «muy gorda»: el desclasamiento dentro de casa era la primera, el descubrimiento de una nueva ideología era la segunda. *César o nada*, de Baroja, había sido «una especie de libro de cabecera» que se sabían de memoria. Pronto dejarían de ser lo que eran, «un grupo de fascistas puros».

Con su gracia y su punto de frescura imprudente, los primeros contactos con Múgica, Julio Diamante y otros poquísimos comunistas fueron difíciles y abruptos. Se llenaban necesariamente de equívocos porque jugaban todos en el territorio tácito de un inconformismo plagado de equívocos. Los enfrentamientos fueron a veces muy crudos: a Pradera le quedó durante muchos años la memoria de la marrullería maniobrera y maquiavélica de los comunistas, con las consiguientes broncas y trifulcas por deslealtades, por engaños, por «cabronadas» frustrantes

mientras colaboraba en los Encuentros de Poesía de 1954. El contacto con esa nueva vanguardia juvenil, su actividad como promotores de charlas y tertulias, estructurarían políticamente sus nuevas experiencias de calado. En el caso de Pradera fueron, sobre todo, tres: las noticias sobre el marxismo escuchadas en clase de Javier Conde en el Instituto de Estudios Políticos, la inmersión en programas de acción del Servicio Universitario del Trabajo y un viaje a Italia, todo en el mismo verano de 1953.

La conexión comunista llegaba por la ruta de lo que Pradera llamaba «inversión de la ideología fascista». La excursión al corazón de la miseria rural y el viaje oxigenador a Italia activaron el contacto progresivamente franco con otra rebeldía juvenil, sintonizada con la suya pero no idéntica, y ni siquiera coherente, pero sí muy atractiva. Pradera creía que sin haber tratado antes a Enrique Múgica, la experiencia de los campos de trabajo del Servicio Universitario del Trabajo (SUT) no hubiese actuado con la hondura con la que lo hizo: descubrió allí un mundo desconocido pero profundamente hiriente. Su destino fue Plasencia primero y después uno de los lugares más miserables de la España de antes y de después de la guerra, las Hurdes, como a otros les tocaron otros tantos campos y lugares de epifanía social. Ese servicio fue por entonces poco menos que auténtica puerta giratoria hacia la militancia antifranquista, y comunista en particular, como le pasó a su colega de carrera Ramón Tamames, a Jesús López Pacheco, a Clemente Auger, a Nicolás Sartorius y a tantos otros.

El viaje a Italia de ese mismo verano de 1953 tampoco hubiese sido igual sin ese descubrimiento abrupto y descarnado. Italia no fue todavía un viaje político, y se lo repite a Maravall dos veces en 1972: lo hizo con su primo sin otro ánimo que la recreación ociosa de alguien ya intelectualmente activado, socializado en un fascismo frustrado y seguramente en condiciones de empezar su tránsito hacia otra fe. Por eso de Italia regresó con abundante literatura marxista traducida al español, pero también se acordaba de algún título singular, como *Sul fascismo*, de Palmiro Togliatti, a quien conocía por las clases de Conde, cuando el PCI vivía momentos dulces y buenos resultados electorales en Italia. Contaba entonces el partido con el respaldo activo de lo mejor de la clase intelectual, como la editorial de Giulio Einaudi y la nueva literatura y el nuevo cine neorrealistas de Elio Vittorini o Cesare Zavattini (quien había pasado una larga temporada en España acompañado de otro comunista de la guerra hoy resucitado, Ricardo Muñoz Suay).

Estaba a punto de quedar atrás la etapa de becario de veinte años en el laboratorio ideológico del régimen, el Instituto de Estudios Políticos, pero no la buenísima memoria que guardaría siempre de sus cursos. Allí aprendió entre 1952 y 1953 lo que no está escrito escuchando a Eduardo García de Enterría, a Enrique Gómez Arboleya y Enrique Tierno Galván, a Manuel Cardenal Iracheta, a Enrique Fuentes Quintana, a Carlos Ollero o al propio Javier Conde, según le contaba a Miguel Ángel Ruiz Carnicer y, según Pradera, sin especial toxicidad ideológica. A casi todos los reencontraría años después como autores, como asesores o como auxilios vitales, excepto a Gómez Arboleya. Se suicidó en 1959 después de haber sembrado la curiosidad en unas cuantas cabezas en torno al valor de la sociología como investigación empírica.

Pradera es ya un muchacho de familia vencedora sacudido por contradicciones flagrantes, hipocresías insolubles, papelones indecentes. Se siente miembro de una hueste sedada por una palabrería en la que ni creen ellos ni creen sus mandos. La desafección falangista contra el Movimiento y el franquismo cuajaba en el contacto con la calle y la miseria, el silencio y las mentiras. La retórica de una revolución social pendiente se desmoronaba en él y en jóvenes algo mayores que Pradera, también activos en distintos frentes, unos más politizados y otros menos.

Algunos habían armado ya, con ayuda de un profesor represaliado y vencido, Antonio Rodríguez-Moñino, una nueva revista de literatura y crítica, *Revista Española*. Un hijo de jerarca y teórico del falangismo, Rafael Sánchez Ferlosio, acababa de publicar allí la traducción del relato de Cesare Zavattini que inspiró la película *Milagro en Milán* de Vittorio de Sica, *Totó el bueno*. Sánchez Ferlosio, nacido en Roma de madre italiana, Liliana Ferlosio, arrojaba a las conciencias anestesiadas aquel cuento «demasiado grave para niños» pero no para «niños de cuarenta años». Ese mismo verano de 1953, tanto él como su novia Carmen Martín Gaité habían viajado a Italia para ver a Zavattini y confirmar con él que el mejor título para la película era el que quería el escritor: *Los pobres estorban*. Ferlosio había cursado ya un año en la Escuela de Cine, con Jesús Fernández Santos. Martín Gaité también había quedado ya «sacudida para siempre», como dice ella, tras su inmersión social de «señorita burguesa de provincias» en un dispensario de Vallecas. En realidad, casi todos sus amigos de universidad escriben relatos tan dolorosos como los suyos o artículos y reportajes que rehabilitan la dignidad humana de derrotados de todas las guerras, incluida la madre de todas las guerras. Tienen ya incluso instrucciones de uso porque todos ellos, Ignacio Aldecoa y Rafael Sánchez Ferlosio, Jesús Fernández Santos y Alfonso Sastre, Josefina Aldecoa y José María de Quinto, Manuel Sacristán y Juan Benet habían leído cosas parecidas. En una revista importante como *Índice*, Benet había retratado ya en enero de 1954 la hosca melancolía liberal de Baroja con la prescriptiva mención de Jean-Paul Sartre y *Qué es la literatura*, traducido en la editorial Losada de Buenos Aires en 1950: lo habían leído todos.

Clemente Auger recuerda a Pradera poco noctámbulo y menos jaranero, desdeñoso de la bulla estudiantil y ya con ese punto de reserva crítica o de distancia fría que no perdió nunca. Estudia mucho y más va a tener que estudiar cuando decida concentrar los dos últimos cursos de Derecho en un solo año académico, de septiembre de 1954 a junio de 1955. Sus excelentes notas explican esas prisas, pero la prisa está sobre todo en acelerar la salida de una célula familiar opresiva. Era verdad que de niño se había sentido como un donostiarra desterrado en los inviernos de Madrid, pero ya era verdad también que en aquella casa vivían casi «como recogidos» y «estudiar carreras cortas para ganarnos pronto la vida» era parte del plan, aunque nunca se disipase del todo la vivencia común de la posguerra, el miedo a la pobreza o al colapso imprevisto de todo.

Pero está sin duda conectado y atento a todo porque todo es tan pequeño entonces como lo era antes de la guerra. Es imposible que ignore que uno de sus colegas de Derecho, Claudio Rodríguez, ha ganado un premio de poesía (*el premio de poesía, Adonais*) con unos formidables poemas que son uno solo, *Don de la ebriedad*, y es más imposible todavía que ignore el mensaje «a los intelectuales patriotas» que circula desde abril de 1954. Acaban de llegar desde Francia dos militantes clandestinos del Partido Comunista de España con el encargo de informar sobre el interior y agitar todo lo agitable. Se llaman Jorge y Carlos Semprún Maura, aunque en teoría nadie sabe sus nombres reales. Con sus primeros movimientos ha nacido la idea de convocar un Congreso de Escritores Jóvenes, anunciado para el 7 de abril de 1954, luego aplazado al inicio del nuevo curso, en octubre, mientras promueven otras iniciativas como la infiltración en el SEU a través del control de las elecciones de delegados apoyando a sus propios candidatos: ahí están ya los hermanos Tamames, Julio Diamante y Jaime Maestro.

Mientras Pradera se sumerge en los exámenes de Derecho de tercero, se formaliza con alguna solemnidad el 1 de abril de 1954 la primera célula comunista de la Universidad de Madrid. Acaba de crearse el Aula de Literatura de Derecho con un hiperactivo Enrique Múgica, Julián Marcos, Jesús López Pacheco, Julio Diamante. La familia silenciosa de rojos se mueve ya con menos cautela que antes: Ricardo Muñoz Suay, Juan Antonio Bardem y el pintor Pepe Ortega,

Gabriel Celaya, Amparo Gastón y Eugenio de Nora, Ángela Figuera Aymerich, Antonio Ferres, Ángel González o José María Moreno Galván. En marzo de ese año 1954, Nora ha impartido ya una conferencia en torno a la poesía social y el expresidente José Hierro ha defendido en otra a los estudiantes que se interesan por rojos icónicos como Rafael Alberti, Pablo Neruda o Miguel Hernández.

En poco más de un año, Federico Sánchez se ha consagrado como el nombre de guerra de Jorge Semprún y ha puesto en marcha algo que es más que una célula. Sus brujuleos y contactos en España le permiten redactar un informe a la dirección del PCE en el que revela al desconectado exilio comunista una España inesperada. En septiembre de 1954 cuenta los choques de poder entre familias políticas franquistas, enfatiza la omnipresencia de la corrupción, subraya el descontento resignado de la población, detecta la evidente pérdida de credibilidad de Falange, pero, sobre todo, transmite la vitalidad de las nuevas sensibilidades juveniles. Parecen esperar un empujón, un aglutinante, una bandera que les saque del hastío autocompasivo y los movilice contra un régimen que sienten desligado de ellos, impermeable a sus convicciones o incluso a sus nostalgias revolucionarias.

Esa refrescante información catapultó la figura de Federico Sánchez, políglota, guapo y culto, a un Comité Central del PCE constituido por casi cuarenta personas. Con él se incorporan al mismo tiempo, en el primer congreso que celebra el PCE tras el exilio, militantes clandestinos en España como Simón Sánchez Montero y Gregorio López Raimundo, o en el exilio, como Julián Grimau y Francisco Romero Marín. En el Comité Ejecutivo, todavía por entonces denominado Buró Político, figuran los históricos, y, entre ellos, dos personajes capitales. Tienen experiencia de guerra pero son algo más jóvenes que Dolores Ibárruri, Pasionaria, o el militar Enrique Lister. Uno es Santiago Carrillo, que ha seguido en Francia desde 1939, y el otro es Fernando Claudín, que acaba de instalarse cerca de París en 1954 tras una etapa en América Latina y casi diez años en Moscú desde 1947 como cuadro estalinista del Partido. Eso es obviamente lo que son todos, tanto antes como después de la muerte de Stalin en 1953. Y tanto en España como en Francia, la vida del Partido se rige por las normas de la clandestinidad porque es ilegal tanto allí como aquí.

El camino triunfal que abren Federico Sánchez y su grupo de comunistas no es un espejismo ni hijo del subjetivismo analítico. Tampoco es puro ilusionismo ideológico. La nueva agitación que promueven y dirigen es tan cierta y evidente que reclama servicios especiales de investigación de la policía, aún desconcertada ante esta desconocida polución de gentes no fichadas, estudiantes vírgenes de virus y criados muchos de ellos en familias franquistas. Según cree la misma policía, el llamamiento a los intelectuales patriotas ha sido «extraordinariamente divulgado», al menos para las exiguas medidas de la agitación en la España de la posguerra. El borrador lo ha escrito Federico Sánchez, pero el texto definitivo no es exactamente suyo. Lo ha revisado, rebajado y vulgarizado un hombre de confianza de Santiago Carrillo en la dirección del PCE en París, Víctor Velasco, sin contacto directo con España desde hace quince años. Junto a su hermano Carlos, y disfrazado de sociólogo en viaje de investigación, Federico actúa sobre todo como «instructor» – es la palabra que emplea su biógrafo Felipe Nieto– de un grupo de jóvenes que va creciendo entre escrúpulos, contradicciones e inventando sus propias rutas de deserción. Se han acercado ya a ese grupo algunos otros estudiantes atraídos por la novedosa convocatoria del Congreso de Escritores: Fernando Sánchez Dragó, Javier Muguerza, Gabriel Tortella, Carlos Bustelo o José Luis Abellán. Detectan incluso el apoyo que recibe esa movilización de sectores del SEU, también asqueados de la monserga de la revolución pendiente que nadie se cree y que pronto será un cuento chino, un fraude y casi una vejación para Miguel Sánchez-Mazas, hermano de Rafael,

Julián Ayesta y otros más jóvenes como Gonzalo Sáenz de Buruaga, Gabriel Elorriaga y sin duda el propio Javier Pradera.

Algunos de ellos, pero no Pradera, han dejado por escrito múltiples testimonios de inconformismo e insatisfacción (como lo han hecho desde Barcelona Josep M. Castellet, Manuel Sacristán, Esteban Pinilla de las Heras). Sienten también que algunos mayores empiezan a hablar de sus frustraciones, decididamente sensibilizados con el aire que traen las nuevas generaciones. Lo hace ya rotundamente desde el semanario *Revista* y en algunas resonantes conferencias un conocidísimo falangista de la primera época, Dionisio Ridruejo, y en forma más repeinada y cauta el rector de Madrid, Pedro Laín Entralgo. El doble lenguaje y la hipocresía estable se convirtieron en salvavidas para muchos vencedores en crisis de conciencia y convicción, pero apenas ninguno había actuado todavía en consecuencia. Desde luego, su acidez mayor o menor al contar chistes y chismes contra Franco y sus secuaces no hizo a nadie antifranquista ni lo integró nunca en oposición alguna. No hubo antifranquismo en esas zonas intelectuales del régimen sino crisis de confianza y gestión íntima de desengaños ideológicos y contradicciones personales. Solo desde el agitado bienio de 1954-1956, el ejemplo de unos pocos, y por delante de todos Dionisio Ridruejo, actuaría como detonante pacientemente diferido de la salida del armario franquista, y no solo en la cámara acorazada de la intimidad. Para la mayoría iría llegando esa salida muchos años después, cuando empieza a ser significativo el recuento de contritos.

Pese a sus apellidos y genealogías falangistas, la policía se pone a seguir los pasos de casi todos esos jóvenes desde la primavera de 1954 y en particular a lo largo de 1955, con registro de entradas y salidas, lugares de encuentro e identificaciones a menudo muy exactas (y otras solo aproximativas pero no desencaminadas). El mismo secretario del Congreso de Escritores que todavía no se ha celebrado, Julio Diamante, frecuenta una tertulia con Antonio Ferrer y Julián Marcos en un cafetín «antiguo y hondo», cerca de la glorietta de Quevedo. A todos ellos les «unía el ansia de libertad» y casi todos viven con expectación «una revolución que apenas podíamos definir», recuerda Ferrer en sus memorias. Deambulan a menudo por el simbólico cementerio civil como expresión de unión solidaria, son oyentes una y otra vez de relatos reales (que jamás llegan al papel impreso ni a narración alguna) de cárcel, silencio y humillación vividos por parientes derrotados y exiliados, comunistas ocultos o silenciosos escritores como Juan Eduardo Zúñiga.

No es extraño que a Julio Diamante, con esas compañías, le detengan hasta cuatro veces por pocas horas a lo largo de 1955. Aún el ruido no es suficiente ni la amenaza parece grave, pero ya lo es. En diciembre de 1954 Enrique Múgica había sido bendecido por Santiago Carrillo en París y en el verano de 1955 Julio Diamante lo ha sido también. Federico Sánchez ha regresado a Madrid al menos desde la primavera de 1955, esta vez sin su hermano, y ha seguido ampliando el radio de contactos porque hay bastantes cosas en marcha, entre ellas el aplazado Congreso de Escritores. También unas jornadas dedicadas al nuevo cine en Salamanca. El convincente llamamiento se ha hecho público desde marzo de 1955 con los comunistas que escriben en *Objetivo*, Muñoz Suay, Eduardo Ducay, Julio Diamante, con falangistas críticos como Marcelo Arroita-Jáuregui y Manuel Rabanal Taylor, con activistas recelosos de la «catequesis» apostólica comunista, como Basilio Martín Patino y, por supuesto, con la estrella del encuentro, el director de cine Juan Antonio Bardem. Acaba de ser premiado en el Festival de Cannes por *Muerte de un ciclista* y está a punto de rodar *Calle Mayor*.

Uno de sus personajes tiene un inquietante parecido con el revulsivo papel que ha tenido Federico Sánchez en sus vidas. Se llama también Federico en la película, y a Bardem lo detendrán

en plena filmación un día distinto del que escoge el Federico real para visitar al equipo: no lo reconocerá pero ese nombre de guerra es un homenaje al poeta García Lorca. Quizá incluso pudo cruzarse en el rodaje con un superviviente de la Residencia de Estudiantes, Pepín Bello, y con un joven ingeniero con ínfulas de escritor y sobre todo dramaturgo, Juan Benet. A los dos les puso el director a echar humo para ambientar una escena, acostados en unas colchonetas fuera de cámara. Federico Sánchez habría coincidido ya en su pensión de la calle Padilla con otro estudiante desencajado, Alberto Gil Novales, que a su vez es amigo de otros dos comunistas: Eloy Terrón y Emilio Lledó, que acaba de regresar de Heidelberg. Ambos están entregados a sus respectivas tesis doctorales: Lledó ha vuelto para defenderla en España y Terrón le presta a Federico Sánchez el manuscrito de la suya sobre la filosofía krausista para que la lea de vuelta a París.

HACIA EL FINAL INELUCTABLE

Les esperan años amargos de lucha y decepciones; les esperan delaciones, detenciones y frustraciones. Pero les asiste la convicción biológica de un fin único y necesario. La dictadura no va a caer, como creen algunos, tras varios empujones, ni la fuerza del capital será tan vulnerable como algunos entresueñan empachados de potajes ideológicos. Pero el derrocamiento del franquismo no es ya una fantasía sino un programa de acción de la vanguardia histórica, ciencia en acto y conciencia marxista.

La cita con Pradera está prevista en el paseo de la Castellana, cerca de Colón. El muchacho alto y desgarbado al que se encuentra Federico Sánchez junto a Julio Diamante ha culminado su desclasamiento para ingresar en el PCE ante la horchata más famosa de la resistencia. El «entrenamiento comunista» con Múgica había terminado ya ese verano de 1955 mientras Pradera flirteaba a la vez con otra fratría más compleja, deslenguada y festiva. Desde ese verano ha aparecido en la vida de Gabriela Sánchez Ferlosio «el alto» por quien le pregunta su cuñada Martín Gaité el 2 de agosto de 1955. Gabriela pertenece, como él, a una familia de abolengo falangista intachable, aunque hecho unos zorros ya: a sus dos hermanos Rafael Sánchez Ferlosio y Miguel Sánchez-Mazas (todavía no José Antonio Julio Onésimo, es decir, Chicho, que es más joven) los conoce todo el mundo porque no han dejado de enredar por el lado literario y por el lado ideológico.

Miguel ha sido miembro hasta hace muy poco del falangismo militante y social que cuaja en el SUT de la mano del padre José María de Llanos, y cáustico articulista en los medios más agitados del falangismo joseantoniano. Su hermano Rafael había hecho un poco más de ruido entre los camaradas, aunque fuese involuntario, con la publicación de una extraordinaria novela, *Alfanhuí*. Había dejado también alguna huella en la prensa de su irritabilidad ética y de una misantropía en buena medida compartida por Ignacio Aldecoa y sus perdedores sin remisión, por Carmen Martín Gaité y sus señoritas con remordimientos, por Alfonso Sastre y sus escuadras atosigadas, por Jesús Fernández Santos y la bravura inocua de sus protagonistas. A todos les pesa la miseria invasiva, la desigualdad feroz y la impúdica opulencia, la asfixiante malformación católica de la mujer y la muerte civil de los derrotados de la guerra. Están perdiendo *clase* a marchas forzadas para empezar a meterse en problemas y alguna vez buscarse la ruina.

Al elegante y culto emisario del PCE lo que le excita de ese muchacho flaco y también hablador es su insólito propósito de ingresar en el cuerpo jurídico del Ejército del Aire para ser juez militar. Se propone Pradera ganar las oposiciones en noviembre de 1955 con la cabeza puesta en

despachar así el servicio militar pendiente y a la vez avanzar en un temario que le permita opositar después a cuerpos jurídicos civiles o a la abogacía del Estado. Sacó la segunda plaza, seguramente porque dos tercios de sus calificaciones habían sido en la carrera matrículas de honor. Pese a todo, el rendimiento del Pradera de veinte años había bajado ese último año 1955 dada la concentración de cursos y la nueva dispersión de intereses políticos y sentimentales.

La charla que empezó Pradera en el paseo de la Castellana no fue exactamente con Federico Sánchez sino con Jorge Semprún, diez años mayor que él, seductor, hedonista y trágico, obsesivo, competente y meticuloso en sus saberes sobre marxismo, fascismo, burguesía monopolista y no monopolista, Ortega y las masas, José Antonio y los mitos, toros y toreros. Diría incluso que Javier Pradera ingresó en el PCE de la mano de Jorge Semprún antes que de la mano de Federico Sánchez. El argumento de la obra era participar en la vanguardia comunista del nuevo mundo, pero la droga dura real era la revolución y su irrefrenable proceso hasta la victoria final, la claridad diáfana y científica de la ruta en los textos, los análisis y los tratados marxistas, la ética del sacrificio y la abnegación, la conciencia de liderar la transformación del mundo desde su única locomotora verdadera (frente a la maquinaria de un Movimiento embarrancado). Va con esa decisión mucho de un criptocristianismo marxista y mortificado, incluido, y son palabras de Pradera, su «camino de sacrificio, de muerte», vivido como «proceso ineluctable» impulsado por el idealismo irredento y sin límites. Son las mismas causas nobles y abnegadas que hicieron a tantos militar en el falangismo de primera hora antes de la guerra y a unos pocos abandonarlo adulterado por el franquismo en la posguerra.

Contra lo que demasiados camaradas han querido recordar, Pradera asegura que su formación política marxista y comunista fue rigurosa y exigente y sin tabúes de ningún tipo, incluida la justificación de la violencia política de la Unión Soviética. Había leído ya o leería enseguida a Koestler, pero ni él ni nadie actuó en consecuencia o no lo hicieron de inmediato. La fe ideológica y una suerte de moral religiosa ponían por encima al Partido y los fines del Partido, antes que las dudas y vacilaciones individuales: no hubo ignorancia que hoy pueda cancelar cuentas morales de entonces, según el propio Pradera. Ninguna información tóxica (o sospechosamente manipulada) iba a hacer tambalear la fe y apenas hubo dificultad en digerir y neutralizar informaciones ingratas sobre la era de Stalin. Eran ya cosas del pasado y se habían acabado con la misma muerte de Stalin en 1953. Comulgan todos con la era Jrushchov y su informe leído en la última jornada del XX Congreso de PCUS en 1956, sin que pudiesen entenderlo las delegaciones europeas (pero sí Palmiro Togliatti o Fernando Claudín, que sabía ruso). Empezaba una nueva fase del socialismo: «Éramos prosoviéticos atormentados, trágicos, a través de la lente francesa.»

A pesar de que el PCE había abandonado la resistencia armada y Federico tranquilizaba a Pradera sobre la nueva «línea pacífica», no ocultó años más tarde a Carlos Elordi que «si a mí me dicen que hay lucha armada, hay lucha armada, o sea, que no me jodas...». Eso significa también que la enfermedad cursa con dosis de angustia existencial redimida por la acción y ratificada por la expectativa de la represalia: las condiciones de una militancia heroica.

LA CRISIS

Pero es verdad que pese a congeniar Pradera sobre todo con Jorge Semprún, Federico Sánchez es mucho Federico Sánchez. Un artículo suyo de enero de 1956, aparecido en una publicación clandestina del partido, *Mundo Obrero*, combate la suspensión oficial del Congreso de Escritores

con un contraataque en toda regla. El llamamiento esta vez era de alcance global para crear un «frente estudiantil antifranquista». Su fuerza se había visto en público un par de meses atrás en la comitiva de estudiantes que acompañó hasta el cementerio el féretro de José Ortega y Gasset, fallecido en octubre de 1955. Quizá estuvo Pradera (es lo más probable), quizá no, pero puede muy bien que pensase entonces lo mismo que pensó Julio Diamante: «Por fin, el viejo ha servido para algo.» Ante el magnetófono de Maravall en 1972 soltó una coletilla espontánea y muy expresiva al hablar de sus lecturas juveniles. Tras mencionar a Ortega con elogio natural hubo de corregirse enseguida para puntualizar, de acuerdo con el dogma de la izquierda de entonces, que no había para tanto y al fin y al cabo Ortega no era más que «una lectura parafascista, ¿no?».

Múgica, Pradera y Tamames se han puesto manos a la obra de inmediato desde la suspensión del Congreso de Escritores. Van a reconvertirlo en un Congreso Nacional de Estudiantes que ataque directamente la autoridad y el poder del sindicato estudiantil de Falange, el SEU: es un desafío frontal. La publicidad impresa correrá a cargo de otro joven conspirador, Daniel Gil, y su mujer Mónica Acheroff. La *fratría* ferlosiana está viviendo también unos días agitados porque Sánchez Ferlosio acaba de ganar, en la noche del día de Reyes de 1956, el premio de novela más importante de España, el Nadal, con una novela titulada *El Jarama*. Una página entera de *Abc* cuenta que el muchacho no ha cumplido aún los treinta y es «cazador, solitario, enemigo de toda ostentación». Tampoco le gusta la agitación urbana y suele pasar grandes temporadas en el campo, «observando a los pájaros, estudiando la vegetación, rodeado de campesinos», y precisamente por eso no hay manera de dar con él: ni su padre, «el ilustre escritor y académico» Rafael Sánchez Mazas, ni el periódico saben dónde para ahora, en pleno viaje por Andalucía con su mujer, Carmen Martín Gaité. Los versos y la poesía, por cierto, los ha abandonado «por pura rebeldía, por pura sinceridad», en lenguaje perfectamente falangista.

Debieron encontrarlos al final porque a los pocos días es Miguel quien causa la agitación mientras entra y sale de reuniones en el club Tiempo Nuevo con otros conspiradores. Van a redactar un nuevo manifiesto contra el estado de la universidad y también en el fondo un poco contra todo para que algo se mueva. También sirve hacer circular y difundir las cartas de protesta que algunos se atreven no solo a escribir sino a enviar, como ha hecho Ridruejo contra dos ministros de Franco para reprobar sin contemplaciones la suspensión oficial de dos revistas *Ínsula e Índice*. Ridruejo está ahora con ellos en Tiempo Nuevo también para rematar entre todos a 1 de febrero de 1956 el manifiesto que exige representantes estudiantiles «designados por libre elección» y sortear el divorcio entre la «versión oficial» de la universidad y la «universidad real formada por los estudiantes de carne y hueso». No soportan ya más el rumbo actual, «la ineficacia, la intolerancia, la dispersión y la anarquía».

La suspensión de las elecciones a delegados por parte de los jefes del SEU en esas mismas fechas de enero de 1956 será el chispazo que desate el choque entre el régimen y estos estudiantes invisiblemente movilizados por el PCE. La policía no lo sabe todo pero sabe mucho de esas extrañas conexiones entre falangistas históricos como Ridruejo y nombres nuevos procedentes de familias franquistas: los van a detener. El mismo día 9 de febrero se sincronizan maravillosamente dos cosas: *caen* Pradera, Ramón Tamames, Jesús López Pacheco, Gabriel Elorriaga, José María Ruiz Gallardón y Ridruejo y aparece reproducido en *Arriba* el artículo de Federico Sánchez (publicado semanas atrás en *Mundo Obrero*) con su llamamiento a un frente antifranquista. Es emocionante saber que al día siguiente, el 10 de febrero de 1956 y en México, Max Aub anota esperanzado y escueto en sus diarios privados lo que parece mentira: «¿Será verdad todo eso de Madrid? ¡Estar allá!»

En su condición de caballero cadete del Ejército del Aire, Pradera no seguirá a los demás detenidos en sucesivas tandas hasta Carabanchel –Ridruejo, Tamames, Sánchez Dragó, López Pacheco, Diamante, Elorriaga, Múgica al cabo de unos días, etcétera–. Su mes y medio de prisión transcurre en la base aérea hispano-estadounidense de Cuatro Vientos, muy próxima a la cárcel. Allí lo visitará Gabriel Elorriaga pero también Gabriela Sánchez Ferlosio, acompañada de su hermano Rafael y del presunto sociólogo investigador Federico Sánchez, en una prueba más de la fría temeridad que gastaba por entonces Semprún, o quizá síntoma de la irresponsable valentía de una fratría de rebeldes criados en la opulencia de clase. Miguel Sánchez-Mazas en cambio empieza a hacer poco menos que las maletas en dos sentidos. Primero para emigrar de su falangismo puro y organizar con otros jóvenes, entre ellos el hermano de Javier Pradera, Víctor, la Agrupación Socialista Universitaria (ASU); y segundo, para partir físicamente hacia el exilio.

La secuencia de caídas fue entonces considerable porque lo era también la creación de grupos y subgrupos ultraminoritarios. Lo fue la misma Agrupación Socialista Universitaria, hija directa de ese febrero, pero víctima de la inexperiencia y también de la marrullería comunista: Federico Sánchez no dudó en infiltrar en el grupo a Carlos Zayas para controlar sus movimientos desde dentro y a sus militantes Vicente Girbau, Gabriel Tortella, Gonzalo Anes, Francisco Bustelo, además de Miguel Sánchez-Mazas y Víctor Pradera. Las caídas afectan enseguida a este grupo menos preparado y más vulnerable, pero también el radio de acción de la policía se amplía. Caerán en esos días también Jesús Ibáñez y Manuel Ortuño y algo más tarde detienen en Pamplona a Vicente Girbau junto a dos amigos que son en sí mismos una fracción más de la fratría ferlosiana y antiguos amigos de la tertulia del Gambrinus de la calle Zorrilla a finales de los cuarenta: Juan Benet, que pronto militará en el partido que Ridruejo organiza a la salida de la cárcel, y Luis Martín-Santos, que todavía no milita en el PSOE pero lo hará en cuanto lo suelten también a él.

El *Abc* estaba tan bien informado como la policía y supo que había sido «descubierto y desarticulado» en febrero de 1956 el intento de «reconstituir el partido y la acción comunista en España». Sus esbirros siguen ciegamente «consignas políticas de las Centrales soviéticas» y, al parecer, han confesado «su incondicional sumisión» a la orden de «infiltrarse»: era todo poco menos que verdad científica. Pero el régimen no ha conseguido amedrentarlos sino todo lo contrario. La cárcel y las caídas, los interrogatorios, la adrenalina y el coraje desembocan en un nuevo manifiesto. Como todos, va sin firma pero pasa por varias manos y es fundamentalmente obra de Federico Sánchez y Pradera, por una parte, y Miguel Sánchez-Mazas y Francisco Bustelo por la otra. En el ánimo de todos, pero sobre todo de Miguel Sánchez-Mazas, está la voluntad de fijar la genealogía de la resistencia y disipar la sospecha de una acción solo espasmódica o descoordinada. Quieren conectar expresamente la voz de hoy, a 1 de abril de 1956, con el llamamiento de diez años atrás, del 17 de abril de 1947, encabezado por la mítica frase «Desde el corazón de la universidad...». Lo habían firmado por entonces falangistas revoltosos y radicales como el mismo Miguel Sánchez-Mazas, Carlos Robles Piquer, José Fraga Iribarne, aunque no su hermano Manuel, y tampoco Rafael Sánchez Ferlosio.

En este 1 de abril de 1956 hablan ya en nombre de «nosotros, hijos de los vencedores y los vencidos», en frase que orgullosamente recordaron siempre Pradera y Semprún porque cambiaría los protocolos de la resistencia. Con fecha en el aniversario de la victoria franquista, denunciaban la incapacidad del régimen para «integrarnos en una tradición auténtica, de proyectarnos a un porvenir común, de reconciliarnos con España y con nosotros mismos». Y lo hacen ya en guerra abierta porque desde febrero se había desatado «una brutal represión oficial y una grosera campaña de calumnias» contra los firmantes del llamamiento de dos meses atrás. Se ha alentado

«la provocación de grupos armados de una bandería jurídica y políticamente inhabilitada para mantener el orden público, definitivamente expulsada de la convivencia nacional». Este párrafo es puro Pradera contra «aquellos facinerosos» protegidos por las autoridades y el Gobierno, que «solo ha sabido oponer a nuestras razones el recurso de la fuerza». Sin ningún respeto a los «textos básicos» de Naciones Unidas, el Gobierno «ha actuado y sigue actuando de manera injusta, arbitraria y brutal», además de seguir deteniendo a compañeros (sin nombrarlo, aluden a Vicente Girbau). Por eso determinan llamar a los universitarios a una «acción coordinada y decidida» ante la inminente reunión del consejo ejecutivo de la Unesco en Madrid, exigen la libertad de los otros detenidos, reclaman la restitución a sus cargos de los cesados Pedro Laín Entralgo, rector de la Universidad de Madrid, y Manuel Torres, decano de Derecho, y la celebración del Congreso de Estudiantes con garantías «para evitar interferencias del aparato policíaco del Estado y la organización que tan burdamente se atribuye la representación estudiantil», es decir, el SEU.

Y de remate convocan también una huelga de cuarenta y ocho horas en la Universidad de Madrid para los días 12 y 13 de abril. Todavía el PCE no había orientado la estrategia hacia la política de reconciliación nacional, pero ese texto llevaba dentro un mecanismo peligrosamente nuevo y, sobre todo y por primera vez, deslegitimador del franquismo y el lenguaje de la victoria. La misma fecha ha decidido poner Ridruejo al documento que dirige a la Junta Política de Falange para razonar ante sus antiguos camaradas (y de acuerdo con los nuevos) su abandono definitivo del orden franquista. También había ingresado en la cárcel en febrero y allí salió de la inopia y descubrió que sus jóvenes nuevos amigos eran ya culpable y perdonablemente comunistas. Bajo el liderazgo comunista de Federico Sánchez había cuajado la primera actuación expresamente antifranquista respaldada por los hijos de la victoria y de la derrota.

Muchos años después, Pradera dio su versión de la trascendencia de ese llamamiento del 1 de abril. Redefinía según él la visión heredada de la Guerra Civil y empujaba la que empezaron a forjarse jóvenes como él en conversación asidua con Dionisio Ridruejo. Desde mediados de los años cincuenta, defendía Ridruejo un «idéntico espíritu altruista» en ambos bandos y condenaba sin reservas a quienes tramaron la sublevación como movimiento defensivo de la oligarquía, la jerarquía eclesiástica y los poderes reaccionarios: *los empresarios de la guerra*. Esa nueva conciencia deslindaba el drama humano de las familias del significado social y político del franquismo. Propiciaba así una reconciliación basada en condenar a un régimen que convirtió las causas idealistas en legitimaciones del pillaje institucional, la pobreza y la represión de Estado.

Los hijos de los vencedores y huérfanos de guerra como el mismo Pradera (o como Juan Benet) empezaban a superar «algunos de sus dilemas morales» para abrir «las puertas a una eventual reconciliación» con los hijos de los vencidos. El manifiesto del 1 de abril de 1956 reprochaba al régimen su incapacidad para reconciliar a los jóvenes no solo «con España» sino también «con nosotros». Las ideas sobre la Guerra Civil de Ridruejo que «los jóvenes compañeros de conspiración tuvimos ocasión de oírle muchas veces en 1956», según contaba Pradera, son las mismas que estamparía en un libro publicado en el exilio pero con circulación inmediata dentro del país desde 1961, *Escrito en España*. Lo que comprendió ese Pradera comunista de veintidós años en 1956 de un falangista en fase de reeducación democrática a sus cuarenta fue la distinción entre «la guerra como vivencia subjetiva general y lo que fue como conspiración oligárquica “destinada a consumir el secuestro del Estado”», en palabras de Ridruejo. Esa fue «seguramente la contribución más importante» a la nueva visión de la guerra que «los hijos de los vencedores estaban buscando para conciliar sus sentimientos subjetivos de pérdida como damnificados por la

muerte de familiares alineados con la sublevación militar y su enjuiciamiento histórico-político condenatorio del golpe militar» contra la República. Aprendieron que la guerra fue «un conflicto vivido subjetivamente con idéntico espíritu altruista por la mayoría de los combatientes de ambas zonas», aunque con intereses e ideales irreconciliables. Pese a sus casas y familias, descubrieron entonces la responsabilidad de «los dos grandes poderes –económico y eclesiástico– transformados en “empresarios de la guerra civil”»: habían sido ellos los auténticos desencadenantes de centenares de miles de muertos, del derrumbe de la República como el más potente proyecto de modernización integral de la España contemporánea y cómplices del aparato represor y policial del franquismo.

La *reconciliación nacional* se puso en práctica en la calle y en las conciencias antes de ser consigna del PCE, o fue fruto espontáneo de la acción conspirativa y se convirtió después en proyecto teórico. Lo hizo Federico Sánchez en su informe de julio ante el pleno del Comité Central del PCE en Praga y ahí la nueva consigna de la *reconciliación nacional* abría la puerta a alianzas con otros partidos ante la «perspectiva inmediata del derrumbamiento del franquismo». Con razón el ascenso de Federico sigue siendo meteórico y ahora es elevado al núcleo duro del partido, el Buró Político.

Pradera no ha dejado de pertenecer al cuerpo jurídico del Aire, pero saldrá pronto de casa. La notificación en *Arriba* de las detenciones del día 9 de febrero había abierto a la fuerza la auténtica caja de los truenos. Pradera se había aliado con el bando de los asesinos de su padre y de su abuelo, como le dijo Juan José Pradera. Apenas tres meses después, la crisis familiar era ya global y su tío encajaba en mayo el castigo político de su nombramiento de embajador en la remota Damasco. El desorden que se cocina en su casa es ya excesivo y se ha quedado también sin la protección de otra víctima de la crisis de 1956, Raimundo Fernández Cuesta, cesado por Franco como secretario general del Movimiento y de quien dependía el SEU. Pradera cumple el verano de 1956 con sus obligaciones militares y aprovecha algún permiso de días para visitar a Ferlosio, o por lo menos estuvo en casa de Martín Gaité y Rafael «el alto» con «el pelo cortado y aspecto de sorchi con color de pueblo», y no exactamente entusiasta, porque parecía «cansado o desanimado».

Pradera no abandona todavía el uniforme, teóricamente obligatorio, y al menos en julio de 1957 lo viste mientras se casa con Gabriela Sánchez-Mazas Ferlosio sin dejar de ser el agente comunista encargado de las relaciones con intelectuales y universitarios de otros partidos y grupos. Seguirá como caballero cadete del Ejército del Aire más o menos durmiente en los próximos años, con un sueldo muy escaso, y emplea entonces algunas horas de su tiempo como asesor jurídico en la imprenta Clavileño de Germán Bleiberg. Ha llegado a ella a través de su hermano Víctor porque entre sus profesores predilectos en la Escuela Diplomática –cuenta Josefina Gómez Mendoza– estuvo el derrotado superviviente, el poeta y crítico Bleiberg (que a su vez ha sido colaborador de las ediciones de Revista de Occidente y amigo personal de varios de sus autores, entre ellos Julián Marías).

Para la bien informada policía, este joven Pradera pasaba por ser en 1956 «inteligente, ateo práctico, comunistoide, pero más bien aislado en compañía de un grupo de amigos teorizantes», quizá Clemente Auger, quizá Javier Muguerza, quizá Fernando Sánchez Dragó, Víctor Sánchez de Zavala o los hermanos Sánchez-Mazas Ferlosio. Seguirá siendo el responsable de enlazar el Partido con la universidad y cultiva de forma casi innata una suerte de conexiones radiales con grupos y grupúsculos intelectuales en Madrid y Barcelona, tanto de la democracia cristiana como de los sectores liberales, desde el embrionario Frente de Liberación Popular de Julio Cerón hasta

el europeísmo marxista de Enrique Tierno Galván, tan activo y tan solvente desde su cátedra de Salamanca; desde el mismísimo superviviente de la República y la CEDA José María Gil-Robles hasta los universitarios catalanes que se encierran en el paraninfo de la Universidad de Barcelona en 1957 –Luis Goytisolo, Joaquín Jordá, Joaquín Marco, Salvador Giner, Marcel Plans–. A su regreso de París, Octavi Pellissa posiblemente traía las oportunas instrucciones de acción política, y allí, en París, lo recuerda Manolo López mucho más propenso a la ironía y el sarcasmo que a la obediencia catequística (y de ahí quizá la gran sintonía que mantuvo siempre con Pradera).



Javier Pradera, de uniforme, el día de su boda con Gabriela Sánchez Ferlosio (julio de 1957).

En abril de 1957 la policía sigue creyéndole «filomarxista», también «ateo, resentido» y «muy inteligente», a punto de demostrarlo de forma disimulada con su primer artículo publicado. Lo firma como Juan Paredes en septiembre en la revista del PCE *Nuestras Ideas*, sin escapar al tono académico que pide su formación y su papel actual: hasta su nueva detención, será auxiliar de la cátedra de Manuel Jiménez de Parga en la Universidad de Madrid. El texto es sobre todo una embestida contra el tradicionalismo de su abuelo Víctor Pradera y una defensa decidida de las razones de los «falangistas heterodoxos». Las conoce bien porque es la misma mochila falangista que él mismo acaba de abandonar. Al menos «hoy día, todos los antiguos falangistas de alguna categoría intelectual están a mil leguas de sus anteriores posturas. Así Dionisio Ridruejo, encarcelado por defender la *reconciliación nacional* [como ha sucedido en febrero de 1956 y en abril de 1957], Pedro Laín, Antonio Tovar, Javier Conde, Rodrigo Fernández Carvajal».

Quizá no eran *mil* las leguas que separan la antigua juventud y la actual madurez de esos nombres, pero desde luego sabía de primera mano que no eran vejestorios enquistados sin más en los cimientos del régimen, como si nada hubiese pasado en los quince años transcurridos desde el final de la guerra. Era verdad que algunos de ellos habían empezado a empatizar con una nueva realidad moral, biológica, propiamente generacional, en la que las diferencias entre vencedores y vencidos empezaban a resolverse o a enjuagarse de otro modo. Pero deberían pasar algunos años más para que esos falangistas se convirtiesen en antifranquistas de alguna credibilidad ante exiliados y otros vencidos. Ha sido Ridruejo quien desde este abril de 1957 ha difundido en la importante revista *Bohemia* de La Habana una entrevista que corrige él mismo para evitar

equivocidades, «convencido de que ni la más neutra de las colaboraciones [con el franquismo] podía ser decente». Por eso ya no hay lugar a ambigüedades cuando confiesa que «muchos de los que fuimos vencedores nos sentimos vencidos. Queremos serlo». Desde el título, que no era suyo, estaba pidiendo el reingreso en prisión, como así sucedió.

Pradera, por supuesto, ya lo sabía y sin duda la expresión que usa Juan Paredes es premeditada. «Reconciliación nacional» es la nueva consigna del PCE desde el Comité Central de agosto de 1956 y ese texto suyo es un gesto más para difundirla en el caladero del falangismo revoltoso. El objetivo político inmediato ha sido ya acordado ese mismo verano de 1957: la convocatoria para el 5 de mayo de 1958 de una Jornada de Reconciliación Nacional. Íntimamente ese texto es también la primera y única vez en que usará un alias para la clandestinidad. Pradera fue y será Javier, incluso en las comunicaciones secretas con la dirección del Partido, quizá para evitar las potenciales confusiones personales y morales de un heterónimo como el que usó tanto Jorge Semprún. Y no descarto que ese artículo sea, también, su primera aproximación al proyecto de una tesis doctoral sobre los fundamentos ideológicos del falangismo. Cada vez es más poderosa la convicción de fondo de todos, tal como la evocaba Pradera ante Maravall en 1972. Sabían que un golpe de efecto, un acto relevante, un momento estelar dispararía la movilización social y derrocaría el régimen sin remisión. «El menor disturbio público iba a desencadenar» una reacción letal a la línea de flotación del franquismo: ellos debían ser «la espoleta», la primera piedra que derribaría el edificio de un país «estancado», sin «posibilidades de desarrollo» y expectante ante un «cambio revolucionario en España, de verdad», y el *de verdad* lo pronuncia Pradera ante el magnetófono de Maravall con la mezcla de incredulidad y de estupor de quien se admira en presente de la candidez de entonces. En un plazo relativamente corto el PCE podría «tomar el poder» para implantar en España en 1956, en 1957, en 1958 «modelos de desarrollo soviético». Por eso las lecturas reales en el partido eran los clásicos absolutos, Lenin, Marx y Stalin, «y ya está», aunque él leyese también tempranamente a Gramsci o a Lukács, a Trotski en su autobiografía *Mi vida* o en la *Historia de la Revolución Rusa*. No era esa esperanza de revolución un cálculo de probabilidades ni una expectativa fundada; era una predicción infalible cuando el marxismo aprendido sesudamente se tomaba «casi como una ciencia».



Carné universitario (curso 1957-1958).

Nuevas detenciones en enero de 1958 afectan de nuevo a Pradera, y esta vez para una larga temporada que le cuesta el puesto de ayudante de Jiménez de Parga en la universidad. Cuando salga de la cárcel, Jiménez de Parga habrá ganado ya la cátedra de Barcelona y allí sus ayudantes son otros dos antifranquistas, el comunista Jordi Solé Tura y el cristiano revolucionario José

Antonio González Casanovas. Apenas había durado un suspiro su vida académica –calculo que de septiembre a diciembre de 1957– y acabó en nada, o casi nada, aunque retomaría las relaciones con Jiménez de Parga en su trayectoria profesional años después. Había vivido «exclusivamente para la conspiración», cuenta Pradera, desde marzo de 1956 pero va a ser muy difícil organizar con un poco de sentido la Jornada convocada para mayo de 1958 porque con él cayeron muchos otros.

En la cárcel Pradera hace lo que hará el resto de su vida, leer y anotar cosas en infinitos cuadernos. Y sin duda lee también los libros que leen todos, como «una introducción filosófica sistemática al marxismo escrita por un jesuita –*El pensamiento de Carlos Marx*, del padre Jean-Yves Calvez», tal como la describe Pradera. Su marxismo ni es de solapa ni llega por vía oral u osmótica porque el entrenamiento había sido antiguo y concienzudo desde los tiempos de Múgica. A las clases sobre marxismo que daba a su manera Javier Conde en 1953, a través de Hans Freyer y la traducción española en 1947 de su *Introducción a la Sociología*, se sumaba ahora la impregnación teórica y reflexiva sobre un marxismo examinado «académicamente», como estudioso especializado más que como conspirador comunista. Conde podía ser «un psicópata malvado, un ser absolutamente aborrecible», se despacha ante Maravall, pero también era alguien con «formación republicana» que podía «ponerte en la pista de cosas», como le sucedió a él mismo. Y desde ahí se desplegaron las primeras lecturas del marxismo de Marx, con *El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte* por delante y, probablemente, creía recordar Pradera, el *Manifiesto comunista*.

Es también más que probable que aprovechara Pradera el tiempo de cárcel en 1958 para seguir madurando su personal ajuste de cuentas anatómico y forense con Falange. Cada vez está mejor informado de sus enveses teóricos y prácticos; los aprende en casa de su suegro Rafael Sánchez Mazas, amigo histórico de José Antonio Primo de Rivera y número dos de Falange Española. Contra lo que pudiera parecer, Sánchez Mazas no habitaba en retiro alguno de rentista extremeño sino en el centro del debate político como voz áulica incuestionable y editorialista de *Arriba* plenamente ratificado en sus convicciones. El mismo año 1957 en que su hija Gabriela se casa con el rojo Pradera reunía sus artículos políticos con el título de *Fundación, Hermandad y Destino*. Se viste ahí con la vieja y leal fe heráldico-fascista de sus orígenes golpistas y antidemócratas, un libro que rubricó de puño y letra así, según Andrés Trapiello: «Ni me arrepiento ni me olvido.» Que Pradera se había tomado en serio la inspección endoscópica del engrudo falangista lo sabemos hoy ante las 500 páginas de *La mitología falangista, 1933-1936*, publicadas de forma póstuma en 2014 y muy lejos ya de su presumible origen como frustrada tesis doctoral (o eso me dijo una vez en un taxi).

Quizá sea verdad que renunció a publicarlo en vida de Sánchez Mazas al darse cuenta de que ese libro era una descalificación metódica del pensamiento de su protagonista implícito, y ese protagonista era su suegro, y no José Antonio. También contra lo que pudiera pensarse, las relaciones entre ambos no fueron malas y serían excelentes con sus hijos Rafael, Miguel y Chicho (de hecho, quizá mejores que con Gabriela, aunque también se estropearían con Chicho). El pegamento más probable pudo ser el sentido del humor de yerno y suegro como campo de complicidades más allá de las disparidades obvias. También Pradera adoptaría una variante sugestiva del lema, que él identificaba con su abuela y no con su suegro: «Perdono pero no olvido.»

No saldría de la prisión militar de Alcalá de Henares hasta noviembre de 1958, cuando las dificultades crecientes en casa llegaron a hacer la situación insostenible a lo largo de 1959. Sus

trabajos de asesoría jurídica en la imprenta Clavileño, de Germán Bleiberg, son escasos, tampoco mejora las cosas sustancialmente la herencia que recibe «de un tío mío que era cura», le dice a Maravall, pero al parecer no deja de acudir los domingos al hipódromo. Al menos allí Rafael Sarró se entretiene observando semana tras semana a esa pareja enigmática y magnética, Pradera y Gabriela Sánchez Ferlosio, ambos altos, guapos y señoriales, él con «traje, chaleco y prismáticos». Parecida prestancia exhibía a sus dieciocho años en la foto de la puesta de largo de María Jesús Llorente en 1952, en el Hotel María Cristina, vestido de smoking junto a las chicas de la alta sociedad donostiarra.



Pág. 48. Puesta de largo de María Jesús Lorente en el Hotel María Cristina de San Sebastián (1952).

Muy cerca debía estar todavía de esa imagen cuando hizo de testigo en la boda de su hermana Machi, celebrada el 21 de abril de 1960, en la iglesia del Espíritu Santo en Madrid. Su madre, Carmen de Gortázar, actuó como madrina, pero las relaciones entre ambos nunca fueron fluidas: a su casa en la calle Serrano acudiría a regañadientes Javier a visitarla en los años sucesivos, a ser posible acompañado. El vínculo afectivo fue débil desde muy temprano y escaso también con Machi, creyente devota y madre de siete hijos.

El nuevo joven era otro: había salido casado un día del domicilio de su suegro Rafael Sánchez Mazas y apenas seis meses después entraba por segunda vez en la cárcel (con Gabriela embarazada ya de su primer hijo, Máximo). Pero ni escarmienta ni se resigna a haber vivido desde prisión la frustrante Jornada de Reconciliación Nacional del 5 de mayo de 1958. Sabe que el desencanto ha cundido entre los militantes dada la tibieza de la respuesta popular, pero en cuanto salga en libertad en noviembre se unirá de inmediato a la preparación de la nueva convocatoria del PCE, y esta vez con mejores augurios. En febrero de 1959 el homenaje a Antonio Machado en Collioure ha tenido resonancia internacional, a pesar de que la convocatoria en Segovia ha sido frustrada por la Guardia Civil. En todos, o casi todos, alienta la convicción autoinducida de que la resistencia tiene contra las cuerdas al régimen: el franquismo está dando sus últimas boqueadas.

Esta vez la preparación es más cuidadosa y además se cuenta con un aparato renovado en Madrid. Ha incorporado en octubre de 1958 a un «comunista bisoño y entusiasta», como se describe a sí mismo Manolo López, que ha estudiado Sociología en París con Raymond Aron y lo hace ahora con Enrique Gómez Arboleya y Luis Díez del Corral en Ciencias Políticas. De inmediato reorganiza la abatida célula de la universidad con gentes nuevas como Emilio Sanz Hurtado, Alberto Saoner, Eduardo Punset (recién vuelto también de un año académico en Estados Unidos), con gentes de la ASU como Carlos Zayas o Gonzalo Anes, y posiblemente todos son beneficiarios de los dobles fondos de las maletas que transportan clandestinamente la literatura

marxista clásica, editada en papel biblia y en español en remotas capitales comunistas del Este. Pradera se incorpora activamente a la proyectada Huelga Nacional Pacífica del 18 de junio de 1959 con la gravedad imaginable y no falta a las reuniones que convoca Federico Sánchez en las casas habituales y donde el más joven de todos es siempre Pradera. Quizá la austeridad legendaria de los comunistas empezaba a flaquear porque algunas de aquellas largas reuniones podían aliviarse, si estaban Federico Sánchez o el mismo Pradera, con unas cañas finales y hasta con alguna golfa tapa de gambas.

UN DESESTALINIZADO NATIVO

La Jornada de 1958 se había saldado con un perfecto fracaso, pero tampoco la convocatoria de la jornada de Huelga Nacional Pacífica de 1959 logró paralizar absolutamente nada. Con la transparencia que usa en sus memorias, Manolo López reconoce que ese 18 de junio, desde muy temprano, «arrastrábamos los pies al andar, abrumados por el peso de las desilusiones». Él mismo tuvo que aguantar el chaparrón de un miembro receloso de la ASU, Gonzalo Anes, que había condicionado su participación en la huelga y la de la ASU misma a un prometido éxito seguro. El segundo de los empujones se saldó con un fracaso estrepitoso que seguía sin saber leer la desconectada dirección del PCE en París, ni tampoco su miembro mejor informado, Federico Sánchez.

Lo que paralizó de veras la Jornada de 1959 fue la emisora del PCE, Radio Pirenaica, mientras esperaban ansiosos en la redacción de Bucarest la llegada de los teletipos atronadores anunciando el final del régimen, pero no llegó nada durante todo el día. A pesar de que sus informaciones hablasen eufóricas de la «multitud de trabajadores» unidos «contra la dictadura», su locutor de entonces Luis Galán insinúa que ni la música ni la letra fueron de los redactores de la emisora sino dictadas por el Comité Ejecutivo del PCE. En todo caso, ese 18 de junio de 1959 «dejó un sabor amargo», en particular por el contraste con el crepitar de los teletipos a todo trapo seis meses antes, con la entrada el 31 de diciembre en La Habana de los guerrilleros de Fidel Castro.

En cuanto a Pradera, aquella heroica jornada condujo a su suspensión como miembro del operativo del Partido en la clandestinidad. El humillante fracaso puso en marcha el cuentagotas de su escepticismo analítico para poner distancia y dar pista libre al sarcasmo. Algo fallaba estrepitosamente, en el partido, en la calle o en sus planes, y de eso empezó a hablar con Federico y con otros. Incluso se había permitido esta o aquella ironía mientras organizaban la jornada de 1959. Por esas vías todavía indirectas e inseguras hablaba su resistencia al ilusionismo y su experiencia directa con las exiguas minorías movilizadas en el arco más amplio de la oposición. Varios testigos registraron su incredulidad ante el éxito de la HNP de 1959, y alguno exagera (o quizá no) hasta afirmar su pesimismo radical. Lo recordaba Muñoz Suay a la salida de una de las reuniones preparatorias y lo cuenta Esteve Riambau en su biografía del personaje. En ella participó la plana mayor de la conspiración (incluidos Fernando Claudín y Federico Sánchez) para fijar sobre un mapa de Madrid las rutas de evacuación y acceso de las masas obreras, las vías para tomar el control de los centros neurálgicos del poder franquista, como si se tratase de una más de las campañas militares que había vivido Claudín durante la guerra. Pradera salió de ahí abiertamente escéptico sobre el éxito de la aventura sin dejar de entregarse a ella incondicionalmente. No fue suficiente: sus sarcasmos privados y públicos le acabaron costando el

puesto y la retirada de sus tareas en el partido. Ese es el desestalinizado nativo que actúa y se compromete y a la vez recela y desconfía.

Fue Jorge Semprún quien le comunicó la nueva situación en un encuentro poco amigable durante el verano de 1959. Quedaba excluido desde entonces de la actividad militante por decisión del Partido sin que nada ni nadie objetase nada. Como contó Pradera años más tarde, Federico «se solidarizó enteramente con la decisión de separarme del PCE». Quizá no llegó a llamarle fraccionalista, pero su separación del «trabajo de organización» era como si lo fuera: «En ese sentido, Jorge fue un dirigente más», aun cuando «éramos muy amigos». El disgusto fue muy grande, se parecía mucho a un castigo y hasta a una penitencia correctiva. Ya no volvería a recuperar la actividad directa con el partido hasta la oleada de huelgas en Asturias de la primavera de 1962. Llegó entonces su «primer problema importante» con el PCE y una etapa «muy dura personalmente», según evocaba ante Maravall en 1972.

No se trataba solo de su marginación de las tareas de partido sino de una discrepancia teórica que era ya explícita. En su relato de 1972 subrayaba su defensa de un «modelo de resistencia» al régimen diferente, basado en lo que *ellos* debían llamar, dice, la «alternativa oligárquica» basada en alianzas con otros sectores sociales y otras corrientes políticas. Le esperaba un año y medio de militancia dormida pero no inactiva, entre finales de 1959 y principios de 1962, y ese período es el que sitúa a Pradera a la busca de empleo para recalar, gracias a los amigos de militancia política o afines, en la editorial Tecnos.

Sus largas y tensas conversaciones con Jorge Semprún en Madrid, en noviembre de 1959 y a las puertas del congreso del PCE de diciembre, iban a ser el paisaje de fondo de sucesivas y graves caídas de camaradas hasta marzo de 1960. El escritor Luis Goytisolo, ya ganador del premio de novela Biblioteca Breve, se ha salvado de las torturas y de una cárcel más prolongada gracias a la campaña internacional que ha puesto en marcha su hermano Juan (con el auxilio de la hija de André Malraux en Madrid). Pero no se salva Manolo López, ni de las torturas ni de la cárcel, donde ejerce como responsable de formación de otros comunistas detenidos como Joaquín Marco, Jaime Ballesteros o Emilio Sanz Hurtado, pero también socialistas como Luis Solana o Antonio Amat, otros miembros de la ASU y activistas del FLP como Luciano Rincón y Julio Cerón.

Las cosas siguen crepitando con energía en distintas capitales y equipos. Desde Barcelona, Manuel Sacristán despacha por entonces su edición y traducción de *Revolución en España*, de Marx y Engels, con prólogo fechado en mayo de 1959 y publicado por Ariel al año siguiente. Dos comunistas más, Antonio Ferres y Armando López Salinas, escriben para los joseantonianos críticos que dirigen una buena revista del SEU, *Acento cultural*, un libro de viajes cargado de ira histórica. Lo titulan *Caminando por las Hurdes* (en esa región misérrima hizo su noviciado de desclasamiento Javier Pradera en el SUT). Lo publicó primero la revista y llegó después a su casa natural, la Biblioteca Breve de la editorial Seix Barral, con fotos cedidas por Luis Buñuel procedentes de la película que había filmado veinte años atrás, sin que nada hubiese cambiado desde entonces, *Las Hurdes, tierra sin pan*.

Otros amigos actúan un tanto más por su cuenta, y la misma heterogeneidad de intereses y actividades de varios de ellos explica la urdimbre de unas relaciones humanas que durarán muchos años. Juan Benet está todavía en Madrid intoxicado de una afición teatral que acabará atrapando a la fratría ferlosiana, con Pradera incluido, unos pocos años después. Entre el humor absurdo, codornicesco y político, Benet ha escrito ya en 1958 una resuelta y farsesca parodia del franquismo, *Anastas o el origen de la Constitución*, con el poder dispuesto a «formar un gobierno de una sola tendencia» (aunque en su versión revisada en 1971 puede el poder ya «mirar con

franquía el porvenir» tras haber relevado a la «cuadrilla de viejos e ineptos caciques» con «un equipo de hombres jóvenes –técnicos en su mayoría perfectamente preparados», que es caricatura transparente de la tecnocracia del Opus Dei). Hasta entonces Benet no había sido más que el brillante benjamín de un grupo de veteranos afectos a don Juan Tenorio. Era hijo de una amiga común a todos ellos, Teresa Goitia, y hermano de Francisco, uno de los ejecutores de la legendaria fuga del penal de Cuelgamuros de Nicolás Sánchez-Albornoz y Manuel Lamana en 1948. Cada noviembre desde 1952 ensayan y estrenan una obra los cofrades habituales de Juan Benet: Pepín Bello (con él escribe en 1959 una suerte de carnavalada titulada *El último homenaje*), el torero rojo por antonomasia y hermano del famoso Luis Miguel Dominguín, Domingo *Dominguín* (es decir, Domingo González Lucas), Alfonso Buñuel, que es hermano de Luis Buñuel, y un sector orteguiano de firme obediencia: Paulino Garagorri, Julián Marías y Fernando Chueca. Benet sin embargo destila la misma ironía zumbona de su amigo Luis Martín-Santos en *Tiempo de silencio* cuando prologa en 1959 el librito que reúne algunas de las piezas estrenadas hasta la fecha, *La orden de caballeros de don Juan Tenorio*. Allí se burlaba de la «agonía de nuestro tiempo» sin la menor inquietud por los problemas que asolan a la humanidad.

También Luis Martín-Santos está sacando sus propias consecuencias y abandona en 1960 el Comité Ejecutivo del PSOE, tras al menos cuatro detenciones. Pero introduce a otro psiquiatra rojo, Carlos Castilla del Pino, en el círculo de amistades resistentes en San Sebastián, como José Ramón Recalde y María Teresa Castells (que aún no han fundado la librería Lagun). Antes de dejar la militancia en este mismo 1960, sin embargo, reclama en su informe al Comité Ejecutivo del PSOE en Toulouse un cambio de retórica en el discurso político y desecha insistir en la pobreza y la miseria porque las condiciones objetivas han empezado a cambiar. En la resistencia del interior casi todos están por buscar alianzas con otras fuerzas, incluidos los comunistas, mientras el exilio no quiere ni oír hablar del asunto: Pradera está en las mismas aunque sus jefes lo llamen *alternativa oligárquica*. A esas alturas, y mientras Martín-Santos va leyéndole páginas de *Tiempo de silencio* a Múgica, que ha abandonado ya el PCE después de su temporada de cárcel y se ha hecho socialista, el entorno familiar de Pradera está a punto de alumbrar otro espejo traumático de la impotencia colectiva, *Ritmo lento*, de Carmen Martín Gaité.

2. EL VALOR DE LA CONSPIRACIÓN

Pradera no había callado su escepticismo antes de 1960 ni calló después sus discrepancias porque no estuvo nunca adiestrado en la mecánica abrasadora del centralismo democrático. Él había entrado en el PCE de la mano de Federico o, mejor, de Jorge Semprún, sin aparato alguno y con una creciente e intensa complicidad moral e intelectual, por supuesto también política. Pero la obediencia estalinista le quedó siempre a varios círculos de distancia, sin la obediencia debida y sin votar todos a una y sin fisuras. El vínculo personal con Semprún no estuvo hecho de la argamasa del acatamiento y la sumisión, las discusiones fueron frecuentes y la ironía sabotadora de la solemnidad estuvo al menos desde las primeras sospechas de fracaso de las *grandes acciones de masas*. Con Federico había que intentar aclarar las cosas, romper de nuevo el silencio o al menos levantar el castigo que aún pesaba sobre él por incrédulo y por aguafiestas.

NOTAS DE UNA NOCHE DE MAYO

Pero Semprún sabía que con Pradera había que actuar con contundencia disciplinaria porque de su indisciplina crítica había dado muestras personales y daría otras más. Meses después de la desapacible conversación que le excluyó profilácticamente de la acción del Partido, Pradera resolvió enviar en forma de carta a Federico sus notas tomadas durante una noche de mayo de 1960. Adoptó ahí el tono frío del analista político profesional que todavía no era, o no era por escrito. Pero es muy evidente que retoma las dudas y discrepancias que habían motivado largas y tortuosas conversaciones con Semprún. Sigue siendo un militante sin acceso a los debates estratégicos ni tácticos de la dirección, pero decide hablarle con franqueza tanto a su mejor enlace con ella como a la persona que encarnaba la entrega y la valentía del militante incorruptible: Semprún nunca dejó de ser para él una figura legendaria, pero ni siquiera eso impidió a Pradera hacer de Pradera.

En esas notas consigna las discrepancias que ha insinuado o expuesto ya varias veces, con el gesto escéptico, la ironía fría y el prurito de veracidad incómoda. Son en el fondo el primer testigo de un modo de proceder en el que Pradera incurrirá a menudo: la necesidad de trasladar las ambigüedades de lo conversado a la concreción escrita y razonada, el empeño en señalar sin medias palabras las divergencias de análisis o las diferencias exactas ante cuestiones «planteadas por la realidad y no por mis ensueños», como le escribe entonces a Federico. A Semprún no le pueden pillar por sorpresa los puntos fuertes de esas notas de mayo de 1960 porque los conoce. Lo inesperado es que conteste a sus notas no como amigo con trato íntimo sino como portavoz del Comité Ejecutivo para así «intentar resumirte» lo discutido con los camaradas de la dirección sobre él y su carta.

Semprún es en aquella larguísima respuesta a Pradera puro Federico Sánchez y muy poco Semprún. Contesta imbuido de una «benévola condescendencia» vestida de «tronante jupiterismo», según ironiza ese joven atrevido que ha cuestionado la estrategia, la teoría y la praxis del partido y es tratado, en la más pura lógica estalinista, como disco inmaduro. Piensa Semprún que la causa de sus aprensiones es la «impaciencia juvenil» (se llevan diez años, y

Pradera ahora tiene veintiséis). Quizá le ha afectado haber vivido en un «relativo aislamiento» (en alusión a la parada técnica como conspirador tras el verano de 1959), «agravado por los meses de Alcalá y circunstancias particulares que limitaban» su movilidad (en alusión ahora a los muchos meses de cárcel de la segunda detención en 1958). Pradera se enfurece ante ese tono paternalista y sermoneador, en particular porque la respuesta no llega firmada por el miembro de la dirección sino por el amigo que se dirige al «querido *Largo*», invitándole a mejorar su «atención autocrítica», pero sin contestar a sus preguntas y sin contrarrestar las inquietudes de una noche meditadas durante muchos meses.

Porque lo que hacía Pradera era exponer en la confianza de la amistad más preguntas que respuestas, y más hipótesis de futuro que rebuznos resentidos contra la línea política del PCE. No descrea del Partido sino de sus análisis de la situación española, y aspira sobre todo a afinar la estrategia. Debió de ser definitivamente irritante la paternal monserga cuando Semprún invitó a un pupilo tan desorientado a escoger la «actividad que mejor te permitirá salir de esta fase “metafísica”», en frase que sin duda Santiago Carrillo hubiera suscrito o suscribió.

Pradera duerme poco esos días —en junio de 1960 ha nacido el segundo hijo de la pareja, Alejandro—, pero contesta con mucho tiempo entre los días 18 y 20 de julio la homilía epistolar de Semprún, que doblaba la extensión de las notas y atufaba a trabajo de funcionario. Espoleado de ese modo, Pradera abandona la solemnidad analítica y exhibe con una libertad insólita un estilo directo e irónico, burlón y desacomplejado. Están recogidos los textos en *Camarada Javier Pradera*, de Santos Juliá, para ofrecer la primera y más poderosa inmersión en la intimidad de un analista y las virtudes de una prosa que no existirá públicamente hasta muchos años después. La respuesta de Pradera lleva dentro ya su obstinación analítica, su templada o sarcástica ironía, su insubordinación retadora, su intransigencia ante el ilusionismo sentimental y el autoengaño. La expresión escrita de un kantiano ético se ha puesto en marcha porque las coartadas pragmatistas o las presunciones del idealismo no funcionan en su engranaje analítico ni sentimental de marxista muy leído: ni el PCE entiende la realidad íntima de una nueva etapa del franquismo ni la propaganda triunfalista de los comunistas vale como antídoto contra la decepción unánime que causó la HNP de 1959, diga lo que diga Semprún o el Comité Central en pleno. En esas páginas comparece por primera vez una inteligencia que carbura con tanta seguridad y tan bien armada que pudo injertar en el perfecto y maduro estalinista que era Jorge Semprún la semilla de una crisis, aunque nunca habló de ella, ni de la semilla ni de la carta ni de la crisis.

A Pradera no le hizo falta ningún proceso de desestalinización porque entró en el PCE como desestalinizado nativo. Su entrega a la causa resolvía por la vía de la acción y el compromiso arriesgado una compleja madeja de conflictos personales, familiares, políticos e ideológicos. La acción clandestina, el riesgo de cárcel, las penalidades de una vida con antecedentes políticos ratifican una forma de abnegación asimilable a la aventura heroica y en la cercanía inmediata de al menos dos personajes con aventuras reales a sus espaldas: un Ridruejo que ha hecho ya su cura de desintoxicación totalitaria y un Semprún que la va a empezar en cuanto se ponga a escribir, precisamente en este mismo 1960, su novela *El largo viaje* en un piso clandestino en Madrid.

En Pradera la militancia abnegada y la erosión política del régimen no alcanzan la forma del coma crítico porque es un ateo racional sin creencias sustitutivas. El excelente adoctrinamiento marxista que revelan sus cartas de 1960 lo sitúa lejos del lenguaje del militante estalinizado y estalinista. Pradera tiene en esa microrred clandestina un papel poroso por definición, es una suerte de lanzadera disparada hacia cuanto grupo o grupúsculo pueda significar un nuevo aliado potencial para engrosar las filas de la clandestinidad antifranquista, desde liberales clásicos y

orteguianos hasta monárquicos juanistas, exfalangistas reeducados al liberalismo o los cristianos irredentos y rebeldes del Frente de Liberación Popular. En alguna medida la función conciliadora le hizo comunista crítico y el marxismo solvente pudo ser su herramienta intelectual contra la obediencia estalinista.

Este Pradera es ya inmune a la confusión entre deseo y realidad, implacable a la hora de señalar la incapacidad de Semprún para escapar a su papel de instructor impostado, y no de amigo, por muy saturado que el instructor estuviese del lenguaje fósil del partido. Semprún ha confundido «la crítica de un análisis con la crítica de una actuación», que es la mejor pista para entender que Pradera no deplora la acción comprometida sino el conjunto de causas, hipótesis y consecuencias que la motivan desnaturalizándola, frustrándola, rebajándola a heroicidad ineficaz, resistencia testimonial y decepcionante. El Partido adopta una perspectiva que nace de «un compartimento cerrado, una excrecencia de deseos», y «solo ve en el futuro sus soluciones, abstraídas totalmente de su posibilidad o imposibilidad». El Partido no ha tasado bien ni el «nivel de conciencia de la clase obrera», ni «la carga de negatividad que la revolución democrática lleva dentro» para ella. La inmensa mayoría detesta el menor asomo de una revolución que pueda conducir a la «dictadura del proletariado». Todo ello inhabilita a la burguesía (no monopolista) como aliada objetiva y mantiene el alto nivel de recelo que suscita en esas clases medias semiburguesas la lucha de clases. Es evidente que el Partido decide su actuación a partir de «apreciaciones excesivamente optimistas».

Ni habían sido inteligentes «las previsiones anteriores» al día 18 de junio de 1959 ni lo fueron «los comentarios posteriores», en alusión posiblemente muy concreta al informe de Carrillo al VI Congreso del PCE de diciembre de 1959. La respuesta que había recibido Pradera a sus notas no era la de un cómplice sino la de un *apparatchik* ortodoxo y perdonavidas, más proclive a «construir el maniqueo», escribe Pradera, que a atender a lo que ha sido su «obsesión: los obstáculos para la cristalización de esa alianza [con la burguesía], tanto por la ideología de la burguesía nacional, como por su debilidad, como por el carácter utópico de su perspectiva de clase». No hay en ese análisis «menosprecio, sino una constatación»: existen los mimbres objetivos para fraguar una alianza entre clases medias enriquecidas, obreros con mejores condiciones de trabajo y el Partido. Pero para derrocar sin remisión al franquismo también hay cambios en el horizonte que podrían alterar gravemente esos planes y abrir la posibilidad de contar con la salida oligárquica para acabar con la dictadura. Una posible integración en la Comunidad Europea o la activación de las conspiraciones monárquicas podrían comprometer la estrategia futura del PCE. Esas previsiones son especulativas, por supuesto, pero no conllevan deslealtad alguna, «querido F.», por Federico, sino un análisis destinado «a la justa apreciación de esas limitaciones» del Partido y su dificultad para discriminar «entre “querer” (y hacer) y “poder”». En efecto, «siempre te equivocas», le dice a Federico. Entre las obligaciones del «amigo personal» que es Pradera está la exposición de las discrepancias (o *divergencias*, como se llamarían en la jerga tres años después): «Si las cosas no se sacan a la superficie, terminan pudriéndose y pudriéndote.»

EL EDITOR ACCIDENTAL

No sabemos si se vieron algunas semanas después, ese verano de 1960, como anuncia Semprún en su carta de junio, pero sí sabemos que perduró todavía muchos años en Pradera el profundo

desengaño de 1959. Se le mezclaba la frustración política y la humillación de haber vivido una jornada histórica desde la invencible sensación de bochorno. También sabemos que desde este 1959 cambió su rumbo profesional, quizá en parte a consecuencia de su inhabilitación como miembro activo de la organización del Partido.

Lo que no imaginaba Pradera es que en Tecnos empezaría su verdadero oficio para los próximos treinta años, lejos de la escritura, lejos de la universidad, pero cerca de ambas cosas como asesor, editor, difusor y promotor de libros de ideas y con ideas. Tecnos acababa de recibir una inyección de capital aportada por un catedrático de Economía de la Universidad de Madrid, Gabriel Tortella Oteo, padre de un amigo y aliado socialista. Se proponían reflotar y refundar un catálogo de ensayo social, político y económico y entre sus nuevos asesores estaba Enrique Tierno Galván, tácito testigo de la izquierda marxista con disfraz europeísta y ya muy activo agitador desde su cátedra de Salamanca, su *Boletín Informativo de la Cátedra de Derecho Político* y un entorno filomarxista y socialista de peso creciente. Anduvieron por ahí en esos años jóvenes entonces barbilampiños o faldicortos como Elías Díaz, Ignacio Sotelo, Iris Zavala o Raúl Morodo, algunos de ellos ya instalados en el colegio mayor César Carlos.

Lo que Pradera sabía de la edición lo aprendió desde la más rudimentaria escala de un oficio por definición artesanal. Su contrato de técnico editorial equivale evidentemente a encargarse de cualquier cosa, desde la traducción hasta la menor variante digna o indigna de la gestión comercial y administrativa. Empezaba entonces su familiaridad con el polvo y la suciedad, las cajas y los embalajes, el laberinto de albaranes, de facturas, de pedidos, de cuentas, de descuentos, de precios y balances, de almacenes y albañiles. Ese primer trabajo no tuvo nada que ver con el *glamour* de la edición ni con el trato próximo o lejano con autores y celebridades, ni siquiera con el nervio intelectual del oficio de la edición. Tuvo que ver sobre todo con su vertiente comercial como agente de ventas de un sello estrictamente universitario cuando apenas había población universitaria.

En ese entorno encontró la vía de supervivencia un joven militante comunista con antecedentes policiales, dos veces encarcelado, miembro por oposición del cuerpo jurídico del Ejército del Aire desde 1955 y un espeso nubarrón negro colgado sobre su horizonte laboral burgués: nada que ver con lo que se esperaba de él. Ni en términos familiares, ni políticos ni profesionales; ni ahora ni más tarde, cuando recorra pueblos y ciudades pequeñas con Pepe Latorre en busca de clientes y libreros. Uno vendía decenas o centenares de ejemplares de biblias y libros prácticos mientras Pradera apenas regresaba de la excursión con una docena de títulos colocados para la venta, tirando largo.

Pero ese fue solo el principio. Poco a poco, Pradera comprendió que una editorial podía ser un temible laboratorio para las ideas, una bomba de detonación retardada y lenta onda expansiva. A través de las ventas y la influencia invisible de una marca podía contribuir a transformar la realidad desde dentro de la realidad. Esa era otra forma del poder, y la edición literaria y humanística podía ser un insospechado proveedor civil de pensamiento y conciencia moderna. Todavía en forma muy incipiente el poder de la izquierda se podía encarnar en catálogos, colecciones, traducciones y la dirección misma de las lecturas y los libros de los demás. Así habían concebido la edición algunos maestros próximos y remotos: Ortega y Gasset lo había hecho antes de la guerra con *Revista de Occidente* (y lo intentaban perpetuar sus hijos José y Miguel Ortega Spottorno, sobre todo desde los años cincuenta), así la entendía Arnaldo Orfila Reynal en el Fondo de Cultura Económica de México y también españoles emigrados como Gonzalo Losada o catalanes exiliados como Antoni López Llausàs en *Sudamericana*. Incluso así lo habían

entendido Carlos Barral y Pancho Pérez González al fundar hacia 1955 la Biblioteca Breve de Seix Barral y la editorial Taurus, respectivamente; y algunas otras pequeñas editoriales como Guadarrama, Ariel o la misma Tecnos parecían situarse en la misma lógica del intruso revulsivo. Todas ellas y algunas otras todavía por nacer contribuirían a acabar con un país instalado en el narcisismo autárquico del subdesarrollo, ajeno a la modernidad rasa y genérica, marginal en los procesos culturales que habían resucitado en Europa tras la derrota nazifascista. En España, no; en España seguía mandando la dictadura no exactamente como si tal cosa, pero casi.

Con más tiempo libre que nunca en los últimos años y bloqueado por ley el ejercicio profesional del derecho, dados sus antecedentes, Javier Pradera tiene ya lista hacia 1960 la traducción de un tratado académico de Jean Touchard, *Historia de las ideas políticas*, que aparece al año siguiente en la serie de Ciencia Política de Tecnos. Dirige esa colección Jiménez de Parga y esa traducción debió de ser un encargo nacido de la fugaz etapa en que Pradera fue ayudante de quien, a su vez, todavía es *lacayo* de Javier Conde en la Universidad de Madrid, al menos según el refinamiento lingüístico de la policía franquista. Cuando se publica la traducción, en 1961, y sin que hayan sabido muy bien qué hacer con él desde su primera detención cinco años atrás, se le da de baja como caballero cadete, a medias a petición propia y a medias a instancias del Ejército.

Sin haber llegado a nada en la carrera académica, no se despidió de sus intereses, tampoco de la política como teoría y como práctica. Su traducción de ese libro coordinado por Touchard ha sido tan concienzuda como lo ha sido la búsqueda de las versiones al español de la extensísima bibliografía que incluye el volumen (120 páginas). Pradera ha ido registrando una y otra vez las ediciones disponibles en español, pero apenas ninguna ha sido impresa en España: todas proceden de Buenos Aires, Santiago de Chile o, sobre todo, México, editadas por el fastuoso Fondo de Cultura Económica.

UNA FRUSTRANTE CUARENTENA

El tobogán emocional del bienio que se abre ahora para él y para los demás fue casi lisérgico. Trabaja para Tecnos, sigue como asesor de la imprenta de Germán Bleiberg, Clavileño, cría sin criarlos a dos hijos, Máximo y Alejandro, y sigue conspirando por su cuenta o por libre con los de siempre. No ha cambiado la situación en que quedó tras el fracaso de la HNP y sigue siendo, por tanto, amigo y cómplice de todos pero sin funciones concretas. Como se decía en la jerga, no ha sido *recogido* por el Partido. Este Pradera es un joven grandullón y enérgico, discutidor y tenaz, «incapace di calma», pero también «se ne frega dei nomi di battaglia e della clandestinità». Lo recuerda así la entonces comunista Rossana Rossanda en *un viaje inútil* de exploración a España; han pasado ya dos años desde la HNP de 1959, pero Pradera no ha conseguido superar en marzo de 1962 la depresión mezclada de rabia por una acción concebida con el deseo y contra el principio de realidad. Como militante durmiente, es posible también que hubiese relajado los usos de la clandestinidad. Pero es probable que nunca los hubiese seguido muy a pies juntillas, contra lo que le había visto hacer una y otra vez al pluscuamperfecto clandestino, Federico Sánchez.

Desde luego, tampoco es el mejor momento para que Pradera extreme la prudencia porque está en la peor fase de su vida en relación con el Partido. No solo pasa por una ya larga cuarentena de casi dos años sino que acaba de vivir en París, a principios de 1962 y antes de sus encuentros con Rossana Rossanda, las dos reuniones más angustiosas de su militancia. La plana mayor del Comité

Ejecutivo del PCE le ha sometido a un «juicio inquisitorial», en palabras de Santos Juliá, en dos sucesivos encuentros en París, el primero en casa de Semprún y el segundo en casa de otro militante, Eduardo Punset. Uno en presencia de Carrillo y en los dos con el silencio consentidor de Jorge Semprún y Fernando Claudín. Cuando Juan Luis Cebrián evoca en sus memorias una reunión traumática de Pradera con Carrillo alude a ese encuentro, diez años después de su última entrevista personal, hacia 1976. Pradera confesó a Cebrián haberlo pasado mal porque Carrillo «seguía siendo el mismo de siempre: “he asistido en el pasado a escenas de auténtica tortura. En una ocasión se comportó de forma tan brutal conmigo que acabé vomitando de los nervios”».

La ocasión era esa, en París, y cabe imaginar que Carrillo puso contra las cuerdas a Pradera para que dejase de discutir los análisis del Partido, los planes del Partido, las normas del Partido. Aquello suyo se parecía mucho al fraccionalismo. Puede que fuese ahí cuando Carrillo le obsequió con un ejemplar de las memorias de Ignacio Hidalgo de Cisneros y una dedicatoria cuyo veneno se remontaba a las notas de Javier de una noche de mayo. La transcribe Gregorio Morán en su libro sobre el PCE: «A Javier Pradera, para que le sirva de distracción en medio de sus altas reflexiones filosóficas.» Desde entonces, el desengaño se alía con el desencanto o, incluso, con la decepción incurable ante un partido sin debate, sin cruce de ideas, sin alteraciones del orden y coactivamente opresivo. Las discusiones con Semprún habrán seguido sin duda en marcha, y por supuesto siguen las reuniones personales y políticas con quienes son, además de militantes, sus mejores amigos personales y el corazón de una izquierda que es imantadora e identificable con Benet, Ferlosio y Martín Gaité, García Hortelano, Antxon Eceiza, Eduardo Haro Tecglen o Alfonso Sastre (además del segmento literario catalán que pivota en torno a Seix Barral).

Su independencia es tan incurable ya como su frustración, pero estructuralmente diferente. Mientras abandona poco menos que acabado su manuscrito sobre la mitología de Falange y el Partido le abandona a él, siguen los motivos para no estarse quieto este mayo de 1962.

No parece probable que Pradera acudiera a Barcelona en algún momento de ese mes. Pero por razones tanto políticas como literarias, el núcleo duro y estelar de la resistencia pasará por ahí para viajar hasta Formentor (Mallorca). Allí asistirán al fallo del premio internacional de los editores y al Premio Formentor a la mejor novela inédita. El primero lo han fundado el año anterior Giulio Einaudi y Carlos Barral junto a un puñado de otros editores: Feltrinelli, Gallimard, Rowohlt, Weidenfeld y Barney Rosset, de la norteamericana Grove Press. El segundo ha sido concebido también por Barral con Einaudi y Jaime Salinas. El año anterior había recaído en un valor seguro de la resistencia comunista y el mejor novelista político del objetivismo narrativo, Juan García Hortelano y su *Tormenta de verano*.

Para el Premio Formentor de este año 1962 algunos saben o dicen saber que el ganador va a ser un manuscrito francés titulado *Le grand voyage* (ha llegado a manos del editor Gallimard a través de Juan Goytisolo y Monique Lange). Desde luego, nada de momento asocia el nombre del autor, Jorge Semprún, a uno de los hombres más buscados por la policía española, Federico Sánchez (salvo para unos poquísimos amigos directos e informados, como Manolo López y Javier Pradera, pero no para un militante y amigo como Xavier Folch, que ignora entonces que son la misma persona).

Cuando se acabe todo ese tinglado de política y literatura en Formentor, empezará en Barcelona y en clave muy oficial y oficialista otro carrusel de encuentros, citas, copas y tensiones en torno al XVI Congreso de la Unión Internacional de Editores, celebrado la semana del 7 al 12 de mayo. En la conciencia de la resistencia esos quince días de hiperactividad valían como las vísperas de otro encuentro programado para la primera semana de junio, esta vez en Múnich. Allí se reunirán

entre el 6 y el 8 una delegación de 80 antifranquistas del interior de casi todos los colores políticos con otra delegación del exilio de 38 antifranquistas más. El telón de fondo de tanto conciliábulo editorial y político son las ya masivas movilizaciones que vive Asturias en la primavera de 1962.

No solo para la paciencia del lector sino también para la policía española había demasiada actividad conspirativa. Carlos Barral y Jaime Salinas habían conseguido atraer a Formentor a la mejor edición literaria europea por segunda vez, y entre ellos a personajes relevantes como Italo Calvino o Elio Vittorini. Pero también el Ministerio de Información, que todavía no ocupa Fraga Iribarne, ha decidido intervenir y manda a dos funcionarios para rebajar el impacto del premio y prohibir rueda de prensa alguna. Empezó entonces un rifirrafe de presiones y chantajes que obviamente ganó el ministerio. Junto con los funcionarios acudieron también diligentes policías dispuestos a acosar impacientemente a Jaime Salinas y a Carlos Barral, interrogado en Formentor durante la noche del 2 de mayo por miembros de la Dirección General de Seguridad. Podían estar extendiéndole informalmente a Barral el primer volante para un exilio forzoso o al menos recomendable. Así lo vivió él durante esa noche y a lo largo del día 3 (y así lo recordaba la muy buena memoria de Josep M. Castellet). Sobraban rojos y sobraban algunos en particular, como Einaudi, otro temible y temerario simpatizante comunista y conspirador activo de la resistencia.

Como empleado de Tecnos, Pradera tiene estos días un embarazoso enredo que resolver con Arnaldo Orfila. Su editorial está obligada a dar explicaciones personales al Fondo de Cultura Económica por haber autorizado Eduardo Nicol la reedición en España, y para Tecnos, de una obra que seguía interesando a su primer editor, FCE. Orfila es uno de los invitados relevantes del Congreso Internacional de Editores y el Fondo de Cultura Económica ya tiene mucho más de cultural que de económico. Sigue siendo un fideicomiso del Estado poblado de exiliados españoles de primera hora –desde José Gaos o José Xirau hasta Max Aub–, pero las injerencias gubernamentales son crecientes contra su línea política anticapitalista y contra la colonización cultural norteamericana. Bajo su dirección, Orfila ha convertido una editorial mexicana paraestatal de temas económicos en la principal editorial del ámbito hispánico en ciencias sociales, historia, economía, literatura, filosofía y política. Ese Congreso de Editores podía ser un instrumento más de la denuncia contra los modos mafiosos del régimen y eso intentó Carlos Barral, aliado preferente en España de Einaudi y de Feltrinelli: se habían propuesto votar allí una resolución contra «todo régimen de autorización previa» para los libros, contra todo «régimen de embargo administrativo», contra toda «traba a la distribución y a la circulación de los libros» y contra toda «limitación de inspiración política o confesional» al oficio de la edición literaria.

El mismo día que Barral debía pronunciar esas palabras, sin embargo, otro comando de inspectores de Hacienda se instaló en la sede de la editorial en Barcelona para recabar documentación y papeles, comprometedores o no. Era una operación de acoso que surtió su efecto y sacó de sus casillas a un sensiblemente acobardado Barral. El embate contra la censura habría sido directo y global, o al menos eso es lo que dejan leer las notas que conservó su secretaria entonces, Montserrat Sabater, y que he extractado en el párrafo anterior. Pero sí fueron Feltrinelli y Lyon de Castro, editor portugués, quienes lanzaron un ataque público contra la censura en ese congreso, en medio de la plausible indiferencia de la mayor parte de los grandes editores e industriales del libro reunidos allí.

Las palabras de Barral no se escucharon pero las conocieron muchos de los asistentes a la elegante degustación de vino español que la tarde del 10 de mayo había convocado Seix Barral para los participantes en el congreso. Podrían haber aparecido allí incluso quienes participaban

sin participar porque vivían entre apariciones y desapariciones. Federico Sánchez estaba en Barcelona, como supo Castellet al encontrárselo de sopetón en el ascensor de su casa esa tarde, y poco antes de acudir a la velada convocada en los jardines de una mansión de la zona alta de la ciudad, propiedad del secretario general de la Diputación de Barcelona, Luis Sentís, y cuñado de la mujer de Barral, Yvonne Hortet. Esta vez Federico Sánchez renunció a presentarse en la fiesta, pero allí hubiese coincidido con la mitad de los comunistas españoles de letras, desde Armando López Salinas hasta Juan García Hortelano, pasando por los diversos grados de rojerío en Cataluña, desde un entonces prudente José María Valverde hasta los hermanos Goytisolo, Gabriel Ferrater o Jaime Gil de Biedma.

Lo que resulta inimaginable es que Pradera no acudiese días después, el 17 de mayo de 1962, a la librería Fernando Fe de Madrid para la firma de ejemplares del camarada Juan García Hortelano por *Tormenta de verano*, Premio Formentor del año anterior. Y aunque no anduviese por allí Juan Benet, poco amigo ya de la evidente decantación comunista de demasiados de sus amigos, y en particular de Domingo Dominguín o del propio Castilla del Pino, sí estaría parte del equipo de Seix Barral y sin duda el resto de los camaradas locales, desde Eduardo Haro Tecglen a José María Moreno Galván.

Las depresiones de principios de este 1962 detectadas por Rossana Rossanda se compensaban con esta sobredosis de agitación, el nerviosismo del régimen y la alerta por la escalada de huelgas y movilizaciones obreras de Asturias entre abril y mayo. Las expectativas eran altas también para los primeros días de junio en torno a los efectos de la convocatoria de Múnich. Nadie sabe exactamente qué va a salir del enredo organizado por Julián Gorkin, Enrique Gironella y Dionisio Ridruejo, pero no es una reunión más de antifranquistas. Los comunistas están formalmente excluidos, aunque no desinformados, y suscribirán de inmediato el documento base del futuro democrático –lo ha contado muy bien Jordi Amat–: la reconciliación y la democracia son ya, por primera vez, objetivos compartidos por toda la oposición democrática, del exilio y del interior. También por los comunistas, aunque en Múnich solo hubiera dos testigos sin voz ni voto: el responsable de economía Juan Gómez (Tomás García) y el miembro del PSUC Francesc Vicens.

Hace años que el representante del PSUC, Manuel Sacristán, evita el teléfono para comunicarse con Pradera, pero es evidente que tienen que verse con urgencia porque están pasando muchas cosas. Aprovechan salidas y entradas de su despacho en Tecnos con «puntualidad comunista», como le gusta decir a Semprún con sorna y recuerda Xavier Folch. Es otro de los contactos catalanes de Pradera, junto a Octavi Pellissa o Eduardo Punset, todos comunistas de primera hora. Se han visto Sacristán y Pradera en Madrid en julio de 1962 a horas concertadas con escrúpulo clandestino porque Sacristán se resiste a descolgarlo del Partido y porque la conversación enhebra demasiados intereses comunes, incluido Georg Lukács, a quien ha empezado a traducir Sacristán.

También Sacristán en este momento necesita algo más que conversación porque entre mayo y junio ha perdido la oposición a la cátedra de Lógica de la Universidad de Valencia ante un tribunal ejemplarmente prevaricador. Se suma así a una lista de damnificados con dos ilustres nombres más: Castilla del Pino y Martín-Santos, igualmente derrotados en sus oposiciones (alguna tan rocambolesca como la de Luis Martín-Santos, custodiado por los guardias y por su padre con uniforme reglamentario de general de la Victoria en el trayecto desde la prisión). Pero son peores las tribulaciones políticas de Sacristán cuando visita a Pradera en julio de 1962 porque afectan a la seguridad del Partido. O Pradera es contagioso o su caso parece reproducirse a escala juvenil en Barcelona. Para cubrir la crónica de sucesos entra y sale de Jefatura de Policía en Vía Layetana

con demasiada soltura un militante pelón y batallador de veintitrés años, periodista en prácticas en el falangista *Solidaridad Nacional*. El seguimiento discreto que mantienen Sacristán y Josep Fontana sobre él, Manuel Vázquez Montalbán, no disipa las dudas ni la desconfianza ante intelectuales con propensión al libre sarcasmo y al laconismo a la vez. Las dudas se resuelven solo tras la detención de Vázquez Montalbán el 11 de mayo de 1962 (y la condena de cárcel que le siguió, en compañía de Salvador Clotas), mientras Sacristán prepara sus oposiciones, Barral y Salinas sufren el acoso policial y Feltrinelli arenga a los editores contra los desmanes de la censura.

Como sucede en tantos tramos del franquismo, nunca parece que pase nada demasiado grave, pero no dejan de pasar cosas que hacen subir y bajar las emociones éticas y políticas. Aunque Pradera siga en el Partido, tampoco entiende lo que pasa Manolo López, cuando tras varias palizas y tres años de cárcel, sale el 28 de diciembre de 1962. Pero detecta enseguida que las cosas han cambiado desde su detención a finales de 1959. También a él el Partido lo ha puesto en régimen de cuarentena, como alma en pena a la espera de ser *recogido* y sin entender «por qué no se me incorporaba a la organización».

Los socialistas están en marcha de otro modo, pero también nuevo. En Puteaux (París) en 1961 se habían enfrentado a la posición clásica del PSOE en el exilio nuevos jóvenes militantes, y entre ellos Luis Gómez Llorente. Fue portavoz de la ponencia del interior, seguramente acordada con Antonio Amat, en favor de sumarse a la «acción clandestina y la lucha de clases», la «subversión pública» y la movilización obrera. Es decir, muy cerca del lugar en el que entonces estaba Pradera y donde había recomendado Martín-Santos que había que situarse estratégicamente. Aspiraban a liderar desde el interior una facción juvenil revolucionaria, antiimperialista, permeable a la violencia y contraria al socialismo reformista, por mucho que a los históricos del Partido eso les sonase, con razón, a «tretas comunistas». Apenas meses después fue detenido Gómez Llorente, en julio de 1962, por organizar con Miguel Boyer y Ángel de Lucas las Juventudes Socialistas mientras otros jóvenes buscaban su propia rebeldía con la Federación Universitaria Democrática Española en construcción, como fue el caso de otro jovencísimo José María Maravall.

Ese bienio entre 1961 y 1963 los sometió a todos a un buen puñado de accidentes que transmitían la nueva ley del futuro a quienes no eran ya jóvenes, ni recién graduados en la universidad, ni recién ingresados en el mundo laboral, ni inexpertos en los avatares de la resistencia. Los primeros balances de ganancias y pérdidas del poder de la izquierda daban saldos euforizantes y depresivos, lo cual significa eminentemente depresivos. Todo iba a seguir igual durante mucho tiempo, como supo explicar un clásico y memorable artículo de Jaime Gil de Biedma. La primera madurez de los jóvenes activos en la última década, desde los albores de 1953, con sus recitales poéticos y sus huelgas revolucionarias, perdía el timbre excitante o la vibración heroica porque la resistencia entraba en una meseta exasperante de ineficacia, voluntarismo, impotencia y resignación. A Pradera le había transmitido en directo y sin anestesia el nuevo biotipo de la resistencia el propio Santiago Carrillo en París a principios de 1962. A finales de año todo empeoraba un poco más: se quedaba Pradera sin Semprún y sin Federico Sánchez. Dormía ese diciembre de 1962 en casa de Ángel González por última vez como comunista clandestino y regresaba a París.

CERCA DEL CIELO

En los planes de Arnaldo Orfila Reynal no estaba solo participar del *glamour* del Congreso de Editores de mayo de 1962, las copas, los encuentros, los contratos. Lo hizo, sin duda, pero Orfila en realidad llegaba a territorio comanche para estudiar las posibilidades de abrir una sucursal del Fondo en Madrid, seleccionar al personal, evaluar la peligrosidad represora del régimen y decidir qué hacer, cómo echar una mano, cómo fabricar antifranquismo con libros. Para todos era obvio ya que el liderazgo de la resistencia se había desplazado al interior, y ni el más resentido o abatido exiliado creía de veras que la actividad pivotaba fuera de la península. El exilio seguía siendo un auxilio crucial y la fuente de legitimidad histórica y moral, pero quizá ya no política y movilizadora. El cambio de enfoque había sido lento y doloroso, pero era ya casi unánime a esas alturas porque el exilio había envejecido y todos advertían también que el bullicio de casos y conflictos era incesante, el relevo de las nuevas generaciones muy convincente y algunas de sus actividades inequívocas en su finalidad democrática, además de antifranquista. Ya se vería después qué es lo que cada cual entendía por democracia en la papilla política del momento: lo urgente era respaldar el empujón simbólico de Múnich de 1962 y a esos novedosos equipos, que a veces parecían mixtos de reformados franquistas y de antifranquistas nativos, con una ingobernable gama de variables y matices.

La resolución de aquel problema editorial causado por Eduardo Nicol propició la contratación de Pradera en FCE. Cuando recibe la carta de Orfila de 7 enero de 1963 con su nombramiento formal como gerente, acaba de despedirse de Jorge Semprún unos días atrás, mientras Federico Sánchez resolvía el traspaso de *papeles*. Su sustituto sería un vulnerable José Sandoval, fácilmente identificable para una brigada policial y un comisario Conesa que estaba mejor entrenado para cazar a personas con antecedentes de guerra que sin ellos. Apenas duraría un año y pico fuera de la cárcel como responsable de intelectuales del PCE en Madrid, y lo mismo iba a suceder con un sustituto de su mismo perfil, Julián Grimau.

El relevo era un error seguro, además de arriesgado, y quizá no iba todo ya como siempre. El verano anterior, Semprún no había disfrutado de las vacaciones bianuales con Carrillo a las que tenían derecho los miembros del Comité Ejecutivo, como sí hizo en 1958 y 1960 (con las cartas de Pradera ya encajadas). Optó Semprún ese agosto de 1962 por viajar a Capri invitado por un alto dirigente del PCI. Allí coincidió casualmente con un amigo de conspiraciones en Madrid y París, Juan Goytisolo, y su pareja de entonces, Monique Lange, situada en el ala izquierda que controlaba Dionys Mascolo en Gallimard. Menos casualidad de lo que parece, también reencontró allí a la misma turista política que había examinado las condiciones objetivas y subjetivas de la resistencia en España unos meses atrás, Rossana Rossanda. Los había dejado a todos en estado de shock, o al menos a un hombre tan frío como Sacristán. En abril de 1962 ha comunicado al PCE que la labor de la *bambina* ha sido «eficacísima» con los camaradas y «hasta ha deslumbrado por su cultura y su valentía, que muchos de ellos no tienen a pesar de ser hombres barbados», no se sabe si la valentía o la cultura.

No sabemos tampoco si en la despedida de diciembre compartieron las buenas noticias inminentes que tanto Semprún como Pradera esperaban. La *Autobiografía de Federico Sánchez* que publicó Semprún en 1977 *desaparece* a Pradera mucho antes de ese momento. Gallimard estaba dispuesto a publicar *Le grand voyage*, e incluso iba a publicar un adelanto de la novela la sacrosanta *Les Temps Modernes*, dirigida por Sartre. Es improbableísimo que callase lo que ya sabía mientras acudía al piso de Ángel González para pasar su última noche en Madrid en diciembre de 1962.

Por su parte, el heterodoxo y todavía joven militante Pradera, de veintiocho años, estaba

pendiente del sí de Orfila Reynal para emprender una aventura nueva que ni lo alejaba de sus intereses intelectuales ni lo desvinculaba de la resistencia. Cuando menos, para entonces su otro cuñado, Chicho Sánchez Ferlosio, anda dándole vueltas a la letra y la música de canciones revolucionarias que graba en el lavabo de su casa un equipo de jóvenes socialistas suecos. (El magnetófono lo han comprado en Estocolmo otros dos jóvenes, Paco Uriz y Marina Torres, militantes comunistas tras el asesinato de Grimau, como cuentan en *Si me borra el viento lo que yo canto*, de David Trueba.) Quizá son precarias tanto la grabación como la interpretación, pero fueron para Pradera y muchos otros parte de la banda sonora de la resistencia y, en particular, alguna como «Gallo rojo, gallo negro»: «si cantara el gallo rojo / otro gallo cantarí», que «no se rinde un gallo rojo / más que cuando está ya muerto».

Bien estaba que la Biblioteca Breve de Seix Barral diese un baño de modernidad al lector indígena, bien estaba que Taurus buscara enlaces entre vencidos y vencedores autocríticos e incluso que se prestase a editar a algún revoltoso del exilio, y ambas desde 1954-1956. Bien estaba incluso que Guadarrama no cejase en su labor de alta divulgación e incluso bien estaba que Edhasa promoviese a medias entre el exilio de Guillermo de Torre y el antifranquismo del interior de Dionisio Ridruejo y Tierno Galván la colección El Puente, desde 1962, tan llena de cosas refrescantes de Corpus Barga, María Zambrano, Ferrater Mora o Francisco Ayala, todos exiliados. Pero sin duda no sobraba en absoluto en el mercado español el catálogo del Fondo de Cultura Económica. Hasta ese momento había significado para Pradera, tal como evocó muchos años después, algo más que una editorial de primer nivel. En realidad, cuenta Pradera, «debo a su catálogo –como toda mi generación– una parte decisiva de mi formación intelectual durante los oscuros y represivos años del franquismo; quienes estudiamos en la universidad en el cruce de los años cuarenta y cincuenta encontramos en los libros del Fondo, contrabandeados para eludir las prohibiciones de la censura, el acceso a una bibliografía que la dictadura nos negaba». Entre esos distribuidores de matute estaban ya Edhasa, de López Llausàs, y Pancho Pérez González, como mínimo. En realidad, tampoco nadie pudo sobrevivir en una facultad de ciencias sociales y humanidades entre los años sesenta y al menos los ochenta sin los libros de FCE.

Pero cuando ha de inaugurarse esa nueva sede tampoco estaba Pradera en su mejor momento. No se habría borrado aún, a finales de mayo, la conmoción por el consejo de guerra, la sentencia de muerte y el fusilamiento de Julián Grimau cuatro semanas atrás, el 20 de abril. Del inmediato entorno de Pradera y Gabriela Sánchez Ferlosio había nacido la canción que compone Chicho Sánchez Ferlosio, «Ha muerto Julián Grimau», horas después de su ejecución. Pradera habrá leído ya el artículo sobrecogedor de Ridruejo del 24 de abril, publicado en *Le Monde*, donde describe sin tapujos al franquismo no como el preservador de la paz (contra toda la siniestra propaganda montada por Fraga en torno a los XXV años de régimen) sino de la guerra continuada.

No había servido de nada la campaña para salvar la vida de Grimau, porque era otro vulnerable pez fuera del agua. Para un hombre de la guerra –como José Sandoval–, sin contacto con la España de Franco e impermeable a las transformaciones sociales que el país había vivido sin contar con él, Madrid equivalía a Marte. «Entre los vanos esfuerzos que emprendimos sus compañeros» de militancia, recordaba Pradera, «estuvo la recogida de firmas de profesores, escritores, artistas e intelectuales pidiendo su indulto». Es lo que Pradera llamaría tiempo después la *lucha firmada*, como le gusta recordar a Santos Juliá. La complicidad del capellán del colegio mayor César Carlos, que era Jesús Aguirre, fue entonces decisiva «para vencer las resistencias y los temores de algunos colegiales timoratos» y arrancar un número insólito de firmas. Empezaba otra amistad tortuosa y difícil de por vida entre el cura Aguirre y el predicador Pradera.

Con o sin esa movilización de firmantes, el Comité Ejecutivo del PCE de ese mismo abril de 1963 excluyó a Javier Pradera del comité de intelectuales de Madrid. Casi parecía ya una expulsión disimulada o un descuido calculado. Carrillo tiene demasiados datos directos y la experiencia personal de la insubordinación de Pradera. Le atribuye una tácita labor fraccional que, por otra parte, es completamente cierta desde la perspectiva de la disciplina comunista. Sacristán desde Barcelona se inquieta visiblemente con esa extraña situación de Pradera en el Partido, y siguen escribiéndose. A Manolo López tampoco lo recoge el Partido y en febrero de 1963 ha sabido por boca de Sandoval que no se cuenta con él. El aislamiento ha sido dictado por Carrillo porque se le considera hombre del entorno de Pradera, cosa que es verdad, pero no lo es que difiera de la línea política del Partido.

Se «presagiaban en el ambiente las divergencias» futuras, cuenta López, y la retahíla de encuentros entonces con nuevos estudiantes ofrece sospechas suficientes de la heterodoxia militante de Pradera o de una concepción de la resistencia abierta a la pluralidad de modos, miedos y fines del antifranquismo. Sabe que la Federación Universitaria Democrática Española, la FUDE, está sirviendo de aglutinante y a la vez conector de una nueva izquierda universitaria, algunos comunistas y algunos vinculados a la nueva etapa que abre el FLP a través de Jaime Sartorius (su primo Nicolás ha pasado ya a militar en el PCE). Se sitúan en ese entorno, a mediados de los sesenta, nuevos personajes ya habituales en casa de Pradera o en su despacho en FCE, como Ignacio Quintana o José María Maravall, como José Ramón Recalde y María Teresa Castells, Ángel de Lucas, Ignacio Romero de Solís y José Luis Leal.

Quintana ha visitado ya a otro puntal de la resistencia en el exilio, todavía más ajeno a cualquier disciplina, José Martínez. Está editando en su nueva Ruedo Ibérico libros relevantes de algunos de los *felipes* prominentes, como Ignacio Fernández de Castro, retirado de la primera línea del FLP, al igual que Julio Cerón, pero presente en conspiraciones y encuentros a muchas bandas. Percibe también una renovación de la izquierda encarnada por ellos, y otros más muy poco después, como Manuel Castells, Joaquín Leguina o Juan Tomás de Salas. Es más que probable que la misma mecánica que empleaba entonces Pradera con Ignacio Romero de Solís valiese para muchos otros colaboradores de la resistencia. Romero de Solís era «el contacto con el aparato del partido –me cuenta él mismo en una de sus cartas memoriosas e incisivas– y había que excluir cualquier detalle que le hiciera aparecer como un militante activo». Acababa de reactivarse, de hecho, y de ahí que «para justificar nuestros frecuentes contactos» mantuviesen ambos «la ficción» de «un contrato formal de traducción firmado, primero por Tecnos y más tarde por el FCE, que justificara que de vez en cuando despachara con él». Por una u otra vía, la sede del FCE era una oficina virtual del antifranquismo –en la ancha horquilla que abarcaba desde el exiguo socialismo del interior hasta el cristianismo revolucionario de los sucesivos FLP.

La ansiedad por salvar a Grimau fue el telón de fondo de los preparativos de la inauguración de la sede del Fondo en España, y entre ellos una conferencia, el 23 de mayo, de Aranguren. Con ella se abría una exposición fastuosa con ejemplares del casi millar de títulos de FCE en la Biblioteca Nacional. Allí contó Aranguren, según el omnisciente corresponsal de *Le Monde* José Antonio Novais, que FCE había despejado «la inteligencia española de los prejuicios del culturismo [*sic*] e hizo posible que se entendiesen palabras que parecían antagónicas como cultura y economía». Novais evocaba en primera persona «toda la emoción del coleccionismo y el agrisabor de una semiclandestinidad, a decir verdad nada peligrosa». Con seguridad esos libros «eran como globos-sondas que nos llevaban hacia desconocidos continentes del espíritu, del cual solo sabíamos su existencia por nombre». Y evocaba aún la intervención del «excelente

novelista y competente economista» José Luis Sampedro, al recordar «cómo los primeros libros económicos del Fondo, con sus cubiertas naranjas o verdes, llegaron a España cuando acababa de inaugurarse la primera Facultad de Economía, y de cómo él, entonces alumno de dicha facultad, tuvo que ir a veces a buscarlos a un domicilio privado: en el cuarto piso de una calleja madrileña».

Orfila había hecho su propia lista de invitados. Quiso que estuviese en la inauguración un exiliado que había regresado ya a España, el historiador del derecho José María Ots Capdequí, pero quiso contar también con el poeta y novelista José Manuel Caballero Bonald y el músico Luis de Pablo, además de José Antonio Novais y Andrés Zaplana, «por intermedio del Sr. Polanco», es decir, Jesús Polanco. Ha fundado tres años atrás la principal editorial de textos educativos del momento, Santillana, con una poderosa vocación americana como horizonte natural de sus libros. La primera vez que Pradera leyó el nombre de Jesús Polanco escrito fue «en las etiquetas de la primera expedición de libros de Fondo de Cultura enviada desde México a finales de 1962, a un domicilio social de la Puerta del Sol». Ni el referente liberal Julián Marías ni el criptocomunista Ramón Tamames ni el ridruejista Caballero Bonald impartieron las conferencias previstas. Hubo que reducir los días de la exposición, posiblemente a instancias del ministerio y con disgustos inevitables. Según Pradera, «la susceptibilidad de los intelectuales españoles en general y de Julián Marías en particular es incommensurable».

Estamos solo en la periferia de la selva salvaje de normas y burócratas franquistas, recién inaugurados los locales en Madrid en la primavera de 1963. También estamos en el origen de la debilidad de piel, casi física, de Pradera por el exilio político de 1939 porque son ellos quienes verdaderamente crean como asesores, traductores y autores esa malla de poder intelectual que es entonces el Fondo, y la lista puede ir desde Eugenio Ímaz y José Gaos, Enrique y Joaquín Díez-Canedo, Wenceslao Roces, Adolfo Salazar, Joaquín y Ramón Xirau, Eduardo Nicol, Max Aub, José Ferrater Mora, *José Carner*.

Estaba todo por hacer pero había ya algo nuevo: el embrión de una sede, un domicilio social, un centro de operaciones, un nódulo o cosa parecida capaz de filtrar, conectar y activar la pluralidad de movilizaciones que estaban en marcha, con marchamo de partido o sin él. Otra terminal de la izquierda en clandestinidad ha sido ya activada con vocación de futuro y conciencia de poder, productiva, contagiosa, irradiadora. También Pradera conoce ahora a José María Maravall, tras haber fundado la FUDE en noviembre de 1961. Existe como «sindicato libre» y «oposición sindical al SEU», dispuesta a «estrechar relaciones» con grupos políticos antifranquistas no integrados en ella. Al local de Menéndez Pelayo acude con frecuencia, hijo de un relevante catedrático de universidad y poco antes de continuar la ruta hacia el FLP, aunque frecuenta también el colegio mayor César Carlos. Allí predica otro amigo reciente, el capellán Jesús Aguirre, o prepara su oposición a cátedra un abogado que será otro aliado imperturbable de Pradera para el resto de su vida, Matías Cortés.

Lo que también iba a empezar casi de inmediato son las complicidades entre Orfila y Pradera en la distancia de minuciosas y larguísimas cartas. Una de ellas, sin embargo, no parece una carta sino un puro pedazo escrito de su vida de militante comunista. En este 10 de diciembre de 1963 no tiene treinta años todavía, y no lleva ni un año trabajando como gerente de la sucursal de FCE. Ha escrito ya muchas otras cartas a Orfila y seguirá haciéndolo durante al menos dos años más. Sin embargo, el tono y el contenido de esta apretada carta muestran de una sola vez a un joven en apariencia apartado del trabajo político mientras descubre su vocación de editor casi sin querer. Por eso María Elena Satostegui no entiende en septiembre de 1963 que a Pradera hayan podido

detenerlo e inculparlo de propaganda ilegal. Pradera le había asegurado que «en razón de su cargo en el Fondo» había desistido de contestar a dos periodistas –franceses e italianos– a propósito de la situación española.

Sin embargo, también ha promovido ya la recogida de firmas en defensa de Julián Grimau; mantiene relación con el aparato a través de Ignacio Romero de Solís, como mínimo; su oficina en Menéndez Pelayo funciona como ventanilla y auxilio de la resistencia y ha pedido permiso este mismo agosto a Orfila para integrarse en el consejo editorial de una nueva revista, *Cuenta y Razón*. Es verdad que «no figurar en él no sería ningún problema», pero valdría la pena aprovechar la oportunidad de meter la cabeza en una publicación «parecida a *La Pensée*, aunque naturalmente sin las implicaciones políticas, estrechas y rígidas de esta última». Pradera y Orfila saben que esa revista publica por entonces los artículos de Louis Althusser que irán a parar en 1965 a *Pour Marx*, y Pradera sabe que Orfila no ha sido nunca partidario de las «estrechas y rígidas» implicaciones comunistas.

La policía parecía mejor informada que María Elena Satostegui. Detuvieron a Pradera en la librería del FCE y a Gabriela Sánchez Ferlosio en su casa, junto a un invitado habitual del almuerzo, Ignacio Romero de Solís (se detuvo también a Fernando Sánchez Dragó, Ángel de Lucas, Julio Ferrer, Ana Guardione, que era la mujer de Chicho Sánchez Ferlosio, detenido un mes antes). Al menos a Gabriela, a Ana Guardione y a Ignacio Romero los dejaron libres a las pocas horas, pero no a Pradera, que fue encerrado en los calabozos de Las Salesas. Cuenta Romero de Solís que una vez libre él mismo decidió vestirse «cuidadosamente de señorito y, conociendo el percal de esos calabozos», se presentó «con una manta, veinte duros, un bocadillo y una almohada, alegando que era el pasante del abogado de campanillas» del detenido. Sin dificultad pudo ver a Pradera, le entregó lo que llevaba y sobre todo le tranquilizó contándole que «detrás de la aparatosa e incomprensible redada no había nada». Esta vez la detención del 28 de septiembre de 1963 fue efectivamente leve, o de solo mes y medio (hasta el 15 de noviembre). No había causa material –como cuenta también Pradera a Orfila–, aunque tampoco la impoluta inocencia que alegaba irónicamente medio siglo más tarde Pradera, cuando aseguraba que le «metieron en la cárcel cuatro meses sin venir a cuento». Sospechaba (seguro que sonriendo) que lo hicieron «para provocar que me echasen de Fondo de Cultura, aunque quizá sea una tesis paranoica». De lo que hay constancia es del mal trago personal de esa tercera detención porque, según Satostegui, «padece de deficiencia hepática y debe mantener un régimen alimenticio severo». El arresto domiciliario se prolongó otro mes y pico más y hasta el 8 de enero de 1964 no obtuvo autorización para regresar a su puesto de trabajo (y eso sumaría los cuatro meses de que habla Pradera). Esa prisión atenuada en su domicilio de la calle Reyes Magos, 18, transcurrió con un policía vigilándolo y filtrando las numerosas visitas de compinches como Castilla del Pino, Sacristán y Xavier Folch. La muerte en octubre de Juan XXIII propició el indulto que lo sacó a él de la cárcel, y también a Vázquez Montalbán: el joven periodista no reingresó en el PCE todavía y Pradera permaneció en su variante nebulosa y desconfiada de militancia. En alguna medida, el Carrillo de Vázquez Montalbán iba a ser Manuel Sacristán.



Foto policial de Pradera (1963). Cortesía de Felipe Nieto.

Aunque en FCE nadie entienda por qué lo han detenido —«es extrañísimo», piensa Satostegui—, Pradera pone el cargo a disposición de la empresa. Lo hace desde su casa, antes de haber podido regresar al trabajo, dados los «aspectos abstractos del caso y las consideraciones sobre la incertidumbre en el futuro». En el registro domiciliario le habían intervenido abundante material y propaganda ilegal que conservaba «por razones que van desde la negligencia, a una lectura indefinidamente aplazada», o incluso por «su condición de ex profesor de Derecho Político, que aspira sin embargo a volverlo a ser algún día». Por eso el «conflicto chino-soviético» tenía para el «declarante un interés más científico que político». Las cosas tampoco eran tan graves: en el registro cayó también algún número de *Clarté*, que era la revista para la que trabajaban los muchachos que grabaron las canciones de Chicho, alguna *Tribuna Socialista*, algún ejemplar de la revista *Ibérica* que editaba Victoria Kent en Nueva York, también del *Boletín* de Ridruejo y Julián Gorkin en París ciclostilado a máquina y grapado, o de *Cuadernos del Congreso por la Libertad de la Cultura* (tan inofensivos que son «editados por socialdemócratas anticomunistas», cuenta Pradera en su declaración policial). En realidad, Arnaldo Orfila lo había ratificado ya en su puesto al menos dos meses atrás, todavía con Pradera en Carabanchel: ese fue esta vez su destino carcelario porque ya había dejado de ser caballero cadete del Ejército del Aire.

Lo que es seguro es que por culpa de la detención volvió a perderse uno de los hitos de la resistencia y faltó al seminario celebrado en el hotel Suecia ese mismo octubre de 1963 sobre «Realismo y realidad en la literatura contemporánea». La cobertura del encuentro corría a cargo del todavía no desenmascarado Congreso por la Libertad de la Cultura. Pero sin duda sí conoció la cola grave y enredada que trajo ese seminario concurrendísimo, como supo sin duda de la dimensión de la trifulca que se vivió en vísperas de la inauguración. No hubo acuerdo entre el reformista Aranguren y el retornado del exilio José Bergamín, editor en 1940 de *Poeta en Nueva York* y fundador de la editorial Séneca en México, sobre cómo reaccionar contra una más de las vilezas del régimen, esta vez protagonizada por Fraga. Bergamín había sido uno de los 102 firmantes de la carta de 13 de octubre que instaba al Gobierno a abrir una investigación sobre las vejaciones policiales a los mineros asturianos y sus familias tras una importante cadena de huelgas. Fraga, sin embargo, dirigió al más vulnerable, Bergamín, la despótica respuesta ministerial a un documento firmado por el espectro más amplio posible de eminencias mayores y menores, entre el liberalismo templadísimo de Menéndez Pidal y el entorno de Paulino Garagorri y su *Revista de Occidente* hasta el rojerío más comprometido y habitual. Bergamín quería suspender el acto mientras Aranguren optaba por mantenerlo, y con él la mayoría de la resistencia del interior, más habituada a las tropelías y mezquindades del sistema.

No tenemos acceso a las cartas de Cela, Fraga y Robles Piquer que custodia la Fundación Cela,

pero de momento son públicas unas estupendas líneas citadas por Santos Juliá en *Nosotros, los abajo firmantes* que ayudan mucho a aclarar las posiciones. Cela se había prestado a colaborar en la resolución del caso con una cena entre él y Aranguren el 15 de octubre. Había de servir para informar al ministro sobre la situación, y eso hace Carlos Robles Piquer en una «nota informativa» a Fraga con noticias tranquilizadoras: Cela creía que «la mayor parte de los 102 era recuperable por medio de estímulos de publicación de obras o con sobornos».

A Pradera no debió de llegarle la luminosa inventiva de Cela porque estaba en la cárcel; tampoco firmó la carta de protesta de ese octubre ni escuchó los debates epifánicos de las jornadas sobre realidad y realismo para la nueva conciencia estética de la resistencia. Sin duda sí sabría que ese mismo verano de 1963, en uno de los seminarios del PCE en Arras, al norte de Francia, se habían defendido ponencias sobre arte y literatura que parecían romper el monopolio del prescriptivo realismo social del buen comunista. Las habían defendido Francesc Vicens, Fernando Claudín y Manuel Sacristán, pese a ser desabridamente menospreciadas en público por Carrillo. Algunos de ellos publicarían a finales de año sus textos en la revista del Partido *Realidad*. En Madrid, y en octubre, ese anacronismo literario y estético empezaba a tener las horas contadas, y fue allí donde todos escucharon tanto los vientos del pueblo que traía la poderosa voz de Raimon (avalada por Joan Fuster) como las intervenciones heterodoxas de Luis Martín-Santos, Italo Calvino, Mary McCarthy y otros escritores europeos poco sospechosos de filofranquismo.

Solo el 8 de enero del año siguiente, 1964, puede reanudar Pradera el trayecto a pie desde su casa en Reyes Magos hacia Menéndez Pelayo, sin encontrarse ya a Dionisio Ridruejo entrando y saliendo de la suya, en la cercana calle Ibiza, porque está exiliado en París hace más de un año (y por eso tampoco firma él esta vez la carta a Fraga). No volverá tampoco a encontrarse a Luis Martín-Santos ni en San Sebastián ni en Madrid porque se ha matado en un accidente de tráfico en este enero de 1964, todavía en situación de prisión atenuada. La situación judicial de Pradera afortunadamente mejora en marzo, cuando sabe ya que no será procesado por propaganda ilegal y el apoyo que había recibido de Orfila, «valioso en términos absolutos, resulta casi increíble para los que vivimos en este país».

COMUNISTAS SIN PARTIDO

Pradera seguía sin contacto oficial con la cúpula del Partido, pero seguía también informado de primera mano de los conflictos recientes. Las cosas van a cambiar a partir de la primavera de 1964, muy poco después de levantarse su arresto domiciliario y de evitar su procesamiento. Por entonces el militante Manolo López detecta que «Javier sabía más que otros camaradas» sobre lo que pasaba en el PCE. López se siente viviendo desde fuera y desde lejos un conflicto interno hasta que Pradera habló ante él sin tapujos y acusó al Partido de estar «en manos de una fracción» controlada por los antiguos dirigentes de la Juventud Socialista Unificada, con Santiago Carrillo a la cabeza. Se lo contaba antes de la caída de José Sandoval en Madrid, en abril de 1964, junto al hijo del general Lacalle, entonces ministro de Franco.

Si esa fue la expresión de Pradera —«una fracción»— quiere decir que las hostilidades estaban en un punto tan violento que era irreversible, precisamente porque la peor acusación entre comunistas era la de fraccionalista. Es exactamente la acusación que la cúpula del PCE hace a Fernando Claudín, a Federico Sánchez y a él mismo. Hasta entonces la sospecha ha sido secreta o

privada o interna; desde entonces va a ser pública y rotunda con el fin de obtener el retractamiento de Claudín y Sánchez ante los organismos del Partido o su expulsión de él.

La crisis había empezado de veras en octubre de 1963, con Pradera en la cárcel, el manifiesto de los cien y las actividades del seminario sobre realismo. Pradera estaba informado como si ya existiera Facebook. Su fuente crucial es Ignacio Romero de Solís, estudiante de la Sorbona y de la École des Hautes Études en Sciences Sociales bajo la dirección de Bettelheim y de Godelier, «oyendo y tratando tangencial pero frecuentemente» a Lévi-Strauss y Althusser, pero atento al agitado caldo comunista. En sus regulares viajes a España carga toda la rumorología, además de información fiable sobre las tensiones y el subtexto que no se deja leer en los documentos oficiales y públicos. Todos sabían más de lo que hoy podemos adivinar en la solemnidad trascendente de los documentos del Partido. En casi todos ellos se habla de una cosa cuando se está hablando de otra, en una vieja práctica no solo política. El conflicto se recrudece en enero de 1964 en sucesivas reuniones del Comité Ejecutivo, donde se hace evidente la disparidad de posiciones de Claudín y Semprún.

Pero son dos los momentos clave encadenados: el primero en el Comité Ejecutivo celebrado entre el 27 de marzo y el 2 de abril cerca de Praga, con un contundente informe de Claudín en el que discrepa de la línea oficial del Partido (y lo deja a él en exigua minoría). El segundo acto tiene una dimensión más grave al aludir Carrillo a esas discrepancias en público y fuera de los órganos del Partido, durante la conmemoración del primer aniversario del fusilamiento de Julián Grimau, el 19 de abril de 1964. Según el relato de Claudín, Carrillo redacta para el Comité Ejecutivo «un informe que, desde el principio hasta el fin, es una polémica con nuestras posiciones». Omitía sus nombres pero por eso mismo todos supieron a quiénes y a qué *divergencias* se aludía, «con el agravante de presentarlas groseramente deformadas».

Aunque a Semprún le pesa el discurso de Pasionaria en Praga (cuando llama a los disidentes, pero sobre todo a él, «cabeza de chorlito»). Viéndoles venir, quiere protegerles de sus extravíos con insospechada debilidad maternal. La advertencia los conminaba a no dejarse «impresionar demasiado por los textos italianos» y por Togliatti en particular (que moriría ese agosto). Ahora Pasionaria veía a Claudín como «un hombre escéptico, pesimista, que no cree en nada», y Carrillo, por su parte, adivinaba en Semprún a un escritor angustiado porque la política le robaba tiempo a la vocación literaria, cuando había ganado ya el Premio Formentor con *Le grand voyage*. Ese ataque de abril disfraza de ideología una lucha estricta por el poder y el control del Partido, con Pradera ya incluido explícitamente. Le defendió Semprún para evitar que se le creyese, como le creía Carrillo, «diablo *ex machina*» responsable de «todas las desviaciones que tenemos con los intelectuales». Era bastante cierto, pero no iba a ser Semprún quien reconociese esa deuda ni el papel de Pradera como activador de una protesta interna que amenazaba con romper la disciplina. Lo que tenía de protección al amigo lo tenía también de magnificación de sí mismo: cuando Pradera aluda años después a este episodio, ante el magnetófono de Maravall, no mencionará a Semprún como agente del conflicto sino al ideólogo real de la operación, Claudín.

Es en ese mes de abril de 1964 cuando tanto Claudín como Semprún son suspendidos del Comité Ejecutivo. Todavía no acarrea la expulsión del Comité Central ni del Partido, pero desde entonces la dirección carga las tintas para cargarse de razón ante los más dubitativos, menos informados o simplemente presos en cárceles españolas (y a la vez miembros del Comité Central). Ha empezado a evacuar consultas el Comité Central para que decidan sus miembros sobre la indisciplina de las dos F, Fernando y Federico, mientras van llegando odas a la línea oficial, a veces con algún matiz exculpatorio de los díscolos, como hicieron Francesc Vicens y con más

claridad Jordi Solé Tura. Para todos sigue inalterable la consigna comunista según la cual es preferible equivocarse en el Partido que acertar fuera de él.

De regreso hacia París desde Praga, en ese mismo abril de 1964, Jorge Semprún visita a Rossana Rossanda y a otros comunistas, entre ellos el director de *L'Unità*, en la sede del PCI en la calle Botteghe Oscure de Roma. Y sí, por supuesto que le dieron la razón –por algo «éramos italianos», recuerda Pradera–, pero también fueron fieles a la consigna histórica de que «era inútil tener razón fuera del Partido». Apenas unos días después, el 1 de mayo, Semprún, que es quien lo cuenta, recoge en Salzburgo el Premio Formentor por *Le grand voyage* y presta a Carrillo una nueva batería argumental para defender su expulsión del Partido. El propio Semprún aducirá los mismos argumentos en un artículo de *Realidad* a finales de ese año en defensa de la desobediencia del escritor a las rancias consignas del realismo socialista (entre los técnicos editoriales del número está, por cierto, todavía Pradera). Al año siguiente el texto traducido apareció en *Que peut la littérature?*, publicado en París, junto a colaboraciones de Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Jean Ricardou o Yves Berger. Semprún está ya en otro Olimpo.

Todos saben que ese choque los condena sin remedio. Su tiempo de militancia ha terminado, aunque aún no hayan sido expulsados del Partido, pero sí suspendidos, del Comité Ejecutivo tanto Claudín como Semprún. Ya no se cuenta con ellos pero ellos sí cuentan con el Partido, todavía comunistas de corazón y convicción. Claudín había desarbolado buena parte de las motivaciones emocionales y racionales de la militancia comunista en su informe de Praga en abril, como si casi nada de lo que sostenía la entrega heroica, abnegada y temeraria hubiese tenido sentido. Su diagnóstico deploraba la desconexión analítica de la dirección con la realidad y reprobaba la falsedad de los pronósticos sobre la inminencia de la caída de la dictadura; a todo ello le sumaba una fría crónica de los fracasos revolucionarios del PCE. La autopsia era demoledora y a ratos masoquista, tanto en el documento de abril como en el informe que entrega al Comité Ejecutivo el 8 de diciembre de ese año 1964, cuando han sido ya repetidamente amonestados él y Semprún. Según Claudín, el Partido ha seguido las pautas de una «radicalización propagandística» sobre la supuesta descomposición del régimen, como si la dictadura estuviera al borde del abismo y su derrumbamiento literalmente «a la vuelta de la esquina». Y usando a menudo los datos económicos de Ramón Tamames, autor de un éxito comercial de 1960 titulado *Estructura económica de España*, registra sin piedad una y otra vez las «manifestaciones que ha tenido el subjetivismo en la Política del Partido desde 1956».

Claudín ya ha asumido que la «etapa de capitalismo monopolista de Estado» promovida por los economistas y técnicos del Opus Dei, significa «la preparación óptima para el socialismo», y esa es ya «la vía española al socialismo». Tras invocar a Palmiro Togliatti una vez más, para desesperación al menos de Pasionaria, concluye que esa nueva vía al socialismo debe abandonar la revolución porque no se dan «las condiciones reales». El escándalo rozaba la herejía porque discutir era una cosa y otra muy distinta «hozar en la charca de la socialdemocracia», como dijo Pasionaria en alusión a Claudín y Federico Sánchez.

Pero era eso lo que aconsejaba la nueva realidad económica de España, según Claudín: «Llevar la lucha de clases a un nuevo marco legal, democrático-burgués, dentro del cual se esforzará por la vía legal» en ensanchar «el marco de la libertad y la democracia». Entre los pasos inmediatos estaba proponer un proyecto de Constitución para «la vía de la transición pacífica de la dictadura franquista a un régimen de libertades políticas, sin las cuales el proceso ulterior de avance pacífico y democrático al socialismo se encontraría bloqueado». El Partido sigue creyendo en la revolución democrática (que quiere decir sobre todo revolución) y los claudinistas han entendido

que la sociedad sin clases del socialismo pasa por aprovechar el desarrollo capitalista de la burguesía monopolista a través de la democracia liberal-burguesa. Las condiciones objetivas de movilización y conciencia de clase, aumento de salarios, nuevas realidades sociales de la España de Franco no dejan otra salida real, realista o viable.

Ha empezado lo que años después Pradera llamará, con insospechado préstamo orteguiano, la «segunda navegación de Claudín», a sus cincuenta años. Pero también empezará enseguida una etapa de grave desestabilización, ya casi fuera de la casa que ha sido la suya durante toda su vida adulta. Por aquellos años llegará en auxilio de Claudín otro militante comunista que abandona el Partido con él y Semprún, recién regresado de México, y durante los próximos años muy cercano al grupo, Faustino Lastra. En todo caso, desde el verano de 1964 se pone en marcha una catarata de acciones que conducirán al entierro del debate o, mejor, al destierro de los díscolos del Partido, en particular desde el momento en que ni Claudín ni Semprún acatan la comunicación formal de su expulsión del Comité Ejecutivo, cursada en septiembre de 1964. Siguen «en violación permanente de los estatutos del Partido», según el documento, y no han hecho caso tampoco al «requerimiento» que en persona les hizo una delegación del Comité Ejecutivo el 5 de noviembre para abandonar la «actividad fraccional». El día anterior también anduvo muy alterada la dirección de los comunistas catalanes del PSUC con sus propias desavenencias y fue expulsado formalmente Jordi Solé Tura. En teoría, había regresado sin autorización de su puesto en Radio Pirenaica en Bucarest en diciembre del año anterior; en la práctica, había pasado antes por París y en París supieron que estaba del lado de los disidentes.

Dos semanas más tarde, la expulsión del PSUC llega también a Francesc Vicens. Había escuchado en directo el informe de abril de Claudín y asume por entonces que bajo la losa franquista no había caldera alguna a punto de explotar. La muerte de Palmiro Togliatti en agosto podría haber jugado a favor de los divergentes porque dejó un resonante documento conocido como memorando de Yalta, que es una suerte de testamento político. Allí reprobaba la lentitud con la que regresaban a los partidos comunistas «las normas leninistas que aseguraban, dentro y fuera del partido, una gran libertad de expresión y discusión sobre cuestiones de la cultura, del arte y de la política», tal y como estaban ensayando sin demasiado éxito Claudín, Semprún (y Pradera a distancia), y tal y como intentaría tímidamente Sacristán con inmediata contrición.

A Pradera tampoco lo dejan de la mano y este mismo diciembre, mientras Claudín escribe el prólogo al informe que quiere repartir entre la militancia, se reúne en Madrid con otra comisión del PCE durante seis o siete horas. Forman la encerrona sus habituales comisarios de conspiración, Armando López Salinas, Jaime Ballesteros y Manolo López, precisamente porque saben bien los tres, según cuenta el informe de López Salinas al Comité Ejecutivo, que «allí donde había problemas» aparecía Pradera. «Muy en concreto preocupaba lo que sucedía en la universidad», porque Pradera a menudo recibía en la sede de FCE o en su casa a delegaciones de estudiantes jaraneros y alborotadores, como había pasado siempre y como seguiría pasando hasta el final de su vida.

Estaba clara la denuncia y Pradera la escuchó como segundo *round* en tono menor de las acometidas que había recibido en casa de Semprún y en casa de Eduardo Punset en febrero de 1962, una con la presencia abrasiva de Carrillo y la otra sin él: «Se le dijo claramente», escribe López Salinas, «que sospechábamos que estuviese impulsando una labor fraccional.» Pero la acusación no era formal todavía, y mantenían la exquisita reserva de si lo hacía a conciencia o inocentemente. Era una reserva fingida: al menos Manolo López e Ignacio Romero de Solís tenían plena conciencia de la determinación de ese fraccionalismo en Pradera.

Le dieron un respiro para que se lo pensase, pero debió de durar poco porque la respuesta da miedo. Según él, apenas mantenía contacto con la universidad, solo con algunos círculos próximos a Romero de Solís (y a quien no había mencionado en el atestado policial de 1963 para protegerlo). Pero donde Pradera dijo que sí podía hacer «mucho daño era en las relaciones con otras fuerzas», según transcribe el atestado de López Salinas. Esa había sido su más intensa función tras recuperar la actividad resistencialista en 1962: enlazar, conectar, vincular a los distintos grupos de liberales, socialistas, cristianos revolucionarios, filocomunistas y otras especies. Por supuesto, nadie podía creerse esa amenaza contra el Partido porque al Partido no le hace daño nadie, y menos él, anota López Salinas, sin ocultar que el rifirrafe tuvo «momentos de bastante dureza en la discusión».

Como medida cautelar, su «situación orgánica» quedaba pendiente «del resultado de las conversaciones que tenga con la dirección del partido». Pero el Partido estaba reventado ya por dentro desde que Carrillo había atacado abiertamente las posiciones de Claudín y Semprún en la primavera de 1964 y Claudín lo estaba contando por escrito en un documento que Pradera conocería poco menos que en directo a través de Romero de Solís. Dijo Pradera conciliadoramente que, mientras tanto, trabajaría en la revista *Realidad*, «para tenerlo controlado al máximo», según López Salinas. Es doblemente irónico porque ni Semprún había controlado a Pradera ni parece muy verosímil la jactancia de López Salinas sobre la influencia paralizante que tuvo «el paso que hemos dado» (la encerrona), y no sé si muy eficaz para lo que se proponía: ir «cortando las posibilidades de fastidiar» de Pradera. Eso cuadra algo mejor con la amarga memoria de aquella salida, tal y como la contó en 1978: «Me hicieron la vida imposible, realmente», incluida la prohibición tanto de hablar con «la gente de mi célula» como de hablar de política fuera de ella.

El 28 de diciembre de 1964 es la fecha del prólogo en el que Claudín justifica la difusión del informe fuera de los órganos directivos. El objetivo es trasladar la discusión a la militancia para que sea ella quien lea sin resúmenes ni amputaciones los debates y las *divergencias*. Las cartas con la posición de numerosos presos en cárceles y penales han sido casi unánimemente leales al Comité Ejecutivo, en parte por la misma razón que explica el alineamiento de Manolo López. A pesar de haber leído por encima y a toda prisa los papeles, sin tiempo material de examinar los centenares de páginas de las discusiones, López estuvo de acuerdo con la decisión del Comité Ejecutivo porque siempre se estaba de acuerdo con las decisiones del Comité Ejecutivo.

En el reparto de las copias hechas con multicopista de la versión completa estuvo activo Pradera en Madrid, junto con Pilar Claudín y su marido Antonio Pérez, seguramente también Eduardo Haro Tecglen, quizá Castilla del Pino. Llegaron también a los más jóvenes Emilio Sanz Hurtado, Ignacio Romero de Solís, Santiago Roldán, Lourdes Ortiz, Jesús Munárriz, Ignacio Quintana. Para entonces, Claudín sabe sin duda ya que Pradera ha sido sometido a ese interrogatorio de seis o siete horas que trata de averiguar si su «actividad fraccional» es real o figurada. Pradera, además, proyecta participar en la continuación de *España, hoy*, junto a Eduardo García Rico, Haro Tecglen, César Santos Fontenla, Tamames. Se ha de publicar en Ruedo Ibérico, en parte gracias al auxilio financiero de Faustino Lastra, ese mismo diciembre de 1964, para superar la difícil y crónica debilidad económica de la editorial.

Pero sin duda es también creíble que ese folleto de Claudín esté pensado para seguir la discusión dentro del Partido. Claudín no sabe todavía si su exclusión del Comité Ejecutivo es definitiva, aunque lo parezca, y «hasta el momento», escribe en ese prólogo de finales de diciembre, «no he recibido ninguna comunicación oficial». Algunos incluso dicen, o «se dice que

hay el propósito», de excluirlos del Comité Central «y hasta del Partido». Nada conciliadora era la base de su argumentación y ahora ya no oculta Claudín que «la Huelga Nacional [de 1959] fue un fracaso», pero cinco años después el Partido sigue negándose a reconocer ese «hecho indiscutible» que tan explosivamente había expuesto Pradera en público y en privado.

Las tergiversaciones que denuncian una y otra vez a lo largo de 1964 han propiciado que varios compañeros de dirección hayan tachado la posición de Claudín y de Federico Sánchez de «oportunistas, derechista, revisionista, capituladora, etc.», cuenta Claudín. La acusación es en realidad contra «la conciencia clara» de que «una política revolucionaria debe hacerse en la realidad, analizada con un método marxista, sin fraseología hueca, sin la ayuda de los buenos deseos y de las ilusiones sin fundamento». El Partido acababa de colgarles la «etiqueta de panegiristas del capital monopolista» y había promovido una «campana demagógica» que los situaba cínica y vejatoriamente «al servicio de Fraga». Había llegado el momento de la contraofensiva, aunque fuese para perder la batalla *de todas todas*, como solía decir Pradera.

Es verdad que esa nueva visión no había llegado de golpe. Fue lentamente asumida a lo largo de los años 1960-1964, tras las dudas que generó en unos pocos el desastre de la HNP de 1959 y la evidencia de la recuperación económica que vivió el país los años siguientes. Creció como «convicción íntima» de unos cuantos, reos todavía de la sumisión a Carrillo y dispuestos a creer que «debíamos revisar nuestros análisis» de la situación española. Pero acabó siendo evidente que debían salir de los despachos y escuchar «las opiniones de otros miembros del Partido que vivían inmersos en la realidad del país», como había sido el caso de Federico Sánchez hasta diciembre de 1962 y lo era todavía de Javier Pradera. De él procedía en gran medida el cultivo de dudas que fermentaron poco a poco en dos estalinistas nativos y fue a la vez inductor de un diagnóstico tan implacable como el de Claudín ante el pleno del PCE en la primavera de 1964. En sus contundentes palabras resuenan los ecos de las notas de una noche de mayo: «En España no ha madurado aún, ni es previsible su maduración en un período breve, una situación revolucionaria.»

Es el mismo Claudín quien ahí recuerda «que me produjo especial impresión una carta que en 1960 Javier Pradera envió desde Madrid a la dirección del Partido». Alude a las notas que contestaría Semprún en nombre del Comité Ejecutivo calcando los modos de la catequesis estalinista. Claudín no podía mencionar a Pradera en el informe de 1964 por razones de seguridad, como no podía nombrar tampoco por las mismas razones al autor de otra inquietante carta de 1963, Manuel Sacristán. Tampoco pudo incluir su nombre ni el de Sacristán en la edición en 1970 de ese informe en Ruedo Ibérico, pero pudo ya ponerlos impresos en nota en la edición que preparó El Viejo Topo en 1978 con el título *Documentos de una divergencia comunista. Los textos del debate que provocó la exclusión de Claudín y Jorge Semprún del PCE*. Para entonces las relaciones de Pradera y Claudín son tan estrechas como cotidianas desde septiembre de 1975 en Madrid, cuando Pradera está ya habituado a encuentros y desacuerdos con el joven grupo socialista sevillano del PSOE: Claudín ha cruzado sin documentación la frontera ese mismo verano y ocupa un pequeño despacho en la editorial Siglo XXI con el auxilio de Faustino Lastra, la cobertura a distancia de Javier Pradera y la edición ahí de algunos de sus libros.

Será Manolo López quien disipe las últimas dudas de Pradera para seguir o no seguir en el PCE tras la salida de Claudín y Semprún. *Mundo Obrero* ha dado relevancia oficial a la expulsión por fin en abril de 1965 y Pradera ha encargado a Manolo López que se informe de primera mano sobre las personas aludidas en un artículo de Carrillo en *Realidad*. Iba dedicado a los intelectuales dubitativos y a la necesidad de gestionar su naturaleza débil. Por supuesto, Manolo López le confirma que iba por él ese artículo en el que Carrillo se remonta al 19 de abril del año

anterior para justificar la crisis actual. El partido debía prestar ayuda a «nuestras camaradas intelectuales» para que asimilen y comprendan una disciplina «a veces un poco pesada». Lo que sin duda no se puede hacer es «estar dentro del Partido y al mismo tiempo estar afirmando la “independencia” de uno en relación con el Partido».

A petición de un camarada, cuenta Carrillo, ha decidido aclarar esa idea expuesta en abril y explicar mejor su significado. Y lo hace, desde luego, para que reciba el mensaje quien deba recibirlo: «Para ciertos jóvenes de procedencia burguesa, el paso a las posiciones revolucionarias no es fácil» y en la marejada de sus dudas pueden llegar a escapar «fuera de los márgenes del Partido». El Partido ahí tiene que pensar bien si echarlos sin más o darles un respiro para que ordenen sus ideas. A Pradera le habían dado ya varios respiros en forma de avisos terminantes, pero hay «gentes que no serían nunca buenos militantes» y, en cambio, «pueden ser sin embargo buenos amigos del partido, o sus aliados, fuera de él». Es posible que alguno de esos jóvenes se haya «equivocado adhiriéndose a nuestras filas sin haberlo pensado bien», y lo mejor que puede hacerse con él es «facilitar su salida voluntaria» y lograr así que «sea, cuando menos, un amigo». Pradera se había sentido aludido sin el menor asomo paranoico.

A principios de ese año 1965, Semprún había escrito ya a Santiago Carrillo para reafirmar su «decisión de ser comunista», y eso «no puede ser quebrado por ninguna resolución que toméis», así que «seguiré siendo comunista». Lo mismo escribe Claudín un mes más tarde, como si Pasionaria hubiese tenido razón cuando escribió que Claudín se apoyaba en Semprún «para difundir sus “genialidades” políticas» porque sin él apenas pesarían nada. Claudín y Semprún se involucran decididamente ahora en el nuevo proyecto que pone en marcha la izquierda por libre que encarna José Martínez, y el primer número de la revista *Cuadernos de Ruedo Ibérico* aparece en junio-julio de 1965. Con sus convenientes seudónimos, y bajo la dirección colegiada de Martínez, Semprún y Claudín, escribe una mezcla de *felipes*, socialistas y excomunistas, incluidos ellos tres, pero también un buen puñado de amigos relacionados con Pradera: José María Moreno Galván, Luciano Rincón, Manuel Castells, Julio Cerón, Eduardo García Rico, José Luis Leal, Francisco Fernández-Santos, Francesc Vicens.

Tanto si Pradera se ha ido ya como si no, ni Sacristán ni Folch ni López se resignan a perderlo. Los escrúpulos de conciencia vuelven a asaltar a Manuel Sacristán y se lanza a la máquina para escribir su habitual informe de junio al PCE, pero también una carta personal a Pradera con fecha de 28 de junio de 1965. Al partido le critica la «desproporción» entre las «discrepancias» y las «consecuencias finales» del caso de los disidentes. Desde luego, es «insensata» la discusión sobre la «democracia interna» dadas las condiciones actuales de lucha y clandestinidad. Pero lo que ha revelado esta historia –cuenta a la dirección del PCE– es que «nuestro partido no parece haber podido hasta ahora digerir sin grandes dificultades» a intelectuales que no son orgánicos pero tampoco «mero adorno». Por eso «es ilusorio considerar la grave crisis de los intelectuales de Madrid como un hecho excepcional», como sin duda sabía bien Sacristán, con la mala conciencia todavía viva de su placaje contra Vázquez Montalbán. En el fondo, sigue vigente «la desconfianza muy profunda respecto de la función intelectual». Aunque «el espíritu científico se ejerce en el partido», se ha llegado a tratar al intelectual como «enfermo contagioso». Por eso se muestra partidario de tratar las diferencias «sustantivamente», sin barnizarlas, «de cara y llamando a las cosas por su nombre», como pedían Togliatti, Claudín y el camarada Pradera.

En los mismos días, Sacristán regresa a la máquina para escribir ahora expresamente a Pradera y tratar de disuadirlo de su abandono. Tanto él como Manolo López y Xavier Folch saben que su estima por Armando López Salinas no es excesivamente alta –lo tiene por «tonto útil»– y saben

también que Pradera ha recibido el mensaje de Carrillo incluido en el artículo de *Realidad*. La papeleta de Sacristán es complicadísima como dirigente que acaba de ser incorporado al Comité Ejecutivo para cubrir precisamente las recientes y traumáticas vacantes. Pero sabe también que discutir sobre el Partido desde fuera del Partido «significa sin más la expulsión». Por eso adopta su más inoportuna pedantería profesoral para ilustrar a Pradera sobre la naturaleza del Partido como «subjetividad organizada», y no una cualquiera, «desde luego, ni azarosa y casual».

Hay algo peor que ignorar esa naturaleza, y es haberla ignorado siempre o darla por «caducada». Su defensa del *centralismo democrático* y la lógica del acatamiento jerárquico explica la imposibilidad de reformar al Partido más de lo que lo ha hecho ya, tras «efectivas transformaciones» desde «hace bastantes años». Quien no entienda qué es el Partido, ni vea «fundados sus estatutos, no es propiamente un militante». Basta tener un poco de visión teórica para entender que «preservar y reforzar el Partido es al menos sostener el principal agente del socialismo». Se hace casi palpable el sudor de Sacristán y el estrés estilístico en una carta que aspira a la vez a mantener en el Partido a Pradera y a que se decida «a hacérselo comprender a algún otro», que presumiblemente incluye a la creciente nebulosa de jóvenes que sigue usando la sede del FCE o su casa de Reyes Magos como oficina virtual de la resistencia, desde Rafael Sarró a Ignacio Romero de Solís o Ignacio Quintana.

Pero tenían razón tanto Carrillo como Sacristán. Pradera nunca fue el hombre de partido que debía ser. Su comunismo tuvo los rasgos religiosos de los demás, pero no hicieron de él un seguidor dócil de análisis ajenos ni un estalinista dogmatizado e inhibido del sentido crítico que puso en marcha antes de 1960, en múltiples discusiones con Semprún, y después de 1960, cuando ya no hay más cera que la que arde. El secreto es quizá que Pradera no estuvo nunca integrado en el aparato, aunque él mismo dijese que había sido «comunista con Stalin y católico con Pacelli». Pero no es verdad, o no lo es en la misma medida que otros vivieron el estalinismo como la única y congénita forma de vivir el comunismo. Pradera llegó muy joven al Partido y desde muy temprano dio muestras públicas de insubordinación, incredulidad y escepticismo ante las consignas, los análisis y los programas de acción (aunque los secundase). No necesitó desestalinización porque entró desestalinizado.

Desde el mes anterior, en mayo de 1965, Carrillo había dado ya por plenamente refutadas las tesis de los divergentes y se releva a los dirigentes expulsados. A Claudín lo sustituye en el Comité Ejecutivo Manuel Azcárate, muy explícito en su condena a Pradera, pese a no conocerlo. Pero quizá por eso supo de inmediato, al hacerse cargo de sus nuevas funciones en el Partido, que las células de estudiantes comunistas «se estaban deshaciendo» en la Universidad de Madrid, además de experimentar la gélida frialdad de Rossana Rossanda en un encuentro con ella, *italiana* nativa. Han ingresado también Manuel Sacristán, que ha buscado la conciliación desde la disciplina comunista; Jaime Ballesteros, emisario de las inquietudes del Partido ante Pradera a finales del año anterior, y Alfonso Sastre.

Por entonces, cuenta Manolo López, le llega un goteo de jóvenes aspirantes a militar en el Partido, reenviados por Pradera cuando ya no está en el Partido. Entre ellos figuran gentes procedentes del Frente de Liberación Popular como Nicolás Sartorius. Pradera mismo propicia el ingreso en el PCE de la duquesa roja de Medina-Sidonia (a través de Romero de Solís). Es un momento especialmente brumoso en la nueva izquierda porque los *felipes* activan la sintonía con los *italianos* expulsados del PCE e incluso aspiran a ampliar su influencia hacia Andalucía; en Málaga se ha instalado ya un cristiano tan inquieto como Alfonso Carlos Comín y de aquella experiencia sale en 1965 su angustioso *España del Sur*, publicado por Tecnos y prologado por

Ramón Tamames. En Sevilla circula otro cristianismo humanitario y de signo social en el entorno de la izquierda democratacristiana de Manuel Giménez Fernández, exministro de la CEDA de la época republicana y reactivado políticamente desde 1956. Ha sido influyente profesor de un joven Felipe González, abogado laboralista con despacho propio. Los acuerdos que promueve Ignacio Quintana desde el FLP con este grupo socialista no fructifican, en parte por los recelos de la dirección hacia el socialismo renovado que aglutina al propio González con Alfonso Guerra, Luis Yáñez, Manuel Chaves y otros jóvenes.

Pradera sigue yendo por libre y milita abiertamente en favor de los disidentes, aunque no le sigan algunos de sus compañeros más inmediatos, como Manolo López, que seguirá en el Comité Central. Es natural que Carrillo afease acremente a López haber aceptado el empleo en FCE que le ofrecía un fraccionalista como Pradera, convencido Carrillo de que Manolo López se alineaba con sus posiciones disidentes. No era verdad porque, como confesaba él y sentía la mayoría entonces, «en muchas ocasiones ha predominado tanto el deseo en mis análisis que han edulcorado e incluso falseado la realidad». Con Pradera hacía mucho tiempo que ese mecanismo de autoengaño consolador, pueril pero también deshonesto, había dejado de funcionar. A cambio, sí siguió la conspiración de cada día, esta vez buscando armar un borrador de Constitución más o menos fantasma, tal y como había promovido el programa de Claudín, y a eso se dedicaron en numerosas reuniones desde entonces Pradera, Castilla del Pino, Tamames, Alfonso Carlos Comín y otros.

FRATERNIDAD CRÍTICA

Con Orfila Reynal en FCE las cosas fluyen con naturalidad porque Pradera acepta su invitación a proponer y promover cosas. La pesquisa trabaja cerca de sus afinidades comunistas y antifranquistas, colegas de universidad, colegas de conspiración, conocidos, allegados, cómplices potenciales, gente de valor sin demasiada adscripción política o incluso con adscripciones familiares tan inquietantes como la suya propia. La política de reconciliación practicada desde 1956 y la búsqueda de alianzas con otros antifranquistas no fue solo práctica política rutinaria, sino que se convirtió en el sustrato de dinamitación diaria de las bases del mismo sistema desde el nuevo mundo de la edición. Lo hace con su entorno de amigos comunistas pero también con otros de adscripción más difusa, como Luis Ángel Rojo o Rafael Sánchez Ferlosio, Víctor Sánchez de Zavala o el criptosocialista Enrique Tierno Galván, con Josep M. Castellet o incluso otro economista de prestigio como Fabián Estapé. También los toros serían el tema de dos libritos encargados a Domingo Dominguín y tampoco habría de ser extravagante encargar un librito sobre literatura catalana a Joan Fuster, a la vista de «las funciones míticas que desempeña en el “reino de Aragón” el gran escritor y humanista». Hay ya un hecho novedoso y es «la importancia que está alcanzando el fenómeno cultural de las ediciones en catalán». Al menos, Pradera ha conseguido arrancarle en abril de 1965 lo que Fuster «humorísticamente denomina un intento de conato de esbozo de proyecto de esquema del librito sobre la literatura catalana». Ese es otro mundo, y también lo saben todos porque «Barcelona es superior a Madrid»; de hecho, «casi hay que considerar a esa zona como si fuera un país latinoamericano», con «características muy peculiares».

Se lo decía Pradera a Orfila, pero algo había detectado también Rossana Rossanda en sus paseos de marzo de 1962 por el Madrid obrero con Pradera, Armando López Salinas y otros

comunistas. Ella está convencidísima de la modernidad relativa de Barcelona, culta y obrera, y del franquismo granítico y funcional de Madrid: «La superba autosufficienza di Barcellona, la città grande, la città attiva, quella che produce, quella che accoglie emigrati dalla Spagna vecchia, quella che volta la spalle alla Madrid burocratica, escrescente, franchista. Milano contro Roma. Chi è franchista in Catalogna? Nessuno. O la polizia, che è nessuno, repressione pura.»

Allá habrá que acudir para el día del libro, el 23 de abril, y lograr una caseta no tan periférica y marginal como la del último año, y a pesar del «increíble *boom* del libro en catalán –un solo *stand* en Paseo de Gracia vendió, al parecer, el día de la Fiesta del Libro 250.000 ptas. de libros catalanes–». Todos perciben esa «circunstancia tan particular que se está produciendo ahora» con el «impulso de la cultura catalana, y el deseo de todos ellos de difundirla en lengua española», como escribe Manuel Andújar. Esa singularidad lleva a montar una delegación inaugurada por todo lo alto en mayo de 1964, con fotos del acto tomadas por Oriol Maspons y la colaboración de Fabián Estapé y Salvador Espriu, que «realmente es el más caracterizado representante de la cultura catalana (aparte de su dimensión universal de gran poeta)». Fuera de Barcelona, las cosas son más complicadas. Los intentos de expandir la editorial a ciudades como Zaragoza, Granada o Córdoba combinan el aliento de nuevos «libreros jóvenes, de cierta formación siempre», e identificados con ese catálogo, y las condiciones materiales de zonas «culturalmente “subdesarrolladas”». En Granada la experiencia ha sido decepcionante, cuando en las catacumbas de la ciudad se mueven ya jóvenes comunistas como los que recrea Luis García Montero con algún deje autobiográfico en *Alguien dice tu nombre*.

En su nuevo oficio se trata sobre todo de «“provocar” el libro, y para ello sería preciso estudiar caso por caso los autores que en principio pudieran interesar». Ha empezado ya a hacerlo en todos los sentidos, sobre todo desde 1964. Ha asumido que un director editorial –incluso cuando, como en su caso, no lo es– «tiende a vampirizar a todos los amigos, escritores, profesores, libreros o lectores a quienes trata, a fin de recibir sus soplos o sus consejos; en ocasiones, cuando no es demasiado rácano, remunera con dinero –nunca demasiado– los servicios de sus asesores, o incluso les reconoce públicamente sus méritos como miembros de un consejo editorial o como directores de colección». Está lejos aún este momento, y también la formulación de esta frase, pero está ya en su práctica como «catalizador» de «una especie de colectivo intelectual que inspira, recomienda, escribe y traduce los libros posteriormente publicados».

Los altercados en censura fueron constantes y las relaciones exasperantes, aunque Pradera se resigne pragmáticamente a aceptar supresiones «de importancia secundaria» para los 500 o 1.000 ejemplares que puedan venderse en España de los títulos de FCE: «No hay el menor desdoro en sumarse a esos regateos» y los padecen el resto de los editores, cuenta en una de esas cartas a Orfila que «me salen casi tan largas como los memoriales de los arbitristas». Las horas interminables de negociación se suceden en el despacho de Carlos Robles Piquer o de sus auxiliares, como Faustino Sánchez Marín, *el enano*. Con él regatean como trileros los pequeños detalles de multitud de títulos no autorizados primero, autorizados con condiciones después y, a veces, restringidamente tolerados para una determinada lista de nombres (no más de 50, aunque para algún título puedan llegar a 200). La lista de autorizados habrá de estar en la sucursal de Menéndez Pelayo a disposición del ministerio. Aunque no es necesario entregarla en las oficinas de censura, sí lo es estar prevenido para cualquier forma de castigo o de prohibición improvisada o premeditada. Ya saben todos también que la apertura prometida por el nuevo ministro de Información desde julio de 1962, Manuel Fraga Iribarne, es solo propaganda y poco más. La «pequeña caza de brujas» a que los someten es una «provocación organizada para que el Fondo

desistiera de editar en España». Nada alivia esa presión y alcanza una obscena lubricidad al suspender a Alfonso Reyes y Luis Cernuda, a Manuel Altolaguirre, Carlos Fuentes y desde luego a Juan Rulfo, a Octavio Paz pero también a Benedetto Croce, Jesús Silva Herzog, Bertrand Russell, la historia del pensamiento socialista de Cole y seguirán *para siempre* denegadas las novelas de Max Aub.

El libro que mejor avanza en la sede de Madrid, y el único que publicará Pradera bajo su responsabilidad como gerente de FCE entre 1963 y 1967, será una antología de Miguel de Unamuno. Estuvo negociadísima con censura porque en ella intervienen personajes problemáticos, desde Aranguren como prologuista hasta José Agustín Goytisolo como antólogo lírico, además del portadista, Vicente Rojo, y la asesoría de Dionisio Ridruejo para los versos. Pero con seguridad «la asociación del nombre de Aranguren con la *Antología* resultaría muy beneficiosa: mercantilmente, en cuanto que en España Aranguren se ha convertido en un autor relativamente comercial; y culturalmente, en cuanto que el eventual prologuista figura en lo que analógicamente cabría denominar la “izquierda unamuniana”». Existe hoy una «corriente interpretativa que se esfuerza en resaltar la vena irracional –a mi juicio muy profunda– del profesor vasco». Sin embargo, «particularmente le diré que las nuevas generaciones españolas que se esfuerzan en asumir un pensamiento racional adoptan, quizá en forma excesivamente reactiva, una actitud más bien crítica con respecto al legado de Unamuno y de Ortega» con el fin de privilegiar «de entre los hombres de la preguerra a D. Antonio Machado». Pradera sabe bien qué significa Machado en este momento como icono de la resistencia antifranquista de izquierdas porque su magisterio excede en mucho los versos del poeta para ser, en realidad, el estandarte de la lucha por las libertades contra la dictadura. Tanto sus poemas como las prosas de Juan de Mairena han estado en los despachos, las oficinas y los dormitorios de los nuevos lectores como fuente de inspiración y pasión civil.

Ortega ha sido siempre otra cosa, menos fiable que Machado y más tornasoladamente útil al fascismo ideológico: al fin y al cabo, «una lectura parafascista, ¿no?», como habrá de decirle en 1972 a Maravall ante el magnetófono. Pese a ello, tiene sentido activar, a la altura de abril de 1964, diez años después de su muerte, una antología del pensamiento de Ortega que no llegará a prosperar. Se desentiende de ella Paulino Garagorri, apremiado precisamente por la resurrección de *Revista de Occidente*. Ha sido por fin autorizada desde el nombramiento de Manuel Fraga Iribarne a condición de revisar personalmente los números de la revista, poblados de exiliados republicanos, liberales remozados y exfalangistas en tránsito hacia el antifranquismo.

Como a Aranguren «le resulta más difícil dictaminar sobre el verso que sobre la prosa de Unamuno», Pradera ha acordado con él «encomendar a Dionisio Ridruejo la selección» poética. Conviene sin embargo puntualizar las cosas de nuevo porque es un encargo delicado, hace años que el nombre de Ridruejo está prohibido en la prensa y sus libros no pueden anunciarse tampoco. Su figura es peligrosa desde la aparición en Losada en 1961 del análisis más meditado y corrosivo que existe sobre el régimen franquista y sus causas, *Escrito en España*. Por eso «el nombre de Ridruejo solo figuraría en el caso de que Vds. explícitamente lo consideraran conveniente; vamos a pedirle colaboración como “técnico” y en el plano amistoso». Pero si el Fondo de México lo aceptase, «puede hacerse constar su intervención, desde luego *gratis et amore*». Sin duda Pradera está al tanto de que las precarias economías de Ridruejo se compensan con una retribución más o menos regular por trabajos editoriales encargados por Jesús Polanco y Pancho Pérez González en Taurus. Al final, el antólogo lírico para Unamuno será José Agustín Goytisolo, otro veterano amigo de Pradera en Barcelona, y habrá que acudir de emergencia a los

auxilios del crítico José Ramón Marra-López para que redacte un apéndice bibliográfico, tal y como ha sugerido Orfila con buen criterio.

Otras actividades parecen pura fantasía pero quizá acaben arraigando sorprendentemente en el mercado español: en FCE el impulso a la literatura hispanoamericana se da a través de autores como Mariano Azuela, Juan Rulfo o Carlos Fuentes, pero también por la convergencia con los planes de Seix Barral. Pradera ha sabido «del propósito que tienen de llevar a cabo una pequeña campaña de lanzamiento de la novela mexicana en función, claro está, de los libros editados por [Joaquín] Díez-Canedo», que acaba de fundar en México la editorial Joaquín Mortiz en colaboración con la gente de Seix Barral y de Jaime Salinas en particular. Pradera cree que «es una feliz coincidencia y que es posible una colaboración –paralela– entre su esfuerzo y el que podamos realizar», entre otras cosas porque «realmente quienes más tenemos que ganar somos nosotros». Dispondrán, de entrada, «de buenas colaboraciones tanto entre críticos de libros – como Castellet como entre revistas –*Índice*, *Ínsula*, quizá *La Estafeta [literaria]* y entre los novelistas más jóvenes –Hortelano, López Salinas, [seguramente Luis] Goytisolo, Ferrer, Caballero Bonald– alineados en el realismo». En el fondo es la manera de atraer hacia Madrid «el arranque de la campaña de promoción» porque a Pradera le «parece dudoso que pueda partir» de Barcelona. También confía en que la publicidad vaya entrando con cuidado, por ejemplo en el semanario *Triunfo*, cuando está ya en manos de otro rojo, José Ángel Ezcurra, y ha dejado de ser solo un boletín de *celebrities* cinematográficas de la época. Tira cien mil ejemplares desde que «la ha tomado en sus manos una importante empresa de publicidad, que aspira a convertirla en el *Paris-Match* español», cuenta días después de reincorporarse al trabajo tras el arresto domiciliario, en enero de 1964.

Pronto algunas cosas empiezan a rodar mejor, con Rulfo ya autorizado y, con restricciones, también las dos novelas de Carlos Fuentes, que además visitará España. Desde México, Manuel Andújar asegura a Pradera que viaja a Madrid con el propósito de «entablar un vivo diálogo con los escritores de mayor enjundia y personalidad». Le informa discretamente también, como responsable de marketing, de que Fuentes resulta ser, «además de novelista extraordinario», hombre «de gran simpatía y ágil talento y, para redondear la oportunidad, sabe que en el mundo de hoy la discusión es decisiva». Con su «inteligencia y cordialidad», todo parece «valiosísimo» para poder «organizar una estupenda propaganda de las obras de Fuentes editadas por el Fondo (y Ud. entiende el subrayado confidencial que estas palabras implican)». Para entonces se trata sobre todo de promover «*La región más transparente*, su primera novela, y *La muerte de Artemio Cruz*, que tenemos en existencia».

De viaje por Europa en febrero de 1965, Orfila recalca en Barcelona tras disfrutar felicísimo de la recepción que le ha dedicado unos días atrás el Instituto de Altos Estudios para América Latina de la Sorbona en París, bajo la dirección de Fernand Braudel (autor de FCE). El viaje relámpago incluye una larguísima tarde en casa de J. M. Castellet –cuenta Orfila por carta a la sede del FCE en México– junto con una serie de editores que aglutina la red cultural de la izquierda nueva y el catalanismo burgués que resucita de las cenizas con nuevo empuje: están fundadores de Edicions 62 como Max Cahner, recién regresado de una expulsión de España, y el mismo Castellet (su director editorial hace pocos meses); el economista filosocialista Fabián Estapé, bien conectado con el poder económico del Estado; el poeta José Agustín Goytisolo como cómplice socialista; viejos amigos como Manuel Sacristán, miembro ahora de la dirección del PSUC y del PCE, y profesores significados por su liberalismo como Ángel Latorre y José Luis Sureda, y aún «dos o tres personas más». Saldrá Orfila enseguida hacia Madrid donde «pude iniciar con Javier la

conversación interminable que hasta ahora seguimos y en la que continuaremos hasta las 2 de la mañana en que parto para Buenos Aires». De ahí sale el acuerdo de compartir distribuidor, Ifach, con la recién fundada Edicions 62 para una selección del catálogo de FCE en Cataluña y Baleares, además de promover formas de publicidad conjuntas con editoriales afines de Madrid y Barcelona.

Las cosas de Sánchez Ferlosio siguen por su cuenta, como siempre. Ya lo conoce Manuel Andújar, «tanto personalmente como por su obra», explica Pradera, y ahora les ofrece «una traducción que ha realizado por su cuenta –por gusto– de *Les Enfants sauvages*», aparecida en Francia en 1964 y obra de Lucien Malson. El conjunto incluye «un escrito inicial de la historia de los cincuenta y tantos niños salvajes de los que hay constancia» y «dos textos excepcionales de un pedagogo de comienzos del XIX que cuenta sus experiencias de reeducación de uno de esos niños». En opinión de Sánchez Ferlosio, cuenta Pradera a Andújar, «este segundo texto es excepcional, tanto literariamente como documento pedagógico». El desertor de la novela tras el éxito perdurable de *El Jarama*, el ensayista obsesivo y secreto lingüista «se ofrecería a hacer un estudio introductorio» de una obra única. El proyecto despierta la curiosidad de Orfila, que tratará de darle cuanto antes «alguna respuesta definitiva», aunque Pradera acabaría llevándose el proyecto a Alianza en 1973.

Aunque Luis Ángel Rojo no acaba de implicarse en el libro que le propone Pradera, su figura ha de ser «altamente provechosa» en cuanto miembro del Servicio de Estudios del Ministerio de Comercio (aún no dirige el Servicio de Estudios del Banco de España: lo hará a partir de 1971, con la incorporación de jóvenes socialistas como Miguel Boyer y Carlos Solchaga). A Pradera se le ha ocurrido también convocar un premio para tesis doctorales en las facultades de Económicas de Madrid y Barcelona, con Luis Ángel Rojo como hombre de confianza, aunque no sea catedrático todavía. Pero es que precisamente «no quiere serlo en un lugar distinto de donde reside» para «evitar el “guadalajarismo”, o sea, el absentismo habitual, de manera que podría ser el hombre de FCE en el jurado», constituido además por José Luis Sampedro, Enrique Fuentes Quintana y Luis García de Valdeavellano. Estapé es el auténtico hombre de confianza en Barcelona, y en el mismo julio de 1965 Pradera tiene ya un candidato firme para el premio, Gonzalo Anes.

Cuando en Fondo hablan, por cierto, de un éxito de ventas rotundo, como en los nueve días de la Feria de San Sebastián, hablan de *Los condenados de la tierra* de Frantz Fanon, con 53 ejemplares, seguido «a corta cabeza», dice Pradera, por *Pedro Páramo* con 52: «En la excelente salida del Rulfo ha influido la eficaz recomendación de los empleados del stand y la gran reproducción fotográfica de la crítica de Tovar, expuesta en un lugar estratégico de la caseta.» Quizá el Fondo no está revolucionando la red de librerías como ha logrado hacer Feltrinelli en Italia, pero sí imaginan nuevas estrategias comerciales. Pese a todo, y a mucha distancia, se vendieron «entre 20 y 30 ejemplares» de *Historia y enajenación* de André Gorz o de los relatos de los mayas guatemaltecos, el *Popol-Vuh*. «Por lo demás», continúa Pradera, «se vendieron gran cantidad de títulos de Breviarios y [la Colección] Popular, por debajo de 10 ejemplares. La *Antología* de Unamuno no ha tenido el éxito que esperábamos, a pesar del “factor regional”. En cuanto al resto del Catálogo, se vendieron más de 10 ejemplares de *La economía política del crecimiento* de Baran, *La élite del poder* de Mills, la *Teoría del desarrollo capitalista* de Sweezy, *Los partidos políticos* de Maurice Duverger, y *Ética y psicoanálisis* de Erich Fromm.»

La biblioteca del joven de izquierdas y antifranquista de veintitantos años está ahí metida en miniatura, cuando todavía no existe una oferta librera de semejante envergadura y oportunidad en

ningún otro sello, aunque pululen y empiecen a intentarlo editores muy vulnerables a las prácticas represivas del régimen. Jorge Herralde sigue dándole vueltas a algún proyecto que no acaba de salir; Ciencia Nueva está en marcha pero será sabotada desde el primer momento, entre otras cosas porque es creación de los comunistas madrileños Jaime Ballesteros, Jesús Munárriz o Lourdes Ortiz (que además han estampado como logo de la editorial el gallo rojo legendario de Chicho Sánchez Ferlosio); Ediciones de Cultura Popular empieza por entonces también y acabará enseguida pese a su calidad intelectual y el respaldo de jóvenes tan valiosos como Vázquez Montalbán, Francesc de Carreras o Elías Díaz.

Los riesgos hay que adivinarlos antes de que lleguen los castigos y en México acaban de incurrir en uno imprevisto. Ha corrido de inmediato y de forma alarmante la reproducción parcial en la revista de FCE, *Gaceta*, de un artículo de Laín Entralgo aparecido en *Mañana*. Es una publicación «cuya circulación está severamente prohibida», se edita en París (bajo la dirección de Julián Gorkin) y se fabrica a medias en España (bajo la dirección de Ridruejo). Robles Piquer ha protestado formalmente ante Pradera por semejante tropelía, que se suma a la declaración que la misma revista recoge del Comité Ejecutivo del Congreso por la Libertad de la Cultura en apoyo a los cinco catedráticos expulsados de la universidad este verano de 1965: «Lo ocurrido puede pasar una vez, pero no ocurrirá dos», sentencia Robles Piquer, sin duda con las relaciones de nuevo muy tensas. Tanto Pradera como la resistencia al completo acaban de enterarse de la «inicua medida» dictada por el consejo de ministros para promover, según cuenta, la «expulsión de la universidad, mediante expediente administrativo, de los profesores López-Aranguren, Tierno Galván y García Calvo, y el apartamiento temporal de la cátedra, por el mismo expediente, de los señores Aguilar Navarro y Montero Díaz». Y era justamente eso lo que podía leerse en el número de septiembre de 1965 de la misma *Mañana* que reciben por correo postal tanto Pradera como una sustancial lista de liberales y ridruejistas del entorno de *Revista de Occidente*, desde Jesús Polanco hasta Juan Benet.

De inmediato activa Pradera los mecanismos de auxilio a los represaliados. Acelera con Tierno y Aranguren dos encargos ya apalabrados –una introducción a la política y otra a la ética–. Como prudentemente pronostica Pradera, la medida contra los profesores «no autoriza a ser demasiado optimistas con respecto al curso futuro de la liberalización» o, más expresamente todavía, ya a 8 de septiembre de 1965, confirma la imposibilidad legal de viajar con los libros de la editorial a la Feria de Frankfurt: «Desgraciadamente sigo en la misma situación de “indocumentado” y sin pasaporte.» Le cuenta a Orfila que «la carta que Vd. tan amablemente escribió a Fraga no dio resultado». Un empleado del ministerio, «al cabo del tiempo, me respondió que la “recomendación” del Ministro no había sido tenida en cuenta (!)», y el signo de admiración es suyo. En todo caso, va a «intentar una vez más –no sé ya el número que hace– conseguir el pasaporte. El momento, ciertamente, no es bueno. La medida punitiva –no hay ni un gramo de “medida preventiva” en la decisión– de retirar el pasaporte se está generalizando hasta extremos inverosímiles». Se acaba de enterar de que diez días atrás les retiraron también el pasaporte «mediante el procedimiento de no renovarlo» a Pablo Serrano y Juana Francés, ambos implicados en un homenaje a Antonio Machado saboteado por la Guardia Civil. Y «hace cosa de tres meses tomaron la misma medida con Carlos Barral, para impedirle asistir a la concesión del Premio Formentor, del que es fundador y jurado». Solo después de «grandes forcejeos lo ha vuelto a conseguir», aunque siguen sin él «los cinco catedráticos represaliados».

Agustín García Calvo ha acudido sin perder tiempo a Pradera en busca de soluciones de emergencia. Pradera le cuenta a Orfila que es «el tercero en desgracia» (Mariano Aguilar y

Santiago Montero Díaz no fueron expulsados sino sancionados con dos años de suspensión). Acude para «pedir traducciones ya que se ha quedado literalmente en la calle, con lo puesto, con mujer y cuatro hijos. Le he puesto ya en contacto con colegas de aquí, que le proporcionarán trabajo». En ello confía Pradera, que aclara enseguida preventivamente: «No le citaré a Vd. este caso si se tratara solo de un caso de “beneficencia” o de ayuda: García Calvo es un intelectual de talla realmente excepcional.» Entre otros méritos, desgrana Pradera, le «ganó el año pasado la Cátedra de Latín de Madrid, con un Tribunal adverso, al Sr. [Antonio] Fontán, rector de la Universidad de Pamplona, del Opus Dei, y alto dirigente de esta organización», además de inminente fundador del diario *Madrid*. Pero junto a semejante hazaña objetiva identifica otras igual de admirables porque «traduce latín y griego, además de alemán, inglés, francés e italiano. Es una persona muy joven —debe tener unos 38 años— y, repito, de unas dotes intelectuales punto menos que excepcionales. Aunque creo que los colegas españoles le proporcionarán sin duda traducciones, agradecería sin duda que se le pudiera conseguir cosas en México, nuestras o de otra editorial».

Pradera da por descontado que pueda preparar «alguna edición de clásicos latinos o griegos, bien fuera entera o como antología». Poco después cuaja la idea «de una antología de *Utopías de la Antigüedad*, que completarán las del malogrado Eugenio Ímaz [se había suicidado quince años atrás, en 1951], el presunto antólogo y, por lo demás, “experto” en esta materia: quiero decir que, como en el caso de Ímaz, le atrae de siempre el tema». Y manda Pradera un esbozo de índice que «es un apunte totalmente provisional, por supuesto». Cree en el proyecto porque «la idea es editorialmente bonita y útil para una agrupación temática de las *Utopías del Renacimiento*». Pero, como siempre y por si hacía falta recordar su sentido de la edición cultural como empresa, «no estoy seguro de su comercialidad».

La desmovilización emocional y la desesperanza ante la marcha triunfal del franquismo dejó únicamente el camino de una profesionalización cultural erosionante, de desgaste y paciencia —«paciencia y barajar», solía repetir Pradera ante las adversidades—, de obstinación y renuncia en quienes habían alcanzado la primera madurez. En muy poco tiempo iban a comprobar el aceleramiento radicalizado y la exasperación revolucionaria que aportaban nuevas generaciones incorporadas a la lucha cuando ellos, o la mayoría de ellos —de Ferlosio a Benet, de Barral a García Hortelano o Jaime Gil de Biedma—, habían perdido toda esperanza sobre el final del franquismo, resignadamente escépticos. Hoy la hegemonía del PCE y la izquierda misma entran en una nueva fase crítica e imprevista, mixta y heterogénea. Desde el catolicismo autocrítico que aborrece el nacionalcatolicismo de clase hasta la tentativa armada, el espectro de la izquierda se nutre de ideas y planes que no estuvieron activados entre las minorías intelectuales y universitarias de la década anterior.

La confluencia de movimientos internacionales, la renovación biológica, el reconocimiento de las nuevas condiciones del interior y la pluralidad de acciones incipientes y ultraminoritarias prefiguran un futuro distinto sin que quepa definirlo programáticamente. La alianza de política y literatura va a seguir rindiendo de forma productiva pero ya no de acuerdo con los cánones o las poéticas prescritas por la política. O dicho de otro modo, la pluralidad de las lecturas y las corrientes intelectuales someterá a la política, y no al revés. El dogmatismo estalinista habrá de empezar a convivir con una movilización atomizada, con disidencias sucesivas y simultáneas, pero también con nuevas formas de colaboración que transmiten la conciencia de una causa común. No había sido así hasta los primeros años sesenta: la morfología de la resistencia

antifranquista cambia en este instante. El monopolio que había ejercido el PCE va a empezar a cuartearse.

3. DE LA RESISTENCIA A LA REVOLUCIÓN

La desafección profunda de Pradera con FCE arranca ahora, después de un fin de año a la vez políticamente estresante y profesionalmente estimulante. La injerencia del Gobierno de México en la línea editorial del Fondo se confirma a partir de noviembre de 1965, pero ni siquiera Orfila podía esperar que su cese político sería tan fulminante. El *Excelsior* del día 9 de noviembre de 1965 anunciaba la destitución en un rincón de su primera página, y pocos días después informaba de la creación de su nueva aventura editorial, Siglo XXI, auxiliado por un puñado de colaboradores, muchos de ellos procedentes de FCE. Desde entonces, la peripecia de Pradera en FCE se vio jalonada por crecientes enfrentamientos con la nueva dirección conservadora. Se siente más fuera que dentro porque para todos es obvia la motivación política del despido. Sabe también sin duda que la fundación de Siglo XXI no es una bravata de despecho de Orfila, sino un proyecto solvente en marcha y defendido por nombres de primer nivel de la nueva cultura progresista de América Latina. Años después, Pradera no dudó en hablar de la «defenestración» de Orfila como «incruento precedente de la persecución de intelectuales y estudiantes que culminó con la matanza de Tlatelolco» de octubre de 1968.

Cuando han echado a Orfila del FCE, tampoco está ya Pradera desde mediados de año en el PCE. Había trascendido la noticia de la expulsión de Claudín, Federico Sánchez y Francesc Vicens en un *Mundo Obrero* de febrero de 1965, ratificada en abril por el mismo medio. Su desacato a la resolución se haría público a través de una «Puntualización» publicada en varios medios españoles fuera de España a finales de año. Se veían obligados a «continuar la lucha contra la dictadura» y en favor del socialismo desde «fuera de las filas del Partido», con la esperanza de que algún día «la mayoría cambie en el seno de este y esas medidas se rectifiquen». Pero de las buenas palabras pasan al repudio de una «campana denigratoria, calumniosa, contra militantes revolucionarios» por la simple razón de discrepar de la dirección. Reprueban ser presentados «como renegados, como gentes que se han convertido en apologistas de la oligarquía monopolista española, como individuos que han renunciado a la revolución» y hasta que han tratado de destruir el Partido «mediante una siniestra actividad fraccional». En documentos tanto de Carrillo como de Gregorio López Raimundo fechados en octubre de 1965 se rescatan incluso los típicos «epítetos estalinistas» para tratarlos de liquidadores del partido revolucionario y traidores al marxismo.

Ninguno de los tres, y creo que tampoco Pradera, se desdice de su comunismo ni reniega de su partido. Las verdaderas puntualizaciones son menos ideológicas que propiamente personales. Los análisis del PCE sobre la realidad española han incurrido en una «interpretación subjetivista, no científica, no marxista». Sus discrepancias aspiraban a debatir con los demás sobre «una nueva estrategia revolucionaria, adecuada a las nuevas contradicciones reales de la sociedad española». La obstrucción a la discusión en los órganos del Partido revela la supervivencia de las «deformaciones inculcadas» durante el «largo período estalinista», con la consiguiente incapacidad para aplicar «de manera autónoma el método marxista a la investigación» de la realidad en España y la «elaboración de su acción revolucionaria». Ninguno de los dos elementos propicia lo que de veras ha de ser el objetivo de la «renovación del PC»: la «necesaria reunificación de las fuerzas socialistas españolas y de la unidad de acción de la oposición». Por

eso la despedida de los tres en esa Puntualización de diciembre de 1965 es una declaración de lealtad al PCE –«lo seguimos considerando nuestro Partido»– y una ratificación en su comunismo abierto a cooperar con «todos los grupos y organizaciones obreras, con toda oposición antifranquista».

Las consecuencias inmediatas en Madrid son graves porque los intelectuales simpatizan más con Pradera y Claudín. El Partido han de refundarlo casi íntegramente dada la autodisolución en marcha de Ignacio Romero de Solís –que es ya el *Vinasio* familiar para los niños Máximo y Alejandro Pradera, me cuenta Xavier Folch– y Santiago Roldán, Sanz Hurtado, Alberto Saoner, etcétera. Faltaba poco para que Carrillo repitiese en una nueva reunión del Partido que los hijos de los burgueses «nos reprochan y no nos perdonan haberles hecho la guerra a sus padres», en congruencia con sus recelos contra los intelectuales no orgánicos y su desconfianza contra quienes se sumaron al partido sin proceder de la clase obrera. Es lo que sucedía con tantísimos de los más conocidos comunistas de la época, desde el propio Pradera hasta Pere Portabella, pasando por las cuotas estratosféricas que pagaba entonces una estrella cinematográfica como Paco Rabal.

Más difícil es mantener la estabilidad financiera de inventos como los *Cuadernos de Ruedo Ibérico*, que empiezan a publicarse en verano de 1965 en París. Allí ha acudido Pradera a una reunión con los promotores –Martínez, Claudín, Semprún–, en alguna medida como enlace o portavoz de aliados del proyecto en el interior o en el exilio como Eduardo Haro Tecglen, Eduardo García Rico, Juan Goytisolo, Manuel Castells, Francesc Vicens. Demasiados frentes abiertos hacen que Pradera demore y al final incumpla su compromiso de escribir para un número extraordinario sobre España. Tenía asignados dos artículos: uno corresponde a un «capítulo de tu libro» (dice José Martínez por carta, y sería sin duda *La mitología falangista*), mientras que el de la segunda parte debía ocuparse de la «Transformación cultural» de España, y tampoco llegó a mandarlo, pese a la insistencia del editor a finales de noviembre. Para entonces está ya proyectado incluso el cuarto número de la revista, pero de la reunión de agosto se deriva alguna consecuencia más. Si se confirma lo hablado en el verano, José Martínez supone que «también tú deberás opinar sobre lo que debe ser el plan editorial futuro». Mejor aún: «Si puedes, haznos algunas líneas sobre ello, o algunas proposiciones.» La carta va con copia a FC, Fernando Claudín, y FL, Faustino Lastra.

El definitivo final de la militancia había sido poco traumático para Pradera, soportable para Semprún y grave para Claudín. A los tres se les ha ido buena parte de los dos últimos años en la batalla por refundar el Partido de acuerdo con las nuevas posiciones que de forma seminal conjeturó Pradera en 1960: la revolución y el antifranquismo necesitaban otras bases de análisis, fundamentos más sólidos para la *praxis* transformadora y un ensanchamiento de las bases sociales movilizadas. Nadie podía excluir carburante para el futuro por discrepancias del presente. En buena medida, una frase que muchos atribuyen al Pradera de la madurez empezó a cuajar ahora: la discusión sobre el modo de producción asiático no va a arruinar una amistad, y menos dinamitar los puentes con cómplices ideológicamente discrepantes.

DOS DERROTAS DE 1965 Y UNA FARSA NAVIDEÑA

¿Y la fratría? Algo disminuida, seguramente, con Sánchez Ferlosio ya muy enrolado en su carrera ensimismada hacia la lingüística y la gramática, con Carmen Martín Gaité buscando auxilio amistoso y cálido en Juan Benet a través de una valiosa y a ratos dolorosa

correspondencia, con su hermano Víctor Pradera fuera de España también, como miembro de la carrera diplomática y cónsul ahora en Filadelfia, con Miguel Sánchez Mazas instalado en Ginebra desde hace años. Chicho se ha desengañado del comunismo en Albania (ha sido locutor de radio ahí un tiempo) y sigue como intérprete del *Cancionero de la resistencia española*, renegando de los «malditos socialistas vendidos al patrón» y feliz porque «hay una huelga en Asturias que ilumina España entera». Cada vez está más a la izquierda del PCE y «a favor de la lucha violenta porque veía que las otras no adelantaban mucho», le cuenta a Fernando Trueba con naturalidad en *Mientras el cuerpo aguante*. Su mujer, Ana Guardione, y Gabriela Sánchez Ferlosio habían montado una manifestación en la plaza del Sol para el 15 de mayo de 1962 tan concurrida que a unas cuantas las metieron durante un mes en la cárcel de mujeres de Ventas, con multas a nueve de ellas. En Sol habían estado también Carola Torres, mujer de J. M. Moreno Galván, o Gloria de Ros, mujer de Dionisio Ridruejo, sin que el PCE acabase de respaldar aquel raro invento. Los niños Máximo y Alejandro crecen mientras su padre se obstina a la vez en tantos frentes que puede acabar fuera de sí, o en el papel de otro. Eso sucede de hecho en las navidades de este 1965, cuando la fratría y la familia misma se reúnen en la finca de Coria, en Extremadura, seguramente sin Liliana Ferlosio ni Rafael Sánchez Mazas, instalado él en el Gran Hotel Velázquez, cerca ya de morir en octubre de 1966.

Hasta los fríos de Coria (o hasta la finca de Domingué o la espaciosa casa de las Martín Gaité en El Boalo) se llevaban los disfraces, las encerronas burlonas o el histrionismo montaraz para rechifla de los niños y distensión de los mayores. Eso incluye a Pradera exhibiendo con descaro sus dotes de vocalista paródico del amaneramiento de estrellas de entonces como Jorge Negrete o Lucho Gatica, quizá para protegerse con la comicidad de la herida sentimental invencible de este o aquel bolero. A Máximo Pradera le parece que resume la doctrina de su padre sobre la multicausalidad de los fenómenos complejos: una buena canción mal interpretada puede llevar una dosis de verdad emocional imprevista. A Coria también llegaba Juan Benet con su mujer, Nuria Jordana, para solaz de los hijos de todos, espectadores potenciales y pacientes de sus gamberradas teatrales. El histrión desplegaba la servilleta a modo de telón al terminar una perorata ingeniosa y burlona, antes o después de que hubiese un griterío de mil demonios entre Gabriela y Javier, dados a grandes cencerradas y apasionadas reconciliaciones que podían tardar más o menos, pero que partían sistemáticamente de Gabriela ante un imperturbable, correoso y mudo Pradera. Ana Martín Gaité recuerda alguna de esas borrascas con agridulce amargura: se la llevó Pradera a pasear durante todo el día por Plasencia para sosegar las iras de una bronca descomunal de la pareja y no volver a Coria hasta que todos, o al menos Gabriela, durmiesen ya. El ciclo de reconciliaciones y cóleras feroces en dos temperamentos fuertes, ocurrentes y venenosos hacía temblar el misterio, incluso en Coria, que no era precisamente escenario de paz monacal y música callada.

La debilidad por el teatro era contagiosa y la brillantez también. En una mala época de Romero de Solís, se las ingeniaron para hacerlo llegar hasta la finca de Domingué y escenificar allí un grotesco auto dramático de risa que no hizo la menor gracia a su destinatario, mientras Pradera hacía lo que solía hacer en casa de Benet, el payaso, disfrazado esta vez de puta tirada y Gabriela Sánchez Ferlosio de torero de gigantes genitales. Algo hay en esas farsas esperpénticas, en ese repertorio de histrionismos competitivos que apunta a una ciclotimia cierta en Pradera, una suerte de basculación imprevisible entre el arrebatado jocoso y bullanguero, también agresivo y sarcástico, y el ensimismamiento melancólico y apático o franciscano. Por eso Jorge Semprún le llamaba el *ciclotímico vasco*. Todavía es fiesta y todavía no anidan los rencores y las malquerencias en este

grupo compacto ahora, fiel y constante, habitual de unas cuantas casas con apellido artístico y burgués.

Pero el experto en teatro es ahora Benet y lo será después Gabriela Sánchez Ferlosio, mientras Javier daba rienda suelta tanto a su habilidad para imitar las voces y los gestos de los demás como a su afición a cantar, casi siempre canciones vascas, a menudo aprendidas en la infancia y sin hacerlo del todo mal. Apenas dos años antes de esta Navidad de 1965, en el palacio de Fernando Chueca en Munárriz Juan Benet había representado otra farsa breve, *El entremés académico*, para ridiculizar al sabio incapaz de escribir su discurso de ingreso en la RAE. El vitalismo hedonista y escandaloso, la felicidad explosiva y frívola de todos se filtra de mil maneras, hoy invisibilizadas detrás de los ternos elegantes, los gabanes de grandes vuelos y el señorío sobrevenido de figurones totémicos. Pero fueron en buena medida unos silvestres que solo a ratos es posible enfocar atravesando el tiempo o en los rastros textuales de algunos de sus libros de entonces. Es Dominguín quien en unos fotogramas rodados por Gabriela Sánchez Ferlosio maltrata las carnes de Pradera, recién despertado de la siesta, legañoso y paciente, poco antes de que todos acudan a lanzar una cometa con los niños, incluida la hija de Carmen y Rafael, la Torci, en El Boalo, o poco después de que Pradera se líe sin piedad a patadas contra los tobillos de Ignacio Romero de Solís en busca de una pelota. En esa pieza cómica de Benet también las frivolidades carcomen la solemnidad y la petulancia de las instituciones. El señor académico acude a su sirvienta, la Colores, para que localice a un negro que se encargue del discurso de ingreso: aunque «amigo soy de Aranguren / dormido tengo ya el seso, / pero en lo que toca al sexo / tan malo está como el numen». La Colores encuentra, en efecto, al negro porque entiende literalmente que le pide lo que ella no tiene «y el negro lo tiene a ultranza». Al final escribe la Colores el discurso mientras el negro y el académico hacen mutis discretamente hacia otra habitación.

Esta vez la farsa en casa de los Ferlosio es menos goliardesca pero no menos cómica y algo envenenada. Benet ha traído una «comedia en dos actos, especialmente escrita para la Navidad de Coria de 1965, y al gusto castellano». Lleva sobre todo la mejor clave humorística de Benet sin los desenfrenos especulativos de su narrativa y con el punto de chocarrería guasona y golfa. Eran las virtudes que divertían desde siempre a la familia con payasadas continuas, trasladadas ahora a un elenco de actores que pone la piel de gallina. Todos los adultos reunidos tendrán su papel, incluido *el Largo* que ya no es *el Largo* sino el cura don Gregorio Pradera (no hubo manera, ni en el teatro ni en la clandestinidad comunista, de apearse a Pradera de Pradera), Chicho será Jacinto, Carmen Martín Gaité será Elvira, Gabriela será la prima Pilar, Benet será Eduardo Torrens (según Elvira, «frívolo, amanerado e hipócrita», y, según el padre Pradera, «progresista desenfrenado»). Por supuesto, el protagonista absoluto de la comedia es Rafael Sánchez Ferlosio en el papel del Doctor Calandre.

El cuadro satírico *El preparado esencial* tiene algo de psicodrama en torno al sabio despistado Calandre, dominado por sus obsesiones y abstraído de la realidad. Apenas repara en la aparición de un muchacho herido y huido de Cartagena en este «agitado otoño» de 1873 en que sucede la obra, bajo la presidencia de Nicolás Salmerón. El fin es divertirse sobre todo a costa de Sánchez Ferlosio, sumergido en un «gabinete de estudio» atestado de libros, papeles, grabados, frascos con animales en formol, «lagartos, sabandijas, culebras y algún feto humano», cajas de mariposas, cartas de la bóveda celeste, un telescopio, un atril con hojas manuscritas «y un montón de libros abiertos y que han sido objeto de recientes consultas». El Dr. Calandre está esperando impaciente la llegada de un «volumen gigantesco» encargado a su amigo Torrens y titulado *Enciclopedia de*

Arago. Nada saca a Calandre de sus cavilaciones, víctima de tantas «noches de insomnio, esas noches que la investigación» le roba al día. «Así discurre su vida: cuanto más solo, más perplejo», cada día «más lejos de comprender la verdad que se halla debajo de todas las cosas», según dice Carmen Martín Gaité, precisamente, pero en el papel de hermana de Calandre, Elvira.

Ruidosa o silenciosamente todos están riéndose de su abstracción crónica –le hacen creer que el muchacho perseguido es hijo suyo–, sumido en sus altos estudios eclesiásticos en torno a las estrellas del cielo y la «procesión de los astros». El Padre Pradera, presbítero fisgón, reaccionario y bebedor, es el auténtico padre de la criatura y quien descubre secretos del Doctor en unas «confesiones de juventud» tan ferlosianas como la convicción de que «solo en la ciencia encuentro un consuelo y prometo dedicar a ella mi vida y mi hacienda». A Chicho seguro que le sentaba muy bien el momento de ponderar las mentiras que se urden en esa casa y «en el seno de una burguesía podrida hasta los huesos», mientras Calandre se tortura e interroga: «¿Me negaré como siempre a enfrentarme con la dura realidad de la vida para refugiarme en el gélido y pavoroso templo de la ciencia positiva o, por el contrario, me he de encarar con los actos fallidos, los errores de juventud y las enfermedades hereditarias?»

Convencen a Calandre de que Jacinto es clavadito a él –mientras estallan las carcajadas–, con su «nariz roma» y la «voz sosegada y profunda», que no son exactamente propiedades de Sánchez Ferlosio, de levísima voz atiplada y notorio narigón. Haciéndose el loco deduce que el padre real del niño es el cura, aunque el muchacho Jacinto rechaza adoptar su apellido. Jacinto Pradera «es demasiado vegetal» y, sobre todo, «si salgo a la calle con ese nombre la policía me prende», como al Pradera real le han caído tres detenciones, la última apenas dos años atrás. En el enredo vodevilesco las cosas acaban mal para los urdidores Elvira y el padre Pradera tras haber trasegado sin respiro copitas de licor una tras otra («Digo yo si será necesario abrir otra botella»). Y encima, el libro de Torrens para Calandre no ha servido de nada, mientras Elvira se equivoca al creer que Calandre iba a dejar su herencia a una academia de ciencias, que no es más que una «tertulia de badulaques», y no a ella, «merecedora de esa manda». Ha sido ella, dice Elvira, quien lo ha acompañado en su soledad, «yo que todo lo he sacrificado para hacer más llevaderas tus horas de inquietud científica».

Algo del drama real de la pareja se masca atrevidamente en esta comedia navideña de Benet. El Sánchez Ferlosio real llevaba enfrascado desde 1962 en una diatriba contra la superstición, la pereza intelectual y la impostura pedagógica. Es la época en que Víctor Sánchez de Zavala frecuenta la casa compartida, Rafael duerme de día y discurre de noche, y Carmen se siente (todavía) «imbuida de excepcionalidad y en nombre de eso lo aguantaba todo». Su hija Marta se escolariza en casa y lejos de la domesticación educativa institucional, mientras ella se sumerge entre legajos históricos en el siglo XVIII, y busca y encuentra un insuficiente interlocutor real en el mismo Benet, a quien ha de escribir incluso «casi nada más que para pedirte que lo hagas tú», cuando las ediciones de Revista de Occidente han publicado el conjunto seminal de ensayos *La inspiración y el estilo*.

Todavía las risas debieron ser terapéuticas ese fin de año de 1965 para mitigar desazones más complicadas, en el ámbito privado, en el público, en el político y hasta en el profesional. Sánchez Ferlosio está en ruta hacia los «millares de noches y cientos de cuadernos» sobre gramática en una neurosis obsesivo-compulsiva químicamente auxiliada por las anfetaminas. Por entonces también Juan Benet ha buscado la ocasión propicia para que Pradera le presente a Carlos Castilla del Pino. Su mujer Nuria Jordana ha tenido un intento serio de suicidio y Benet busca auxilio en el psiquiatra oficial de los rojos, como hará Josep Maria Castellet muy poco después (por otras

causas). Tampoco la relación de Pradera con Gabriela lleva entonces un rumbo demasiado estable, aunque aún salva la evidente tensión el explosivo humor que comparten.

EN TRÁNSITO

Mientras se quita y se pone el disfraz de actor en la Navidad de 1965 en casa de Sánchez Ferlosio, entre copita y copita de cura, Pradera habrá meditado en familia –con Rafael y Martín Gaité, con Gabriela, con Chicho, con Juan Benet y Nuria Jordana– las condiciones que el futuro le ofrece de forma inmediata. Hay dos planes a lo grande en marcha: uno es la naciente Alianza Editorial y el otro es más a lo grande todavía, la nueva empresa de Arnaldo Orfila en México, Siglo XXI. Él, en Madrid, siente decaer desde el mismo enero de 1966, a la vuelta de las vacaciones en Coria, el esfuerzo y las energías destinadas a FCE tras la expulsión de su inspirador real. Colabora con cuanto joven antifranquista se le ponga por delante, como acaba de hacer con los muchachos de Ciencia Nueva, quizá porque ahora ya ni siquiera el Partido es atadura y disciplina, aunque sigan siendo todos, incluido él, tan comunistas como antifranquistas: «Su casa siguió siendo», cuenta de primera mano Josefina Gómez Mendoza, «lugar de encuentro, de instrucción, cita obligada; y él continuó distribuyendo juego entre los intelectuales antifranquistas.»

De lo que estoy casi seguro es de que Pradera no faltó al homenaje de desagravio tributado a Aranguren el 11 de enero de 1966 en el entorno de Ridruejo, con habituales bien conocidos como Pablo Martí Zaro, gestor de todo en ese grupo; el editor de Arión, Fernando Baeza, o el crítico y responsable real de *Ínsula*, José Luis Cano. No habían empezado el curso académico en septiembre ni Aranguren ni los demás expulsados de la universidad. Tampoco lo empezó algún otro profesor relevante y prestigioso, como Manuel Sacristán, a quien no se le renovó el contrato, ni tampoco José María Valverde, que decidió entonces renunciar a su cátedra de Estética en Barcelona. Se despidió de su universidad y de su sueldo tras escribir en la pizarra del aula: «*Nulla aethetica sine etica*. Ergo: apaga y vámonos», como si dejase estampado en directo uno de sus nuevos poemas civiles. Si Aranguren no podía ser en Madrid catedrático de Ética, el católico y hasta entonces discreto Valverde no iba a ser catedrático de Estética en Barcelona (como Eloy Terrón renunció entonces a seguir como ayudante de la cátedra de Ética de Aranguren en la Universidad de Madrid).

La conquista de una nueva libertad lleva también dentro precozmente el aire de los nuevos tiempos, como si el escarmiento sobre las leyes de la acción política los hubiese preparado para otras formas de acción más letales e incisivas que las movilizaciones emotivas, testimoniales o aerostáticas. Incluso la indumentaria de Pradera ha ido acentuando el descuido, cada vez más contagiado del desaliño, las holguras y el desgarramiento al que le inclinaba su misma constitución vertical e interminable, como les va a suceder a otros flacos del período, como Castellet o el mismo Aranguren, a punto de perder el apresto del traje y la corbata a cambio de trapos informales, más aireados e indóciles: hippies.

Las discrepancias de Pradera con el FCE que ahora dirige Salvador Azuela son casi instantáneas, pero van visiblemente en aumento desde finales de 1965 y a lo largo de todo 1966. Posiblemente es ya Pradera quien está propiciando y hasta forzando su despido, porque tanto entonces como hoy no hay dudas sobre la motivación política del cese de Orfila. El escándalo causado en México por la publicación de *Los hijos de Sánchez* de Oscar Lewis había sido, de

acuerdo con Gustavo Sorá (y de acuerdo con Pradera), «la excusa para iniciar el proceso de destitución» con el fin de acabar con la deriva que había empezado desde la revolución de Cuba, hecha ya abiertamente campaña ideológica contra el «imperialismo yanqui» y la «colonización» intelectual de América Latina.

Orfila ha sido también en 1963 el editor en Fondo de la traducción de *Los condenados de la tierra* de Frantz Fanon. Otro subversivo editor francés, François Maspero, había publicado dos años atrás el libro de ese militante del Frente de Liberación Nacional de Argelia ya casi a título póstumo. El texto tendrá una larga vida durante los años sesenta y setenta; estuvo en manos de muchos jóvenes comprometidos con el Tercer Mundo y con cambiarlo desde «La violencia», que es el título del primer capítulo. Por eso lo manosean y discuten los aprendices de guerrillero bolivianos, ya en los años setenta, en la novela de José Andrés Rojo *Camino a Trinidad*. Su fortuna comercial en Occidente y en español tuvo directamente que ver con el extenso prólogo que escribió Jean-Paul Sartre en septiembre de 1961. La violencia era recurso legítimo contra la injusticia del capital y la restauración del orden: «Léanlo», dice Sartre, «porque les hará avergonzarse y la vergüenza, como ha dicho Marx, es un sentimiento revolucionario.» La violencia es necesaria porque «en los primeros momentos de la rebelión hay que matar», y así hubo que hacerlo en Cuba y en Argelia y así habrá que hacerlo algún día en Berlín, Milán o San Sebastián. Fanon se dirige a África, Asia y América Latina, pero Sartre se dirige a las juventudes de Europa para desengañarlas: «Nuestro humanismo» no es sino «una ideología mentirosa, la exquisita justificación de los privilegios», así que «realicemos todos juntos en todas partes el socialismo revolucionario». Es lo que leyeron todos cuando se sintieron comprometidos con la revolución, además de comprometerse con la literatura. Probablemente, Pradera también: la traducción de FCE estaba lista en 1963 y en San Sebastián será el título más vendido de su feria del libro.

Orfila encarnaba entonces, y con él el propio FCE, un frente político e intelectual situado en la izquierda revolucionaria antiestalinista y a la vez procubana, lo que significa una radicalización política que será creciente en América y en Europa durante esos años, con el punto álgido en el bienio 1967-1968. Seguramente la presión norteamericana sobre el Gobierno de México y sobre el FCE había crecido desde la traducción en 1961 de la obra de Charles Wright Mills *Escucha, yanqui. La revolución en Cuba*, fruto de su visita de cuatro meses a la isla en 1960 y de varias entrevistas con Fidel Castro, el Che Guevara, Carlos Franqui o Armando Hart. El despido el 7 de noviembre de 1965 sin previo aviso de Orfila, amigo personal de Fidel Castro y el Che Chevara, y habitual visitante de la isla fue —piensa Sorá— «una embestida» contra un editor por lo menos indeseable para los «estandartes de una moral nacional, occidental, cristiana».

A esas alturas el proyecto de Alianza está empezando a andar con información fresca de Pradera. Respalda a la nueva editorial con su presencia en el Consejo de Administración autores que ha buscado para FCE y muy próximos a él. Aunque todavía no esté integrado en el equipo directivo, el mismo cura Jesús Aguirre que ayudó a perder el miedo a algunos colegas del César Carlos para que firmaran en defensa de Julián Grimau dos años atrás es ya el director de una colección de pensamiento católico renovador en Taurus. Algunos de los fundadores de la editorial, sin embargo, no ven en él más que «una eficaz bomba de jabón» y un mal traductor de Walter Benjamin (como escribió Rafael Gutiérrez Girardot). Pero será una figura cada vez más influyente y malévol, vampírica y seductora, todavía con Aranguren como maestro y punto de referencia.

La pelea se sigue enredando, pero Pradera contraataca con otro pormenorizado informe sobre la

tipificación laboral de los empleados, incluido él, de acuerdo con la reglamentación nacional del trabajo en comercio. Comparece ahora casi por primera vez el alma de jurista que desde el principio identifican en Pradera tanto Clemente Auger como Matías Cortés: con la vocación de editor y analista político se perdió un «abogado de época», cree Cortés. Solo muchos años después será patente para el resto en sus infinitos análisis políticos, siempre paciente y pedagógico con las exigencias de lo jurídico.

Contra las apariencias de la propaganda en torno a la ley de prensa, sigue sin ver verosímil Pradera la venta de 300 ejemplares de *El capital*. «Todo el alboroto formado en torno a la ley de prensa ha quedado, para los importadores, absolutamente en nada, ya que el régimen de censura previa sigue siendo el mismo hasta en sus menores detalles.» Pero desde México le comunican que allí la noticia estrella en los periódicos es que la censura se ha acabado en España con la ley Fraga. La complicación no es pequeña, porque en realidad se ha recrudecido, al menos a mediados de mayo de 1966: «Lejos de desaparecer, parece como si se hubiera endurecido.» Al menos en el caso de FCE, porque «nos encontramos ahora con la sorpresa de que solo nos autorizan la importación de 300 ejemplares de Erich Fromm», en vez de «los 1.200 solicitados y ya despachados por Vds.», que se quedarán sin posible distribución.

Por no dejarlo todo en el aire de una sospecha, quizá vale la pena mencionar la opinión que merece la ley de prensa de 1966 a Dionisio Ridruejo y, por extensión, a Juan Benet. Además de ejercer ahora de dramaturgo cómico, brillante ingeniero, ensayista literario y novelista en ciernes –tiene inédita pero acabada *Volverás a Región* y se ha autoeditado los cuentos de *Nunca llegarás a nada*–, es tesorero del minúsculo partido liberal y socialdemócrata de Ridruejo y ha sido comisionado por él con embajadas políticas que van desde Julián Gorkin o Rodolfo Llopis en París a Juan de Borbón en Estoril o Josep Tarradellas en SaintMartin-le-Beau. De todo está al tanto Pradera, obviamente, porque desempeña funciones parecidas, y Benet ha escrito ya anónimamente en *Mañana*, que es de donde tomo un diagnóstico de Ridruejo sobre el fraude y la doblez moral de Fraga como demócrata tan inconsecuente como otro escudero del régimen, Emilio Romero, según los define Ridruejo en la revista.

Para alguien que ha renunciado ya a la indulgencia absolutoria de sus muchos pecados, el análisis de la nueva ley el 14 de abril de 1966 «es realmente descorazonador». Y si «la libertad de prensa va a ser utilizada “en sentido único”, para atacar desde la confortable e influyente tribuna de los únicos periódicos autorizados, a personas que no pueden defenderse y replicar con iguales medios, mejor sería continuar como antes...». Había adelantado Ridruejo su desconfianza ya en plena tramitación de la ley el año anterior porque «todo hace pensar» que «habrá de limitarse a un cambio de mecanismo o procedimiento en el sistema de controles». Y sin desdeñar que pueda abrirse ahí alguna brecha, quizá haya que empezar a preguntarse por el precio que va a costar: «¿Cuántos periódicos suspendidos, editoriales arruinadas, escritores procesados se puede permitir el Régimen español?» En la práctica, esa ley funcionó como un nuevo método de extorsión según el cual las responsabilidades punibles recaían sobre el atrevimiento transgresor de los editores.

Los seis folios y medio a un espacio que escribe ahora Pradera con sus discrepancias con Azuela y FCE son la primera versión de otro radical desacuerdo que llegará veinte años después, cuando Pradera abandone la dirección de Alianza en 1989 tras haber expuesto meticulosamente otra situación que desapruueba y contraviene su propia noción del oficio (y es también el antecedente remoto de su renuncia a seguir en el Consejo de Administración de Prisa, tan tarde como en 2000). Su dimisión ya solo ratifica lo que es un agudo desistimiento del gerente, a esas

alturas imagino que informado de los movimientos en FCE para buscarle sustituto desde marzo de 1967. Acabará siendo Ciriaco Tazón, cuando hace ya mucho que Pradera se ha vuelto un jefe de negociado sin las complicidades ni las libertades ni el margen propositivo que había usado con cautela y convicción. Hasta su propia firma ha ido perdiendo aire y se hace desangelada y sin nervio, poco menos que descosida de la mano que la escribe: suscripciones, facturas, pedidos, balances. Incluso el relevo en el cargo se hará fuera de la sede del Fondo, en una cafetería próxima, porque a Pradera le han prohibido el acceso a las oficinas. El 28 de diciembre de 1967 se expide en México la revocación formal de Pradera en el cargo. Muchos de los colaboradores cooptados por él emigrarán pronto, o querrán hacerlo, y entre ellos, Javier Abásolo, Domingo Luna, Antonio Ron y Manolo López.

Cuando deje FCE algunas cosas seguirán igual. Seguirá igual la «desvergonzada actitud» del Opus Dei y su radio de influencia. La mentira metódica que practican los responsables de la editorial Rialp es una «prolongación práctica de las enseñanzas del “fundador”, padre Escrivá, que en *Camino* legitima la mentira como arma de los afiliados a la “Obra de Dios”, cuenta Pradera en una carta. A cambio, sin embargo, había ya empezado a dar frutos la campaña para que «los críticos literarios españoles comenzaran a familiarizarse con una literatura hoy prácticamente desconocida en España», la que llama «literatura sudamericana» y que incluye a la mexicana con Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Octavio Paz y Fernando Benítez a la cabeza.

No parece imaginable que pueda Orfila fundar en España la editorial que acaba de crear en México, Siglo XXI, pero de momento sí podrá distribuir sus libros, o al menos aquellos que pasen censura (o que se atrevan a obviarla y se distribuyan a la espera de un secuestro punitivo, de acuerdo con la nueva ley de prensa). Contará con la figura importante de un ingeniero ilustrado como Pablo García-Arenal, tan estrecho amigo de Benet, y eso significa de Pradera, que es capaz de jugarse la vida con Benet al volante, como ha sucedido ya una noche de vuelta de Fuencarral, con Moreno Galván y Castilla del Pino en el coche. No se producen graves percances pero sí algunas risas, porque van a parar al mismo juzgado de guardia donde se instruyeron las diligencias de su última detención: «¿Otra vez aquí, señor Pradera?»

Es verdad que está en tantos sitios que la broma le encaja de miedo. A finales de 1966 Orfila viaja a España para poner en marcha la distribuidora de Siglo XXI con Faustino Lastra a la cabeza. Pero enseguida reclama de Pradera un plan que remonte el mal principio de la empresa. Hay muchos obstáculos que vencer para quienes se reúnen en casa del escultor Pablo Serrano (el autor del famoso busto de Antonio Machado que no pudo salir del coche en el homenaje de 1966 en Baeza) con el fin de lanzar y financiar el proyecto. La mitad de la aportación de capital es del mexicano Daniel Zarza. Ahí está por supuesto Pradera, un año antes de su baja definitiva en FCE, cuando es ya miembro activo del equipo fundacional de Alianza y salen a la calle los primeros ejemplares de *El Libro de Bolsillo* tras el verano de 1966. Ha aceptado participar en la búsqueda de socios y accionistas para la constitución de Siglo XXI de España, y es el interlocutor más directo de Orfila, aunque la dirección esté en manos de Javier Abásolo y Jesús Munárriz con Lastra. Para empezar, será Alianza la distribuidora de los libros editados en México. Pradera está atado a Alianza, pero nada rebaja su compromiso personal e ideológico con Orfila y Siglo XXI, dispuesto a respaldar una editorial que en México es, sobre todo, un instrumento de intervención cultural y política. No lo es aún en España, pero lo será.

En apariencia no cambia nada demasiado bruscamente, ni en las formas ni en el fondo, pero todo está cambiando mes a mes, año a año. Mientras se va yendo a trompicones de FCE, crece su implicación en la editorial que va a transformar de forma radical la lectura en España. Su trabajo

se reparte en 1967 entre reuniones y conspiraciones en los despachos de la calle Mártires Concepcionistas, 11, sede primera de Alianza y domicilio de su cofundador, Ramón Lorente. Alianza se había creado en 1959 como distribuidora de los libros de Ediciones Castilla, de Lorente mismo, y de Revista de Occidente, reabierto en 1940 por los hermanos José y Miguel Ortega Spottorno sin dificultades políticas de ningún tipo tras la victoria (pero con una contenida irritación de su padre, exiliado entonces en Buenos Aires y sin fuentes seguras de ingresos).

Lo significativo es que también Jaime Salinas, fuera ya de la agotadora y neurotizante aventura de Seix Barral, es el otro accionista más importante de la nueva Alianza, aunque a mucha distancia, junto a José Ortega Spottorno y Lorente. Había disfrutado sin duda de aquella etapa literaria barcelonesa, que además culminó con la colección Colliure, dedicada a los poetas que habían cambiado el panorama de forma radical. Ya no se trataba solo de leer a Blas de Otero, Gabriel Celaya y José Hierro, porque la nómina se ensanchaba hacia las zonas más jóvenes, en parte gracias a una afortunada antología de poesía, nacida, como Colliure, al calor del homenaje a Machado de febrero de 1959. Tras la antología *Veinte años de poesía española*, publicada en 1960 y con varias reimpresiones y una reedición ampliada, todos sabían ya que a León Felipe, Emilio Prados, Miguel Hernández, Pedro Salinas, Jorge Guillén y Luis Cernuda les habían sucedido voces del interior que lideraban una ética y una estética ligadas a la protesta, a la desazón, a veces a la ira y a menudo también al humor falsamente desesperanzado. Por eso los cuadernos de Colliure se editaron –era una novedad absoluta– con la fotografía del poeta en la portada para exhibir a un Barral descamisado con aire de legionario rifeño; un Caballero Bonald de brazos cruzados y perilla oscura; un Gil de Biedma hierático, helénico y burocrático; un Gabriel Celaya entre tímido y ausente; un Ángel González severo y sin ternura; una Gloria Fuertes campestre, abrigada y sonriente (antologada por Gil de Biedma); un Valente repeinado o un José Agustín Goytisolo desafiante y juvenil, a lo Tyrone Power.

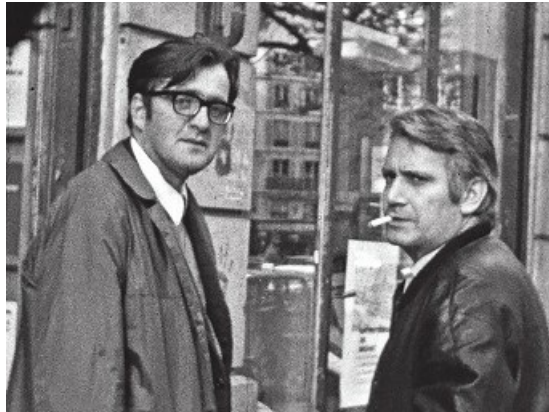
Entre Castellet, Barral y Salinas anda el núcleo duro catalán ligado a la edición mesetera, y en las oficinas de unos y otros, en Seix Barral y en Edicions 62, se reproducen las condiciones que ha implantado Pradera en FCE: son oficinas estables de la resistencia, como pueden serlo a menudo sus domicilios para las reuniones clandestinas del Partido (con ellos fuera de casa por razones de seguridad). Pradera había nombrado ya tanto a Castellet como a José Agustín Goytisolo en carta jocosa a Orfila «cónsules del Fondo en Barcelona», con buenas razones y afinidades obvias, con visitas regulares de conspiración y negocios con un entorno fijo de amigos. En 1966, sin embargo, desaparece el copyright editorial de Jaime Salinas en esa colección de poesía porque cambia de hogar el editor, sumado definitivamente a la aventura de Alianza en Madrid.

No fueron Alianza y Siglo XXI, Siglo XXI y Alianza, dos capítulos sucesivos de la vida de editor de Pradera, sino dos ramales complementarios que confluyen con otras actividades editoriales y un radio de acción común. Alianza aspira a poner en órbita una nave nodriza cultural para el lector medio con lo mejor de la civilización moderna, universal y también local, de acuerdo con la vocación que desarrolló Orfila en FCE entre 1948 y 1965, y ese fue su mejor referente editorial. Por las venas de Siglo XXI, en cambio, fluye una corriente sanguínea diferente, más atrevida y más utópica, y el papel de Pradera en ella replica su perfil más combativo, personal e ideológico.

Tan temprano como en febrero de 1966, José Martínez ha recibido en París alguna información inquietante sobre ese nuevo proyecto. En carta personal, dice saber con resquemor que Pradera «hace otra editorial –es decir, intenta hacer otra editorial, que no es lo mismo». Y aunque pueda

pensarse que se trata de Alianza, las sospechas de José Martínez apuntan a Siglo XXI, porque han surgido dificultades con Claudín y Semprún, demasiado amigos ambos de Pradera, y posiblemente visitante relativamente asiduo de ambos cuando acude a París. Es el mismo José Martínez quien conjetura que «no sé si puso [Pradera] como condición que estos rompieran conmigo», pero en la práctica siguen los dos tanto en sus *Cuadernos de Ruedo Ibérico* como en la editorial. Pese al éxito rotundo de algunas de sus traducciones capitales, como *La Guerra Civil española* de Hugh Thomas, la historia de *Falange* de Stanley G. Payne o *El laberinto español* de Gerald Brenan, la editorial no pasa por buenos momentos financieros (casi como siempre).

José Martínez había emplazado a Pradera a verse en el verano de 1966 en París, después de que pidiera una moratoria en la suscripción a los *Cuadernos* porque «ahora estoy sin una perra». Pradera prometió ir en agosto, y prometió allí seguir discutiendo sobre la «practicidad de la utopía». Debíó recuperar Pradera el pasaporte por entonces, porque una de esas películas caseras que le gustaba filmar a Gabriela Sánchez Ferlosio en 8 mm –por entonces llevaba una cámara siempre encima– muestra en París a los dos amigos, Pradera y Semprún, bajo los toldos del Café de Flore, en el mismo boulevard Saint-Germain donde vivía Semprún. Pradera posa más incómodo, con su corpachón embutido en una gabardina azul, el flequillo ladeado y abundante y las gafas de pasta negra. Semprún se mueve casi a cámara lenta con desenvoltura, más coqueto, más señor y más risueño. El impaciente en esa pareja es Pradera en cuanto se ve filmado por Gabriela, a quien dirige una reprimida reprimenda, menos por la filmación que por sacarlo a él.



Con Jorge Semprún en París (imagen extraída de una filmación de Gabriela Sánchez Ferlosio, hacia 1966).

LA TENTACIÓN REVOLUCIONARIA

Ni Cuba, ni Vietnam ni el Che son por entonces iconos para pins o pegatinas, sino hitos heroicos contra el imperialismo capitalista. El Che encarna al guerrillero revolucionario perfecto, teórico de la lucha armada y la subversión, aún sin *merchandising*, aún lejos de ser fetiche y chuchería ideológica. Incluso es materia de lectura sesuda para los suscriptores de *Cuadernos de Ruedo Ibérico* cuando publican su discurso en abril-mayo de 1967 «Un, dos, tres Vietnam». La guerra de guerrillas que había predicado Lenin desde 1906 ha pasado ya a la historia y el referente tangible e inmediato son hoy Fidel Castro y el Che, a pesar de que operaciones como el intento revolucionario en el Congo hayan sido un fracaso, Mobutu siga en el poder y el líder

independentista Lumumba haya sido asesinado en 1960. En su declaración de La Habana de 2 de diciembre de 1961, Fidel Castro enfatizó que a la revolución no se la espera ni se la deja madurar; la revolución se hace con coraje, con armas y con una minoría abnegada y heroica. Es ella quien pone en marcha, en palabras del Che, «el gran motor de la revolución». Su intérprete, Régis Debray, descalifica cualquier forma de evolución pacífica que no pase por una vanguardia armada revolucionaria y desde luego nadie es revolucionario si cree que el bien supremo es la vida humana. La burguesía ni puede ni quiere dirigir esa lucha y mientras los comunistas esperan mano sobre mano la maduración de las condiciones objetivas, los revolucionarios subvierten con las armas el orden del Imperio.

Cuando el Che ha muerto, el mito crece con la edición de sus diarios, directamente gestionada por Fidel Castro. Arnaldo Orfila había sido amigo personal y será en 1968 su primer editor en Siglo XXI, a la vez que Castro permite a Feltrinelli y a Maspero, a mediados de 1968, que los copien en La Habana para editarlos en Europa. Los beneficios de la primera edición, de julio de 1968, se entregarán a «los movimientos revolucionarios de Latinoamérica», aunque el autor de esas notas de diario no es ya exactamente el mismo revolucionario de unos años atrás. En otra joven editorial de México, Era, fundada por exiliados catalanes, Neus Espresate se había hecho cargo de la *Obra revolucionaria* del guerrillero en 1967, con una tercera edición ya en circulación en 1969. Entre los textos incluyó el documento madre del *foquismo*, es decir, la estrategia destinada a generar múltiples «focos insurreccionales» para alimentar la guerra de guerrillas. Es el mismo texto que tomará Régis Debray como referencia para defender la «revolución en la revolución», incluido en otro libro del mismo Debray publicado también por Era, *Ensayos sobre América Latina* en 1969.

La frase del Che valió como consigna para una desestabilización que saltaba de las lianas de las selvas a los pasos de cebra urbanitas: se necesitan «un, dos, tres, muchos Vietnam» para llevar al colapso al Imperio y al capitalismo. Al lado de semejantes convicciones, los partidos comunistas occidentales parecían carcamales escleróticos en su monogamia soviética, más pequeñoburguesa que proletaria u obrera, sin haberse desestalinizado, partidarios del centralismo democrático (que quiere decir obediencia jerárquica y sumisa a la dirección) e insensibles y hasta hostiles a las movilizaciones globales de la nueva izquierda de Europa y América Latina.

Cuba había dado sentido a la palabra «revolución» y había revelado a destiempo, como escribió Fredric Jameson, la «épica inesperada de la revolución política», la viabilidad de la lucha armada para la conquista de un poder auténticamente revolucionario. Pero ¿qué llevaba dentro la complicidad con la guerrilla y la insurrección armada? ¿Fue la *revolución* solo un sustantivo fetiche y vacío, o prefijaba un programa de acción política e intelectual creíble, viable y practicable? ¿De qué habla otro editor, Giulio Einaudi, cuando habla del «aventurerismo» que trajo su «adhesión al 68»? Reconoce Einaudi que la agitación de aquellos años puso en riesgo el cuidadoso equilibrio de las dos almas de su editorial, la liberal demócrata y la marxista. Pero puso en riesgo también el complicadísimo equilibrio dentro de la misma izquierda marxista, ya dividida. Una aspiraba a gobernar y otra, nueva, sesentayochista, «quería romperlo todo porque opinaba que dirigir la cultura significaba oportunismo, reformismo, transformismo».

Casi culpablemente, o al menos resignadamente, Einaudi confiesa su radicalización política de entonces e identifica sobre todo un talante o una actitud compartida entre muchos jóvenes y algunos ya maduros, como él, con más de cincuenta años por entonces. Se sentía «extremista en las cosas que he dicho, en esta fe en ciertos personajes que aparecían, fe en Stalin, en Castro, en Mao». Frente a la nueva realidad y los nuevos movimientos, «esta necesidad de representar la

realidad [desde la editorial] se transformó a veces en excesiva adhesión, pero también en un sano interés en la revolución china, por los movimientos de liberación del Tercer Mundo. Qué quieres, son hechos reales. Existieron de veras», le dice compungido a su interlocutor, Severino Cesari, en su libro de conversaciones. En España, Valeriano Bozal no olvidaría, según sus breves memorias, las consignas coreadas en el autobús que llevaba a los jóvenes en febrero de 1966 al homenaje a Antonio Machado en Baeza: «¡Pim, pam pum, viva Mao Tse Tung!», «Pim, pam, pim, viva Ho Chi Minh!».

También Orfila sabe las causas de la hostilidad que despierta en México su nueva editorial: es «el primer acto público de rebeldía colectiva que se produjo en el país desde mucho tiempo», como escribe a Octavio Paz. Siglo XXI aspira a intervenir en la actualidad con sus libros de batalla, incluido el proyecto de un libro colectivo con Paz, Fuentes, Carlos Monsiváis, Gabriel Zaid o Elena Poniatowska sobre la matanza de la plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968 (que acabó siendo después obra solo de Poniatowska). Muchos amigos, le cuenta Orfila a Paz diez días después de los asesinatos, «optan por asignar toda la responsabilidad a la CIA» de ese «crimen público». Pero «aunque esto sea exacto, uno se pregunta por qué caminos esta diabólica organización maneja la vida de México», cuando todos saben ya que las actividades del Congreso por la Libertad de la Cultura fueron financiadas por la CIA a través de fundaciones privadas y blanqueadoras. Según él, las órdenes del asalto a la universidad y el «arrasamiento de una multitud pacífica, tienen que haber sido dadas por alguien con responsabilidad pública y oficial».

La sintonía es altísima entre todos y su valor de vanguardia revolucionaria es incuestionable, con comunicación directa con los medios intelectuales españoles de la oposición y el exilio. Varios de ellos aspiran a promover una nueva revista que atrae a Carlos Barral, aunque tardará todavía en aparecer (y será *Vuelta*). «No nos interesa tanto», escribe Octavio Paz a Orfila en abril de 1968, pensando en la nueva revista, «escribir obras maestras –para eso más vale que cada uno se quede en su casa y se enfrente con su genio o su falta de genio–, como crear una atmósfera de libertad y rigor sin la cual la vida intelectual y literaria es irrespirable.» Apenas dos meses después, en plena euforia del Mayo de 1968 en París, Paz sintió que sus «esperanzas juveniles renacían: si los obreros y los estudiantes se unían, asistiríamos a la primera y verdadera revolución socialista». Pero eso está todavía lejos de México, porque allí «las consecuencias del régimen burocrático del PRI» se pagan a la altura de junio de 1970 en forma de una «degradación mental» que «no es menos total que su abyección moral».

De España mejor no hablar, aunque todos crean lo que cree Carlos Fuentes el 29 de mayo de 1968 en carta epifánica a Arnaldo Orfila (que le ha publicado ya *Zona sagrada* en Siglo XXI): «Todo ha hecho crisis; todas las cómodas previsiones de los sociólogos de la abundancia –y todos los dogmas de los partidos comunistas momificados, que ahora aparecen a la derecha de la revolución e integrados al sistema.» Las evidencias son tan rotundas que «creo que asistimos», dice Fuentes, «a la crisis definitiva, no solo de la sociedad capitalista sino de la sociedad industrial, keynesiana o marxista». Mientras Manuel Sacristán incubaba la euforia que le llevará a una depresión aguda a finales de año y entiende con dificultades a la nueva juventud, Fuentes cree sin vacilar que «la revolución de Praga y la revolución de París representan» una «doble vanguardia: una clase obrera dispuesta a expropiar los medios de producción por y para los obreros», y «una clase estudiantil lúcida, no integrada, en perpetua *contestación* frente al poder, del signo que este sea». Sin duda, «nada volverá a ser como antes».

Por eso ya nada vale como antes ni siquiera la escritura, y Fuentes anima a Paz en esa

dirección: «Hay que escribir, escribir con audacia, vulgaridad, belleza, terror y sueño: todo lo que afirma, niega a este miserable fascismo» del presidente de México, Díaz Ordaz, «sicópata vindicativo». Sin embargo, el auténtico regalo para el editor Orfila y para nosotros será el capricho de Julio Cortázar de escribir un homenaje pop y culto a Jules Verne en forma de raro diario de lecturas, música e intimidad. La idea —«mezclar las alusiones y las referencias de la manera más heterodoxa posible»—, según prevé Cortázar, es de julio de 1965, cuando Orfila le hace el encargo todavía en el FCE. Pero *La vuelta al día en ochenta mundos* apareció en Siglo XXI en 1967.

Habían arrancado esas heterodoxias antes de mayo de 1968, y para algunos se prolongaron al menos hasta el asesinato de Aldo Moro en Italia por parte de las Brigadas Rojas en 1978. La nueva juventud radical y movilizada desde finales de la década recolocó la órbita comunista occidental en parámetros casi reformistas, integrados y sumisamente pactistas. El descrédito comunista constituía poco menos que el pan de cada día: su proceso de aclimatación burguesa en Europa había dejado crecer a su izquierda proyectos y grupos y grupúsculos que aspiraban a una alternativa real, un cambio total, un sabotaje integral al sistema capitalista frente a la tácita obediencia de los comunistas a la ley de la Guerra Fría y las dos grandes potencias. Pero ni la Unión Soviética que aplastó la revolución de Praga en agosto de 1968 ni los Estados Unidos que intentaban aplastar Vietnam desde 1965 valían para las nuevas generaciones como promesas de ningún hombre nuevo (ni mujer), ni de ninguna nueva sociedad, sino la perpetuación del abuso, la explotación neocapitalista, el sabotaje de las libertades y el fraude de una democracia representativa, legalista y garantista, sometida al cobarde Estado de derecho.

Es precisamente la naturaleza vocacionalmente extraparlamentaria y rupturista de la nueva izquierda lo que empieza a crecer por entonces frente a un comunismo casi domesticado y semiprotogubernamental. También para los más jóvenes la radicalidad política en España empezó a depender menos del PCE que de un conjunto nuevo de demandas que parecían condenar injustamente a un Partido en zapatillas de borreguillo y manta sobre las piernas. Hacía tiempo que había renunciado a sus objetivos revolucionarios, bajo el control de una dirección mayoritariamente envejecida y desconectada de la nueva realidad, conciliadora con las fuerzas burguesas y poco menos que agente de la burguesía para la perpetuación disfrazada no del franquismo sino del sistema capitalista: no eran más que revisionistas y a lo sumo reformistas, vistos con los ojos de la profusión de nuevas izquierdas a la izquierda del PCE.

Aunque la más sonada escisión de 1964 fue la que protagonizaron Claudín y Semprún, ese mismo año el PCE había sufrido otra, también minoritaria, en nombre de los principios revolucionarios. Se constituye en España, y obviamente en la clandestinidad, el PCE marxista-leninista de obediencia prochina, porque al Partido la revolución le iba ya grande, al menos desde que su estrategia antifranquista pasaba por la reconciliación nacional y la búsqueda de alianzas con otras fuerzas, incluidas las burguesas y liberales. Pero para las nuevas camadas juveniles de los sesenta y para algunos de los rebotados del tacticismo del PCE, la revolución no estaba ya ahí. Estaba en otra parte, como en otra parte la habían identificado los referentes de la izquierda intelectual y lujosamente opulenta de nueva literatura y nuevas ideas, con Fuentes, Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez, incluso Paz. Estaba en la zona difusa de una tolerada lucha armada como expediente necesario contra la opresión y el poder impune de Estados Unidos y la CIA, pero también de los tanques soviéticos y su guardia de fronteras.

La aventura guerrillera en Occidente no fue únicamente la droga dura de un puñado de niños burgueses asqueados de confort capitalista. Cuba había sido solo el principio de una ola de

euforia que se extendió por América Latina y África y por supuesto desembarcó en las plácidas sociedades del Estado del bienestar de la posguerra en forma de contestación y rebeldía juvenil. Las superpotencias y sus estados democráticos cómplices masacraban poblaciones y países, organizaban sabotajes y golpes de Estado a través de la CIA en países subdesarrollados, financiaban plataformas de influencia intelectual y política como se supo por entonces (a propósito del Congreso por la Libertad de la Cultura), aplastaban movimientos populares como en Budapest en 1956 o, mucho más simbólica y gravemente, en Praga en agosto de 1968 con los tanques del Pacto de Varsovia contra el Gobierno de Dubček, combatían movimientos de liberación colonial como en Argelia, el Congo, Angola, o directamente eliminaban a los líderes de la liberación global de América Latina, como al Che Guevara en 1967.

La revolución no era un sueño ni un ensueño quimérico y consolador, sino una fe contagiosa, además de una pesadilla para los servicios secretos de los Estados occidentales, activados ante la violencia intermitente que desplegaron múltiples grupos de izquierda en tres continentes y con un apoyo importante de las juventudes de esos países, enroladas en una vía revolucionaria desligada de la disciplina rancia de la órbita soviética. De hecho, en los países occidentales esos grupos se sienten y se quieren oposición extraparlamentaria y contra las rutinas de una democracia doblegada ante Estados Unidos o, peor aún, auxiliada por socialdemócratas como Willy Brandt.

Algunos ven con simpatía, al menos el crítico literario Marcel Reich-Ranicki, esos movimientos radicales y alternativos, aunque sean simpatías «limitadas» ante «aquella revuelta vocinglera y caótica» de 1968. Es verdad que Reich-Ranicki no puede imaginar en la Ulrike Meinhof que conoce en 1964 a la defensora de la guerrilla urbana e insurreccional de cuatro años después. «De la protesta a la Resistencia» era el título del artículo publicado en su revista *Konkret* (solo hasta 1964 financiada por el Partido Comunista, ya harto de la indisciplina de la redacción y de ella misma) en el mismo mes de mayo de 1968 y punto de inflexión en su radicalización política. En abril de ese año había sufrido el atentado que arruinó su vida el guerrillero urbano Rudi Dutschke, y Meinhof había responsabilizado en público como inductor al poderoso grupo de prensa Springer (editor de *Bild* o *Der Spiegel*), contra el que escribieron entonces Heinrich Böll, Max Frisch, Günter Grass o el mismo Reich-Ranicki.

Esos hijos de la «sociedad del bienestar» hablaban de Marx, Engels y Mao (son los autores que llevaba Ulrike Meinhof en la mochila cuando la detuvieron), pero no estaban en la esfera de los partidos comunistas. Quizá era verdad que «habían escogido la revolución como un sabroso pasatiempo, como una afición muy poco arriesgada», como dice Reich-Ranicki. Pero no fue exactamente ese el pastel que esperó a los miembros de la banda Baader-Meinhof, porque los cinco murieron en la cárcel probablemente no de muerte muy natural (incluido el simulacro de suicidio de Ulrike Meinhof el 9 de mayo de 1976). Precisamente Grass la había entrevistado —«si estuviese en América Latina», le dice Ulrike, «lucharía con las armas en la mano» poco después de asistir a una multitudinaria manifestación en Berlín, en febrero de 1968, contra la Guerra de Vietnam. Allí estaban con ella Rudi Dutschke —para Jürgen Habermas un «fascista de izquierda»— y Giangiacomo Feltrinelli, quien según la biografía de Meinhof, Jutta Dittfurth, ya era íntimo amigo de ella: enrolado en la guerrilla urbana, todavía era un rico y fundamental editor literario.

No es extraño que los disparos contra Dutschke en abril de 1968 se queden en la memoria de Agustín García Calvo y los evoque desde París cuando redacta sus *Cartas de negocios de José Requejo*. Acude al Café Voltaire, con amigos que lo trataron, con la mala conciencia de pertenecer a «esa pequeña burguesía» tan denostada y cobardona que «apenas está hecha de otra cosa que de traición». Fernando Savater evocaba la fiereza de ese «rebelde luciferino» que había sido su

profesor en la doméstica academia de la calle del Desengaño, tras su expulsión de la universidad en 1965 (mientras Savater leía en el autobús de camino a la facultad a Fernando Vela y su *Mozart* en El Libro de Bolsillo de Alianza). Por entonces García Calvo estaba entregado a la defensa de sus estudiantes «contra los engaños de las palabras» y «contra las Ideas», fuesen de los señores o de los esclavos. Pero Savater también se recuerda escandalizado, incluso él, de haberle oído decir en aquella academia tronada que «si de lo que se trataba era de instalar un sistema democrático como los del resto de Europa, entonces quizá sentiría cierta simpatía por los tanques rusos enviados» a Praga para acabar con la primavera de 1968. En agosto de ese mismo año y en San Sebastián, ETA acababa con la vida del jefe de la Brigada Político-Social de Guipúzcoa y probado torturador Melitón Manzanos (que había sido uno de los interrogadores de Luis Martín-Santos en su última detención).

Un socialdemócrata sobrevenido como Dionisio Ridruejo hubo de invertir por entonces muchos y tempranos esfuerzos para contener la pasión revolucionaria de sus amigos más radicalizados. Cuando la exaltación por la violencia franquista tira de los más jóvenes y los acerca a la respuesta armada, como le sucede a Vicent Ventura, Ridruejo se pone el traje de faena y pedagogía. Activa sus resortes de experiencia e inteligencia contra la supuesta inclinación juvenil al «socialismo revolucionario» porque es fundamentalmente inconsecuente y, sobre todo, porque ni es hoy ni fue antes solución a nada. Ridruejo explica en una carta casi desesperada a Ventura que se emplaza «en una izquierda sin retórica y sin superstición, muy liberal de base», tan difícil de explicar en aquel contexto acosado por el terror del Estado y las armas de la revolución que ha de inventar una palabra imposible: él es «social-demócrata-europeísta».

Eso significa que no quiere «poner a cero el punto de partida del proceso, ni reconocer una clase-mesías, ni admitir el autoritarismo constituyente, ni condescender con el terror». Esa última frase es la que afecta directamente al caso: «La revolución conduce a la dictadura.» Ya sabe a esas alturas que el «reformismo no es bastante popular porque los teóricos marxistas lo han puesto en el catálogo despectivo». Pero sabe también que su modo de «ser reformista» consiste en «no postular la destrucción de los elementos sociales que se oponen y trabajar para que el más progresista imponga sus previsiones mediante un sistema de prelación calculado con realismo, teniendo en cuenta la resistencia del adversario. Significa la renuncia a una victoria total, totalizadora y –por necesidad– totalitaria».

4. A LA SOMBRA DE CUBA

¿Hasta dónde es verdad que Pradera bajó las escalerillas del avión procedente de La Habana en 1968 canturreando feliz los bailables revolucionarios, tocado «con un sombrero loco de rafia» como el que usan los guajiros y eufórico ante los incontestables progresos de la Revolución? Lo habían ido a recoger al doméstico aeropuerto de Barajas Gabriela y Romero de Solís y en apariencia la desconexión con la tierra firme parecía irreversible.

Quizá volvía Pradera del Congreso Cultural de La Habana en enero o quizá volvía de otro viaje en ese mismo 1968 a Cuba pero en el mes de noviembre, vinculado a sus ocupaciones en Alianza. En este segundo había crecido ya la suspicacia o el resquemor hacia las condiciones de la libertad y la revolución: los pegadizos bailables seguían ahí pero algo menos euforizantes. Habían sucedido demasiadas cosas desde enero, y casi todas ellas habían sometido a la izquierda internacional a una suerte de inconfesable basculación de la euforia al desengaño. En abril disparaban tres balazos a Rudi Dutschke, en el contexto de movilizaciones impresionantes contra la Guerra de Vietnam, en Praga se abría una nueva etapa desligada de Moscú, y el estallido de mayo en París se consagraba como el principio de un nuevo tiempo.

Pero fue tan breve que se cerraba al cabo de dos meses. Cuba no solo no había defendido la primavera de Praga liderada por Dubček, sino que había respaldado la intervención soviética que noqueó moralmente a tantos militantes del PCE en España: el discurso en La Habana de Fidel Castro fue publicado de inmediato por la novísima Ciencia Nueva para hacer correr la noticia de que Praga era un insolente espejismo de indisciplinados. Empezaban a dibujarse los mundos paralelos de la ilusión revolucionaria y la pragmática del poder de la revolución con sus propios códigos de conducta represivos. Fueron múltiples las experiencias individuales de autoengaño y desengaño y sus modos de metabolizarlas, antes, después o nunca. Estaba terminando en Cuba la etapa inicial de la revolución, cuando «el socialismo que se empieza a construir es muy diferente del soviético», cuando «parecía incluso que estaba naciendo un nuevo tipo de socialismo, impermeable a la terrible degeneración que había sufrido» la URSS con el estalinismo. Sus logros eran objetivos, como la «impresionante» lucha para acabar con el analfabetismo, que dio «resultados admirables» y de gran impacto en toda América Latina. Con un deje de melancolía, esa es la voz de Pradera en un editorial de *El País* de enero de 1984, sin rebajar «los progresos en materia de educación y sanidad» ni la recuperación de «un nuevo sentido de su dignidad». Empezaba entonces una popularidad global que sirvió «para obviar formas auténticas de democracia» en Cuba, reclamadas incluso por quienes empezaron la revolución con Fidel y mientras «gozaba de enorme simpatía entre las fuerzas de izquierda en Europa». La Habana se había convertido en un «centro de anticonformismo y antidogmatismo» hasta ese momento, e incluso «el propio Fidel se mofaba de los manuales de marxismo soviéticos».

Pero es precisamente ahora, en este bienio de 1967-1968, cuando empieza «el proceso involutivo de la revolución cubana», con el respaldo a la intervención militar en Praga. Desde entonces, «los rasgos fundamentales del modelo soviético se han ido extendiendo» a la revolución en Cuba. Quince años después, cuando medita Pradera ensimismado y tristón sobre esa experiencia, cuando sigue siendo verdad que hay conquistas que son «aún realidades brillantes»,

el sistema cubano se caracteriza «sobre todo por su falta de libertad, su conformismo, y su aparato represivo, males típicos del llamado socialismo real».

Solo con disimulada estupefacción pudieron contestar él y sus amigos en 1968 a la oferta de una remesa de armas para activar definitivamente las cosas en España contra Franco. Escucharon la propuesta impávidos y descolocados Pradera, Xavier Folch y algunos más. Muy poco después, el Estado de excepción dictado por Franco en enero de 1969 exhibía la cara más represiva y hasta asustada del régimen, superado por la conjunción de movilizaciones obreras y estudiantiles y un clima de protesta que desde Europa había llegado contagiosamente también a algunas ciudades españolas.

El aprendizaje fue lento para todos y en todos los sentidos. Nadie actuó al unísono o al dictado de una sola voz: la experiencia de la revolución en la primera madurez era una cosa y fue otra muy distinta para las levas de nuevos universitarios que en España empezaban a respirar los aires de una incipiente sociedad de consumo y un capitalismo cada vez más europeizado en la pulcritud de sus transacciones, las mejoras del nivel de vida, el asombroso incremento de los índices de universitarios en España. Pero esas evidencias de mejora no reprimían ninguno de los impulsos de ruptura radical que habían alimentado a las juventudes alzadas desde mediados de los años cincuenta, y menos iban a rebajar los impulsos de las nuevas minorías revolucionarias.

EL PRINCIPIO DEL FIN: HACIA 1968

No dispongo de documentación para saber qué sentía, qué quería o qué buscaba Pradera en esos años de crecimiento profesional exponencial, de aclimatación a cifras de negocio y edición impensables antes. Tampoco hay modo de indagar en su intimidad fuera de los testigos memoriosos, y sin embargo no hay duda de su complicidad con la Cuba de Castro, de su simpatía revolucionaria desconectada de la dominante comunista y aliada con las nuevas juventudes que afloran en los medios universitarios y acuden a él en busca de asesoría técnica y orientación política. De su seguridad analítica y de su información tienen todos experiencias directas, además del aura intangible de haber participado en los momentos míticos de la resistencia desde 1956, con muchos meses de cárcel, con los riesgos de la clandestinidad, con la aventura natural del antifranquismo militante.

Apenas cinco años después de esos dos viajes a Cuba, el desengaño de Pradera era cruel e irreversible: la revolución había sido la experiencia generacional más emocionante, más ilusionante y cabal, pero era ya también la más decepcionante. Lo mejor de ella, lo euforizante y vigoroso, había podido vivirlo en carne propia porque de toda esa expectativa se nutrió el Congreso Cultural de intelectuales convocado en La Habana en enero de 1968. Pero bastó el transcurso de ese año de dolor para que las efusiones procastristas empezaran a entrar en quiebra con pistas, con datos, con encuentros y entrevistas demasiado crueles. El segundo viaje a Cuba en noviembre de 1968 tuvo mucho de punto de inflexión en la lectura de la revolución, y el compromiso de Castro con los soviéticos y contra Dubček pudo ser el hecho irreversible que cuestionaría la indestructible fidelidad de tantos.

Aquel segundo viaje dispensó indicios inquietantes que apenas habían valorado en enero los compañeros de viaje, y entre ellos, recuerda Xavier Folch, estaban Jaime Salinas y Salvador Clotas. El encuentro con Heberto Padilla en La Habana no dejó solo la evocación de un buen escritor recién premiado por la revolución, y la entrevista con el alto cargo Rolando Rodríguez

empeoró las cosas. La propuesta de convertirse en agentes exteriores les cogió con el pie cambiado o al menos con un escepticismo que ratificaba la mala impresión que había causado a las autoridades su encuentro amistoso con Padilla o el maltrato evidente que los custodios de la revolución infligieron a Jaime Salinas y Salvador Clotas por su homosexualidad sin disfraz. El encuentro con Fidel Castro programado por Rolando Rodríguez tuvo visos grotescos: un exjugador de baloncesto como Folch reconocía pasmado las facilidades que los otros jugadores daban a Fidel para que acumulara decenas de canastas (y para asombro de un inexperto Pradera, tan alto como los otros dos). El encuentro duró apenas unos minutos tras el partido, sin ningún resultado memorable en ningún sentido.

Al fastuoso Congreso de La Habana llegaron intelectuales de todas partes y de todas las edades diez meses atrás, en enero de ese mismo año 1968. Incluso el socialista y exiliado Max Aub aterrizó allí procedente de México con todas sus simpatías activadas y casi hermanadas con la izquierda de América Latina. Tras treinta años en México, era autor prolífico y reconocido en los círculos intelectuales españoles, se había hablado de sus libros en algunas revistas españolas y sus *Campos* eran una obra mítica, poco leída, prohibida e invisible en España. Pero fue el interlocutor que necesitó también Ridruejo para medir la confianza que podía generar en el exilio su ingreso en la oposición antifranquista legítima (ha editado una turbadora carta de 1960 Domingo Ródenas con todas las huellas de la ansiedad de Ridruejo).

Todavía estaba vivísima en La Habana de ese enero la conmoción por el asesinato del Che Guevara apenas tres meses atrás, en Bolivia, y los centenares de invitados de todo el mundo identificaban en ella una agresión del Imperio y una afrenta personal. Régis Debray había caído ya bajo control de Castro y su inteligencia propagandística (lo ha contado con frialdad endoscópica su hija Laurence). Un jovencísimo Hans Magnus Enzensberger volaría desde Connecticut para compartir estancia con Eric Hobsbawm y solo la enfermedad (real o fingida) impidió la asistencia de Jean-Paul Sartre. Uno de los primeros personajes que saluda Max Aub en La Habana es K. S. Karol, entonces editorialista y cofundador de *Le Nouvel Observateur* en 1964, pareja de la rebelde *bambina* Rossana Rossanda, y autor de una defensa de la revolución cultural de Mao en China que ha publicado precisamente Orfila en Siglo XXI en 1967 (Alberto Moravia ha escrito ya también la suya, traducida de inmediato en España). La euforia es firme y contagiosa.

Gracias a su doble posición de disidente y revolucionario, Carlos Franqui había logrado otro éxito de propaganda insólito el año anterior al trasladar a La Habana el Salón de Mayo de París con obras de Picasso, Max Ernst o Wilfredo Lam, a pesar de no vivir ya Franqui regularmente en Cuba y de haber abandonado la dirección de *Revolución*. El desembarco ese mayo de 1967 atrajo a La Habana a Maurice Nadeau, fundador de *Les Lettres nouvelles* y solo dos años atrás de *La Quinzaine littéraire*. Con él llegaba la izquierda francesa de François Maspero, Marguerite Duras, Michel Leiris, todos rendidos a los sombreros de paja chinos para protegerse del sol y los eslogans en defensa de Vietnam con un acorazado norteamericano frente al puerto y buques soviéticos entrando y saliendo (según recuerda Maurice Nadeau en sus memorias, *Grâces leur soient rendues*). Posiblemente es verdad que «la révolution est une fête», en particular para ellos, «hôtes choyés qui allons de réception en réception», de daiquiri en daiquiri y con cajas de puros en las habitaciones: «Comment ne trouverions-nous pas la Révolution belle?» La inscripción que dejó Nadeau en un mural público de adhesiones decía «Merci à Cuba qui a rendu son sens au mot Révolution», muy al tanto ya de las ideas de Régis Debray sobre la revolución dentro de la revolución porque las oyó por boca de Carlos Franqui, además de haber escuchado ya a un Heberto Padilla incipientemente melancólico.

Nadeau regresa a París con la idea de montar un extenso número de *Les Lettres nouvelles* de más de 350 páginas dedicado a Cuba y con el propósito de que esté disponible para el Congreso Cultural de enero de 1968. Algunas de sus páginas pueden ser sospechosas –como las colaboraciones de Guillermo Cabrera Infante y Severo Sarduy– o pueden contener noticias ingratas –como las dificultades en Cuba para saber algo fiable sobre José Lezama Lima o Virgilio Piñera–. Dionys Mascolo en cambio lo vive todo al revés y siente que «la liberté ici ne fait pas peur». Pese a lo cual, los números de la revista son secuestrados y no se reparten en la isla. Carlos Franqui, tan amigo de Cabrera Infante, deja sus funciones oficiosas de ministro de Cultura y, al menos Nadeau, siente que el clima ha cambiado medio año después, en enero de 1968, sin daiquiris regalados ni cajas de puros gratis.

También Giangiacomo Feltrinelli ha hecho a esas alturas numerosos viajes a Cuba. Fue el editor escogido por Fidel Castro para publicar sus discursos en 1964. Lo que de veras puso en marcha entonces fueron unas frustradas memorias grabadas con magnetófono y borradores preliminares de Heberto Padilla, entre otros. Al Congreso Cultural ha ido Feltrinelli y por supuesto ha ido Orfila, invenciblemente entusiasta y, según Max Aub en su diario *Enero en Cuba*, «a todo pasto; por la mañana, por la noche», haciendo su oficio, «no pierde una», como no lo hacen tampoco la multitud de invitados que llegan: de Giulio Einaudi a Pieyre de Mandiargues, Claude Couffon o François Maspero pero también Mary McCarthy, Michel Leiris o Graham Greene, y por supuesto los héroes nuevos Alejo Carpentier, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Julio Cortázar... o Raimon, que canta en Cuba con gentes amigas delante como Carlos Barral, Josep M. Castellet y Jaime Gil de Biedma, Luis y José Agustín Goytisolo (pero ya no Juan), Gabriel Celaya, Blas de Otero, Jesús Fernández Santos y Alfonso Sastre, Caballero Bonald, los jóvenes editores de Ciencia Nueva (quizá Jesús Munárriz o Roberto Mesa), además de dos viejísimos amigos ya como Jorge Semprún y Javier Pradera.

A Pradera lo identifica tíbeteamente Max Aub como «hijo, nieto o sobrino de aquel otro Pradera, famoso tradicionalista, tremebundo reaccionario al que teníamos por modelo de seres aborrecibles». Pero este nuevo Pradera es otra cosa, porque «ahora sí, quieren mis libros. Quieren que vaya a España», sin que nadie sepa contestarle para qué, ni Barral, que le insiste una y otra vez, ni Castellet ni Pradera. Tiene a todos «esos jóvenes españoles» por «más o menos comunistas», pero sin demasiada sensibilidad histórica o con la cabeza en otra cosa. Mientras Max Aub queda anegado en lágrimas ante la floja película *Granada, Granada, mi Granada*, de Karmen y Símónov, sobre el congreso de intelectuales que montó con André Malraux en 1937, ellos apenas la siguen «aplanados».

Pero todos, todos, son revolucionarios y la palabra «guerrillero» es la que se oye una y otra vez como si de veras fuesen intelectuales revolucionarios. Parece que el objetivo del congreso sea justamente «hacer del intelectual un profesional de la revolución», sin el dogma ni la fe del comunismo ortodoxo, como modo alternativo y emocional de rebeldía armada, ejecutiva y efectiva. Este Max Aub de sesenta y cinco años, con treinta de exilio, calla en público lo que sí se atreve a decir en privado: que él no es un escritor revolucionario, ni «muchos de los aquí reunidos tampoco lo son, a lo sumo más que de nombre». De hecho, dice Aub, «nunca creí que había tanto intelectual revolucionario». Son, en realidad, «simpatizantes», «hombres de izquierda», «partidarios a lo sumo». Pero, entonces, «¿por qué emplear la palabra revolucionario?».

Los auténticos revolucionarios son los cubanos y el primero de ellos el Che, «único caudillo de nuestro tiempo muerto en el campo de batalla». Aub acaba de dedicarle una obra teatral, *El cerco*, que los cubanos no podrán ver porque se prohíbe en Cuba, aunque el autor figure entre los

miembros del jurado del Premio Casa de las Américas en la categoría de teatro. No se ha apagado el eco de la muerte del Che, pero tampoco se ha disipado la conmoción por los treinta años de cárcel que le han caído a Régis Debray en su juicio en Bolivia cuatro meses atrás, en septiembre de 1967. Había sido capturado con la guerrilla en abril, como registró el Che en sus melancólicos diarios finales, y posiblemente confirmó, aunque innecesariamente, porque ya lo sabían, el lugar donde se encontraba Guevara. Feltrinelli se lanzó en agosto de ese año al salvamento de Régis Debray en La Paz para acabar encarcelado allí y luego expulsado, con implicación directa de la CIA. De hecho, cuando acude Feltrinelli a Cuba en enero de 1968 se siente ya, según un amigo muy cercano y tal como cuenta su hijo Carlo, «combatiente antiimperialista» más que editor, mientras prepara su libro *Guerrilla y política revolucionaria* pensado para Italia. Ni revisionismo comunista ni zarandajas, la salida única es «la contraviolencia sistemática y progresiva»: la guerrilla política.

La resonancia de la detención y el juicio a Régis Debray fue universal en América Latina. Apenas unos pocos meses antes lo había sido también la publicación de un libro hecho de entrevistas, retales y crónicas de sus encuentros con Fidel Castro, el Che Guevara y otros guerrilleros. *Revolución en la revolución* había aparecido simultáneamente a principios de 1967 en Cuba, publicado por Casa de las Américas, y en París, evidentemente, por el editor guerrillero por antonomasia, Maspero. Su defensa del *foquismo* había sido condenada por la mayoría de los partidos comunistas de América Latina y a la vez había excitado a múltiples intelectuales, empezando por K. S. Karol, rendidos ante la peripecia heroica del joven francés de veintitrés años entonces. Aub, en cambio, detecta, «menos mal», que ha ido desapareciendo el lema del Che «un, dos, tres Vietnam». Ese es, sin embargo, el tema absoluto de todos, Vietnam, del mismo modo que las acciones guerrilleras y militares de los Tupamaros en Uruguay se reivindicaban en nombre de Vietnam: «Todos los que aceptaron venir aquí», dice Aub, «sabían perfectamente que se trataba de condenar al imperialismo y mantener en alto los derechos y las glorias de Vietnam.»

OTRAS DIVERGENCIAS

Cuando regresa en noviembre de ese año 1968 a Cuba, Pradera lleva acumulado un puñado de decepciones y la desgracia de una pérdida radical. Su hermano Víctor, por entonces cónsul de España en Luxemburgo, se ha matado en un accidente de coche en Bélgica, el 1 de agosto de 1968, junto a su esposa Ana Gómez-Orbaneja (pero salió ileso del accidente Josep M. Ferrater Mora, español y exiliado, autor de *Revista de Occidente* y *Alianza*). Pradera había llegado a principios de agosto a Coria para reunir a los hijos de su hermano Víctor con los suyos, Máximo y Alejandro, con la Torci, y también con los siete hijos de su cuñado Miguel Sánchez-Mazas. Tras el verano regresaría a Cuba para acudir a una exposición sobre el libro español por cuenta de *Alianza* y sin duda reanudó allí conversaciones con Heberto Padilla para seguir acumulando sospechas que irían rebajando el eco de la propaganda prorrevolucionaria e incorporando un desengaño destinado a calar pronto en él y en algunos otros excomunistas o comunistas vigentes.

Algo de los métodos cubanos le había llegado ya en enero, cuando Pradera, Castellet, José Martínez y Roberto Mesa renunciaron a asistir a una cena del Partido Comunista porque había sido vetado en ella Jorge Semprún. ¿Fue antes o después de su conferencia en el congreso? Max Aub recuerda que en su intervención pública no condenó expresamente a los partidos comunistas aunque sí rozó «por un momento su inconformidad con la guerra de guerrillas como posible

solución». Pero enseguida rehuyó el tema para encajar después preguntas del público, «que lo ponen a parir».

Otros indicios inquietantes menudean en Cuba, porque la censura es perceptible. A media voz se habla de detenidos y detenciones sin contabilizar, o sin que nadie sepa de veras cuántos disidentes están encarcelados. Heberto Padilla había sido en enero el guía en La Habana del grupo de Semprún, Pradera, Josep M. Castellet, Luis Goytisolo –nada más llegar a Cuba le espetó adusto y desafiante a Padilla, según recuerda Herralde: «¿y las cárceles?»–. Padilla no callaba lo que no se veía ni se decía pero estaba pasando, como también hizo con Enzensberger. Castellet, por su lado, no salió precisamente entusiasta de su encuentro con Herminio Almendros, seguramente por encargo de su hijo Néstor, que vivía en Barcelona y se hacía con un círculo de jovenzanos como Ramón Terencio Moix y Pedro Gimferrer. Como exiliado de primera hora –llegó a Cuba en 1939 junto a Ferrater Mora–, está integrado en el sistema educativo cubano, pero Castellet ha encontrado a un hombre profundamente decepcionado de la revolución.

Pese a las dificultades, algunos sí consiguen entrever a Fidel Castro en encuentros nocturnos y furtivos, con aplazamientos incesantes y efectos teatrales relatados por tantos, desde Semprún o Castellet hasta Feltrinelli, mientras aguardan pacientemente a que termine de meter canastas y los atiende de madrugada con la gorra militar calada y a lo mejor hasta el barboquejo bajo la barbilla. De hecho, Feltrinelli ya sabía antes de enero de 1968 bastantes cosas de Castro de primera mano, tras horas de conversación con él para avanzar en las memorias que no acabarán. Un colaborador estrechísimo de la editorial lamentaba en 1965 el empeño inútil de Carlos Franqui de mostrar en las charlas preparatorias alguna muestra de su «liberalidad cultural».

Muy poco después, Franqui abandona la isla y Feltrinelli viaja de nuevo a Cuba. Lleva con él un guión, múltiples notas y varias preguntas sin respuesta: «¿Por qué está tan en contra de los intelectuales homosexuales?» O con respuesta: tiene en gran consideración a Alejo Carpentier como intelectual «pero ninguna hacia los otros, a los que considera unos parásitos». A Feltrinelli le parece que sus declaraciones sobre arte y literatura son «simplistas y llenas de virilidad», «típicas de un casi insoportable puritanismo, junto a una profunda ignorancia de los problemas sexuales y psicológicos», todo lo cual configura «la impresión de rigidez tanto en lo que respecta al problema cultural como al moral».

Como si nada de eso fuese real o como si fuese el precio de la revolución, José Martínez ha decidido adelantar la publicación del número 16 de *Cuadernos de Ruedo Ibérico*, dedicado al Congreso Cultural, al Llamamiento de La Habana y a (algunos) fragmentos del discurso apasionado de Fidel Castro. En ese mismo número de finales de marzo de 1968 (pero con fecha de diciembre de 1967-enero de 1968), se cruzan los cables subterráneos de la pluralidad cultural española, porque también aparecen en ese volumen poemas de clásicos vivos y muertos, como Cernuda y Aleixandre, Valente, Leopoldo María Panero o Pedro Gimferrer, y ensayos de Julio Cerón, Santos Juliá, Juan Tomás de Salas. La hiperactividad epistolar de José Martínez que ha motivado el congreso de enero ha sido enorme, pero en la primavera de 1968 la situación financiera «va muy mal», sigue siendo apremiante ganar nuevas suscripciones, y José Martínez ha de cursar una petición de socorro a Pradera, sobre todo porque fuera de Francia no paga nadie.

Pero Pradera sigue sin recibir los ejemplares de la revista, ni el de Cuba ni los números anteriores: «antes no los recibía», sospecha paranoide, «porque no los enviabas; ahora, porque los deben interceptar», le escribe Pradera. Promete formalmente pagarlos, pero también que le haga llegar cuanto antes los títulos más recientes: la breve y estupenda diatriba contra el Opus Dei de Jean Bécarud (firmada como Daniel Artigues), la nueva andanada cristiano-revolucionaria de

Ignacio Fernández de Castro (*De las Cortes de Cádiz al Plan de Desarrollo*) y *La estabilidad del latifundismo*, de Martínez Alier. «¡Ah! Y el de Payne», que es *Los militares y la política en la España contemporánea*, porque su anterior *Falange* lo tiene ya muy bien leído y lo ha usado para su manuscrito aparcado sobre la mitología falangista. Quizá no sabe todavía que Ruedo Ibérico publicará de inmediato los diarios del Che en Bolivia, prologados por Fidel Castro, pero en todo caso todos deberían mandarse preferiblemente a las oficinas de Alianza, en Milán, 38.

Pradera se había ido incorporando a la nueva editorial a lo largo de 1967. Para entonces ni había empezado el desengaño con la Cuba de Castro ni había renunciado a una revolución socialista. Lo que empezó a ser verdad es que «antes de que Franco muriese la gente había empezado a ser posfranquista». La frase es de Juan Benet y en el fondo señala la pluralidad osmótica de conductas transgresoras e inéditas que pueblan la nueva sociedad, aunque esa rebeldía antifranquista no sea ya solo del PCE. La complicidad de Pradera con Claudín y Semprún es activa, lo es también con José Martínez y sus ediciones de Ruedo Ibérico, y posiblemente pautada por viajes a París. A mediados de 1967, y de camino a La Habana, Semprún había recalado en Madrid por primera vez con pasaporte legal español –tras múltiples gestiones de altos vuelos de Domingo Dominguín–. Para segura alegría de Pradera y solo probable de Orfila, ha sido premiado internacionalmente como guionista de *La guerre est finie* (película de Alain Resnais obviamente inspirada en la experiencia clandestina de Semprún en España).

Pradera está ahora enrolado en Siglo XXI porque identifica ahí el instrumento necesario de una conciencia transformadora y revolucionaria que en Alianza quedará suspendida, entre paréntesis o dormida. Allí la revolución se planea a medio plazo y en formato perfectamente burgués. Aunque Pradera figura ya en los contratos de la empresa, no está integrado a pleno rendimiento en Alianza o lo está solo en su dimensión comercial, tal como recordaba Jaime Salinas. Quizá es precisamente la llegada de Manuel Andújar en octubre de 1967, como director de marketing y publicidad, la que altera el reparto de papeles y empieza a funcionar de veras el tándem Salinas-Pradera que hizo tan fiable y segura la marcha de Alianza en los próximos años. Pero Pradera no figura todavía entre los habituales de la editorial, porque aún «es pequeña –dos piezas– y a ella concurrimos el abajo firmante [cuenta por carta Andújar], una secretaria, bastante capaz, y a título de prueba un muchacho que trabaja en el Fondo de Cultura Económica –de donde, como todos, quiere irse...», como del Fondo se está yendo también Pradera. A estas alturas, Alianza ha publicado ya en torno a ochenta títulos de la colección de bolsillo, a un ritmo superior a cinco a la semana, que enseguida serán diez.

La nueva ley de prensa de Fraga en 1966 ha obligado a los editores a registrarse como empresas con la exigencia de identificar sus fines y sus medios financieros. Es un instrumento de control y prevención contra el potencial corruptor de las nuevas empresas. La ley impulsa también líneas de crédito a la edición por el nuevo carácter preferente del sector, directamente influido por las gestiones y demandas de empresarios ya importantes y con buenas relaciones con el régimen, Jesús Polanco y Pancho Pérez González. Ambos son, desde sus respectivas Santillana y Taurus, aliados firmes y dispuestos a explotar sus contactos para la expansión, creciente e influyente, de sus proyectos editoriales.

Aunque fuese verdad que por entonces la censura no era lo mismo que una década atrás, también era verdad que el fundador de Alianza, Ortega Spottorno, mantenía «muy buenas relaciones con Fraga», como recordaba hace años Jaime Salinas en conversación con Xavier Moret. Según el propio Pradera, eso pudo permitir a Ortega jugar «a fondo la carta del hecho consumado» al forzar al régimen a tolerar la circulación de libros comprometidos (o secuestrarlos

con el consiguiente escándalo). Incluso un editor rojo y exiliado como Juan Grijalbo reconocía al mismo Moret que «Fraga ayudó mucho a la industria editorial», aunque desde luego «no como censor». Tampoco ayudó en nada a otra nueva editorial con perfil completamente diferente. Ciencia Nueva era una iniciativa de jóvenes amigos de Pradera, también comunistas, y a él acuden para conocer de primera mano los rudimentos y los secretos del oficio. Rafael Sarró se recuerda acudiendo al despacho de Pradera en FCE, en Menéndez Pelayo, en busca de casi todo. Necesitaba información sobre el modo de distribuir y contratar manuscritos, sobre el número de títulos e incluso sobre las expectativas de venta para garantizar su viabilidad: si vendes 300 ejemplares, le dijo Pradera, es un éxito, y el éxito salió porque vendieron el doble de su primer título, de Farrington, titulado *Ciencia y política en el mundo antiguo* (reeditado en la colección Ariel Quincenal, fue un libro que también leímos años después los estudiantes de la Transición).

Dado el rojerío inequívoco de la nueva editorial, con comunistas activos y jóvenes como Sarró, Alberto Méndez, Jesús Munárriz, Lourdes Ortiz o Saro de la Iglesia (y el diseño gráfico y el ímpetu de Alberto Corazón), las cosas fueron siempre renqueantes. No ayudaba ni la conexión directa de todos con Jaime Ballesteros, responsable del comité de Madrid del PCE entonces, tampoco lo hacía su plan de publicaciones desde finales de 1965 –los diarios del Che incluidos–, ni la intención de algunos de sus títulos, como el fenomenal guión de *Nueve cartas a Berta*, de Basilio Martín Patino. A ese invento se sumaron de inmediato y desde el origen otros nombres que volverían a estimular iniciativas editoriales en el inmediato futuro, como Valeriano Bozal, Pepe Esteban y Carlos Piera.

En los mismos años a Alianza le fue mucho mejor desde todos los puntos de vista. No hubo de padecer el acoso que padecieron editoriales guerrilleras como la misma Ciencia Nueva, Ediciones de Cultura Popular, ZYX, Nova Terra, Comunicación o Fundamentos, todas ellas víctimas hermanadas en el despotismo de un sistema de amenazas, castigos, secuestros y supuestas decisiones administrativas (que eran obviamente políticas). La calle era de Fraga, pero la edición también, como sentencia Herralde. Era el mismo Estado que entre 1967-1968, y a través del Banco de Crédito Industrial, destinó a Alianza dos importantes ayudas económicas de tres millones y medio de pesetas en 1967 y otra más en 1968. Con ellas habrían de financiar tanto la exportación de libros como la construcción de la sede de la editorial en la calle Milán, 38.

Al menos desde 1969, Pradera figura ya en el Consejo de Administración, a instancias de Jaime Salinas, junto a dos viejos amigos de Pradera, altamente implicados en la editorial: uno, Daniel Gil, es el diseñador que dio personalidad única a los títulos de El Libro de Bolsillo (y al resto de las sucesivas colecciones hasta 1989), además de militante comunista en la misma época que Pradera; el otro es el economista Luis Ángel Rojo, compañero de estudios en la universidad y a quien había tanteado Pradera en su etapa en FCE. Pero hay más factores que vinculan la editorial con el sector menos anquilosado del franquismo, que a la vez suscitan las desconfianzas o los resquemores en los medios de la izquierda más joven y nueva. Alianza será parte de un invento promovido por la editorial Salvat, la Biblioteca Básica Salvat-Libro RTV, a partir de un concurso público que muy probablemente gana la editorial por disponer de información privilegiada. Al menos, Joaquín Marco, director por entonces de aquella colección en Salvat, recuerda que uno de los tres hermanos al frente de la editorial, Juan Salvat, supo que lo ganarían antes de que se fallase: fue un éxito de ventas descomunal e inédito en España. El enrolamiento de dos exmilitantes como Pradera y Joaquín Marco en empresas abiertamente protegidas por el Estado había de pasar factura, en particular si el éxito de la colección Libro RTV era tan abrumador como lo fue desde su lanzamiento para la Feria del Libro de Madrid de 1969. La condena explícita por

parte de la izquierda clandestina no es nada incongruente, porque identificaba detrás de aquella popular serie un negocio y una estrategia de propaganda franquista, antes que una vocación genuinamente cultural. Juan Salvat recordaba sin ambages, en una conversación pública, la aportación de títulos de Alianza y la indisimulable alegría de Ortega Spottorno: «Decía que nunca había ganado tanto dinero de una forma tan sencilla y trabajando menos», aunque fuese «realmente decisiva» su aportación. Se llenaron los domicilios de esos libros de color crema y bandas de color naranja, con ventas medias de trescientos mil ejemplares y puntas que pudieron llegar a un legendario millón de ejemplares para el primer volumen, *La tía Tula* de Unamuno. La colección se amplió a clásicos universales y a recientes hispanoamericanos, como Juan Carlos Onetti o Mario Vargas Llosa, con prologuistas de prestigio literario y larga amistad (Aldecoa, Benet, Sánchez Ferlosio, Fernández-Santos, Martín Gaité, Ana María Matute).

Al autor de las portadas en Alianza, Daniel Gil, lo había reclutado *in extremis* Jaime Salinas al saber que la pareja de su secretaria en Alianza, Mónica Acheroff, diseñaba carátulas y cubiertas para una discográfica, y a él se lo sugirió entonces. Pero Pradera ya sabía quién era porque había sido el diseñador gráfico de los carteles y materiales del Congreso de Estudiantes proyectado por los comunistas en 1955. Pradera sería entonces testigo frecuente de las trifulcas de Daniel Gil con autores (o con los propios directivos) precisamente para frenar, como escribió años después Pradera, «a la abundante tropa de daltónicos, pragmáticos y fenicios que suelen concebir el diseño como una simple peana para adorar a los autores o como un mero vehículo para incrementar los beneficios». El respeto que se había ganado Daniel Gil desde el principio con Ortega Spottorno en Alianza explica así que «solo un talento excepcional para el diseño» pudiese «conseguir que cada cubierta fuese percibida a la vez como la denotación de un título individual y como la connotación de la editorial que lo publicaba. Ese *toque* especial de genio para construir la unidad a partir de la diversidad y para derivar las partes desde el todo es el secreto de Daniel Gil».

Pero el rasgo que hizo capital a El Libro de Bolsillo en la formación del lector medio de la España predemocrática y democrática fue la voluntad de difundir los campos fundamentales de la cultura antigua y moderna, sin límites, sin restricciones y con ambición ecuménica. Muy en particular en aquellos ámbitos que un sistema tan asfixiantemente católico como el franquista había desalojado del horizonte civil y ético del ciudadano: llenar las librerías de títulos baratos de Marcel Proust, Franz Kafka o Friedrich Nietzsche llevaba dentro una declaración de principios profundamente transgresora. La novedad más sustancial fue la rotundidad de su oferta humanística a precios populares y unas traducciones de calidad que valían para novelistas incontestables de la tradición moderna, pero también para ensayistas y pensadores que cambiarían el mundo, y muy en primer lugar la obra de Sigmund Freud, presente en la colección de forma constante y casi pandémico en el consumo literario de aquellos años en la nueva España. *La interpretación de los sueños* no era un texto natural de la cultura media española dada la fobia católica por el análisis del inconsciente o más genéricamente de las pulsiones y recovecos irracionales (por definición *inmorales*).

Varios años antes de la muerte de Franco no solo los jóvenes más politizados echarían mano de los títulos de Alianza, sino también un espectro de público que era consumidor potencial de la fastuosa narrativa hispanoamericana: su difusión tenía ya dos pies en Barcelona, uno era Seix Barral y otro los buenos oficios de la agente literaria Carmen Balcells (los detalles y la historia íntima están en un libro de Xavi Ayén). Quizá muchos leyeran antes a García Márquez, a Rulfo, a Onetti o a Vargas Llosa que a los autores que habían nutrido sus obras y estaban apareciendo gradualmente en esa colección de bolsillo, con títulos de Kafka, Faulkner, Borges y Octavio Paz,

pese a los «egotrips» en que solía incurrir el autor, en palabras sarcásticas del propio Pradera. Los dos, Borges y Paz, son tan importantes entonces para Fernando Savater que los identifica como modelos irrepresibles de escritor (Jesús Aguirre en la dirección de Taurus publicaba el primer libro de ese joven de veintitrés años en 1970, *Nihilismo y acción*), mientras Juan Benet se encarga de ediciones concretas e informa sobre otros libros: en El Libro de Bolsillo se reeditan los relatos de *Nunca llegarás a nada* que publicó en 1961 por cuenta propia —«me lo ha pedido Alianza y tengo que arreglarlo», dice Benet— y le asignan también la traducción de *A este lado del paraíso* de Scott Fitzgerald.

Benet redacta sus informes sin titubeos como experto oficial en Faulkner y con una solemnidad socarrona inconfundible: «Es mi entender que Alianza Ed. debe traducir y publicar este libro.» Tiene varias razones, y la primera es que «siendo este el tercer libro de faulkneriana que somete a mi consideración [la editorial], de no recomendar su publicación me veo leyendo faulkneriana hasta el resto de mis días». La determinación de Alianza de publicar algo sobre Faulkner podría forzarle «por cansancio» a recomendar un día otro libro menos meritorio. Se trataba en este caso de la correspondencia entre el escritor y su editor Malcolm Cowley, en la etapa ya del éxito del autor, más valioso que «los gruesos tratados de hermenéutica» habituales. Recomienda el libro aunque sea «por una vez, y sin que sirva de precedente para sucesivos o inevitables informes (toda vez que ahora no tengo la excusa de su bajo coste)», según se lee en la ejemplar edición que preparó Mauricio Jalón de *Una biografía literaria*. Todavía ha de escribir Benet para *El Ulises de James Joyce* y por encargo de Pradera (esta vez para Siglo XXI) un inflamado prólogo que no menciona siquiera ni al libro ni al autor, Stuart Gilbert, pero degrada la literatura de Joyce a mero *cul-de-sac*. Su «costumbrismo moderno» y «su pretendida revolución ha quedado en agua de borrajas». A la vez, ha aparecido la traducción no muy fiable de Beatriz Florencia de *Absalón, Absalón* en Alianza —la «obra maestra de Faulkner», dice Benet—, cuando se ha encargado ya del prólogo para Libro RTV de *Benito Cereno*, y aún escribirá otro prólogo para *Las palmeras salvajes*, esta vez traducido por Borges y editado en Edhasa.

CAMBIO DE CLIMA

En el fondo, aquel tinglado respiraba al margen de la historia y la política. No era hijo de 1968, sino una suerte de pulmón cultural de emergencia para restituir a la sociedad la hora histórica o las coordenadas de una modernidad abolida. La llamada de la selva o la fecundidad de 1968 llegó desde ángulos más radicalizados, más coléricos y combativos a otros editores jóvenes. Sus tentaciones eran más propiamente insurreccionales y fueron ampliamente contagiosas. Tras descartar su descabellado plan de publicar la obra completa de Jean-Paul Sartre por las mismas fechas del inicio de Alianza, Jorge Herralde dirige sus ímpetus editoriales y pone la proa definitivamente hacia la Anagrama de 1969. A menudo su olfato seguía la pista de los libros de Maspero y de Seuil, en París, con la frustrante y frecuente resignación al derecho preferente de Orfila y Siglo XXI para la edición en español, y la compensatoria complicidad de José Martínez. En ese primer año Herralde puso en circulación la irreverencia política y ética de Hans Magnus Enzensberger y sus *Detalles*, y una *Teoría del libertino*, de Roger Vailland, a propósito de Laclos.

Las tres primeras colecciones de Anagrama se rotulaban, con severidad guerrillera, Argumentos, Documentos, Textos. Ninguna de ellas es ni nebulosa ni inocua. Algunos de sus primeros libros promovieron la denuncia de *Los procesos de Moscú* de la era de Stalin, de Pierre

Broué, resignado a aceptar en abril de 1969 las «“coupures” –stupides et révelatrices d’ailleurs–» de censura, la liberación entusiasta de Wilhelm Reich o la traducción catalana de un canónico título de Siglo XXI, *El capitalismo monopolista* de Baran y Sweezy. Pero los únicos libros que de veras estuvieron a la venta el 23 de abril de 1969, recién suspendido el estado de excepción a finales de marzo, fueron las versiones catalanas del *Baudelaire* de Sartre y de *L’ofici de viure*, los desolados diarios de Cesare Pavese (le seguirían los *Tristos tròpics* de Lévi-Strauss y *El teatre i el seu doble*, de Antonin Artaud en 1970, quinto y último de una colección ruinosa).

Herralde no pudo empezar con lo que hubiese querido. Censura prohibió *En partant du «Capital»*, con textos de Elmar Altwater, Samir Amin, François Châtelet o Nicos Poulantzas, aparecido en 1968 en la colección *Marxismes d’hier et d’aujourd’hui* de Anthropos, en París (lo publicaría Fundamentos en 1972), como tampoco pudo publicar por la misma razón *Le livre noir des journées de mai* («refusé par la censure trois jours après sa présentation. Cela veut dire que c’est inutile d’insister là-dessus, la décision est très ferme», cuenta a Mlle. Lesschaeve, de Seuil). Tampoco habrá autorización para la *Antología bolchevique* que preparó Jean-Jacques Marie para la misma Seuil en 1967 con el título *Les Paroles qui ébranlèrent le monde*, aunque «peut-être il y aura une chance en le présentant de nouveau au mois de septembre» porque «il y a pas mal des livres qui ont été autorisés à la deuxième ou troisième présentation». Pero no hubo suerte, y por eso ha de explicar a André Glucksmann en 1969 que no presentará a la censura voluntaria la traducción de su *Discurso de la guerra* para evitar «coupures ou l’interdiction totale»; lo presentará «au dépôt déjà imprimé: on risque la séquestre mais dans ce cas la procédure judiciaire est moins arbitraire que peut l’être la censure». A su nuevo amigo de Frankfurt, el editor Klaus Wagenbach, le ha de enviar en octubre de 1970 su todavía exiguo catálogo para que pueda «voire l’orientation politique que malgré tous les empêchements j’essaie de donner à mes publications», aunque tampoco vaya a publicar la novela de Robert Merle *Moncada. Premier combat de Fidel Castro*, que sigue sin traducción castellana.

Beatriz de Moura empezaba al mismo tiempo a prefigurar su futuro fuera de la editorial en la que trabajaba con Esther Tusquets, Lumen, para concebir con algunos amigos y su pareja de entonces, Oscar Tusquets, un sello nuevo también en 1969. Mientras Herralde se acercaba sin remilgos a la vanguardia política y revolucionaria, sin renunciar a su vocación literaria con un pionero Donald Barthelme, ensayos de Hannah Arendt, retales autobiográficos de Witold Gombrowicz o la *Historia personal del boom*, de Donoso, Tusquets publicaba retales de la vanguardia estética y cultural con textos de Mallarmé, Joyce, Antonin Artaud o Raymond Roussel, André Gide, Malcolm Lowry o Leiris, *El orden del discurso* de Foucault o las genialidades de Groucho Marx y de Woody Allen en *Cómo acabar de una vez por todas con la cultura*, pero algo después editó también *Diario de la prisión* de Ho Chi Minh y ensayos sobre estética marxista (hasta que llega en 1976 la colección Acracia: el mismo año Manuel Sacristán publica en Anagrama una selección de textos de Ulrike Meinhof).

También en Barcelona, otra batalladora editorial lanzaba su propio libro de bolsillo de tipo universitario y con abundante marxismo cultural y filosófico, Ariel Quincenal. La dirección de Manuel Sacristán, combinada con la asesoría histórica de Josep Fontana, concentraba tal sobrecarga política que la detención de Ángel Abad en 1969 se produjo en los locales de Ariel, en presencia de otros colaboradores, como Xavier Folch, Joaquim Sempere, Gonzalo Pontón y el mismo Sacristán: poco menos que la mitad de la célula de intelectuales de los comunistas catalanes del PSUC. Son muchas editoriales nuevas para tan pocos años y sin embargo no hay estorbos ni ferocidades empresariales. Se sienten miembros de una red de topes culturales

antifranquistas que nadie concibe desde el estrés competitivo (al menos, de acuerdo con la autoindulgencia de la memoria). También un hombre rico de familia como Salvador Pániker ha decidido contribuir a la vitalidad de las ideas con la creación, aún en 1969, de la editorial Kairós para difundir la buena nueva contracultural y panfletos incendiarios de Manuel Vázquez Montalbán, Salvador Clotas, Pere Gimferrer, Terenci Moix y José Luis Guarnier. Por Barcelona se veía entonces muy a menudo a Juan Benet, atraído no solo por el Premio Biblioteca Breve que ganó en 1969, sino por su implicación en la editorial que Rosa Regàs fundó en 1970, La Gaya Ciencia. Benet parecía entonces pilotar su colección de cuadernos literarios, o al menos funcionaba como polo de atracción de un renovado entorno juvenil. Aglutinó ahí a la nueva cofradía de gamberros cultérrimos, cinéfilos y modernos, con títulos de Eugenio y Carlos Trías, Félix de Azúa, Javier Marías, Álvaro Pombo, Vicente Molina Foix, habituales casi todos, como el periodista Eduardo Chamorro, Antonio Martínez Sarrión, José María Guelbenzu y desde luego Pradera, de su casa en la calle Pisuerga de Madrid desde 1974.

Siglo XXI no tardaría en dotar de relativa autonomía a su sello en España, mientras otra editorial decididamente roja era asfixiada con las armas franquistas de la ley, Ciencia Nueva, como ZYX había de refundarse en Zero y Nova Terra debía relevar a sus responsables ideológicos. Ni siquiera Seix Barral era ya Seix Barral, porque en ella no figuraba desde 1970 Carlos Barral (la dirigían entonces Joan Ferraté y Pere Gimferrer). Quizá la frase que dedicó Pradera a la etapa de Jesús Aguirre como director literario de Taurus, entre 1967 y las vísperas de su boda con la duquesa de Alba en 1978, recoge informalmente el significado de estos cambios: pudieron entonces en todos «las ganas de enredar, suscitar debates y promover polémicas».

Sin duda, debía tener razón el informe del Ministerio de Información titulado «Tendencias conflictivas en cultura popular» sobre las editoriales nuevas más peligrosas. Entre ellas figuraban Anagrama, Ariel, Barral, Península y Siglo XXI, pero no figuraban ni Alianza (ni Tusquets), ni Revista de Occidente. Tampoco figuraría, de haber sido evaluada, la colección de ese mismo 1970 intencionadamente titulada Hora H, en Seminarios y Ediciones, tan próxima a la nómina liberal de Revista de Occidente pero más batalladora.

La ofensiva juvenil y radical que encarna este renovado ecosistema refleja a su vez disturbios interiores y desplazamientos imprevistos. Manuel Sacristán entraba en crisis por entonces porque su disciplina comunista chocaba con la evidencia de su propia evolución moral e intelectual. Me permito incluso conjeturar que el largo monólogo de varias horas que mantuvo un expulsado del PCE como Francesc Vicens ante Manuel Sacristán el 9 de mayo de 1968 en su casa de Barcelona, mientras ardía París y Praga reverdecía, pudo tener un efecto parecido en Sacristán al que tuvieron las notas de una noche de mayo en Semprún y Claudín hacia 1960. Pudo anidar ahí la toma de conciencia de una contradicción que necesitaba manifestarse por algún sitio, y en ambos casos el memorial de Yalta de Togliatti flotaba expresamente aludido. Pradera recordaba sin dudas, en el trabajo de Xavier Juncosa *Integral Sacristán*, que Sacristán se sentía más comunista que marxista, y eso era lo que quizá estaba empezando a entrar en cuestión. En el verano de ese año su diagnóstico sobre «las derrotas de Praga y de París», como las llamaba ya Sacristán, fue de mal en peor: «De haber realizado» la experiencia checoslovaca «habría sido por lo menos ciencia social en acto», aunque ese experimento «asuste a las neuronas cansinas del dogmatismo gris del burócrata» (comunista).

Ese fracaso y el aplastamiento soviético fue «para él», cuenta Xavier Folch, «el final de una perspectiva política en la que se había jugado la vida». De hecho, desde 1965 la Universidad de Barcelona había suspendido la renovación de sus contratos de profesor universitario de Lógica en

Ciencias Económicas y hubo de invertir la mayor parte de su tiempo en la traducción de literatura comercial. Sacristán vivía sin convicción y hasta con asco el papel que le podía corresponder a él en el sistema editorial e intelectual español. No había dejado de sentirse, como años atrás, demasiado cerca del *figurón*, ese abominable papel que deploraba Ferlosio y que quizá encarnaba entonces como nadie José Luis López-Aranguren. El repudio al «intelectual supuestamente crítico», que es el «más siniestro», pasaba por reconocer que ese «payaso» no hacía otra cosa «más que asegurar el dominio de la clase dominante».

Son confidencias de Sacristán a Xavier Folch en carta de 25 de agosto de 1968, cuando vivía amargamente la prepotencia militar y política de la URSS sobre Praga y la invasión de los tanques. Dice bien cuando anota que es «lo más grave ocurrido en muchos años», sobre todo de cara al futuro: «Me parece confirmación de las peores hipótesis acerca de esa gentuza, confirmación de las hipótesis que siempre me resistí a considerar.» Por eso es «un final de acto, si no ya un final de tragedia», escribe un Sacristán consternado y cercano a las condiciones que propiciarán una depresión clínica que durará un año largo. En cierto modo, este momento se antoja el tardío arrepentimiento de la carta que mandó a Pradera en 1964 para persuadirlo de seguir bajo la disciplina del PCE. Para alguien menos sofisticado como Manolo López, ese mismo agosto de 1968 «se pusieron las bases para enterrar el ideal comunista y terminar con mis sueños» (pero tampoco entonces dejó de ser comunista).

Cinco meses después, Sacristán escribía su carta de dimisión como miembro del Comité Ejecutivo del PSUC el 27 de enero de 1969 despidiéndose, como empezaba a ser habitual cuando se iba un comunista, con «saludos comunistas». Podían ser una debilidad de la inercia o el prólogo de una depresión crítica, pero París y Praga parecían reflejarse oscuramente en la matanza del 2 de octubre en la plaza de las Tres Culturas de México y cerrar así a finales de 1968 «la euforia sobre las luchas de liberación en África, Asia y América Latina», según escribió otro íntimo amigo, Paco Fernández Buey. La muerte de Georg Lukács en 1970, con quien había mantenido correspondencia hasta entonces, sumirá a Sacristán en una suerte de frustrante identificación con la impotencia del mismo Lukács, ministro de la Hungría de 1956 y después expulsado del Partido.

Cuando Sacristán salga de su depresión ideológica y personal y regrese al Partido, todo habrá dado muchas vueltas mientras tanto. Será militante de base y asumirá la formación política como tarea propia. Ya sabe en marzo de 1970 que los nuevos estudiantes piden «un nuevo esfuerzo de comprensión» (Sacristán tiene ya cuarenta y cinco años). Están muy politizados, pero no son capaces de «constituirse en movimiento»; son indisciplinados, pero sobre todo «incomprensibles». El éxito entre ellos «de actitudes políticas sin fundamento, como las de los Che», le parecen equivocadas e infantiles, además de mero «mimetismo incoherente de los hechos de Francia o Italia», «muy mal conocidos». Incluso aplauden que «la consigna de libertad es reaccionaria». Por eso quizá a esas alturas «la exhortación, en forma de sermón hablado o escrito», seguramente «no ha dado ni dará buen resultado».

Este caos indisciplinado era posiblemente real, como lo era la plural agitación universitaria de aquel año: una semana y pico antes de la carta de dimisión de Sacristán como miembro del Comité Ejecutivo del PSUC había sido detenido un militante del FLP, Enrique Ruano, tres días después se había *tirado* de una ventana de la comisaría donde estuvo detenido y al cabo de dos días, el 22 de enero de 1969, se disparaba la peor abeceína del *Abc* para comunicar con desolación en una columna no firmada, a instancias de Manuel Fraga Iribarne como ministro de Información en servicios especiales, que de «las páginas del diario del desventurado suicida se desprende

cegadoramente» una «triste verdad»: la Brigada Político-Social que lo custodiaba nada había tenido que ver en la conflagración de desgracias de un muchacho dañado por «una tremenda crisis depresiva, un invencible complejo de inferioridad, una frustración patética de sus posibilidades intelectuales y el claro sentido de sentirse oprimido, utilizado por otras manos», dijese lo que dijese el psiquiatra con el que apenas había empezado a tratarse meses atrás, Carlos Castilla del Pino, y el sacerdote que le animó a consultar con él, Jesús Aguirre.

El terror de la dictadura se pondría en marcha dos días después, cuando Franco firmó el 24 de enero de 1969 el decreto que declaraba el estado de excepción, en vigor a partir del 14 de febrero, para detener «acciones minoritarias pero sistemáticamente dirigidas a turbar la paz de España y su orden público» y para cortar así «esos brotes y anomalías de modo terminante». También era terminante el documento de «denuncia de la represión» que redactaron en mayo de 1969 los miembros del Sindicato Democrático de la Universidad de Madrid contra una situación «insostenible» que arrancaba del «asesinato» de Enrique Ruano, ignorado por una opinión pública engañada y desinformada gracias al estado de excepción. Comparecía en el documento Ruano sin afán suicida alguno, sino como «detenido por miembros de la Brigada Político-Social, objeto de malos tratos y por último, asesinado por miembros de la social», del mismo modo que se detallaban las circunstancias en que fueron detenidos o deportados hasta dos centenares de estudiantes involucrados de un modo u otro en actividades «subversivas», con las facultades tomadas por patrullas de la policía armada, controles de seguridad apostados fuera y dentro de la universidad, con despachos de bedeles convertidos en comisarías improvisadas de la Brigada Político-Social y una ristra de casos de torturas y arbitrariedades jurídico-militares exasperadamente expuestos en dieciséis folios mecanografiados a un espacio. Allí contaban lo que no contaba la prensa, las detenciones de estudiantes en sus «domicilios a altas horas de la madrugada»; la inhibición crónica del rectorado y autoridades académicas ausentes; la deportación fuera de Madrid de los profesores Elías Díaz, Gregorio Peces-Barba, Rafael Jiménez de Parga, Paulino Garagorri, Raúl Morodo, Javier Muguerza y Roberto Mesa, entre otros, además de las historias de numerosos alumnos expedientados y empapelados o encarcelados sin proceso abierto y sin garantías legales, suspendidas por el estado de excepción, menos excepcional de lo que parece cuando se tenía el cuidado de pegar donde «no queden visibles las huellas en el cuerpo de los sometidos a golpes y torturas»; las multas indiscriminadas sin condena previa; el secuestro del carnet de estudiante que habilitaba para examinarse o para ingresar en los edificios policialmente controlados; las «horas en cuclillas con los brazos esposados entre las piernas» y las horas «boca arriba sobre una mesa con la mitad inferior del cuerpo fuera de la misma», interrogatorios incesantes y nocturnos, patadas y «puñetazos en el estómago», «golpes con el canto de la mano en el cuello», «patadas en los testículos mientras permanecía de rodillas», insultos y amenazas de todo tipo, el despojamiento de las muletas que necesitaba Ángel S. Harguindey, «sin las que no se sostiene», un Harguindey «golpeado en la Dirección General de Seguridad», aunque a Enrique Curiel o a Joaquín Arango solo les prohibían entrar en la facultad, como a Manuel Rodríguez Rivero, a quien además detuvieron y enviaron al Tribunal de Orden Público por «asociación ilegal». Tanto a Jaime Pastor como a José María Mohedano les cayeron sendas órdenes «de busca y captura», les pidieron doce años de prisión y el primero se vio «obligado a exiliarse», como decidió exiliarse Román Uría, mientras el segundo había sido deportado, tras entrar y salir varias veces de Carabanchel en esos meses. A muchos otros los detuvieron también durante plazos arbitrarios, a veces dos meses, a veces semanas, a veces un mes, como a Fernando

Savater, o como al militante comunista Enrique Camacho, también deportado, y a quien agradezco la copia del documento.

De los potenciales disturbios interiores de Pradera la información es escasa y dudosa, pero conviene retener la franqueza de Ignacio Romero de Solís: aunque sea en clave burlona, como lo cuenta, quizá fuera verdad que hasta la década de los setenta «al único comunista que respetó, tanto intelectual como políticamente, fue al implacable Vladímir Ilich Uliánov», es decir, Lenin. Salvada la deformación irónica, es posible que la personalidad de Pradera –su seguridad, su soberbia intelectual, su misma arrogancia– agudizase algunas de sus filias y retrasase o dilatase algunas de sus rectificaciones. Cuando Max Aub puede por fin regresar a España, y eso sucede ya entre agosto y noviembre de 1969, la familia de Alianza lo acoge y protege con Pradera, Salinas y Manuel Andújar a la cabeza. A este Pradera de treinta y cinco años lo retrata en sus diarios «alto, ancho y seguro», entre otras cosas porque, también con deje irónico, señala que «no creo que dé a nadie la impresión de titubear en nada». A Carlos Castilla del Pino y por las mismas fechas le asalta la misma impresión ante su «tendencia a formulaciones tajantes, buenas o malas», que generan mortales fobias o imperturbables filias. Ese talante lo convierte en «un dilapidador de afectos», redimido por el humor y por «la firmeza moral en su capacidad para saber lo que debe hacer», escribe insólitamente un juez tan poco piadoso con la conducta ajena como suele ser Castilla del Pino.

Ese repertorio de juicios tajantes de Pradera incluye sus opiniones tauromáquicas –pasea a este Max Aub recién llegado por varias plazas, todavía junto a Ignacio Aldecoa, Antxon Eceiza y Domingo Dominguín–, y se desparrama en las comidas compartidas en el Gambrinus de la calle Zorrilla, después de haber recibido Max Aub los halagos y fiestas de la fulgurante agente literaria Carmen Balcells en Barcelona, con visitas aceleradas de García Márquez y la plana mayor del nuevo ecosistema cultural, desde Ricardo Muñoz Suay a Carlos Barral, «señorito y marxista, como hoy se debe ser, sobre todo en Barcelona», dice Aub. Ya sabe, por supuesto, que Salinas –«calvo, delgado, “trabajado”– y Pradera *han hecho* Alianza: «Es un éxito» (y con ellos publica Aub en 1971, por fin, *Las buenas intenciones*).

A pesar del desengaño de Praga en agosto de 1968, la mutación ideológica de Pradera hubo de ser lenta, en su caso sin crisis depresiva, pero quizá sí con alguna intemperancia típicamente praderiana. En el día grande de las fiestas de San Pedro de Burgos, el 29 de junio de 1969, tuvo lugar una de las múltiples fiestas taurinas que propiciaban a medias Domingo Dominguín y la cuadrilla de amigos. Esta vez se sumó a la fiesta Orson Welles, que había asistido a una corrida de Antonio Ordóñez (entonces su apoderado era Domingo Dominguín, también empresario de la plaza).

A la hora de la cita no se había presentado todavía nadie de la cuadrilla, excepto el más joven, Romero de Solís, que contempló estupefacto la pirámide de cangrejos de río que Orson Welles había trasegado ya para estar en condiciones de concentrarse después en los comensales, en sus giros, expresiones y bullas taurinas. Todavía duraba para entonces la impresión de la invasión soviética de Praga y Pradera la deploró, como todos. Pero el humor negro juega sus malas pasadas, y ahí lo puso Dominguín para jalearse, feliz, ya en la cena y con todos pasados de copas, que mientras los norteamericanos «estaban en la luna», y era literal porque acababan de pisarla, «nosotros, los comunistas, tomamos Praga». Ya había dicho Napoleón que quien tomase Praga tomaba Europa. Cuenta Romero de Solís que la cosa acabó bien gracias a las estentóreas carcajadas de Orson Welles: la defensa de esa invasión no era una extravagancia minoritaria entre

comunistas, y Pradera esta vez posiblemente no fue ni precoz ni perspicaz: ni repudió los tanques sin más ni fue el primero en hacerlo en aquellos tiempos.

Con mayor o menor humor negro, Prager, Padilla y algunas cosas más acabarían abriendo, sin embargo, el camino de espinas de un desencanto que se traduciría también en desafecto por la frustrante revolución castrista y por la inviable alternativa comunista. Dejaron de ser poco a poco exageraciones y propaganda pura las denuncias de Koestler y quizá acabaría siendo verdad que el despotismo de Stalin estranguló todo margen de duda a quienes habían creído en la fe comunista. A Pradera le gustaba poco una expresión de Domínguez, que le llamaba *carlista-leninista*: quizá el ingenio verbal es a veces el mejor y más venenoso aliado de la verdad biográfica.

Tras varios años de trabajo, Fernando Claudín publica por fin en este mismo 1970 otra consecuencia del desencanto. El resultado de sus análisis autocríticos lleva el título inconcuso de *La crisis del movimiento comunista*, «cuyo primer tomo lanzamos ahora, con Ruedo Ibérico», según escribe Jorge Semprún en el extenso prólogo al libro. Va en esas páginas algo muy parecido al embrión de su futura *Autobiografía de Federico Sánchez*, ese texto que tanto José Martínez como Pradera saben que está escribiendo y han leído en parte, aunque avanza lentamente. Ahora incluye ya la conformidad de Semprún, «en cuanto a lo esencial», con el análisis marxista que propone Claudín de la crisis comunista. El volumen de Claudín sería «libro de cabecera de la izquierda situada fuera del PCE», como escribió Pradera a la muerte de Claudín, el «último internacionalista», en 1990.

El criminal diagnóstico que se desprende de este libro minucioso es casi exasperado. Se trata de la «crisis general, irreversible», de un movimiento incapaz «de autotransformarse». La última reserva de esperanza consistía en que una de las fracciones pudiese «crear una nueva vanguardia revolucionaria marxista». Lo que había fracasado no era el marxismo sino «determinada dogmatización y perversión» del pensamiento marxista. Al menos, el Informe Jrushchov de 1956 había acabado con dos mitos o dos mentiras, aunque casi nadie entendiese nada entonces: el PCUS no era «el portador indiscutible del marxismo revolucionario» ni encarnaba las ilusiones que despertó la revolución de Octubre. El segundo mito derribado era que la URSS hubiese logrado «la primera sociedad sin explotación del hombre por el hombre».

Todo eso importaba ya poco a la acción directa y guerrillera de Antonio Negri, Ulrike Meinhof o Giangiacomo Feltrinelli, aunque sí movilizó a heterodoxos comunistas como Rossana Rossanda. Del mismo modo que algunos abandonaban el Partido y proliferaban las crisis internas, ella fundaba en 1969 *Il Manifesto* mientras su pareja K. S. Karol explicaba la política de los guerrilleros en el poder cubano en otro libro de Siglo XXI en 1970. Pero la izquierda más joven y radical, y quizá no solo ella, repudiaba toda forma de claudicación al Capital y las fuerzas imperialistas, entre otras cosas porque habían crecido entre las consignas de la violencia legítima que predicaban algunos tótems del momento, desde Frantz Fanon o el Che hasta Sartre o la auténtica estrella emergente que era Herbert Marcuse. La violencia es un «derecho natural» de las minorías oprimidas. La suya no engendra violencia sino que rompe la violencia establecida, según la contribución de Marcuse a *Crítica de la tolerancia pura*, publicado en catalán, traducido por Francesc Parcerisas, en Edicions 62, en 1970 (¡y en castellano en la Editora Nacional!). Allí vuelve a legitimar la violencia fuera de la legalidad si las vías «legales resultan insuficientes». Para que circule en el ámbito hispánico, François Maspero ha publicado en 1970, y en castellano, el *Minimanual del guerrillero urbano* de Carlos Marighella, brasileño y maoísta, concebido para animar a la desestabilización terrorista. En marzo del mismo año, Feltrinelli desenmascara el

auténtico rostro del fraude de la democracia parlamentaria y apela a la verdad de Lenin: *Contra el imperialismo y la coalición de las derechas*.

En España empieza a haber alguna experiencia directa de esa movilización revolucionaria, socialista y armada. El juicio de Burgos contra los miembros de ETA en 1970 puso a prueba la complicidad de la izquierda antifranquista con la violencia revolucionaria. Pradera, en particular, se movilizó él mismo y movilizó a muchos otros, como había sucedido con Julián Grimau seis años atrás. Eran dieciséis los presos de ETA juzgados y seis las penas de muerte que pedía el fiscal en el consejo de guerra celebrado entre el 3 y el 9 de diciembre de 1970 por tres asesinatos (Melitón Manzanos en 1968, y un guardia civil y un taxista en 1969). La movilización nacional e internacional de esos días fue frenética pero empezó sobre todo tras conocerse la petición de la fiscalía. Todos creían que el régimen abonaría una sentencia ejemplarizante y cumpliría las penas de muerte. Cuando Vázquez Montalbán se dispone a poner en limpio la entrevista que acaba de hacerle a J. M. Castellet para un *Triunfo* de 19 de diciembre, han pasado ya algunos días del juicio pero sigue sin haber sentencia. «El clima de la ciudad, del país, del mundo intelectual y de todos los mundos» ha cambiado, y la charla con Castellet a propósito del Premio de Ensayo Taurus que acaba de ganar de golpe lo sitúa «en su verdadero lugar, del que nunca debiera haberse apartado la polémica interna de la cultura progresista». Le había caído a Castellet, cuenta Vázquez Montalbán, medio millón de pesetas gracias a un jurado presidido por Laín Entralgo en Taurus, «una editorial en plena cirugía estética» bajo el mando de Jesús Aguirre, y «por un trabajo de investigación literaria» sobre Salvador Espriu.

La antología *Nueve novísimos poetas españoles* del mismo Castellet había causado tan grandísimo revuelo lírico esa primavera de 1970 que parecía expulsarlo del antifranquismo, del progresismo, de la decencia y de la honradez del militante por el realismo socialista. Pero Vázquez Montalbán, «de golpe», ha entendido que, cuando «en Burgos se está celebrando un consejo de guerra» y ETA ha «raptado a un diplomático alemán», se viven horas importantes. Castellet «puede vivirlas como el que más», pese a su infidelidad a la antigua poesía de los rojos del realismo histórico y en favor de los brillos espumosos novísimos, e incluso pese a estudiar «mística judaica para entender a Espriu». No hay duda de que para todo ello es «más válida la *Anatomía de la crítica* del señor Frye que *Arte y sociedad* del amigo Plejánov». Castellet, como Aguirre, como Aranguren y Pradera, se salvan de la hoguera roja a pesar de que parezcan ya todos héroes de la traición, pero quizá sean solo terminales de la infidelidad sin oportunismo ventajista y sin claudicación franquista. Van por libre, porque el dogmatismo marxista cotiza mal en los nuevos equipos intelectuales, cuando la fábrica de heterodoxia que son los nuevos editores, la cultura pop y la contracultura ha mandado a paseo el doctrinarismo teórico y la prepotencia ideológica comunista. Es natural por tanto que a Vázquez Montalbán le llamara la atención el anuncio por parte de Jesús Aguirre de un futuro libro de Castellet, *La ética de la infidelidad*. Sonaba en realidad a resumen cínico y jovial de múltiples conversaciones de amigos en tránsito, desde García Hortelano hasta Aranguren. Castellet duerme en Madrid en casa de Jesús Aguirre habitualmente por entonces, como antes dormía habitualmente en casa de Alfonso Sastre. Han fabulado ya, con un Aranguren ahora tan hippie como Castellet, sobre la escritura de ese venturoso título mientras registran nuevas melancolías.

El 2 de diciembre se han puesto en marcha varios manifiestos de intelectuales contra el proceso de Burgos, con detención incluida de los promotores, aunque no de todos. Pere Portabella recuerda haber acudido a Burgos desde Barcelona y recuerda también la agitación de muchos, y entre ellos Pradera, en busca de firmas a textos similares y simultáneos. Pero debió de existir otro

que no llegó a prosperar, porque Pradera y Juan Benet acuden el día 5, con el juicio todavía en marcha, a casa de Dionisio Ridruejo para recabar su firma. ¿Qué decía el texto o qué texto le ofrecieron? No he conseguido averiguarlo, y quizá no llegó a hacerse público.

Lo que sé es que tanto Benet como Pradera salieron sublevados de casa de Ridruejo y sin su firma. Sin embargo, sí figura Juan Benet al pie del manifiesto «A la opinión pública» del 10 de diciembre publicado en *La Vanguardia*. Sin mencionar a ETA, sino al juicio «contra dieciséis vascos», el texto reclama que el proceso «no se resuelva con ejecuciones de muerte». Los firmantes habían cursado ya otros «escritos a diferentes autoridades españolas», pero ratificaban ahora que «el empleo de métodos violentos –sean estructurales, represivos o de contestación daña el sentimiento humanitario, esencial para la construcción de la convivencia verdaderamente justa, libre y democrática». Lo cual significaba en ese momento que condenaban tanto la violencia de Estado como también y expresamente el secuestro del cónsul honorario de la República Federal de Alemania en San Sebastián, unos pocos días antes, y exigían su liberación, «lo que desvirtuaría la posible imputación de crueldades y contribuiría a la superación de las causas que originan estas graves situaciones». Firmaba esa declaración el entorno político más próximo a Ridruejo, Tierno Galván y Joaquín Ruiz-Giménez, incluido Juan Benet.

Conjeturo que el documento que Ridruejo no quiso firmar se parecía o fue el primer borrador del que acabaron firmando en torno a trescientos intelectuales el 12 de diciembre de 1970 reunidos en el monasterio de Montserrat (y a instancias de los habituales Pere Portabella, Octavi Pellissa, Xavier Folch, Castellet, Sacristán, Oriol Bohigas, Jorge Herralde o Jordi Carbonell). Había más firmantes en Madrid del borrador, cuando Pere Portabella anduvo ahí, pero fueron excluidos en Montserrat dada la imposibilidad de que verificasen el texto final de ese encuentro masivo. Esa última versión tenía otro tono, otro lenguaje y una contundencia casi armada. Consideraba «inadmisible» la aplicación de las penas de muerte, repudiaba el proceso de Burgos, exigía «dejar sin efecto cualquier condena que pueda ser dictada» por el tribunal militar, reclamaba la promulgación de una «amnistía general» para «presos políticos», «sancionados y exiliados» y la derogación del decreto ley «de bandidaje y terrorismo», entre otras cosas. De hecho pedía la autodestrucción del franquismo, y rapidito.

Ridruejo no había firmado el borrador porque implicaba una adhesión tácita a la violencia de ETA como movimiento antifranquista, socialista y revolucionario. Pero es lo que firmó toda la oposición de relevancia, tanto si estuvieron físicamente en Montserrat como si estuvieron solo de corazón: desde Josep Benet hasta Vargas Llosa, según el registro publicado por *Horizonte español 1972*, de Ruedo Ibérico. Allí no estuvieron ni Juan Benet ni Javier Pradera, pero se enviaron al menos quince telegramas de adhesión desde Madrid, y entre ellos los de Pradera, Jaime Salinas, Jesús Aguirre, Daniel Gil, Pedro Altares y Jesús Munárriz (lo cual equivalía a sumar sus editoriales: Alianza, Taurus, Edicusa, Hiperión y Ciencia Nueva). Pero cuando todavía no se había publicado la sentencia, que solo llegaría el 28 de diciembre, Ridruejo escribió el día 15 una larga carta al capitán general de Burgos, García Rebull, con una nueva petición de clemencia contra las «ejecuciones políticas». La presión global hizo que, por fin, el 30 de diciembre un consejo de ministros extraordinario presidido por Franco conmutase las penas de muerte.

Pradera no logró entender hasta mucho tiempo después las razones de Ridruejo para negar su firma. Lo entendería cuando las complicidades o las simpatías con la radicalidad de la izquierda armada perdiesen fuelle, cuando no quedase ya nada de la tolerancia epocal que la izquierda antifranquista e incluso democrática mantuvo durante algunos años ante los *gudaris* de ETA. El

rechazo de Ridruejo a la lucha armada en 1970 era el mismo que aducía en la carta a Vicent Ventura de 1964, convencido de que «la revolución conduce a la dictadura».

Todavía Ridruejo no podía pensar en 1964 y en 1970 en Giangiacomo Feltrinelli, pero lo haría dos años después. Como decía un panfleto fabricado por los servicios secretos italianos, Feltrinelli era entonces el «principal agente castrista en Europa». Su enrolamiento con la guerrilla urbana era hijo directo del repudio al relajamiento revolucionario y a la integración burguesa de los comunistas. Cuando muera Feltrinelli al estallar accidentalmente los quince cartuchos de dinamita que estaba instalando en una torre de alta tensión, en 1972, acudirán al cementerio sus amigos editores. Allí estuvieron Einaudi y Rowohlt, Klaus Wagenbach y Christian Bourgois, pero también Régis Debray, megáfono en mano, liberado de la cárcel de Bolivia desde 1970. *L'Unità*, órgano del PCI, anunció la muerte de Feltrinelli muy expresivamente como el «trágico símbolo de un fracaso». Tampoco ahora Ridruejo escurrió el bulto y tras la muerte de Feltrinelli escribió contra «la obvia ineptitud del método guerrillero y terrorista» que le había costado la vida, en coherencia con su posición de 1970 ante el proceso de Burgos, contra la violencia de Franco y la violencia de ETA.

Pero las tentaciones eran demasiado fuertes. Al mes siguiente del proceso de Burgos, en enero de 1971, se fragua el segundo frente armado español y se constituye el Comité Coordinador pro-FRAP, es decir, del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. Su núcleo dirigente procede de la escisión marxistaleninista del PCE en 1964. Por entonces, ETA-VI está en una posición indesmayable y segura. Cree y difunde que Euzkadi es la «Cuba de Europa», según evoca Mario Onaindia, cuando los partidos comunistas ya han renunciado a la revolución pero la violencia para muchos constituye un legítimo instrumento de lucha contra el franquismo y contra el capital.

No es una creencia aislada ni ultraminoritaria entre intelectuales y universitarios; es una fe de combate contagiosa. Neus Espresate ha incluido en el catálogo de Era en 1972 un libro sobre *Los tupamaros*, el movimiento guerrillero de Uruguay, con documentación y crónicas directas sobre sus vidas y acciones militares. En 1971 Herralde había impreso otro reportaje sobre los Tupamaros, de Antonio Mercader y Jorge de Vera, secuestrado por la censura, con juicio en el Tribunal de Orden Público y tremebunda multa de cien mil pesetas. En Italia se perseguía el sabotaje guerrillero que practicaba la izquierda de la izquierda de Toni Negri, Potere Operaio o Lotta Continua. Tomaban posiciones literalmente en la calle a través de la acción directa, la movilización obrera y la revuelta permanente, mientras las Brigadas Rojas pasaban abiertamente a la acción en 1970 con el objetivo de movilizar las conciencias revolucionarias de la sociedad burguesa. Durante algunos años de mi adolescencia, lo primero que veía cada mañana al levantarme era una pegatina del FRAP en la ventana, seguramente tras el fusilamiento rubricado por Franco de tres de sus militantes y de dos miembros de ETA en septiembre de 1975.

5. NUEVAS AMISTADES

A esas alturas, Pradera había resuelto ya sus dudas sobre un posible traslado a Chile en 1970 para «participar de alguna forma en el proceso chileno» presidido por Salvador Allende desde ese año. La oferta era muy tentadora y contaba con el aval y la confianza del propio Allende a través de Arnaldo Orfila. Querían lanzar hacia noviembre de 1970 «la editorial del Estado, en formación», Quimantú, que en mapuche significa «sol de saber», con una abierta vocación popular (fueron suyos los «Minilibros», por ejemplo). Sin embargo, poco después la propuesta se reorientó hacia el ámbito universitario y la dirección de un «complejo editor que formaría la Universidad de Chile, nosotros y otra empresa que cuenta con recursos del Estado y tiene bastante dinero», a semejanza del funcionamiento de FCE en México. Aunque hacia junio de 1971 Pradera sentía que trabajar con Eduardo Castro en la Editorial Universitaria de Chile podía ser su modo de contribuir al nuevo socialismo de Allende, concluyó que «son muchas las cosas que me retienen en España (incluso profesional-culturalmente)».

En Siglo XXI estaban obstinados en que Pradera se encargara formalmente del catálogo de la editorial, no solo a distancia y como mero supervisor y asesor externo sin contrato y sin sueldo (aunque sí con participaciones en la editorial). Orfila lo quiere embarcado del todo en el invento, pero Pradera parece más seguro e incluso confiado en Alianza. Orfila está dispuesto a ofrecer a Pradera una remuneración equivalente a la que tiene con sus «amos actuales» en Alianza: «Sí, ya sé que usted nunca tendrá amos», escribe Satostegui con buen humor, «pero era para estar dentro de la dialéctica.» Por supuesto, a ella le parece que un sí de Pradera «sería la gloria», entre otras cosas porque es «la combinación perfecta y proporcionada de intelectual, administrativo, tacaño y vinculado, necesaria para ocupar ese cargo», de modo que «va a ser la solución y el éxito». De hecho, la carta es un instrumento de chantaje amistoso y sentimental para que se «ponga a pensar que no es una cuestión de elegir sino de cumplir con una obligación». Satostegui cree que Pradera incluso ha «mejorado el modelo, sin que esto signifique que le estoy falluteando a Arnaldo [Orfila]». Pero Pradera le parece «intelectualmente de un ojo bárbaro para pescar lo mejor, administrativamente más roñoso que yo y metiéndote donde quieras y como quieras, como siempre».

Le conoce muy directamente Satostegui desde hace años y entiende bien lo que debe pasar por su cabeza: «Dada tu austera sobriedad, esta carta te está dando asco, pero tal vez sea útil que te enteres de tus cualidades apreciadas por todos los que hemos tenido la suerte de conocerte (!)», y son de María Elena el paréntesis y el signo de admiración. Orfila ha estado persiguiendo ese sí de Pradera desde hace tiempo, sin obtenerlo. Quizá por eso una de sus cartas contiene una larga y articulada explicación de su rechazo a la publicación de un libro sobre Cuba que, según Orfila (que no fue nunca comunista), encarna lo peor de la izquierda europea y parisina, pseudorrevolucionaria y retórica, además de anticubana: «Me gustaría preguntar a todos estos grandes teóricos revolucionarios europeos», le escribe Orfila muy irritado, «de dónde sacan tanto valor para atacar tan burdamente a una revolución joven, subdesarrollada, con cuadros improvisados pero que está transformando un pueblo desde su raíz, cuando ellos nos ofrecen ese espectáculo deprimente de una izquierda pseudorrevolucionaria que, como la francesa en

especial, no ha ofrecido en medio siglo un ejemplo, una experiencia que pudiera despertar algún respeto de las nuevas generaciones.»

Orfila había entrado hacía años en una lógica radicalizada acelerada por su segunda mujer, Laurette Séjourné, y ahí iba a seguir. Todos le parecían solícitos «aspirantes a destructores de la Revolución Cubana», en descripción muy acorde con el modo en que Casa de las Américas aludía al «habitual equipo de latinoparisinos colonizados». Pero Pradera se encontraba ya en zona de desmayo o de abierta reticencia, antes de Padilla y desde luego durante Padilla y su autoinculpación de abril de 1971. Ahí estaba también Octavio Paz, distanciando cada vez más de Orfila, mientras este seguía disfrutando de las vacaciones de verano en Cuba, porque «las cosas son muy distintas de lo que los llamados intelectuales de izquierda europeos se imaginan». A Paz acababa de publicarle en Siglo XXI los ensayos de *Corriente alterna* y poco después aparecía, por iniciativa de Séjourné, el epílogo reflexivo a *El laberinto de la soledad*, titulado *Postdata*, tras la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Fue «en extremo valiente», según sentencia de Carlos Fuentes a la muerte de Orfila.

Entre las más altas gratificaciones de Orfila estuvo publicar los diarios del Che Guevara y entre las desilusiones mayores la traición disfrazada de mero «incumplimiento» de contrato por parte de Mario Vargas Llosa. Según Orfila, «un buen día», una carta de la agente literaria Carmen Balcells le comunicó un nuevo compromiso del autor por el que renunciaba a publicar con él la apalabrada novela *Pantaleón y las visitadoras*. A un Orfila dolido y resentido le pareció que en Vargas pesaron «razones de los dólares que el corazón no entiende», como le contaba a Pradera en una entrevista de 1978 publicada sin firma en *El País*.

Quizá pesó la bolsa, pero las rupturas que provocó el caso Padilla en la primavera de 1971 pueden ser la causa real y política de la situación, del mismo modo que Pradera dejó por entonces de acompañar a Orfila en su adhesión incondicional a la revolución. Orfila defendía en un *Triunfo* de 13 de noviembre de 1971 la necesidad de una «descolonización cultural» de América Latina, algo por lo que venía trabajando desde hacía diez años, primero en FCE y después en Siglo XXI. Había llegado a España para fundar la editorial porque «quizá es aquí donde tal vez haya más posibilidades en el aspecto de la creación industrial». Por eso destacaba el lanzamiento en Siglo XXI de España de la *Historia Universal* en 37 «tomos de bolsillo», cuando estaba a punto de lanzar la *Historia de la Filosofía* en once volúmenes, y no callaba la crítica a las limitaciones legales a la importación de libros de México (calculaba que en un 20 % de los títulos).

Cuando Pradera vuelve a rechazar en agosto de 1971 la propuesta formal de ser director general de Siglo XXI, sugiere de nuevo a Faustino Lastra como gerente, mientras él mantiene su asesoramiento externo y la titularidad de sus acciones, pero omite todo comentario sobre los «destructores de la Revolución Cubana». Es verdad que Javier Pradera no ha firmado ni la primera ni la segunda carta de protesta de los intelectuales españoles contra Fidel Castro de mayo de 1971, suscitada por el caso Padilla, pero sí la han firmado sus más obvios aliados, además de amigos personales y asiduos de resistencia, antifranquismo y marxismo en la franja elástica encarnada por Castellet, José Agustín Goytisolo o Juan García Hortelano y hasta los mismísimos Fernando Claudín y Jorge Semprún. En la segunda, sin embargo, no figuran ya las firmas de Cortázar ni de García Márquez, pero sí las de más de sesenta escritores (trece de ellos españoles).

Además, desde febrero parecen activarse con Juan Goytisolo, Cortázar, García Márquez y Vargas Llosa las reuniones fundacionales para la creación de una nueva revista, *Libre*. La carta que de veras firma Pradera es posterior y expone su apoyo a Cuba y por tanto a Fidel Castro, en el

verano de 1971, junto a Manuel Sacristán, Gabriel Celaya, Alfonso Carlos Comín o Carlos Castilla del Pino. Lo cuenta con detalle Pablo Sánchez en sus *Liturgias utópicas*, y es pista más que suficiente para identificar a Pradera en la cercanía leal a Orfila y a la vez madurando (lentamente) el escepticismo ante la revolución. Por esas fechas evoca Ignacio Romero de Solís un encuentro de intelectuales con el agregado cultural de la embajada de Cuba en Madrid y la soledad de Jaime Salinas y él mismo al discrepar, quizá indebidamente, de la línea oficial cubana y del resto de los presentes, incluido Pradera: el pistolón que esgrimió el agregado cultural castrista para acabar con las heterodoxias del más joven y revoltoso, Romero de Solís, fue un argumento contundente. Mostraba también que para Pradera los sarcasmos y el don de Romero de Solís para la provocación tenían un límite. Quizá con paternalismo, quizá con convicción, Pradera reprende la propensión de Romero de Solís a jugar con cosas serias. Posiblemente está apurando Pradera las últimas gotas de indulgencia hacia los desmanes de la revolución, el despotismo cultural y la represión cubana, quizá porque aún persiste en él la convicción en el papel que Siglo XXI pueda desempeñar en la resistencia antifranquista. Quizá también porque el patriarca Orfila había defendido y seguía defendiendo sin fisuras a Cuba contra los intelectuales franceses incapaces de armar revolución alguna, al menos de las de verdad.

En Siglo XXI Pradera hace lo de siempre y acude a los amigos con investigaciones, proyectos, libros y medios libros en marcha, y por eso en esos años se le adivina detrás de publicaciones de Castilla del Pino, Ferrater Mora, el «prometedor sociólogo» –dice Pradera por carta– José María Maravall, Víctor Pérez Díaz y Manuel Castells, y de la *Historia Universal* que se fabrica desde España, aunque sigue sin estar cubierto el puesto formal de gerente en Madrid. Incluso sería deseable pensar ya en una colección de crítica y ensayo literario que podría dirigir, cuenta Pradera a Orfila en 1970, «uno de los más interesantes escritores españoles contemporáneos», Juan Benet, socio fundador de Siglo XXI de España, siempre cerca de Pablo García-Arenal. Allí aparecerán libros de Valente e investigaciones de Iris Zavala, las averiguaciones lingüísticas de García Calvo y la historia catalana de Albert Balcells, el anarquismo que interesa a Clara Lida y la visión materialista y marxista de Gonzalo Puente Ojea sobre el cristianismo. José Álvarez Junco publicaría allí también *La comuna en España*, y habría podido publicarse *La mitología falangista* si Pradera hubiese hecho caso al juicio favorable de Álvarez Junco ante ese manuscrito, abandonado seis o siete años atrás. No era la primera opinión favorable que recibía: por mediación de Xavier Folch, Pradera quiso que Josep Fontana lo leyese unos pocos años atrás y su juicio fue también entusiasta. Pero no lo publicó entonces ni lo haría después.

El mismo Juan Benet prologa *Ven, ven Lucifer*, de Francisco Regueiro, con un texto que Benet llama «una cosa», después de haber accedido a imprimir su propio y cómico *Teatro*. Su vena más gamberra se ha disparado con la resonancia pública de la que disfruta tras obtener en 1969 el Premio Biblioteca Breve por *Una meditación*. Incrementa sus contactos regulares con el equipo de Seix Barral, que publica los ensayos de *Puerta de tierra* al año siguiente, y aumenta su presencia y sus relaciones personales con Cataluña, en particular con Rosa Regàs y La Gaya Ciencia.

La espiral de hiperactividad no va a dejar de acelerarse en estos años. Pradera participa en la urdimbre que vincula Taurus y Alianza en 1973. Cuenta Pradera que por esos años Alianza había alcanzado un acuerdo con Polanco y Santillana «para adquirir una parte minoritaria en el capital de Taurus, distribuir sus libros, hacerse cargo de una parte de su nómina (Jorge Campos pasó a trabajar con nosotros) y publicar en bolsillo o como *paperback* una selección de sus títulos». Eso significa la incorporación al Consejo de Administración de Alianza de Fierro (Taurus) y de

Huarte (Alfaguara), y que Pradera forme parte a su vez del Consejo de Administración de Taurus: se está fraguando el grupo Timón.

De la operación se entera Josep M. Castellet en Barcelona en 1973 porque se la explica Jesús Aguirre, al frente de Taurus desde 1967 (con José María Guelbenzu como mano derecha). Castellet se da cuenta de que ese acuerdo prefigura un equipo compacto y coaligado compuesto por Aguirre, Salinas y Pradera. «Parece que una cierta élite editorial madrileña se solidifica y crece», apunta Castellet en su dietario, admirado de la habilidad para que tres personas «dominen intelectualmente» lo que define como «el núcleo más refitolero del “desierto de Castilla”»: Alianza, Taurus, Siglo XXI y Revista de Occidente. Los banqueros y capitalistas de la operación son Ortega Spottorno y los Fierro del Banco Ibérico (y luego del Central), pero con ellos se llevan «lo mejor que circula por Madrid: los viejos liberales y los menos viejos marxianos pasados por el filtro del obligado realismo cotidiano» (de Aranguren a Castilla del Pino, puntualiza Castellet). Le parece que los tres «refinados intelectuales» se han «convertido en los ejecutivos del neocapitalismo editorial madrileño». Pese a que Jesús Aguirre ríe la gracia, Castellet considera que el dato es relevante para entender la «nueva fase del capitalismo español» y el papel que se espera en Francia, Italia, Alemania o España de esos intelectuales ya casi exmarxistas y exrevolucionarios disidentes de Cuba y crecientemente críticos con la beligerancia guerrillera de la nueva izquierda: encarnan «una cierta forma de tecnocracia».

OTRAS DECEPCIONES

Demasiados cambios juntos, en particular cuando también Javier Pradera cree ya, anota Castellet en su diario, que la Cuba de Castro es «una experiencia decepcionante». Ha sido «una de las más estimulantes y una de las más tristes», ha dicho Pradera, como si una y otra vez se repitiese «la misma historia: la de la esperanza ineficaz». La primera experiencia directa de Cuba en enero de 1968 había sido narcótica, jovial y explosiva; la segunda, a finales del mismo año, más incierta, inquietante, e incluso intimidatoria. Pero la autoinculpación de Heberto Padilla en abril de 1971 activó la caja de los truenos de celos reprimidos y sospechas acalladas en una izquierda que vivía una escisión dramática y en alguna medida devastadora de sus certezas; una escisión entre los fieles a una revolución en marcha con sus costes íntegros y quienes modulaban sus rebeldías sistémicas en contacto con el mundo de la empresa, la nueva izquierda occidental, la nueva izquierda británica, las escisiones comunistas en Italia y el caldo de cultivo que había de llevar al eurocomunismo e, incluso, el relevo generacional del socialismo indígena.

Porque también el PSOE empieza a moverse. Ahora es apenas un residuo político inerte de la República, pero ha recuperado vitalidad e imaginación gracias a un pequeño grupo en el País Vasco, cercano a Enrique Múgica, que cuenta con gentes nuevas como Ramón Jáuregui y José María Benegas; otro grupo se mueve en Madrid en torno a Pablo Castellano; el sindicato UGT ha resucitado con la fuerza y el empuje de Nicolás Redondo, y no cesa tampoco la actividad de un grupo de amigos andaluces que ha protagonizado, todavía sin demasiado ruido, el congreso socialista del verano de 1972 en Toulouse: *el grupo de Sevilla*. Tienen nombre porque son peligrosos y la primera escaramuza se había vivido ya en un comité nacional del PSOE en julio de 1969, en Bayona, cuando Felipe González habló en representación de los jóvenes y significó un «profundo revulsivo» inmediatamente después del estado de excepción dictado por Franco durante los primeros meses del año. Maravall lo llama «el inicio del despertar del socialismo».

De acuerdo con el minucioso recorrido trazado por Pilar Ortuño, el respaldo alemán al joven socialismo del interior había empezado al menos en 1970 y se afianzó en 1972 gracias a Willy Brandt y Helmut Schmidt. Los invitados españoles al congreso del SPD en mayo de 1970 en Saarbrücken fueron el secretario general Rodolfo Llopis pero también Enrique Múgica. Y el apoyo financiero del Partido a los detenidos (incluidos el propio Múgica o Nicolás Redondo), para fianzas, multas y abogados, había sido fluido y real en los últimos años y lo seguiría siendo a través de la Fundación Ebert.

Tanto Maravall como Ignacio Romero de Solís habían establecido ya relaciones con ese equipo de socialistas. De forma tácita o natural, pivotaban por entonces en torno a la figura discreta, casi siempre silenciosa en público, de Felipe González, un joven abogado laboralista que había llevado alguna causa relevante e incluso había logrado algún éxito contra la legislación franquista. Desde 1970, ese grupo había promovido una acción decidida de toma del control del Partido. El liderazgo de Rodolfo Llopis en el PSOE del exilio en Toulouse, seguramente con los tradicionales recelos hacia el interior muy acentuados, estaba indefectiblemente superado por el cambio de época, los efectos de la movilización juvenil y el nuevo tono del inconformismo antifranquista. Y tanto Nicolás Redondo como Pablo Castellano, tanto Enrique Múgica como Luis Yáñez, tanto Miguel Boyer como Alfonso Guerra, tanto Luis Gómez Llorente como Ángel de Lucas vivieron el congreso de 1970 como la oportunidad para reorientar la actividad socialista en España.

Es imposible que Pradera no estuviese al tanto de esos movimientos de fondo y de la esclerosis creciente que inutilizaba al exilio socialista. La frustración de Juan Benet en diciembre de 1968, de viaje a Toulouse, hubo de ser compartida de inmediato por Pradera: Benet había sido comisionado por su jefe de filas de micropartido, Ridruejo, para sondear a Rodolfo Llopis sobre las posibilidades de repetir un encuentro como el de Múnich en 1962. El plan era relanzar las fuerzas del interior con el apoyo de las fuerzas del exilio. Pero no salió nada de esa reunión, quizá porque ya no podía salir nada de la suma de recelos y enquistamientos que vivía buena parte del exilio histórico ante el empuje y la renovación que detectaban desde hacía años en los movimientos del interior. Se acercaban peligrosamente a las puertas del castillo.

La segunda batalla traumática será de nuevo en Toulouse, en agosto de 1972, con un enfrentamiento irreconciliable entre el socialismo del interior y la vieja guardia del exilio bajo el mando nominal de Rodolfo Llopis (que funda entonces el PSOE Histórico). Es seguro que en este momento Pradera tiene el radar orientado ya a lo que pasa allí. Desde el siguiente otoño, Pradera participará en las reuniones organizadas por Faustino Lastra, cómplice en Siglo XXI y excomunista como él. En el jardín de la casa de Lastra, en el parque del Conde de Orgaz de Madrid, había filmado Jorge Semprún en ese mismo julio de 1972 las interminables respuestas de Dionisio Ridruejo y de otros para su documental *Las dos memorias*. El mismo verano en que Maravall excavaba la memoria de Pradera sobre la rebeldía estudiantil de los cincuenta ante el magnetófono.

En esa casa y en otoño de 1972 empiezan los contactos asiduos y regulares de Javier Pradera con Isidoro, poco antes de que Felipe González pase por el prescriptivo cacheo sin calzado ni pantalones en la Dirección General de Seguridad. Es la época de la camisa a cuadros, la americana sin corbata, las patillas de bandolero, el cigarrillo Rex en la mano y la autoridad que desprenden los fotogramas un poco posteriores del *Informe General* de Pere Portabella. E igual que la casa de Auger había servido para reunir a Pradera, Ridruejo y Semprún en los años cincuenta, sirve ahora para reunir, a menudo sin Auger en la casa, a los mismos pero ya con Isidoro también. Es el mismo Clemente Auger quien aglutina en su casa en 1973 con Jesús

Chamorro un movimiento de juristas antifranquistas, Justicia Democrática, que involucra activamente a José María Mena, Carlos Jiménez Villarejo o Cesáreo Rodríguez-Aguilera.

Esas cintas de 1972 se custodian en Oxford, porque en el St. Antony's College era entonces profesor José María Maravall. Su militancia un tanto exótica en el Partido Laborista inglés tuvo mucho de aprendizaje socialdemócrata por inmersión, pero fue también una forma de huida ante las sacudidas que estaba viviendo la izquierda antifranquista en su conjunto y en particular el grupo en el que militaban Maravall y otros amigos de Pradera, muy en particular José Ramón Recalde. En 1969 había vivido el FLP el estallido de las tensiones entre quienes en el grupo tenían tentaciones militares y quienes optaban por vías menos radicalizadas. Muchos años después, en la presentación de las memorias de Recalde en Madrid, Pradera bromeaba sobre la militarización del grupo y las prácticas precarias de tiro que el mismo Recalde había llegado a realizar. La ruptura del grupo fundado por Julio Cerón llevó a unos pocos hacia opciones socialdemócratas, como Maravall, estupefacto por la presencia en el laborismo inglés de facciones socialistas radicales y nada socialdemócratas. Por supuesto, de esa tibieza política y pequeñoburguesa tampoco había apenas rastro en España.

La batalla real en el PSOE no se iba a dar hasta octubre de 1974, en Suresnes: era terreno neutral en la periferia de París, con alcalde socialista y, sobre todo, lejos del corazón histórico del exilio en Toulouse. El plan que habían ido tramando en los dos últimos años desembocaría en la defenestración de la vieja guardia del PSOE ante la inminencia, esta vez casi, casi segura, del final de Franco. El tránsito político es cruel porque con él se resuelve expeditivamente la tensión histórica entre los socialistas del interior y del exilio: los primeros, abiertos a acuerdos con otras fuerzas, incluidos los comunistas; los segundos, con Rodolfo Llopis a la cabeza, muy recelosos de alianzas peligrosas. Con los jóvenes llega sobre todo la esperanza de un nuevo socialismo factible, dispuesto a renovar de arriba abajo las estructuras del PSOE. Se iniciaba una nueva época, aunque nadie supiese hacia dónde. Sí sabían que la clausura del XIII Congreso del PSOE – que contaba entonces con algo más de tres mil militantes– en el teatro Jean Vilar el 13 de octubre respaldaba un relevo traumático y consagraba inequívocamente el nuevo liderazgo de Felipe González. Acababa de dictarse la jubilación forzosa de la legitimidad histórica del exilio mientras se abría la mayoría de edad política a un puñado de jóvenes perfectamente desconocidos. Apenas habían iniciado sus contactos y primeros encuentros, sin que nadie tomase demasiado en serio la existencia misma del PSOE en la oposición, o era Enrique Tierno Galván quien encarnaba en realidad el socialismo del interior.

Suresnes dio el espaldarazo a un nuevo líder que no contaba todavía con el apoyo de Willy Brandt. Solo conectaría de veras con González meses después, en diciembre de 1974, cuando la Revolución de los Claveles en Portugal empezó a emitir sus lecciones políticas más duraderas: la fuerza que habían exhibido los comunistas aconsejaba secundar en España a los socialistas renovados y en esa dirección se activaron Brandt y la Internacional Socialista. Tampoco había acudido a Suresnes el líder carismático de la socialdemocracia europea y referente tempranísimo de González, el sueco Olof Palme. Pero significativamente sí estuvieron otros socialistas más radicalizados, como el chileno Carlos Altamirano y un François Mitterrand entonces embarcado en una alianza con el Partido Comunista francés de Georges Marchais, muy poco entusiasta de los giros eurocomunistas, o menos persuadido de lo que empezaba a estarlo Santiago Carrillo: la renovación comunista de 1964 que había saboteado con la expulsión de Claudín y Semprún resucitaría ahora bajo su propio liderazgo. El discurso de Mitterrand era entonces

fundamentalmente socialista y sin las flaquezas socialdemócratas que ya exhibía el laborismo inglés o el mismo Olof Palme.

LA LECCIÓN CHILENA

En un arranque de sinceridad, Manuel Sacristán apunta en febrero de 1974 más bien en sentido contrario. Cree que «lo anacrónico hoy empieza a ser la democracia burguesa», en la sospecha de que el intelectual progresista es el peor aliado de la clase obrera. Vázquez Montalbán recordaba en esta época a un Sacristán «hipercrítico ante el posibilismo adquirido por los partidos comunistas» y Paco Fernández Buey recordaba que Sacristán prefería hablar de comunismo antes que de marxismo porque estaba «demasiado maleado por la degradación socialdemócrata y por el “hipermarxismo” de salón de la intelectualidad sesentayochesca» (en sintonía con Orfila).

No ha dejado de pensar Sacristán en la revolución, muy perplejo aún ante las nuevas conductas de los jóvenes, más atraídos por otras formaciones políticas radicales que por el PCE o el PSUC, pero a la vez desconcertado por los movimientos en o desde su propio partido. De hecho, ya había vivido su propia escisión con la salida de un grupo de militantes liderados por Jordi Solé Tura y Alfonso Carlos Comín para fundar Bandera Roja en el feroz 1968: habían contado con la complicidad activa de Pradera y Claudín, aunque la perdieron en su regreso al Partido en 1974. También para entonces parecía amortizada o ya prescrita la esperanzada «Alianza de las Fuerzas del Trabajo y de la Cultura» que un boletín interno de los comunistas catalanes definía, en 1968, como el instrumento para unir a la clase obrera y los campesinos con los intelectuales «en sentido amplio, y algunos otros sectores de capas medias ligados con ellos», para constituir «el bloque histórico capaz de instaurar y sostener el socialismo en España». Esa había de ser la base social para «un socialismo plural y políticamente rico».

Ni en 1972 ni en 1974 comparte Sacristán la alianza ya explícitamente eurocomunista que propugna el PSUC entre clase obrera y pequeña burguesía ni aprueba la «infiltración de valores burgueses», ni la claudicación ante el capitalismo y el reformismo. Le parece una deslealtad «hacer comulgar a los obreros con ruedas de molino del pacto social, de un pacto con “la burguesía dinámica”». Sacristán por supuesto descalifica los movimientos tácticos y estratégicos que los partidos comunistas europeos –italiano primero, español después, más tarde francés y siempre a regañadientes el portugués– promueven para escapar de la sombría órbita soviética, sin renegar de ella, y a la vez tratando de aclimatarse a las condiciones reales de vida de las sociedades occidentales.

Para esa nueva izquierda más posibilista, marxista pero escarmentada del comunismo, el golpe de Augusto Pinochet en septiembre de 1973 contra Salvador Allende vino a encarnar sus peores recelos. La experiencia chilena será la última lección sobre la inviabilidad de un socialismo acelerado o la radicalización de la izquierda. No existía ya otra opción que la socialdemocracia o, en el lenguaje de entonces, la alianza con las élites liberales de la oligarquía burguesa. La transformación socialista de Allende acabó frustrada por las armas de un ejército que ejecutaba los deseos del capital y la burguesía monopolista. Los militares y su violencia institucionalizada eran el refugio infalible del capitalismo, y siempre estarían ahí cuando se les necesitase bajo patrocinio yanqui. Cualquier forma de subversión estaría condenada a una respuesta sangrienta y a un retroceso más grave todavía de las condiciones de libertad, democracia e igualdad en los países europeos. Esta fue la lección que una parte de la izquierda marxista sacó del golpe de

Pinochet y la experiencia chilena: el luto que dominaba la portada de *Triunfo* de aquel septiembre de 1973 podía llevar dentro un luto más íntimo, el de las aspiraciones revolucionarias de la misma izquierda.

También Castellet, ex compañero de viaje comunista y cada vez más cómodo en el socialismo catalán de Joan Reventós, Raimon Obiols y otros, sabe en 1973 que en «la Europa occidental la hora del socialismo pasa indudablemente por el reformismo, nos guste o no», como si estuviese a punto de soltar la confesión impronunciable de sentirse un *socialdemócrata de mierda*. Ya eran inocultables los desengaños de muchos con las fiebres revolucionarias y las lealtades sentimentales a la aventura cubana. Desde entonces, el mundo real parecía abocado al socialismo democrático, o a la reformista socialdemocracia, aunque no tuviese ese nombre, o el nombre fuese todavía un insulto disfrazado de diagnóstico.

Para el marxismo comunista de Sacristán, sin embargo, el golpe de Pinochet evidenciaba el error tanto de la socialdemocracia como del eurocomunismo. Lo peligroso de veras para un marxismo que renuncie a la revolución es que incluso el gran capital puede contar ya con los eurocomunistas para las labores subalternas de control social. El mismo día de la muerte de Feltrinelli, el 15 de marzo de 1972, como en una endiablada ironía histórica, era elegido secretario general del PCI Enrico Berlinguer, muy poco partidario de lucha armada ni de revolución alguna, dentro de la lógica que había defendido Palmiro Togliatti para el PCI. El llamado *compromiso histórico* de los partidos comunistas con la burguesía liberal estaba ya en marcha. La nueva estrategia comunista para desmarcarse de la insurrección armada y guerrillera y, a la vez, poner distancia con el comunismo soviético, consistía en la búsqueda de alianzas con las fuerzas progresistas como tránsito democrático a una sociedad sin clases como meta final.

El golpe contra Allende demostraba a ojos de Sacristán la equivocación de ese «compromiso histórico» de Berlinguer y los comunistas italianos: ratificaba la necesidad de una revolución sin filtros ni pasos intermedios y el fracaso de cualquier «vía constitucional al socialismo», como creía y siguió creyendo. La expresión es de Sacristán, pero la fórmula aludía inconfundiblemente a las nuevas posiciones de excamaradas, como Fernando Claudín, expuestas al menos desde 1965 en *Cuadernos de Ruedo Ibérico*. Solo el «marxismo revolucionario», pensaba Sacristán, podía contrarrestar «la infundada euforia del momento sobre la plausibilidad de una vía gradualista y constitucional al socialismo». Pero sospecho que es ahí donde estaban ya Castellet, Pradera y Claudín, aunque todos habrían jurado entonces con la mano sobre *El capital* que la finalidad de su reformismo es el socialismo y una sociedad definitivamente sin clases. La experiencia histórica de la revolución era ya un fracaso en Cuba, la órbita soviética carecía del menor atractivo, el activismo guerrillero era improductivo y anarquizante y la experiencia de un socialismo a la chilena había sido frustrada por las armas. Pero en Alemania, en Suecia, en Inglaterra y en general en los partidos socialistas de la Europa contemporánea la respuesta conjunta y diversa era ya la socialdemocracia.

Aunque la joven editora de México Neus Espresate no estuviera precisamente en esas posiciones burguesas, sino mucho más radicalizada, es posiblemente hacia esos años cuando Pradera inició con ella una potente relación sentimental, condicionada por la distancia y la disparidad de las respectivas situaciones. Los cuadernos de combate que publicaba entonces Herralde en Anagrama tenían un hermano de sangre y complicidades en los cuadernos de Neus Espresate en la editorial Era, con posiciones muy poco transaccionistas con el capital, el sistema y el imperialismo. Las dudas de Pradera duraron varios años por muchas razones y entre ellas la misma agitación sociopolítica en la que vivía entonces. Los extravagantes acuerdos a que habían

llegado él y Gabriela hacia 1969, a instancias de ella, empezaban a desembocar en problemas insolubles con ramales afectivos y sexuales de complicación creciente. Javier y Gabriela se habían hecho hippies, como casi todos se hicieron hippies. ¿Hippies? Habían dejado de ser la formalísima y elegante pareja burguesa del Hipódromo que hipnotizaba a Rafael Sarró en 1959. Habían ido haciendo lo que todos, cambiar de hábitos, cambiar de costumbres y sobre todo cambiar de ropa para abandonar por fuera lo que intentaban abandonar por dentro. No era solo una moda de clases medias cultas o de élites intelectuales: era una afirmación ensanchada de rebeldía explícita, era negar la evidencia de pertenecer a un mundo caduco y católico, era el rechazo a ser pasado para inventarse el futuro sin conocer la letra pequeña, capciosa y a veces dolorosa, de esa informalidad irreverente.

Su entorno inmediato también había empezado su propia experiencia de desacuerdos domésticos o pactos tirando a inestables, como proponería Gabriela a Pradera, cuando su hermano Rafael y Martín Gaité se separaban en 1970 o no cesaba la promiscuidad práctica y deportiva de Juan Benet. Los encuentros furtivos o tolerados de pareja *abierta* empezaron entonces, pero terminaron mal en cuanto Gabriela descubrió que también Pradera hacía su propio noviciado moderno. Las nuevas prácticas llevaron a Gabriela a una crisis inesperada, la sacaron de sus casillas y de la casa compartida en Reyes Magos (había sido regalo de boda de los padres de ella). Alquiló entonces un piso en Prieto Ureña (años después lo ocuparía su hermano Rafael), pero no fue una separación prolongada porque siguió un carrusel de encuentros y desencuentros, peleas y reconciliaciones. En todo caso, y en vísperas del golpe de Estado de 1973 contra Allende, tanto Arnaldo Orfila como Neus y Javier se encontraban en Santiago de Chile. Allí recibió Orfila la llamada perentoria del presidente para que los tres abandonasen el país de inmediato.

Muy a pesar de Orfila, Pradera nunca se vincularía orgánicamente a su editorial ni percibió retribución alguna, pero fue la última costa de su idealismo político. Quisieron «hacer una editorial marxista-leninista, drástica y ortodoxa a ultranza», como le contaba Pradera a Jesús Ruiz Mantilla en *El País* muchos años después. El autosarcasmo era a menudo la forma que escogía Pradera para la indulgencia o la absolución retroactiva de sus ilusiones revolucionarias, al menos en el lustro largo en que mantuvo su vinculación con el proyecto. Ni democracia representativa, ni parlamentarismo, ni socialismo democrático ni desde luego socialdemocracia: aquello había de ser dinamita ideológica, y a ratos incluso química, dispuesta a acabar con el capitalismo aprovechando sus contradicciones de primer y de segundo plano en complicidad y hermanamiento latinoamericano.

Mientras tanto algunos de sus colaboradores temían sus llamadas intimidatorias o, en palabras de Tino Lastra, sus puras «brutalidades», a veces solo «rugientes», pero en todo caso «siempre tan apremiantes y contundentes». Incumplía a menudo la ley de la imperturbabilidad, que fue complementaria y simultánea a la ley de la intemperancia, por paradójico que resulte. A menudo a Lastra le resulta imposible saber el efecto que le hacen las noticias o los hechos a Pradera, «¿hay alguien más lejos de los pequeños goces de la vida o que los exteriorice menos que tú mismo, que pones la misma cara cuando tomas una reserva de vino del año veinte que cuando se trata de un vulgar Valdepeñas?». Pero la incontinencia es también parte de la bestia y Pradera lo sabe, de modo que «mucho me temo», escribe, «que tengas que aguantar en el futuro nuevas manifestaciones de mi mal carácter porque esas explosiones no las controla la voluntad». Hasta el «maestro Freud» podía llegar en su auxilio porque según él, improvisa Pradera, «a partir de los seis meses ya no hay quien» cambie el carácter y, desde luego, no el suyo. Incluso con Satostegui

las cosas van a más, y se siente a menudo responsable de la «eventual destemplanza o falta de comedimiento en el tono» de esta o aquella carta.

Todo acabó como el rosario de la aurora, o casi. Las relaciones internas en Siglo XXI habían sido tormentosas desde el origen, en parte por la necesidad de revocar los métodos artesanales de un casi octogenario Orfila, sin demasiadas contemplaciones y hasta con culpable intemperancia incontinente por parte de Pradera: son vicios veteranos que solo el tiempo mitigaría, y con mucho esfuerzo. Desde diciembre de 1975, tras la muerte de Franco, está decidido a abandonar la editorial. La implicación de Pradera en la conspiración político-periodística empieza a dejar de ser recreativa y se hace semiprofesional. La maquinaria de *El País* se había puesto en marcha definitivamente con la llegada de la autorización para el nuevo periódico en la primavera de 1975, y sospecho que Pradera lo sabía, como estrecho colaborador de Ortega Spottorno (que lo nombra director gerente de Alianza tras el abandono de Salinas por la aventura de Alfaguara) y de Polanco y Jesús Aguirre (en Taurus), pero todavía no sucede nada, al menos en apariencia.

La revolución tiene ya color ala de mosca, a pesar de que Pradera ceda revolucionariamente sus acciones a los trabajadores de Siglo XXI «que las han trabajado». A finales de junio de 1976, cuando está a punto de suceder el «auténtico terremoto», según él, del nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno, le confiesa a una colaboradora en México que a pesar de la «melancolía, la retirada creo que ha sido indispensable». Para esas fechas, Pradera siente que esa editorial le «ha producido más disgustos, quebraderos de cabeza, desgaste nervioso y ocupación de horas que cualquier otra cosa en mi vida. Para decirlo en cristiano: estoy con una rabia y una frustración que no me lamo». Posiblemente era verdad lo que apuntaba muchos años después Marcelo Díaz, y las tres editoriales que tocó Pradera, FCE, Alianza y Siglo XXI, estuvieron «mucho más interrelacionadas, en su íntima historia, de lo que muchos quizá supondrían».

SIN SALIR DEL DESPACHO

Ni las turbulencias políticas ni los disturbios personales parecían traspasar la puerta de la calle Milán 38. Allí imperaba una eficiencia profesional, una planificación editorial y una suerte de complicidad estable fraguada a tres bandas, Salinas, Pradera y Daniel Gil, bendecidos por la benevolencia distante de Ortega Spottorno. La empresa seguía marchando sin freno y el éxito de El Libro de Bolsillo había activado nuevos proyectos y sobre todo dos en los que Pradera tuvo una vinculación antitética. La vocación universitaria frustrada tantos años atrás encontró una vía de escape y consuelo con la creación de Alianza Universidad en 1970. A su vez, sin embargo, el aburrimiento y la mera gestión de derechos insuflaron en Jaime Salinas el deseo de recuperar la edición como oficio de lectores generosos, e inventó y pilotó Alianza Tres desde 1973.

En ese proyecto Salinas no se sintió respaldado por Pradera, quizá porque «seguía muy de cerca la parte comercial y se resistía a dar a la nueva colección un tratamiento diferenciado». Descubrió por entonces Salinas «que Javier era una persona mucho más pragmática y realista que yo» y a la vez «una de las personas más brillantes que hay en España». No ocultaba en charla con Juan Cruz años después que era persona «sumamente compleja», a medias por sus silencios a veces hoscos o huraños, a medias por su desistimiento para convencer de nada a nadie y nunca «cargarse de razón», aunque la tuviese. Pero quizá fuera ese mismo talante el que permitió contrapesar la escasa afinidad personal entre Jaime Salinas y el dueño de la editorial, Ortega Spottorno: «[Ortega] pertenecía a esa sociedad que a mí me pone muy nervioso y que yo llamo la

sociedad “de apellidos”.» Pese a los rifirrafes, las largas discusiones y hasta los disgustos, «Alianza no habría podido ser lo que era si él no hubiera estado allí», incluidos trabajos humildes y gozosos como la redacción de contracubiertas, en lo que era «maestro»: «Le echaras lo que le echaras, hacía una contracubierta genial», le contó Salinas a Juan Cruz.

Como sucede siempre con Pradera, no hay manera de fijar con precisión o exactitud una función concreta que no sea a la vez móvil, fluida o difusa. Los recuerdos de testigos y sus mismos testimonios apuntan a una complicidad con Salinas que actuó sobre las ruedas y el chasis de una nueva sociedad, aunque a veces había libros que salían antes de tiempo, como sucedió con varios de Alianza Tres y como solía decir Pradera: o no había lector todavía para esos libros demasiado literarios, o abocaban a ventas exiguas. También debía ser verdad lo que declaraba a *Abc* Ortega Spottorno en marzo de 1971: muchos de sus mayores éxitos «pertenecen al género del ensayo y no a la novela». Trataban de lograr «una especie de universidad popular que solo por el libro puede realizarse» y en parte eso explica el lanzamiento de una colección con otro empaque, Alianza Universidad, alimentada a menudo con reediciones procedentes del catálogo de Revista de Occidente. Por contra, Jaime Salinas quiso relanzar desde Alianza Tres lo que había sepultado la desidia literaria o el gusto más previsible, no la política ni la ideología. Eso incluía modalidades de escritura confesional o autobiográfica que podían ir desde las cartas de Pavese o de Kafka, los cuentos de Cortázar o las novelas angustiosas de Ernesto Sábato hasta las confidencias irresistibles de Gerald Durrell sobre los animales de su familia o las de Carlos Barral en *Años de penitencia*, o incluso las memorias del periodista Corpus Barga.

La gestión de Pradera en Alianza seguía siendo personal, directa o telefónica, y más sometida a su propio criterio que a ninguna orientación o recomendación comercial, más allá de las reuniones periódicas con su creciente equipo de asesores. De una u otra manera estuvieron activamente vinculados en los años setenta Jacobo Muñoz para filosofía, Francisco Calvo Serraller para arte o Luis de Pablo para música, pero en distintas fases y etapas asesoraron a la editorial Alfredo Deaño (gran interlocutor de Pradera en esos años y cuya temprana muerte le derrumbó, recuerda su secretaria, Carmela Berzal: la amarga necrológica para *El País* era de Javier), Jesús Mosterín, Manuel Pérez Ledesma, Ricardo Artola o los responsables de la *Historia de América Latina*, Nicolás Sánchez-Albornoz y Miquel Izard. El equipo técnico había crecido también desde Mónica Acheroff, como histórica gestora de derechos de autor, con Alicia Bleiberg, Carmen Criado y María Cifuentes desde principios de los años ochenta. Hacia 1981 se incorporaría Marcelo Díaz para dirigir las relaciones con Hispanoamérica (hasta culminar en la fundación de Alianza Argentina con ayuda de los ya antiguos amigos del FCE) y, poco después, Ezequiel Méndez como relevo del primer jefe de publicidad y marketing, Manuel Andújar.

No sé si verdaderamente «todo va mal en el peor de los mundos posibles» a finales de 1977 para un ciclotímico crónico como Pradera, pero no es probable que la causa de semejante irónico hundimiento fuese secundaria. El enredo político en esas fechas era descomunal, por supuesto, pero la letra de esta carta a José Martínez lleva algo más que desánimo. Había estallado en marzo un grave problema en Alianza (y también acababa de leer el decepcionante libro de un gran amigo, Jorge Semprún). Los efectos colaterales podían alcanzar incluso a la sociedad que editaba *El País* y que presidía el mismo Ortega. Quizá por eso, y «aunque te pueda parecer increíble, envidiaría ferozmente» la bronquitis que sobrellevaba en París José Martínez, «en el caso de que el destino permitiera elegir libremente los azotes de cada otoño».

Dicho de forma cruda, Ortega Spottorno había improvisado un modo flagrantemente irregular para solventar la galopante crisis de Revista de Occidente a través de los beneficios de su otra

editorial, Alianza. La sangría que padeció Alianza fue grave y necesitó acudir a los saberes de un antiguo accionista de Prisa desde su fundación en 1972, Diego Hidalgo. Pese a no figurar en el Consejo de Administración, por residir en el extranjero, fue Hidalgo quien promovió una desdramatizadora fragmentación de la deuda y aportó capital propio para remediar la situación. Por eso pudo decir muchos años después, en carta a *El País* del 25 de agosto de 2014, que desde entonces sería él «el accionista mayoritario de Alianza por haberla salvado de la quiebra», a la vez que Ortega Spottorno comprometía su patrimonio en la operación de salvamento.

Pradera ocupó desde entonces el despacho de Ortega y mantuvo la infraestructura organizativa creada por él. Fueron muchos quienes recibieron poco tiempo después una carta firmada por Manuel Andújar para comunicar a los autores, «con carácter confidencial y personal», que Ortega Spottorno dejaba de ser consejero delegado de Alianza y la producción de *Revista de Occidente* la asumía «por entero» Alianza. Lo más grave era la nueva «tónica de no adquirir especiales compromisos durante una larga temporada» y programar «numerosas reediciones indispensables».

Aunque Jaime Salinas no se subiría a *El País*, ni Pradera ni él se perdieron de vista cuando el primero aceptó el encargo del constructor Huarte de reflotar la editorial fundada por Camilo José Cela en 1964, Alfaguara, al borde de la quiebra y con un futuro sombrío. Su nuevo consejero delegado era otra vez un antiquísimo amigo de Pradera, el economista Luis Ángel Rojo, y en esa negociación participa también Pradera como miembro del Consejo de Administración de Taurus. Sería Alianza, es decir, su director gerente, Javier Pradera, quien auxiliaría a Alfaguara asumiendo el proyecto de lanzar una renovadora visión de la *Historia de España* en varios volúmenes bajo la dirección de Miguel Artola. El último tomo, con una reproducción mate del *Guernica* de Picasso en la portada, estaba dedicado a la República y la era de Franco y fue durante años libro de referencia para estudiantes y lectores interesados. Era obra, una vez más, de Ramón Tamames, aunque esa historia contó también con amigos antiguamente vinculados a la peripécia editorial de Pradera, como Gonzalo Anes.

6. LOS NUEVOS PODERES

A medida que los protagonistas de la democracia se afanaban en momificar la Transición crecía también la desconfianza, la aspereza y hasta la irritación de Pradera hacia ese fetiche tóxico. Demasiados relatos edulcorados, demasiadas amputaciones interesadas, demasiada memoria selectiva. En este sentido, hay un momento especialmente explícito en la autobiografía que dejó inacabada a su muerte en 2011: «La democracia fue una idea nueva en la España de 1977, descubierta a la vez por la derecha y por la izquierda, que habían combatido por objetivos distintos a la democracia representativa y al Estado de derecho durante la Guerra Civil.» Pradera habla de sí mismo, pero quizá precisamente por eso, y ya sin piedad, puntualiza que «solo los farsantes y los aprovechados maquillan su pasado para parecer demócratas desde la cuna».

Unos pocos años antes, en la presentación de un libro de su íntimo amigo Ramón Recalde, precisó que la resistencia de los años sesenta, desde el FLP al PCE, no «era partidaria de la democracia representativa como la entendemos ahora», no lo eran ellos pero tampoco lo eran «en buena parte de Europa» porque había otro sentido de fondo, «impreciso y engañoso», que ha quedado sepultado hoy: «Creíamos en una democracia popular que descansaba en el supuesto de pasar por una dictadura del proletariado que crease las condiciones objetivas para la democracia.» Y eso era en realidad «un autoengaño y un engaño para los demás». En el «horizonte utópico» sí había una concepción de «la democracia semejante a los ideales del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo». No eran antidemócratas, pero la democracia en la que pensaban era otra, no exactamente la «representativa y liberal» a la que hubo que educarse por inmersión e improvisación tras la muerte de Franco.

Él no fue ese demócrata impecable, pero tampoco lo fueron la mayoría de los actores políticos en vísperas de la muerte de Franco ni inmediatamente después. No lo pudieron ser tampoco los ciudadanos que habitaban un país sin práctica alguna de libertad de expresión, sin tradición crítica del poder, sin costumbre de discutir en abierto, en directo y en público en torno a la disparidad de soluciones que ofrecen las doctrinas políticas en los países democráticos. La gestación misma del periódico fundamental de la Transición esconde, a modo de microrretrato, buena parte de la complejidad del período, como si fuese su espejo encriptado. *El País* no fue un proyecto tangible hasta octubre de 1975, cuando tanto Polanco como Ortega Spottorno y el director recién designado, Juan Luis Cebrián, contaron con Pradera para la confección de los distintos comités asesores que el periódico impulsó antes de la aparición de su primer número en mayo de 1976.

Su red de contactos editoriales y políticos y su ascendente amistoso y profesional en muchos de los autores de FCE, Alianza o Siglo XXI explican la exageración de Felipe González cuando lo define como «el disco duro de la Transición». Pero la hipérbole señala a la vez el hecho objetivo de haber propiciado sinapsis imprevistas, intelectuales y político-culturales, como casi nadie más podía hacer en aquella etapa. Su liderazgo en la sombra había sido una forma de compromiso civil y cultural que empezaría a cobrar una dimensión sociopolítica alumbrada por los cambios de la coyuntura histórica. El impotente poder de una izquierda aún testimonial, inmadura e inhábil encontraría en él algo más que un aliado para convertirse en el catalizador efectivo de complicidades a través de la nueva marca de la democracia que era *El País*. Las transacciones con la realidad habrían de ser parte del kit de emergencia de una izquierda fuertemente

ideologizada y su aspiración de poder pasaba por identificar la naturaleza impura del poder, los potenciales aliados, las rutas accesibles. Gobernar no habría de ser traicionar los principios e ideales, sino convertir los ideales en principios viables. Cuoja ahora una inverosímil combinación de autoridad política e hiperactividad intelectual que resume una frase de otro amigo editor, Enric Folch, tal y como la transcribe Jordi Herralde en una brillante semblanza de Pradera: «En un despachito con un teléfono y una máquina de escribir, pilota Alianza Editorial, controla Siglo XXI, asesora al FCE y escribe editoriales para *El País*.»

EL PAÍS EN OBRAS

Cuando Ortega Spottorno ofrece en octubre de 1975 a sus dos directivos de Alianza la incorporación al futuro periódico, Pradera dice que sí pero Salinas dice que no. En este último caso, «por una razón que no sé si muy comprensible para algunos», le contó a Juan Cruz. Y es que «en el proyecto estaba Fraga Iribarne», cosa que neutralizaba la posible colaboración de Salinas y que desde luego no ignoraba Pradera. Los celos de Jaime Salinas estaban justificados. No se trataba solo de que Fraga «estuviese» en el proyecto, sino de que Prisa había nacido en 1972 netamente vinculada al reformismo franquista de Fraga, José María de Areilza y otros franquistas en tránsito. La habían fundado en enero José Ortega Spottorno con Darío Valcárcel, muy próximo a Areilza, y Carlos Mendo, desde 1973 con Manuel Fraga en la embajada de Londres. Muy poco después se sumó con una pequeña participación Jesús Polanco desde Santillana, pero era Fraga quien «reunía potencialmente en torno suyo al grupo más numeroso de accionistas», cuenta Cebrián. Entre ellos hubo un importante accionariado conservador de origen y capital catalán, gestionado por Manuel Milián Mestre y Antonio de Senillosa, pero aportado por el banquero José María Santacreu (cuenta valiosos detalles un tanto caóticamente Milián Mestre en sus memorias *Els ponts trencats*).

Nadie planificaba un periódico de izquierdas ni de centro izquierda, entre otras cosas porque la posible izquierda liberal ni existía ni había existido apenas bajo el franquismo. Las afinidades de Ortega Spottorno lo sitúan en un liberalismo manso y conservador, mientras que Polanco en los últimos años se había sentido atraído por la trayectoria desde el fascismo hacia el socialismo liberal y socialdemócrata de Dionisio Ridruejo (que muere en junio de 1975) y algunos de sus cómplices, como Jaime García Añoveros. Prisa es ahora sobre todo una suerte de extensión natural de las buenas relaciones que en los últimos años habían mantenido tanto Ortega Spottorno como Polanco con los sectores más aperturistas o menos rancios del sistema, y eso incluía a Fraga y su cuñado Carlos Robles Piquer, incorporado este último desde 1971 como accionista y nuevo consejero en Santillana. E incluye también a un hombre de confianza de Fraga, Pío Cabanillas, que había intentado alguna forma de aperturismo desde el Ministerio de Información en 1974 y había sido cesado en octubre por Franco. Tanto el responsable literario de Taurus, Jesús Aguirre, como el mismo Pradera desde Alianza, se desplazaron hasta Barcelona para participar en un acto de desagravio y protesta contra la destitución, celebrado sin prensa y junto a gentes tan dispares como el polígrafo conservador de talante liberal Guillermo Díaz-Plaja, y el visionario cristiano marxista Alfonso Carlos Comín.

Habrá que esperar todavía un tiempo para que un partido colonice el espacio político que España no tiene aún pero que el resto de Europa situaba ya entre la democracia cristiana y la militancia comunista del PCE. De hecho, casi todo se ha puesto en marcha a la vez y en escenarios

distintos, como si un secreto reloj biológico estuviese acompasado al deterioro galopante y decrepito del mismo Franco. Sus avisos de fallos orgánicos, de paradas respiratorias, de enfermedades espantosas constituyen el ritmo macabro de una inminencia en muchos frentes. Casi todo lo importante para el inmediato futuro iba a pasar antes de la muerte del dictador. Tras el verano de 1975, Jesús Polanco es ya consejero delegado de Prisa y pone de veras a pleno rendimiento la empresa que habría de fabricar el nuevo periódico. El disparo de salida lo había dado la inscripción en el registro oficial en marzo, paso previo a la autorización formal que llegaba en octubre. Por entonces Polanco empieza a buscar con los fundadores de la empresa, Ortega Spottorno y Valcárcel, el relevo indispensable al director nominal previsto desde 1972, y también cofundador, Carlos Mendo. Su proximidad personal a Fraga lo hace inviable en ese momento y es el mismo Fraga, desde Londres y satisfecho por una extensa entrevista realizada por Juan Luis Cebrián para la revista *Gentleman*, quien aprueba al joven y nuevo candidato a dirigir el periódico.

Al sector liberal conservador y exfranquista, mayoritario en el Consejo de Administración de Prisa, le desconcierta el cambio y el nombre del sustituto, pero no precisamente por su pedigrí progresista, sino por todo lo contrario. Cuenta Julián Marías en sus memorias que la trayectoria familiar de Cebrián «no tenía ninguna relación con nosotros» –el nosotros de Revista de Occidente, de Hora H y Seminarios y Ediciones, burgués e ilustrado, orteguiano y elitista–. Cebrián «procedía de medios muy distintos», obviamente falangistas, dice Marías, y es verdad. Su padre, Vicente Cebrián, había sido director de la agencia oficial Pyresa y hasta 1970 secretario general de Prensa del Movimiento. Sin embargo, su hijo Juan Luis había estado involucrado en los orígenes de *Cuadernos para el Diálogo* ya en 1963, con veintipocos años, y había sido uno de los dimisionarios que acompañó a Pío Cabanillas, Francisco Fernández Ordóñez y Ricardo de la Cierva en octubre de 1974 cuando comprobaron que los límites del autorreformismo del régimen eran irrisorios: la permanencia de Cebrián al frente de los servicios informativos de RTVE duró un suspiro.

Nadie dice nada a nadie cuando el régimen concede por fin la autorización para editar el periódico, una semana antes de que Juan Carlos asuma la Jefatura del Estado el 30 de octubre de 1975 por incapacidad de Franco. Solo se haría público el permiso diez días después de su muerte el 20 de noviembre. Para el relevo del director previsto, Carlos Mendo, ha habido que descartar algunos nombres antes de la designación de Cebrián. A Miguel Delibes lo propone Julián Marías, pero en su mochila profesional lleva la dimisión como director de *El Norte de Castilla* en protesta por las despóticas injerencias precisamente del ministro Fraga. Tampoco puede ser otro exfalangista, Antonio Tovar, porque carece del preceptivo carnet de periodista, y se desestima también la propuesta de Jesús de la Serna, maestro y tutor de Cebrián cuando este era subdirector del diario *Informaciones*, en 1968, bajo su dirección. Quizá fue De la Serna el verdadero autor de la sugerencia.

Todos habían llegado al espectro liberal procedentes del bando vencedor de la guerra, como de ese bando procedía la familia de Cebrián, el mismo Jesús Polanco y desde luego Ortega Spottorno, aunque un reciente libro en su memoria haga lo posible por callar –de hecho, calla del todo– su filiación inequívocamente franquista y expresamente falangista durante la guerra y la posguerra. No es particularmente extraño, por tanto, que entre los múltiples accionistas minoritarios que acabó encontrando Prisa, muy *in extremis*, no hubiese nombre alguno vinculado al PSOE. Años más tarde Felipe González explicaría que los socialistas no tenían dinero que aportar, y seguramente es verdad. Pero tampoco nada hacía imaginar en 1975 que aquel periódico

nacido del vientre del régimen, en su sector reformista y liberal-conservador, pudiera ser portavoz, cómplice o al menos compañero de viaje de los jóvenes descamisados recién llegados a la luz pública en Suresnes a finales de 1974: tampoco nadie daba entonces un duro por ellos.

Para el Cebrián de treinta años recién designado director y en activo al menos desde septiembre de 1975, Pradera era un «auténtico mito», según recuerda en sus memorias, por razones tanto políticas como editoriales e intelectuales. Pradera contaba en una entrevista de 1984 que «a mí me llamaron de *El País* antes de que este saliera a la calle, y me invitaron a colaborar en los comités asesores de cultura y de editorial, en un principio». Dado que «aquella experiencia digamos que fue satisfactoria para el director de *El País*», se le contrató «como colaborador fijo para la parte editorial», o «caja negra de un periódico». Siempre quiso que fuese esa su vinculación laboral con la empresa, y aunque el primer contrato con Prisa lleva fecha de 1 de diciembre de 1978, según los papeles que conserva Natalia, es obvio que Pradera está ahí desde el origen, aunque sin contrato: no solo es un alto ejecutivo de Alianza en el mismo momento de la fundación del periódico, sino que desde marzo de 1976 ha sido nombrado director gerente dependiente del director general y consejero delegado, que a esas alturas todavía es Ortega Spottorno.

También entraba en aquel equipo de dirección como enlace y experto en marxismo-leninismo, comunistas y excomunistas como él. De ahí que entre sus primeras iniciativas estuviese una reunión en casa de Ramón Tamames –entonces relevante líder intelectual y político del PCE y accionista de Prisa–, probablemente en la primavera de 1976, para facilitar los contactos necesarios entre la dirección del nuevo periódico y la dirección comunista. Allí estuvieron Polanco, Cebrián, Carrillo, Tamames y un Pradera todavía traumatizado por el recuerdo de su último encuentro con Carrillo, algo más de diez años atrás. Aunque sea verdad que el mismo Tamames seguía en la cárcel la noche del 4 de mayo de 1976 en que una rotativa sin suficiente rodaje tiraba mal que bien el primer periódico –a media mañana apenas había salido la mitad de la tirada, con un Polanco exasperado y refugiado en su domicilio desde primeras horas de la noche–, el resto de los consejeros y los más de cuatrocientos pequeños accionistas de Prisa se situaban cerca del reformismo franquista, el conservadurismo liberal y la democracia cristiana con tibio aire socialdemócrata.

Dos días antes del lanzamiento, Julián Marías pronunciaba su discurso de bienvenida a Salvador de Madariaga en la RAE. Con su ingreso creía Marías que «vuelve a estar completa» la Academia. Era fácil entender que para muchos tan triunfal lectura fuese un ultraje que olvidaba y excluía a multitud de otros exiliados no representados en Madariaga, ni vivos ni muertos. Era verdad que fue la figura internacional que validó la resolución democrática de Múnich en 1962, pero el exilio era más vasto y ajeno y seguía fuera. La presentación de las compungidas y amnésicas memorias de Laín Entralgo, *Descargo de conciencia*, dos semanas después de la salida del periódico, vino a dar otra muestra de los conflictos que esperaban al periódico entre la nueva calle, la redacción del periódico y la autocompasión indulgente que empezaba a cuajar en el corazón de muchos protagonistas del franquismo. Naturalmente, fue Marías quien salió en defensa de Laín en *El País*, y a lo largo del verano de 1976 escribió sin pausa cartas alarmadas al subdirector Darío Valcárcel con «cordiales reparos a lo que me parecían indicios de desviación» del periódico «que habíamos querido hacer» (lo cuenta él mismo en sus ególatras memorias).

El País recién nacido asumió casi de inmediato el papel de portavoz de gran parte de las inquietudes y las aspiraciones de un espectro muy amplio de población, pero era también candidato a suscitar decepciones instantáneas. A Fraga, desde luego, dejaron de salirle las cuentas

muy rápido porque *El País* escapaba a su control, sobre todo tras la elección de Adolfo Suárez en julio de 1976 como sucesor de Arias Navarro al frente del gobierno. Tanto Carlos Mendo, frustrado director, como Darío Valcárcel, también cofundador, encajaron mal que bien y a veces muy mal las sucesivas derrotas que viviría en el periódico el reformismo franquista de Fraga y la derecha monárquica de José María de Areilza. Quizá por eso, cuando murió Pradera, pudo escribir Valcárcel en *Abc* con buenas razones que había sido «un fiable aliado y un enemigo temible». Pero también era natural que Julián Marías, Pedro Laín Entralgo o Ricardo de la Cierva se alarmasen por la tempranísima deserción hacia el monárquico y muy conservador *Abc* de personalidades como Julio Caro Baroja, Octavio Paz o María Zambrano, sobre todo cuando tanto Mendo (desde 1977) como Valcárcel acabaron en el equipo de dirección del diario de Luis María Ansón.

También habían creído en ese reformismo otros intelectuales de referencia del Consejo de Administración inicial, como Marías, Laín Entralgo o el mismo cofundador, José Ortega Spottorno (y su hermano Miguel). El pasado falangista compartido por la mayoría de ellos (pero no por Marías) había ido aclimatándose activamente en los años sesenta a un liberalismo conservador y a veces incluso progresista que resucitaba la tradición y la continuidad de la originaria Revista de Occidente y su mutación modernizada en Alianza Editorial. Pero precisamente por eso varios de ellos sintieron que rápidamente el periódico embocaba rutas que eran ya muy poco orteguianas.

Sin embargo, y muy posiblemente para todos en una u otra medida, el héroe secreto y la nostalgia íntima se cifraba en el nombre de un ausente, Dionisio Ridruejo. Nadie en las primeras semanas de andadura del periódico recibió el homenaje y la atención que recibió Ridruejo con múltiples pretextos y una catarata de información sobre su figura que venía a preludiar algo de la lógica del liberalismo ético-cultural progresista y la socialdemocracia política que enseguida caracterizaría al periódico. Fueron precisamente Fraga Iribarne como ministro de la Gobernación y el marqués de Mondéjar como jefe de la Casa Real los destinatarios el 2 de julio de 1976 de los reproches del periódico por la suspensión abrupta de un homenaje a Ridruejo cuando ya había empezado el acto. Unas seiscientas personas permanecieron encerradas en la sala del hotel Eurobuilding ese día hasta las diez de la noche, a sabiendas de que ya no podrían oír a Felipe González ni a Joaquín Satrustegui ni a José María Gil-Robles, aunque sí habían podido escuchar a Jordi Pujol y a Antonio García López, presididos por el íntimo amigo y protector de Dionisio, el abogado Rodrigo Uría.

Apenas dos días después, el periódico se explayaba en el relato de la suspensión dictada por la Dirección General de Seguridad de otro homenaje con la presencia prevista de Fernando Morán, Fernando Chueca Goitia, Joaquín Ruiz-Giménez, Jaime Miralles y Jesús Prados Arrarte. En la comisión organizadora de aquellos actos no figuraban solo Uría, Laín o Chueca, sino también Jesús Polanco. El periódico había cubierto ampliamente la información sobre el homenaje que se celebraría el 30 de junio, un año después de la muerte de Ridruejo, en el cementerio de la Almudena, con una comisión organizadora que reunía a algunos de los mismos, empezando por Polanco, y ampliaba el radio desde Marcelino Camacho, Manuel Azcárate o Armando López Salinas hasta Joaquín Ruiz-Giménez, Enrique Tierno Galván, Felipe González o Enrique Múgica. A la salida del acto del 2 de julio, con noche cerrada y sin haber podido hablar, ironizaba Felipe González sobre lo ocurrido porque era «el ejemplo perfecto de la reforma».

Aunque fuese de forma muy prematura, es también simbólica la publicación al día siguiente, el 3 de julio, de un artículo de combate de Prados Arrarte, antiguo miembro del club político de Ridruejo, sobre la equiparación que Europa estaba viviendo entre socialismo y socialdemocracia.

No lo veían exactamente así los autotitulados «ortodoxos» Francisco Bustelo o Virgilio Zapatero en un debate publicado en *Cambio 16*. Prados Arrarte se adelantaba a los conflictos del futuro en la medida que los ortodoxos «niegan el carácter socialista a la socialdemocracia alemana y al socialismo sueco» y creen que «la prueba definitiva del socialismo» es «la socialización de los medios de producción previa la conquista del poder». Pero eso excluyen, argumentaba el articulista, a la inmensa mayoría de los socialismos de Europa, quizá porque «los cuarenta años de aislamiento político de España parecen haber afectado a las lecturas, que también arrojan un atraso de cuarenta años», incluida la izquierda recién refundada en Suresnes.

Pero quienes dictaron el tono, las maneras, el lenguaje y las corrientes de fondo del periódico fueron otros. Aunque Pradera superase en diez años la edad media de la redacción, compartía con ella la música y la letra de una nueva sociedad en un periódico genuinamente joven. Estaba escrito y redactado por personas con miradas mestizas al futuro, como Benet, Sánchez Ferlosio, Fernando Savater o Juan Cueto; Francisco Umbral, Rosa Montero o Manuel Vicent; García Márquez, Julio Cortázar, Guillermo Cabrera Infante, Carlos Fuentes, Cristina Peri Rossi, Maruja Torres, Castilla del Pino o Emilio Lledó. Sus páginas de opinión y sus tribunas abiertas se nutrieron de inmediato con nombres de la resistencia antifranquista, que lo hicieron suyo con grados distintos de conformidad. José Luis López Aranguren, Agustín García Calvo, Enrique Tierno Galván, Carlos Gurméndez, Julio Caro Baroja o Antonio de Senillosa colaboraron con mucha frecuencia en un periódico que trascendió una función meramente informativa para encarnar la alianza entre la inteligencia que había combatido mejor o peor al franquismo y la inteligencia política y social progresista, e incluso muy de izquierdas, que buscaba la construcción democrática. El periódico supo rehuir muy pronto el espectro culto e intelectual como único público potencial para aspirar a lo que no había sabido aspirar *El Sol* orteguiano de Urgoiti antes de la guerra: al liderazgo absoluto en términos de difusión e influencia. Y ese fue trabajo de Polanco y Cebrián.

El diario conectó de inmediato con la nueva clase media y universitaria, aunque a veces tengo la sensación de que se la inventó: en sus páginas cristalizaba el lector que había crecido con los libros baratos de Alianza y con la sobredosis de ensayo y pensamiento de las nuevas editoriales para ofrecerle después un periódico a su altura. Encarnó casi instantáneamente y de forma irrefutable al enemigo de la España real y franquista, del raquitismo insondable de aquella sociedad envilecida, ideológicamente esquemática, religiosamente subdesarrollada, socialmente polarizada, culturalmente corrupta e históricamente encallada. Contra ese país nació *El País*, sin necesidad ni voluntad de ser de izquierdas, al menos hasta los duros enfrentamientos que vivió, sobre todo con Fraga, cuando las simpatías socialistas del periódico eran ya muy claras, y al menos lo fueron desde la primavera de 1977, en vísperas de las primeras elecciones generales. Un analista político del ala izquierda del PSOE, Antonio García-Santesmases, reconocía un tanto a regañadientes que efectivamente *El País* había funcionado durante años como «verdadero oráculo de la clase política».

Sin teatro ni solemnidad, Pradera aportaba una consistencia intelectual, una formación política y un sustrato cultural que nadie tenía entonces en aquella redacción. Un antiguo y buen amigo, Miguel Ángel Aguilar (que no llegó a *El País* hasta 1980, procedente de la dirección de *Diario 16*), suele subrayar su papel en el periódico como «poder intelectual y moral detrás del poder» ejecutivo que ejercía Juan Luis Cebrián. De la contundencia y la frialdad a veces despótica del director puede dar alguna pista la escena protagonizada por un hecho y derecho Augusto Delkáder, desmoronado hasta las lágrimas a la salida de una reunión con él. En los múltiples conflictos que había de vivir en el periódico, Pradera fue creciendo como «la masa encefálica de *El País*, en

aquella época en que el periódico tenía el monopolio de los juicios morales». Esa época que describe Aguilar duraría poco más o menos una década larga donde las complicidades entre Cebrián y Pradera pudieron cuajar en una acordada ausencia de enfrentamientos públicos de juicio o de criterio, aunque pudieran discrepar y discrepar en privado. Pradera entonces era «el poder desnudo sin atributos ni más reconocimientos que los que a sí mismo se concedía», cuenta Miguel Ángel Aguilar por correo electrónico. La lectura minuciosa de los editoriales que el periódico publicó en esa década permite detectar en numerosas ocasiones, y con poco margen de duda, no solo la orientación genérica de Pradera en los incipientes e informales consejos de redacción, sino su opinión personal, directa y sin filtros atenuadores.

La estructura interna del periódico es hoy difícil de rehacer porque combinó la informalidad estable de un *staff* directivo y una pluralidad de consejos de economía, cultura, política. Para buena parte de ellos Pradera aportó nombres y amigos que habían sido y eran colaboradores en su oficio de editor: en economía contaba el criterio de Enrique Fuentes Quintana y Luis Ángel Rojo, en cultura Jesús Aguirre, Alfredo Deaño, Francisco Calvo Serraller o Rafael Conte, además de Aranguren, Tovar, Lázaro Carreter; entre los juristas estaba Clemente Auger o Matías Cortés, y el más político contó con Pío Cabanillas y Jaime García Añoveros, todos ellos estrechamente vinculados al proyecto desde su fundación (y García Añoveros todavía vinculado al partido que había fundado Ridruejo diez años atrás).

También los contactos con Felipe González habían empezado antes, y no era Pradera el único que los tenía, fuera a través de Enrique Múgica, de Lastra o de Semprún. En el mismo equipo de dirección de *El País* algunos de sus miembros habían establecido una relación anterior con Felipe, como fue el caso de Delkáder: las reuniones con la dirección del periódico menudearon desde entonces, Javier Solana fue un habitual en los despachos del periódico y Pradera estuvo en ellas, al menos mientras no despachaba en Alianza con tiradas, galeradas, portadas y autores.

EN LA CAJA NEGRA

En poco más de un año, entre mayo de 1976 y las primeras elecciones generales de 15 de junio de 1977, los editoriales de *El País* transmiten una cauta prevención ante posibles errores fatales, el empeño pedagógico de exponer los usos de las democracias desarrolladas, el análisis no de los programas sino de las declaraciones, intenciones subterráneas y posiciones engañosas o tácticas que exhiben los líderes, las formaciones políticas y las mismas instituciones. Son editoriales razonadores y didácticos antes que prescriptivos y partidistas. No eluden la toma de posiciones, pero prevalece sobre todo la intención informativa y analítica, el impulso didáctico, la prevención de riesgos y la visión integral de problemas interconectados y sin soluciones exentas o aisladas. La visión genérica no nace solo del conjunto de materias que examina la sucesión de editoriales, sino de la actitud misma del equipo editorial al alentar determinadas soluciones con razones explícitas y opinión formada sobre cada una de las opciones. Sus dos pilares centrales son inequívocos y funcionan como una doble brújula: la conquista de una democracia efectiva y la defensa sistemática de la institución monárquica como instrumento para la democracia, con apelación directa a la responsabilidad del rey Juan Carlos. Tanto Ortega Spottorno como Polanco habían expuesto el proyecto al rey antes de aparecer el periódico, y no parecen ficción los encuentros furtivos de Juan Carlos, más o menos camuflados o discretos, con otros viejos amigos suyos, como Jaime Carvajal, José Luis Leal, Matías Cortés y Jesús Aguirre, ni algún legendario

recorrido en moto y con casco para una toma de contacto personal del rey con Luis Solana y el PSOE.

Pero no nace ya hecho el periódico; se hizo con el paso de los meses y como consecuencia de la navegación entre los múltiples accidentes y variaciones del período con final feliz más agitado de la historia política española. En muchos de esos editoriales la huella de Pradera me parece tan inconfundible como indemostrable, entre otras cosas porque la responsabilidad de un editorial es siempre del director, Juan Luis Cebrián en ese caso, y porque en el equipo editorial estuvieron a la vez y sucesivamente otras personas. Eso significa que, en los momentos fundacionales, el criterio y la opinión de Pío Cabanillas, Jaime García Añoveros, Cebrián y Polanco, por supuesto, y desde luego del comité de fundadores de Prisa desde 1972, encabezado por Ortega Spottorno, Julián Marías y el subdirector Darío Valcárcel, pudo ser tan determinante como el que pudieron expresar los miembros de los distintos comités, con veteranos antifranquistas como Eduardo Haro Tecglen o Juan García Hortelano y redactores efectivos de editoriales como José Luis Martín Prieto y Rafael Conte, y José Luis Leal y Emilio Ontiveros.

Sin embargo, los énfasis estilísticos, las enumeraciones adjetivadas, las analogías históricas o los cameos cinematográficos y literarios, además de la inteligencia restallante del análisis mismo, permiten identificar con un alto grado de verosimilitud *sus* editoriales al exponer posibles rutas, recomendar determinadas prácticas o advertir riesgos flagrantes de descarrilamiento del proceso que acabó llevando a las elecciones de junio de 1977, tras la muerte de Franco el 20 noviembre de 1975 y la ratificación al día siguiente del rey Juan Carlos I como jefe del Estado. Es verdad que toda prevención es poca por la naturaleza misma de un artículo editorial: Cebrián fue siempre intervencionista y activo en su función de director y es altamente improbable que no retocase, corrigiese, enmendase los borradores sucesivos. Joaquín Estefanía lo ratifica y recuerda la sorna de Pradera cuando dejaba terminado el borrador y se iba a casa avisando al mismo Cebrián, Vicente Verdú o Augusto Delkáder de las trampas embozadas o las ironías que probablemente no pasarían la última revisión del texto. También recuerda Juan Cruz el gesto de Pradera mostrando el editorial a la puerta del despacho de Cebrián y el consiguiente cabezazo de conformidad del director para darlo por bueno de un vistazo.

La aparición del periódico coincide con la revelación reticular y fulminante del socialismo liderado por Felipe González. Era un nuevo actor político que apenas había significado nada en la lucha antifranquista hasta las vísperas de la muerte de Franco. El nuevo embajador de Estados Unidos en Madrid desde 1975, Wells Stabler, también lo entendía así, de acuerdo con los datos que aporta un fundamental libro de chismes políticos de Charles Powell. Había que vencer como fuese los prejuicios y la ignorancia de Henry Kissinger, nuevo secretario de Estado desde 1974 y bestia negra de la izquierda española de cualquier espectro entonces. Su opinión era clara como el agua, además de inamovible: se hacía cruces de haber sido partidario de la República en su juventud.

Era evidente que España en su historia había «fluctuado entre el autoritarismo y la anarquía». No solo carecía «de tradición democrática», sino que no había razón alguna para pensar que fuese capaz de aprenderla. A Kissinger, en realidad, le delataba el mismo prejuicio que frustró a tantos hispanistas cuando las cosas empezaron a cuajar y decidimos no matarnos una vez más entre nosotros. A ello aludió Pradera muchos años después, con rencor inocultable, como el síndrome del hispanista, «esa actitud malhumorada, censoria y decepcionada de algunos intelectuales de izquierdas europeos ante la voluntad de entendimiento de los españoles, descalificada como

cobardía y claudicación». La idea nueva era que, por una vez, los muertos, o la mayoría de los muertos que devora la revolución y el irredentismo, dejase de ponerlos este país.

Stabler sabe que cualquier colaboración norteamericana en favor del futuro democrático deberá revertir ese prejuicio de Kissinger, insensible incluso a los diagnósticos de la CIA, que tan pronto como en enero de 1976 aconseja la legalización del PCE porque haría al partido más «cauteloso» y «prisionero del proceso democrático». Pero Kissinger sigue creyendo que el régimen no había sido «muy represor» porque toleraba la existencia de «creadores de opinión» (se entiende que sin fusilarlos al acto). Incluso a ojos de *The New York Times* la política de Estados Unidos hacia España es «tan insensible como contraproducente» mientras Franco muere a cámara lenta, todavía en mayo de 1975.

Las elecciones de abril de 1975 en Portugal ya han despejado algunos equívocos. Los comunistas han obtenido un resultado marginal, muy lejos del 30 % que respaldó al partido socialista portugués. Ese mismo mes de abril, Kissinger reclama consecuentemente información sobre la oposición moderada en España, en particular de tres líderes. Dos de ellos son bien conocidos por razones históricas, pero el tercero es, en ese momento, el líder de un partido escindido y sin implantación en el país, Felipe González. Quizá Stabler decidió incluir en la terna de contactos la voz de un socialista que no fuese Enrique Tierno Galván, que en ese momento estaba aliado con el PCE en la Junta Democrática, pero no el PSOE. La impresión de Stabler es positiva en octubre de 1975: Felipe se declara partidario de la legalización del PCE y asume como pronóstico para España lo que es ya un hecho en Portugal. Los comunistas no mejorarán en España el 10 % que han obtenido allí. Es una razón más para rechazar el gobierno de coalición que defiende el PCE para el posfranquismo.

Por supuesto, Felipe González es, según Stabler, «partidario de una ruptura total con el pasado». Pero el perfil de Felipe en las reuniones y encuentros privados no es ese, y ninguno de sus interlocutores lo tiene ni por radical ni por rupturista, aunque en público y en el partido el discurso se incline en ese sentido. Helmut Schmidt defiende sin rodeos ante Kissinger el apoyo que necesitan las «fuerzas emergentes» y «moderadas» –léase Felipe González–. En enero de 1976 Felipe reconoce que la visibilidad súbita del PSOE se debe al apoyo de los «partidos socialistas y socialdemócratas europeos», cuando ha accedido ya a una maniobra en la que interviene Pradera para llevarlo a la luz pública. El pretexto fue la presentación el 22 enero de 1976 en la sede de Taurus de la antología de Julián Besteiro que acaba de publicar un hombre de Ridruejo, Fermín Solana (el mismo que haría su cronobiografía en el libro de homenaje que también en 1976 publicó esta editorial). Con Felipe González acuden, a modo de guardia de corps, Jesús Aguirre y Jesús Polanco, y entre el público ha sido fácil localizar a Joaquín Ruiz-Giménez o a Ricardo de la Cierva, además de colaboradores estrechos de Gil-Robles, Sainz Rodríguez, etcétera. En el lenguaje de la época, es un desafío abierto a la negativa gubernamental a legalizar a la oposición.

Todavía no se ha vivido la apoteosis de diciembre de 1976 en Madrid, cuando se celebra el primer congreso del PSOE en el interior en condiciones de tolerancia. Allí recibe Felipe González el incontestable apoyo político y personal de quienes no habían querido consagrar en Suresnes, apenas dos años atrás, la escisión socialista y el parricidio político. Acuden ahora Willy Brandt, Olof Palme, François Mitterrand, Pietro Nenni, aunque a Felipe no le gustó nada la aprobación que Helmut Schmidt expresó del talante democrático de Adolfo Suárez. Él y su partido, al menos en el escenario electoral de lucha contra los comunistas, eran partidarios de la «ruptura democrática», cosa de la que no quería ni oír hablar el SPD alemán.

Naturalmente, Stabler se veía con mucha más gente. En vísperas del fin de Franco, a diario. Una de sus visitas fue la de un joven falangista con mando en RTVE. Congenió con él, le cayó bien de inmediato, no le ocultó sus ganas de protagonismo y tampoco sus cartas. El desenvuelto Adolfo Suárez pensaba que Juan Carlos debía asumir responsabilidades de gobierno ante la decrepitud de Franco —estamos en octubre de 1975—, despreciaba a Fraga como posible instrumento de cambio —«un desastre», según anota Stabler— y adivinaba solo dos posibilidades: reformar el sistema desde dentro o abrir la ruta hacia una democracia liberal. De lo que no tenía duda era del sinsentido que suponía que «los políticos diseñaran planes a largo plazo, ya que los acontecimientos impondrían su propia dinámica». El título que Wells Stabler puso a este cable diplomático era perspicaz: «The Succession: A Pragmatic View from the Regime Center». El mismo Juan Carlos había hablado a Stabler, según los cables del embajador, en actitud claramente reformista o al menos aseguraba el diplomático que compartía el objetivo de convertir España «en un país democrático como los de Europa occidental», significase lo que significase esa frase. Parece cierto también que en agosto de 1974 Juan Carlos había mandado a Nicolás Franco, sobrino del dictador, como enlace para conocer la posición de Santiago Carrillo. El monarca aseguró a Stabler, además, que en su primer Gobierno como rey no habría ningún exministro de Franco.

También recuerda Cebrián un argumento humanamente irrefutable: el rey intentaría sacarse de encima a personas propensas a controlar de cerca sus movimientos, y eso valía tanto para Fraga como para Areilza. Wells Stabler sabía también que Felipe González no haría de la forma del Estado un motivo de batalla, como posiblemente Carrillo tampoco lo hizo. La república era una nostalgia movilizadora pero no un programa viable, y eso había empezado a interiorizarlo gran parte de la izquierda desde que Franco designase en 1969 a Juan Carlos como heredero a título de rey y saltándose la línea dinástica. Al día siguiente de la muerte de Franco, Stabler rotula sus mensajes con una expresión explícita y voluntariosa, «The Transition». El embajador enlaza encuentros políticos e informativos con todos los hombres que pintan algo en la oposición antifranquista, incluidos los representantes de la Junta Democrática, José Vidal-Beneyto y Rafael Calvo Serer, además de Ruiz-Giménez, Fernández Ordóñez o Gil-Robles.

En realidad, el primer Gobierno del posfranquismo estuvo trufado de exministros franquistas y lo presidía otro pluscuamperfecto franquista, Carlos Arias Navarro. Los movimientos de Juan Carlos para relevarlo tardaron todavía varios meses y probablemente las fechas cruciales son marzo y abril de 1976. Ante la exasperante pasividad de Arias y un Gobierno inerte, el rey apremia y alguno de sus asesores más próximos, como José María de Areilza, comparte la impaciencia. Areilza cree que puede ser él el relevo, y tanto Fraga como él mismo aseguran a Kissinger que bajo el Gobierno de Arias uno controla el poder en el interior y otro las relaciones con el exterior. Se sienten en la línea de salida del futuro y sin rival a la vista. O con un rival que se hunde solo, el propio Arias. El rey incluso llama al presidente estadounidense, Gerald Ford, para ponerle sobre aviso de la naturaleza previsiblemente decepcionante de un discurso de Arias Navarro a finales de abril de 1976. Casi no hacía falta: el *Newsweek* publicaba el 26 de abril una entrevista con el rey donde aseguraba que Arias era un «desastre sin paliativos» y sin que trascendiese un desmentido claro.

El País iba a empezar a intervenir muy pronto, en mayo, pero quizá en ningún otro sitio se expresa mejor su objetivo central como en el editorial que celebra, ya a 4 de noviembre de 1976, sus seis meses de existencia y un éxito incuestionable. Son sobre todo dos las causas que lo explican, según ellos. Su vocación de «institución ciudadana» nace de la convicción de que «la

Prensa debe y puede ayudar al proceso de la construcción de la democracia en España». Hasta ese momento es fundamentalmente verdad que el periódico no ayuda «a una opción política concreta, sino a la democracia como conjunto de valores que han hecho posible una vida colectiva digna y libre en Occidente». En esa noción básica se funda la defensa de una «línea liberal», que efectivamente «no implica la neutralidad ni impide tomar posiciones». Lo que quiere hacer el periódico en su sección editorial es emitir opiniones que «no puedan venir presionadas o delimitadas por objetivos espurios a la propia misión del periódico», abiertamente comprometido con aquello mismo que otro editorial inmediato, «La democracia, en peligro», teme y combate: que los «extremistas de distinto origen» no acaben consiguiendo «romper la salida pacífica hacia una fórmula de democracia europea».

Los hombres de *El País* para conducir la reforma no eran un secreto para nadie a esas alturas. Les había dado su apoyo desde el momento en que el rey comprometió formalmente su corona en la consecución de una democracia constitucional. Eso había sucedido en el viaje a Washington de principios de junio de 1976, y fue ese el discurso que dio credibilidad interna y externa al proyecto democrático. Con razón aseguran en *El País* que «el Rey va por delante en sus deseos de cambio respecto a las actitudes de lo que ha venido en llamarse la “autoridad competente”», y esa autoridad es todavía Arias Navarro. Las consecuencias de las declaraciones del rey podían ser más o menos inmediatas, incluida la sugerencia de una crisis de Gobierno, dada la bajísima credibilidad de Arias Navarro. Hacía falta relevar al presidente de Franco para que entrasen en juego los auténticos pilotos de altura, protegidos y avalados por el diario que acababa de nacer en el entorno del reformismo franquista. En particular, José María de Areilza parece especialmente bien situado, dada su estrechísima vinculación personal con Darío Valcárcel, subdirector y cofundador del periódico. Areilza ha hecho méritos en los últimos años para desmarcarse del régimen, disfruta de un alto prestigio público, del aprecio del rey, al menos de momento, y, aunque sea solo un detalle simbólico, la única fotografía de la portada del primer número de *El País*, el 4 de mayo, es la suya, justo encima del editorial en portada, «Ante la Reforma», redactado por su director, Juan Luis Cebrián. La asociación de ideas es obvia y el nuevo periódico no la rehúye.

El rey podrá iniciar ese viaje de junio a Washington en un ambiente «de mayor liberalización», cree *El País* en mayo. El diario ha defendido ya «un pacto nacional entre todas las fuerzas políticas del régimen y de la oposición, cara a la celebración de elecciones generales que den paso a unas Cortes constituyentes». Ha descartado previamente y sin vacilar la «hipótesis de un gobierno provisional», que es la posición del PSOE de Felipe González, desde el principio renuente a alianzas de ningún tipo. Según el diario, debatir sobre palabras como «ruptura» o «reforma» no conducirá a un verdadero sistema democrático. No se trata de defender la reforma parálitica de Arias, desde luego, pero tampoco «la ruptura, pues de lo que se trata es de un pacto, y no de una vuelta de la tortilla, impensable e imposible». Por entonces todos sabían que el grupo chileno Quilapayún pedía a voces «que la tortilla se vuelva».

El único que ve con buenos ojos que no pase nada desde la muerte de Franco es el secretario de Estado Henry Kissinger. Pero tanto los líderes democráticos europeos como la misma oposición se desesperan por la ausencia de proceso o avances. Las movilizaciones sociales, políticas y sindicales son gigantescas y continuas, reprimidas como era costumbre, con muertos y una tensión hecha de carreras, cargas policiales, adrenalina, mucho miedo e impaciencia histórica. La crisis económica es galopante y real mientras nada parece llevar dirección alguna más allá de un continuismo frustrante o promesas demasiado vagas. Cuando los reyes viajan a Washington saben que cuentan con el apoyo de Stabler frente a Kissinger y la asesoría pegajosa de Areilza. Para

entonces, el rey ha decidido ya prescindir de Arias Navarro, y Areilza se siente algo más que su sucesor: se siente el tutor tanto del rey como de la Transición. Quizá un exceso de paternalismo o su inequívoca prepotencia provocan que en Washington sea el mismo Juan Carlos quien pida una reunión a solas con Kissinger.

EXPERTO EN COMUNISMO

¿Y Javier Pradera? Posiblemente el plan originario fue publicar cada quince días desde el mismo mes de mayo de 1976 un artículo político firmado, y colaboraciones más azarosas en las páginas de libros que el periódico mimó desde el primer momento. Eso hizo durante un mes y pico, además de acordar con Cebrián los editoriales, tras la reunión de un comité en el que figuraban como voces relevantes Pío Cabanillas, Jaime García Añoveros, probablemente Jesús Aguirre, y sin duda Polanco y el mismo Cebrián. Pero los editoriales entonces, cuando todavía no existía un consejo propiamente dicho, salían sobre todo de los encuentros diarios de ese reducido equipo y su editorialista principal, que empezó a ser enseguida Pradera.

De hecho, un solitario artículo en la sección de libros del domingo 16 de junio de 1976 rescata al Pradera experto en comunismo y comunistas para meditar sobre el futuro no de la democracia sino del socialismo. La biografía de Bujarin y sus avatares con Stalin iba a convertirse, por inspiración de Semprún, en una suerte de fetiche irónico para un buen puñado de amigos que habrían virado desde el rojo al rosa con percances de difícil previsión. El revolucionario ruso pasó a ser una contraseña privada para quienes no renunciaban al escepticismo inteligente y el humor negro para sentirse como el hombre que después de pactar con Stalin para desbancar a la «vieja guardia bolchevique» acabó «acusado de derechismo», desplazado del poder por el mismo Stalin en 1929 y fusilado en el ciclo de purgas de 1936-1938. Lo cuenta Pradera en el artículo, sin saber que las ventas de la biografía escrita por Stephen F. Cohen no excederán un decepcionante centenar de ejemplares, según recuerda Santos Juliá. Detrás de esa cifra parece llegar el mejor mensaje sobre la impertinencia, inoportunidad o inconveniencia de semejante figura.

Bujarin «representaba una vía gradualista y pacífica para la construcción del socialismo que hubiera evitado el terrible costo humano y social del sistema estaliniano». La discusión sobre su «plausibilidad» en su momento histórico era a esas alturas irrelevante o puramente académica. Lo que importa es comprender la «eventual transformación» de esa lógica política «en programa operativo para el futuro». Pradera ha dejado sobre la mesa las cartas de su posición política y a la vez será sostén de un empeño ahora prioritario: una democracia real que en su caso será socialista y sin democracia real no hay poder posible de la izquierda. No había nada casual en que un extenso artículo de Jorge Semprún en *Cuadernos de Ruedo Ibérico*, en el verano de 1965, hubiese intentado legitimar el «reformismo» inspirado en Bujarin frente al izquierdismo, y esa lección está en la base de la lógica *bujarinista* de Pradera. Su larga reseña de la biografía escrita por Cohen era un mensaje ideológico, no una clase de historia ni un texto de relleno: era la confidencia política de su identificación con el gradualismo socialista que defendía Semprún por entonces y elaboraba Fernando Claudín, ya instalado en España y empleado en los despachos de Siglo XXI. Pradera asume así el papel de editorialista y analista político de un periódico nacido para la democracia y contra la revolución. El poder real no está en los libros ni en las teorías sino en la comprensión cabal del comportamiento de la realidad, compleja, plural y resistente al cambio.

De momento, sin embargo, los planes de Pradera en el periódico cambiaron de inmediato, como

casi todos los planes de entonces. Aparte de esa confesión política de gradualismo socialista y bujarinismo irónico, publicó únicamente dos análisis firmados en mayo, y ambos expresaban sin disimulo la profunda desconfianza sobre la viabilidad de reforma alguna, al menos tal como la contaba desde el 6 de mayo, dos días después de nacer el periódico, el presidente de las Cortes, Torcuato FernándezMiranda. Su fe en sacar adelante el proyecto de Ley para la Reforma Política choca frontalmente con el escepticismo de Pradera y su incredulidad ante la eventualidad de que las Cortes «aprueben su propia autoliquidación». Ese acto de fe que se pide a la ciudadanía es muy poca cosa para «el largo y desesperante aplazamiento que ha sufrido la perspectiva de transformación que la mayoría del país aguarda desde finales de 1975». Ese procedimiento de «urgencia» descansa en una legitimidad que es jurídica y no política, y han de ser «medidas abiertamente políticas» las que realmente lleven a «un acuerdo entre todas las fuerzas políticas, internas o externas del sistema».

Quince días después, el 27 de mayo, Pradera reafirma la profunda desconfianza ante la jerga y las palabras de la reforma futura. Es verdad que en los últimos meses «algunos síntomas hicieron pensar que esa pesadilla de mala retórica y peores instituciones» que había practicado el franquismo «llegaba a su fin». Es verdad también que el lenguaje empezaba a recuperar la capacidad de designar las cosas reales y no eufemismos falsificadores. Sin embargo, «el proyecto de modificación de las Cortes apaga las esperanzas de que finalmente se llame a las cosas por su nombre». Se han producido avances, sí, y se ha jubilado a «los ideólogos que fabricaban conceptos nuevos y los arbitristas que dibujaban minuciosos organigramas para repartir los cargos siempre entre las mismas personas». Pero para Pradera lo más grave es que «la reforma de las palabras sustituye la retórica vacía por la adulteración de la historia, y las fantasías falleras por material de derribo del derecho constitucional comparado».

El anunciado proyecto de ley está demasiado lejos de las democracias europeas. Se promete una «regulación constitucional» pero lo que «se nos entrega es un régimen post-napoleónico» en el que las palabras confunden las cosas: el lenguaje ha cambiado pero no han cambiado las funciones asignadas a los diputados, al Congreso, al presidente del Congreso. El primer editorial del periódico, escrito por Cebrián, ya había recurrido a las palabras fetiche de Ortega: «No es esto, no es esto.» Y esa sigue siendo la posición de Pradera en el tercer y último artículo firmado durante 1976, de 17 de junio, cuando aún casi nadie sabe nada sobre la designación de Adolfo Suárez como presidente. Es muy llamativa «la furia con la que los conversos esgrimen sus recién estrenadas convicciones». La clase política franquista se hecho súbitamente democrática. Debe tener origen mágico o portentoso esta variación que practican, porque en lugar del clásico camino de Damasco con su caída del caballo lo que hace esa clase política es «cambiar de caballo». Se resisten «a conceder una amnistía penal», pero a la vez «se regalan a sí mismos esa amnistía ideológica que es la amnesia general, se autodesignan guardianes de la fe democrática y únicos intérpretes de su doctrina».

Con toda la razón desconfían Cebrián, Pradera y el resto del mundo de las convicciones democráticas de aquellos gobernantes, pero todo está todavía por suceder. Tras la designación de Suárez como nuevo presidente a principios de julio, Pradera no reaparece con su firma hasta enero de 1977. Las acciones y palabras de Suárez pondrían en cuarentena en los próximos meses el fundado recelo de Pradera y los demás sobre las intenciones democráticas de los franquistas, y por eso prejuza el grave error que sería que echasen «mano de ilusionismos y prestidigitaciones» para sustituir «las instituciones democráticas por una mala tramoya». Sería peor aún que se

atrevisen a «suplantar a los ahora desconocidos representantes de la voz popular, tantos años silenciada, por los actores y comparsas del tinglado de la antigua farsa».

Cuando años después Pradera contó en un libro colectivo «El despegue de la reforma» no ocultó que la dimisión de 1 de julio de Arias Navarro supuso una «conmoción». Pero el nombramiento de Suárez el 7 de julio fue directamente un «auténtico terremoto». Sin duda lo fue también para los planes del periódico, y quizá para los suyos propios. Suárez no era más que uno de los ministros del Gobierno de Arias, como lo eran Areilza y Fraga. Quizá el único ser vivo contento con la designación de Suárez por parte del rey, aparte del propio Suárez, debió ser Stabler, que ese día evocaría su buena sintonía con el representante de un «pragmatic view» desde el «regime center». Pero es probable que la mayoría de los lectores del periódico tuviese en la cabeza al mismo sujeto que describía Vicente Molina Foix años después: un «repelente exfalangista planchado en todo, en el pelo, en la raya del pantalón, en las ideas».

Esa fue la inequívoca impresión de la izquierda, pero quien quedó planchado del todo fue *El País*. En su par de meses de vida había jugado sus cartas sin disimulo en defensa de hombres serios y responsables. En particular lo había hecho en el lapso de tiempo que transcurrió entre el cese, disfrazado de dimisión, de Arias y la designación de Suárez. Los hombres de *El País* habían estado a la luz del día y eran tan obvios como contados para hacerse cargo de la vocación democrática prometida por el rey en Washington. No solo *El País* sino «el común de los ciudadanos» podía identificar sin dificultad a unos cuantos nombres como «los creadores de la línea reformista que el propio Gabinete tiene por consolidada». Son «el vicepresidente Fraga, el ministro del Exterior, Areilza; el de Relaciones Sindicales, Martín Villa, y el de Justicia, Garrigues». A ellos se debe, «de una manera u otra», la propuesta de un «pacto con la oposición» y son ellos quienes «auspician la reforma constitucional».

Por eso no ocultaron, incluso antes del 1 de julio, que las palabras del rey en Washington «deben amparar un pisotón en el acelerador de la reforma». De hecho, la confianza en Juan Carlos es tan alta que el editorialista apuesta por facultarle «a traer la democracia por decreto», si no hay otra manera de hacerlo. O al menos eso creen a mediados de junio, también netamente dispuestos a aconsejar al rey sobre el relevo de Arias cuando no tenga más remedio que cesarlo. El mismo 1 de julio el elogio a la determinación de la corona se conjuga con la exigencia de un candidato (que imaginan y quizá creen ya decidido) y entre cuyas virtudes ha de estar la autoridad, la credibilidad, la visión de futuro, la capacidad de diálogo y la energía para impulsar la reforma. El día 2 todo sigue en el aire y *El País* vuelve a radiografiar «La situación, ahora» afinando algo más el retrato robot que encaja con sus hombres, sin disimular sus simpatías por Fraga, por su capacidad de trabajo e incluso «de persuasión al frente de la difícil parcela interior» (porque era ministro de la Gobernación). Es verdad que le recuerdan «tropiezos graves», como Vitoria y Montejurra y los muertos que colgaban de ahí, pero «no han logrado dañar decisivamente el prestigio de bulldozer político del señor Fraga».

Sin embargo, y ya sin careta, el periódico considera preferible la candidatura promocionada por el subdirector, Darío Valcárcel, de acuerdo con uno de sus clanes, próximo al monarquismo conservador de Areilza: «Ha sabido desplegar, en medio año, una imagen nueva y distinta de España hacia el exterior», sin descuidar el trabajo en el interior; tiene capacidad de «disponer hoy de puentes y contactos útiles para el llamado pacto social», pero, sobre todo, «es, en el Gobierno actual, el político más distante del franquismo, con el que mantuvo diferencias de fondo en los últimos diez años». El día 3 la crisis no está resuelta y el editorial insiste en pedir «Un presidente para la reforma», orientada a subrayar la apertura de un auténtico nuevo ciclo en la vida española.

La decisión del rey «va a dar la medida del futuro de España. Y cualquier sombra de involución o de retroceso causaría un grave daño a la Corona y al país entero», según indican un tanto impacientes. «O sea, que no caben muchas sorpresas.»

Me parece improbable que Pradera estuviese enrolado en semejante apología de Areilza y posiblemente fue una línea editorial directamente inspirada por su hombre en *El País*, Darío Valcárcel, con evidente complicidad del director. Es la hipótesis más razonable y es también la que cuadra con la jornada más negra de Areilza en su larguísima carrera desde los tiempos en que fue alcalde franquista de Bilbao en plena guerra y amigo personal de José Antonio: el rencor que acumuló en una espera inútil y no desactivada por quienes podían hacerlo, pendiente durante todo el día de una primicia que nunca llegó, pese a la presencia en su casa del subdirector de *El País* con el bloc en blanco en la mano y la grabadora lista, no se apagaría en mucho tiempo. El propio periódico sería víctima de sus maniobras de intoxicación para desprestigiar a Suárez y derribarlo cuanto antes.

Nadie sabe ocultar en el periódico del día siguiente «la sorpresa causada» por el nombramiento de Suárez. Ha dado muestras reales de ser un político de nuevo tono y convicción, sin duda, «pero no es esta hora de políticos, sino de estadistas». Implícitamente confiesan desesperanza y se emplazan a sí mismos a rectificar la decepción en un «tiempo breve», si hay razones para hacerlo. Dentro de la moderación melancólica del tono, el remate aclara que «decir estas cosas al jefe del ejecutivo [Suárez] el día mismo de su estreno no ha venido siendo costumbre usual entre nosotros». Pero las inspira «una postura sinceramente patriótica» y hasta el deber de «anunciarle el asombro, no exento de cierta inhibición, que su nombramiento ha causado».

¿Inhibición? Si no es un error de lectura del editorial escaneado, y compruebo que no lo es, desde luego la palabra es intrigante. En realidad preludia un ataque feroz y regular a Suárez y el mejor ejemplo es el artículo de Ricardo de la Cierva «Qué error, qué inmenso error», ofensivo sin paliativos porque este primer Gobierno del rey «es un gobierno de Franco». El «camino emprendido» es una grave equivocación, y el periódico aprueba expresamente tanto las dimisiones fulminantes que han presentado Areilza y Fraga tras el nombramiento de Suárez como la «posterior negativa a entablar negociaciones» por parte de ambos con el nuevo presidente. En ningún caso estarán bajo las órdenes del sonriente advenedizo dos pesos pesados monárquicamente humillados.

Es verdad que la buena noticia está en la presencia en Gobernación del «aperturista» Martín Villa, pero las dificultades de Suárez para confeccionar el Gobierno acaban implicando un abrumador peso político de propagandistas católicos y demócratacristianos, varios de ellos con estrechas conexiones en el Opus Dei. Fuese verdad o no esa filiación que interesadamente difunde, el diario no contemporiza con la secta ni lo había hecho antes: entre las condiciones que un hombre tan moderado como Ortega Spottorno había puesto a la constitución de Prisa en 1972 estaba la ausencia de cualquier miembro de la Obra. En el periódico aplauden el despecho dimisionario de Fraga y Areilza y parecen saber muy de primera mano que la decisión de abstenerse de toda cartera ministerial con Suárez «no ha sido adoptada por temor a un desbocamiento del ritmo de la reforma, sino, muy por el contrario, por la convicción de que el programa entero se halla gravemente amenazado». La fuente de tanto saber solo puede ser la garganta amarga de los mismos perdedores, como viene a confesar sin disimulo el editorial: esa «pesimista conjetura» está fundada en las «sólidas razones» que da haber compartido el día a día del Gobierno Arias con Adolfo Suárez como ministro del Movimiento.

El terremoto del que hablaba Pradera tuvo una réplica crucial tras el primer discurso

programático del presidente, el 16 de julio de 1976, muy probablemente acordado con el rey. *El País* tuvo que dar marcha atrás, visiblemente descolocado, y reconocer en las *palabras* de Suárez «una declaración prometedora» y «acertada», y sofrenar el tono que le pedía el cuerpo. Suárez había hablado de reconciliación nacional y con ella de «un programa ambicioso de convivencia en el que apenas solo es preciso despejar las sombras de los límites a la amnistía, que deben ser los mínimos, de modo que se logre una auténtica pacificación en el País Vasco». A las cuatro de la madrugada, mientras redactan este editorial, según cuentan, «el Gobierno ha hablado bien. Ahora debe obrar en consecuencia». El mismo recelo habían sentido los periodistas del club Blanco White reunidos en el restaurante Nicolasa, recuerda Miguel Ángel Aguilar, cuando estuvo Suárez una semana después de su designación defendiendo la reforma política y las elecciones democráticas: «No le creímos.»

Con las luces del día siguiente, el periódico eleva la calificación de un discurso que ahora ya es «un hito» frente a la retórica y las ambigüedades de antaño. Pero también la furia del bulldozer Fraga está desatada. *El País* condena su desmedida descalificación del discurso de Suárez —que fue «total y completa»—, mientras el editorialista se esfuerza en hacer entrar en razón al animal herido: no parece «sensato descartar por completo la viabilidad de que las transformaciones en el interior del sistema abran el camino hacia la democracia. La empresa es difícil, pero no imposible». En buena medida, el rencor de esa descalificación nace de errores propios, tanto de Fraga como de Areilza, pero esa reflexión la reserva el periódico para agosto de este 1976, en un editorial que medita abstraídamente sobre las velocidades de la historia hasta clavar el rejón sobre la ineptitud de quienes estuvieron sentados en el consejo de ministros de Arias durante ocho meses, desde noviembre de 1975 hasta julio de 1976, sin reflejos o coraje para detectar la aceleración de los tiempos. Sí lo está sabiendo hacer el Gobierno Suárez y eso, en última instancia, significa el rey.

Cuando Javier Pradera analice con su firma dos años después, el 17 de noviembre de 1978, «el nuevo triunvirato» que constituyen Fraga, Areilza y Osorio como nueva opción política, meditará también abstraído sobre la «obstinada pasión que lleva a los hombres públicos, una y otra vez, a probar fortuna en otras empresas después de haber sufrido reiterados reveses». Ninguna explicación «reduccionista» servirá para aclarar motivaciones tan complejas como las de la «tribu» de los profesionales de la política. En ella «la *libido dominandi*, el gusto por la fama y la compulsión a moverse en escenarios iluminados pueden coexistir con el sentido del deber, la confianza en la propia valía, la ambición legítima y la sensación de irremplazabilidad en las tareas de gobierno». Los tres interfectos habían aspirado «en su día», es decir, en ese momento de 1976, «a ser los principales actores de la liquidación pacífica del franquismo y de la construcción de la Monarquía constitucional». Sus sueños se verían frustrados «por un modesto telonero que supo realizar con eficacia y maestría esa labor y, con ello, ingresar por la puerta grande en los jardines de la fama y el Poder»: el telonero era Suárez y este Pradera no regatea los méritos del presidente que está a punto de celebrar la aprobación de la Constitución en el referéndum del 6 de diciembre de 1978. En realidad fueron los propios Fraga y Areilza quienes «desaprovecharon, por sus compromisos de lealtad con el señor Arias, la oportunidad que se les abrió» con la muerte de Franco y quedaron «fuera del juego del Poder».

La creación inminente de Alianza Popular desde otoño de 1976 es para Pradera la ocasión para rematar la expulsión de Fraga del campo de la moderación novodemocrática: ni él ni sus seis exministros prometen otra cosa que una continuidad franquista agazapada y desacreditada. Se les llama desde el periódico sin disimulo neofranquistas a él y a sus «extraños compañeros de cama»,

en expresión usada por Fraga en rueda de prensa, mientras Laureano López Rodó se sofocaba visiblemente sonrojado ante el ingenio verbal de Fraga. Excepto él mismo, todos los demás encarnan «la flor y nata del integrismo intelectual, cultural, religioso, político y económico. Líderes que nada tendrían que envidiar a la derecha extrema de los partidos neofascistas de Europa». El editorial incluso apela implícitamente al pasado de Fraga y su obvia complicidad con Prisa, y por eso «no alcanzamos a comprender qué pinta en toda esta historia la figura de Manuel Fraga». El ataque es pormenorizado, descalificador y contundente: esa Alianza Popular «no es sino la alianza de las sombras del franquismo histórico».

Pero también a la acelerada oposición conviene recordarle a finales de julio de 1976 que debe aprender a jugar en el terreno de la política y reclamar al Gobierno aquello «esencial al sistema democrático». Es preferible dejar «de lado otros temas, como la forma de Estado, que no son inherentes a la democracia o que, simplemente, son plenamente compatibles con ella». La corona como garantía de la vía a la democracia es una obsesión de esta etapa, al menos hasta 1978. Es verdad también que el maximalismo de la izquierda requiere alguna forma de educación democrática acelerada con modelos europeos imitables. Un ejemplo acaba de darlo Suecia, donde la socialdemocracia de Olof Palme ha perdido el poder tras más de cuarenta años y no ha habido crisis alguna sino un relevo natural. «El partido del señor Palme se califica de obrero, y los liberales centristas y moderados se presentan como burgueses. Pero unos y otros son, ante todo, partidos democráticos.»

Cuenta Pradera en *Memoria de la Transición*, sin duda con información de primera mano, que Felipe González había hecho «oídos sordos a los mensajes para encontrarse» con Suárez cuando era todavía ministro del Movimiento. Ahora las cosas habían cambiado y accedió a un primer encuentro secreto el 10 de agosto de 1976 en casa de Joaquín Abril Martorell. Allí pudo confirmar González la inteligencia política de aquel exfalangista más simpático de lo previsto y hasta demasiado empático: su inteligente renovación del lenguaje político estaba usurpando el discurso político de buena parte de la oposición. Había monitorizado primero y liderado después reivindicaciones comunes en la izquierda, empezando por la propuesta de unas elecciones generales en libertad y acabando por una amnistía política creíble y amplia.

Al día siguiente de su encuentro con Suárez, González visita a Wells Stabler para ratificar la buena sintonía establecida entre ambos y la perspectiva democratizadora que inspira a Suárez. El compromiso de convocar unas lecciones constituyentes forma ya parte de la conversación y Stabler saca la conclusión de que en Felipe hay un hombre «pragmático» y «realista», que es casi indefectiblemente la impresión que obtienen todos los líderes que lo tratan en este tiempo, incluidos sus socios europeos. El jefe de Gobierno holandés ve en el joven español de treinta y cuatro años a «un hombre esencialmente moderado», obligado a compensar con retórica revolucionaria su pragmatismo de fondo: los dirigentes socialistas y su misma militancia posiblemente están más cerca de esa radicalidad revolucionaria de lo que lo están los votantes a los que aspira Felipe González si quiere ser, alguna vez, opción real de poder.

Pradera estuvo al tanto desde el primer momento de ese encuentro y propició ese mismo verano varias reuniones de colegas, amigos y colaboradores –de Alianza, de Siglo XXI, del propio periódico: los círculos concéntricos en su radio más ancho– con Felipe González para conocer de primera mano al nuevo líder y sus impresiones ante otro nuevo líder, Suárez, tan joven también que no parecía tener cuarenta y cuatro años, tan desenvueltos los dos. A Fernando Claudín y a Jorge Semprún, González los conocía ya desde antiguo, cuando visitaba de vez en cuando a Claudín en su modestísimo apartamento a las afueras de París tras su expulsión del PCE. No debió

ocultarle en alguna de aquellas visitas, como me dijo Felipe González, el escándalo de comprobar que Carrillo promovía a finales de los años sesenta, con *Después de Franco, ¿qué?*, la doctrina que había motivado la expulsión de los díscolos en 1964. Era la época en que Felipe iba y venía a España desde la Universidad de Lovaina con los ejemplares del libro de Carrillo camuflados en su coche y destinados a los militantes que los pedían, aunque fuesen comunistas.

Por supuesto, el lenguaje de la batalla política era otra cosa, y ese mismo septiembre de 1976, en el congreso del Partido Laborista británico, Felipe González reprueba el apoyo de los socialistas europeos a Suárez. A pesar de la feliz y tardía despenalización de la *ikurriña* por parte de Martín Villa y del acceso de Gutiérrez Mellado a la vicepresidencia del Gobierno, a pesar de la extinción del Tribunal de Orden Público y de la desaparición del Movimiento, la única alternativa comprometida a traer «una democracia total y completa» a España era el PSOE, de acuerdo con la «ruptura democrática» acordada en Suresnes en 1974.

¿Conoció también Pradera el encuentro del 2 de agosto en casa de Ricardo Bofill en París entre un Areilza despechado y un Carrillo aún exiliado e impaciente? Areilza trabaja por su cuenta y sondea la posibilidad de acabar con Suárez promoviendo, como hace *El País* entonces, un gobierno de coalición que Carrillo no acaba de ver. Prefiere que siga el Gobierno pero con la incorporación de un respetado economista y miembro del consejo de Prisa, Ramón Tamames, aunque sí da garantías de renunciar al debate sobre la reforma del Estado o sobre la urgencia de los nacionalismos. En el fondo, según las notas de José Mario Armero, transcritas en el libro de Alfonso Pinilla sobre la legalización del PCE, esos problemas los han creado «las burguesías altas y medias» y los trabajadores solo tienen a España como patria.

En cualquier caso, Suárez ha conseguido por fin, el 28 de agosto, que se celebre en casa del empresario y protector de Santiago Carrillo, Teodolfo Lagunero, en Cannes, un encuentro entre el secretario general del PCE y su emisario y jefe de la agencia de noticias estatal Efe, José Mario Armero. Tres días antes, Lagunero se había reunido ya con el ministro de Educación y amigo antiguo, Aureliano Menéndez, para agilizar la concesión de pasaporte a Carrillo de cara a normalizar su situación. En realidad, Carrillo reside clandestinamente en España desde febrero del mismo año 1976, asistido por su secretaria Belén Piniés en una casa de El Viso en Madrid. Había cruzado la frontera el 7 de febrero en el señorial Mercedes de Lagunero. Tras ese encuentro de verano con el mediador Armero, Carrillo se siente más seguro o más temerario, e intensifica su agenda de contactos en Madrid de forma casi febril, hasta llegar a la famosa rueda de prensa, ya sin peluca. La celebra como acto central de campaña el 10 de diciembre de 1976, a cinco días del referéndum sobre la Ley para la Reforma Política y al día siguiente de la triunfal clausura del congreso que el PSOE ha celebrado con fuerte repercusión política y mediática.

Los preliminares para la legalización del PCE están de un modo u otro en marcha y tienen dos antecedentes significativos: dos años atrás, en agosto de 1974, Lagunero había reunido en el hotel Bristol de París, a iniciativa del príncipe Juan Carlos, a José Mario Armero y a Carrillo. Al año siguiente, tras la muerte de Franco, el ya rey Juan Carlos manda a su hombre de confianza entonces, Manuel Prado y Colón de Carvajal, a comunicar al dictador Ceaucescu su compromiso democrático real con el fin de que se lo haga llegar a Carrillo. La relación entre ambos dirigentes comunistas era estrecha –Carrillo disfrutaba con frecuencia de vacaciones en Rumanía–, pero es difícil saber cuándo le llega la información a Carrillo, si en diciembre de 1975 o en febrero de 1976, cuando decide instalarse en España. Según algunos, el mediador del encuentro habría sido Domingo Dominguín, y eso haría algo más que seguro que Pradera estuviera al tanto de la operación. Pero Dominguín se pegó un tiro en Guayaquil, Ecuador, el 13 de octubre de 1975 para

desolación integral de Pradera, que lloró amargamente la muerte de un hombre con quien la afinidad y la empatía había sido fraternal entre capeas, excursiones, política, frivolidad y sarcasmos. La llamada que recibió Semprún de un Pradera desfondado anímicamente pudo decidir a Semprún a regresar a España ese mismo mes de octubre para asistir en directo a la auténtica muerte de Franco.

La legalización es una evidente condición política de la democracia, pero es también el acto simbólico más impensable para una población crecida bajo la demonización anticomunista. De hecho, incluso Suárez saldría ganando con esa legalización porque tampoco Carrillo tendría entonces que «hacer demagogia, como Felipe», porque ellos «son más serios». El 8 de septiembre tampoco prospera un nuevo encuentro entre emisarios de Suárez y Carrillo en París en el hotel Commodore y sigue sin concederse el pasaporte, pero Carrillo toma una decisión audaz. Todavía no está con él en Madrid su familia, pero serán los medios quienes informarán de ello en cuanto suceda: en portada *El País* trae la noticia del viaje de Carmen Menéndez y su hija, con extensa entrevista que finge a Carrillo en París cuando en realidad está celebrando, con protección policial discreta, numerosos encuentros ese verano que van desde Jordi Pujol y Miquel Roca hasta Joaquín Ruiz-Giménez, Tierno Galván, el empresario Pere Duran Farell y, por supuesto, Felipe González.

Aunque acierte Suárez en las formas y los tonos, la reforma son todavía «palabras, palabras, palabras». La amnistía era una buena prueba, pero la única que de verdad importaba era la aprobación en referéndum de la Ley para la Reforma Política: ¿quién iba a creer de veras en la autodisolución votada de las Cortes? Desde luego, no *El País*, pero quizá sí alguien que había interiorizado en su corta vida política los enjuagues psicológicos de los jefes falangistas, la sumisión como virtud de supervivencia, la obediencia como requisito del poder. Suárez sigue sin negociar con la oposición, condicionado todo a un acto de fe, a una convicción íntima tan inverosímil como el «suicidio político» que pide a las Cortes. Desconfían tanto en *El País* de esa aprobación de la Ley que recuerdan al rey que podría someterla él directamente a referéndum. Lo exasperante para el editorialista es el riesgo altísimo de quedar todo embarrancado: «Podemos concluir que la reforma puede salir bien o puede salir mal, lo que equivale a no concluir nada.»

Contra los peores pronósticos, sin embargo, el debate en las Cortes entre el 16 y el 18 de noviembre de 1976 se resuelve a favor de Suárez. Pese a su «error político», el periódico aplaude sin reservas su discurso —precisamente el que no aplaudieron las Cortes agonizantes—, para después calzarse los zancos y reclamar imperativamente a aquellos sujetos el cumplimiento de sus costumbres en los últimos cuarenta años. De ellos se espera obediencia disciplinada y nada más, porque «el aplauso, amén y silencio debe seguir siendo la regla». No hay «razón alguna, salvo incapacidad política en el Gabinete» para que no siga siendo así.

Pese a reconocer como legítima la abstención que promueven PSOE y PCE, el periódico se inclina por el sí en el referéndum del 15 de diciembre, «facilitando un proceso imperfecto, pero concreto, hacia la democracia». Para quien defienda «la pureza de las ideas», no hay duda sobre su abstención militante o activa. Pero quien evalúe «la oportunidad pragmática de los hechos» está obligado a votar sí para lograr «la negociación de la ley electoral, la legalidad de todos los partidos, el reconocimiento del problema de las nacionalidades y las regiones, la libre campaña electoral». Esas son las «condiciones mínimas planteadas por la Oposición y que el Poder puede y debe aceptar». Seguramente la «salida del franquismo exigiera procedimientos autoritarios y mecanismos no del todo claros para llevarse a cabo», en alusión a la iniciativa delirante de Suárez de promover la autodisolución de las Cortes y el referéndum consiguiente. «Pero la entrada

en la democracia excluye esas soluciones mixtas» que habrá que ganar después de la autoliquidación franquista.

El mismo día 18 de noviembre en que las Cortes aprueban su suicidio, *El País* dedica la portada a la presencia de Carrillo en Madrid «para dirigir al Partido Comunista de España». Diez días después son detenidos sus militantes Simón Sánchez Montero y Jaime Ballesteros, ambos obviamente conocidos y amigos de Pradera: es el mismo día 28 de noviembre en que Felipe González vuela desde Venezuela hacia Madrid en el avión presidencial de Carlos Andrés Pérez. Suárez los recibe en Barajas, un momento antes o después de dar la orden de liberar a los dos presos comunistas, en una muestra más de sus reflejos políticos. Esa misma noche Felipe tiene un compromiso inaplazable en casa de José María de Areilza para cenar con Santiago Carrillo, Joaquín Ruiz-Giménez, Enrique Tierno y Antonio de Senillosa, otro hombre relevante en el accionariado de Prisa por el lado catalán, culto, monárquico y vividor.

No es por tanto del todo exótico que el editorial de dos días después, el 30 de noviembre de 1976, elogie a Adolfo Suárez en la medida que ha reconocido la abstención como opción legítima ante el referéndum por la Reforma Política del 15 de diciembre. O, como cuenta *El País*, ha reconocido que el «abstencionismo activo es una manera, aunque paradójica, de votar», incluida la posibilidad de defenderlo en TVE. Suárez ha entendido que no puede descalificarse a la oposición por creer que «la reforma es otorgada o simplemente pactada con la derecha autoritaria del viejo régimen»: sería un error político impedir esa posición cuando la oposición ya ha aceptado que la ley para la Reforma «es un paso hacia la democracia, al menos hacia una hipotética y alcanzable democracia». De ahí el sentido de una «abstención militante», que bien pudiera ser la opción que adoptase finalmente Pradera, tanto si es suyo como si no ese editorial. Y es en todo caso la opción que defendieron tanto Felipe González como Carrillo.

El mismo 28 de noviembre en que González volaba a Madrid con Carlos Andrés Pérez volvía Agustín García Calvo de París para alborozo jovial de su díscolo discípulo Fernando Savater. Se reincorporaba por entonces a su cátedra, como habían hecho ya los demás profesores expulsados en 1965. Ese mismo día, sin embargo, el gobernador civil de Málaga suspendía un acto en memoria de Francisco Giner de los Ríos porque estaba prevista la participación del comunista Manuel Azcárate. Ni Carlos Castilla del Pino, que era más que nunca el psiquiatra titular de las neurosis de una izquierda congénitamente propensa a las neurosis, ni el resto de los participantes accedieron a mantenerlo en solidaridad con Azcárate. El día anterior, coincidiendo con la inminente reapertura de la Rafael Alberti de Madrid tras un atentado, habían cerrado 300 librerías en toda España en protesta por la violencia continuada de la extrema derecha. *El País* había denunciado ya, sin duda por boca de Pradera, la «formidable crisis» que vivía el libro en Latinoamérica, la continuidad de la censura, la perpetuación de las «prohibiciones administrativas» y la negligencia permisiva del Estado con «organizaciones paralelas, formadas por fanáticos y delincuentes». Estaban sustituyendo «la censura previa y estatal» por otra que aplicaba «como sanción el destrozo de las instalaciones de librerías, distribuidoras o editoriales», en una forma de matonismo tolerado o incluso incentivado: «No solo la extrema izquierda, y no principalmente la extrema izquierda, tiene armas en este país, y hace falta aclarar quién las proporciona a estos delincuentes.»

Probablemente sea fiable la confidencia del director de la agencia Efe, José Mario Armero, a propósito de un encuentro privado con Juan Carlos en esos meses. Incluso para él había sido un «descubrimiento» el papel político de Suárez, cuando obviamente los demás, incluido Armero, «creíamos al principio que era un disparate».

DUCHA FRÍA

A Suárez le esperan todavía auténticas trastadas editoriales en *El País*, pero el decreto-ley de amnistía de julio de 1976 se convierte en prueba incontrovertible de su voluntad democrática: «Es la mejor de las posibles, aunque no la más amplia de las deseables.» Si no me equivoco, la letra de Pradera se trasluce en la conciencia del trauma histórico que pesa en la sociedad española: por eso «este gesto se nos configura además como un símbolo real de superación de la guerra civil», reforzado por la insólita «imagen de los periodistas aplaudiendo al ministro de Información cuando este declaró que ya para él la guerra civil no existía». Ha sido la amnistía decretada «el gesto de mayor alcance conciliador de los realizados hasta hoy por la Corona con el propósito de superar definitivamente la guerra civil y sus prolongadas derivaciones».

La decisión es «histórica porque revela el propósito de liquidar una etapa irresponsablemente dividida entre vencedores y vencidos». Pero también aquellos «en que pervive el clima moral de la derrota deben esforzarse por borrar el espíritu de la guerra», aunque desde luego las «secuelas» no «hayan desaparecido de la convivencia nacional». La «voluntad de reconciliación» es real, aunque la izquierda reclame una ampliación de la amnistía que alcance también a los presos de ETA. *El País* invita comprensivamente el día 5 de agosto de 1976 a entender que «los planteamientos subversivos que promueven la destrucción del adversario son siempre condenables», pero «no habría que olvidar los motivos de persecución, de humillación o de desesperación que en algunos casos dieron origen a la rebeldía armada» de ETA. De hecho, son estas circunstancias las que «deberían reconsiderarse a la hora de aplicar el decreto de amnistía» para que incluya también a sus presos.

Sobre la población ETA ejerce «la espiral acción-represión» activada en la última década por «la barbarie de pequeños grupos de etiqueta separatista y conducta terrorista». Han utilizado «como justificación la otra barbarie, no por aislada menos escandalosa, de ciertos funcionarios que el Estado debería, por su buen nombre, disciplinar y controlar». Cuando todavía no llaman a ese sector del Estado la *zona de sombra*, la solución por la que aboga el presumible editorial de Pradera para cerrar «la herida vasca» no es original pero sí es firme: un «régimen autonómico» y «amnistía total para delitos no comunes». Para que el pueblo vasco se asuma como parte de la comunidad española «necesita un Estado democrático que destierre los criterios centralistas». En agosto de 1976, una autoridad moral fuerte de la izquierda como Aranguren había pedido también la «amnistía total» desde *El País*. La excarcelación de presos políticos daba una pista paralela del volumen del compromiso político: fueron en torno a trescientos, exceptuados ahí los miembros de ETA y el FRAP condenados o procesados por haber «puesto en peligro o lesionado la vida o la integridad física de las personas». La pertenencia a la banda no impidió, por tanto, la excarcelación (y la puntualización es de Santos Juliá).

Ese propósito de facilitar la democracia guía el tono paciente y didáctico de tantos otros editoriales, en particular cuando asume la explicación y la defensa de la civilización occidental. En ella está inserta España a pesar del franquismo y su «régimen autoritario», que es la fórmula habitual y más veraz frente a régimen *fascista* que usaba la izquierda entonces (y demasiadas veces ahora). Todo ha de orientarse a desterrar «los modos intolerantes y dogmáticos que deparan sociedades en las que no existe el derecho a la crítica libre, a la alternancia en el ejercicio del

poder de las distintas formaciones políticas, a la primacía del voto popular, a la información independiente y al pluralismo efectivo».

Casi todo en este tiempo viene aconsejado por la ley explícita del pragmatismo y el empeño de sofrenar cuanto pueda poner en riesgo el tránsito hacia la democracia. Por eso la izquierda haría bien a finales de 1976 en «enterrar la estrategia del catastrofismo» tanto por razones analíticas como tácticas. Ese es parte del nuevo negocio democrático que hay que aprender, es parte de una reeducación donde el acceso al poder no equivalga a claudicación o sumisión sino a asunción de la edad adulta para cambiar la realidad desde dentro de la realidad, siempre imperfecta y abusiva, incontrolada y frustrante. Ni del apocalipsis ni de la utopía nacen las rutas hacia el poder para una izquierda consecuente con su vocación de cambio real. Pero también el Gobierno debe aprender a gestionar su éxito. Con la misma convicción que critican a unos poderes públicos que «se quedan cortos y lentos en el cambio político», critican también la hiperactividad de una oposición que se excede a menudo en proclamas y convocatorias de las masas callejeras. «Ni unos ni otros llegarán por ahí a pactar nada, y menos una ruptura política negociada. Por ahí solo se va hacia la *rotura*.» Tanto para la oposición como para las reivindicaciones nacionalistas de vascos y catalanes vale la consigna general de esta etapa: es «la hora del pragmatismo».

El pragmatismo virtuoso que defiende el periódico es enemigo a la vez del conformismo conservador y continuista y de la utopía iluminada de una revolución sin respaldo social. Pero todavía no ha vivido la izquierda los temblores de la ducha fría de realismo que cayó de golpe sobre ella el día del referéndum. Cuando nadie duda de la victoria del sí, a tres días para el 15 de diciembre, el periódico se esfuerza por fortalecer su pragmatismo (virtuoso) y reconocer el balance positivo que los más impacientes niegan tanto desde la izquierda como desde el franquismo. Demasiados pensaban que todo no era «más que una gigantesca trampa para mantener, con apariencia distinta, el aparato de intereses generado por la dictadura». Pero el periódico cuestiona esa presunta «habilidad maquiavélica» de Suárez porque la distancia recorrida hacia la democracia «ha sido muy superior a la esperada por los Gobiernos occidentales». La verdad es «más bien» que un franquista de pro en su día como Suárez ha «terminado por reconocer la presión social» y ha «actuado en consecuencia».

Fue sobre todo la izquierda la que reconoció con estupor que la población desoía sus consignas y aprobaba masivamente la ley final del franquismo. Desobedecieron o descartaron la abstención promovida por socialistas y comunistas como si anduviesen por delante de sus líderes, o como si un sexto sentido les dijese que aquel referéndum llevaba alguna sanción irreversible dentro, fuese quien fuese Suárez y pasase lo que pasase. El censo sumaba algo más de veintidós millones y medio de votantes y la participación estuvo por encima de los diecisiete millones, exactamente en un 77,8 %. Solo un millón de todos los que votaron escogieron una opción diferente al sí, que obtuvo el porcentaje apabullante del 94 %. En el negocio de las mayorías y las minorías democráticas, la izquierda acababa de encajar una primerísima y contundente lección: ni su llamada a la abstención había surtido el menor efecto ni habían conectado políticamente con la demanda social mayoritaria. Quizá la habían entendido pero no se atrevieron a secundarla. Pudo tener efectos desmoralizadores o incluso crueles en la izquierda y sus desencantados crónicos, pero posiblemente sirvió para avanzar un poco más en el aprendizaje de la democracia en libertad y en la práctica, no desde los libros, las teorías o las mónadas políticas mesiánicas. Puso por primera vez las condiciones del futuro con las sumas y restas que constituyen la base efectiva – frustrante, insuficiente, decepcionante– del sistema democrático.

Nadie puso en duda la legitimidad del resultado y el propio periódico había animado a votar sí,

sin condenar la abstención motivada que defendía el PSOE y el PCE: era posiblemente el mejor síntoma de la dificultad de salir de la encerrona en aquellos momentos. El sí legitimaba un referéndum irregular, pero el no era la posición del franquismo bunkerizado y la extrema izquierda, a la izquierda de un PCE que negociaba su moderación en secreto.

¿Hay manera de saber quiénes fueron ese millón largo de personas que votaron otras cosas, incluidos los más de cincuenta mil votos nulos? Entre ellos podían estar aquellos muchachos socializados políticamente en la revolución anticapitalista, los lectores de los cuadernos que Anagrama publicaba recién traducidos de su primera edición de Maspero, fueron los lectores clandestinos de las ediciones de Ruedo Ibérico y los lectores de los manuales de adoctrinamiento político maoísta, trotskista, guevarista o partidarios de Ho Chi Minh, asqueados de la mentira de una sociedad inauténtica y explotadora; fueron los hijos de la burguesía franquista educados en la universidad y con profesiones liberales dispuestos a sabotear una sociedad embrutecida, religiosamente doctrinaria y anacrónica, veterotestamentaria y embustera, los espectadores de *Arrebato* y los lectores del *Libro rojo de Mao*; fueron los sustractores o clientes de las librerías progres de la época con las novedades de Akal y Fundamentos, de Ediciones de Cultura Popular, Kairós, Tusquets y de la misma Siglo XXI; fueron los feligreses de una contracultura hoy mitificada desde opulentas universidades norteamericanas, con su toxina neorromántica, su pulsión autodestructiva y su crónica fúnebre inminente; fueron los lectores ácratas de *Ajoblanco* y los trepidantes excursionistas en busca de la paz espiritual en Berkeley, en la India o en el Tíbet, los protagonistas de una nueva sexualidad desafiante y rebelde contra la marginalidad social y el castigo público y penal, los habitantes de las comunas y expertos en todo tipo de consumos adictivos, desde el ácido o el obvio hachís hasta la heroína como cabalgadura hacia el lado salvaje de la vida, Aníbal Núñez y Leopoldo María Panero, Carlos Castilla y Marta Sánchez Martín, Eduardo Haro Ibars y Alberto Cardín y Chicho Sánchez Ferlosio, porque nada de lo que estaba pasando merecía dos minutos de atención para quienes habían descartado de antemano cualquier forma de socialización política democrática. «O la revolución o nada» pudo ser su consigna y su forma de lealtad letal a la pureza de un idealismo de papel, fantasía y ficción; eran también los militantes de los partidos inconformes con el aburguesamiento del PCE y su aclimatación cobarde y sistémica a las leyes de la democracia representativa que todavía no existía. En mis cuentas caprichosas me salen medio millón de personas, entre quienes se abstuvieron íntegramente y quienes acudieron a expresar su insolidaridad crítica y revolucionaria contra la farsa de un referéndum que solo era una máscara más del imperturbable franquismo. Por cierto, cabe ahí también aquella izquierda que no dudaba del sí, ni del éxito del sí, pero que votaría solo por encima de su cadáver en una operación tan turbia como hija de un esbirro de la dictadura.

Se empieza a cebar en este resultado la amargura del desencanto como ensimismado desengaño revolucionario de los hijos rebeldes de la burguesía vencedora y a menudo también de la vencida. Todo era nada porque llevaba las trazas de convertir el futuro en una vulgar, anodina y gris democracia liberal. O la revolución o nada, y fue para muchos de ellos precisamente eso: nada, incluido el sentido menos metafísico y más trágico de la expresión. Entre las nuevas clases medias y algunas élites culturales cuajó también el discurso crítico contra el bobo fraude de todo porque apenas cubría la más baja de las expectativas lentamente fabricadas en los últimos quince años de pulsión revolucionaria. Cuando a un hombre ya maduro entonces como Castellet se le pide el diagnóstico cultural sobre la naciente democracia en 1977, su respuesta está contaminada de un

sentimiento de frustración que es posiblemente el mismo que experimentaron la mayoría de las élites culturales e intelectuales, incluido Pradera.

Las duchas frías de buena mañana, como esta misma, también tienen efectos lustrales o al menos tonificantes. La intensa politización y la fuerte carga ideológica y teórica del discurso de la izquierda estaba tan lejos de las clases medias y de la masa electoral que algunos buscaron el modo de conciliar dos cosas en apariencia irreconciliables: satisfacer a la militancia y a los simpatizantes de los partidos de izquierda y a la vez encontrar la sustancia que engrasase el carro de los votos masivos en unas elecciones generales. Si todo salía bien, tenían unas por delante, seis meses después de este diciembre de 1976, a sabiendas de que el Gobierno Suárez iba a exprimir de forma abusiva, propagandística y explícita la maquinaria de RTVE, como había hecho hasta entonces con la activa y obediente contribución de su director, Rafael Anson.

De hecho, importaba muy poco que medio millón de votos hubiesen ido a parar al no a la ley para la Reforma, tanto si procedían del franquismo visceral como de la radicalidad de la izquierda extraparlamentaria (como se la llamaba en Europa). Y a la vez importaba muy poco que algunos pocos más, intensamente ideologizados en la izquierda y forzados por las circunstancias, hubiesen ido a votar en blanco por desdén. Era su forma democrática de protestar por la inconsistencia política de una ley que todavía no garantizaba, ni de lejos, la conquista de una democracia real. Yo también quisiera saber qué votó entonces Pradera, pero no lo sé. Antes lo he dicho de otro modo, pero arriesgo ahora que su voto estuvo entre la crítica activa del voto en blanco y la resignación pragmática del sí, mejor sí.

7. TRANSICIÓN SIN TRAUMAS

La apuesta de Pradera por Felipe González nunca fue incondicional, pero estaba ya decidida sin reservas. Tardaría todavía en filtrarse en la línea editorial del periódico o a expresarse abiertamente en sus páginas, pero esa va a ser la dirección que adopte *El País*, sobre todo durante las escaramuzas y el nerviosismo de las vísperas de las primeras elecciones generales, el 15 de junio de 1977, con golpes bajos que afectan a Suárez y un tono general más crispado que nunca contra su Gobierno. Tenían razón algunos miembros del Consejo de Administración de Prisa, y con ellos buena parte de los fundadores, al detectar un lenguaje y unas posiciones alejadas de sus planes originarios.

No se trataba solo del destape estilístico, jocoso y guerrillero de numerosos colaboradores, sino de la defensa de unas opciones políticas imprevistas. Ni Cebrián como director ni Jesús Polanco como consejero delegado son ni de izquierdas ni radicales, pero encontraron un doble mecanismo que garantizó su buen funcionamiento. A la vez que blindaron el periódico contra las injerencias de su Consejo de Administración, mantuvieron la dirección editorial y política en paralelo a la efervescencia crítica y más radicalizada tanto de las pobladísimas páginas de opinión como de una redacción joven, políticamente de izquierdas, incluso muy de izquierdas, radicalizada y combativa, contra las tentativas intervencionistas de sus consejeros. O dicho de otro modo, en la caja negra del periódico se fabricó el espacio que frenó a la vez la propensión conservadora del Consejo y la propensión radicalizada de la redacción. La división será descarnada un año después, cuando los hermanos Ortega Spottorno, Julián Marías y Pedro Laín Entralgo renieguen del periódico que han fundado e intenten enderezar su deslizamiento hacia las complicidades socialistas.

El crecimiento rápido de *El País* pide una nueva ampliación de capital para consolidarse y, aunque no será tan apurada como la anterior, acaban acudiendo Polanco y Darío Valcárcel en diciembre de 1976 a las puertas del Banco Urquijo. Presidido por Jaime Carvajal, el banco acuerda a través de su director general, Gregorio Marañón, también accionista de Prisa, suscribir el 10% del capital, lo que convierte al banco en principal accionista. La operación se hace por mediación de tres personas, el propio Polanco, el político Óscar Alzaga y Matías Cortés. Según Mercedes Cabrera, la aportación económica está condicionada a asumir la defensa de la economía de mercado y la monarquía constitucional. En ese momento es todavía *La Vanguardia* de Barcelona el periódico de mayor difusión en España, y *El País* está cerca de rebasar a *Abc* y *Ya*. Dentro de medio año, *El País* habrá consolidado su difusión y empezará a generar beneficios, con una tirada que ronda los doscientos mil ejemplares diarios, pese a las tensiones en el Consejo de Administración de Prisa y la Junta de Fundadores por la línea editorial que toma el periódico con vistas a las elecciones de junio de 1977.

UNA INVISIBLE OMNIPRESENCIA

¿Para qué estaba ahí Pradera? Más allá de las razones obvias de su competencia profesional y su trayectoria editorial, estaba ahí como teórico y práctico experto en la izquierda, como veterano

militante con experiencia política del antifranquismo, primero en las filas del PCE y después desde la nueva subsección que fueron engrosando otros insumisos a la disciplina comunista como él, y antes que nadie Claudín y Semprún. Lo hacía singular todavía una cosa más. Su función en el PCE había sido durante casi diez años, y había seguido siendo fuera de él, el contacto con otros microclimas del antifranquismo menos radicales, más pactistas o menos visionarios. Sus relaciones con la democracia cristiana, con la socialdemocracia tibia, con los liberales eran parte de su vocación en la medida que el radar de la movilización no excluía valores potenciales y aliados tácticos y fácticos, incluida la lucha armada de ETA. Por eso anduvo de un lado para otro buscando firmas y apoyos para las presumibles condenas a muerte del proceso de Burgos en 1970.

Ese perfil de Pradera era realmente insólito en la España de la oposición, y lo era doblemente por la solvencia de los análisis y el círculo íntimo de amistades intelectuales y artísticas en las que se movía y se había movido. Ese bagaje y un don adicional convirtieron naturalmente a Pradera en la brújula intelectual y programática del periódico sin que hubiese estado previsto, una vez más, ese papel: de experto en la izquierda y el antifranquismo pluralista pasó a convertirse en ideólogo de una socialdemocracia que habría de fabricarse y construirse al hilo del asentamiento de la democracia. Pradera fue parte central de la reconducción del periódico (y de la ciudadanía) lejos de las áreas y climas para las que había nacido. Desde la caja negra, Pradera estuvo en esa oscuridad anónima como poder desnudo pilotando la línea política del periódico con el respaldo explícito y la complicidad activa de Polanco y Cebrián, los responsables prácticos de esa decisión invisible.

Había visto muy pronto en Felipe González al líder capaz de conquistar el espacio civil de un socialismo democrático sin hipoteca marxista dogmática: un socialismo socialdemócrata, a pesar de que el Partido fuese mucho más marxista y socialista que socialdemócrata, y a pesar de la consentida radicalidad verbal de un político en batalla. En frase pronunciada por un íntimo amigo, Clemente Auger, Pradera habría confiado a sus cuarenta años en el joven andaluz de treinta al que había conocido como Isidoro, «y lo apostó todo a él políticamente». Tampoco hay descuido alguno en la contundencia de una frase de Cebrián sobre Pradera. En sus memorias asegura que Felipe González y él lo tuvieron por «una referencia intelectual obligada para ambos, oficiaba casi como nuestro hermano mayor, y nos aleccionaba sobre la ética en política y los manejos habituales de la izquierda». Su oficio de editor desde 1963 es el laboratorio privado de un ideólogo socialista que cuaja como socialdemócrata en la misma caja negra de *El País* pero que no preexiste a *El País*: se hace con él y con la misma democracia, con el choque con la sustancia del poder, la batalla política y las resistencias de la realidad, en expresión tan habitual del autor.

El Pradera de la madurez cristaliza en sus páginas y en directo: es en sí mismo una metáfora turbadora del modo en que fue fabricándose la Transición como improvisación atrevida, colectiva y pura obra en construcción. Felipe González había de ser la tercera persona que más impresionó a un hombre por definición poco impresionable, según contaba con solemnidad completamente exótica en él. Las otras dos personas, Dionisio Ridruejo y Jorge Semprún, habían llegado quince años atrás, casi juntas y desde continentes ideológicos antitéticos. Pero tampoco ninguno de los dos desaparecería ya de su horizonte moral y vital.

Casi parece una parodia de la tríada hegeliana esta desembocadura de un Pradera de cuarenta años, escarmentado de la esclerosis dogmática comunista y templadamente abocado a un pragmatismo socialdemócrata. Si ser es ser percibido, como le gustaba repetir citando al obispo Berkeley, Pradera sería percibido como un enigma hermético y a la vez ejemplar en su evolución y en las razones de su evolución (porque habría de ser la de muchos otros). Quizá también por eso

no dejó de repetir que el verdadero enigma estaba en los motivos que cada cual encontró para aceptar «las reglas de la democracia liberal», siendo como eran, él y sus amigos, «militantes revolucionarios». Las claves solo podían estar en la biografía personal. Su reeducación política desde el falangismo ideológico al comunismo primero y al socialismo socialdemócrata después la vivió él y la vivieron muchos, pero en su caso estuvo invenciblemente anclada al oficio de la edición literaria y humanística y a la cultura política de un académico frustrado: el poder del saber y la solvencia cultural fueron las armas invisibles y determinantes que explican la autoridad creciente y secreta de Pradera. Esa escarmentada y experta peripecia ideológica condicionó y hasta definió en buena medida los primeros quince años de *El País*.

De hecho, Felipe González podía encarnar políticamente otra urgencia colectiva: la comprensión de la nueva democracia como neutralizadora del enconamiento entre la España derrotada y la España vencedora. Acabar con esa ecuación vigente de vencedores y vencidos valdría como fortín para conjurar o neutralizar los fantasmas guerracivilistas. Es ahí donde operó decisivamente una lección intuitiva que Pradera desarrolló por escrito en aquellos años, tanto desde el anonimato del comentario editorial como desde los artículos firmados. Lo que a toda costa había que proteger en aquella trepidante conmoción diaria de noticias en los años 1976 y 1977 no era la todavía inexistente democracia sino las condiciones para que fuera viable. Pero esa era una condición moral y civil antes que una circunstancia política. La reeducación de una sociedad globalmente corrompida durante el franquismo pasaba por la conquista voluntariosa y racionalista de un afán democrático de conciliación sin antecedente próximo alguno para la inmensa mayoría de la población. Esa fue posiblemente la militancia más enérgica de este Pradera; la segunda fue la elección de Felipe González como ejecutor práctico del cambio.

Pero para que eso sucediese habría que desenredar muchas madejas y fomentar las condiciones de posibilidad en una población asilvestrada durante cuarenta años de rencor, humillación y subdesarrollo civil, moral e intelectual. Esa fue la pedagogía que lideró el periódico en diversos momentos y en particular el propio Pradera. La exigencia de una justicia retrospectiva contra el franquismo y sus herederos bloquearía la consecución de una paz social y fiable. Lo explicó años después admitiendo que la Transición dejó «problemas irresueltos» de la guerra y el franquismo, pero seguramente hizo bien al actuar así. Había entendido ya con Shlomo Ben Ami, «una de las personas más inteligentes que yo haya conocido», decía Pradera, que «la justicia y la paz no son compatibles». Evocaba una sentencia talmúdica cuya traslación a España significaba que «si quieres paz, no puede haber un estricto cumplimiento de la justicia». Y aunque es «muy duro de decir», es seguramente «la única forma honesta de plantear el asunto». La Transición acabó siendo para Pradera el mejor ejemplo del adagio jurídico que tanto le gustaba: es preferible un mal acuerdo que un buen pleito. Y en buena parte de su actividad periodística y analítica alienta esa convicción, todavía no expresada con esa transparencia pero intuitivamente ejercida como condición de una democracia que se aprende mientras se practica. Por eso es sin duda Pradera quien en enero de 1977 expone una doctrina central del periódico: el riesgo desestabilizador más alto de la democracia está en el País Vasco. Es el problema «más enconado y peligroso que ha heredado la Monarquía» y su población ha sido la única con una abstención superior al 50 % en el referéndum de diciembre; en Cataluña, por el contrario, hubo una de las mayores participaciones y el respaldo más alto de toda España al sí.

El efecto verdaderamente corrosivo del referéndum fue la activación al menos hasta junio de 1977 de continuos temblores sísmicos destinados a abortar el proceso democrático, en particular en el lapso que va desde finales de 1976 hasta el 24 de enero de 1977, con el asesinato de los

abogados laboristas de la calle Atocha, 55. La intensa sensación de colapso en esas semanas – congreso socialista de diciembre, secuestro de Antonio María de Oriol y de Emilio Villaescusa por parte de ETA, rueda de prensa y detención de Santiago Carrillo, movilización social diaria, manifestantes abatidos por disparos de la policía, asaltos incesantes a librerías, acciones de un GRAPO «de harto dudoso origen», asesinatos de Atocha y la posterior manifestación silenciosa– conducirá al editorial colectivo de la prensa española que también suscribe *El País* el día 29 de enero, «Por la unidad de todos». El salvaje asesinato de cinco abogados laboristas y militantes comunistas que la extrema derecha cometió en conexión con la italiana parecía la respuesta sangrienta y chantajista a la ruta conciliadora que defendía el periódico y defendían los más de dieciséis millones de votantes del 15 de diciembre.

El 25 y el 26 de enero los editoriales de *El País*, publicados en primera página, afirman que «una confabulación ha puesto en marcha, en nuestro país, la técnica de un golpe de Estado» con los objetivos evidentes y concertados de «incitar a la rebelión al estamento castrense; atemorizar a la población civil; exasperar a la oposición empujándola a la acción impaciente o la protesta desordenada, e impedir así la celebración de unas elecciones democráticas en este país. Ante la técnica del golpe de Estado, solo cabe una respuesta posible: el contragolpe del poder». Por eso creen que solo «un Gobierno de reconciliación nacional», con Suárez «a la cabeza, y con inclusión de representantes de los partidos políticos, a derecha e izquierda», puede frenar este ataque al proceso, aunque obligue a unos y otros ministros a dolorosos esfuerzos de olvido.

LECCIONES ANTIGUAS

Pradera no había escrito con su firma desde junio del año anterior, en la primera andadura del periódico, pero lo volvió a hacer en este enero sangriento de 1977 por partida doble: a través del comentario editorial y a través de un potente artículo dirigido a moderar el legitimismo de la izquierda y a sofocar la insurrección de los sucesores de las familias de la victoria. El editorial del 7 de enero se titula premonitoriamente «La memoria histórica» y aspira a rebajar la tensión y los múltiples frentes de desestabilización generada por el sí a la reforma política de diciembre. La evocación de la Guerra Civil se ha hecho continua e insistente en esas últimas semanas, como riesgo pero sobre todo como amenaza, en particular por parte de los «atizadores de la discordia».

Pero la vía para ahondar en la indispensable reconciliación entre vencedores y vencidos no ha de ser ni el silencio cobarde ni la negación falsaria del pasado, «no se trata de rehuir el recuerdo de la guerra civil, sino de rechazar su explotación fraudulenta por minúsculos sectores que esconden muchas veces sus sectarios propósitos bajo ropajes falsamente patrióticos». El editorial destila la doctrina básica de Pradera para desterrar «la tentativa de acompañar la amnistía jurídica de los presuntos delitos de guerra con una amnesia histórica de lo ocurrido entre 1936 y 1939». Eso «sería un autoengaño ingenuo e ineficaz», porque «la sociedad española contemporánea ha sido modelada, en sus realidades y en sus ausencias, por el conflicto fratricida que estalló hace más de cuarenta años. Cuando los recuerdos han cristalizado en instituciones y en pautas de comportamiento, resulta inútil tratar de hacerlos desaparecer mediante exorcismos, como si fueran fantasmas».

Pero Pradera sintió la necesidad de explicar también en primera persona, solo dos semanas después, esa posición crucial y un objetivo mayor. Todavía no se han cometido los asesinatos de Atocha cuando aparece «Los hijos de los vencedores», el 20 de enero de 1977, pero el periódico

había denunciado ya «una gran maniobra de desprestigio del poder» con fines golpistas. Hoy ese artículo parece escrito con el tomavistas del futuro o la mirada puesta en algo parecido a un programa generacional. También era, en la perspectiva íntima de Pradera, la segunda redacción o la versión actualizada del manifiesto que habían elaborado él y Semprún, con su cuñado Miguel Sánchez-Mazas y Francisco Bustelo veinte años atrás, en 1956. Reclamaba Pradera «que los vivos, hijos de los vencedores y de los vencidos, se preocupen de impedir la reaparición de las causas que hicieron inevitables aquel conflicto y aquellas muertes», como había propiciado estratégicamente en el PCE desde sus años de militancia y hacía ahora en *El País*.

Lo que puso en marcha su generación, con el liderazgo moral e intelectual de Dionisio Ridruejo, fue el intento de comprender el franquismo como resultado de una guerra que a su vez era el resultado de una historia social de desgracia y sometimiento. El sinsentido de tantas muertes –y habla una víctima de aquella violencia– se compensa con el sentido profundo de una rebelión contra el franquismo basada en una razón social y civil: la responsabilidad de aquellas muertes recae «sobre el impersonal juego de fuerzas que puso en funcionamiento un sistema social injusto, incapaz de alimentar, educar y permitir vivir en paz y concordia a los millones de seres de carne y hueso a los que se resume con el nombre de España». La causa de la guerra fue un golpe de Estado, pero el sustrato real fue una sociedad injusta: los muertos fueron «la trágica cosecha que sembró durante la Restauración una clase dominante dispuesta a identificar sus dividendos y sus privilegios con la patria y a utilizar la represión para mantener en la miseria a las clases populares cuyas reivindicaciones turbaban la tranquilidad de los poderosos».

Ese artículo firmado dice sobre todo que la memoria de la guerra y del franquismo no puede turbar emocionalmente la ruta emprendida hacia una sociedad democrática, socialmente más justa y capaz de protegerse de tensiones desestabilizadoras que acechan hoy en forma de golpismo soterrado y neofranquismo maquillado, como Fraga y sus magníficos exministros franquistas.

La llamada a la distensión, a reservar venganzas o revanchismos, a mitigar las razones emocionales frente al pragmatismo racional nacía de la angustia por los intentos de sabotear el proceso abierto el 15 de diciembre. Pero la causa de fondo en la que juega el periódico es la constitución de un país socialmente justo como garantía de su solidez democrática frente al poder de las oligarquías, el caciquismo y la venalidad rampante. Pradera escribió años después que la Transición se hizo con el contraejemplo de la República y la República cayó en gran medida por la ausencia de unas clases medias y un bienestar suficiente que las protegiese de los extremos totalitarios. Esa era la lección aprendida en *Escrito en España*. Por eso no ocultaba en ese artículo la sacudida privada que significaba, para los hijos de los vencedores con el padre o el abuelo asesinado, y en su caso ambos, haber descubierto «de forma directa, desde dentro del sistema, la inutilidad de esa sangre derramada: los negocios suculentos, los privilegios medievales y el cinismo eran la realidad que se escondía tras los ideales por los que habían perdido la vida sus familiares».

Año y medio más tarde, en vísperas de la aprobación de la Constitución en 1978, Pradera firmó otro artículo (que he usado ya antes, de 17 de noviembre) para evaluar los nuevos errores en que habría incurrido el bulldozer Fraga cuando Polanco y *El País* habían salvado ya la primera embestida de la nueva derecha para poner el periódico a su servicio. Ofrecía allí Pradera una de sus semblanzas más perspicaces como entomólogo de la fauna política. Fraga había cometido el error político más grave de su vida al lanzar la operación de los siete magníficos en Alianza Popular, esa «mal calculada y abominable aventura de resucitar el franquismo sociológico del país» labrando pactos con «sectores más cercanos a la tradición cavernícola y autoritaria del

pasado que a los sentimientos y necesidades de una sociedad moderna». De hecho, su posición había estado «a punto de ser tragada por las arenas movedizas del golpismo» y debería saber aprovechar la ocasión para «desembarazarse» de sus afinidades con la «última reserva civil del involucionismo». Nadie sabe todavía si su «dotación biológica, o las contradicciones entre sus ideas y sus pasiones», serán capaces de hacerlo escapar a una personalidad «condenada a la esquizofrenia política».

Del mismo modo que la luna llena desata en la leyenda la «asombrosa metamorfosis» del hombre-lobo, quizá en su caso sea «el ejercicio o la proximidad del Poder» lo que explique «sus violentos virajes desde la razonabilidad y el conservadurismo hasta el desenfreno colérico y la demagogia ultramontana». En el caso de Areilza la sorpresa Suárez lo condujo a una «corta luna de miel» con los socialistas a cuenta del Senado y a una condición errática después. En ambos casos rige la misma dificultad para hallar el espacio político que existe entre «la clientela electoral de UCD y los arriscados seguidores del franquismo nostálgico», quizá esa gran derecha que aspiraba a afianzarse en *El País* cuando Polanco y el equipo del periódico sofocaron la rebelión conservadora. Hoy las condiciones de «una sociedad moderna» pueden estar invalidando sus acciones porque «son las ideas, no la forma de expresarlas, y los intereses, no la manera de disfrazarlos, lo que delimita los grandes territorios electorales».

A toro pasado, era un diagnóstico implacable, pero es lo que pensaba Pradera en este momento sobre las tentaciones políticas de Fraga. En Pradera seguía actuando la ley preventiva contra todo lo que pudiera tensar la cuerda, romper el equilibrio o frustrar el objetivo mayor de culminar las elecciones de junio de 1977. También las «veleidades autodeterministas» del catalanismo pueden arruinar esa ruta de reconciliación porque «del centralismo torpe y justamente odiado no podemos pasar a un perifernismo disgregador, cantonalista y paleta». No duda el periódico de que habrá que ir a «un régimen de autonomía», si lo quiere el pueblo catalán, y «como ya se hizo antaño». Pero, «hoy por hoy, arbolar sin encomendarse ni a Dios ni al diablo la bandera autodeterminadora, y pretender ir con ella hasta las puertas de la presidencia del Gobierno a negociar, no pasa de ser el fruto del sueño de la razón». Al menos, «por ahí no se va a la reconciliación nacional, ni a la construcción de la democracia para todos, ni a la reforma, ni a la ruptura pactada, ni a ninguna parte. Por ahí no se va ni a la autonomía».

Lo cual equivale a decir que el periódico tiene relativamente claras algunas de las rutas. O, dicho de otro modo, las condiciones de supervivencia de la democracia en marcha se sitúan en dos lugares: el papel del rey como referente último de la construcción democrática y la consolidación de un espacio ampliamente mayoritario que abarca desde el centro derecha hasta el centro izquierda. Los dos son problemáticos a finales de año, pero de cara a las elecciones del 15 de junio de 1977 el periódico se conjura para favorecer esa doble oferta electoral: la meta es no solo la celebración de esas elecciones, sino que de ese Parlamento surjan dos grandes mayorías que apuntalen el sistema y establezcan la situación política con la vista puesta en la redacción de una Constitución de amplio respaldo político y social. El objetivo fundamental no es quién las gane sino su misma celebración.

El momento sigue siendo muy tenso: el periódico recrudece la denuncia de la violencia de la extrema derecha —que golpeará en la propia redacción pocos meses después, como lo haría en tantas otras, entre ellas *Diario 16*, la revista de humor *El Papi*, la revista *Interviú* o los almacenes de la distribuidora Enlace—, y aborda numerosos temas que atañen a Pradera como experto. En un editorial sobre el mundo del libro y su desprotección ridiculiza las profecías apocalípticas en favor de los medios audiovisuales de un profesor chiflado y norteamericano

innominado (Marshall McLuhan) y en otro destaca el valor de algunos libros nuevos –como las memorias de Francisco Franco Salgado-Araujo– como primer paso para la revisión seria del franquismo y de la figura del mismo Franco.

Pero también ha de ocuparse de viejos camaradas, como Santiago Carrillo, porque su protagonismo en ese momento va a ser creciente y a ratos temible. La primera página de *El País* del 11 de diciembre de 1976 está consagrada a contar su primera rueda de prensa «en el centro de Madrid», citados a las doce del mediodía setenta periodistas desplazados hasta el local por militantes comunistas tras vueltas y revueltas por la ciudad. Carrillo llega al piso recién acondicionado de la calle de la Alameda, aún con restos de cal y pintura por el suelo, acompañado de su plana mayor –Ramón Tamames, Manuel Azcárate, Pilar Bravo, Jaime Ballesteros, seguramente también Gregorio López Raimundo– con la gabardina puesta y la peluca ya fuera de su sitio. Le esperan ahí cinco minutos de flashes estupefactos. Desde las 11.30 aguardan también Miguel Ángel Aguilar, Vázquez Montalbán, Josep Ramoneda y muchos otros, cuando aún no se ha reunido Carrillo con Suárez pero tiene la certidumbre o al menos la confianza de su compromiso democrático. Lo que no tiene es pasaporte ni la menor seguridad de conseguir la legalización del PCE antes de las elecciones de junio.

Suárez supo aprovechar ese nuevo gesto audaz para complicarle la vida a quien iba a ser verdaderamente su competidor, que no era Santiago Carrillo, sino Felipe González. Contaba para entonces ya con el visto bueno y el respaldo implícito a la legalización de los principales líderes políticos. Pero *El País* prefirió descafeinar la aparición –contada en el propio periódico con aires peliculeros de guerra fría y espionaje casero– para minimizar la relevancia del desafío y subrayar la obvia necesidad de otorgarle el pasaporte que reclamaba Carrillo para él y para Pasionaria. Así se acabaría con esa «vodevilesca clandestinidad» y dejaría de regalársele ese «aura de misterio, arrojo y aventura a quien hasta ahora no la tuvo ni dentro ni fuera de su partido». No puede ser otro que Pradera quien firma este editorial, como ha de ser suyo el destilado anónimo del rencor cuando al final reclama la legalización para evitar que incorpore Carrillo «a su naciente leyenda el papel de héroe del Lejano Oeste al afirmar –como en la rueda de prensa– que si van a matarle es posible que alguien caiga antes».

El periódico había cubierto ya en diciembre de forma intensa y empática el congreso del PSOE. Su clausura se había llevado dos días atrás la portada del día 9 con una fotografía de una joven pareja en actitud distendida, Felipe González «y Carmen» –esa Carmen es Carmen Romero–, y un titular que difundía la buena nueva del «Triunfo de la línea Felipe González en el Congreso del PSOE». Según la información, Felipe «ha sido la revelación política de estos dos últimos años» y es para el redactor anónimo «hombre de talante conciliador, tranquilo y moderado». Sin duda es lo que ha de ser, pero no todo lo que está pasando en el PSOE satisface a Pradera, que va a usar ya sin reservas el artículo editorial como canal abierto de sus cartas privadas dirigidas tanto al PSOE como, sobre todo, a Felipe González a partir de ese congreso.

LAS CONDICIONES DEL PODER

Empieza ahora esa singular modalidad editorial que Pradera usó a menudo para combinar el análisis político con la instrucción implícita y a veces explícita. El anonimato fue el escudo de una dirección política que años después Polanco llegó a describir con insólita crudeza ante la perplejidad de su entrevistador, Manuel Vázquez Montalbán. La ausencia de refinamiento verbal

en Polanco, su tosquedad expresiva e incluso su brusquedad dan más valor a un diagnóstico tardío –de 1994 que ni desmiente ni altera el análisis de los editoriales de esta etapa larga hasta la victoria de 1982: «Cuando el PSOE está en la oposición toma su línea política de la de *El País*. El diario va diciendo una serie de cosas que el PSOE va haciendo suyas» porque, de hecho, explica Polanco, «el grupo Prisa está condicionado por una audiencia mayoritaria de centro izquierda». La famosa frase de Alfonso Guerra («el electorado del PSOE es el lectorado de *El País*») ofrece una variación de la misma idea todavía más exacta, cuando empieza ahora Pradera a respaldar el valor político y la capacidad de Felipe González para liderar un partido de poder, y no de oposición perpetua. Ha empezado la larga marcha hacia el poder de la izquierda y también la dirección ideológica invisible de Pradera desde la caja negra de *El País*.

La escisión de Toulouse en 1972 ratificó que «el único PSOE con futuro, con apoyos internacionales y credibilidad interior parece este del sector renovado». Por supuesto que no es «el único socialismo», cuando el protagonismo político de Tierno Galván es todavía muy alto. Pero la «pujanza» del PSOE en este diciembre de 1976, dice el editorialista, es «desde todo punto de vista, creciente, y parece que la unidad de los socialistas se hará en torno a él o no se hará». La «extraordinaria juventud» y el «indudable atractivo político» de Felipe González sitúan al Partido en la mejor posición, pero aún está lejos de las condiciones óptimas.

La independencia radical, incluso a veces áspera, que Felipe González atribuye a Pradera, como amigo personal y como analista público, pudo empezar a padecerla tan temprano como en este mismo balance de un congreso triunfal. Los editoriales despliegan una batería de argumentos contundentes entre diciembre de 1976 y abril de 1977 que recomiendan, previenen, advierten y hasta sugieren más de una vez soluciones a los atolladeros coyunturales de la vida política de los socialistas, pero también de los demás partidos en construcción. En muchos de ellos alienta inequívocamente la prosa de Pradera, la competencia de sus análisis o la precisión de sus virtudes frías, en particular cuando advierte riesgos potenciales al crecimiento de los socialistas y desvíos en la dirección correcta de ese crecimiento.

En este diciembre empieza una batalla que durará muchos años. La exhibición de unidad forzada que ha hecho Felipe en el congreso lleva dentro un virus peligroso que Pradera reconoce enseguida. Los dirigentes del PSOE han recurrido «al sistema por el cual dentro del partido se puede discutir todo, pero nada fuera de él». Lo escribe Pradera en el viejo lenguaje de los debates con y contra el PCE. Todo ello tiene viejas y conocidas contraindicaciones porque «implica el riesgo de resucitar una de las reglas de oro de ese miedo a la libertad que se ha llamado centralismo democrático». Son observaciones de editorialista inspiradas obviamente en su propia experiencia, escamado sobre los efectos corrosivos de la ausencia de debate leal o la presencia de amenazas latentes y obediencia jerárquica. Algo había de saber de primera mano sobre la cocina de ese congreso, porque en la ejecutiva que sale del congreso estaba su veterano amigo Enrique Múgica, el de mayor edad en ella, con cuarenta y cuatro años, aparte de Ramón Rubial: «Es de suponer que el PSOE lo entienda así en el futuro» y entienda ahora también que el respeto a las minorías «parece elemental en toda fórmula democrática», en ese tono admonitorio que también despacha a veces Pradera.

Aunque de momento no hayan sabido gestionar la disparidad de voces internas, aprenderán a hacerlo o al menos deberían. Contra las pretensiones del sector histórico de contar con dos puestos en la ejecutiva, no habrá ninguno para ellos. Es verdad que la «democracia es descorazonadora» a veces, como explica esos días Felipe González, pero esa ausencia del PSOE histórico parece una exclusión excesivamente severa y contraproducente. La prepotencia o la

arrogancia con los grupos más pequeños pueden ser dañinas a largo plazo de cara a lo fundamental, que es «la unidad de los socialistas». Ese era el título de un editorial de finales de enero de 1977 y la obsesión de *El País* desde ahora y sospecho que sobre todo de Pradera.

Lo decisivo es que esa unidad «no importa solo a los socialistas». La consolidación democrática exige la «creación de grandes bloques electorales, entre otras cosas para privar a los enemigos de la democracia de argumentos sobre su presunta ineficacia». Está todo a favor para que esa unidad consistente y flexible cuaje, han contado con la presencia de las grandes figuras del socialismo europeo –Mitterrand, Olof Palme, Nenni–, pero el diagnóstico lleva dentro el objetivo multifocal que usa tantas veces Pradera: «El incondicional apoyo de la II Internacional (espectacularmente puesto de relieve en el congreso de diciembre), el acierto de un relevo generacional compatible con el mantenimiento de las tradiciones históricas, y la política de distancias respecto al Partido Comunista (ni tan lejos como para romper la unidad de la izquierda, ni tan cerca como para convertirse en su satélite)», son algunos de los argumentos que dan esperanza de cara al futuro, ahora, cuando todavía parece creíble que el PSOE pueda ser satélite del PCE. Si no tiene remedio la insensibilidad a las distintas corrientes o la falta de cintura para pactar con los otros partidos socialistas, el editorialista se permite ofrecer incluso una idea práctica para resolver problemas técnicos: «Nada le impide –pensamos– presentar en sus listas a personalidades socialistas independientes, procedentes de los grupos autodisueltos e iniciar así el camino de la unificación.» Pradera trabaja para despejar el escenario de competidores menores que puedan debilitar al PSOE, es decir, a la democracia, en la medida que hay que consolidar ahora lo que rápidamente Felipe llamará, y llamaremos todos, bipartidismo imperfecto.

El aguafiestas precoz de las alegrías socialistas sigue sin callar porque hay un problema más grave y es de fondo, lo piense de veras Pradera o lo conciba como obstáculo en el mercado electoral de cara a junio de 1977. «Nos gustaría estar seguros», escribe, «de que los socialistas han sopesado bien el significado que en la sociedad española actual tiene el ser –como dicen partido de clase, marxista y democrático.» Tampoco parece del todo seguro que conozcan las implicaciones de «sus formulaciones a favor de una República federal». Felipe había asegurado efectivamente en el congreso que serían «capaces de ofrecer un programa político realista» que, a la vez, fuese fiel al programa de «conquistar irreversiblemente una sociedad en la cual la explotación del hombre por el hombre desaparecerá, una sociedad sin clases». Y de ese congreso salió la definición entonces irrenunciable de ser partidarios del «socialismo autogestionario, marxista y de clase», además de republicanos y federalistas. El esqueleto teórico del socialismo histórico fue la oferta que el Partido entregó a los medios y a sus simpatizantes en la hora de la verdad: la vida pública.

El camino necesario de un PSOE con algo más de nueve mil militantes, refundado dos años atrás en Suresnes, pasaba por competir con el PCE como tótem del antifranquismo efectivo y exhibir una autoafirmación radical y rotundamente marxista, como toda la izquierda era marxista entonces, y sin titubear a la hora de señalar la finalidad última. Santos Juliá acude a la ironía para precisar que una cosa era la definición teórica y otra, la experiencia práctica. Pero lo que era seguro entonces era el oportunismo más o menos convencido de un PSOE que aspiraba a conquistar el «terreno de encuentro de todos los que, sin ser comunistas, se sentían socialistas, de izquierda y hasta revolucionarios», dice Juliá. Deberían de gustarle semejantes propósitos a Pradera como socialista gradualista y excomunista metido a editorialista de un diario liberal, y ese fue su voto el 15 de junio de 1977. El PSOE tenía que ser el partido capaz de materializar una sociedad sin clases pero lejos de las herencias soviéticas del PCE.

8. HACIA LA SOCIALDEMOCRACIA

Lo que Pradera no perdió fue el hábito y hasta la dependencia de la discusión política y la tertulia como pilares domésticos de sus rutinas de editor y periodista. Con pocos o con muchos, el liderazgo implícito y a menudo explícito de un Pradera invasivo y grandullón se ejerció también por la vía osmótica del almuerzo multitudinario, incluido el desenfreno de la opinión contundente, retadora y hasta insultante, sin miedo al enfado ajeno y sin cautela: muy «a la vasca», dice Joaquín Almunia, a pesar de esa ciclotimia que le había diagnosticado Semprún desde muy pronto y que duró hasta el final. Buena parte de esa experiencia sucede en el más estrecho de los círculos concéntricos que describe Joaquín Estefanía para aludir a su entorno: primero en Parsifal, cerca del estadio Bernabéu, después en La Trainera, o en José Luis más tarde, y siempre en La Ancha, de Zorrilla o de Príncipe de Vergara mucho después, pero sin grandes cambios en el elenco, con sus bajas y sus altas en los ochenta: Rafael Sánchez Ferlosio, Juan Benet, Juan García Hortelano, Elías Querejeta, Jesús Aguirre, Clemente Auger, Sancho Gracia, Manuel Matji, Patxo Unzueta, José María Guelbenzu.

Pero si la tertulia había servido para escuchar y acelerar las cosas, también servía para mantener las viejas relaciones de sus otros ámbitos de acción, la misma editorial y el contacto regular con escritores de paso por España. Natalia se recuerda a los mandos del coche paseando a este y aquel, comiendo aquí y allá con el equipo de Alianza, pero también con los amigos vascos activos en el entorno del cine y parte sustancial de su argamasa humana. No estaba ya entre ellos para las rutas taurinas Ignacio Aldecoa: había fallecido por una angina de pecho el mediodía del 15 de noviembre de 1969, literalmente en brazos de Javier Pradera y Romero de Solís, mientras preparaban una excursión campestre desde casa de Domingo Dominguín con otros amigos. El padre de Ramón Tamames, médico de confianza, ya no pudo hacer más que certificar la muerte. Pero estaban otros, como Elías Querejeta o Antxon Eceiza, cuando aún nada había estropeado las relaciones personales. La democracia en marcha iba a provocar desavenencias fuertes, en particular con Eceiza por su posición firmemente proetarra. En 1976 Eceiza culmina por fin su película *Mina, viento de libertad*, producida por Conacite, de México, y el ICAIC, de Cuba. En ella juega Eceiza con el paralelismo tácito entre Txiki Paredes, uno de los cinco últimos fusilados del franquismo, y el jovencísimo revolucionario Francisco Javier Mina, alzado en armas contra Napoleón y después contra Fernando VII, y que murió en el exilio durante la independencia de México. Hoy el periódico portavoz del progresismo mantiene todavía una indulgencia tácita con el terrorismo que no es exclusiva de *El País* sino socialmente mayoritaria en la izquierda de entonces. En su primer editorial sobre ETA –y es significativo que llegue a 5 de agosto, tres meses después de nacer– comparece alguna forma de comprensión o de atenuación. Pero el actual hilo de unión en el «viento de libertad» entre Mina y Txiki Paredes dejaría pronto de funcionar.

ÚLTIMA OPORTUNIDAD

En esta vida en círculos concéntricos y elásticos, las cosas siguen moviéndose a ritmos diferentes. Desde su regreso clandestino e indocumentado a España, en el verano de 1975, con

Franco muriéndose a cámara lenta, Fernando Claudín trabaja en un pequeño despacho de Siglo XXI y funge poco menos que de tótem redivivo en comidas y encuentros semanales con el equipo editorial. La nómina de comensales es variable pero el protagonismo ejecutivo de Pradera en esos almuerzos no lo es, mientras Claudín recibe visitas sorpresivas de militantes que lo buscan oracularmente. Era entonces el «lejano mito de la nueva izquierda española», según evocó a su muerte un estrecho colaborador de entonces, Ludolfo Paramio, cuando el mismo Claudín bendecía el manuscrito de Santos Juliá sobre *La izquierda del PSOE* anterior a la guerra.

Claudín identifica en este momento la última oportunidad del socialismo en su combate contra el capitalismo. El libro que está escribiendo y editará todavía Pradera es un esperanzado pero agónico análisis sobre la viabilidad del socialismo en democracia. De hecho, Claudín se ha incorporado ya a la revista *Zona Abierta* desde septiembre de 1976, mientras trabaja en Siglo XXI. A la nueva etapa se han sumado también un comunista de Sacristán como Paco Fernández Buey o un veterano de *Cuadernos de Ruedo Ibérico* como Joaquín Leguina, y en ella sigue uno de los fundadores, Ludolfo Paramio. Todo sucede inmediatamente antes de la puesta en marcha de la Fundación Pablo Iglesias del PSOE, cuyo primer director será precisamente Claudín, y con alguna contribución directa para ello tanto de Pradera como de Maravall cerca de Felipe González.

A Claudín le coge emocionalmente más lejos, y en forma distinta que a Jorge Semprún, la operación de maquillaje eurocomunista que el PCE está desarrollando. Se parece mucho a lo que habían intentado casi quince años atrás. Pero las cosas ya no eran iguales, ni lo eran las respectivas posiciones de Claudín y de Semprún. Claudín no termina de redactar el prólogo al libro que tiene en marcha, *Eurocomunismo y socialismo*, hasta el mismo abril de 1977 en que el PCE negocia *in extremis* su legalización. En la portada exhibe la foto conjunta de los tres secretarios generales reunidos en Madrid los primeros días de marzo, apenas unas semanas antes, Berlinguer, Marchais y Carrillo. Claudín no había dejado de escribir sobre la crisis comunista tras su expulsión y tras la espléndida incursión histórica de su *Marx, Engels y la Revolución de 1848* para la misma Siglo XXI en 1975.

Pero la edición de *Eurocomunismo y socialismo* ha sido muy claramente concebida como material de urgencia electoral de cara a las elecciones de junio de 1977. Todavía nadie sabe que cuando inaugure la legislatura el rey Juan Carlos, una semana después de esas elecciones, los diputados de un PSOE partidario de la ruptura democrática, radicalizado, de izquierdas y marxista, no se levantarán de sus escaños para aplaudirle, a pesar de la admonición crítica que ese mismo día y de buena mañana leerán en el editorial de *El País* contra su anunciado y subversivo gesto parlamentario.

Mientras el PSOE radicaliza su discurso y su retórica, el PCE los modera en medida inversa a sus convicciones reales, quizá porque las garantías que ha dado a Suárez en privado Carrillo obligan a esa moderación a cambio de su legalización. Esa es una paradoja que enturbia las posibilidades de que el PSOE active el voto más medroso, mientras que puede favorecer un crecimiento del PCE con expectativas electorales que nunca han sido muy holgadas: las encuestas por entonces no daban al PCE más del 8 %, aunque Carrillo en privado fabulaba con 40 diputados, y el PSOE se situaba, según González, entre el 25 y el 30 %, como en Portugal dos años atrás.

Mientras Pradera describe en un editorial la opción centrista de Suárez, todavía sin partido propio, como «una compleja suma de derechismo civilizado, oposición al franquismo, franquismo decepcionado y progresismo liberal», el PCE ha empezado a conquistar el respeto democrático con un gesto simbólico profundo y que el periódico respalda sin paliativos, o casi. Es más que

probable que Pradera conociese las palabras de Carrillo en el Comité Ejecutivo del partido celebrado en Roma el 2 de abril del año anterior al defender allí una «ruptura pactada», que es posiblemente la fórmula más exacta para definir lo que sucedió entre 1976 y 1978. Sin duda habría visto también a Carrillo ante las cámaras de Pere Portabella en su *Informe general*, rodado con vistas a las elecciones de junio de 1977. El PCE asumía tanto la distancia con la órbita soviética como el hecho de que la ruptura con la dictadura se estaba haciendo de otra forma, y eso era lo que necesitaba vestir y ofrecer un PCE renovado ideológicamente aunque no hubiese renovación de líderes. La única excepción visible era Ramón Tamames, otro histórico amigo de Pradera, que en la misma película sometía a un estresante acoso a Felipe González en busca de una alianza electoral de izquierdas. Pero ni era entonces ni sería nunca objetivo de Felipe. Tierno Galván se inclinaba por ella, pero Felipe González nunca la vio como una estrategia efectiva: era el punto crucial de la división entre socialistas. La experiencia portuguesa había servido para calmar los ánimos, creía González, y deshacer ensueños de la oposición: la aparente hegemonía política podía ser comunista; la hegemonía social no lo era en absoluto.

El capitán de ese *aggiornamento* comunista es Enrico Berlinguer desde Italia –acaba de ser la segunda fuerza política en junio de 1976 con un 34 % y posibilidad de gobernar con el 38 % que ha obtenido la democracia cristiana– y más o menos a regañadientes se han sumado ya tanto Georges Marchais en Francia como Santiago Carrillo en España. La apoteosis autorizada por Suárez sucede en Madrid, entre el 2 y el 3 de marzo de 1977, con una reunión conjunta y a puerta cerrada de los tres secretarios generales. Se han conjurado para defender ante el mundo, y desde una España aún muy franquista, la buena nueva del eurocomunismo. Es un momento importante también para forzar una legalización que sigue ahora en el aire, cuando el Tribunal Supremo ha devuelto la patata caliente al Gobierno. El larguísimo y primer encuentro secreto de Suárez y Carrillo el 28 de febrero de 1977, a las puertas de la cumbre eurocomunista, en el chalet Santa Ana que poseía Armero en la carretera vieja de Majadahonda, serviría para abrir el camino a la tolerancia ante esa reunión y algunas cosas más.

La había urdido una vez más Armero, con una estudiada intendencia de comunicaciones, enlaces, traslados y clandestinidades peliculeras que salieron bien por casualidad. Pese a la desconfianza nerviosa de los servicios de seguridad de Carrillo, fue la mujer de Armero quien condujo su coche con Carrillo dentro hasta la casa, despejada de servicio y vigilada discreta pero torpemente: durante toda la reunión, el director general de Seguridad del Estado mantuvo estacionado su coche en el jardín del vecino de Armero, a la vista de todos y sin justificación alguna. Carrillo había dado garantías de «máxima moderación» a Armero, y entre el whisky de Carrillo y el café de Suárez, acordaron ahí la autorización para el encuentro eurocomunista de 2 y 3 de marzo, la tolerancia hacia el Comité Central de 200 miembros que se reuniría en el mismo hotel Meliá de Madrid quince días después y, por fin, la legalización o al menos las condiciones de una legalización que efectivamente cumpliría Suárez tras emplazar a Carrillo a esperar noticias en casa de Lagunero, en Cannes, entre los días 4 y 9 de abril.

Confirmaba Carrillo entonces las garantías privadas que le había dado el 30 de enero, en un encuentro a iniciativa suya, Carmen Díez de Rivera, secretaria personal de Suárez y simpatizante de izquierdas. Podía ser diabólico el efecto de esa legalización en la mayoría del Ejército y del poder franquista en ejercicio, aunque fuera demanda mayoritaria de la sociedad, como recordaba por entonces *El País*. Esos eran los usos mínimos de cualquier democracia occidental, en particular desde que el comunismo europeo había tomado distancia de la URSS y asumía su compromiso con las libertades democráticas. En efecto, no hubo percances cuando Carrillo fue a

recoger a Barajas a un Marchais efusivo y a un Berlinguer más distante, con enorme expectación periodística, y a bordo del Cadillac blindado que le había regalado Nicolae Ceaucescu.

La legitimación internacional de un PCE equiparable a los países vecinos estaba en marcha, como el mismo *El País* aduce sin reservas, mientras la legitimación interna se conquistaba a golpes de audacia y también de publicidad. Carrillo había publicado ya su propio manual teórico sobre el invento, *Eurocomunismo y Estado* en una editorial tan ideológicamente afin como Crítica, que entonces emprendía la heroica y ruinoso empresa de editar las *OME*, es decir, *Obras de Marx y Engels*, a cargo de Manuel Sacristán, mientras las ventas de Carrillo no bajaron de los 200.000 ejemplares. Las expectativas de renovación de los comunistas no podían ser mejores para el partido que lideró la movilización antifranquista.

ESPEJISMOS EUROCOMUNISTAS

En Pradera, sin embargo, están activados dos impulsos a la vez, como siempre, para no defraudar aquella definición de la inteligencia que tomaba de Scott Fitzgerald y que consiste en tener dos ideas antagónicas y ser capaz de seguir funcionando: las prevenciones contra la veracidad democrática del eurocomunismo se combinaban con el pragmatismo táctico de sacar al PCE de la clandestinidad legendaria. En el editorial reconoce el compromiso democrático que contiene el cuidadoso documento de cinco folios que leyó Carrillo el 3 de marzo como conclusión, ya ante la prensa, de la cumbre eurocomunista. Pradera respalda esa ruta como opción de gobierno y ratifica la viabilidad del *compromiso histórico* que defiende Berlinguer, particularmente viable en Italia tras las elecciones últimas. «Lo cierto es que cada día que pasa parece más difícil mantener la sospecha de que las declaraciones comunistas sobre el valor de la libertad son una simple maniobra maquiavélica.» Si «la intención inconfesa de los comunistas fuera defender la libertad con fines puramente instrumentales, el experimento hasta valdría la pena». Por eso concede que «condenarse por desconfiar es un triste sino» —en una de esas huellas cultas o populares que solía filtrar en el comentario anónimo—. Las declaraciones de los dirigentes comunistas, emitidas «públicamente una y otra vez» en «favor del pluralismo de las fuerzas políticas, de las libertades de expresión, pensamiento, prensa, sindicales, del respeto al sufragio universal, de las libertades religiosas, culturales, etcétera», permiten conjeturar irónica o venturosamente que obligarán al PCE, quieras que no, a «quedar enredado para siempre en ese precioso e invisible hilo dorado que es la libertad a secas».

Pradera tiene entonces fresquísima la lectura de las páginas del libro de Claudín que edita él personalmente, y esa es, por tanto, una bienvenida a la democracia liberal escrita con retranca. El único reparo es que «mientras no exista una condena formal y expresa del totalitarismo soviético y de los regímenes de partido único, hay que decir que las sospechas subsistirán». Supiese o no Pradera que Marchais excluyó del borrador de la declaración leída por Carrillo la crítica soviética, el editorial minimizaba la fórmula más blanda del rechazo a cualquier «centro dirigente supranacional», pero ratificaba la fiabilidad de su declaración de «socialismo democrático» para conquistar «una sociedad fraternal donde el hombre no sea un lobo para el hombre». Debió enfermar Pradera al llegar a ese final con campanillas culturales de los cinco folios pero no dijo nada, al menos por escrito, aunque cabe conjeturar un sarcasmo de crucifixión para quien no había olvidado quién era Carrillo.

La memoria del libro de Claudín *Eurocomunismo y socialismo* estaba fresca, decía antes, por

una razón adicional. Carrillo se había comprometido en ese documento a que «aquello no se repita jamás», en alusión a la guerra, e invocaba la presencia en la misma sala del hotel Meliá Castilla de los líderes a los que había ido visitando desde el verano de 1976. Como bien dijo ahí, sus nombres prefiguran «el futuro arco constituyente que debe corporeizarse en este país». Y aunque no estaba Felipe, estaban Luis Yáñez, Areilza, Ruiz-Giménez, Tierno y Francisco Fernández Ordóñez, por entonces ya corresponsal y contacto frecuente de Pradera, aunque aún no había anudado las amistad que cuajó después.

Quien seguro que no estuvo es Fernando Claudín y Jorge Semprún había vuelto ya a París y seguía escribiendo excitado y casi en trance colérico otro libro, también muy avanzado ya, *Autobiografía de Federico Sánchez*. Aunque lo terminara antes de las elecciones del 15 de junio, había decidido publicarlo después para no interferir en las aspiraciones electorales de su viejo partido. Los dos son ajustes de cuentas que atañen directamente a Pradera, pero mientras Semprún escribe macerado de rencor y dolor personal, Claudín mantiene viva la esperanza de una última oportunidad para un socialismo democrático, igualmente lejos de la dogmática comunista y de la reblandecida socialdemocracia, pero también ajeno al sentido usual hasta entonces: revolucionario y de fondo y formas autoritarias.

Cuando se publique *Eurocomunismo y socialismo* en mayo, la contraportada reproducirá literalmente la última página porque lleva dentro todo el propósito y el sentido del libro. Es una llamada explícita a un voto de izquierdas que incluye al PSOE pero no excluye al PCE eurocomunista, a pesar de los pesares. Emite el texto un aviso para navegantes contra la sospecha de connivencia soviética en los partidos eurocomunistas, pero a la vez previene una infamante claudicación socialdemócrata que abocaría al socialismo a «simple reformismo». En ese estrecho margen sitúa Claudín –creo que también Pradera– las «condiciones de una alternativa socialista a la crisis del capitalismo». Esa es la «esperanza de superación» que le queda a un comunismo en crisis general –«irreversible», como había dicho ya en 1970–, o será «su canto del cisne». Aceptar las primeras elecciones democráticas significa buscar a la vez la movilización del «bloque sociopolítico» con la finalidad de «la conquista del poder político» para que el socialismo no se «empantane en la “sola” mejora del capitalismo». La vía democrática «es la única posible, pero nada fácil».

Con inspiración directa y explícita en Togliatti, Claudín aboga por que el PCE deje de aparecer como un enemigo del capital que «se limita a denunciarlo y a agitar un repertorio de soluciones revolucionarias para cuando triunfe la revolución». El Partido ha de ser «capaz desde ahora de ofrecer al país soluciones intermedias, parciales, inmediatas, a los problemas más urgentes». Seguir proponiendo «como salida a esta fase de liquidación del franquismo la revolución (se llame “democrática” o “socialista”）」 está condenado al descrédito y la esterilidad. No es que sea una «maniobra oportunista» o enmascaradora, sino que no existen «las condiciones reales» para hacerlo de otro modo. Es la única vía para «corresponder a las condiciones reales y a los intereses de los trabajadores». La ruta al socialismo es por tanto la acción solidaria y a la vez crítica y constructiva con «toda medida, todo paso que vaya en esa dirección», aunque no sea ni acorde ni idéntica con lo que piensa el Partido.

Para formularlo en lenguaje de aquella época, tanto Pradera como Claudín entendieron entonces el socialismo democrático, o socialdemocracia, como recurso táctico que no desmentía la estrategia final hacia la plenitud del socialismo en una sociedad sin clases: era «la vía democrática al socialismo», como dice el último capítulo del libro en favor de un «sistema polimórfico de alianzas, relaciones, convergencias». Hacía tiempo ya que, al menos él, Semprún,

Pradera y unos cuantos más descubrieron que, con la cursiva incluida, «el partido de la clase obrera es un mito». De ser cierta, la flaqueza por el comunismo soviético afectaría gravemente no solo a los comunistas «sino a todas las fuerzas que se sitúan en la perspectiva socialista». Sin los comunistas y sin los socialistas no hay esperanza para la «transición socialista en Occidente». Pero si el socialismo por su parte no supera «el reformismo socialdemócrata», nada frenará tampoco la continuidad triunfal del capitalismo. Hay que intentarlo, «porque la única alternativa al socialismo sigue siendo la barbarie» capitalista.

Años después definió Pradera este *Eurocomunismo y socialismo* de Claudín como «certero análisis de las causas del retorno de los comunistas al viejo tronco de la socialdemocracia». Yo creo también que Claudín, como histórico *divergente* incansable, estaba ofreciendo la legitimación teórica y política al eurocomunismo democrático y socialmente normalizado. De la revolución nadie espera nada ya, aunque aún Pradera no lo diga así. Lo hace años después, cuando comenta con amplitud y admiración las memorias de Jorge Edwards, *Adiós, Poeta...*, y señala ahí el alto riesgo en que todos estuvieron mientras creyeron en la revolución: sus «atajos» para solucionar «los fallos del mercado mediante el monopolio autoritario de la oferta económica» eran tan inválidos como el empeño en solventar «los fallos de la democracia mediante el monopolio dictatorial de la oferta política». Ambos atajos «no solo no resolvían esos problemas reales sino que empobrecieron y silenciaron a sus presuntos beneficiarios».

Cuando el libro de Claudín aparezca ese mayo de 1977, los sustos habrán pasado ya pero habían sido de gravedad estructural, con todo en un tris de irse a pique. En efecto, Carrillo esperó en la confortable casa de Lagunero en Cannes mientras Suárez apuraba los plazos y hasta las 18.30 del día 9 de abril no empezó a difundirse, con tartamudeos involuntarios de locutores afásicos, la noticia de una legalización traumática. Obviamente, *El País* aprueba la decisión al día siguiente pero la retranca de Pradera celebra menos la salida de la clandestinidad que el fin de «la tregua tácita» de la que ha disfrutado el PCE. Van a tener que esforzarse en mejorar la expectativa de voto actual en torno al 8 %, pero sobre todo a Pradera se le activa la memoria sucia del antifranquismo y el episodio de la infiltración en la ASU organizada por Semprún tantos años atrás. Deben hacer un esfuerzo para «despojarse de viejas manías, como la de la infiltración en organizaciones de todo signo, arraigadas durante la época de clandestinidad». Conviene no perder de vista que «la profunda revisión de la teoría y la estrategia del PCE está siendo llevada a cabo por el mismo grupo dirigente –procedente en su mayoría de las Juventudes Socialistas Unificadas–, que a lo largo de varias décadas defendió con idéntico celo y aplomo posiciones diferentes y aún opuestas». La socarronería está a punto de dispararse del todo cuando apunta Pradera que «tampoco puede extrañar que se produzcan resistencias o simples desfases en quienes no terminan de comprender cómo lo que ayer era una traición al marxismo, hoy es una aplicación creadora del mismo».

Sin la veladura del anonimato, años después fue más directo al hablar de esa operación de cirugía política y se refirió al «saqueo plagario» al que Carrillo había sometido las posiciones de Claudín y Semprún de 1964. Solo después del resultado electoral, Pradera advirtió en Cataluña un posible modelo de comunismo realmente *aggiornato* en la práctica política y discursiva del PSUC, «más enraizados en la sociedad catalana», con «un espectro más variado de opiniones» y donde «pesan menos los “veteranos” de la Guerra Civil y el exilio». No habla ni antes ni ahora la herida, pero sí la memoria viva, la solidaridad con Claudín, la nostalgia de Dominguín, la complicidad, todavía, de Semprún y seguramente su propio orgullo intelectual ante maniobras de adaptación legítimas pero como mínimo tardías.

Carrillo regresa de inmediato desde Cannes a España bajo la protección de Juan José Rosón, mientras se dispara en los cuarteles y en el Ministerio del Ejército una irritación mezclada con la vejación de haber sido burlados por el exfalangista simpático. Del Ministerio del Ejército partirá un comunicado que alienta a la sublevación, suavizado por un segundo comunicado menos golpista, pero que en todo caso se difunden el mismo 14 de abril en que Carrillo ya está en Madrid. Va a presidir el primer Comité Central *legal* del PCE en el mismo hotel Meliá de la cumbre eurocomunista. José Mario Armero acude a ver a Carrillo ese mismo día por orden de Suárez para pedirle la prudencia habitual, pero también su conformidad explícita y pública, televisada, con los cuatro puntos fundamentales del acuerdo democrático compartido por el resto de los partidos (bandera, monarquía, unidad de España y ausencia de violencia). Se negocian con Jaime Ballesteros, que los acepta, y por su parte Rosón ha hecho llegar a Carrillo los dos comunicados militares para que se haga cargo de la explosiva situación en algunos cuarteles.

A ello alude Carrillo en la rueda de prensa del día 15 de abril cuando menciona el «peligro» de las horas actuales y la amenaza de una «involución gravísima». Carrillo ha dado garantías a Rosón de que respaldará a Suárez e inventa entonces el golpe de efecto de aparecer no con la bandera republicana sino con la bandera bicolor oficial desde 1939 (sin el escudo franquista). Por su parte Suárez evita el exceso de celo de algunos subordinados y autoriza directamente el cóctel final de la tarde del 15 en la cafetería Yúcar, aunque Carrillo se queja amargamente ante Armero de que RTVE haya suprimido sus palabras sobre el compromiso democrático que había pedido Suárez. Mientras tanto, y a iniciativa del mismo Armero, durante el día han empezado los contactos para redactar el segundo editorial conjunto que publicará la prensa española ante una situación de emergencia golpista –excepto *Abc* y *El Alcázar*– y en apoyo al Gobierno de Suárez. Esa misma tarde se reúnen los directores de los periódicos, en la sede de *El País* y en la sede de la Asociación de la Prensa, para redactarlo con un mandamiento político y en el fondo evangélico en el título: «No frustrar una esperanza». Dos días más tarde, *Abc* da marcha atrás y acata también la situación.

Con las brasas calientes todavía de esa medida inaudita, Suárez pronuncia quince días después, el 3 de mayo, el discurso en el que se presenta como candidato a la presidencia a las inminentes elecciones y que es a la vez el auténtico acto fundacional de Unión de Centro Democrático. Es también, como dirá Pradera, el inicio ventajista de la campaña electoral en favor de las nuevas siglas UCD. Se había cumplido exactamente lo contrario que *El País* había exigido el 23 de marzo para dejar el terreno libre a Areilza: «El presidente del Gobierno no debe presentarse a las elecciones.» También incumplía la letra pequeña del editorial porque «muy grave sería» que «el señor Suárez decidiera crear desde la presidencia del Gobierno su propio partido», que es exactamente lo que acaba de hacer el 3 de mayo y la razón por la cual dos aliados de Prisa y candidatos a contribuir a la UCD, Areilza y Pío Cabanillas, abandonarían sus pretensiones como diputados en esas elecciones.

De hecho, se sintieron más cómodos con Senadores por la Democracia, constituido por demócratacristianos, liberales y el PSOE, y fue esa la única candidatura que explícitamente respaldó *El País*. En campaña, Areilza podía denunciar ya los acuerdos subterráneos entre las «dos alas del franquismo», la Alianza Popular de Fraga y la UCD de Suárez. Fuera de esa candidatura al Senado, *El País* no pidió el voto para ningún partido concreto. Pero dado que el liderazgo de Adolfo Suárez tenía los aparatos del Estado a su favor y la propaganda masiva de RTVE, y que el proyecto de Felipe González apenas tenía el apoyo económico y logístico de la socialdemocracia alemana (la Fundación Ebert ya tenía sede en Madrid, autorizada por Fraga

cuando era ministro en 1976), el PSOE podía quedar disuelto en la sopa de siglas como un partido socialista más de la oposición. En esa primavera y en esa primera campaña electoral, el PSOE se convierte para el periódico en la opción preferente de la izquierda.

UCD son las horriblas siglas que definen la fusión por aglomeración de múltiples partidos y grupúsculos. Cada uno de ellos se había gestado en torno a una figura relevante en un espectro que iba desde independientes todavía con apresto franquista, liberales como Joaquín Garrigues Walker, el centro derecha de Pío Cabanillas y Areilza, demócratacristianos como Fernando Álvarez de Miranda e incluso lo que quedaba del partido que había fundado Ridruejo, ya muy lejos de lo que había sido. A su derecha, el terreno sin disputa queda para Fraga, en el error político más grave de su trayectoria, probablemente herido todavía el bulldozer por el despecho de una primera derrota, el 7 de julio de 1976, que iba a llevarle a otra más humillante todavía, tras el escrutinio electoral del 15 de junio.

La inquina de Pradera contra Fraga tira olímpicamente de filigrana, sarcasmo y arrogancia. Bajo el título «La calle es de todos» defiende las manifestaciones convocadas para el 1 de mayo para lanzar una carga venenosa contra una de sus más perdurables bestias negras, ya patosamente sumida en el neofranquismo. El editorial alude a un rumor de corte consabidísimo y sin enigma referido al antiguo jefe del orden público, responsable de decisiones casi siempre «poco racionales»: «Se atribuye a un íntimo colaborador del expresidente Arias, proclive a las expresiones desafortunadas y a las imágenes deslustradas, la rotunda frase “La calle es mía”. Naturalmente, esa declaración no significaba la afirmación de un derecho de propiedad privada sobre el asfalto, ni la pretensión de imponer su ley particular con los puños.» Lo que significa de veras es que «a golpe de teléfono o de telegrama, un alto funcionario estaba dispuesto a movilizar, si fuera preciso, a todas las fuerzas de orden público del país para ocupar la calle en su nombre».

Quienes no obtuvieron legalización alguna –aunque participaron con siglas diferentes– fueron los partidos a la izquierda del PCE, como tampoco concurren con sus siglas el 15 de junio de 1977 ni el republicanismo de ERC ni el carlismo ideológicamente nómada. Tampoco se rebajó el límite de edad, que siguió en los veintiún años. Por si las moscas, sin embargo, tampoco deja en paz *El País* al radicalismo de la izquierda maximalista, a la vista de los primeros síntomas del desencanto democrático que alcanza a quienes ni siquiera habían empezado a practicarla, al menos «a juzgar por la frecuencia con que se oyen los cantos de escepticismo –del desencanto–». Por eso de nuevo el periódico advierte admonitoriamente «que, aunque nada se haya ganado todavía, paradójicamente hay mucho que perder». Al día siguiente, 27 de marzo, lo que de veras da miedo es «el peligro de la desilusión»: empezaba la murga del *desencanto* incluso antes de haber votado por primera vez en unas elecciones generales.

SEGUNDA DUCHA FRÍA

Solo al filo de la medianoche de una noche interminable, llegó Felipe González con Carmen Romero a la redacción de *El País*. Para entonces llevaban ya varias horas reunidos y varios debates trasegados la multitud de invitados que atestaron la quinta planta del periódico el día 15 de junio. Discutieron con micrófonos y un cierto protocolo solemne los miembros de la clase política emergente con algunos otros de la más vieja clase política del interior y del exilio: desde Areilza, Fernando Claudín y Jorge Semprún hasta Ramón Serrano Suñer, Joaquín Satrústegui y Ramón Tamames. En realidad esa sesión nocturna era consecuencia del frustrado debate que *El*

País había promovido entre Suárez y González, a pesar de haber «contratado ya, a su cargo, la filmación y sonorización del debate, que cederá, si llega a realizarse, gratuitamente a RTVE», contaba el periódico en un editorial.



Con Jorge Semprún en París (imagen extraída de una filmación de Gabriela Sánchez Ferlosio, hacia 1966).

No lo aceptó Suárez y no fue el único rifirrafe con el Gobierno, porque también *El País* incumplió la prohibición sobrevenida de publicar encuestas, cuando la suya estaba ya encargada y realizada. El día que publican el sondeo todos sabrán que se avecina «El cambio», como titulan el editorial del 12 de junio, y la síntesis es rotunda: «España pide el cambio, rechaza cualquier forma de continuismo.» Suárez ganará, según su pronóstico, pero el primer partido será el PSOE, a pesar de que ni uno ni otro «han aclarado ante el electorado si están dispuestos a gobernar juntos». No solo añaden, antes de las elecciones, que «la posibilidad no es absurda», sino que es aquella que promoverán tras el resultado electoral y en cualquier momento futuro de desestabilización sistémica hasta las vísperas del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

El periódico había hecho su propia campaña informativa teñida de campaña política. Varias semanas antes *El País* explicaba, enfilando contra Suárez y la UCD, que «lo que se debate en el fondo de estas elecciones es, como bien apuntó en su intervención televisada Felipe González, la disyuntiva de prolongar por cuatro o cinco años más el franquismo, o pasar a una situación radicalmente distinta, de democracia pluralista». En la jornada de reflexión, el 14 de junio, el editorial en portada rechaza una presunta neutralidad, pero a la vez elude recomendar un voto concreto. En realidad, el voto socialista se había recomendado por la vía del descarte. Si el objetivo absoluto era «consolidar la democracia», nadie puede votar al espectro que va desde Fuerza Nueva hasta Alianza Popular –que agrupa solo «las cenizas del franquismo», con Fraga al frente–. Desanima también el voto a formaciones que no obtendrían representación, en pro de la estabilidad, y la moderación de las medidas que ha defendido permite abogar expresamente por una cámara con una «izquierda fuertemente representada». Sin embargo, «la perspectiva de un Partido Comunista con fuerte representación en la Cámara nos encaminaría, sin duda, hacia un modelo tan lleno de riesgos como el italiano».

Las reticencias hacia Suárez habían dejado de serlo en los últimos meses para convertirse en hostilidad manifiesta y acritud indisimulada. Demasiado continuismo de políticos del franquismo en sus filas y demasiado silencio sobre su política de pactos poselectorales. A esas alturas de la campaña todos los asistentes a los debates del periódico ya sabían que *El País* se había opuesto

frontalmente a que el presidente fundase un partido político desde Moncloa, además de haber rebajado la saturación de méritos que la propaganda oficial volcaba sobre Suárez. No había sido más que «el fiel ejecutor de una política cuyas líneas maestras fueron concebidas por el Rey, auténtico motor del cambio». Convendría por tanto que «la eficacia con que ha realizado esa tarea» no quede «desorbitada por el contraste con la increíble torpeza del equipo gubernamental que le precedió».

A *El País* le parece que «el señor Suárez» –como lo llaman desde la campaña electoral– ha realizado «con acierto un juego que exigía no tanto las dotes de un genio de la política, como el oficio de un buen profesional». Y desde luego, contra sus ínfulas mesiánicas, «es el pueblo español, y no el Gobierno, quien verdaderamente ha logrado esta transición sin traumas». Como el lector ya sabía, por más que Suárez haya ganado con el tiempo algo de lo que le faltaba desde el principio –credibilidad democrática–, «dificilmente puede atribuírsele la talla de estadista que momentos como los actuales necesitan».

También *El País* atribuye a Suárez prácticas mafiosas y caciquiles de viejísima estirpe y un tanto enigmáticamente anuncian que se «ha comenzado a decidir quiénes son los alfiles del juego y [Suárez] podría autodenominarse el Peón coronado». Los escaños van y vienen, «se sacan sobre las mesas de los restaurantes y se ofrecen las actas como quien ofrece una dirección general». Se puede incluso «elegir partido y hasta circunscripción», con expresiones y resabios que remontan la actualidad a las cacicadas de la Restauración: «Quieren llevarse todas las bazas los que reparten naipes. Y acabar, mediante tan original sistema, con la sopa de letras. ¿Comenzará después la merienda de negros?» Cuando sea oficial la candidatura de Suárez, el 3 de mayo, la hostilidad se agudizará hasta el cuestionamiento primero explícito y después corregido de la legitimidad democrática de esas elecciones. Ese «desembarco desde la Moncloa» en las elecciones, escriben el día 5 de mayo, «entenebrece no poco las posibilidades de que los españoles crean de verdad que la democracia como forma de vida encierra valores que conviene defender por encima de una victoria electoral».

Pero este fue, en realidad, el editorial corregido en una edición posterior porque la primera versión era mucho más dura y alarmista (e ignoro si respaldó Pradera una u otra versión, o incluso ninguna de ellas). Lo que dijo primero el periódico es que la candidatura del presidente «entenebrece las próximas elecciones y deslegitima una democracia –aún en ciernes– que conviene defender por encima de una victoria electoral». Se cayó por el camino la acusación más grave, pero no dejaba de ser una apertura de hostilidades contra la UCD y Suárez. La campaña había empezado, como decía el mismo editorial, con los veinte minutos del discurso de Suárez que dispensó RTVE y la decisión del consejo de ministros de aumentar un 20% las pensiones...

Pero lo que de veras había enfurecido a Suárez fue el reportaje posterior de *El País Semanal* con una fotografía de portada del presidente en misa en la Moncloa y en familia, aunque no había sorpresa en la denuncia del «tratamiento abiertamente sectario que recibe en el monopolio estatal televisivo la gestión gubernamental». El contraataque de Suárez (y Armero) fue letal, porque cuajó en el discurso que decantaría definitivamente el voto en favor del presidente, el 13 de junio, cuando Suárez esgrimió de forma convincente la sucesión de promesas que se sentía capaz de prometer y prometía. Al día siguiente, *El País* ya solo podía animar a votar «sin miedo al cambio», con la misma palabra que había rotulado el editorial de unos días atrás (y que iba a ser el rotundo emblema de una victoria socialista futura). Enfocado como un acto cívico, «el derecho a votar es mañana para los españoles que desean el cambio la obligación de hacerlo», y hacerlo significa el respaldo a cualquiera de las opciones socialistas, pero sobre todo al PSOE.

No es probable que a Felipe González le hiciese demasiada gracia alguno de los análisis del periódico, en particular cuando el editorialista identifica los problemas del PSOE como una «crisis de identidad», en la que «no es seguro que sea capaz de digerir» un buen resultado, descentrado por una radicalización verbal y retórica que contradice su moderación práctica. Yo creo que escucho a Pradera cuando subraya un espectáculo insólito: «Los socialistas tratan de invadir el terreno de los comunistas, se definen ocasionalmente como partido marxista, de clase y revolucionario, adoptan en la práctica fórmulas organizativas de la mejor estirpe del “centralismo democrático” y subrayan con frecuencia la parte maximalista de su programa sobre la forma del Estado y su organización económica y social.» No se mueve el editorial de lo que había reprobado ya a los socialistas, pero a su vez los comunistas «acentúan su programa mínimo, aceptan la Monarquía y la bandera bicolor, predicán la prudencia y la moderación y se proclaman a sí mismos como una variante del socialismo».

Al PSOE, sin embargo, ese enjuague oportunista entre realidad y apariencia le perjudica doblemente porque su «retórica obrerista» y de clase «no se compagina muy bien con el importante peso de sectores burgueses en la composición tanto de su militancia como de su electorado». La deseable unidad de los socialistas no ha llegado, seguramente porque «no tiene por qué pasar necesariamente por las horcas caudinas del PSOE, que en esta ocasión parece haber pecado de arrogancia y exclusivismo». Las andanadas contra el secretario de organización no han empezado explícitamente aún, aunque falta muy poco. Pero sospecho que esta es la primera de las muchas que van a llegar destinadas a acotar, sofocar o condenar el poder de Alfonso Guerra en la intimidad intestinal del partido. Las ánimas, sensibilidades, matices de la amplia familia socialista han sido excluidas o aplacadas en el PSOE, y es más que probable que parte de la suya, del propio Pradera, o de Claudín y otros, se sienta huérfana o desamparada. Seguir sin ordenar las corrientes internas, como se las llamará después, aboca al PSOE a un perfil público caótico que Pradera describe como «mare magnum»: «A menos que el PSOE ordene las tensiones en su seno de manera comprensible, seguirá siendo un carrusel de verbalismo revolucionario y de hechos moderados, de imágenes caballeristas y comportamientos prietistas, de banderas republicanas y visitas a La Zarzuela, de marxismo teórico y socialdemocracia práctica.»

Las llamadas a la unidad socialista resonarían un poco más fúnebremente a partir del día 18 de junio al advertir que el desacuerdo con el PSP de Tierno Galván impidió que sus notables ochocientos mil votos engrosaran las listas del PSOE. De haber acudido unidos a las elecciones, el PSOE habría quedado prácticamente equiparado con la UCD de Suárez. El PCE había conquistado la extravagante ridiculez parlamentaria de 20 diputados (en privado Carrillo calculaba un tope de cuarenta), frente a 118 del PSOE y 165 del partido de Adolfo Suárez. Los seis millones largos de votos centristas aventajaban únicamente en un millón a los socialistas, mientras el PCE quedaba muy lejos de los dos millones, con la extinción total de la democracia cristiana de José María Gil-Robles y Joaquín Ruiz-Giménez, invencible y en parte injustamente ligados a un pasado amortizado.

Con aquellos resultados, frustrantes pero espectaculares, el editorialista creía que el partido socialista no debía olvidar que se había «convertido en un año en el primero de España, gracias, en buena parte, al voto joven y al voto burgués». El respaldo masivo ha llegado «por su imagen – más socialdemócrata que marxista–, antes que por su programa o su ideología». Es verdad que el ganador ha sido un Suárez que según el periódico «no está en condiciones de gobernar en solitario», pero el «gran triunfador» ha sido Felipe González, en una victoria moral que sabe a derrota política.

Ahora lo que hay que «evitar a toda costa» es la división del país en dos; es por tanto «indispensable un acuerdo en profundidad entre la UCD y el PSOE». Esa había sido la recomendación o, mejor, la instrucción que una y otra vez había emitido el periódico en la campaña y precampaña electoral. Los dos riesgos mayores, sin embargo, caen en el lado socialista, porque el secreto está en saber si más allá del cartel electoral con *Felipe*, puede o no puede el PSOE llegar a convertirse en un gran partido: «Todavía no lo es.» Pero el segundo enigma lleva una carga de fondo ideológica que irá estallando una y otra vez en múltiples editoriales futuros animados por Pradera: el PSOE podría confundirse con los resultados y caer «en la tentación de ver todas sus papeletas electorales teñidas de marxismo». No caben «análisis matemáticos» en estas materias, pero «no parece en exceso descaminada la apreciación de que en este país han votado PSOE los socialistas –por supuesto–, los socialdemócratas, algunos rencorosos de la izquierda comunista, y una no pequeña masa electoral de españoles que aspiraban a un voto útil». El lugar en el que mejor encaja el votante Pradera es la intersección entre el segundo y el tercero empezando por la izquierda. Desde luego, Pradera votó al PSOE y censuró en privado la nostálgica lealtad de Clemente Auger, que mantuvo su voto al PCE sin haber militado nunca.

Una de sus fotos con mayor carga icónica está tomada precisamente la noche electoral del 15 de junio en la redacción de *El País*. Es la que comparece en la portada de este libro: Pradera ejecuta en un gesto casi despótico su papel no tanto moderador –que es lo que hacía ahí, moderar una gigantesca mesa– como imperativo desde los andamiajes del poder de la Transición. Con el traje y la corbata que no llevaba fuera de la redacción, con un gesto autoritario de impaciencia ante la dispersión en cosas menores, contrariado por esa indisciplina irritante de las conversaciones cruzadas e ininteligibles. Mientras levanta la mano expele más que manda un mensaje de orden, a medio camino de la autoridad incuestionada y el imperio de la ley para eludir el guirigay ofuscador, la habladuría inútil, el hervor espeso e ineficiente de conversaciones infantilmente excitadas. La cólera podía no ser solo una forma de incontinencia, sino de un programa de castigo: recuerda su secretaria Carmela Berzal la expulsión de su despacho de Pepín Vidal-Beneyto con cajas muy destempladas tras un incidente desafortunado con una secretaria. Pese a los accesos de cólera ofuscada hasta el sarcasmo hiriente, Pradera era a la vez inmutable o imperturbable en casi todos los órdenes de la vida, pasase lo que pasase. Parecía impermeable a la excitación global o colectiva, como si una suerte de esponja interna y elástica amortiguase el accidente imprevisto y activase fríamente la respuesta cabal. Su estructura emotiva e intelectual procesaba la información sin huella sentimental aparente, o bien porque no había respuesta afectiva o bien porque la sometía a la razón clarificadora. Esa suerte de cansancio crónico que algunos le han atribuido es en realidad el efecto combinado de una soberbia intelectual perezosa en dar explicaciones demasiado obvias y de un estoicismo blindado contra la adversidad, nunca tan gigantesca como para derribar la arrogancia y nunca tan grave como para hacer perder la cabeza.

Parece en esa fotografía haber tomado posesión de una nueva experiencia y un nuevo equipaje. Empezaba a ser el ideólogo de un periódico que había nacido con planes diferentes a los que ahora incubaba y empujaba efectivamente. De un modo u otro, la solidaridad Polanco-Cebrián favoreció que el periódico se acercase a los vastos segmentos de la población afín a los socialistas y que a su vez atrajese a quienes no lo estuviesen a ese mismo clima moral, cultural y político que acabaría decantando unas elecciones generales en favor de Felipe González. *El País* había empezado a ser otro casi desde el principio, en sintonía con lectores situados en una franja más de centro izquierda e izquierda que de centro, mientras los intentos de interferir de la Junta de

Fundadores y del sector conservador del Consejo se veían una y otra vez frustrados. Aquella alianza de Polanco y Cebrián podía propiciar las condiciones objetivas, políticas, éticas e intelectuales para la victoria algún día de la fuerza política emergente más novedosa y creíble de aquellos primeros años de transición, el PSOE.

En cierto modo, la trayectoria de *El País* entonces tiene algo de microrretrato de lo sucedido en la Transición. Ni uno ni otro cumplieron con sus presuntos planes originales: ni *El País* fue portavoz del reformismo franquista ni la Transición fue la continuidad disfrazada del franquismo. *El País* se convirtió en el periódico del centro izquierda de la democracia y la Transición rompió en la Constitución con el régimen franquista. Pero nada de eso formaba parte de plan alguno previamente trazado y ejecutado después. La virtud de la Transición pudo nacer de un fracaso múltiple: ninguno de los proyectos en pugna logró sus propósitos y tampoco ninguno de sus actores actuó como había imaginado o previsto hacerlo. El fracaso repartido o el prorrateo del fracaso dio como resultado un éxito fuera de programa. Y si algún plan pudo existir parecido a lo que acabó resultando, su autor no estaba ya vivo para reivindicar su paternidad. Pero lo harían Pradera y *El País* por él, porque ese fue el caso de Dionisio Ridruejo.

En buena medida, tampoco el papel de Pradera estaba previsto en sitio alguno y fue creciendo en el periódico de forma natural y espontánea por su seguridad de criterio, su rapidez de ejecución, su solvencia en los análisis y el tonelaje de su información privada y pública, política y social, macerada durante años. Como experto en la izquierda del espectro político justificaba su presencia en la sección editorial de un periódico de estirpe liberal y más afín al centro derecha de Areilza, Pío Cabanillas y del propio Jesús Aguirre que a izquierda alguna. *El País* iba a reventar el viejo ecosistema periodístico y cultural del franquismo y a condicionar el de la democracia, sin competencia posible ni en influencia ni en crédito ni en valor simbólico. Sin embargo, la decantación que el periódico vivió progresivamente desde finales de 1976 parecía invertir los papeles o convertir a Pradera en una especie de imán ideológico que atrajo el periódico a la respiración política de la redacción y lo puso en la mira atenta, a veces incluso adictiva, del centro izquierda social. Pradera decantó a *El País* en lugar de que *El País* decantase a Pradera.

Muchos años después, cuando Felipe González estuviese más cerca del «padre de familia distante, maduro y exigente», con propensión a regañar, Pradera evocó los tiempos adánicos de la «imagen igualitaria, cercana y juvenil» que construyó entre 1977 y 1982 el secretario general del PSOE, «hermano mayor de la nueva generación» y «representante de una fraternidad que no había luchado en la guerra civil ni colaborado con el franquismo»: alguien como él mismo, aunque él fuese diez años mayor. La eficacia electoral de esa imagen se probaría más tarde, pero de momento la izquierda en junio de 1977 ha de defenderse de un virus imprevisto, el desencanto. La palabra comparece en un temprano editorial en las vísperas electorales de junio de 1977 ante unas elecciones que ganó Suárez por un millón y pico de votos y unos cuarenta diputados más que el PSOE. Con mal perder, los socialistas se aplicaron a redactar con más despecho y populismo gestual de lo esperable una Constitución que al fin y al cabo legitimaría definitivamente al propio Suárez en 1978. Parecía gestarse el desencanto entonces como hijo espurio tanto de la Constitución en marcha como del *consenso* que la había de propiciar. Era desesperante haber logrado aclimatar al país en dos años a los estándares democráticos europeos y comprobar que esa ruta comportaba a la vez la decepción o incluso la inhibición de buena parte de la población sentimentalmente vinculada al antifranquismo. El desencanto había llegado para quedarse una temporada, al menos hasta que el estancamiento de la izquierda cebase definitivamente una enérgica locomotora socialista hacia el poder.

Empezaría entonces la lucha por el poder con un Pradera en la caja negra, en la última fila, sin visibilidad fuera de la densa urdimbre de tratos de la fauna político-periodística. La derrota de 1977 no dejó otro remedio al PSOE que alimentar la imagen pública de su rupturismo y a la vez confeccionar pacientemente una Constitución con el resto de los partidos y sobre todo con Adolfo Suárez. Hasta entonces, había jugado las mejores manos y las había ganado todas.

«UN FUROR HOMÉRICO Y DEVASTADOR»

También están llegando usos sociales imprevistos a su dilatado entorno personal y a varios de sus círculos de amigos. Implican incluso la enmienda parcial de su descuido indumentario y la resignación paciente al ringorrango de los protocolos. El poder se acercaba peligrosamente cuando su íntimo amigo Jesús Aguirre accedía, apenas en el plazo de un año, a las moquetas del poder gubernamental y, poco después, a los desquiciantes hábitos de la nobleza al casarse con la duquesa de Alba. En ambas fiestas estuvo Pradera disfrutando con la fraternidad y jaleó como el que más a Aguirre mientras asistía con él y con otros invitados a la retransmisión televisiva de su designación como director general de Música. Lo había nombrado otro amigo común vinculado a Prisa, Pío Cabanillas, ahora ministro del primer gobierno democrático de la UCD. A Martín Gaité, esos cotarros de *influencers* chismosos la dejaban más bien fría, o le parecían todos ellos, incluido García Hortelano, «estancados en un juego sin horizonte» porque «solo hablan de personas. Nunca de asuntos, de temas abstractos».

Aunque fuera verdad, según la misma Martín Gaité, que «sin esos chismes no saben vivir», los fastos políticos de Aguirre iban a quedar en una vulgaridad ratonera y municipal cuando seis meses después, en marzo de 1978, él mismo reclame el auxilio de varios amigos para que actúen como testigos de su boda con Cayetana Fitz-James Stuart en la capilla del palacio de Liria. Allí ofició Pradera muy serio su papel, desmadradamente instalado en un traje de chaqué, en compañía de la mujer de Aranguren, pero no Aranguren, y junto al mismo Cabanillas. Al parecer se libraron de la homilía, pero algunos aguantaron la misa de otro viejo amigo, José María Martín Patino, mientras Auger actuaba como representante de la autoridad civil.

Todavía durante un tiempo siguió siendo el cura Aguirre parte de la fraternidad, pero pronto fue perdiendo la alegría en una progresiva ruta de monacal y dinástico ensimismamiento, cuando dejó ya de sentir la pulsión liberadora y gamberra de sus excursiones homosexuales y dejó también de disfrazarse de cupletista, como le gustaba hacer en las fiestas que organizaba Juan Benet en su casa. En ellas el número cómico del ingeniero iba siempre incluido para distraer a una *coqueluche* que está dejando de serlo –Javier Marías, Félix de Azúa, Álvaro Pombo, Vicente Molina Foix, Antonio Martínez Sarrión, Eduardo Chamorro– y a amigos que tampoco dejaron de serlo con los años: García Hortelano, Salinas, Pradera. A varios de ellos los reúne Benet en la dedicatoria de *En ciernes*, todavía de 1976. El único que falta ahí es Pradera, pero sobre todo porque Pradera ya no tiene nada de *coqueluche*. El enamoramiento de Jesús Aguirre, más afectivo e intelectual que propiamente erótico o sexual, de Pradera duraría todavía muchos años, mientras Pradera empezaba a dar largas a sus interminables llamadas o actuaba sin demasiados escrúpulos como maltratador de un duque consorte cada vez más metido en su papel, cada día más recogido, más aburrido y finalmente ajeno ya a todo, incluidos los amigos. Habían compartido durante años, como mínimo, el perdonable vicio privado de la chismografía de alta y baja estofa: tiene pinta de

ser verdad lo que cuenta Carlos Solchaga unos años después, que «todo el mundo acababa sabiendo lo que quería que se supiese».

Lo que es seguro es que todos, derecha e izquierda, estaban viviendo un reciclaje a marchas forzadas y desde posiciones muy poco democráticas. Para la izquierda también valía ese curso acelerado de democracia liberal. La sorpresa que los transformó casi antropológicamente se llama democracia, pero no venían preparados para ella la inmensa mayoría de los socialistas ni desde luego los comunistas: la aprendieron con elecciones frustrantes y resultados insuficientes, con multitud de partidos y desde lugares de responsabilidad mediática o política recién estrenados. Por eso Pradera no ocultó su desprecio contra todos aquellos que se recordaban a sí mismos como puros demócratas cuando, en realidad, la democracia la descubrieron casi de golpe y sin tiempo, a base de desengaños y baños de realidad social.

Esas convicciones fueron modulaciones adoptadas sobre la marcha por la mayoría y ante la evidencia contingente, voluble, de la realidad política y no de la teoría o la ideología. La desobediencia de los votantes a la abstención que defendieron socialistas y comunistas para el referéndum de la reforma política de 1976 fue la primera lección. Pero la segunda ducha fría de realidad llegó tras el 15 de junio de 1977, cuando el resultado de las elecciones generales situó a un menospreciado exfalangista como Adolfo Suárez por delante, descolocó al heroico PCE situándolo muy por detrás, resucitó al PSOE en una triunfal pero inútil segunda posición y aparcó en un furgón de cola imprevisible a muchos centenares de miles de votantes no precisamente demócratas. Se repartían entre las opciones radicales a la izquierda del PCE –votantes de la Liga Comunista Revolucionaria y del Partido del Trabajo de España en su mayoría– en la convicción de que la revolución no era una utopía sino una práctica cotidiana que incluía secuestros, atentados o robos a mano armada contra un Estado fascista hipócritamente vestido de democracia burguesa, capitalista, proyanqui y represiva: eran los sentimientos de jóvenes que hoy ya no son jóvenes, como el Gran Wyoming –lo ha contado él– o mi propio padre, cuando abandonó la tutela del Opus Dei y se enroló por un tiempo en las aventuras del PTE.

En ese acelerado proceso de adaptación a la democracia representativa algunos jugaron un papel inesperado y hasta inquietante. Al desmoronamiento de las fantasías sobre la izquierda comunista en España, hubo que unir poco después la contraofensiva liderada por un libro y un excamarada. Semprún había aplazado la publicación de su autobiografía a la legalización del PCE pero con tiempo para concursar en el Premio Planeta de ese mismo año. La amplia cobertura de *El País* en octubre de 1977, cuando aún se titulaba *Testimonio*, incluye una semblanza escrita por Fernando Claudín y notas del crítico Rafael Conte, el responsable de Cultura en el periódico, Ángel Sánchez Harguindey, y el periodista Fernando Samaniego. Aquel premiado era una excelente pista del papel que desempeñaría en la dirección literaria de Planeta Rafael Borràs Betriu para la recolocación democrática de una editorial impecablemente franquista.

El libro había nacido literalmente de «un furor homérico y devastador» contra algunas apostillas de Carrillo a la edición española de sus largas conversaciones con Régis Debray, recogidas en *Mañana, España*. Pero apenas fue nada todo eso a medida que sus ventas se disparaban entre finales de año y a lo largo de 1978 a los 400.000 insólitos ejemplares a la vez que se disparaba una trifulca bronca y muy concurrida dentro de la izquierda. Vargas Llosa leyó la obra como la leyeron muchos otros: veía en la *Autobiografía de Federico Sánchez* un «testimonio sacrílego» que sabotaba el viraje eurocomunista del PCE. No llegaba a la crudeza de Vázquez Montalbán unos años después, cuando habló del libro como «violento alegato anticarrillista», escrito con «la pasión y la rabia del que se siente burlado por los demás y por sí mismo». Allí

había volcado Semprún un amplio segmento de lo que había sido su militancia clandestina comunista durante una década, en contacto con numerosos grupos resistentes en los medios intelectuales y culturales: había sido el mayor catalizador de una convicción común y era hoy el testigo memorioso de aquella etapa. Iba en el libro buena parte de su vida de aventura cuando su aventura era ya otra como estrella refulgente de la vida cultural francesa, cineasta reconocido y escritor premiado.

Pero tenía razón Vázquez Montalbán y, por debajo de la gabardina que hipnotizaba a Sergi Pàmies, Semprún vivía aún, en los años setenta, atrapado por el rencor de una memoria herida, ofendida y ofuscada. Convalecía todavía de la traumática reunión en Praga de doce años atrás, en abril de 1964, cuando Pasionaria arremetió contra él y Claudín con una caracterización vistosa y coloquial —«cabezas de chorlito», los había llamado—. Allí escucharon también la peor imputación imaginable al denunciar que «hozan en la charca de la socialdemocracia». Lo recordó entonces Vázquez Montalbán nada menos que en la revista oficial del partido, un *Mundo Obrero* de finales de 1977, y fue de los más precoces en el análisis dolido y equilibrado del libro. Juan Goytisolo había leído el manuscrito y no calló el «exceso de pasión» de Semprún, mientras José Ángel Valente recordaba su etapa de militante muy cerca de como la recordaba Pradera, con «una presión psicológica tremenda y ninguna discusión».

Sin embargo, a un histórico militante unánimemente respetado como Simón Sánchez Montero le parecía obra de un «señorito resentido». Durante varias semanas y muy hasta finales de 1977, mantuvo el PCE ante la prensa la ficción de desconocer el libro, con declaraciones públicas imposibles, hasta que Carrillo mismo habló, por supuesto con despecho y desprecio. Era inocultable la fruición de algunos medios en la cobertura del caso, en particular *Cambio 16*, bajo titulares tan morbosos como los de enero de 1978: «Los bajos fondos del eurocomunismo».

Pero quien tenía auténticas razones políticas y personales para intervenir era Pradera. Quizá, incluso, profundamente sentimentales, dado que su militancia comunista no fue epidérmica sino literalmente subcutánea, intravenosa. No pueden ser más que suyas las palabras del editorial que conmemora los setenta años de la Revolución de Octubre el 7 de noviembre de 1977, aún sin haber leído la novela de Semprún: los «espectaculares logros» soviéticos en términos materiales e industriales «quedan ensombrecidos por el elevado costo social y humano de esas realizaciones durante la larga noche estaliniana y por la esclerosis» de su aparato productivo. La gestión «coactiva y jerárquica» ha exigido «un precio demasiado elevado: la pérdida de las libertades públicas y de los derechos cívicos, la omnipotencia y los privilegios de la burocracia estatal, la supresión de la libertad de expresión y la desinformación de todo lo que ocurre en el exterior, la transformación de la cultura en una escuálida dieta administrada por los oscuros funcionarios que ejercen la censura, la persecución de los disidentes y su encarcelamiento en prisiones y manicomios».

De esa nueva sociedad estuvo colgado el joven Pradera que ahora enumera sus déficits, y es sin embargo el referente manual y más genéticamente afín que tiene el eurocomunismo. Pero puede salvarse: a Santiago Carrillo acaban de dejarlo en Moscú fuera de las conmemoraciones oficiales de la Revolución, literalmente ante las puertas cerradas del cónclave mayor. Lo supiese o no Carrillo, la torpeza soviética en Moscú consolidaba «la credibilidad del eurocomunismo», cree el editorialista. Sus *divergencias* no son ya «una añagaza táctica, como los profesionales del análisis paranoico suelen afirmar», y quizá el indicio incontestable son las frustradas «tentativas realizadas por Enrique Lister y Eduardo García de fundar el “verdadero” partido de la

“verdadera” clase “verdaderamente” obrera», en uno de los chistes habituales de Pradera, de nuevo encajado en el editorial de *El País*.

Pero el atolladero comunista sigue siendo enorme porque es difícilmente compatible el elogio y defensa de la Revolución con las «virulentas diatribas contra la sociedad soviética actual, hija y heredera de esa forma concreta de conquista del poder que se asociará para siempre con el nombre de Lenin». Quizá es verdad que la travesía del desierto que inician los comunistas «les puede llevar, como en un cuento de Borges, al arranque mismo de su historia: el momento de ruptura de la socialdemocracia europea en dos bloques de «hermanos enemigos» que han luchado entre sí –y siguen luchando– como solo pueden hacerlo quienes llevan la misma sangre o participan de la misma ideología».

Precisamente esa renovada credibilidad del eurocomunismo iba a ser el objetivo militar de Semprún en su *Autobiografía de Federico Sánchez*: contra sus ensayos de reeducación democrática lanza su bomba de racimo. Pradera conocía de primera mano las historias que contaba en su novela y no quiso avalar con el silencio la operación de Semprún: era una ofensiva descarnada e incluso insultante contra quienes habían sido abnegados militantes. Pradera no regateaba los méritos objetivos del comunismo en la lucha antifranquista ni la legitimidad misma de aspirar a una estructura social y política alternativa al capitalismo. Habían sido esperanzas reales y convicciones profundas, no una mera equivocación transitoria y juvenil.

Pradera compartía además una embarazosa dedicatoria impresa a medias con Domingo González Lucas, es decir, Domingo Dominguín. Pero ni Pradera ni Claudín habían leído previamente el libro, aunque sí conocían el muy antiguo propósito de escribirlo. De hecho, ambos sabían que Semprún lo había empezado tiempo atrás. Contra lo que habían prejuzgado ellos y algún otro «semprunólogo», sí acabó terminándolo, cree José Martínez. Pradera no lo veía tan claro y así contestaba de inmediato (cosa muy extravagante) a la carta de Martínez en diciembre de 1977 para aclarar qué es lo que había escrito de veras Semprún:

Los semprunólogos no nos hemos equivocado en lo más mínimo. Jorge no ha acabado el libro que empezó hace algunos años y del que solo figuran en la edición de Planeta 30 o 40 páginas. El resto de la obra se lo han terminado los demonios, los sátiros, las ninfas o los servicios de documentación propios o ajenos. Como no pude ver a Jorge a su paso por Madrid no he podido darle todavía mi opinión sobre la autobiografía. Podría resumirse diciendo que el peor biógrafo que podía encontrar Federico Sánchez es el Jorge Semprún de 1977. Como de todas maneras, a partir de los 40 años, uno no tiene más amigos que los que hace en la etapa anterior de su vida, y además mi cultura de los sentimientos amistosos está basada en las hogueras de campamento del Frente de Juventudes y en las películas del Oeste, prefiero que mantengas en la mayor de las discreciones lo que te digo sobre el libro de Jorge. Trataré de decirle lo mismo con palabras eufemísticas.

Pero Pradera entendió que su deber era traspasar las fronteras de lo privado a la vista del encendido debate público que el libro había abierto: sería uno de los gestos que consolidaría su autoridad moral, su independencia de criterio y su libertad para disentir; ese talante íntimo lo emparentaba con Ridruejo y lo acercaba al modelo de la moral kantiana, allí donde el enjuague entre los deberes éticos y los motivos sentimentales no se salda a favor de la conveniencia oportunista sino del deber de conciencia y verdad. Apenas unas semanas atrás, el 17 de noviembre, otra prueba íntima había sacudido los cimientos privados de Pradera: Gabriela Sánchez Ferlosio había estado muy grave y en coma tras un intento de suicidio.

El artículo de Pradera se publicó fuera de casa, en *Cambio 16*, para constatar que en la *Autobiografía de Federico Sánchez* «la acumulación de verdades parciales no da como producto

final, paradójicamente, un libro veraz», cosa que no es un modo precisamente eufemístico de hablar. Aparecía su artículo con fecha de 8 de enero de 1978, que era el mismo día en que Semprún contestaba, desde *El País* y por tanto con la obvia conformidad de Pradera como responsable de Opinión, a los ataques ya recibidos. Entre ellos hubo uno extensísimo de Manuel Azcárate, publicado en el mismo periódico, cuando todavía no era editorialista de internacional (ni había sido expulsado del PCE, como iba a suceder tres años después).

Pradera actuó de cara una vez más, como en mayo de 1960, sin escudarse en chantajes amistosos ni complicidades afectivas. El libro no estaba escrito como lo que había sido Semprún, miembro prominente de la dirección, sino en un papel fingido e irreal de mero militante y víctima del aparato. La experiencia de Pradera decía lo contrario, porque Federico Sánchez había pertenecido a la cúpula compacta en su período plenamente estalinista: no era un joven estalinizado, «¿por qué estalinizado?», preguntaba Pradera. Había demasiados silencios en aquel testimonio y había demasiadas «bajas pasiones», que no enumeraba pero entre las cuales estoy seguro de que Pradera contaba los ataques al traductor y socialista exiliado Wenceslao Roces (que «ha infestado con pésimas traducciones de Marx el mundo cultural hispano», según Semprún), o el desprecio indisimulado y hasta brutal contra militantes con mucha tralla a sus espaldas, como Simón Sánchez Montero, Gregorio López Raimundo, Armando López Salinas o Eduardo García Rico, valiesen lo que valiesen. El rencor de Semprún alcanzaba hasta al nuevo héroe de la nueva historiografía desde los coloquios de historia de Pau, en Francia, Manuel Tuñón de Lara. De hecho, Semprún se metía en jardines muy delicados al tratar de «aventurera, sectaria y burocrática», la estrategia de Álvaro Cunhal al frente de los comunistas en Portugal porque había condenado al «repliegue del movimiento revolucionario de las masas portuguesas». Todo ello había contribuido en 1974 al éxito de las fuerzas «social-demócratas y de centro derecha», con evidente desprecio de las fuerzas «social-demócratas», al menos cuando escribe, en 1977, su *Autobiografía*.

Pradera no tuvo más remedio que situar a Semprún desde enero de 1978 «en la vieja tradición de los excomunistas». En ese lenguaje y en ese rencor *homérico, devastador*, se había sumergido Semprún. Había escrito (y 400.000 personas leerían) que «a la vista de los hechos, el Partido Comunista no sirve para nada». Pero su fiabilidad estaba gravemente tocada, porque Pradera no solo acababa de defender la credibilidad del nuevo PCE que lideraba Carrillo desde los editoriales en *El País*, sino que apuntaba al enmascaramiento de sus posiciones reales durante diez años de clandestinidad en Madrid. Semprún silenciaba su relación con Pradera a partir de 1959, su exclusión del trabajo organizativo y su respuesta de predicador integrista a las notas de mayo de 1960. No era fácil explicar esa omisión de forma benévola, a la vista del énfasis que Semprún puso ahí a favor de una «memoria lúcida y crítica» como instrumento contra la «pragmática y arbitraria historia de los desmemoriados». Precisamente quien escribía en nombre de esa memoria no podía a la vez incurrir en olvidos culpables, como el montaje de la ASU con infiltración directa comunista organizada por él (aludida veladamente en un editorial) con protagonistas del episodio todavía activos en la política de la transición, como Carlos Zayas o Francisco Bustelo.

Lo que latía en el fondo era un deber moral doble dictado por el principio de no prevaricar ni con uno mismo ni con los demás. Su hijo Máximo lo recuerda vigente en casa de forma rotunda, y a menudo problemática, y Pradera lo llevó a la práctica sin desmayo y a veces con costes abrasivos. El primer deber obligaba a completar la información sesgada de Semprún, sin rebajar la calidad de su trabajo clandestino ni las buenas razones que tuvieron en 1964 Claudín y él para

plantar batalla y perderla, sabiendo de antemano que iban a perderla. El segundo deber moral era de política pragmática y aspiraba a contener la «oleada anticomunista» (así la llamó José Vidal-Beneyto entonces) y, en particular, el aluvión de descrédito que el libro generaba contra el eurocomunismo del PCE. Esa descalificación sabotaba también la «vía democrática al socialismo» de Claudín, y creo que de Pradera, porque abatía un potencial aliado en la construcción del bloque sociopolítico de izquierdas de la naciente democracia. A Semprún le había salido en ese libro el excomunista anticomunista que Pradera nunca iba a ser, al menos mientras no apareciese en el horizonte de la vida pública el nuevo mesías del comunismo español en democracia, Julio Anguita.

La relación se rompió y tardó algún tiempo en recomponerse, seguramente antes del regreso a España de Semprún diez años después, en 1988 como ministro de Cultura, ya en la segunda legislatura socialista. En todo caso, el súbito protagonismo que adquirió entonces Semprún tampoco contribuyó a restituir el liderazgo intelectual de la disidencia comunista de Claudín entre 1962-1964 ni a destacar el papel que desempeñaba en el laboratorio del nuevo socialismo en marcha desde la Fundación Pablo Iglesias o la revista *Zona Abierta*. Su actual invisibilidad histórica es una innecesaria secuela de la fortuna de Semprún.

Pradera aceptó por entonces otra de las poquísimas entrevistas que dio en su vida. A J. M. Martí Gómez y Josep Ramoneda, dos periodistas políticamente comprometidos y colaboradores de una revista roja de humor, *Por Favor*, les contaba sus aprensiones sobre una Europa convertida en balneario en el que «todos pensamos que no se puede hacer socialismo si no es vinculándolo a la democracia... pero nunca se ha hecho». En la creciente familia socialista, Pradera mastica con Fernando Claudín la aspiración a que las izquierdas socialistas y comunistas, sindicales y sociales, encuentren los modos de construir una «lucha aglutinadora» para fortalecer el «bloque sociopolítico de orientación socialista». Persiguen seguramente la invención de un socialismo democrático sin las flaquezas de una socialdemocracia instalada en el plano inclinado que la lleva indefectiblemente al social-liberalismo.

Se había acabado el sueño de la revolución y también el ascendente de los catecismos ideológicos de uso doméstico. Por eso se permitía en este mismo febrero de 1978, en una entrevista anónima en *El País* a Arnaldo Orfila Reynal, una alusión jocosa al bestseller absoluto de Siglo XXI. Pradera exhibía repetidamente una distancia crítica que era nueva, que estaba empezando a cuajar de otro modo y que lo mostraba entre burlón y escéptico hacia «manuales más bien catequísticos para uso de la izquierda», pensando evidentemente en el de Marta Harnecker *Los conceptos fundamentales del materialismo histórico*. Ese había sido y seguiría siendo el manual de referencia para el socialismo militante del PSOE tras la designación de Luis Gómez Llorente al frente de la formación ideológica del partido en la Fundación Pablo Iglesias en 1976.

Pradera se sitúa ahora privadamente, no como editorialista, en esa órbita claudinista: un marxismo que ha cedido a la dulcificación de una socialdemocracia seria pero receloso de un eurocomunismo demasiado coyuntural y quizá agonizante. La vía española hacia el socialismo es también una forma de marxismo sin el anquilosamiento del centralismo democrático e integrado en la democracia burguesa. No apostaba ya por el PCE, obviamente, pero no denostaba al PCE ni siquiera su reciclaje democrático: podía ser una parte de aquel bloque que dibujaba teóricamente Claudín para tratar de combatir la barbarie capitalista. El resquemor contra los comunistas y en particular contra su cúpula sigue vivo en Pradera, aunque no niega, como sí hace Semprún, que «los aires de renovación son ciertos» aunque esos aires no lleguen a ser el vendaval que se lleve por delante a los mismos dirigentes que «los sofocaron hasta fecha bien reciente». Por eso hoy

juran «por el eurocomunismo con la misma firmeza y entusiasmo que lo hicieran antaño por el leninismo y el estalinismo». Lo que tendrá que resolver Carrillo es la imposibilidad de querer ser a la vez «partido de oposición» y «partido de gobierno».

Pradera era activamente partidario de perdonar pero no de olvidar, y por eso la primavera que vive el PCE es solo relativa en 1978. La renuncia al leninismo ha protagonizado el debate interno en el partido, pero ha sido quizá la manera de rehuir lo fundamental, es decir, sus pobres resultados electorales de 1977, sus errores de pronóstico, sus virajes bruscos, el «inveterado triunfalismo de una organización que tiende a considerarse el ombligo del mundo y a considerar las críticas que se le formulan como elementos de una conspiración siniestramente orquestada, etcétera». No duda de la «abnegación y espíritu de sacrificio» de sus dirigentes pero sí de su «capacidad teórica y organizativa», cuando ha sido Pradera mismo, me parece, quien ha contestado en otro editorial a las críticas públicas que Carrillo ha emitido contra *El País* por entender que desaconsejaron el voto comunista en junio de 1977 e interfirieron en la marcha del congreso que reunió al leninismo. Pradera promueve expresamente el relevo de los dirigentes para dar credibilidad a su renovación: «El único partido a cuyo frente continúan hombres asociados con la guerra civil» es el mismo que más «se ha esforzado en su pugna por borrar de la memoria colectiva ese sangriento conflicto».

O dicho más cruelmente, «este blanqueo urgente y a matacaballo de la ideología del PCE» tras la eliminación del leninismo no llega reforzado por un relevo de personas. Cree que «solo dispondrán de un serio apoyo electoral cuando hayan renovado su viejo equipo dirigente, demasiado asociado con una teoría y unas prácticas que ahora se rechazan, e incorporen a los puestos de responsabilidad a personas que confieran credibilidad a ese compromiso de su organización con el pluralismo y la libertad». Oportunismo en «forma improvisada y a destiempo» es lo que verdaderamente define el cambio estratégico sin cambio de cúpula y con el objetivo «de mejorar la imagen electoral del PCE y de acercarla a la muy exitosa del PSOE». Regresa la memoria de Pradera para el sarcasmo leve de señalar que «lo que sorprende no es que el PCE deje de llamarse leninista sino que haya esperado más de veinte años para hacerlo» y por eso hace años «que los fundamentalistas del leninismo emigraron hacia las moradas más devotas del PT, de ORT, del MC o de los partidos prosoviéticos»: eran varios centenares de miles de votantes.

Es obvio que Pradera conocía muy bien la historia del comunismo soviético –la apabullante biblioteca especializada de la casa que compartieron en Gandarilla Natalia y él está ahora en la Fundación Pablo Iglesias– y es difícil sustraerse a la convicción de que el núcleo o el cuerpo central de los múltiples editoriales dedicados en esa época a la evolución del comunismo, su confluencia con la socialdemocracia y las dificultades internacionales de Berlinguer y Carrillo sean suyos. Contienen en cierto modo la anatomía seriada de una agonía que Pradera intuyó sin sancionarla ni promoverla. Javier Pérez Royo escribía en 1990 que nadie vio entonces, en los años del eurocomunismo, el final del comunismo. Quizá no, pero de esos editoriales se desprendía la bendición de sus esfuerzos de adaptación a las democracias europeas y a la vez el escepticismo creciente sobre sus posibilidades de neutralizar contradicciones que le permitiesen prosperar. La vía eurocomunista no es todavía nada más que un «proyecto», en el que lo peor que pudiera pasar es que los soviéticos definiesen un «eurocomunismo bueno, o al menos tolerable, y un eurocomunismo malo, y desde luego intolerable». En el primero Enrico Berlinguer «haría el papel de un Erasmo culto, autocontrolado y prudente», mientras que Carrillo haría «el menos lucido personaje de un Lutero poco refinado teóricamente, propenso a estallidos emocionales y precipitado en sus decisiones».

Por supuesto, tampoco queda ya nada de lo que había sido la «gran llamada a la esperanza de la izquierda» desde enero de 1959, porque hoy precisamente «las esperanzas de los intelectuales de izquierda se han desvanecido». El régimen cubano vive «sometido a una creciente arterioesclerosis estalinista, se halla disciplinadamente doblegado a los dictados soviéticos en el contexto internacional, y con serios problemas en su interior». Claro que había habido logros «notables» en relación con «otros países latinoamericanos» dañados por «un círculo vicioso de pobreza, analfabetismo y enfermedades endémicas». Pero parecía confirmarse la analogía que había promovido Alejo Carpentier desde el corazón de la revolución en *El siglo de las luces*: tampoco la Revolución Cubana había escapado «al destino cruel de todas las revoluciones» y había desembocado «en la dictadura y el terror». Ya es seguramente verdad que «el castrismo ha perdido ante la izquierda internacional la autoridad moral y la originalidad revolucionaria que le convirtió en un mito a mediados de los sesenta». Y debía ser verdad, aunque la militancia de la izquierda de los años setenta siguiese empapelándose con el Che Guevara y convocando la imagen de Fidel Castro en cada festival rojo: lo sé porque no fallé en ninguna de las convocatorias del PSUC a la festa de *Treball* durante estos mismos años, aunque hubiese dejado de militar en sus juventudes.

9. VÍSPERAS DEL GOZO

MAREJADA EN *EL PAÍS*

La crisis abierta en Alianza por las fugas de capital a Revista de Occidente se complicó paralelamente con otra batalla empresarial en el seno de Prisa, y no del todo desconectada de ese episodio traumático. La pelea ahora iba a ser a cara descubierta por el control político de *El País*. Fue pública y notoria, incluso contada a través de artículos y noticias en la prensa con información que solo podía proceder del mismo consejo de Prisa. Felipe González recuerda la estupefacción de Pradera cuando le informó sobre la operación en marcha liderada, en teoría, no solo por Darío Valcárcel sino también por Ortega Spottorno y otros miembros de un consejo que sentía perdido el periódico, y con razón.

Posiblemente Ortega Spottorno estuvo primero en un lado de la batalla —el crítico con el periódico y políticamente conservador— y después se lo pensó mejor y aceptó seguir al lado de Polanco en aquella empresa que, de hecho, controlaba ya. Ortega acababa de ser destituido de la dirección de Revista de Occidente y tuvo que asumir también no solo la pérdida de su patrimonio para hacer frente al agujero económico que había creado sino el cese como consejero delegado de Alianza en noviembre de 1977 (y finalmente también su salida del consejo mismo en mayo de 1978). Desde entonces, ya solo permanecería en la presidencia de *El País* gracias a que Diego Hidalgo respetó la posesión de la acción número uno de la compañía, tras haber adquirido a Ortega sus acciones en una operación de venta que sería denunciada como irregular por otros accionistas de Prisa, según el relato de Mercedes Cabrera en su biografía de Jesús Polanco.

Las indisimuladas desavenencias entre Cebrián y el subdirector Darío Valcárcel habían llevado a la dimisión de este el 1 de octubre de 1977. Siguió sin embargo en la Junta de Fundadores, y Ortega Spottorno lo nombró adjunto a la presidencia de Prisa. Carlos Mendo asumió por entonces la subdirección del diario *Abc*, y en Prisa lo sustituyó otro hombre de perfil conservador, Miguel Ortega Spottorno. Las desavenencias con Cebrián habían estallado tras un año de forcejeos, pero la pelea estaría todavía muy viva durante al menos dos años más, mientras un sector mayoritario del Consejo de Administración aspiraba a buscar métodos para controlar a Cebrián y la línea editorial del periódico.

Lo significativo, sin embargo, es que una semana después de la dimisión de Valcárcel y de varias reuniones del equipo económico del Gobierno con Polanco, Cebrián y seguramente Pradera, el periódico decide respaldar al vicepresidente Enrique Fuentes Quintana y los pactos de la Moncloa con un editorial titulado «La hora del consenso» el 8 de octubre de 1977. El Gobierno parecía afrontar por fin la grave crisis económica, tal como había pedido el periódico repetidamente. Es posible que una vez más su información fuese de primera mano, no solo por los encuentros políticos en la redacción de la calle Miguel Yuste o en el domicilio de Polanco con el vicepresidente y el ministro Fernández Ordóñez, sino porque Luis Ángel Rojo era uno de los asesores relevantes de Fuentes Quintana. Estuvo en el vientre del Banco de España desde su incorporación a la dirección del Servicio de Estudios en 1971 y habían compartido muchas horas en una tertulia de economistas a la que Pradera acudía como intruso y ágrafo curioso, en la oficina de Pedro García Ferrero de la calle Fortuny.

A pesar de la dimisión de Fuentes Quintana cuatro meses después, en febrero de 1978, en el periódico le seguirían creyendo el auténtico inspirador de los Pactos de la Moncloa, mientras reeducaba en la disciplina económica a sus colegas en los salones de la sede presidencial, tanto si se iba la luz y había que seguir las reuniones a dos velas, como si se celebraban en el confort de las dependencias presidenciales; tanto si había que escuchar sus broncas y su mal humor, como si las reuniones fluían sin dificultad. Muy pronto dieron en el periódico un voto de confianza a los acuerdos de la Moncloa, como los llamaban al principio, porque significaban «un punto de partida aceptable». Seguía siendo verdad, según la doctrina estable y constante del periódico, que los «únicos e indiscutibles éxitos» de Suárez habían consistido hasta ahora en «el desmantelamiento jurídico y político de las instituciones franquistas». Ese sería el mérito que nunca regatearía *El País* a Suárez, pero ni uno más: «En la oferta de exfranquistas convertidos en demócratas, la mejor ejecutoria es, con mucha diferencia, la suya.» Lo dudoso era su capacidad para «sacar al país de la crisis económica y de proseguir con éxito la tarea» y renunciar a «seguir diciendo: o yo, o el caos».

La ocasión propicia para el golpe interno en Prisa se produjo durante un largo viaje de Polanco a América Latina en diciembre de 1977: se mezcló ahí el cansancio de Polanco con su cargo de consejero delegado y la complicadísima situación de la industria editorial, como suele deplorar Pradera al menos en dos sermones cada año desde la página editorial. En esas turbulencias creyeron ver los consejeros descontentos la oportunidad para estrechar la vigilancia y el control sobre la línea editorial de un periódico que había exhibido sus afinidades con los socialistas y las izquierdas y amparaba firmas y tonos que incomodaban a muchos de ellos.

La batalla más cruenta se dio en el Consejo de Administración del 10 de febrero de 1978. Polanco rectificó su primera tentación de abandonar, a la vista de los movimientos activados, incluida la petición directa de dimisión que le hizo Ortega Spottorno. Lideró desde entonces sin resquicios la defensa de Cebrián y la independencia de la línea editorial del periódico, sin los controles que el consejo pretendía introducir. El efecto de esa batalla creo que se lee en un editorial de siete días después. El periódico retrataba ahí «Los rostros de la derecha» para autoexcluirse de esas familias y esos rostros, cuando estaban a punto de abandonar el consejo o lo habían hecho ya algunos de los nombres más visiblemente decepcionados por la ruta de un periódico perdido. Automáticamente despejaba la menor duda de que *El País* se ubicase ni poco ni mucho en esa zona del espectro político. No solo esa derecha «ha gobernado siempre», sino que además se ha «metamorfoseado con notable capacidad política según las épocas, según los regímenes, desde los más tradicionales a los más excepcionales». No hay tampoco dudas de que fue ella «quien ganó la guerra civil, la que gobernó con el general Franco y la que con una maestría y flexibilidad dignas de toda atención ha venido amparando e impulsando el actual tránsito político».

Eso está obligando a la derecha a mejorar sus tradicionales estrategias para embarcarse en «una remodelación profunda» o, mejor, un «lavado» político que logre dejarlo todo igual cambiándolo todo. Se trata de lograr «la sustitución de un conglomerado de intereses –y de las personas que representaban– por otro diferente pero del mismo signo: no sucede una derecha a otra, porque eso son cosas que no existen, sino la misma con otros nombres y apellidos y a veces hasta con los mismos». Expulsada o «desgajada por la voluntad popular y por la realidad de las cosas de los centros de poder» reacciona «atacando paradójica y suicidamente a quienes representan con plena legitimidad los mismos intereses que ellos dicen defender». En realidad, no hay necesidad de otra *gran derecha* porque la única «gran derecha» que hay hoy en España «está sentada en los escaños

de las Cortes» bajo las siglas de UCD y AP, y es quizá aquí donde está la alusión implícita a la batalla ganada en el consejo del día 10: es lógico que «asombren y extrañen no poco las intenciones de otros sectores, que carecen de representación popular, y atacan a los hombres de la derecha que se presentaron ante el pueblo y aceptaron las reglas del juego». Probablemente hay una relación directa entre las turbulencias en Prisa y esta derecha que «se mueve» con sus tentativas «de creación de partidos, desde los que se califican modestamente de conservadores hasta los que pretenden aglutinar a la llamada «gran derecha».

Ese editorial podría ser el mensaje que el equipo directivo, con Cebrián a la cabeza, enviaba a la derecha inconforme en su consejo. Ortega Spottorno había rectificado o rectificaría, a pesar de que sus antiquísimos amigos se sentían fuera de aquel barco o incluso hostiles a su rumbo. En abril de 1978 es cesado Valcárcel, también como adjunto a Ortega Spottorno, y en mayo Julián Marías no aguanta más y escribe una carta de dimisión que no publica el periódico y acaba apareciendo en *Gaceta Ilustrada*. Desde el origen del periódico Polanco había asumido la defensa de Cebrián, con quien el trato era cotidiano y estrecho en la redacción, por las tardes y noches, y sin duda también con Pradera, presumo que último responsable intelectual de aquel grave enredo, dado su papel como editorialista en un periódico escorado hacia la izquierda en términos morales y sociales y al centro izquierda en términos políticos.

Lo que sigue defendiendo a estas alturas *El País* es un gobierno de coalición entre UCD y PSOE como garantía de estabilidad. En el fondo, respalda una forma de consenso sin prever que ese talante consensuador tendrá algunas de sus peores secuelas en el funcionamiento opaco o poco transparente de los dos grandes partidos del Parlamento, con abierto abuso de sus respectivas fuerzas, tanto en el plano de la gobernación como en la redacción de la Constitución. El 26 de febrero detectan complacidos y favorecen «el entendimiento de fondo para articular el futuro de la política española sobre la hegemonía y eventual alternancia en el poder de UCD y PSOE». En buena medida es «un bipartidismo imperfecto», como lo ha calificado Felipe González», que sin embargo no puede ser justificación para abandonar «el campo tolerable de las prácticas ventajistas» y «adentrarse en el peligroso terreno de los métodos abusivos». En los debates constitucionales *El País* condenará repetidamente actitudes del PSOE o bien por inmaduras, o bien por imprudentes. Incluso «la rigidez de los dos partidos hegemónicos» ha bloqueado una enmienda de Jordi Solé Tura «llena de racionalidad y sentido común», y son esas prácticas las que hacen temer que el acuerdo tácito entre UCD y PSOE «esté dispuesto a pasar implacablemente por encima de cualquier obstáculo sin reparar en algo que es, sin embargo, la esencia misma de un sistema pluralista: el respeto a los valores y a los principios de la democracia y el juego limpio con las minorías».

LA IZQUIERDA SOCIAL

Pero la identificación de esas encrucijadas peligrosas del socialismo inexperto no neutraliza la evidencia pública de encarnar una izquierda moral y cultural con músculo y convicción. Hay suficientes dosis doctrinales como para liderar algunas de las batallas más influyentes y duraderas de aquellos años: quizá la rebaja del socialismo a la socialdemocracia era parte de la ruta que conducía a una sociedad en conjunto más progresista, donde las batallas se diesen en favor de mayorías pero también de minorías marginadas, maltratadas o menospreciadas. El periódico no elude el debate de la legalización de la marihuana, pero tampoco oculta el potencial aumento del

consumo que impulsarían los intereses comerciales de las tabacaleras. Editorializan contra la «marginación de los homosexuales» tras negar el ministerio la legalización del Frente de Liberación Gay y confían en que «la zafiedad recubierta de erotismo y la bastedad envuelta en pornografía serán reabsorbidas por una sociedad» que habrá de ir perdiendo «las pautas represivas» inculcadas durante cuarenta años de dictadura. Denuncian la trivialización del feminismo, la lentitud exasperante de sus conquistas, la insensibilidad a sus demandas incluso dentro de la izquierda, con su tradición a cuestas tan machista como homófoba: «O mucho nos equivocamos o la condición femenina, aquí y ahora, ha dejado corta la frase célebre del príncipe de Salina. Para las mujeres está cambiando todo para dejarlo peor.»

No parece que las gestiones para repatriar el *Guernica* vayan al ritmo que debieran ni la libertad de expresión está firmemente protegida –con secuestros, procesamientos y sumarios abiertos contra periodistas y editores–. A un amigo personal y miembro de la fraternidad benetiano-ferlosiana, Eduardo Chamorro, acaban de abrirle un expediente por su intervención en el programa televisivo *La Clave*, mientras se deniega una y otra vez la incorporación de los catedráticos represaliados, citados por sus nombres en hasta tres editoriales contra la cerrazón corporativista y miedosa de la universidad. Eso vale también por la incorporación de quienes no habían sido nunca catedráticos, por ejemplo un hombre descontento de *El País* como Julián Marías y un veterano heterodoxo como Julio Caro Baroja, pero también para amigos directos y dilectos como Manuel Sacristán y Carlos Castilla del Pino. Por lo visto no es momento todavía de corregir las prácticas franquistas que «permitieron el engrosamiento de los escalafones con insignes mediocres» que sí supieron sobresalir «en las artes del conformismo y la obsecuencia, y convirtieron las oposiciones en un ejercicio casi heroico para quienes no gozaban de los favores de las camarillas o las sectas dominantes».

A estos «exiliados interiores», como los llama el editorialista, hay que añadir la cruel insensibilidad hacia el creciente exilio procedente de las dictaduras del Cono Sur, de Argentina y Chile, de Uruguay y Paraguay, ingrata e injustamente abandonados a su suerte en España cuando el deber de memoria debería incentivar su aclimatación: «Para su desgracia y para nuestra vergüenza, la única aspiración de estos intelectuales huidos del Cono Sur se reduce a conseguir un puesto al sol en actividades muy alejadas de la docencia y de la investigación, y a mantener sus papeles en regla para no ser expulsados de lo que solo irónicamente pueden llamar “madre patria”.» En el fondo «reproducen, con cuarenta años de distancia y en sentido inverso, la dolorosa peripecia del exilio español». La indiferencia con que los trata la democracia española –*sudaca* sería muy pronto insulto habitual– «es el síntoma inequívoco» de que el «sistema político que ahora iniciamos se halla falto no solo de entusiasmo sino también de solidaridad».

Por eso también hay que pelear por el renombramiento de muchas plazas y calles que siguen llevando los nombres de la venganza y la revancha de la Victoria. Y diría que la devoción de Pradera por la trayectoria de Jorge Semprún –superviviente del campo nazi de Buchenwald– no dejó pasar el valor político de otro viaje de Juan Carlos, a Austria, donde el rey homenajeó a los 7.000 españoles muertos en el campo de concentración de Mauthausen: «No es aventurado estimar», fórmula tan frecuente de Pradera, «que aquellos españoles no albergaban precisamente sentimientos monárquicos.» No lo había hecho todavía nadie, «ni los ministros que han pasado por Austria ni nuestros embajadores acreditados en Viena» se han molestado nunca «en el mínimo gesto conciliatorio de remitir una corona a Mauthausen».

El ataque a una universidad blindada y corrupta es directo y sin reservas, porque afecta también a su resistencia a incorporar nuevos y viejos exiliados españoles expectantes o aspirantes a un

lugar en la nueva democracia. Tímidamente la ley de educación permite el nombramiento de catedráticos extraordinarios que esperan en vano la llamada repatriadora. Pero el hecho en sí mismo de «que ninguna universidad española haya pedido la incorporación de José Ferrater Mora o de Julián Marías, de Manuel García-Pelayo o de Julio Caro Baroja como catedráticos extraordinarios dice muy poco en favor de los profesores numerarios que anteponen sus estrechos intereses gremiales y su cerrado espíritu de cuerpo a la apertura y universalidad que, al menos teóricamente», debía caracterizar a la universidad ya en 1979.

A pesar de que seis meses después la valentía del ministro Luis González Seara permite nombrar catedráticos extraordinarios a Juan Marichal y Manuel Tuñón de Lara, a Ignacio Sotelo y Salvador Giner, el Consejo de Rectores en el ejercicio pulquísimo de sus funciones suspenderá los nombramientos, ¡en 1980!, de Carlos Castilla del Pino, Manuel Sacristán, Manuel Castells, Miguel Sánchez-Mazas y José Vidal-Beneyto: «El más estrecho gremialismo» y «el horror corporativista a la competencia se han fundido, en la bola negra a los cinco candidatos suspendidos, con la mentalidad del Santo Oficio y la resuelta voluntad de trasladar al mundo de la cultura las marginaciones y exclusiones que dictan el sectarismo ideológico y los compromisos políticos.»

Pero tampoco el viejo enemigo de la censura y su decálogo ha desaparecido en los primeros años del posfranquismo, «está escondido, y surge de cuando en cuando para volver en medio de sus azufres artificiales. Reluce un instante y vuelve a su escondrijo, por mor de algún funcionario integérrimo que olvidó el reloj de la historia hace tres años». Hay demasiados «funcionarios que son auténticos *topos* del pasado y que dentro de cien años condenarán la memoria de Susana Estrada», actriz icónica del destape legalizado y la mujer a quien acompaña el candidato socialista a la alcaldía de Madrid, Enrique Tierno Galván, en una archifamosa fotografía de la época. La inacción gubernamental en relación con la industria editorial empezaba a ser un gravísimo agravante de la crisis que vivía el sector en un país que «no lee» pero figura en el quinto puesto mundial como productor de libros («seis españoles –casi– de cada diez no compran jamás un libro»), a la vez que sus tiradas «son notoriamente inferiores a las del resto de los citados países». La noticia del Premio Nobel otorgado a Isaac Bashevis Singer ha cogido a las librerías sin sus títulos, como si efectivamente fuese un «desconocido», cuando en España se habían publicado en los últimos quince años nueve de sus libros pero esas ediciones españolas «se han vendido en Iberoamérica». La televisión sigue siendo no solo el principal «instrumento de propaganda política y de alienación desvergonzada, que rezuma corrupción por todos sus poros», sino el principal vehículo de «desinformación y desculturización», sin que se vea final a ese túnel: ni en el Gobierno ni en los partidos de derechas o de izquierdas sus programas ofrecen más que «una vaciedad escalofriante y apenas traspasan el nivel de las vagas declaraciones genéricas».

Quizá por eso aprecian de forma destacada el gesto del rey al recibir a Gabriel García Márquez y a otros intelectuales: puede significar la entrada en el clima enrarecido del poder de la «incontrolable e impredecible realidad, compuesta de distanciamiento crítico, reivindicación de valores por encima de las coyunturas y compromiso con la condición humana». Es lo que suelen representar los intelectuales «que no se resignan a ser funcionarios de los gobiernos o suministradores de coartadas para la prepotencia, la injusticia y la indignidad». Algunas veces, al menos.

Nadie duda ya del significado de *El País* ni de su nivel de influencia en la vida social y política. Pero son pocos quienes saben que en su corazón la figura de Javier Pradera ha ido creciendo como inspirador e ideólogo de las sucesivas tomas de posición del periódico, cada vez más explícitamente afines al socialismo en marcha como instrumento de consolidación democrática. El PSOE no era todavía un gran partido en 1977, pero sigue sin ser en 1979 el partido que la democracia española necesita; si durante varios años *El País* defendió un gobierno de coalición que facilitase la estabilidad democrática y la renovación de instituciones heredadas del franquismo –desde la judicatura hasta la universidad–, tras las elecciones del 1 de marzo de 1979 va a alterar sustancialmente la doctrina, quizá porque también aumenta decididamente la apuesta por la transformación del partido socialista en partido de poder.

Tengo la certeza indemostrable del creciente papel de Pradera durante este año en la fijación de los objetivos, los procedimientos y también las condiciones para que el sueño del poder de la izquierda deje de ser utópico. El contexto es sin embargo profundamente desfavorable: el periódico detecta y condena desde muy temprano la atonía democrática en que vive sumergida la izquierda social a consecuencia de las trastiendas, los acuerdos opacos y las complicidades entre UCD y PSOE durante el año y medio posterior a las elecciones de junio de 1977: es el supuesto consenso dictado por la debilidad socialista. Pero ambos partidos han logrado que el consenso indispensable se convierta en desencanto indeseable: la inhibición creciente de la sociedad ha sido la consecuencia imprevista pero culpable de los acuerdos económicos de la Moncloa y de la misma redacción de la Constitución.

El desencanto cundía como si fuese la otra cara del consenso o su consecuencia nociva. Se había cebado en la izquierda una diabólica neurosis colectiva nacida de la frustración de lo soñado y la decepción ante lo conseguido. Incluso el último día de 1978, con la Constitución aprobada y las elecciones convocadas ya para dos meses después, *El País* trata de reanimar el pulso desmayado de una democracia en construcción: no la hacen las leyes sino la aclimatación moral y política de una sociedad a sus reglas de funcionamiento, y ese es trabajo lento y difícil que requiere la ejemplaridad pública que ahora no aportan los políticos ni sus prácticas oscurantistas. El periódico aspira a conjurar esa desmovilización perceptible con una racionalización del desengaño, en estrategia típicamente praderiana. La Constitución ha sido «un modelo teórico-práctico basado en el consenso», es decir, «en la experiencia de lo posible y el desencanto de lo imposible, o al menos de lo desconocido». Por eso pueden decir de ella como virtud que vive «alejada de doctrinarismos» o «de grandes proclamaciones ideológicas», porque todos tuvieron que ceder y transigir. Pero es precisamente ese «abandono de todo idealismo, de toda apelación entusiasta a la utopía» lo que refuerza el dato objetivo de que ha sido «bastante original e insólito en la historia universal» este «paso de la dictadura» a «un sistema de convivencia auténticamente democrático».

El diario editorializa en numerosas ocasiones contra ese síndrome del desencanto, quizá para contrastar con la abundante salmodia desencantada de tantos colaboradores, de Aranguren a Vidal-Beneyto. Lo grave sin embargo es que primero había ido asociado a una cierta inmadurez democrática, pero ahora el fundamento político empieza a tener consistencia y credibilidad: el desencanto empezará a tener legitimidad política. La apatía ante los enjuagues del juego democrático se fue convirtiendo en 1979 en una imputación directa a casi todo el espectro político, incluidos los socialistas, como responsables activos de la «mansa anarquía» que siguió a las elecciones de junio de 1977. Empleo adrede una expresión que usó Ridruejo para definir el segundo franquismo, porque *El País* detecta demasiados ingredientes del viejo régimen en las

prácticas políticas de 1978 y echa de menos la presencia de un testigo y heredero de la integridad de Ridruejo como faro ético de la política. Serán nada menos que cuatro los editoriales que el periódico dedicará a su memoria en cinco años, en un gesto que nadie más obtuvo y no obtendría después por parte del equipo editorial. La voluntad de fondo es relanzar el entusiasmo mortecino de una izquierda estancada e íntimamente deprimida: la tácita sensación de muchos es la continuidad disfrazada del franquismo en un Parlamento donde los dos partidos mayoritarios acuerdan y esconden acuerdos que degradan la democracia.

Demasiadas veces, sin embargo, los socialistas parecían desconocer las doctrinas elementales de los teóricos de la política y estrangulaban bajo la estructura de partido la posibilidad de debatir y difundir sus diferentes sensibilidades. A 31 de enero de 1979 el editorialista no ocultaba la irritación ante una conducta demasiado pareja al denostado *centralismo democrático*. Parecían ignorar que Robert Michels había teorizado ya «la tendencia de los partidos a constituir cerradas oligarquías en sus puestos de dirección» y quizá por eso el PSOE presentaba «demagógicamente como factibles» los índices internos de democracia, cuando en la práctica anidaban en él «fuerzas corrientes antidemocráticas» o, peor aún, el partido falseaba «descaradamente esa terca realidad negando los hechos y simulando que lo negro es blanco». No era creíble la ultraderecha cuando denunciaba la «partitocracia» y los «politicastos», pero «las prácticas caciquiles» de todos los partidos, incluido el PSOE, «no pueden ser ocultadas o disculpadas con el argumento de que suministran munición al fuego graneado de esos sectores involucionistas».

Sin cirio alguno en la mano pero con un profundo sentido ético de la política, con un pragmatismo racional sin cinismo –un pragmatismo virtuoso–, la crítica contra el PSOE buscaba construir un partido de gobierno y prevenir problemas futuros de credibilidad y solvencia democrática. Hasta este enero de 1979 el PSOE ha demostrado estar poco preparado para ello, mientras cultiva «la prepotencia de los organismos de dirección de los partidos, su tendencia a exportar la libertad de expresión y los hábitos democráticos fuera de su ámbito, la costumbre de señalar la paja en el ojo ajeno y ocultar la viga en el propio». Quizá es casi peor el «irritado reflejo de atribuir las críticas a maniobras de la competencia», pero nada de eso puede disipar ni hacer callar desde el periódico, por conveniencia u oportunismo, «que la designación imperativa de candidatos socialistas» ha optado por «escoger hombres seguros, leales y obedientes, cualesquiera que sean su capacidad e idoneidad para las tareas parlamentarias». Las nefastas consecuencias de semejante método han comportado la exclusión de «quienes reúnen sobradas dotes para ese trabajo», aunque no ofrezcan «las garantías de incondicionalidad y ciega disciplina que los líderes exigen». Este comportamiento, «caso de confirmarse», decía Pradera preventivamente, constituiría «un regalo envenenado al sistema de democracia representativa y una inequívoca muestra de inseguridad de la dirección del PSOE».

El desencanto no era, pues, un síndrome de abstinencia del autoritarismo anterior ni nacía tampoco de la ausencia de radicalismos viables en la escena democrática: el desencanto era fruto de una democracia degradada por los partidos mayoritarios de derecha y, lo que era peor, de izquierda. No había un padre tutelar ausente ni había mono alguno del pasado resistente. Lo grave de veras estaba en la indignancia pública de los políticos de izquierdas, y así habría de seguir si en ellos «prevalece el espíritu de cuerpo, las luchas entre camarillas y el desprecio hacia la opinión en mayor medida de lo que incluso una visión realista y nada angélica de la política puede considerar inevitable». No iba a ser la primera vez que Pradera alertaba contra los tumores aparentemente inofensivos en democracia, pero estamos al principio de todo: ahora eran democráticamente corrosivos y justificadamente desmovilizadores.

El sondeo que el periódico había encargado de cara a las elecciones de 1 de marzo de 1979 les daba la razón. Delimitaba el grosor de esa peligrosa señal de alarma sobre el *pasotismo* –como lo llamaba la calle– o la apatía democrática de un importante porcentaje de población. Demasiados electores iban a practicar una «abstención activa» contra el rodaje imperfecto del nuevo sistema: pensaban «dar la espalda a las urnas y convertirse en mirones de una lucha política que para ellos se ha transformado en espectáculo poco serio». Habría de ser ese un indicio suficiente para que la clase política «abandone la autocomplaciente observación de su ombligo y empiece a plantearse la posibilidad de que ese incoado distanciamiento de los ciudadanos respecto a los partidos, los líderes y las urnas» es en gran medida responsabilidad suya, y no de pasotismo alguno (y el adjetivo *incoado* delata otra vez a Pradera). El desencanto lo es «hacia el sistema representativo y hacia la clase política en su conjunto», en sus enjuagues para preservar el «bipartidismo imperfecto». El desencanto minaba la viabilidad misma de la democracia y sobre todo las condiciones de posibilidad de un cambio real y no solo de régimen. Con desencantados no se ganan unas elecciones ni se cambia un país.

Desde luego «la atonía pre-electoral» favorece a Suárez. Ha aprendido la «estrategia del mariscal Kutusov» y aspira a derrotar a los socialistas con la ayuda del «General Invierno» y una «campana desleída, pasiva y fría». La campana no ha logrado «perforar la coraza de distanciamiento y frialdad ciudadana», ni siquiera «caldear el gélido clima» de indiferencia. Apenas han acudido ciudadanos a los mítines, aunque los «profesionales de la política no puedan aceptar esa realidad desangelada» ni de hecho «siquiera logren percibirla». Pero sus entusiastas sobreactuaciones «se zambullen en ocasiones en la cursilería y en el ridículo» sin la menor capacidad de movilizar ya a nadie: «Las relaciones entre las cúpulas de los partidos [UCD y PSOE] son una curiosa mezcla de rivalidad y colaboración, de lucha por el poder y de proyecto de compartirlo si las circunstancias lo imponen, de insultos públicos y reconciliaciones privadas.»

Ni siquiera funcionará el último cartucho del periódico porque Suárez sabrá protegerse del compromiso en que *El País* quiere meterle, como intentó hacer infructuosamente en las elecciones de 1977. Si Suárez las plantea «en clave presidencialista», está obligado a «un envite del que ya no puede volverse atrás si quiere ser pundonoroso». Está «moral y políticamente obligado a responder afirmativamente al reto que le ha lanzado» Felipe González «para un debate cara a cara en televisión». Pero conviene no ser iluso y precaverse ante la segura negativa de Suárez si hasta ahora, según dicen, ha jugado «con maestría el póker de la vida política», «ha dado pases negros, utilizado el farol en su momento oportuno, tirado las cartas cuando lo aconsejaba la prudencia y aprovechado sus buenas rachas». A Suárez le faltará valor para «igualar un envite por temor a que las cartas del adversario» fueran mejores que las suyas.

La tórrida metáfora del tahúr del Mississippi que Alfonso Guerra usará después flotaba ya en el aire de ese editorial, pero también la inconformidad y la insatisfacción por un funcionamiento democrático que estrangulaba la exigencia ética y política y perpetuaba la sensación de seguir en un sistema antiguo solo remozado. «Los secretos compartidos» entre UCD y PSOE revelan a las claras que la «clase política» ha operado, durante este último año y medio, a espaldas de los electores y de la opinión pública a propósito de algunos importantes temas, no vacilando incluso en simular un reparto de papeles para engañar a los espectadores más ingenuos». Quizá cuando Felipe González recuerda que hasta los desacuerdos los pactaba con Suárez está hablando de este abono para el desencanto.

Tampoco esta vez recomiendan el voto de cara al 1 de marzo porque la obvia inmadurez

democrática española no lo entendería como «expresión de un criterio» sino como «el fruto de un soborno o de una veleidad». Pero alientan todavía un gobierno de coalición: «Ni UCD significa necesariamente el anquilosamiento ni el PSOE obligatoriamente una aventura.» En la práctica, además, el PSOE «ha cargado con todo el peso de una coalición» en su labor parlamentaria y en los Pactos de la Moncloa, «sin haber recibido ninguno de los beneficios» que le hubiera deparado «la experiencia y la responsabilidad de compartir el poder».

Con los resultados del 1 de marzo en la mano, el pronóstico implícito se cumple y la UCD vive con triunfalismo tanto su victoria como el estancamiento del PSOE. Su crecimiento hasta los 121 diputados, desde los 118 de 1977, había sido exiguo y la distancia con la UCD se había mantenido poco menos que idéntica, a pesar de que toda la estrategia electoral se había volcado, según el inquietante documento confidencial que cita Santos Juliá, en «desprestigiar a Suárez», escrito en unas mayúsculas deladoras e infructuosas. Seguía también casi intacta la asimetría entre la relevancia del PCE contra Franco y su marginalidad en democracia (23 diputados y dos millones de votos), pese a un leve incremento gracias a los tres millones de votantes nuevos en la franja de edad de los dieciocho a los veintiuno. Los diez puntos menos de participación con respecto a 1977 tampoco redujeron la cifra de votantes de partidos de izquierda revolucionaria. Volvían a ser en torno a unos setecientos mil ciudadanos, presumiblemente jóvenes e indudablemente asqueados de la pusilanimidad eurocomunista y de la sintonía ucedista consensuada por el PSOE. La dispersión del voto y la ley electoral excluían del Parlamento a una izquierda que estaba viviendo el proceso de consolidación de la democracia como el fracaso integral de sus aspiraciones. Adolfo Suárez seguía obteniendo un respaldo de casi un millón de votos más que los socialistas y sumaba más de seis millones.

En realidad, sin embargo, al PSOE le había ido francamente bien, al menos a la vista de «la inmadurez política, debilidad organizativa, ambigüedad ideológica e incoherencia estratégica de que ha hecho gala desde las anteriores elecciones». Todavía faltaba mucho para que algo parecido al poder de la izquierda fuese algo más que una frase, una ilusión o un ensueño. Los socialistas habían perdido un año y pico en naderías y sin músculo político, atrapados entre el consenso necesario y el desencanto desmoralizador. El resultado de 1979 dejaba el futuro en el tejado socialista y solo dependía de «la dirección del PSOE» la habilidad «para extraer enseñanzas de los errores y para rectificarlos», si aspira a conseguir para la izquierda «la consolidación» que ha conseguido UCD «en el hemisferio derecho del universo político».

Ni era la primera vez que el ataque al partido era directo ni era tampoco la primera que asignaba a Felipe González la responsabilidad de un guirigay estéril y estancado. A lo largo del año anterior había reprobado ya la innecesaria identificación marxista del PSOE en 1976 y a la vez había cuestionado esa noción para la construcción de un partido de poder. Tampoco había sido complaciente *El País* con algunas de sus propuestas o con estrategias que devaluaban los controles de calidad democráticos. Supuraba viejo régimen por todos los costados la reclamación de una especie de central estatal de medios informativos, «monumento de improvisación, en la mejor tradición del arbitramento». De hecho, esa y otras iniciativas, arrojan «serias dudas sobre la capacidad del PSOE» para adecuarse a la etapa democrática y abandonar «las fantasías de perpetuar, en marcos apenas transformados, esa aberración franquista» que no tiene ninguna «democracia pluralista».

Pero casi había sido peor la frívola «espantada» socialista de los debates en torno al título VIII sobre las Autonomías, tanto por discrepancias teóricas como por dificultades para establecer una posición común en el debate territorial. Su vieja tradición «de federalismo teórico y de

centralismo práctico» solo había dejado con vida al socialismo catalán. Y sin embargo parecía «convinciente» la distinción en el anteproyecto «entre los hechos nacionales catalán y vasco, por un lado, y el resto de los proyectos regionales de autonomía, por otro». Son esas prácticas contradictorias e irresponsables las que hacen temer que el acuerdo tácito entre UCD y PSOE «esté dispuesto a pasar implacablemente por encima de cualquier obstáculo sin reparar» en los elementales principios de la democracia pluralista, y entre ellas «el juego limpio con las minorías». Esa suerte de «cama redonda que han organizado en el último año y medio» debe terminar porque acabará conduciendo a la catatonia democrática.

Incluso el PSOE «montó en cólera» sobreactuadísima cuando tanto «*Cuadernos para el Diálogo*, una revista no muy alejada de las posiciones socialistas», como *El País* rompieron el infantil pacto de silencio de la comisión constitucional y decidieron publicar parte del anteproyecto. La intención más probable no era precisamente respaldar los trabajos constitucionales sino forzar hacia la izquierda su redactado, a la vista de la durísima crítica que un equipo de redactores de *El Viejo Topo* publicaba a finales de 1978: entre los firmantes estaba la periodista que había filtrado esos materiales, y hoy directora de *El País*, Sol GallegoDíaz.

Tampoco había la menor inocencia en los análisis sobre las mutaciones que el socialismo europeo estaba viviendo. No era fúnebre el diagnóstico, desde luego, pero sí alentaba a los socialistas a aclimatar la denostada socialdemocracia en el socialismo español, dos meses antes de las elecciones de 1979. Si bien el eurocomunismo empezaba a parecer ya solo una moda política sin credibilidad ideológica ni solidez teórica, el socialismo en Europa se enfrentaba a sus propias y graves dificultades. Predominaba una socialdemocracia dispuesta a sostener los sistemas capitalistas de sus países, como en Inglaterra y en Alemania, quizá porque «es muy difícil ya hacer diferencias entre socialismo y socialdemocracia», como había prescrito recién creado el periódico un rotundo artículo de Jesús Prados Arrarte. La mayoría de los partidos socialistas «han ido alejándose del “socialismo científico” de Marx y de unos principios de nacionalizaciones o de autogestiones que hoy, en general, parecen utópicas», a pesar de que debía saber Pradera que el programa socialista en España todavía incluía e incluiría, con Miguel Boyer al frente, medidas propias del socialismo clásico. También era verdad que en Europa hay socialismos «directa y abiertamente izquierdistas y hasta tocados del viejo penacho revolucionario», como el griego.

Pero lo decisivo es que «esta imagen del socialismo-socialdemocracia» puede hacerlo «menos propicio para las clases no privilegiadas», a la vez que «su escasa diferenciación de los partidos llamados de “centro”» puede quitarle a su vez «una clientela moderada que prefiere definiciones con menos carga histórica adversa», como la que arrostraba el PSOE entonces. Maravall recuerda en torno a esas fechas, quizá un poco después, la falsa inocencia de Pradera preguntándole a bocajarro si eran tantas las diferencias entre un Javier Rupérez de la UCD y un Javier Solana del PSOE. Naturalmente, Maravall enfatizó afirmativamente la respuesta, pero eran evidentes las adaptaciones que había vivido «la línea general del socialismo o de la socialdemocracia europea». Era ya irrenunciable la defensa del Parlamento frente a la revolución, la conversión «de lo que fue partido de clase –obrero– a partido del pueblo –bienestar general», el rechazo de «todo totalitarismo», la «sustitución de la idea de propiedad del Estado por la de control de Estado para la mejor distribución de los bienes», y todo de acuerdo con el sociólogo americano que cita el editorial, Daniel Bell. La última página de un libro de Maravall entonces en marcha, *La política de la transición*, evoca a Leszek Kołakowski y un socialismo democrático que «ni almacena ni vende ninguna de las excitantes mercancías ideológicas» aptas para «una juventud

hambrienta de sueños», tampoco dispone de «la solución final de todas las miserias y desgracias humanas» ni puede «prometer los fuegos artificiales de la revolución final».

A dos meses de las elecciones generales de 1979 aquel editorial parecía una pintura global destinada a rebajar el doctrinarismo teórico del partido socialista. La dirección podía ser la emprendida en Portugal por Mário Soares, «que fue pasando de un socialismo revolucionario a una socialdemocracia posibilista» y «cumpliendo todos estos puntos poco a poco». Ignoro si Pradera redactó la integridad del editorial, pero la toma de posición sobre la socialdemocracia es una invitación a la reflexión autocrítica en el PSOE. Incluso puede ser la forma de verbalizar el respaldo a la «vía democrática hacia el socialismo» de Claudín, todavía capaz de «vencer la resistencia de las clases dominantes», incluido su posible espacio entre las corrientes que viven dentro del PSOE. Desde septiembre de 1976 Claudín se incorpora al consejo de redacción de *Zona Abierta*, junto a Ludolfo Paramio, Paco Fernández Buey y Joaquín Leguina, y ya sin Valeriano Bozal y Alberto Corazón: aspiraba a desarrollar, según la crónica de *El País*, «una línea independiente y crítica que deberá elaborar una tendencia propia sin dejar de ser un foro abierto para los debates de la izquierda».

En enero de 1978 ya había defendido Pradera la necesidad de ser socialista y demócrata a la vez, aunque nadie sepa bien cómo se hace, y «en el sentido que la expresión tenía antes de la guerra del 14: creo que socialismo y democracia son absolutamente indisociables». No era nada optimista sobre su viabilidad, por supuesto, y menos después de cuarenta años de inmersión en una dictadura salvaje y aniquiladora de la confianza en el Estado como instrumento corrector. Pero contra ese lastre y contra casi toda la izquierda, lo estaba haciendo *El País* y me parece que fundamentalmente el teórico del invento era Pradera.

En los primeros programas del PSOE apenas asomaban con claridad los principios socialdemócratas que ahora explica y defiende Pradera y que algunos otros en el partido compartían o podían compartir, entre ellos Joaquín Almunia y José María Maravall. En el papel subsistían los dogmas socialistas, bajo la responsabilidad de Miguel Boyer y su batería de nacionalizaciones. Según el sentido del humor de Maravall, el arco nacionalizador alcanzaba hasta las librerías, el propio Felipe González se había burlado de la posible nacionalización de las mercerías, y esa era entonces la ortodoxia del socialismo, incluidas las demandas retóricas de republicanismo o la presunta defensa del federalismo. Pradera recordaba muchos años después que tanto la bandera tricolor como el grito «Mañana, España, será republicana» habían irrumpido en el congreso socialista de 1976 «contra la voluntad de sus organizadores» –debió estar ahí Pradera, sin duda–, además de la lenta mutación que vivió el rechazo a Juan Carlos a lo largo del año y medio del consenso, que «fue cediendo paso a una recelosa actitud de espera, primero, y otorgamiento condicional de un margen de confianza, después».

Por eso había creído en 1978 en la legitimidad del republicanismo del PSOE, pero también en la inoportunidad política de su defensa. No se trata, dice Pradera, de apostar por una «conversión doctrinaria al monarquismo» porque «sería, sin duda, o una farsa o una desnaturalización de su ideología». Pero tampoco de «una amable y cultivada discusión en la Academia platónica sobre la mejor forma de gobierno, sino de una decisión política» que atañe a un partido al que «solo le separa del Gobierno el trecho que le queda para obtener la mayoría parlamentaria». Cabía suponer, por tanto, y aquí regresaba el Pradera impacientado e irritable, que en los debates constitucionales, «manteniendo sus principios republicanos, no cometerán la ingenuidad visceral de decírselo a todo el mundo, cuando no es ese el problema que está planteado».

No es solo tacticismo, sino el pragmatismo del poder lo que tantas veces opera en Pradera. La

doctrina se sentó sin rebajar la memoria afectiva de la República, pero sin aspirar a su restitución. Abiertamente solo la extrema derecha y la extrema izquierda la reivindicaban, porque era un factor desestabilizador antes que democráticamente aglutinador. Sería un experimento que pondría a prueba el adagio que se inventa para la ocasión según el cual «las fronteras entre lo imposible y lo indeseable no son siempre fáciles de trazar». La modernización, la tolerancia y la reducción de las desigualdades tomaron «en 1931 *forma republicana*». Tras «un largo período en que esas esperanzas fueron pisoteadas y amordazadas, han tomado *forma monárquica*». Por tanto es «compatible la conmemoración histórica del 14 de abril y la aceptación *política* de la monarquía democrática».

Creyó entonces lo que seguía creyendo en 2005, a los treinta años del inicio del reinado de Juan Carlos I. Había sido el «fulcro imprescindible para lograr que un reino de cartón piedra diseñado para prolongar las instituciones de la dictadura franquista desembocase en un sistema político democrático aceptado» por las izquierdas. La defensa del papel de Juan Carlos comparece una y otra vez, a veces cargado justificadamente de valores simbólicos y conciliadores tan poderosos como su visita a la viuda de Azaña, Dolores Rivas Cherif, en México, en el mismo momento en que acababa de sofocarse el «cuartelazo frustrado» de noviembre 1978, la Operación Galaxia. Es el mismo momento en que «los muñidores y publicitarios del golpismo desentierran los más tristes y estremecedores recuerdos de la guerra civil» para «preparar el clima para un nuevo conflicto entre hermanos». El rey hace lo contrario en esa visita, porque con ella «ha sellado simbólicamente la cicatrización definitiva de las viejas marcas de Caín y ha señalado el camino a seguir para que aquel atroz genocidio de 1936 no pueda repetirse». El monarquismo de *El País* nunca se disfraza de antirrepublicanismo, sino de inoportunidad republicana y coyunturalismo político en la España posfranquista. Es posible que la vieja amistad de José Luis Leal con Juan Carlos disipara las dudas que Pradera pudiera albergar sobre la voluntad democratizadora del rey: Leal había sido militante del FLP, pero antes había compartido estudios y amistad con Juan Carlos, recién llegado de Portugal en 1948.

El resultado electoral reforzaba sus argumentos, a pesar de la parálisis muda que acometió al PSOE la noche del 1 de marzo de 1979 (pero al menos nadie se cargó una mesa, como hizo Fraga esa noche, y «allí quedó descuajeringada, anunciando la catástrofe» que el editorial llamó «aparatoso descalabro»). Según Rosa Montero, que cubrió las elecciones en la sede del PSOE en la calle García Morato, hasta las dos de la madrugada seguían las flores en las mesas, pero «lo que iba a ser una fiesta se iba convirtiendo en vela obligatoria y tensa». El día 2 siguió el «absoluto hermetismo» y durante la jornada «fue prácticamente imposible conectar con los dirigentes del PSOE». Fuese el 2, el 3 o el 4 cuando caló la noticia, parecía que el PSOE había tocado techo y ahí se terminaban sus aspiraciones a gobernar. El editorialista de *El País* sabía de primera mano que «resultó duro el despertar del día 2 de marzo», sobre todo a causa «de las defraudadas expectativas de victoria». Suárez había vuelto a ganar, el PSOE se desesperaba y el PCE entraba en una lenta agonía, después de haber dejado de ser leninista desde la primavera de 1978. Por cierto, desde ese 1 de marzo se incorporaba como asesor de publicaciones de Prisa Jesús de la Serna (que acababa de abandonar la dirección de *Informaciones*) y también llegaba formalmente Eduardo Haro Tecglen al periódico para asumir la crítica teatral y abandonaba *La Hoja del Lunes*.

A «una primera reacción de excesivo desaliento» entre los socialistas, sin embargo, le siguieron dos estrategias igualmente equivocadas, escribe Pradera en el editorial. Los «esfuerzos poco convincentes para racionalizar en sentido favorable» el resultado dieron paso a una

intervención «particularmente desafortunada» de Alfonso Guerra, «al inculpar a los propios electores por haber desaprovechado una gran oportunidad histórica de cambiar la vida de este país». Pero los problemas reales del PSOE estaban en otro sitio y eran de un calado menos despedido, más racional y sobre todo más cruel. Aunque todo se confabulaba para suscribir el análisis catastrofista que presumiblemente hizo Felipe González, esa jornada se había saldado solo «con un resultado adverso, pero nada más». Lo repetía *El País* de otro modo a los quince días: de las urnas no salieron «ni desarbolados ni totalmente indemnes».

Lo grave era el mensaje de fondo: «Han sido los propios socialistas los responsables de no haber despertado suficiente confianza» en las «zonas medias y templadas de la sociedad». La clave de la victoria de Suárez no estuvo tanto «en la atracción *positiva* ejercida» por la UCD sino «en la desconfianza *negativa* suscitada por los socialistas». Todavía no se habían ganado la confianza de las clases medias, pero eran ellas las que daban el poder y lo quitaban. Sería equivocado «un enfoque excesivamente ideológico, general y abstracto» del resultado para que «pudiera ser provechoso para los socialistas». Ese debate solo puede partir «de las cosas que son posibles en España y en Europa occidental a corto y medio plazo». Si no se logra la «aceptación por un sector relativamente mayoritario de los ciudadanos, el PSOE iniciará una acelerada decadencia. No es viable jugar a todos los paños», que es otra variación de la misma ley que había aplicado Pradera al análisis del PCE: no podía ser a la vez partido de oposición y partido de gobierno.

La «baza de inapreciable valor para el PSOE» que significa Felipe González puede no ser nada «si permite que en torno a su figura, la más notable revelación política del posfranquismo, se fragüe una *empresa* paralela a la que rodea al señor Suárez». Empezaba una batalla que duraría casi todo el tiempo en el que los socialistas gobernarán. Y la batalla es simple: «También los dirigentes se equivocan.» De acuerdo con la acreditada experiencia del editorialista, «las bases comunistas no son las únicas en quejarse de las prácticas del “centralismo democrático” de una dirección inamovible y autopropetuada». Nadie debe desechar o menospreciar, y menos que nadie Felipe, «las críticas de los militantes del PSOE contra los métodos burocráticos y la ausencia de representación en el grupo dirigente de corrientes importantes» dentro del partido.

La perpetuación ucedista en el Gobierno «para toda la próxima generación» será una realidad si el secretario general del PSOE «cierra los conductos para la movilidad vertical y la crítica desde la base, si niega al pluralismo de su organización posibilidades de manifestarse y de estar representado en la dirección». Será el PSOE «una maquinaria inservible» si olvida esos recados editoriales porque «la política no debe ser nunca prisionera de las amistades y compromisos personales», en alusiones flotantes fáciles de descifrar. En todo caso, es Felipe González en persona quien «tiene en sus manos la posibilidad histórica de la construcción de un partido socialista potente y moderno». Sin él «sería impensable una democratización racional de nuestro Estado a corto plazo». Pero el plazo en que piensa Pradera son los próximos cuatro años, y si en ellos «los socialistas no son capaces de construir una oposición fuerte y responsable, la izquierda no ganará tampoco» las elecciones previstas para 1983.

El horizonte se abre a eventuales cambios, de modo que «forzosamente tendrá que abandonar» a otros partidos a su izquierda «los proyectos y las causas que quizá serán realizables a lo largo del siglo XXI, pero que no lo son ni hoy ni mañana». El regreso socialista al siglo XIX sería todavía peor, y podría estar encarnado en el «estéril debate sobre cuestiones que ni siquiera pueden bautizarse como ideológicas»: alude a ese fantasma del marxismo identitario que había

aparecido ya en la primavera de 1978, reaparecía ahora tras el resultado electoral y sería el McGuffin engañoso de los dos congresos que viviría el PSOE en mayo y en septiembre de 1979.

Por supuesto que habría una «profunda conmoción» si desaparecía el marxismo de la definición del partido, como había propuesto Felipe González en abril de 1978, además de los seguros «rechazos airados» entre su militancia. Pero tanto Carrillo, con la supresión del leninismo, como González con la supresión del marxismo «saben que esa renuncia es la condición *sine qua non* para su crecimiento electoral». Asegura el editorial delatoramente que «el señor González prefiere sin duda arrostrar las iras de una parte de sus 200.000 militantes antes de perder la oportunidad de incorporar nuevos votos» a los que ya tiene (cinco millones), «la mayoría de los cuales, presumiblemente, no significaban adhesión alguna al marxismo».

Dejar dormido el asunto o abstraerse de él no había ayudado al crecimiento socialista en 1979, entre otras cosas porque el PSOE «reencarnado» hacía apenas seis años, en 1972, había atraído a «una militancia más irrespetuosa, menos fideísta y no encuadrada por el sólido aparato» característico de los comunistas. Las «furibundas reacciones» del globo sonda que González había lanzado sin previo aviso y por su cuenta desde Barcelona en la primavera de 1978 podían hacer prever fuertes complicaciones para lograr que esa «revolución terminológica» en el partido cuajase en el congreso de mayo de 1979. Había sido un error definir al partido como marxista en el congreso de finales de 1976, apenas un año después de la muerte de Franco, aunque por entonces, sin la menor práctica democrática, todos eran francamente revolucionarios y por descontado también marxistas.

Pradera había sentado doctrina al hilo de las declaraciones de Barcelona y a un año de los congresos de la desmarxistización del PSOE. En ese debate se solapaban dos errores: tenía apariencia de discusión ideológica cuando en realidad era una cuestión política, y no parecía aconsejable tampoco que el PSOE redujese al marxismo «el suministro teórico exclusivo del proyecto político socialista», como si sus programas estuviesen deducidos «de un arquetipo platónico inscrito en las páginas de *El capital*». El debate apenas se había abierto, y sin embargo la gravedad latente y simbólica del problema era ya inocultable para una militancia y una clase intelectual intensamente socializada en ese discurso. Lo que estaba en riesgo era que el falso debate –marxismo sí, marxismo no– acabase cayendo del lado de una especie singularmente despreciada por Pradera, «los semicultos», aquellos que han leído mucho pero piensan poco. Y es por ahí por donde reaparece con sus fobias particulares, esta vez compartida con Marx, que «no en vano», decía, «siempre mostró una intolerancia especial hacia los semicultos y hacia los parlanchines radicales». Por eso «escribió en una ocasión que se negaba a escribir recetas de cocina para los figones del porvenir. Algunos, sin embargo, se están comiendo los platos». Era una alusión temprana y envenenada que llevaba el nombre de Pablo Castellano, uno de los militantes más visiblemente partidarios de mantener la identificación marxista del PSOE y uno de los contendientes del congreso de mayo.

Muchos años después, en un artículo de abril de 1990, Pradera explicó retrospectivamente que parte de la Transición fue deudora del miedo a cometer los errores de la República. Las condiciones eran muy diferentes pero a la vez raramente simétricas: para nadie era una posibilidad inimaginable que el experimento de la transición posfranquista volviese a terminar con un golpe de Estado frustrado y el consiguiente estallido de una guerra civil cuarenta años después de la anterior. Es verdad que en la España del siglo XXI suena a fantasía *gore* o a contrafáctico hiperficticio, pero entonces esa hipótesis era vivida como amenaza intensa y real. Por eso explicaba Pradera que «la transición republicana sirvió de modelo negativo a los actores

de la transición posfranquista»: ese modelo limitaba los ritmos de cambio, justificaba el consenso, invitaba a la moderación y conspiraba en favor de aceptar una transición políticamente pilotada y administrada por los políticos que procedían de familias del régimen anterior, desde las tibiamente críticas hasta las apaciblemente *surferas*. Por eso el «proceso quedó condicionado – para bien y para mal– por la percepción de los errores, de las omisiones y de los excesos del período transcurrido entre 1931 y 1936».

No me cabe duda de que Pradera apelaba aquí a la experiencia propia y sin desmentir su complicidad con el *tempo* de la cautela. Sin embargo, también es verdad que hubo un punto de inflexión tras el resultado de las elecciones de marzo de 1979. La constitución del nuevo Gobierno de Suárez, las maniobras del presidente del Congreso, el uso y abuso de los resortes del poder, la parálisis de una oposición inocua y la renuncia al ejercicio de una oposición potente y respetable activaron a un antiguo Pradera.

EN EL LADO SALVAJE

Pero para eso necesitaba salir de la caja negra de *El País* y hablar con su propia voz, sin máscara y sin antifaz. Lo hizo pasado un mes de las elecciones, el mismo día 30 de marzo de 1979 que el editorial del periódico reprobaba con dureza el procedimiento de investidura de Suárez: lo llamaban acremente «investidura bajo palio», porque hurtaba al Parlamento la posibilidad de debatir el programa de gobierno del candidato y solo el presidente podría replicar las intervenciones de la oposición.

La acritud del editorial es apenas agridulce enfrentada al ácido corrosivo e indisimulable del artículo firmado por Pradera en el mismo periódico y que obviamente era inviable e inaceptable como editorial. «La más absoluta miseria» no podía preludiar desde el título más que una anatomía de la oceánica pobreza de la política española tras las elecciones de 1 de marzo. Por eso firmó con su nombre una carta de batalla que perdía toda contención y anunciaba un cambio de actitud tanto de él como del periódico en relación con los socialistas durante la próxima legislatura. Articulaba allí una auténtica llamada al arma para acabar con las obscenas camas redondas, con los pactos ocultos, con las connivencias escenificadas como falsos desencuentros.

No afectaba únicamente a la UCD, sino al sistema mismo y a su responsabilidad en la fabricación del desencanto como frívola consecuencia del bipartidismo: habían usufructuado el consenso contra los intereses tanto del país como de la propia izquierda. Fue probablemente el primer aldabonazo concebido por Javier Pradera en modo orteguiano y escrito contra la autocompasiva frustración socialista, cuando todavía Felipe González no había leído en abril de 1979 su informe (positivo) de gestión al comité federal y cuando quedaba todavía mes y medio para el congreso de mayo. Por supuesto, «la más absoluta miseria» era una cita encubierta de Marx, «de Groucho Marx, se entiende», para subrayar que «hemos pasado de una discreta pobreza a la más absoluta miseria» en el comienzo de la primera legislatura de la España constitucional, «triste, sórdido y cobarde comienzo».

Pradera abría la veda formalmente contra Suárez para condenar sin matices «este largo, interminable y vergonzoso mes en el que la democracia ha retrocedido más de lo que había avanzado en año y medio». Sus maniobras para eludir el debate sobre su programa en el acto de investidura demuestran que los «cocineros de UCD han aprendido casi todas sus recetas en el viejo fogón, solo a medias apagado, del anterior régimen», con argumentos «entre leguleyos y

sacristaniles» para una medida «húmeda de miedo». También el ministro Martín Villa había dado muestras de su «caldo de cabeza» y confundía «el texto constitucional con el Código Penal» o incluso «a los miembros del parlamento con los alumnos de un colegio o los acampados en un hogar del Frente de Juventudes», incluidos «algunos disparatados y pintorescos comentarios» sobre la «obligación de los diputados de Herri Batasuna de no ser independendistas». En televisión sigue «la misma línea de servilismo hacia el poder» y no cede tampoco el «irresistible ascenso de los miembros de la ANCP [Asociación Nacional Católica de Propagandistas] por las escaleras del poder», aunque los teléfonos sigan «siendo los vehículos de las órdenes dictadas ahora desde la Moncloa, como antes lo eran desde El Pardo». Incluso «la remodelación del Gobierno reproduce, con listas y quinielas, el pesado y sofocante clima de las crisis franquistas», con el «bochornoso espectáculo» de un Suárez candidato «refugiado en el burladero mientras el público le abronca para que se lance al ruedo y suenan “los clarines del miedo”».

No es otro más que Suárez «el principal responsable de esta espantada en su alternativa, que demuestra que el novillero apto para despachar la etapa de transición está verde para lidiar el cuatreño de una vida parlamentaria democrática». De Suárez queda tan poca credibilidad viva que «se diría que de su experiencia en el anterior régimen no ha olvidado nada que tenga que ver con la manipulación, la intriga y el gusto por el poder incontrolado», sin «el pundonor necesario para vencer el miedo a un libre debate parlamentario». Transcurrido un mes de las elecciones, solo queda esperar «que su involución hacia las prácticas del pasado se detenga más acá del punto en que haría peligrar también la supervivencia del régimen constitucional».

La inaudita crudeza del análisis es solo el preámbulo para una suerte en que se las tiene con todos un Pradera asqueado, sarcástico y faltón. Embiste con su propio nombre por delante contra «los democristianos que hicieron sus castos pinitos de oposición cuando Franco estaba expirando», o contra aquellos «jóvenes ambiciosos cuya presunta «intachable trayectoria democrática» se reduce, al ser examinada en frío, a no haber aceptado cargos menores del anterior régimen para aumentar sus posibilidades de ocupar otros más elevados en el posfranquismo». ¿Y qué hay de la presunta izquierda en UCD, que seguramente vale por el socialdemócrata Francisco Fernández Ordóñez? Si existe, su destino «es parecido al del hombre invisible de H. G. Wells: escuchamos sus cautas voces en pasillos oscuros y cenas recoletas, pero solo descubriremos su existencia corporal cuando el cese haga que su sangre salpique las moquetas de la Moncloa». Por su parte, en el PCE acaban de despertar del dulce sueño y han descubierto por fin, «atónitos, que UCD es un partido de derechas y que el señor Suárez les ha engañado». Y sin embargo todavía confían en Santiago Carrillo y que «los lineales y toscos argumentos de su secretario general logren el milagro de transmutar, de nuevo, al partido del Gobierno en una formación tan, o más, de izquierdas que los socialistas».

¿Y los socialistas, por cierto? Todavía sigue el PSOE en estado de shock sin «reponerse de la resaca que le produjo la borrachera de sus expectativas de triunfo electoral y de Gobierno de coalición». Su falta de táctica y de estrategia significan la dilapidación criminal de 121 diputados en escaramuzas irrelevantes. Incapaz de entender lo que pasa, la minoría socialista sigue «estudiando en un mapa viejo una imposible ofensiva o durmiendo confiada en las promesas recibidas». Mientras los socialistas tratan de «darle batalla en un terreno inadecuado», Suárez activa «una de esas operaciones relámpago –como los pactos de la Moncloa, como la disolución de las Cortes, como la postergación de las municipales» que dejan fuera de juego a «la poderosa minoría socialista» con una frase que destila la amargura exasperada de lo inútil: «Nunca tantos hombres han sido utilizados para tan poco.»

Se acabó la tregua, se acabó el primer trago amargo de la Transición y empieza la batalla para que el cambio de régimen sea por fin un cambio de país. El banderín de enganche lleva su firma, como la llevaban también, aunque fuese solo con la inicial de su nombre, las notas de una noche de mayo de hace dieciséis años: unas eran privadas y teóricamente de circulación restringida; las notas de hoy circulan en el periódico más influyente del momento. Es el mismo Pradera resolutivo, sublevado e intransigente ante un panorama bloqueado, estéril e inútilmente desgastante. Las notas de 1960 son el precedente más vigoroso de este gesto de autoridad de hoy y de su condena global de una democracia timorata y sin coraje.

10. VOLVER A EMPEZAR

OTRAS TORMENTAS DOMÉSTICAS

La vida arrebatada de aquellos años no fue solo suya, ni lo fue tampoco una cierta anarquía flotante y contracultural en los gestos, los símbolos, los iconos y el nuevo guardarropa: la argamasa de represiones liberadas y posibilidades imprevisibles se tradujo en tensiones internas y externas. La aceleración histórica y la violencia en la calle –manifestantes asesinados, detenciones incesantes, suspensiones de revistas y editoriales, acciones de sangre del terrorismo ultra y del terrorismo etarra– fueron también íntimas y domésticas para buena parte de unas clases medias y una burguesía ilustrada que vivían el final de un ciclo fúnebre con explosividad e inexperiencia, con ansiedad y prisa. El aprendizaje de la libertad tuvo mucho de experimentación vital con prácticas sociales anticanónicas y aroma subversivo; su banda sonora animaba a romper barreras, cantar la libertad, ejercer la nueva vida en un nuevo mundo. Las calles y las casas se llenaron de zamarras, trenkas y bandoleras, de densas patillas y flequillos abundantes, barba casi penitencial, bisutería étnica y largas túnicas con cabelleras sueltas, a pesar de que el emocionante cuadro *El abrazo*, de Juan Genovés (1976), solo incluye a una mujer con zapato de medio tacón y falda a la altura de las rodillas, casi plisada.

A Pradera y a muchos otros la vida les metió en un carrusel de excitación, aceleración e impulsividad liberadora, aunque estuviesen jugando con fuego, tanto en casa como fuera de casa. La tensión histórica en los equipos políticos, periodísticos e intelectuales fue tan real como reales fueron las agitaciones íntimas de aquellas vidas sometidas a turbulencias fundacionales. Tanto él como los demás tuvieron la cabeza en demasiados sitios a la vez en esos años. A veces, como en su caso, con hijos que crecían en forma un tanto solitaria, anárquica o asilvestrada, mientras nuevas relaciones amorosas y sexuales se sucedían o se solapaban en medio del intenso tráfico ideológico y carnal que ofrecía el descubrimiento de las relaciones abiertas, la promiscuidad virtuosa, el repudio a las sofocantes convenciones burguesas, la desconfianza hacia la familia como institución, la tentación de las relaciones inocuas y tonificantes que prometía el amor libre.

La ruptura de Sánchez Ferlosio y Martín Gaité, privada primero y pública desde 1970, había de distanciar a Pradera de buena parte de lo que había sido su clan familiar: él se quedó con Ferlosio y abandonó progresivamente el trato, la relación y el contacto con Carmen y su hermana Ana, a pesar de tantas veladas juntos y tanta vida sentimental compartida desde los años cincuenta. El hermetismo afectivo de Pradera o incluso su propensión autista se activaron entonces como instrumento de tránsito hacia otros clanes, otras relaciones: *no personal remarks* es una expresión asidua que varios amigos evocan para explicar la inviolabilidad de una intimidad autosuficiente incluso en el dolor, impotente para explorar soluciones a los conflictos o de antemano rendida a la imposibilidad de resolverlos.

Entre los nuevos experimentos estaban también la liberación de las ataduras del matrimonio y el feminismo como nueva bandera colectiva. La contracepción regulada tuvo mucho de trampolín y coartada para ensayar una contraeducación que expulsase de los nuevos domicilios la represión, la disciplina y la murga celestial de las buenas costumbres, las pedidas de mano y las puestas de largo, la demonización de la sexualidad. Pero seguían siendo todos hombres y mujeres cargados

de complejos, con mochilas emocionales saturadas de represiones y conflictos insolubles. Freud y el psicoanálisis habían dado lenguaje y presuntas herramientas para conjurar las neurosis o al menos convalidar las angustias de la culpa. Casi nadie había dejado de leer este o aquel tratado de psiquiatría más o menos recreativa para tratar de ser más felices de lo que habían sido bajo una moral católica corrupta y corruptora, además de culpabilizadora.

Había que vivir lo no vivido y hacerlo cuanto antes para reconciliar los deseos y las frustraciones, para controlar los atisbos de desánimo y depresión que la realidad imponía sin remedio. La lucha contra la alienación (cualquier alienación) fue el pan de cada día y la autorrealización, la meta de toda persona liberada; no era solo cosa de los marxistas sino de la alianza entre marxismo y psicoanálisis con el gurú filosófico y académicamente respetable Herbert Marcuse, como si de veras la tríada heroica del tiempo fuese ya para muchos Marx, Mao y Marcuse, mientras en las manifestaciones y los mítines se reclamaba la amnistía, la libertad y el estatuto de autonomía, tanto en Cataluña y el País Vasco como fuera de ellas.

La relación de Pradera con Neus Espresate fue consolidándose mientras las rupturas y reconciliaciones se sucedían con Gabriela hasta que un error de agenda, en abril de 1977, dejó al descubierto un desajuste de fechas y la prolongación de un viaje de Javier a Acapulco más allá del congreso profesional al que había acudido. «Gabriela está muy mal» el domingo de Resurrección, anota su amiga Carmen Martín Gaité en un diario que confeccionó y le regaló la misma Gabriela seis meses atrás; «me pidió refugio pero luego no vino», porque desaparecerá durante muchos días, ilocalizable para ella y para el mismo Javier. Hasta cinco días después Gabriela no contacta con otro amigo de intimidades, Jesús Aguirre, e inicia entonces un viaje a Marruecos, quizá porque ya nada va a tener remedio para la pareja. Tras ver a Javier en una cena esos días, Martín Gaité ve cada vez «más claramente que las pasiones son irracionales» y «no se pueden enjuiciar». Gabriela no vuelve de su viaje hasta el 28 de abril, pero Carmiña la siente «distante», sin calor y sin encontrar en ella refugio a su propia depresión y sus dolores de amor por Carlos Semprún (como anota en sus agendas personales de 1977). Julio trampea mal que bien entre la dedicación a la librería La Tarántula –que había fundado con Isabel Pérez, la mujer de Clemente Auger– y encuentros esporádicos o forzados –como la comida en familia en casa de la madre de Gabriela, Liliana, con los hijos y yernos, Rafael y Javier incluidos–. Pero parece que cuadre para las dos, Gabriela y Carmen, lo que anota para sí misma Martín Gaité, con «la alegría de vivir desterrada, amaestrada: se le ha puesto un bozal al clamor anárquico de la vida», aunque vaya a ser ese cruel combustible el que hará carburar su gran novela *El cuarto de atrás*.

Dejaron de tener gracia la promiscuidad y las relaciones abiertas que la misma Gabriela había propiciado, y entró desde entonces en una espiral de depresión, alcohol y desolación. Gabriela anda «muy triste y obsesionada» a 9 de noviembre, y apenas una semana después Carmiña pasa «todo el día con el alma en un hilo» porque «Gabriela ha estado gravísima» y sigue todavía en coma, mientras ella entrega a *Diario 16* su reseña de *Autobiografía de Federico Sánchez*. Gabriela bracea contra su intento de suicidio ingresada en La Paz hasta que sale el 22 de noviembre. Contenta de estar viva, anota Martín Gaité, está de vuelta en La Tarántula dos días después, aunque Chicho entra entonces en zona de peligro y hay sanedrín familiar en casa de Liliana para hablar de su futuro. Tampoco Martín Gaité puede con su alma, «con tanta y tan densa tristeza», mientras recupera el oído con un sonotone redentor, confía en encontrar «un nuevo amor» y Gabriela se va de viaje a Manila: «No entiendo que la gente necesite moverse tanto.»

Lo que entonces empezó también fue un largo rastro de rencor en Pradera, ausente o apenas presente en casa pero, en todo caso, irritable y sarcástico, impotentemente sarcástico ante el

declive personal y el desequilibrio en que caía Gabriela, siempre más pendiente y dependiente de Pradera que al revés. Regresaba lo que seguiría siendo ley íntima de Pradera para los conflictos y las relaciones personales con graves divergencias: el silencio, la incomunicación, la inhibición como estrategia defensiva. Eludía la exasperación de girar y girar en una noria, como si su escepticismo tendiese a bloquear la búsqueda de salidas para conflictos precisamente sin salida. Ni la comunicación con sus hijos adolescentes había sido fluida ni lo fue entonces con Gabriela ni, según numerosos amigos, lo fue tampoco con otros en el ámbito íntimo: el hermetismo a medias dictado por la soberbia y a medias por la impotencia conducía indefectiblemente a explosiones de cólera sin llegar a afrontar de cara problemas afectivos. El blindaje aparente e imperturbable era solo la máscara que disponía la determinación racional de dejar pudrir reveses y conflictos para los que carecía de solución: una forma del egotismo y del miedo. Ahí latía una parte de la bestia, la más irritable y la más temible, dispuesta a usar su armamento intelectual y cultural, pero también su veneno moral y su agresividad emocional en discusiones intimidatorias y peleas, a veces sin límite para la humillación deportiva y sarcástica, a pesar de las evidentes secuelas dañinas y a pesar del dolor que infligía a quienes se sentían burlados o despreciados.

El uso feroz e indiscriminado del sarcasmo podía sacar lo peor de Pradera de la misma manera que la conciencia de culpa podía aparecer después, con cualquier pretexto menor pero suficiente para conceder una rectificación indirecta o disfrazada. Casi todos los amigos conservan el recuerdo de una de esas palinodias tardías y discretas tras un desacuerdo acre. El amor propio mezclado con la poderosa inteligencia y una soberbia a veces satánica podían engendrar un cóctel destructivo, quizá tanto como autodestructivo. La pasión del trabajo fue muchas veces el refugio ficticio contra problemas que pedían tanta obstinada paciencia y tal esfuerzo de empatía con el otro —con sus debilidades, sus flaquezas, sus bobadas o sus inconsistencias— que la respuesta habitual de Pradera acababa siendo la renuncia fatalista: mejor sin *personal remarks*. Un psicoanálisis de baratillo conjeturaría un blindaje interior contra la culpa y la responsabilidad; también posiblemente diagnosticaría en la hosquedad y la cólera una expresión de inseguridad y, sobre todo, de fuga patológica ante situaciones emocionales incontrolables. La racionalidad militar y jurídica de Pradera excluía el ámbito de las emociones y caricaturizaba cuanto podía los presuntos diagnósticos y remedios de analistas y psicólogos, aunque pudiera recomendarlos a otros como parte de la liturgia moderna de la progresía culta de aquellos años.

A sus dos hijos el entorno ferlosiano los había incluido sin reservas por familia pero sobre todo porque había una figura cuya excepcionalidad personal y biográfica imantaba a los muchachos: Chicho. Tuvo algo de icono de la rebeldía juvenil y militantemente de izquierda revolucionaria, poco menos que ídolo privado tanto de Máximo como de Alejandro. A pesar de la inquietante rotundidad romana de sus nombres de pila, no tienen otro origen que la memoria de un abuelo (Alejandro Gortázar) y un tío (Máximo Sánchez Ferlosio, *Mino*). La ruptura de la pareja, sin embargo, llevó a la ruptura también de Pradera con ese entorno que había sido suyo. Los enfrentamientos con Gabriela se sucedieron a la vista de los hijos, tampoco entre ellos precisamente en las mejores relaciones, con una incomunicación obstinada que no encontró mediación instrumental ni en la madre ni en el padre, enrolado él en una aventura política y cultural absorbente y con tantas localizaciones que apenas se le veía por casa pese a sus esfuerzos ocasionales, testimoniales, dictados por la mala conciencia, de incentivar torpemente el contacto con sus hijos. Gabriela había montado La Tarántula en los setenta, librería roja con trastienda junto a los lavabos para los libros clandestinos y empleados tan rojos como Rafael Chirbes. El miedo al efecto espejo o a la imitación vetó durante un tiempo el nombre de Gabriela tras la

separación y también Chicho dejó de ser el joven simpático, cantautor, bohemio, atrabiliario y anarcoide que retrataba Fernando Trueba en su película para convertirse en ejemplo indeseable, caótico, dependiente y dañino. Crecieron los muchachos con silencios, problemas, adicciones y traumas, aunque no tan destructivos como los de sus amigos Marta Sánchez Martín, Carlos Castilla Plaza, o incluso el propio Chicho.

Las vacaciones de Pradera con Neus Espresate en Londres, hacia 1978 o 1979, compartidas con los hijos aunque en residencias distintas, fueron el punto de inflexión para que Gabriela determinase que Máximo y Alejandro vivieran desde entonces con él, aunque la relación con Espresate se prolongó ya poco tiempo. Pradera vivía desde el otoño de 1977 en un apartamento de la calle Condesa de Venadito, 22, y allí, y poco después unos números más allá, convivirían Javier y los hijos adolescentes con la resignada conformidad de su padre. No parece probable que el atolladero general de su vida profesional incluyese largas y complicadas conversaciones con jóvenes atrapados entre las cuerdas de neurosis modernas, con un padre modernísimo e implicado en casi todas las conspiraciones político-literarias en marcha, o fabricándolas. Quizá hacia 1980, un viaje de Pradera a México determinó el final de su relación con Espresate, con destrozos interiores graves y un desmoronamiento en toda regla, al menos de Pradera. Al parecer, según ella, Javier estaba ya demasiado cerca del lado oscuro de la política burguesa, que es lo mismo que debía sentir entonces su cómplice español Herralde en Anagrama: los enjuagues de la transición de la dictadura a la democracia llevaban dentro demasiadas decepciones y un sentimiento general de fracaso revolucionario, sin asomo de ruptura utópica y con obscenas pervivencias franquistas. No oculta hoy Herralde que eso le sucedió a él —«me pareció fatal», se entiende que la Transición—, y es lo que sentían también «casi todos mis amigos», posiblemente también Neus Espresate en México. Tampoco Neus ni Javier quisieron cambiar sus respectivos lugares de residencia, y él siguió en Madrid y ella en México.

Posiblemente entonces había empezado de forma más o menos intermitente la relación con Natalia Rodríguez-Salmones, separada de Carlos Moya y madre de Chino en 1976. Antes de su muerte cuatro años atrás, el padre de Natalia les había regalado a sus tres hijas un piso a cada una en la calle Apolonio Morales, y allí empezaría a dormir Javier algunos domingos hasta instalarse de forma permanente a principios de los ochenta, cuando Chino aún no tenía los diez años. Se entendía bien con ese grandullón que reservaba para la noche de Reyes, primero en Condesa de Venadito y después en Apolonio Morales, un bombazo importante, de los que hacen temblar el misterio. Así le fue llegando a Chino primero un reproductor de VHS, después el primer ordenador personal que entró en aquella casa o incluso unas espectaculares deportivas traídas de este o aquel viaje de Javier a Estados Unidos.

Hacia 1982 Máximo Pradera empezaba su propia carrera en Prisa con Radio El País, enseguida convertida en fuente de primicias y solvencia informativa, cuando había sido ya miembro del grupo Atrium Musicae y había dejado atrás una adolescencia ausente y hermética, obstinadamente entregada a la guitarra y la interpretación hipnotizante y anfetamínica de *Juegos prohibidos*, de Narciso Yepes, como recordaría su padre durante muchos años. De forma escalonada fue dejando Javier el apartamento que compartía con sus hijos en régimen casi de hospedaje o con escasa sociabilidad doméstica. Hacia esos años ochenta, Gabriela Sánchez Ferlosio dedicó mucho tiempo a la traducción de literatura juvenil, pero también a los ensayos de Italo Calvino y otros autores italianos para la editorial Anagrama, como Federico Fellini y su *Giulietta*, o los relatos de Gianni Celati, antes de que a mediados de los noventa su declive personal se agravase. Murió sin relación apenas con Javier Pradera años después, en 2008.

Pradera no estuvo dotado para el intercambio y la gestión de información sensible o íntima, ni antes ni después de la ruptura de su matrimonio, y no lo estuvo tampoco con sus hijos. La adolescencia de Chino tampoco iba a ser el mejor laboratorio de paternidad, ya cuando las complicaciones del poder socialista en los noventa parecían mandar avisos fúnebres o al menos inquietantes y Chino emprendía su propia ruta de rebeldía intrafamiliar e ideológica. Quizá con nadie estuvo Pradera dispuesto para la comunicación más íntima, casi siempre acorazado ante la sustancia viscosa de las emociones, blindado contra sí mismo y a menudo incapaz de aplicar la misma cerebral autopsia que lo hizo grande a los agravios, a los rencores enquistados o a las marrullerías emocionales que nos hacemos a menudo a oscuras.

CUESTIONES MARXISTAS

La agenda de 1979 será también trepidante y Pradera, de nuevo desde el anonimato del más poderoso medio escrito entonces, asumirá un liderazgo efectivo para convertir al partido socialista en alternativa de poder. El primer paso será acabar con «la cama redonda en la que han dormido durante año y medio» UCD y PSOE para que los socialistas «se decidan a asumir sus verdaderos papeles y a interpretarlos». En esas fechas José María Maravall habrá sido ya interpelado por Felipe González —«Josemari, ¿no iría siendo hora ya de regresar?»—, se entiende que de Oxford— y es posible también que Maravall y Pradera asistiesen a una conferencia convincente de González sobre temas económicos que Maravall no ha olvidado. Pero ¿dónde había aprendido todo eso que contaba sobre economía y equilibrios sociales, se preguntaban ambos? Sabían que había estado con John Kenneth Galbraith, pero solo una semana. Incluso para alguien a quien todos apodaban *la Esponja* era sorprendente la rapidez de maduración. En *El País* repiten que es sin duda la figura política más prometedora del posfranquismo, pero será el mismo periódico quien describa las condiciones objetivas que pueden consolidarlo como líder socialista y al PSOE como partido mayoritario en las elecciones de 1983. Ese es el horizonte que culminará el camino hacia el poder, sin que nadie prevea ni en 1979 ni en 1980 el adelanto electoral que propiciará la acelerada descomposición de UCD y el intento frustrado de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

De lo que no hay duda es de que Pradera «tomaba nota de todo» en los días de mayo en que el PSOE celebraba su congreso, según recuerda Maravall. Había empezado por su cuenta el trabajo de zapa para que la opción socialista dejase de ser partido de oposición y empezase a ser auténtico partido de gobierno. El tránsito desde el socialismo hacia la socialdemocracia se materializó, formalmente, en la pugna que vivió el PSOE en este congreso en torno a su definición ideológica como «partido de clase, y por tanto de masas, marxista y democrático». La mayoría de la militancia socialista fue indefectiblemente partidaria de mantener esa definición, aunque apenas databa de dos años atrás. Pradera creía que había sido un error incurrir en 1976 «en la tentación escolástica de autodefinirse filosóficamente». El intento de rectificar ese error, año y medio después, por parte de su mejor cartel electoral y líder indiscutido condujo a su renuncia como secretario general en el congreso de mayo y al aplazamiento a un congreso extraordinario de la elección de la nueva ejecutiva (y del nuevo secretario general). *El País* reproducía el discurso de Felipe González el 22 de mayo tras su dimisión, cuando ya solo era un «militante» que reflexionaba «muy seriamente las cosas» y nunca había «sido un junco que mueve el viento en la dirección que sopla». Pese a tener la victoria asegurada, había renunciado a la reelección como

secretario general por disconformidad con la definición marxista del partido aprobada por la mayoría. No lideraría un proyecto en el que no creía porque su militancia había estado guiada «por razones de moral o de ética socialista, y nunca por razones de carácter político que pudieran separarse de esa ética socialista».

En desacuerdo con la militancia y con la ponencia defendida por Pablo Castellano, Luis Gómez Llorente, Francisco Bustelo y otros históricos de Suresnes y de antes de Suresnes, confesaba haber sufrido «una herida profunda, pero ya está cicatrizada». Mientras unos habían clamado por el «socialismo» como «la línea clásica del PSOE», González había sucumbido al «intento de socialdemocratización» del partido, en palabras de Gómez Llorente publicadas en *El País*. La elección de la ejecutiva y del secretario general quedaba suspendida hasta septiembre, cuando habían sido muy pocos quienes estuvieron a favor de renunciar al marxismo. Joaquín Prieto asigna en 1996 a Joaquín Almunia la valentía de haber salido «a la palestra para defender tesis más moderadas» y contra «la rotunda reafirmación marxista» de Bustelo, pero «resultó arrollado por el ambiente enfervorizadamente izquierdista» el 19 de mayo. Reveladoramente, en declaraciones a María Antonia Iglesias años después, González conjeturó que el propio Guerra pudo estar más convencido de mantener la definición marxista de lo que parecería después.

La contribución personal de Pradera en este punto pudo ser decisiva en el plano personal, con los contactos en la ejecutiva socialista, desde Enrique Múgica, José María Maravall y Joaquín Almunia hasta el mismo Felipe González, pero sobre todo en el énfasis y la doctrina diseminada en un puñado de editoriales que no llevan su firma pero casi. De hecho, parecen concebidos como guiones, memoranda o incluso cartas públicas a Felipe González para ratificarle en la convicción expresada en abril de 1978: el PSOE debía abandonar su definición marxista. Las declaraciones de Felipe no habían sido «tanto un pronunciamiento teórico como una propuesta política», escribió Pradera, y su sentido profundo se dirimía no en el plano de la nebulosa ideología sino en el plano de la política pragmática. El «objeto real de discusión» ha de ser «el programa, la organización y la estrategia del PSOE para los próximos años», y no una «querrela bizantina» que disfrazaba de razones teóricas «emociones y pasiones» políticas.

El abandono del marxismo era para el editorialista «un paso obligado» para la «clarificación» de un partido «que busca los votos de millones de ciudadanos que se limitan a desear una sociedad más justa y más libre y que se alimenta de ideas y teorías procedentes no solo del legado del marxismo». Empeñarse en restringir en él su definición «no solo es la respuesta a una pregunta que carece de sentido, sino también un gratuito regalo a sus adversarios». Los debates adolecían de una lamentable pobreza e imprecisión en una polémica «tan irreal como todas las discusiones que giran en torno a preguntas mal planteadas o carentes de sentido». Tampoco tenía sentido mantener «el llamado «método de análisis marxista», porque eso «no es más que una trinchera defensiva para quienes siguen aferrados al ensueño de una “ciencia nueva” al servicio de la clase obrera y añoran un método prescriptivo, incólume a las lecciones de la experiencia». Pretender disponer de algo parecido «al monopolio de una especie de regla de cálculo secreta» que derrotaría al adversario es una presunción gratuita. La gravedad del asunto está en fingir abstrusas discusiones de «teología marxista» para reivindicar después «un sectario derecho patrimonial sobre las siglas» que solo perpetuaría «la penosa contradicción» entre la búsqueda de mayor apoyo social y unas exigencias ideológicas «que ahuyentan a las clases medias». Sería la mejor vía para renunciar a «servir a sus votantes no militantes», que son evidentemente «la inmensa mayoría».

Desde una vasta y minuciosa cultura marxista, «nadie puede definir de manera inequívoca qué

sea el marxismo». Con ese término se «etiqueta a corrientes de pensamiento y a formaciones políticas» muy diferentes e incluso «hostiles entre sí». En realidad, «nunca ha estado claro que el movimiento socialista, que es deudor de la obra de Marx, pero también de las reflexiones de otros pensadores, pueda relacionarse con una doctrina como una fábrica de bombillas con la teoría de la electricidad». Lo peor que podía pasar era que «el utopismo ético de algunos líderes socialistas» acabase convirtiéndose en el «utopismo político» que aplazase indefinidamente la conquista del poder.

Semejante desplante había aparecido en *El País* quince días antes del inicio del congreso socialista de mayo. Es seguramente la primera vez que cristaliza sin disimulo la autoridad del ideólogo de la socialdemocracia cuando la socialdemocracia es todavía, en la izquierda, un sinónimo de claudicación burguesa, de debilidad enfermiza, de quiebra de la fe verdadera o pura dejación de responsabilidad histórica. A través de Pradera, *El País* articuló militante y convincentemente las razones de esa desidentificación mientras ofrecía las páginas del periódico a la discusión abierta.

De la resonancia de ese editorial se hacía eco el mismo periódico defendiendo las «opiniones expresadas desde fuera» de las filas socialistas y acusadas de ser «injerencias inadmisibles». El aparato reprobaba la toma de posición explícita del periódico, aunque el problema estaba en otro sitio, y era más grave. Los «reflejos defensivos» de Alfonso Guerra estaban fuera de lugar y su «afirmación de que no hay más tendencias dentro del PSOE que la resuelta minoría que trabaja y la indolente mayoría que parlotea es, desgraciadamente, algo más que un chiste o que una tenue cortina de humo». El problema real de Guerra y del aparato mismo, disfrazado de «*disputatio* escolástica» sobre el marxismo, «radica precisamente en las dificultades para conseguir esa diversidad dentro de la unidad» y que el PSOE admita lo que está a la vista, es decir, «la existencia de diferentes corrientes en el seno del partido» de modo que logre incorporar a sus representantes en la dirección. Lo contrario ratificará «las responsabilidades propias por acumular poder, monopolizar la toma de decisiones, instrumentalizar a los leales y marginar a los desobedientes».

En esas condiciones, está en manos de Felipe González lograr que el partido sea un «sintetizador de las diversas corrientes y sensibilidades» y «el vehículo de comunicación entre la militancia socialista y sus electores». Para alcanzar «la meta de la victoria en las próximas elecciones» la discusión teórica es irrelevante mientras el partido no conquiste una «auténtica representatividad en el grupo dirigente, mayor participación de las bases en la elaboración de las decisiones, mejor sintonización entre las decenas de miles de afiliados y los millones de votantes y penetración en el tejido de la vida social». Lo demás no es literatura sino perder el tiempo y disfrazar de emociones y sentimientos marxistas el control férreo y monolítico del partido, y en particular del secretario de organización citado en el editorial, Alfonso Guerra.

La enemistad entre Guerra y Pradera iba a ser tan duradera como correosa, aunque no hubo apenas trato personal entre ellos. Guerra incluso asegura, en conversación telefónica, haber obviado los análisis de *El País* y de Pradera en particular porque atendía fundamentalmente a las páginas de Cultura. Sin embargo, y desde entonces, el auténtico objetivo a batir de Pradera fue el modelo organizativo, sectario y excluyente que, según él, Guerra había impuesto en el partido. La «brecha» actual entre la militancia y «el reducido grupo dirigente que ha acumulado poderes de decisión» podría convertirse en un «foso defensivo» tras el que se protegerían «los líderes para salvaguardar su privilegiada posición».

Pero no es Guerra el auténtico responsable. La crispación y el «radicalismo verbal» de los

debates procede «en parte» de «los métodos burocráticos y el estilo imperativo del secretario de organización». Pero lo que «no resulta comprensible» es la resistencia de Felipe a reconocer que los fallos en la organización «se deben tanto a la inadecuación del señor Guerra para administrarlo como a vicios estructurales de su diseño, especialmente la negativa a admitir tendencias en su seno».

Esa es la auténtica madre del cordero, porque empobrece y estrangula las visiones diversas que podría representar un PSOE sin miedo a la pluralidad, como ha hecho el partido socialista francés. El caso español ha sido peor porque ha eclipsado la evidencia de que los buenos resultados electorales del PSOE no nacen de «los párrafos verbalistamente revolucionarios del programa», sino de la confianza de una parte de la sociedad en Felipe González y «la convicción de que el socialismo democrático es la única opción posible para desplazar del poder a la derecha histórica». A pesar de la derrota de su ponencia política en mayo, no debe caer «Felipe González», que es el despojado título del editorial, en la «tentación del abandono» sino al revés: ha de «constituirse, aun a costa de sacrificar afectos personales, en el punto de síntesis de las diversas corrientes y tendencias dentro del socialismo».

Por fortuna, el aplazamiento a un congreso extraordinario de la elección de la nueva ejecutiva «ha transformado la decisión de Felipe González de no presentarse a la reelección en la clave de su victoria y, paradójicamente, de su continuidad». Su renuncia no debe ser tomada «como un abandono, sino como una actitud activa de compromiso con su partido y con el país» por parte de un político que se la ha jugado y ha ganado. «Lo cierto es que la historia no estaba escrita de antemano» y su improvisada intervención final de mayo, «en el cargado y emocional clima de la sala del congreso», confirma que «las motivaciones éticas como *ultima ratio* del compromiso político eran algo más que la racionalización de un movimiento táctico».

Lo lamentable sigue siendo «la obsolescencia teórica y la irresponsabilidad política» del sector crítico, su «abigarrada y disparatada fórmula ideológica» e incluso los «tonos y contenidos» con «demasiados retales de la oratoria del primer Lerroux o de Blasco Ibáñez y un exceso de marxismo de manual». Es una venenosa alusión a Gómez Llorente y la determinación con que difundió como militante histórico y responsable de formación en el partido desde finales de 1976 la lectura masiva entre la militancia del «catecismo» vulgarizador de los principios del materialismo dialéctico: es el mismo libro del que se mofaba Pradera en la entrevista con Orfila de 1978. Era verdad que se habían vendido para entonces «varios cientos de miles de ejemplares» del libro de Marta Harnecker y, según Alfonso Guerra muchos años después, «causó estragos entre la militancia socialista». Su consecuencia fue el «cataclismo orgánico» que vivió el partido en su congreso de mayo, según él.

A cambio, sin embargo, los movimientos críticos tuvieron la virtud de plantear a las claras una batalla política, exasperada y crispada precisamente por «los métodos imperativos de la organización del PSOE». En uno de los seis editoriales que dedica *El País* al caso ya había profetizado que el partido sabría «extraer la enseñanza de que la libre expresión de las tendencias en su seno, obligatoriamente vinculadas a personalidades y a corrientes ideológicas, puede ser su gran fuerza de atracción que le diferencie de otros partidos». La virtud auténticamente inesperada es que ese congreso de mayo había propiciado «la pasión de las ideas» entre la ciudadanía. Había llegado en el estancamiento de un desencanto que derivaba «no tanto del obligado consenso como de los innecesarios pactos secretos que lo instrumentaron». Todo parecía condenar «a la atonía, a la privatización y al alejamiento de la vida pública» de buena parte de la ciudadanía pero ese congreso revelaba que la sociedad puede «apasionarse por las cuestiones políticas cuando estas

se presentan de manera veraz, y no simulada». Sus efectos tonificantes dependerán de si los socialistas incurren en la «tentación de dar marcha atrás y confinar el debate entre cuatro paredes» en lugar de involucrar al resto de la sociedad en sus ideas, proyectos y estrategias. Sería ese el mejor modo de responder al «sincero asombro» que ha producido en sectores ajenos al socialismo «el hecho de que un dirigente juegue sin cartas marcadas y arriesgue su futuro por motivos que van desde la coherencia con sus principios hasta la afirmación de valores éticos en el mundo pragmático, y en ocasiones sórdido, de la política».

Los meses futuros hasta el congreso de septiembre habían de servir para fortalecer el debate de ideas en lugar de incurrir en las lamentables muestras «de improvisación, inmadurez, demagogia y falta de rigor ideológico y político» de los debates de mayo. Esa sería en buena medida la mejor consecuencia del «abandono y el triunfo moral de Felipe González». Pradera iba a dar la batalla aunque fuese desde la melancolía que confiesa por carta a Enrique Ruiz García, antifranquista, excomunista y exriduejista. El congreso habría girado únicamente en torno a «la carrera del PSOE hacia el poder y hacia los palacios», como decía Ruiz García, pero a Pradera la melancolía le dibujaba sobre todo un panorama «más bien sin brío y desalentado».

NUEVAS TENTACIONES RADICALES

Con el transcurso de los meses nada parece haber frenado el «enfriamiento, apatía y desgana que carcome la vida pública». En el ínterin, el acoso de ETA, los tambores golpistas, la inseguridad ciudadana, el miedo a una regresión, el acoso judicial a la libertad de expresión y la parálisis del Gobierno de UCD habían complicado un poco más las cosas hasta el límite de poner en riesgo el sistema democrático. La ausencia de dirección en el PSOE durante el verano de 1979 no ayudaba a frenar o sofocar las tentativas golpistas ni a favorecer una oposición enérgica. La salida del atolladero no iba a ser mágica, pero quizá la ejemplaridad seductora de otros experimentos podría coadyuvar o al menos espabilar al socialismo español.

Sospecho que el desaliento transitorio llevó a Pradera, Cebrián y *El País* a conjeturar alguna hipótesis alternativa que atizase las urgencias socialistas y orientase en parte el calado de su discurso público. Italia había dado una sorpresa importante en las elecciones de junio de 1979 al incorporar a su parlamento 18 diputados de un nuevo Partido Radical, fundado por Marco Pannella; sus votantes están entre «los radicales de la izquierda» sin ser «extremistas: son una opción moral». Es verdad que ahora solo son «una izquierda quizá utópica» y sin poder real previsible pero «ofrece un cierto concepto del mundo y de la vida que va más allá de las maniobras, las politiquerías, el magma de un poder insuficiente y neutralizado». El despliegue de *El País* en torno a estos nuevos *radicales* es importante, con una amplia entrevista de Juan Arias al líder de una izquierda no marxista y en continuidad con «las fuerzas libertarias socialistas humanistas y revolucionarias y con la resistencia comunista interna, la de Gramsci y Terracini, que habían sido expulsados del partido y que estuvieron en la cárcel en el tiempo de los fascistas», además de involucrar a la «burguesía más progresista», según declara Pannella.

Eran a todas luces «nueva política» contra los «partidos tradicionales» y entre sus huestes figuraba nada menos que Leonardo Sciascia. Pero la resonancia que tenía en la intimidad de Pradera y de otros fundadores de *El País* ese cuadro de valores y principios políticos lleva el nombre de Dionisio Riduejo. La música de ese radicalismo italiano sonaba muy próxima a él como heredero de «las tradiciones laicas, reformadoras, liberales y éticas de nuestro pasado

republicano o monárquico». El segundo editorial conmemorativo dedicado al amigo muerto con sesenta y dos años en 1975 había aparecido en junio de 1979, en pleno interregno entre congresos y en pleno y agudo desencanto epidémico. Ese editorial condenaba el «muro aislante de olvido y de silencio» que separa a la clase política de su ejemplo y buscaba romper un «silencio ligeramente ruin» además de ingrato «ni una moción parlamentaria, ni una calle, ni un monumento, ni una cita en discursos solemnes».

A nadie habría que recordarle cuatro años después de su muerte que en sus proyectos y textos «están las principales ideas y las más decisivas formulaciones de esa “reforma política”» que empujó una oposición democrática «deudora» de Ridruejo «como primer organizador de su diálogo y entendimiento». De su imaginación cabría haber esperado «la configuración de una reforma cuyas fronteras no estaban fijadas de antemano». Insospechadamente, un racionalista empírico y granítico como Pradera conjetura, anegado de desaliento circunstancial, que con él vivo «la reforma política podría haber sido más amplia, sincera y limpia de lo que ha sido», impulsada por una ejemplaridad que nacía menos del acierto de sus análisis que de «ese inconfundible apresto moral que transmitía a su pensamiento y a sus comportamientos la fuerza de atracción del convencimiento íntimo y de la disponibilidad para probar con hechos la sinceridad de las ideas».

Lo que había detrás de ese elogio a Ridruejo era una llamada a la «pasión de las ideas» y a la ética como categoría política abandonada o desasistida desde junio de 1977. En Ridruejo estuvo «la fallida prefiguración de lo que hubiera podido ser este país si hombres de su misma condición e ideología, en vez de dedicarse a *verlas venir* y a tomar a su figura como coartada de una inercia y apatía colectivas, hubieran asumido sus mismas responsabilidades». Sus virtudes hubieran reforzado la «pasión por las ideas» que habían desatado los debates de mayo de los socialistas, «ese respeto a los principios y esa fidelidad a la palabra dada que tanto se echan en falta» en una clase política demasiado cauta, calculadora y tacticista.

¿Podría encarnar Felipe González en la imaginación de Pradera algo de ese legado de integridad ética y política? ¿Había que inventar una sucursal del Partido Radical que las encarnase sin candidato obvio para hacerlo, como no fuese quizá Fernández Ordóñez, en lugar de adueñarse de esas virtudes vitamínicas el mismo PSOE? Las de Ridruejo eran «cualidades espectacularmente ausentes» en amplias zonas de la vida pública y «cabe imaginar que su memoria, indulgente pero precisa, hubiera disuadido a los caballeros de industria de presumir de pasados inventados o inexistentes». Las alusiones implícitas a políticos en activo evidencian que podría funcionar como «contrapeso» para enseñar que un discurso «puede ser algo muy diferente de un tartamudeo sincopado de cifras y datos o de una pompa de jabón hinchada por los aplausos de los devotos». Hoy en cambio campa sin contraejemplo «la devastación del lenguaje político, asolado por la acción combinada de las ratitas sabias que consideran que la técnica jurídica es una ciencia, y de los antiguos funcionarios del Movimiento, que ocultan su vertiginoso vacío de pensamiento con una retórica hortera o apresurados farfullamientos». Entre la «desagradecida amnesia» y la «mala conciencia» navegan demasiados olvidadizos, seguramente también «temerosos de imaginar las preguntas que hoy hubiera podido formularles [Ridruejo] sobre su responsabilidad como fabricantes del desencanto» por parte de quien fue «un indiscutible forjador de la España democrática», capaz de avisar en los viejos tiempos «del engaño y el fraude de la ideología que había defendido». Su recuerdo era hoy «ciertamente una ofensa, pero también una esperanza», y esa esperanza podría en parte encarnarse en varios cuerpos.

El sustrato de la nostalgia política de Ridruejo es ético y enlaza insospechadamente bien con la

expectativa que pudiera despertar un Partido Radical a la española, aunque sea verdad que su espacio electoral habría de ser exiguo o muy reducido. A un mes del congreso socialista de septiembre «no puede ser más decepcionante» el debate. La lucha de las ideas «ha sido sustituida por improperios y ataques personales, razonamientos imprecisos y laxos y algún que otro lamentable juego de palabras (del estilo de “ser hoy marxista es ser antimarxista”) que confunde la dialéctica con los trabalenguas». La frase era de Gregorio Peces-Barba en un artículo publicado precisamente en Opinión de *El País*, pero dejaba incólume «el verdadero punto neurálgico del conflicto», que es «la cuestión del camino hacia el poder». Su política de alianzas es lo que de veras se dirime, o bien en favor de la «autonomía» que tradicionalmente ha defendido Felipe, descartando cualquier coalición con UCD, o bien hacia la unidad de las izquierdas, como piden otros.

Contra las «fintas y rodeos que unos y otros han prodigado para no llamar a las cosas por su nombre», Pradera recupera su meditación anterior sobre Pannella para aguar expectativas potenciales a ese partido pero reforzar a la vez la necesidad política del reenganche con las tradiciones liberales y laicas del republicanismo. En el fondo, reclama que los socialistas asuman un legado de valores éticos que fortalezcan la función política. La pregunta clave es si el abstencionismo desencantado será «recuperable» con «una propuesta distinta de las que hoy ocupan el espectro de los partidos»: Pradera busca munición en el pasado ejemplar de Ridruejo y en la novedad refrescante e inconformista italiana contra el desencanto y contra los síntomas incipientes de adaptación a una democracia negligente, cínica o boba. Se trata de incentivar «contra las formas institucionales históricamente cristalizadas» los cauces de «participación ciudadana», si es que la alta abstención electoral no es más que «una manifestación de repliegue egoísta hacia la vida privada», en hipótesis intuitiva que haría fortuna en el análisis cultural de la España de la Transición.

De la propuesta política de Marco Pannella podría incorporar algún partido «las tradiciones laicas y del reformismo moral del republicanismo histórico español»: podría concitar la adhesión de «profesionales, funcionarios públicos y empleados del sector terciario» con voluntad sincera de servicio y conciencia de Estado –podría estar pensando en Luis Ángel Rojo, en Manuel García-Pelayo, en Francisco Rubio Llorente–, también de jóvenes de clase media hoy inhibidos de la vida política y de mujeres excluidas una y otra vez de los «cargos de responsabilidad en las organizaciones partidistas».

En el fondo, Pradera está preguntándose a qué esperan los socialistas para hacerse dueños de ese legado abarcador y plural, consistente y negligido; a qué esperan para ser los titulares de la mejor tradición humanística e ilustrada, intelectual y civilmente movilizadora más allá de los despachos del poder, de las negociaciones a corto plazo, de los escarceos y los cabildeos. En 1979 seguía siendo verdad que, al margen de su lealtad marxista más o menos veraz, ninguno de los partidos da «respuesta satisfactoria» a una batería de cuestiones que configuran el repertorio de causas futuras que justificarían la emergencia de un nuevo partido. «La calidad de vida» no era entonces el fetiche idiota de hoy, «la defensa del medio ambiente» apenas estaba en el horizonte, «la libertad de costumbres» estaba mucho más en la calle que en los despachos, «el pensamiento crítico e irrespetuoso» estaba en *El País* y en otros muchos medios pero desde luego no en los partidos, «las manifestaciones de la nueva cultura» asaltaban la calle y las cabezas pero tampoco los partidos, «la limitación del poder (de cualquier forma de poder)» no era exactamente meditación asidua de las cúpulas dirigentes, cerradas y alérgicas al debate público, «las formas directas de democracia» en forma de referéndum eran una bandera de los radicales italianos pero

de nadie más, «la denuncia de la corrupción» tenía visos de teatro antes que de compromiso político, «la vigorización de los ámbitos de vida colectiva a escala municipal o de barrio» nacería por su cuenta y con escasa contribución de los partidos mayoritarios, «el laicismo consecuente» estaba lejos en España de las batallas contra el Vaticano de Marco Pannella y «la búsqueda de nuevos valores» que ponía el editorialista al final de su decálogo parecía el resumen de un inasible prontuario que en muy poco tiempo se convertiría en la coletilla desorientada de muchos. Aunque fuese verdad que ese presunto partido podría «desbloquear el actual panorama», atrapado entre «el monopartidismo gubernamental» y las tentativas de coaliciones *contra natura*, su viabilidad era nula si los hombres que lo nutriesen fueran políticos de segunda fila o desesperados en busca de colocación hartos de expectativas frustradas.

A los quince días de ese rosario de expectativas y de algo que suena a programa urgente, nada ha desencallado el debate interno socialista. El diagnóstico editorial descalifica el incipiente *felipismo* «con algunas honrosas excepciones» y su sector crítico, que es quien se «lleva la palma» de los ataques: es «inverosímil» su «combinación de incompetencia teórica, incoherencia política y desenfrenada puja por robustecer su imagen personal». En realidad, todo se ha desarrollado en los últimos meses «con tanta pobreza conceptual, tan escasa capacidad de convicción y tan sobreabundante exhibicionismo personal» que nadie parece ser consciente de lo que «el partido se juega en el envite».

Ganará en septiembre Felipe, «pese a los errores cometidos», pero esa victoria ha de fortalecer los flancos débiles del partido: es la hora de que rectifique la improvisación que gobernó su crecimiento inusitado en los dos últimos años (de 9.000 militantes a en torno a doscientos mil). Ha «quemado seguramente demasiado de prisa etapas que hubiera tenido que recorrer más despacio», pero sobre todo debe dejar de «congelar el poder dentro de un reducido círculo» atado a «viejas amistades o lealtades personales» más que a «ideas políticas o capacidad de organización», donde parecen esconderse nombres propios relativamente sencillos de descifrar, sea Alfonso Guerra, Luis Yáñez o Guillermo Galeote.

La definición que saldría del congreso extraordinario de finales de septiembre permitió la reelección de Felipe González como secretario general y la consolidación de un partido sin el estigma de un marxismo que retraía a las clases medias indispensables para gobernar. Ahora era un partido «de clase, de masas, democrático y federal», aunque asumía «el marxismo como instrumento teórico, crítico y no dogmático para el análisis y transformación de la realidad social». La reforma de los reglamentos internos había servido para atar de forma amplísima y hermanada el regreso de González a la secretaría del partido y el poder de Guerra al frente de la secretaría de organización. La misión estaba cumplida, con mínimos desperfectos y un reforzamiento público del partido en clave de transparencia política, adaptación a la realidad de una sociedad de consumo y pragmatismo. Quedaba por delante la búsqueda, ya interminable desde ahora y nunca satisfecha, de una vía intermedia entre «el bullicio y el ambiente de asamblea universitaria antifranquista» de la reunión de mayo y el «grado mucho más elevado de control» y disciplina del nuevo sistema.

No habrá llegado a ser el Bad Godesberg español –la reunión de 1959 en la que el partido socialista alemán asumió la socialdemocracia–, pero al menos se ha evitado la definición doctrinaria y restrictiva del partido. En las notas preparatorias que conserva Felipe González a propósito de este congreso extraordinario constan los planes para lo que llama «Operación síntesis de la diversidad». Lo es en varios ámbitos, pero en particular el ideológico, donde anota hasta seis variantes que se despliegan en un «marxismo riguroso (a veces incluso dogmático)»,

aunque también aparece tibiamente a lápiz como «marxismo ortodoxo», un «socialismo no marxista», los «cristianos en el socialismo», los «antropologistas», en quinto lugar los «socialistas moderados o socialdemócratas» y finalmente los «radicales progresistas» o lo que en otro documento paralelo llama «izquierda republicana».

A pesar de que los estatutos siguen negando las tendencias interiores, su «evidente y ruidosa realidad» ha bastado para reconocerlas. Felizmente para el editorialista, algunos documentos ratifican la nueva ruta socialdemócrata lejos de aspavientos pseudorrevolucionarios, con leves pero valiosos relevos en la ejecutiva. La incorporación de «dos intelectuales de tan reconocido prestigio y competencia teórica como [Ignacio] Sotelo y [José María] Maravall», ambos tras prolongadas experiencias universitarias en el extranjero, mejora sustancialmente «la capacidad de elaboración ideológica y política del grupo dirigente» y reemplaza «con gran ventaja a los líderes» críticos Bustelo, Gómez Llorente y Castellano. Pradera no perdona el daño infligido al partido y el tiempo perdido en debates estériles y desgastantes: ha ganado el PSOE la batalla y la ha ganado Pradera también. Quizá la inmediata «Estrategia económica socialista» que elabora la nueva ejecutiva no es todavía un programa de gobierno pero, «al menos, deja atrás la demagogia y verborrea de esas plataformas electoralistas que prometen abundancia para todos y la satisfacción simultánea de reivindicaciones abiertamente contradictorias entre sí».

El PSOE ya sabe que «un partido instalado en viejas tradiciones de estatalizaciones e intervencionismos» no podrá abordar la gravedad de los problemas económicos con esas recetas. Pero ante «los límites de las estrategias socialdemócratas», el editorialista no apuesta tampoco por «el renacimiento de la fe en la mano invisible del mercado», demasiadas veces revestida «con molestas connotaciones a la moda», cuando en realidad «todavía no ha pasado por la prueba de la práctica». En realidad, lo que demanda «la vigorosa ofensiva de corte neoliberal» y su convicción en «devolver al mercado la entera libertad», no es el desdén de «réplicas caricaturescas o juicios de intenciones». Al revés, exige a los defensores de «una creciente intervención estatal en la economía una profunda reflexión sobre sus planteamientos y sus propuestas». El PSOE dejaba atrás por fin la «sensación de indefinición y ese carrusel de contradicciones y vacilaciones» que han marcado su «corta vida» desde Suresnes. El potencial electorado está ya desenganchado de «la retórica caballeresca o el marxismo doctrinario» y, a la vez, la coyuntura económica global ha revelado que «las recetas ensayadas» por los laboristas británicos o los socialdemócratas continentales «no parecían ya tan válidas como antaño».

La lección estaba aprendida, por fin, cuando Marisa Flórez fotografiaba ese mismo septiembre de 1979 en pleno triunfalismo socialista a Adolfo Suárez inmóvil en el despoblado banco azul del Gobierno. Para *Abc*, con Carlos Mendo en la subdirección, también estaban claras ya las cosas a la vista del manifiesto que reafirmaba el marxismo como «ideología básica» no del PSOE sino de «los radicales del PSOE». Quizá cuando Fernando Claudín entrevistaba a Felipe González para *Zona Abierta* entre congreso y congreso en este 1979, y defendía un marxismo abierto y crítico, Pradera asentía secretamente mientras leía la entrevista. No incurro en la imprudencia de confirmar precipitadamente la versión de Polanco ante Vázquez Montalbán, cuando aseguraba que el PSOE tomó su línea política de la de *El País* antes de gobernar, pero el hilo rojo que recorre estas últimas páginas cuelga de esa hipótesis. El papel de Pradera desde *El País* había sido crucial para identificar en ese socialismo en democracia, o socialdemocracia, la ruta de una victoria electoral masiva, pero también el instrumento para sustanciar un Estado del bienestar. No iba a ser ya la vía para acabar con la barbarie del capitalismo, pero sí para consolidar un sistema democrático más justo. En buena medida ese era el espacio social que compartían el PSOE de

Felipe González y *El País* de Pradera, tanto desde el punto de vista ideológico como biográfico. La interacción entre partido y periódico es una pesquisa hoy difícil o confiable solo a la memoria biográfica, pero el destilado último de este análisis ratifica que *El País* de entonces contribuyó a despejar, en el plano de la teoría y de la visibilidad periodística, puntos esenciales o incluso requisitos necesarios de la acción política del PSOE de González.

Apenas un mes más tarde, Felipe González haría una defensa rotunda de ese mismo socialismo en una multitudinaria conferencia. Interventía por primera vez en el Club Siglo XXI el secretario general de los socialistas para inaugurar un ciclo el 7 de octubre de 1979 ante dos mil personas, reubicadas en varias dependencias con circuito cerrado de televisión para seguir las consideraciones que un cronista de *El País* desmenuzó en una larga reseña. El triunfador no solo moral sino también político del reciente congreso pudo recordar que allí se redefinió el proyecto socialista como «una tarea compleja y difícil de defensa de la democracia y de oferta de cambio». Los socialistas estaban en condiciones de ocupar su lugar como oposición «crítica y constructiva», que es donde el electorado los había puesto seis meses atrás, «eliminando malentendidos sobre supuestas tentaciones coalicionistas» con UCD.

Este iba a ser efectivamente el campo de batalla del periódico durante el próximo año y medio, a la vista de los rumores insistentes y las operaciones reales de acuerdos opacos entre partidos, a espaldas del Parlamento. Esas prácticas devaluaban la democracia y desgastaban a los socialistas como opción de poder alternativo. Probablemente Pradera sabía siempre un poco más de lo que podía decir, gracias a su proximidad a varios miembros de la ejecutiva. En ese nuevo socialismo no había ya lugar para «la tentación totalitaria» ni para la «concentración de distintos poderes en un vértice», pero tampoco para las prescripciones clásicas del socialismo histórico. Cuenta González en el Club Siglo XXI que cuando hablan en el partido «de socializaciones, tanto económicas como culturales, estamos negando la estatalización y tratando de potenciar la participación de los distintos sectores sociales afectados en un permanente equilibrio», lo cual tenía ya muy poco que ver con el programa histórico socialista. En cambio aparecía con entidad propia la ética de la solidaridad como objetivo movilizador de un socialismo que ansía «ese impulso ético capaz de superar solidariamente situaciones al mismo tiempo adversas y esperanzadas».

Había algo del aroma radical y ridruejista que Pradera echaba de menos. En alguna medida, podía valer aquella conferencia concurrendísima como primer ensayo general del discurso que consolidó definitivamente a González como candidato creíble a la presidencia en la moción de censura de mayo de 1980.

EL SÍNDROME DEL GOLPE

Pero no todos los efectos del congreso socialista de septiembre habían sido tan estimulantes. La templanza de Felipe González debía compensar el efecto desestabilizador de otros miembros relevantes del partido. Todavía en este septiembre de 1979 cree Pradera desde *El País* que «las fronteras de la irresponsabilidad y de la demencia son tan amplias que nadie puede descartar la posibilidad de una loca intentona de ribetes golpistas, a contracorriente de la historia y contra la voluntad de la mayoría de los españoles». Empeoraba las cosas a final de mes el mordaz ingenio de Alfonso Guerra. En el calor congresual de septiembre, había acertado con una «ominosa metáfora» que ponía en peligro los equilibrios de una democracia aún en el aire. Sospechar en

público que Adolfo Suárez se sumaría a un redivivo caballo de Pavía, como hizo Guerra, era una insensatez, además de una temeridad, porque sugería que Suárez podría cabalgar a su grupa «para acabar con la democracia». Perpetuaba así la leyenda de que el general Pavía había entrado a caballo en el Congreso de los Diputados en enero de 1874 cuando quienes entraron a sus órdenes fueron dotaciones de la Guardia Civil para fulminar el agitado experimento de la Primera República.

La guerra contra Guerra apenas acaba de empezar, pero esa serpiente ruidosa era la secuela más nociva de un congreso pacificador, programático y pragmático. La escalada verbal de infundios y agresiones que propició entre socialistas y ucedistas ese venenoso tuit de Guerra sobre Pavía alentó el golpismo en lugar de sofocarlo. Lo que deploraba el editorialista era la frívola irresponsabilidad de «entrar en fuegos de artificio dialécticos sobre hipótesis golpistas». Mientras «discuten como liebres acerca de la identidad de los lebreles que les persiguen, empiezan a salir de sus guaridas los zorros», en expresión típicamente praderiana que recorre los editoriales hasta el efectivo golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. A pesar del temible runrún, sin embargo, sigue sin advertir *El País* «síntoma alguno, por el momento, de que el presidente Suárez pueda ser descabalgado del poder» por vía alguna, hípica, parlamentaria o extraparlamentaria, al menos a la altura de diciembre de 1979.

Pero todos viven ya bajo el «síndrome del golpe», según el editorial titulado así, «El golpe», a 27 de enero de 1980. Bien por voluntarismo, bien por el deseo de desescalar los rumores, piensa el periódico que en España no se da «ninguno de los condicionantes elementales para que fragüe golpe alguno». Y con aroma orteguiano concluye el editorial que el Ejército español tiene sin duda problemas, pero que «el Ejército español no es un problema para España». Pretendían desactivar así la denuncia sobre una conspiración en marcha publicada por Miguel Ángel Aguilar en el periódico que dirigía, *Diario 16*. El artículo se había publicado el viernes 25 de enero de 1980 en portada bajo el titular «Una intentona militar abortada en Madrid» y comportó el procesamiento de Aguilar desde el sábado por un juzgado militar. El editorial del domingo en *El País*, al parecer escrito por José Luis Martín Prieto, omitía ese dato y desacreditaba con inequívoca fanfarronería la información misma. Además del procesamiento por la vía militar, a Aguilar le costaría, cuatro meses después, el cese en la dirección de *Diario 16* a instancias de Juan Tomás de Salas, según sus memorias.

Sin embargo, ese era el segundo editorial dedicado al artículo de *Diario 16*. El mismo sábado 26 se había ocupado ya *El País* de la noticia, y esta vez la voz es la de Pradera para señalar que la denuncia de golpe nacía de «un análisis equivocado a partir de hechos ciertos». Los hechos ciertos tienen que ver con los cuartos de banderas y la frecuencia de «conversaciones de tono abiertamente crítico contra las instituciones del Estado y los principios democráticos». Convenía recordar que no «de toda charla nace una conspiración», pero, a la vez, con tanta charla conspirativa puede que «haya quien de la palabra esté dispuesto a pasar a la acción». Lo que verdaderamente necesitaba la ciudadanía era «transparencia informativa», porque «el silencio ha sido siempre el terreno mejor abonado para el bulo». Quizá por eso *El País* se empeñó en los meses siguientes en rebajar la trascendencia de las informaciones golpistas. Su estrategia informativa pasaba por acallar o desacelerar los rumores con el fin de agostar el sotobosque golpista.

En la cabeza de todos estarían sin duda las proclamas que el marqués de Villaverde, y yerno de Franco, había pronunciado en noviembre de 1979 en la sede de Fuerza Nueva. Alentaba en las Fuerzas Armadas no tanto la disciplina como el honor mientras citaba la proclama golpista de

Franco de julio del 36, como si se hubiera escrito ese mismo día, tras los «cuatro años de calvario como jefe de la familia Franco», que es como se presentó. La provocación sacudió a Pradera y lo lanzó contra la máquina de escribir para firmar con su nombre una diatriba, empapada de sarcástico desdén, no tanto contra el amor confeso del yerno por su suegro sino contra una «oración fúnebre transformada en una arenga». Lo peor en ella «fueron las reticencias e injurias contra don Juan Carlos de Borbón». A 25 de noviembre de 1979, por «si alguien podía preguntarse todavía por la honorabilidad personal y política de don Juan Carlos», esas palabras disipaban cualquier duda: «Las injurias del marqués de Villaverde honran al injuriado.»

Lo cual no quita que el marqués de Villaverde sea «como un mal sueño donde se da cita toda la grosería del señorito español». De paso, sería conveniente «conocer el actual patrimonio de los herederos directos del general Franco». Llegó a la jefatura del Estado «con los escasos ahorros de un militar honrado» y «se limitó, justo es decirlo, a disfrutar del ejercicio ilimitado de su propio poder», en ironía irresistiblemente praderiana. Lo que está menos claro es si los mismos que ahora invitan «al golpismo» utilizaron «su privilegiada posición para realizar, en su propio provecho, una redistribución del ingreso de los demás españoles». Naturalmente, nadie aspira a una investigación judicial, porque «para hacer una gigantesca fortuna, quienes rodean a un dictador omnipotente ni siquiera necesitan infringir el Código Penal. Les basta, simplemente, con conculcar las normas invisibles que prohíben los abusos, las indelicadezas y la codicia».

Tampoco era la mejor de las noticias a principios de mayo de 1980 que la sentencia de la operación Galaxia incurriese en la imprudencia de mantener en sus puestos a los altos mandos de la Guardia Civil y la Policía Armada encausados, y uno de los cuales era el teniente coronel Antonio Tejero (y el otro el capitán Ricardo Sáenz de Ynestrillas). No había sido una descafeinada *charla de café* aquella operación, sino un golpe de Estado abortado. De ahí que resultase incomprensible la tibieza de las condenas contra los dos mandos, que fue la mínima y no comportaba la pérdida de su rango militar. *El País*, sin embargo, se esforzó por normalizar el cambio de destino a gobernador militar de La Coruña del general Luis Torres Rojas, al mando de la División Acorazada Brunete n.º 1 desde hacía solo siete meses: ese precipitado relevo tenía todo el aire de ser su propia pena mínima por su implicación en la conspiración golpista.

La espiral de atentados de ETA arrecia, la crisis económica y el crecimiento del paro no cesan. También la compleja negociación de los Estatutos catalán y vasco activa conjuntamente las peores vísceras de un neofranquismo persistente y los recelos viscosos de amplios sectores de la democracia. Culebrea en todas las redacciones el nerviosismo, asalta las conversaciones y se va a convertir en una niebla crónica y a ratos exasperante. Sin embargo, será la remodelación de Gobierno a principios de mayo de 1980 lo que acentúe las hostilidades del periódico contra Suárez con inusitada dureza, tras haber vivido «una especie de vodevil con muchos portazos, carreras, espantadas y situaciones tragicómicas». Pese a sus probadas dotes de mago, el discurso que mantiene Suárez este mayo de 1980 es «más digno de un político del antiguo régimen que del presidente de un Gobierno democrático». El resultado ha sido la «derechización objetiva» de su Gobierno y es el auténtico motivo de la recaída colectiva en el desencanto. A estas alturas no es ya desengaño democrático sino descarnada involución política.

No hay tregua contra Suárez desde este momento, y hasta septiembre de 1980, por meter al país en el «túnel del tiempo», y apenas hay piedad al definir ese Gobierno como uno más de «los de antes, lleno de falangistas, tecnócratas y democristianos». Tampoco «la escalada contra la libertad de expresión» remite. Casos tan sonados como el procesamiento de Miguel Ángel Aguilar (denunciado frontalmente en otro editorial más, sin duda de Pradera, a 29 de enero), el de Pilar

Miró por la película *El crimen de Cuenca*, o la sentencia a tres meses de cárcel a Juan Luis Cebrián por otro editorial de un año atrás titulado precisamente «Prensa y democracia», no alimentan la menor confianza en la voluntad democratizadora de Suárez.

Contra el portavoz del Gobierno, Josep Melià, decide activar Pradera, de nuevo con su firma, las baterías guerrilleras de analista descompuesto y casi atrabiliario en su sarcástica semblanza del personaje. Melià se ha especializado en «los boletines confidenciales, los documentos reservados y los dossiers de circulación restringida, para uso exclusivo de la clase política y de los miembros más conspicuos del *establishment*». Siguen a la orden del día «los comentarios *off the record* de ministros y líderes, las informaciones *embargadas* y las revelaciones susurradas al oído» en pasillos y despachos. Por eso le recuerda a Pradera cada vez más «la presentación gráfica de los discos de La Voz de su Amo». El perro no es Melià, «sino el biotipo de periodista que el Gobierno y algunos sectores de la oposición consideran como el ideal de esa profesión», dócil y atento a informaciones «reservadas y semisecretas», a «noticias ciertas, rumores intoxicadores y cuentos chinos» de los que participa incluso la oposición. La stampa que crean es «tan deprimente como humillante» y solo falta echar de menos a José Antonio Novais y «que *Le Monde* vuelva a convertirse en la fuente de información segura de los españoles».

Buena parte del sotobosque golpista creció en esas opacidades informativas propicias a la rumorología excitada y contagiosa. Lo preocupante es la desgraciada complicidad con esta «democracia controlada» de parte de la oposición, incluido un Felipe González que parece asumir también la convicción de que «los ciudadanos instalados fuera del poder» sean «pastoreados benévola o severamente por sus tutores», en todo caso «mantenidos al margen, no solo de los centros de decisión, sino también de las fuentes de información». Con sus dosificaciones reguladoras de «los buches y tragos convenientes», determinarían «lo que hay que callar, lo que se puede contar y lo que se debe escribir». Esa presunta campana neumática no lo es, pero sobre todo no es democrática la «política de silencios, medias verdades y mentiras» apadrinada también por la oposición. Fingen ignorar que «la democracia comienza por la información», mientras hipócritamente exhortan día sí día también a «consolidar, estabilizar, enraizar, profundizar, ampliar y extender las instituciones democráticas y las libertades». No es extraño imaginar a Pradera pidiendo sitio urgente en alguna reunión del comité editorial del suplemento de libros para publicar reseñas en enero de 1981 sobre *Demasiado para Gálvez*, de Jorge M. Reverte, y *La tribu*, de Manuel *Manu* Leguineche. En ambos encontró lecciones y escarmiento para políticos demasiado quejosos de una prensa menos servil y más indócil de lo que quisieran. Por entonces todavía la dirección de ese suplemento seguía en Madrid; desde 1983 pasó a la redacción de Barcelona, a cargo de Lluís Bassets.

Pero todo es susceptible de empeorar, sin embargo, con el acecho, desde marzo de 1980, de una operación de envergadura para relanzar la *gran derecha*, con Fraga a la cabeza, y empujada por el neoconfesionalismo conservador a disgusto con Suárez, dentro de sus propias filas. La presión conjunta de la Iglesia, la «oligarquía financiera» y amplias zonas de militares «descontentos» se dirige contra «lo que consideran una política no coherente con el electorado ucedista en lo que se refiere al derecho de la familia, la economía y la enseñanza, así como en la construcción del Estado de las autonomías». El objetivo es derrocar a Suárez escindiendo la UCD por la derecha, y nace todo, o casi todo, del temor de que UCD busque un acuerdo de gobierno o alguna forma de coalición con la Minoría Catalana conservadora y catalanista. Al fondo alienta el miedo a la autonomía diabólica, intencionadamente confundida con el secesionismo desatado. *El País*

deplora esa manipulación de la derecha y no descarta un Gobierno de UCD con la Minoría Catalana, apoyado por el PSOE.

El sabotaje desde las mismas filas ucedistas –con promotores como Miguel Herrero de Miñón, Landelino Lavilla u Óscar Alzaga– parece contar, otra vez alarmantemente, con algo más que la simpatía socialista. O eso sospecha inquieto el periódico. Pero la estrategia es doblemente errónea ahora y lo será después: ahí identifica *El País* uno de los riesgos más altos para la estabilidad democrática primero y para la futura alternancia del PSOE en el poder, después. Ese compadreo silencioso con la derecha descontenta del reformismo de Suárez, ansiosa de regresar al poder y contener las ínfulas autonomistas, minaría la credibilidad socialista y delataría la impaciencia por la toma del poder, por cualquier medio y a cualquier precio.

De momento, sin embargo, han de llegar todavía las horas de plenitud que regala la moción de censura a finales de mayo de 1980. Consagra a Felipe González como potencial jefe de Gobierno e indirectamente a Manuel Fraga como superviviente político con mucho futuro. De las intervenciones de Felipe ha salido reforzada «su credibilidad personal, la veracidad del discurso, la agilidad para la réplica y la capacidad de sintonizar con la sensibilidad y las preocupaciones de los ciudadanos». Como «indiscutible triunfador», con Felipe ha llegado «la prueba más convincente de que realmente algo ha cambiado en España desde hace cuatro años». Sobraban motivos para «ese rejón de castigo» contra Suárez pero lo relevante es que ha sido la «tormenta que ha refrescado saludablemente el pesado clima de pegajoso consenso, calentado por pactos secretos y complicidades ocultas» entre los dos partidos mayoritarios. El periódico los ha condenado una y otra vez, como va a seguir haciendo en la segunda mitad del año 1980, cuando arrecien nuevos y más temibles rumores de gobiernos de concentración o salvación nacional. Esa moción ha sido la primera piedra para lapidar el desencanto, forzar la «ruptura del consenso» y promover «la dinamización de la vida política y del sistema parlamentario».

Es verdad que Felipe González «compitió a ratos en aburrimiento y farragosidad» con Suárez pero lo relevante es que «no fue el discurso del líder de la oposición, sino del candidato a presidente». Defendió «un programa de moderación, donde las promesas de cambio se vieron disueltas en abundantes matices». Sin alejarse «del sentido común», no hizo «promesas demagógicas a propósito de la situación económica». También en la defensa de su programa de gobierno «fue fiel a la tradición socialista europea contemporánea, tan alejada de las nostalgias románticas y de la fraseología revolucionaria de sus críticos», además de incluir «ofertas llenas de realismo y buen sentido». Es verdad, a cambio, que «pareció atenazado» por «los rasgos de moderación, seriedad, tecnicismos y aburrimiento que supuestamente deben caracterizar» a un presidente. Incluso consiguió igualar a Suárez en «sus digresiones nebulosas sobre ese fantasma que empieza a ser el Estado de autonomías». Pero su discurso, demasiado largo, fue «socialdemócrata, nada revolucionario, de perfiles tecnocráticos y profesionales». Quizá por eso mismo tampoco logró «hacer vibrar la membrana política de la calle».

Con todo, el verano de 1980 se abría por fin esplendoroso con «una oposición parlamentaria fuerte y decidida» y con un Adolfo Suárez abocado a presentar una cuestión de confianza en la cámara, como recomienda el periódico. En realidad, creen que «no le queda casi otro remedio», además de ser «lo único honesto y razonable» que puede hacer Suárez como presidente. Eso fortalecería «también la democracia», aunque de nuevo el recado editorial reclama que no vuelvan a las andadas los dos grandes partidos y las discusiones de los diputados «no se conviertan en riñas callejeras». En «el trapisondeo del consenso muchos fueron engañados por otros muchos». Quizá «fue necesario en parte, o inevitable, en pro de la “transición sin traumas”».

Pero dejaba de serlo tras la feliz consolidación, escriben a 8 de junio, de «la alternativa socialista».

11. EL SOTOBOSQUE GOLPISTA

El voluntarismo no había sido flaqueza extraña al periódico, y alguna vez el mismo Pradera incurrió en esa forma de optimismo atenuado que hace casi real lo que todavía es sobre todo ilusorio. Quizá era verdad que «el consenso ha muerto», como escriben exultantes, pero podía ser un diagnóstico prematuro, precipitado o incluso equivocado. Tampoco se les escapaba en el periódico la necesidad de seguir conjurándolo porque, recién acabado, había que empeñarse en «rezar para que no resucite».

El mensaje explícito a «los diversos grupos y partidos» era que hiciesen «cuanto antes confesión general ante el electorado, a fin de evitar que unos y otros sigan amenazándose en público, con deterioro para la respetabilidad del régimen parlamentario, y sacando a relucir los trapos sucios». Porque el «verdadero perdedor» de aquel consenso había sido «el sistema democrático». El origen real del «famoso desencanto, el rampante abstencionismo electoral, el apartamiento de los intelectuales de la vida pública y la indiferencia ciudadana hacia la cosa común» se había nutrido y podía volver a nutrirse de «los sentimientos de frustración y de desconfianza a que dieron lugar las insensatas pretensiones de la clase política de convertir el régimen parlamentario en un patrimonio gremial».

Les harían caso solo a medias, y a veces ni siquiera a medias, con retrocesos inquietantes a métodos aprendidos o heredados del oscurantismo y la opacidad de la dictadura. Las cosas irían algo mejor si el «consenso no hubiera convertido la vida política en cantera de argumentos para novelas de misterio o películas de conspiraciones». No deberían volver las brumas que siguieron a las elecciones de junio de 1977, cuando crearon un «clima próximo casi al contubernio» que «fue denominado *consenso*» (y hoy son ya «Los abismos del consenso», dice el titular del editorial). Creció entonces sin tasa la sospecha primero y la «clamorosa evidencia» después de que «los políticos profesionales estaban haciendo mangas y capirotos, a espaldas de la opinión pública y de los electores, en las penumbras de los despachos», con el objetivo de «llegar a acuerdos ocultos y pactos secretos». Hoy la situación de soledad de Suárez le obliga a pactar con Fraga a su derecha si quiere un Gobierno estable, o bien hacia su izquierda para fraguar una «*gran coalición* con los socialistas». Pero esta última opción «solo sería posible si surgiera una grave crisis de Estado, una profunda conmoción social o un riesgo indudable para la supervivencia de las instituciones democráticas». Desde luego, este 3 de junio de 1980 «nada indica que una coalición así pueda o deba hacerse», a pesar de que están obligados a comprender a fondo y a encauzar con valentía el Estado de las autonomías. «Difícilmente pueden ser homogeneizadas en términos de igualdad política» Cataluña y el País Vasco con el resto de las regiones, dicen al día siguiente, al menos si no quieren que el Estado mismo quede «hecho añicos y pulverizado antes de que nos demos cuenta».

Pero había otro recelo cuya orientación es (también) necesariamente praderiana y va vinculada a la figura que por tercera vez en cuatro años evoca *El País* en un editorial del 29 de junio de 1980, cuando todavía dura la euforia socialista y Fraga disfruta de una insólita primavera democrática. Había sido nada menos que la estrella naciente, Felipe, quien le regaló en el Parlamento el «piropo» de que «el Estado le cabe en la cabeza», mientras efectivamente Fraga sacaba sus mejores recursos y reaparecía ante la opinión pública como un político ágil, bregado e

informado. Sin embargo, esas monerías entre Felipe y Fraga podrían estar propiciando el temible tapete donde el tahúr Suárez acabase derrotado por una pinza con demasiada prisa y obvia incoherencia política.

Había que desinflar cuanto antes semejantes alianzas *contra natura*. Los amigos recuerdan un chiste privado de Pradera que acabó yendo a un editorial medio año más tarde para explicar que Fraga «no tiene un nuevo modelo de sociedad que ofrecer, sino una vieja ambición política legítima que satisfacer». Detrás de esa *gran derecha* que intenta modular como *mayoría natural* hay «un híbrido político de Ronald Reagan y la señora Thatcher» que lo sitúa en «la vieja frontera del conservadurismo reaccionario, el orden, el recorte de las libertades, los frenos al laicismo, el reforzamiento del papel de la Iglesia, el bipolarismo y la disciplina laboral». Sus propuestas para restablecer la pena de muerte, la demanda de intervención en el País Vasco o sus ideas sobre orden público «hacen pensar a veces que el único Estado que le cabe a Fraga en la cabeza es, en realidad, cierto *estado de excepción*», en alusión al que decretó Franco para los primeros meses de 1969 con Fraga como ministro de la Gobernación.

A Pradera se le debieron de llevar todos los demonios ante las deferencias de González hacia Fraga cuando la memoria de Ridruejo seguía tan callada. Precisamente porque nadie lo ignoraba, convenía recordar ante la resurrección del bulldozer Fraga que el falangista fervoroso de primera hora había abandonado «la cúpula del poder y se marchó a la calle mucho antes de que el cambio de sistema fuera *inevitable* y de que la oposición fuera una opción políticamente *rentable* hacia el futuro», a diferencia «de buena parte de nuestros actuales gobernantes». A todos ellos les había contado Ridruejo con detalle y por escrito, más de veinte años atrás, «el cuadro institucional que hoy es, aunque solo sea en la letra de las leyes, una realidad». Pero ni conociéndolos como los conocía hubiese imaginado Ridruejo «que tantos hombres del franquismo pasarían sin solución de continuidad de un régimen a otro sin cambiar apenas de despacho». La muerte de Joaquín Garrigues Walker esos días permitía volver a sonrojar a «algunos de sus pares», colaboradores del antiguo régimen «con pleno cinismo o con torturados sentimientos de culpa», frente al «completo alejamiento» que tanto Ridruejo como Garrigues mantuvieron del aparato del Estado franquista.

El cortejo de Fraga sin embargo no había sido la única flaqueza de Felipe González en su emergencia triunfal en la moción de mayo. Había sido un éxito, pero el camino estaba aún demasiado cargado de incertidumbres y hasta de carencias graves que el candidato debía remediar. Tampoco los socialistas parecían dispuestos a acordarse de Ridruejo, y eso no identificaba ya una «carencia moral» sino la certeza «de que ninguna formación partidista puede reivindicar su recuerdo sin denunciarse a sí misma». Cuando aflora una y otra vez, al menos desde junio de 1979, la demanda de un nuevo partido-bisagra como el Radical, «quizá no resulte demasiado aventurado conjeturar que esa formación política habría podido ser una realidad» con Ridruejo. El debate sobre ese partido estaba en la calle y en los medios y, según Francisco Umbral en una columna de julio de 1980, lo había reactivado el propio Juan Luis Cebrián, de nuevo en el Club Siglo XXI, con una conferencia de principios de año titulada «La España radical».

No propugnaba la creación propiamente de ese partido, pero sí defendía los valores que sustentaban un movimiento de ciudadanía inconforme y sin restricciones doctrinarias. Incluso Raúl Morodo había entrado al trapo en abril para desestimar la propuesta porque vendría a ser la segunda oportunidad del PSP de Tierno Galván (que había sido absorbido por el PSOE y sin demasiada visibilidad dentro de él). El retrato que hacía Umbral era veraz y envenenado, como

suyo. Se choteaba de ese radicalismo que tiene a «Azaña al fondo» con «algo de la Agrupación al Servicio de la República», un poco «como un tranvía de antes de la guerra, cruzando Madrid lleno de krausistas, orteguianos, Besteiros y gentes, y dando campanillazos de atención en los cruces». No podría ser mucho más que «un tranvía testimonial», aunque «a la italiana, activista y combativo» en esta hora «de política ininteligente e inelegante».

Pero precisamente su inviabilidad y la misma ausencia de su presunto líder natural, aumentaba la obligación ética y política de otros, y en particular de los socialistas. Debían asumir el decálogo de un movimiento concebido como regeneración ética emparentada con la tradición laica y liberal, republicana o monárquica. Quizá el partido socialista podría absorber parte del legado, los motivos y las causas de ese radicalismo estimulante, ruidoso pero minoritario. Era exactamente eso lo que había faltado en el discurso programático de Felipe en la moción de censura de mayo, «cierta pasión por las ideas». También había faltado ese ingrediente gaseoso que es la «indispensable reinterpretación personal y política que todo líder debe hacer» con los argumentos, los datos, los materiales que suministran sus equipos de asesores: es la doble condición «para darles vida y hacerlos accesibles a sus oyentes». En mayo del año anterior, un editorial sobre el congreso socialista se había titulado «El debate socialista y la pasión por las ideas», y un año después lo que Pradera (y el periódico) echaba de menos en Felipe era la «pasión por las ideas, ese respeto a los principios y esa fidelidad a la palabra dada que tanto se echan en falta en los planteamientos y en los tratos de nuestra clase política». Le había faltado también a Felipe González en su discurso, aunque dispusiera «todavía de un activo intacto de credibilidad personal, autoridad moral y sinceridad política ante la opinión pública».

EL PODER Y LA RAZÓN

Al menos desde junio de 1980, *El País* creía que los socialistas seguían encallados en formas demasiado turbias de democracia, como si la rumorología conspirativa de los golpistas, el acoso de la derecha a UCD y el empeño en derribar a Suárez a toda costa estuviese propiciando contactos y complicidades inaceptables. No había que descartar por principio un posible gobierno de coalición. A principios de junio esa posibilidad se le antoja a *El País* «improbable», pero también «seguramente perjudicial para la formación de hábitos democráticos en nuestra sociedad». Quizá podría reforzar la estabilidad democrática un partido inspirado en los *radicales* italianos que pudiera actuar como «bisagra», pese a no existir los mimbres para fabricarlo. Podría recoger tanto a «los votantes desengañados» de las opciones mayoritarias como a «la abstención desencantada». Sumaría a la vez a «barones desengañados» de UCD y a socialistas desencajados en el PSOE para encarnar «las viejas tradiciones laicas, liberales, reformadoras y de ética política» y defender así «banderas por nadie recogidas y reivindicaciones por nadie defendidas».

En el periódico, sin embargo, siguen inclinándose por el apoyo de Jordi Pujol para garantizar la estabilidad gubernamental de Suárez, aunque los mensajes editoriales incorporan a veces una fiereza un tanto enigmática. El análisis de la ratificación en el Consejo Supremo de Justicia Militar de la levisima sentencia de la Operación Galaxia a 5 de julio considera que «la democracia naufraga un poco cada día» y la libertad de expresión pelagra «ante la benévola mirada de un Gobierno cada día más dividido» y «un partido en el poder cada día más descompuesto», en plena «marea de inquietudes y protestas populares que no son correspondidas ni atendidas por la clase política». El actual régimen «parece inconcebiblemente empecinado en

dictar su propia acta de suicidio» bajo un Gobierno «sin política económica, sin política exterior, sin política ciudadana, sin política anticorrupción, sin política educativa, sin política sanitaria, sin política de empleo, sin política de nada o casi nada». Al menos, sí sabe ya el país que «tiene una política a la que es preciso estar atentos: la política militar. Silencio. Silencio».

No parece llevar las trazas de Pradera ese inventario de ausencias, pero *El País* está al límite de la paciencia. No es el único que siente ese extravagante vacío de gobierno, tan cruda, temeraria e intimidatoriamente explicado en ese editorial de críptico final. Otros podrían estar perdiendo también la paciencia, o al menos eso contaba el general Alfonso Armada, relevado en 1977 de la secretaría general de la Casa del Rey por sus flagrantes desavenencias con el presidente Adolfo Suárez, tras apenas diez meses en el cargo. Le reemplazó Sabino Fernández Campo, pese a lo cual aseguraba Armada que en junio o julio de 1980 el rey habría insinuado a Suárez la conveniencia de presentar su dimisión y el presidente se habría negado. No es inverosímil esa conjetura, pero lo que es seguro es que encaja con la egolatría de Armada y con la estrategia que contenía el documento «sobre estudio de salidas a la crisis» que «un grupo de militares» del Estado Mayor, «vinculados a él», le había entregado al rey en el mes de junio. Entre esos militares habría de estar, evidentemente, el mismo Armada, aunque ese documento, según él, no había nacido de un «requerimiento explícito» del rey sino que llegaba «en respuesta a insinuación» para buscar salidas a la parálisis. También recuerda Felipe González, me cuenta José María Maravall, su entrevista privada con Juan Carlos en la que este expresó una parecida impaciencia ante el presidente Suárez, cuando ya no estaba en manos del rey otra cosa que confiar en un futuro relevo tras unas nuevas elecciones, como señaló Felipe González en esa misma reunión.

Las palabras entrecomilladas, y la supuesta petición de dimisión del rey a Suárez, proceden de un informe inédito que Enrique Múgica redactó para su secretario general, Felipe González, a petición suya, el 5 de noviembre de 1980. Se trataba de contarle con detalle su almuerzo en Lérida quince días atrás, el 22 de octubre, con el general Alfonso Armada, el alcalde socialista de la ciudad, Antoni Siurana, y otro destacado miembro del partido, Joan Reventós, según copia que me facilita Maravall. Armada tenía ya para entonces muy entrenada la defensa de su propuesta para que todo convergiera en él como figura salvadora del caos y la parálisis gubernamental. Pero había arrancado meses atrás, al menos desde junio, y eso es lo que contó, según el informe de Múgica, en ese almuerzo improvisado en plena campaña para las elecciones sindicales, el gobernador militar de Lérida, Alfonso Armada. Describió las cuatro posibles salidas que supuestamente examinaba el documento entregado al rey en junio o julio, aunque todo en él era «cauto» e iba sin firmas ante la eventualidad de que «el monarca lo entregara a Suárez», cosa que Armada aseguró que sucedió, y seguía en poder del rey en ese noviembre.

Ese desconocido documento debería contener sin duda los planes de Armada como líder intelectual de una conspiración para derribar a Suárez y reemplazarlo por un gobierno de coalición bajo su presidencia. «Marginadas las dos primeras» salidas que proponía el documento —el «fallecimiento de Suárez» y un «golpe militar»—, quedaban otras dos que podían explorarse: la dimisión de Suárez (que, según Armada, no había prosperado en junio porque Suárez le dijo al rey que «España me necesita más que nunca») y un «gobierno de coalición a partir de un voto de censura». Esta última salida concentra la atención de ese almuerzo en Lérida de finales de octubre. La situación sigue igual y Armada no renuncia a promover soluciones por su cuenta, con él mismo al frente, aunque lo negase en público hasta el final de su vida.

Volveré luego sobre ello. De momento, a mediados de julio, *El País* sigue creyendo que la vía más «estable y duradera» para fortalecer el Gobierno de Suárez es un acuerdo con la Minoría

Catalana sin contar con los socialistas. El periódico favorece ese «gobierno de coalición» por razones de estabilidad política pero también para ayudar a definir, desde una sensibilidad genuinamente autonomista, ese «misterioso» Estado de las autonomías del que la clase política «habla con tanto desparpajo» como indefinición crónica. No pasan de ser, como viene siendo habitual, criticables «negociaciones más o menos secretas y fintas más o menos creíbles». Pero son también indispensables de cara a promover una urgente «mayoría parlamentaria coherente y articulada». El Gobierno no podrá emprender ninguno de los trabajos inmediatos en solitario, aunque en la lista infinita de problemas que detalla *El País* a 1 de agosto no figura la desestabilización golpista, ni en forma de sotobosque ni en forma de vegetación arborescente. Quizá incluso sería bueno que no solo Miquel Roca Junyent se incorporase al gabinete, sino también algún otro miembro de la Minoría Catalana.

Esa misma eventualidad ha activado, sin embargo, la vieja idea del «sector del PSOE más ansioso de entrar en el poder» y algunos han regresado al peligroso plan de «romper el partido centrista» para «formar un Gobierno de coalición bajo la presidencia de alguien que no sea Adolfo Suárez». A Pradera le parece que demasiados socialistas se inclinan equivocadamente por esa solución, como si hubiesen olvidado elementales lecciones de historia precisamente socialista. Dos veces en diez días recuerda ese verano las infructuosas prácticas de la III Internacional desde 1917 y en particular el caso específico de Carrillo en las elecciones de 1979. Su insistencia «en la desviación derechista de Felipe González» para enfrentarlo a «la salud revolucionaria de sus militantes y de su clientela» no sirvió a Carrillo para lograr «un corrimiento espectacular de votos» hacia el PCE. Hoy el PSOE incurría en el mismo error sin que fuese esperable beneficio alguno para ellos. Sus planes se parecían demasiado a las «cíclicas ofensivas de los comunistas europeos» contra los socialistas destinadas a «separar a las perversas direcciones socialdemócratas de las honestas bases revolucionarias», sin haber logrado nunca nada: «No deja de ser paradójico» que hoy los socialistas «estén cayendo en la tentación de ensayar una estrategia idéntica contra los centristas» y es «igualmente dudoso» que su insistencia «en la derechización de Suárez y en las virtudes democráticas de algunos barones consiga frutos mejores».

Tampoco ahora ofrecía una prédica de historiador aficionado sino una analogía con voluntad preventiva contra las prisas y el riesgo de incurrir en un contraproducente remedio de dudosa calidad democrática. La «obsesión anti-Suárez del PSOE» es en este agosto parte del problema y no de la solución, de modo que si de veras los socialistas quieren impedir el acuerdo de UCD con los nacionalistas catalanes, «tendrían que imaginar otros escenarios». *El País* cree que deberían hacerlo siempre sobre la base de que siga Suárez como presidente, seguramente porque la fragilidad de la democracia española resistiría mal una operación anómala, o difícilmente comprendería la condición explícita de excluir a Suárez, como había dicho González desde la tribuna de oradores durante la moción de abril. La continuidad de Suárez, en cualquier caso, sería «posibilidad, desde luego, más plausible y rotundamente preferible que la presencia de un alto mando militar en La Moncloa, perspectiva con la que, según un insistente e insólito rumor, habrían jugueteado los socialistas, cosa, en verdad, demasiado grave y esperpéntica para ser creída».

Esas atropelladas e insólitas líneas cierran el editorial del 1 de agosto, concebido para respaldar el camino de Suárez «En busca de la mayoría perdida», que es su título. Nueve días después, el 9 de agosto, expresan con igual rotundidad su alarma por la difusión de «La palabra amarilla» en la política española. Dentro de la lógica habitual en el periódico de frenar el alarmismo y la excitación, condenan la incontrolada propensión de los medios a deformar el

lenguaje: es «moda que recuerda peligrosamente el empleo de las palabras de las mejores épocas propagandísticas nazis, estalinistas o franquistas». Cuando «el efectismo prevalece sobre la precisión, la publicidad contra la exactitud, la propaganda frente a la información», las palabras dejan de ser palabras y se incurre en el abuso de «las ambigüedades deliberadas, para cargarlas de más y más sospechosos sentidos». Quizá «no llegarán a estallar, desde luego», pero «será mucho peor: se nos escaparán de entre las manos cuando dejen de decir lo que en principio, antes de tanto abuso, pensábamos que querían decir».

Es otra incursión críptica que parece un vaporoso mensaje a navegantes. Pero su intención correctiva se desvela mejor al día siguiente. Comentan entonces «la decisión de algunos medios de susurrar a la Prensa, como si fueran hechos ciertos, los sueños de sus noches de verano». Los calores estivales han «enfebrecido» la fantasía de algunos y han hecho crecer la «epidemia de rumores en torno a supuestas o reales maniobras para derribar a Adolfo Suárez» e impedir su acuerdo con la Minoría Catalana. Demasiados políticos están tan «compulsivamente atenazados por el hábito de los desayunos, aperitivos, almuerzos, meriendas y cenas conspirativos que son psicológicamente incapaces de utilizar la tregua estival para descansar». La epidemia afecta a los socialistas y al runrún de las últimas semanas según el cual «estarían negociando una nueva mayoría parlamentaria» con Fraga y con la UCD «para respaldar un nuevo Gobierno presidido por un *independiente* o por un centrista, pero en ningún caso por Adolfo Suárez». Habían transcurrido tantas semanas de «silencio oficial» del partido ante ese rumor que esa inhibición podría incluso inducir a confirmar «tales intoxicaciones», en agudo contraste con la «belicosidad ruidosa de meses anteriores». Pese al silencio de los socialistas, la locuacidad verdaderamente inesperada de Joan Reventós ha «atizado la hoguera» al creer preferible una «solución escorada a la derecha», todo en el mismo editorial del 10 de agosto de 1980, titulado «Sueños de verano».

No dice mucho esa expresión de Reventós, pero sin duda alarma al periódico y exige de los socialistas «una clara exposición de su propia alternativa al pacto UCD-Minoría Catalana, y de su estrategia para el otoño», sobre todo si hay papeles firmados por altos mandos militares de por medio. La tentación de convertir esos insólitos rumores en una sola operación que mezcle a militares, socialistas, defenestración de Suárez y derechización, escorada o no, es demasiado alta como para no reaccionar de inmediato y sin ambigüedades, haga el calor que haga. De lo contrario, «el campo de los bulos seguirá abonado para cualquier tipo de siembra», en particular cuando la condición para negociar cualquier acuerdo es la exclusión de Suárez como «*única* condición *no negociable y previa*». Ha sido precisamente esa actitud, cree el periódico, «el fulminante de las fintas y amagos de los que piensan que la ocasión la pintan calva para ocupar por sorpresa el palacio de La Moncloa».

Guste más o menos, el periódico reconoce que este «cerco a Suárez» y «todo este forcejeo» es parte de «los usos de la vida parlamentaria». Es verdad que están en el límite de lo democráticamente aceptable, porque esa coalición derechizada les haría traspasar «la estrecha puerta lateral del acceso del PSOE al Gobierno mediante la defenestración de Suárez», auxiliados por sus revoltosos barones y sin la legitimidad de unas elecciones generales. En este momento, sin embargo, es improbable que *El País* no sepa lo que sabe medio país a propósito del sotobosque golpista cuartelero, radical, moderado, bravucón o solo testimonial. El nombre de Alfonso Armada circula ya por redacciones y corrillos como ideólogo de un movimiento militar. Él lo promueve como si fuese un contragolpe destinado a sofocar el golpe duro que planean otros, y al menos el rey tiene información sobre todo ello (si es cierto lo que cuenta Armada en el almuerzo en Lérida narrado el 5 de noviembre).

Que un gobierno de coalición fuese una maniobra lícita, e incluso inscrita de forma nuclear en la tradición socialdemócrata, no diluía la convicción del periódico de que era un error en el caso español y en aquellas circunstancias. Tensaría las cuerdas de una democracia en construcción y dañaría los intereses del PSOE como partido de poder en el futuro. En realidad, el rumor contra el que va destinada la reflexión de ese editorial es otro y tiene que ver con la presunta «transformación de esa batalla política en una conspiración palaciega», porque eso sí «sería harina de otro costal y un bocado difícilmente digerible por un régimen democrático». El aviso está explícitamente destinado a abortar el mero intento o la consideración siquiera de «una eventual maniobra extraparlamentaria para derribar» a Suárez, porque «significaría, simplemente, el comienzo del fin de la experiencia parlamentaria en nuestro país». No parece disparatado imaginar que *El País* esté al tanto del documento de militares allegados al rey promoviendo salidas a la crisis, tal como difundía entonces el resentido y mesiánico general Armada. En la reunión con Suárez y el rey en 1977 que significó su cese como secretario general de la Casa del Rey había dicho que su amor por España podía hacerle pasar incluso por encima del rey. Supiesen lo que supiesen, el comentario editorial iba destinado a cortar en seco el sotobosque blando o duro de una «conspiración palaciega» contra Suárez.

Lo verdaderamente lamentable sería dilapidar el crédito socialista con un exceso de silencio táctico o con permisividad inconsecuente y que tanto «las desmedidas ambiciones» como «la concupiscencia del poder de los profesionales de la política» deformasen «patológicamente el sistema parlamentario». Esas «maniobras, conspiraciones y combinaciones» no guardan apenas relación «con los mandatos electorales» al realizarse «a extramuros de las Cortes Generales». El riesgo adicional es que conviertan «ese tejido» democrático, «al que presuntamente desean vigorizar, en algo parecido al recubrimiento de las momias, que se deshace entre las manos nada más tocarlo o se reduce a polvo al ser expuesto al aire fresco de la calle».

¿Terminará con el regreso de Suárez a la Moncloa tras sus vacaciones, el 17 de agosto, «la difusión interesada de rumores, falsedades e hipótesis sobre la vida política»? La dispersión estival había sido utilizada para una «intoxicación informativa» que no ha cogido a todos con la guardia baja, fanfarronea el periódico, pensando evidentemente en sus dos editoriales contra el amarillismo y contra los sueños de verano, de 9 y 10 de agosto. Es posible que hubiesen tenido en la cabeza otras muchas cosas y entre ellas un reportaje del *Heraldo Español* publicado el 7 de agosto. Estaba concebido para dar por fin con el valiente general que cabalgase el gigantesco caballo que aparece fotografiado en el semanario y saber a qué atenerse de una vez, «O Pavía o Prim». La propuesta iba firmada con seudónimo, cuenta Javier Cercas en *Anatomía de un instante*, y buscaba a un jinete, sí, pero para «evitar un golpe militar duro mediante un golpe militar blando que colocara a un general en la presidencia de un gobierno de unidad». Entre los nombres que barajaba ese artículo estaba Alfonso Armada, obvio promotor de la idea, y la revista emplazaba al rey a escoger entre el golpe duro y el blando, Pavía o Prim. No iba mal encaminada esa información, tóxica pero no inexacta, tenga la fiabilidad que tenga Armada cuando relató en Llérida esas dos operaciones en marcha para terminar con la pesadilla Suárez.

A finales de agosto, por fortuna, es tranquilizador «el respeto a las normas de la democracia parlamentaria» que González ha expresado enfáticamente, y «no es una observación tan obvia como pudiera parecer». En este mes «de especulaciones, unas “grotescas”, como afirma Felipe González, y otras igualmente esperpénticas, pero con algún fondo de verdad», es gratificante escuchar su compromiso de que «el PSOE prescindirá de la política conspirativa para desarrollar una estrategia parlamentaria y a la luz pública». Mantener la equívocidad o no despejarla con

claridad, escriben el 27 de agosto, podría terminar «por destruir un crédito moral —el socialista— que es muy necesario para este país». Lo que el PSOE «no debiera hacer —y parece que ya no desea hacer» es «caer en la irritación personal contra el presidente Suárez —sobre la que existe algo más que especulaciones».

Es verdad que sigue siendo temible Suárez como candidato y futuro adversario electoral, y es verdad que la situación se deteriora por momentos, tanto si amarillea la prensa excitada como si no lo hace. La aceleración o la premura o las vías indirectas seguirán siendo la peor de las salidas, aunque no está seguro el periódico de que todo el mundo lo tenga igual de claro. Si la estrategia socialista «se montara sobre la defenestración de Adolfo Suárez como cabeza visible de UCD, el PSOE se vería indefectiblemente implicado en un juego políticamente lícito, pero parlamentariamente execrable en una democracia naciente». No hay alusión alguna a conspiraciones palaciegas ni a papeles militares en ese editorial, pese a especulaciones con «algún fondo de verdad». Pero en esas fechas de agosto subsiste una incongruente «interiorización por parte de la ejecutiva del PSOE de prácticas franquistas», similar a la de UCD. Demasiados siguen entendiendo la política «como secretismo de pasillos o conspiraciones para derribar a personalidades individuales». Por eso reprueban una vía que es lícita pero maligna para una democracia que «—insistimos— debe durar». Es abiertamente corrosiva «toda la teoría de elecciones anticipadas, Gobiernos de gestión o de *notables* que se está montando para acabar con la existencia política de Suárez» y «debiera acallarse».

Es imposible saber en qué «fondo de verdad» piensa el periódico en este momento, a 27 de agosto, pero también es verdad, o lo parece, que Jordi Pujol rechazó, según cuenta en sus memorias, la viabilidad de una de las *teorías* abiertamente nocivas. Hasta su casa en Premià de Dalt se había acercado a finales del verano de 1980 Enrique Múgica para preguntarle «com veuríem que es forçés la dimissió del president del govern i la seva substitució per un militar de mentalitat democràtica», y no traduzco porque no hace ninguna falta. Por supuesto, Pujol hincha el pecho de indignación y asegura haberle expresado entonces «el meu desacord total». Esa pregunta le reveló entonces al reciente presidente de la Generalitat la «pressa molt gran» de los socialistas, «o d'una bona part dels socialistes, per arribar al poder». O Múgica actuaba por su cuenta, como es opinión habitual pero necesariamente interesada, o algún sector del partido mantuvo abierta esa salida como hipótesis de emergencia última o como recurso de *last minute*.

En ese mes de agosto, Felipe González no había descartado todavía un potencial gobierno de coalición con UCD e incluso había encargado a José María Maravall un informe para valorar ventajas e inconvenientes, obviamente sin implicación militar alguna, entre el PSOE y lo que pudiera quedar de UCD tras los sabotajes y desgarrones internos que estaba viviendo. Pese a que esa posibilidad no sería descartada en los meses siguientes, el criterio de Alfonso Guerra coincidía entonces, por una vez, con el periódico, y ambos eran decididamente partidarios de gobernar solo tras una victoria electoral. El periódico se muestra claramente contrario a una coalición que salve a Suárez, a pesar de que case bien con las estrategias de la socialdemocracia europea como vía de acceso al poder. El documento que Maravall elaboró ese verano con las ventajas e inconvenientes de un gobierno de coalición pasó de las manos de Felipe González a las de Adolfo Suárez, pero debió desestimarlos al decidirse por fin por renovar su Gobierno el 9 de septiembre y promover una moción de confianza de la que se desprendía, obviamente, el rechazo de Suárez a esa propuesta.

Lo preocupante para *El País* eran sobre todo las consecuencias indeseadas o los efectos derivados, involuntarios o incontrolables, que esas *teorías* podrían arrastrar bajo la cobertura de

la debilidad del presidente. Otros podrían aprovechar las aguas revueltas del acoso incesante a Suárez para promover y hasta legitimar salidas que ya no rozasen los límites de lo lícito sino que los vulnerasen sin más. El amarillismo que deforma e hiperboliza podía ser el mejor caldo de cultivo para soluciones o salidas extravagantes, equivocadas o incluso suicidas, tanto si contaban con la adhesión socialista como si no. La alarma del periódico podía ser infundada o fruto de la rumorología, pero no hay nada extraño en que se hiciese eco muy indirectamente —«conspiraciones palaciegas»— de movimientos de militares que visitaban al rey para acabar con Suárez, frenar el proceso autonomista y detener el ritmo de las reformas de acuerdo con la derecha reaccionaria y más excitada. La variada vegetación del sotobosque golpista atentaba contra la democracia, tanto si los socialistas habían «juguetado» con esa posibilidad, como dice el «insistente e insólito rumor», como si no lo habían hecho. Seguía siendo cosa «demasiado grave y esperpéntica para ser creída».

No cesaron los movimientos conspirativos en los meses siguientes contra Suárez e incluso se aceleraron tras su remodelación ministerial del 9 de septiembre. A esa solución había llegado el presidente tras desestimar —para arrepentirse muchos años después— la propuesta secreta de Felipe González de buscar alguna forma de coalición que permitiese sostener su Gobierno. Con renovado brío, un nutrido grupo de barones de UCD «socavan, abierta o subterráneamente», el liderazgo de Suárez: «La derecha le está buscando sustituto», dice por entonces *El País*. Quizá por eso, y con algo de énfasis impostado pero intención pacificadora, el periódico acogió favorablemente ese cambio de Gobierno y en particular la presencia en él del socialdemócrata Fernández Ordóñez. Ese era «el dato más resuelto e inequívocamente progresista del nuevo Gobierno», junto al regreso de dos centristas semiclásicos como Martín Villa y Cabanillas. Suárez podía recibir un respiro ante la presión de su propia derecha y ese Gobierno podía reconducir la legislatura blindándolo a él contra las conspiraciones golpistas, parlamentarias y extraparlamentarias.

Suárez había vuelto a salvar el pellejo *in extremis* y *El País* aplaudía moderadamente el nuevo Gobierno del 9 de septiembre. Hoy el desarrollo posterior de los acontecimientos puede hacer pensar que fue un movimiento agónico, y creo que lo fue, más allá de la confianza que pusiese en la efectividad de los relevos. No iba a frenar durante demasiado tiempo el ruido de sables ni el ruido de despachos, ni las tentativas militares ni las tentativas fraternales nacidas en su propio partido. El oxígeno dio para poco, al menos a la vista de las confidencias de uno de sus barones, Óscar Alzaga, a Enrique Múgica en otro almuerzo mes y medio después, el 31 de octubre de 1980. La maniobra defensiva de Suárez había activado a la vez la movilización nerviosa y casi exasperada de sus rebeldes internos, de la *gran derecha* que buscaba Fraga y de parte de los socialistas.

El informe de Múgica a González sobre ese almuerzo, de acuerdo con la copia de Maravall, refleja la exasperación hiperventilada de relevantes líderes de UCD. Eso incluye a Alzaga mismo, «profundamente despectivo hacia Suárez», dice Múgica, y por descontado involucra a Herrero de Miñón y a Lavilla. Todos «piensan que es fundamental eliminar a Suárez», en un clima de rebelión continuada que fue visible y audible desde todos los medios habidos y por haber. Las fórmulas que imaginan son varias, pero la que más posibilidades tendría involucra de nuevo a los socialistas para impulsar un voto de censura «pactado con UCD». La discreción había de ser fundamental para mantener el efecto sorpresa y evitar la disolución anticipada de las cámaras, potestad del presidente Suárez. Si llegase a tiempo, la pesadilla podría volver a empezar, y Suárez tendría la posibilidad de ganar otra vez unas elecciones como candidato a la presidencia y

perpetuar lo que vivían como una crónica parálisis política. Una moción de censura promovida por los socialistas neutralizaría ese riesgo y, desde luego, cuenta Múgica en su informe a González, los barones rebeldes de UCD aspiraban a sumar a Fraga a la «coalición para evitarse líos por su derecha».

Las declaraciones de Felipe González en esas mismas fechas estaban tan llenas de matices «que ni los mejores expertos en descifrar mensajes codificados» podrían obtener una «conclusión inequívoca» sobre sus relaciones con UCD y la conveniencia o no de un gobierno de coalición o de una moción que asfixiase a Suárez. Eso dice el editorial de una semana después de la reunión de Múgica con Alzaga, el 8 de noviembre. De hecho, el desconcierto «ha crecido de tal forma que resulta ya casi inadmisibles mantener por más tiempo oculta la solución del acertijo» de los socialistas. El periódico cree que conviene disipar de nuevo ambigüedades y aconseja a González que «no debiera caer en la tentación de dar sus propios pasos demasiado aprisa».

Le reclaman ahora lo que lleva el periódico pidiendo hace semanas, la clarificación de su postura, imagino que sin saber que Felipe González ha entregado a Suárez ese análisis de pros y contras con evidente intención favorable, descartada por el presidente. Por mucho que sus móviles sean «indiscutibles», sus «recientes *urgencias* políticas pueden llevarle al error», como recuerda el periódico de varias maneras en esos días saturados de emergencia, tensión y rumores. Entender ahora un gobierno de coalición «como remedio preventivo de un supuesto golpe de Estado» podría tener también un efecto inverso al deseado. Pradera pensaba entonces, a 8 de noviembre, que podía acabar sucediendo lo que cuenta la fábula del pastor, «que de tanto simular a gritos la presencia del lobo» solo consigue que nadie crea la amenaza cuando «se convierte en realidad», y hoy uno de los divulgadores militantes de la amenaza golpista es el mismo general Armada. Excepto por un incontrolable «deseo de llegar cuanto antes al poder», desde *El País* seguían sin «verse las razones» por las que «los socialistas puedan ahora pretender o exigir su entrada en el Gobierno por la puerta falsa de las maniobras extraparlamentarias, incluidos documentos firmados por altos mandos militares».

Es la segunda e inquietante alusión a altos mandos militares. La difusa y latente sospecha de que los socialistas pudieran conspirar en favor de un golpe de Estado parecido, equiparable o hermano del que llegó efectivamente el 23-F no está sustentada en documentos de ningún tipo ni en conjeturas mínimamente fiables. Sí lo está un posible Gobierno con UCD y sin Suárez, presidido por un «neutral». Un sector del PSOE creyó que era una opción aceptable para acceder al poder e incluso otro sector no descartó el trato con el general que lideraba hacía tiempo, y poco menos que a los cuatros vientos, una salida para derribar a Suárez. En realidad, la dificultad estriba en discriminar qué vías estimaron, evaluaron y descartaron los socialistas en pleno sabotaje a Suárez por parte de los suyos (y de los demás, empezando por el rey). Ese 8 de noviembre era la segunda vez que aludía el periódico a una eventualidad tóxica y en un tono que no deja lugar a dudas sobre su peligrosidad. La anterior había sido el 1 de agosto, cuando deploraron la mera posibilidad de contar con un «alto mando militar en la Moncloa», en rumor tan *esperpéntico* como *increíble*.

Confluyen ahí dos cosas distintas, por tanto: una es políticamente lícita pero arriesgada en una democracia frágil y aún en rodaje. La otra implica a altos mandos militares y a esas alturas, en noviembre, el periódico la descarta por completo pero cree que no hace lo mismo algún sector socialista. Lo creyó también Miguel Ángel Aguilar en su crónica del juicio del 23-F, un año después del golpe, en febrero de 1982. Remataba su artículo mencionando «una fuente militar de toda solvencia» que explicaba la participación de Armada en el golpe no solo por su propio afán redentor sino también por «las esperanzas que le hicieron concebir muchos de sus interlocutores y

entre ellos algunos socialistas, cuya estrategia de ataque al presidente Suárez convalidaba como aceptables soluciones muy discutibles».

Esa *salida* potencial no tenía nada de misterioso y formó parte de las múltiples conspiraciones en marcha y de las fantasías o informaciones de numerosos medios en esos meses. Dos ejemplos relevantes pueden rehacer el clima acelerado o de peligrosa temeridad que se vivía. Recuerda en sus memorias Santiago Carrillo que Ramón Tamames «se pronunció por la entrada de algún general en el Gobierno, por dos veces seguidas, a lo que yo contesté desautorizándole públicamente». Carrillo está tan al tanto como Tamames de los movimientos que lidera y difunde cada vez que puede Armada para favorecer esa salida a través de «un alto mando militar», como él mismo, sin decir nunca lo mismo en todos los sitios o modulando su discurso en función del interlocutor y la circunstancia. También en sus diarios Fraga registra el 22 de noviembre la «información segura» que tiene sobre la disposición del general a presidir un Gobierno de concentración con UCD y PSOE, y esa habría sido la propuesta que Pujol descartó en su casa de Premià de Dalt a finales de verano, según sus memorias.

Contra esa eventualidad se activó por dos veces el periódico, lo que no prejuzga que los socialistas hubiesen optado por esa vía. Nada pudo ser demasiado claro, pero cuando ese editorial del 8 de noviembre aludía a «documentos firmados por altos mandos militares» en el contexto de maniobras socialistas para acceder al poder «por la puerta falsa», Pradera podría estar hablando sin certidumbre pero no sin algún fundamento, o con la sospecha de que las intoxicaciones llevan «algún fondo de verdad», como había dicho *El País* el 10 de agosto. En el periódico no hicieron nada distinto de lo que hizo Jordi Pujol al desestimar a finales del verano la hipótesis de Múgica de una coalición de Gobierno presidida por un «militar demócrata», o lo que hizo Carrillo al desautorizar a Tamames en especulaciones parecidas. La alusión del editorial ponía sobre la mesa un rumor sobre el nivel de la relación que el PSOE, la ejecutiva del PSOE, solo su cúpula más restringida o solo alguno o algunos de sus miembros, mantuvo ante un gobierno de coalición presidido por un militar.

Hace unos años, mientras Javier Cercas armaba su *Anatomía de un instante*, Felipe González desmintió sin vacilar durante un almuerzo (con Pradera y Natalia Rodríguez-Salmones, y Miguel Ángel Aguilar y Juby Bustamante) cualquiera de esas combinaciones, o las atribuyó a iniciativas individuales no avaladas por la ejecutiva (y Cercas no desmiente mi nebulosa memoria). Sin embargo, el modo en que Pradera aludió años después a este episodio dejaba en una suerte de fatalidad equivocada el mero roce con quien difundía cuanto podía sus planes preventivos contra el golpe duro para favorecer un golpe blando. Explicó esos contactos Pradera con su firma el 24 de enero de 1993 como fruto de la lógica del «*todo vale* para derribar al gobierno». Amparados en ella contra Suárez, dice Pradera, «algunos dirigentes» del PSOE «establecieron imprudentes y comprometedores contactos con el general Armada», como efectivamente sucedió, aunque de ahí no se deduzca conformidad, acuerdo o respaldo a sus planes.

Los socialistas pudieron considerar esas maquinaciones de Armada o, cuando menos, aspirar a enterarse de primera mano de sus planes, y eso es lo que sucedió en el almuerzo en Lérida que reunió a tres destacados socialistas con él y donde el general defendió los pasos para conducir a un Gobierno presidido por un «neutral». En esas fechas eran responsables de asuntos militares de los socialistas Enrique Múgica y Luis Solana. En la copia del informe que González pidió a Múgica sobre aquel almuerzo, fechada a 5 de noviembre (tres días antes del editorial del día 8 que alude a «altos mandos militares»), se detalla la propuesta de la «presidencia por un neutral», pero también el *modus operandi* que Armada propone: «podría ser que el rey» llamase a Palacio

a los líderes políticos, «sin ninguna exclusión» (lo que incluye a los comunistas), y sugería que el rey se «viera *confortado* por la formulación que hiciera Felipe» en favor de esa coalición presidida por un «neutral». ¿Podía pensar Armada que ese hombre *neutral* era él? ¿Se barajó como una más de las alternativas a presidir la coalición? ¿Escucharon los tres socialistas presentes la propuesta y la archivaron sin más, dándola por absurda? Pradera sabía, como dijo en 1993, que había habido esos contactos «imprudentes y comprometedores», sin que eso implicase pacto o presidencia alguna, aunque esa acabase siendo efectivamente la función frustrada de Armada en el golpe del 23-F, tres meses después, cuando Suárez creyó que su dimisión a finales de enero podría sofocar las tentativas golpistas en marcha.

Lo que deplora Pradera en 1993 y lo que deploró el periódico en 1980 fue tanto la tentación socialista de acceder al poder por una vía distinta de una mayoría absoluta electoral como los *contactos* con un general que lideraba entonces movimientos de militares para buscar salidas a la situación. El encuentro de los socialistas con Armada podía ser convertido por él en falsa complicidad, en tácita conformidad o incluso en adhesión plausible con esa solución inaceptable, en lugar de favorecer su total neutralización atajando sin reservas cualquier insinuación parecida. Nada de esto induce a pensar ni en conspiración golpista alguna de los socialistas —es un absurdo retorcido y capcioso— ni tampoco prueba que Armada fuese un candidato aceptable en la ejecutiva o para la mayoría del partido. La irresponsabilidad que reprueban Pradera y el periódico es no haber abortado la rumorología que el propio Armada y otros propiciarían. Quizá no lo hicieron porque era una hipótesis tan *esperpéntica* que desmentirla era más comprometido que obviarla, o quizá no lo hicieron porque en la estrategia de *acoso y derribo a Suárez* aumentaba la presión sobre el presidente, sin sentirse comprometidos con semejante solución.

La astucia de Armada en el almuerzo de Lérida pudo desarbolar a los socialistas presentes o cuando menos persuadirlos de estar ante una operación aceptable: pudo engañarlos llanamente mintiendo sobre la petición de dimisión del rey a Suárez o sobre su verdadero papel en un golpe preventivo, o sobre la gravedad y consistencia de los impulsos golpistas de otros militares como el mismo Tejero. Que la mentira habilidosa era parte de su temple lo sabemos positivamente y que negó hasta el final de su vida la menor participación en el 23-F también. El papel que se reservaba consistía, según él, en encauzar constitucionalmente el sotobosque golpista, como si fuera el guarda forestal que quema rastrojos de forma controlada para prevenir incendios más graves y devastadores. En su versión, por tanto, aparecía Armada como ideólogo de un golpe blando preventivo y enemigo de otros movimientos de militares. Esas otras tentativas golpistas más expeditivas las describió él mismo en el almuerzo, en casa de Siurana, al identificar un ala «dura» del Ejército y la puesta en marcha de «una nueva Galaxia, con ocupación de Moncloa y Zarzuela». Ese grupo actuaría primero y solo después justificaría la acción proyectada con un «general en activo al frente» (que es, por cierto, lo que iba a suceder efectivamente en febrero). Dicen tener el aval «del área Reagan» si ganaba las elecciones presidenciales de 1980 porque «no les apoyaría, pero tampoco obstruirían» la operación en caso de prosperar. Por fortuna, sin embargo, convenía conservar la calma y atender a la «otra onda» del Ejército, la que encarnaba él mismo, capaz de forzar una prórroga o un aplazamiento de esa trama dura, y «han dicho que se tranquilizarían hasta enero». Les han pedido tiempo ante la posibilidad de «reconducir la situación por vías constitucionales», aunque nadie ignora a la vez que «difícilmente se hallará alguien para oponerse a una Galaxia bien montada». La propuesta que lidera Armada, en cambio, retoma la «salida» número cuatro del documento de junio entregado por «un grupo de militares» al rey para acabar con Suárez a través de una moción de censura con los socialistas.

El informe de Múgica no comenta esas ideas pero tampoco transpira suspicacia ni rechazo sino una suerte de neutralidad ante el plan, incluidos los riesgos que detalla Armada. Uno de ellos es que Suárez «olfatea el peligro» y ha buscado ya financiación para la campaña electoral con vistas a disolver las cámaras. Suárez solo ha escuchado «negativas» en esos medios, según Armada, y en general, los sectores económicos y financieros «están dispuestos» a expresar en público, a través de los medios de comunicación, «la necesidad de que Suárez se vaya». También la Iglesia, en plena fase de «remodelación conservadora» de su Conferencia Episcopal, tiene «partidarios de la coalición» con los socialistas. Desde luego, este grupo de militares, que aspira «a reconducir la situación por vías constitucionales», también ha mantenido numerosas «conversaciones» con los responsables de la «operación de Herrero de Miñón» contra Suárez. De las cinco divisiones militares «operativas», calcula Armada, cuatro de ellas contarían con mandos partidarios del «gobierno de coalición» sin comunistas, y «les gustaría que Felipe lo dijera» así en público. El único que anda suelto es Fraga, «muy nervioso, porque no sabe por dónde pueden ir los tiros [*sic*]», y busca como puede contactos en todas direcciones: al sentirse «desplazado, encabrona a los duros a pasos acelerados». Si Suárez persistiese en su voluntad de disolver las cámaras, cosa particularmente «peligrosa por el desmadre nacionalista», este grupo recurriría a «cualquier acción que no vulnerara la democracia». Excluyen también, según el informe de Múgica, «una petición de militares a la Corona» porque esa petición «quebraría la salida constitucional a la crisis».

No está claro si la vocación constitucional del plan excluía de antemano al emisario de la propuesta, el general Armada, no por militar sino por carecer de acta de diputado. En todo caso, fuese o no constitucional la presidencia militar de un gobierno de coalición, ¿lo dijo todo en ese almuerzo? ¿Se autopostuló tímida o indirectamente, aceptó ser postulado por los demás? ¿Se creyeron Múgica, Reventós o Siurana la posibilidad de un gobierno de coalición promovido por él bajo una presidencia distinta del propio Armada? Es altamente improbable que Armada no se tuviese a sí mismo por esa figura *neutral* para presidir un gobierno de salvación, como de hecho iba a suceder tres meses después, en el golpe del 23-F. Según Leopoldo Calvo-Sotelo, Múgica contaba, a propósito del almuerzo de Lérida, la interpelación directa de Joan Reventós a Armada cuando este se preguntaba retóricamente sobre el posible presidente para el Gobierno que fabulaba. Que Reventós adujese su nombre («¿Quién va a presidirlo? Pues tú») no parece razón suficiente para convertir esa respuesta en proyecto firme ni respaldado por el partido ni por su ejecutiva. Pudieron ser víctimas de un trilerio taimado, o pudo ganarles su astucia retórica y hábil o incluso pudieron transigir con la figura de un general que a sí mismo se otorgaba un improbable papel «neutral».

Lo peligroso en todo caso era entrar en el radio de acción de un conspirador militar llamado a salvar al país por encima de su lealtad al rey: su mejor máscara pasaba por promover una acción moderada y democrática que algunos socialistas pudieron creerse o él supo transmitir convincentemente. Que se sentía llamado a ello parece irrefutable, a la vista de los testigos de entonces y a la vista del efectivo golpe del 23-F con Armada, recién nombrado segundo jefe de Estado Mayor del Ejército y de vuelta en Madrid, íntimamente implicado. Ese era en realidad el problema con el que bregaba por su cuenta y desde tiempo atrás el general Sabino Fernández Campo, sustituto de Armada en la Casa Real y claramente enemistado con él. Es de nuevo Múgica quien ha tenido un almuerzo con Fernández Campo a 10 de noviembre, una semana después de la cita de Lérida, e informa a Felipe González en otro memorándum que conozco en la copia de Maravall.

Casi no hace falta decir que la «situación sigue deteriorándose» y, en particular, «es necesario racionalizar el proceso autonómico» ante un Suárez desarbolado, que «no toca tierra» y «solo piensa en conspiraciones contra él» con «enemigos por todas partes», lo cual no deja de ser una percepción perfectamente sensata y exacta por parte de Suárez. Pero es más preocupante la dificultad de proteger al rey ante solicitudes de audiencias de militares que «pudieran llevar el documento» que contiene «un posible llamamiento al monarca de militares», como si reclamasen de él con ese documento alguna forma de liderazgo. Si llegase a suceder, razona Sabino Fernández Campo, él mismo se encontraría en una situación complicada «al no poder hacerles frente y al no poder ni querer quebrar las vías institucionales». La prolongada relación amistosa de más de quince años entre Armada y el rey incluye necesariamente al general entre quienes quisieran verle en esas fechas.

Quince días después de ese almuerzo, Miguel Ángel Aguilar, recién incorporado a *El País* en julio de 1980, firmaba una crónica el 27 de noviembre para informar sobre lo que acababa de escuchar en un acto público: estaba en marcha un «gobierno de gestión» inminente encabezado por otro barón conspirador de UCD, Alfonso Osorio –se le vio en el Parlamento al día siguiente recibiendo precipitados parabienes–. No habría disolución de las cámaras porque una moción de censura lo impediría y, en todo caso, «una suave solicitud del Rey bastaría para obtener la dimisión del presidente» Suárez, dice Aguilar. El hecho de que Osorio fuese parlamentario resultaba «imprescindible para una solución como la que se busca», lo cual daría la cuadratura del círculo de la propuesta que Armada había relatado a sus comensales de Lérida unas pocas semanas antes.

Tres semanas después del informe de Múgica y tres días después de este plan en torno a Alfonso Osorio, el periódico cree que «la operación socialista de acoso y derribo de Adolfo Suárez parece ir en paralelo con el robustecimiento de las corrientes más conservadoras de UCD e incluso con un eventual entendimiento de Gobierno con los hombres de Fraga». No parecen ver los socialistas todavía, en este 30 de noviembre, que «el peor servicio que podría prestar al país el partido de la oposición sería el de primar por la derecha al sector crítico del partido gubernamental». No hay alusión alguna a *altos mandos militares* ni a *conspiraciones palaciegas*, ni la va a haber en editoriales futuros hasta el golpe de verdad.

Quizá precisamente por eso, porque incluso el mero contacto con Armada era obviamente *imprudente y comprometedor*, según diría Pradera en 1993, el propio Múgica había preferido negar en público que «en aquella reunión [de Lérida] se hiciera la propuesta de un Gobierno de coalición “presidido por una persona independiente o un general”». Lo dijo en el juicio del 23-F y lo recoge *El País* el 15 de enero de 1982. Hoy sabemos que sí apareció en la comida la candidatura «neutral» para ese gobierno de coalición, a propuesta de un general Armada que sin duda se sentía neutral y hasta el perfecto neutralizador. Sabemos también que Pujol había descartado a finales del verano, en su casa de Premià de Dalt, la presidencia de ese Gobierno «per un militar de mentalitat democràtica», como sabemos que Calvo-Sotelo recordaba el relato de Múgica en el que él mismo y Reventós podían caer en la trampa de Armada, o no parecían descartarla. Quizá el editorial del 10 de agosto que deploraba la incapacidad para desconectar de la política en los calores estivales *enfiebreidos* estuviese motivado por la hiperactividad a veces atolondrada de Múgica, presidente de la Comisión de Defensa y miembro relevante del partido. Esos contactos habían durado, al menos, hasta la redacción del informe del 5 de noviembre. Pudieron terminarse poco después, aunque en la misma sesión del juicio del 23-F tanto Siurana

como Reventós negasen incluso que en aquel almuerzo se tratase de gobierno alguno de coalición, con presidente neutral o sin él.

Una vieja ley política aconsejaba «amarrarse al adversario político para alcanzar objetivos comunes», decía *El País* el 30 de noviembre, y ese objetivo común consistía en preservar la democracia y no conculcar la transparencia de sus mecanismos normales. Algo tan elemental todavía «no parece comprenderlo del todo la dirección socialista», si está, como parece, dispuesta a abrir «sus brazos ante las huestes de Fraga Iribarne» y congratularse del «avance ideológico» de la derecha de UCD y sus sectores «neoconfesionales y conservadores». Nadie entendería esa operación *contra natura* y no hay espacio ni margen democrático de maniobra para emprenderla. Por eso el editorialista lanza un axioma bíblico que suena a ultimátum político para que abandonen los socialistas toda estrategia de urgencia y sintonicen con la paciencia y la astucia de Alfonso Guerra para ganar el poder con una mayoría absoluta: «Toda esta conspiración de pasillos puede servir para alcanzar el Gobierno, pero jamás para lograr el poder y la razón.» Por tanto, «el PSOE debe proceder a la reflexión de si desea unos cuantos ministerios mañana o ayudar a construir un mejor modelo de sociedad, habitable por todos, a más largo plazo».

El combate contra las malas estrategias había encontrado un aliado útil en la coyuntura internacional, y me parece que es un ingrediente importante en la búsqueda de consistencia democrática de *El País* en el viaje al poder de los socialistas. La cobertura que el periódico hizo de la presencia del Partido Radical en España tuvo que ver directamente con la angustia ética y política que destilan Pradera y *El País*, *El País* y Pradera. Quince días atrás, Juan Cruz cubría una populosa rueda de prensa de Marco Pannella, el mismo día que el editorial parecía un grito de auxilio pronunciado en la calle o colgado de la solapa en favor de la ética del Partido Radical. Había un amplio sector de la ciudadanía en España que «puede que no tenga un exacto conocimiento de lo que busca, pero, como ya viene sucediendo en Italia, tiene una idea bastante clara de esa izquierda clásica que tampoco le hace feliz».

Por eso rotulan un editorial de mediados de noviembre con un contundente «¿Radical? Sí, gracias», a imitación del difundidísimo lema contra la energía nuclear. España había llegado muy tarde a la democracia, pero ya parecen sus sectores progresistas también desencantados, en medio de una Europa que solo ofrece «el prolongado encallecimiento de Gobiernos conservadores o islotes de socialdemocracias empeñadas aún en demostrar su respetabilidad administrando la sociedad capitalista con más lealtad que afán corrector». Pannella en cambio ofrecía una «mercancía bastante más sugerente e imaginativa que la que nos deparan nuestros propios partidos» y tácitamente ese editorial invita a la apropiación, a la impregnación o a la metabolización de algunos de ellos.

Eso significa otro decálogo imbatible de virtudes menospreciadas en los programas de una izquierda demasiado pegada a los despachos y las componendas, con falta de ambición ideológica e insensible a demandas latentes de nuevos sectores profesionales, universitarios, gestados en la última década del franquismo, exsimpatizantes revolucionarios algunos de ellos y hoy padres de familia, satisfechas clases medias y celosos de sus valores de izquierda. Quizá los votantes *radicales* no sean más que «ácratas de terciopelo», pero en ellos se concentra buena parte de un conjunto deseable y desprotegido de valores civiles, culturales y políticos: «Un socialismo libertario que rechaza el acceso al poder; un laicismo desprovisto de connotaciones anticlericales; la bandera de una genuina moral civil; la condena rotunda de la violencia –“violencia, ni en la cama”», dicen los radicalesy del militarismo; el rechazo de los héroes y de los mártires; una firme creencia en que la vida humana es en todo momento un valor sagrado a respetar y que la existencia

del adversario político no entorpece el diálogo, sino que lo enriquece; la renuncia a vencer y la pasión por convencer sin coaccionar; el transnacionalismo político que aspira a superar los Estados y las nacionalidades de los Estados; la revitalización de los movimientos de desobediencia civil según el patrón del pacifismo gandhiano; y una constante batalla contra el autoritarismo mediante el planteamiento de objetivos sectoriales en defensa de los afectados por legislaciones democráticas, pero opresivas: abortistas, divorcistas, homosexuales, presos, objetores militares, atrapados somáticamente por las drogas legales o ilegales, etcétera; los marginados, en suma, de ese *balneario* que es Europa occidental.»

Era el segundo y potente alegato en favor de los valores radicales en medio de un *balneario* que delata de nuevo a Pradera, como autor o como inspirador de ese editorial: la metáfora había llamado la atención de Vázquez Montalbán en *Triunfo* dos años atrás, cuando Pradera contestaba a una entrevista sobre la necesidad y la dificultad de construir un socialismo en democracia. Es el guiño inconfundible de su mano detrás de ese decálogo de insuficiencias de la izquierda, un tanto celestialmente encarnado por los radicales. La expansión entusiasta no es tanto una apología de los radicales cuando una condena de prácticas socialistas demasiado rácanas de democracia. Habla Pradera por boca del periódico pero también por boca de una nueva tipología «de marginado que no se siente discriminado en razón de su sexo, que no objeta el servicio de armas, que no precisa del divorcio o del aborto, que no padece la cárcel o la dependencia de hábitos nocivos y perseguidos, pero que se siente defraudado por un modelo de sociedad timorato, moralmente corrupto, violento hasta cuando condena la violencia, y cuya expresión política pasa por maniobras y componendas parlamentarias que escapan a la comprensión del ciudadano más avisado».

Pero de la nube de los buenos deseos se cae enseguida en la patria de la política cotidiana. Nadie era capaz de sacar una conclusión clara sobre las maniobras conspirativas y extraparlamentarias y nadie debería sorprenderse así de que esta izquierda liberal, ácrata y con «sentido del humor» capte una gran simpatía cuando reabre «el banderín de enganche de las libertades y la tolerancia» instalados afrentosamente ante las puertas «de unos partidos históricos y respetables, pero obsesionados por el aparato y por la correlación de fuerzas hacia el poder y ajenos a su entorno y hasta a su militancia». Esos partidos reclaman sin cesar la democracia a los demás sin practicarla ellos hasta llegar a «la prohibición de las tendencias y la adopción de medidas disciplinarias contra los militantes que manifiestan públicamente sus opiniones discrepantes». Es probable por tanto que quien «prenda en su solapa la seña “¿Radical?; sí, gracias”, no sepa lo que quiere pero sí lo que no quiere».

Lo que hará *El País* en los próximos dos meses, hasta la dimisión de Suárez a finales de enero de 1981, será la defensa de su legitimidad y cuestionar una y otra vez la abusiva estrategia de «acoso y derribo de Suárez» que mantiene el PSOE. Es preferible que encuentre las vías democráticas para vencerlo sin incurrir en atajos ni en pactos de urgencia, so riesgo de perder tanto el poder como la razón. No solo era desmovilizador y decepcionante, a la luz de las vibrantes aspiraciones *radicales*, sino que podía debilitar a la misma democracia. Había algo espurio en esa doble estrategia de pinza y sabotaje y, en el fondo, ahondaba la desconfianza de los ciudadanos en la medida en que comprometía a los socialistas en soluciones que minaban sus francas posibilidades de futuro.

A finales de año, ya en diciembre, el responsable de formación del PSOE, José María Maravall, intervenía en Siglo XXI para censurar la desatención a la desigualdad como auténtico problema de la sociedad y la saturación de «rumores o de noticias acerca de conspiraciones de

salón». La desafección o el desencanto no eran hegemónicos, porque la democracia seguía manteniendo un respaldo mayoritario, a pesar del crecimiento incesante y «forzoso» de esa desmovilización. De hecho, hasta dos meses después, ya al hilo de la dimisión de Suárez, el comentario editorial del periódico a 30 de enero de 1981 no vuelve a abordar en ningún sentido el «enfermo clima de conspiraciones de pasillo y de maniobras extramuros del Congreso», pero sí sospecha que esa dimisión inexplicada llega «trufada de presagios y rumores» de la peor tradición decimonónica. Es ya inconfundible la «escalada permanente de las fuerzas reaccionarias de este país», dispuestas a «empalmar la Monarquía parlamentaria con el franquismo». Sin duda, por tanto, para entonces la mejor opción había de ser, con Suárez dimitido y sin explicación política alguna, «un Gobierno de coalición UCD-PSOE, presidido por un centrista bien visto por los socialistas», conjurado a convocar inmediatas elecciones generales. Nadie iba a quererlas pero serían «la salida menos mala».

El catálogo de desventuras será pronto descorazonador. Para ser exactos, en el corazón de Pradera la desventura se llama también Real Sociedad Club de Fútbol. Pese a la insistencia de Cebrián, Pradera había optado hacía ya mucho tiempo por el poder del anonimato contra el protagonismo de la autoría. No escribiría artículos firmados o lo haría solo muy de vez en cuando, a veces incluso solo deportivamente entregado a la causa mayor de sus euforias aquellos años, los éxitos de su club de fútbol; en alguno insospechadamente identificado como «hincha de la Real Sociedad». Ha disfrutado a principios de 1980 su condición de invicto –«hemos padecido demasiado para turbar la euforia del campeonato de invierno»–, pero enrojece de vergüenza junto a su compañero de grada en Chamartín, Alberto Machimbarrena, «ante la estupidez hortera de tanto patriotismo sin causa». Los atronadores gritos de «¡España, España!» en las jugadas del Atlético de Madrid querían excluir de la condición de españoles a un equipo con nada menos que nueve jugadores en la selección nacional. Las depresiones futbolísticas sirven también para hablar de política, levemente desesperado ante el juego de su equipo («no es esto, no es esto»), pero también dispuesto a repudiar, al hilo de la Liga de fútbol, la «cacería contra la libertad de expresión organizada desde esa finca de la Santa Casa» que es el Ministerio de Justicia (aunque esta vez el compañero de grada en Chamartín era Ramón Recalde).

También para reírse del estilo gomoso de Luis María Ansón sirve otro partido más, y otra derrota de la Real. Sus lectores saben desde octubre de 1979 que Ansón pertenece a la especie especialmente aborrecida del *semiculto*, víctima común del «deslumbramiento, entre decimonónico y subdesarrollado, que produce en las sociedades semicultas la posesión de un título universitario». Como presidente de la Asociación de la Prensa, Ansón quiere exigir un título universitario para ejercer el periodismo. Cree que «la aspiración suprema de un ser humano» consiste en colgar en la pared «uno de esos diplomas rubricados y sellados que acreditan la condición de licenciado». En una sociedad evolucionada, sin embargo, a «la gente se le juzga por sus obras y no por sus pergaminos». Lo peor es que este «nuevo Virgilio, cicerone coercitivo y paternal de sus atónitos colegas, pretende además que no valga cualquier título universitario, sino tan solo el que expide la facultad de Ciencias (?) de la Información». En realidad, Ansón parece creer, «como Stalin de los escritores, que un periodista es un “ingeniero de almas” y que solo la facultad de Ciencias de la Información tiene el secreto de esa tecnología espiritual». Ansón estaba decidido a «hacernos ingresar colectivamente en el universo de las novelas de Galdós y convertirnos en funcionarios del Estado o en empleados de la industria y el comercio», plenamente lanzado ya «en su mal viaje hacia las sordideces del pasado».

Desventuras más graves abrumen en enero de 1981. Las violencias combinadas de la

ultraderecha y la ultraizquierda desgarran sin descanso el tejido social, «como paso previo para el entierro de las instituciones democráticas». Tampoco ayuda Suárez con un «gobierno semiparalizado» y en «un enfermizo clima de conspiraciones de pasillo y de maniobras extramuros del Congreso, más propio de la corte de los milagros de la España rural decimonónica que de la Monarquía parlamentaria de una sociedad moderna». Parecía la profecía del golpe o la fábula del pastor desoído.

CONSECUENCIAS IMPREVISTAS

En el gesto de Adolfo Suárez y del teniente general Manuel Gutiérrez Mellado había sobre todo fatalidad la tarde del 23 de febrero de 1981. En sus movimientos reflejos ante la ocupación militar del Congreso, en la valentía de su enfrentamiento personal, en su hierática imperturbabilidad tras volver a sus escaños, se desarrollaba a cámara lenta el cumplimiento de una amenaza o la confirmación de una ruptura traumática del proceso democrático. Actuaron accionados por una suerte de piloto automático largamente entrenado o no sorprendido por los hechos ni por los uniformes, tampoco paralizado ni agazapado ante el golpe militar. Se cumplía esa tarde, en plena votación de investidura del candidato Leopoldo Calvo-Sotelo a presidente del Gobierno, el síndrome que había sido rumor y consigna crispada en los últimos meses.

Cuando una semana antes de la dimisión de Suárez el periódico había criticado la «línea de sombra» que iba del ministerio franquista de Manuel Fraga Iribarne al ucedista Juan José Rosón no anunciaba golpe alguno, pero sí deploraba con inusitada dureza la irresponsabilidad de no haber relevado «cuando todavía era tiempo» a los mandos policiales comprometidos con la represión política durante la dictadura. Se debía haber adecuado «el aparato de seguridad del Estado heredado del franquismo» a las «necesidades, los valores y los principios de la Monarquía parlamentaria y del sistema de gobierno constitucional». Hoy seguían en sus puestos saboteadores de la democracia, a menudo a cara descubierta y con hipócrita acatamiento al nuevo ordenamiento jurídico. La sociedad esperará todavía durante mucho tiempo «una explicación satisfactoria» de Martín Villa, «aunque sea en un artículo de memorias, por sus nupcias político-administrativas con el comisario Conesa» (el mismo que había interrogado a Pradera quince años atrás) y por «su sostenida decisión de encomendar los puestos claves del aparato de seguridad del Estado a personas de las que resultaba razonable presumir convicciones antidemocráticas, cuando no conexiones con bandas ultraderechistas».

Esa «grave responsabilidad» se complica más todavía con la sospecha sobre «un terrorismo que el Estado *no puede* erradicar, como es el que asuela el País Vasco». Pero es peor la sospecha de «un terrorismo que ciertos sectores del aparato institucional *no quieren* suprimir». La disquisición especulativa del periódico pone al Gobierno al borde de la permisividad del terrorismo de Estado contra el terrorismo de ETA: «Entre ese *no poder* y ese *no querer* se sitúa el turbio y complejo espacio de las complicidades activas, de los encubrimientos culposos, de los silencios cobardes y de las vueltas de cabeza temerosas.» Pero lo verdaderamente grave en democracia, a cinco años de la muerte de Franco, consiste en la perpetuación de una *línea de sombra* que atañe tanto a quienes han protegido a antiguos policías y mandos militares adictos al antiguo régimen como a quienes no han dado muestras de acatamiento a la democracia. Falta una semana para el golpe de Estado y la amenaza late tras esa *línea de sombra* que comienza con

Manuel Fraga, prosigue con Ibáñez Freire, Rodolfo Martín Villa y concluye –por ahora– con Juan José Rosón».

A la nueva luz que desvela el golpe, entendía *El País* de otro modo, o fingía entender de otro modo, la dimisión de Suárez el 30 de enero de 1981. Pero la hacía todavía más grave: a la «falta de coraje» del presidente dimisionario le sumaban ahora la deshonra de aparecer como un abortado general Della Rovere, incapacitado para cumplir con su fingida conversión antifascista hasta la verdad final del fusilamiento. Suárez se había ido «deprisa y corriendo, con un sinfín de amarguras y muy pocas agallas», decía el periódico al día siguiente de su dimisión, en unas líneas que fueron parte del primer y más duro enfrentamiento que vivieron en la caja negra Cebrián y Pradera, según el testimonio personal de Pradera a Javier Cercas. Fue la primera vez que disintieron de forma radical y áspera ante el tono o el contenido de un editorial: Pradera le confió a Cercas que el editorial lo había escrito Cebrián. Incluso rebajado de la insólita acritud que destila, no guarda coherencia con el lenguaje y el tono de otros muchos que aquí he atribuido, conjetural y atrevidamente, a Pradera. Este es un golpe a machete y sin piedad. Tras una catarata de reproches a Suárez por su inhibición o su incomparecencia política, no llega ni al farsante cumplido de la película de Roberto Rossellini, encarnado por Vittorio de Sica: igual que habían dicho meses atrás del ministro dimitido Manuel Clavero, Suárez había sido solo en apariencia «un general Della Rovere convencido y transmutado en su papel de defensor de la democracia».

La misma falta de agallas había asomado imprudentemente en el primer editorial en defensa de la Constitución, publicado a las diez de la noche del 23 de febrero. Fue revisado por Cebrián y escrito por Pradera –«enciérrate y escribe», pudo haberle dicho, recuerda Cebrián–, tras vencer la prevención de Polanco y Ortega Spottorno a lanzar esa edición especial (y a la vista de la resistencia de Pedro J. Ramírez a hacer lo mismo en *Diario 16*). En las sucesivas ediciones de esa misma noche se cayó de la primera versión publicada «la falta de coraje del presidente en funciones»: era la segunda acusación de cobardía continuada contra un presidente democrático políticamente desahuciado. Cinco días después, podía y debía entenderse como una disculpa del periódico la evocación explícita de su *cobardía* en la dimisión, pero también ya el «indudable rasgo de valentía e identificación con su figura pública al permanecer erguido en su escaño mientras los sediciosos disparaban sus metralletas». El periódico sabía del exceso cometido en el editorial de las diez de la noche contra el golpe –«en un primer momento no lo dijimos así, debido a la confusión de las noticias que llegaban»–, suprimía de las ediciones posteriores el insulto y rectificaba días después, ya que «bien merece la pena señalar hoy que Adolfo Suárez durante el secuestro estuvo, a nuestro juicio, a la altura de sus funciones como presidente».

Pero seguían creyendo que Suárez había huido en el fragor de la batalla, sin explicaciones políticas ni antes ni después de dimitir, ante la presión de una derecha en trance de sublevación contra la ley de divorcio, contra la ley de autonomía universitaria y contra «la carrera de improvisaciones del Estado autonómico» y sus «consensos con freno y marcha atrás». La ausencia de la menor explicación política a la dimisión de Suárez había exasperado al periódico hasta la ofensa personal, empujada quizá por la ira y la frustración del joven director, Cebrián. Creyeron que «es sencillamente un insulto al pueblo español irse como Suárez se ha ido, dando una espantada digna de la famosa e histórica de El Gallo», como es también una «vergüenza que el primer partido del parlamento no sea capaz de explicar la dimisión de su propio presidente».

Con su renuncia no había propiciado una crisis de Gobierno sino «una escalada permanente de las fuerzas reaccionarias de este país». No solo no la había frenado, como pudo ser su intención real, sino que quizá había alentado sin querer unas «presiones extraparlamentarias» que

retrotraían a España al siglo XIX, como había dicho un editorial anterior, y como repetiría el editorial que condenaba el golpe de Estado. Es verdad que tras su dimisión, el 18 de febrero de 1981, le decían «Adiós, Suárez, adiós», pero es verdad también que hacían directamente responsable al «poder histórico de este país», intolerante ante el final del consenso y el ejercicio efectivo de una oposición política. Cuando eso había sucedido, «el poder histórico de este país solo parece tener dos respuestas: el miedo y la violencia». Quizá «Suárez ha elegido el miedo», como dice Cebrián despidiendo a Suárez el 18 de febrero, pero sin duda «el poder histórico» había escogido ya la violencia.

Los hechos de la tarde del 23 de febrero ratificaban esa intuición e iluminaban de la peor manera el obstinado silencio de Suárez, su equipo de Gobierno y su partido. No había sido razón suficiente para dimitir su «derrumbamiento» psicológico. El poder de la UCD y de algunos ministros concretos, en particular Martín Villa, había sido permisivo, pusilánime y en el fondo cómplice por omisión al inhibirse frente a maniobras que prosperaron ante la «increíble ignorancia» de los servicios secretos. Fueron inconsecuentes con los indicios de sublevación que los mandos y los papeles firmados por militares habían diseminado incluso en reuniones públicas y periódicas. A los dos años de la Constitución, regresaba el viejo hábito español y Suárez había ingresado ya en «la saga de los presidentes que no acaban sus mandatos y que se retiran por la puerta trasera por presiones extraparlamentarias».

La responsabilidad estaba alojada también entre quienes armaban lentamente una gran derecha empresarial y política que había saboteado una y otra vez, incluso desde fuera del Parlamento, la viabilidad del Gobierno de Suárez. También eran responsables aquellos que habían vivido «un enfervorizado ambiente de unanimidades aclamatorias» en torno a Fraga, aderezado con «una carretada de lugares comunes sobre los males que aquejan a España», como sucedió en el congreso de Alianza Popular celebrado muy pocos días antes del golpe del 23 de febrero. Lo habían sido también, decía ese editorial escrito antes del golpe, aquellos que habían consentido sin zanjarlos rumores crónicos sobre un gobierno de salvación con un militar al frente. La línea argumental antes y después del golpe no variaría: no se había cesado en sus puestos a quienes maniobraban o toleraban maniobras conspirativas desde lugares de responsabilidad política, y ni Suárez ni los barones de su partido actuaron a la altura de lo exigible, «ahí está todo el tinglado ucedista sometido a la conspiración y la intriga de un puñado de personas que ponen en peligro con sus juegos la estabilidad de todo el país», escribe Cebrián el 18 de febrero.

Por eso el editorial de la misma noche del 23-F retoma el argumento central de la insuficiencia de los relevos en los puestos de mando, y es el golpe quien destapa en forma más precaria, más débil, más mortecina, no solo la dimisión de Suárez sino «buena parte de los acontecimientos de la etapa de la transición y los sitúa en su adecuada perspectiva». El frágil suelo de la Transición se desvela con el golpe, lo cual es una manera de confirmar la obsesiva insistencia de *El País* y de Pradera en que nada impida o dificulte el objetivo mayor de que la democracia dure.

Pero la verdadera carga de profundidad del editorial del 23F, desarrollado en la edición del 24, está en subrayar la combinación diabólica de factores que ha contribuido a propiciar el golpe de Estado. Lo ha hecho la ultraderecha agitadora, lo han hecho los atentados en cascada de la ultraizquierda etarra, pero también lo han hecho quienes ahora pretenderán exculpar al pelotón golpista como grupo salvaje y aislado, cinematográficamente dañado por «perturbaciones psicóticas». Esa es la mentira central que tratará de borrar las responsabilidades políticas a través de una hipótesis exculpatoria y banalizadora: «Si tiene el final feliz que todos deseamos», dice el editorial ampliado del día 24, «no puede ser despachado bajo la teoría del “grupo salvaje”, del

pelotón de guardias civiles bastante descontrolados y enloquecidos. La investigación judicial sobre el asalto con toma de rehenes al Congreso» debe averiguar hasta «el fondo de todas las tramas –incluso si están insertas en las instituciones que vienen conspirando contra la democracia desde el mismo momento de la reforma política. Los locos –máxime si circulan armados– son recluidos en las casas de orates y no se les entrega el mando de la tropa».

El día 24 el editorial incorporaba la intervención del rey como freno de la conspiración y desplazaba al final lo que había sido el primer párrafo de la versión breve, redactado por Cebrián en tono exhortativo contra el golpe y en favor del juicio severo de sus responsables. Pero no cambiaba la equiparación explícita entre la responsabilidad de Suárez y la de quienes no depusieron a los mandos «a su debido tiempo» y dejaron sin hacer los «relevos imprescindibles». La acusación cobra otro cariz cuando llegan a escribir que esos altos cargos son «tan responsables como los propios asaltantes del Congreso de la inaudita y esperpéntica estampa escenificada ayer» en la carrera de San Jerónimo, «más propia de una república bananera o de un pronunciamiento decimonónico que de una nación europea a finales del siglo XX».

No prosperó la demanda inmediata que hace *El País* de un «gobierno de transición» de UCD y PSOE, presidido por un centrista y comprometido a una inmediata convocatoria de elecciones. La defendían sin la menor convicción porque nadie la deseaba (aunque no era verdad), pero era el único remedio ante una ofensiva que se había llevado a Suárez por delante y podría llevarse también a la democracia, «aún gravemente amenazada». Su único blindaje a la altura consiste en la respuesta «contundente y pragmática» del número mayor posible de partidos, porque «no es descartable una repetición de la intentona golpista». De acuerdo con la versión de Maravall, el rechazo de Leopoldo Calvo-Sotelo a la oferta de Felipe González de un gobierno de transición o de concentración, quizá presidido por Alberto Oliart, estuvo motivada menos por la desconfianza hacia el líder socialista que por el deseo del presidente Calvo-Sotelo de proteger preventivamente al PSOE del desgaste y la erosión de ese acuerdo contra natura. Era preferible salvar a los socialistas como partido futuro de gobierno: no quemar hoy al PSOE podía ser la garantía de la estabilidad en las siguientes elecciones, tras la implosión segura de la UCD.

12. EN EL REINO DE DIOS

La versión más dulcificada de la Transición asegura que el golpe del 23 de febrero de 1981 disparó los mecanismos de defensa de la democracia y los conjuró a todos en torno a ella frente al mal. Del rey hacia abajo, el cierre de filas de los partidos democráticos y la rectificación de Fraga –que figuró en la cabecera de la manifestación posterior al golpe en defensa de la democracia– ahuyentaban de las calles y de las conciencias al involucionismo armado. Su marginación civil lo convertía en rémora indeseable de otro tiempo, mientras se afianzaba la modernidad de una candidatura socialista como respuesta doble: a la implosión que iba a sufrir la UCD y a la movilización compulsiva que vivía una sociedad en ruptura con el pasado.

CORSARIO, CORRUPTO Y ESPECULATIVO

Por supuesto que hay una parte importante de verdad en este diagnóstico, pero eclipsa también la gravedad de las renunciaciones causadas por la resaca del golpe para quienes creyeron, sin idealismo iluso alguno, en otra democracia posible: más consistente, más leal a la construcción de las libertades individuales y colectivas y más comprometida con homologar de forma creíble las instituciones españolas con las democracias parlamentarias europeas. Los editoriales de *El País* y de Pradera en particular estuvieron en la trinchera de esa demanda contra la peor resaca del golpe –la intimidación, el miedo, la marcha atrás–, y alertaron una y otra vez contra otras secuelas derivadas de él en la clase política española. El golpe puso en evidencia las limitaciones de la Transición, pero su fracaso, y la forma de ese fracaso, puso también en evidencia la necesidad de preservar sus logros contra retrocesos imprevistos.

Dicho de otro modo, el golpe mismo y el temor a otro golpe definitivo fueron interiorizados demasiado aprisa y demasiado hondamente entre los partidos y líderes de fuerzas mayoritarias. Incluso fue instrumentalizado a puerta cerrada para detener algunas de las demandas autonomistas de catalanes y vascos, y algunas de las exigencias irrenunciables de una democracia más libre de los intereses educativos y políticos de la Iglesia y de los intereses corporativos, menos cautiva de los poderes fosilizados de una Administración pública o una judicatura intacta en su tránsito del franquismo hacia la democracia, e incluso de unos servicios policiales y unos mandos militares sin los relevos necesarios.

El día 3 de marzo, apenas quince días después del 23-F, la agresividad de *El País* contra el «paleocapitalismo corsario, corrupto y especulativo» parecía ir destinada a compensar el retraso con que llegaba esa inédita condena. Tras ese capitalismo antiguo se cobijaba, «sin duda, la base de aprovisionamiento de la sedición». Por eso el editorial desgrana durísimos juicios contra la prosperidad en democracia de los antiguos beneficiarios del poder franquista. Quieren seguir siéndolo e incluso aspiran a ampliar su derecho de conquista protegido durante la dictadura, como si nada hubiese cambiado tras «la autarquía del franquismo, los circuitos privilegiados de crédito, las concesiones nepotistas, las especulaciones inmobiliarias y la sangría de las empresas públicas mediante negocios privados acoplados como sanguijuelas a sus flancos». Con esos métodos

crearon, «bajo el anterior régimen, gigantescas fortunas de la nada o multiplicaron por mil lo que hasta la guerra civil habían sido modestos tinglados familiares».

En el ovillo del golpe anduvieron «posiblemente sectores de la milicia, de la Iglesia y de los negocios, más preocupados por las orientaciones de Washington y del Vaticano que por los deseos de los electores». El rejón se abate sobre «la conjura de los conspiradores civiles, financiadores e ideólogos de la subversión», porque «ha quedado inmerecidamente en la penumbra». Allí se ocultan los auténticos responsables sociales y económicos, mientras los militares golpistas forman «una trama única y un continuo con políticos enriquecidos bajo el antiguo régimen» con el ansia de volver al poder o a controlar el poder, que es lo mismo.

Ese durísimo alegato contra los herederos hiperventilados del franquismo era todavía anónimo en el comentario editorial, aunque me parece inconfundiblemente hijo de la rabia y de la ira de Pradera. Ahí diagnostica el retraso o el déficit más grave de la Transición, pero el aniversario por los cinco años del nacimiento de *El País* dará pie a que Pradera exprese en primera persona, con su firma en este mayo de 1981, una visión más ácida y conectada con un viejo fantasma más temible todavía: la resurrección del fetiche de España como coartada del neofranquismo. Este era un miura –como habría dicho el propio Pradera– más amargo, y la densidad críptica de su escritura trasluce, en realidad, la voluntad de levantar por fin la liebre contra un enquistamiento tóxico en el subsuelo de una democracia vulnerable. Algunos de sus conductos siguen asfixiados u obstruidos por los viejos detentores del poder, como el propio periódico explica en la pobladísima sección de Opinión del periódico. Su «responsable» en *El País*, además de «editor, periodista y licenciado en Derecho», Javier Pradera –es la primera vez que se identifica así en un artículo firmado–, titula el 5 de mayo de 1981 «España y los españoles» una demoledora denuncia de la coartada patriótica que usan los viejos poderes contra la modernización civil, ilustrada y laica del país. La fobia que exhiben contra la España plural es solo la otra cara de su defensa de una España maciza, convertida en la endiablada madriguera que cobija los intereses del antiguo régimen. El peso de ese pasado de poder financiero, económico, empresarial y familiar ahoga una transformación todavía decepcionante, insuficiente, precaria y, en realidad, temiblemente reversible.

Es verdad que ha habido «ocasiones sobradas para comprobar el acomodo» de gentes «antes autoritarias» a las nuevas circunstancias, pese al recorte en sus «derechos mal adquiridos». Pero nada ha reducido ni controlado, en plena resaca del golpe, otras «constelaciones de intereses que no se resignan a conservar lo ya atesorado». Han entendido como mero «lucro cesante» en democracia «las dificultades para seguir alimentando sus imperios con negocios ilícitos, atracos al Tesoro público y abusos de poder». Pese a que los frutos «de su anterior rapiña estén a salvo bajo las instituciones democráticas», actúan todavía como «urracas que desean seguir volando en un régimen autoritario» y «anidan lo mismo en el mundo de los caballeros de industria que medraron en el pasado con la especulación, los créditos privilegiados y las concesiones digitales que entre los voraces usufructuarios de la Administración pública patrimonializada por sus supuestos servidores». Sus «construcciones ideológicas, cimentadas» en su mayor parte en esos mismos intereses, se resisten a «ser derribadas por la piqueta de la razón o la información». Por eso «la convivencia democrática se halla amenazada no solo por esos intereses e ideas irreductibles a los argumentos de las mayorías electorales», sino también por emociones susceptibles de ser manipuladas por «los adversarios de las libertades».

Lo peligroso es que frente a la «*idea* de España» como conjunto de ciudadanos con un pasado conflictivo y dotados de la libertad de decidir su futuro, ahora «campa la *emoción* de una España

definida como una sustancia ajena e independiente a los hombres y mujeres que la habitan», como si de veras la condición de español no fuera un hecho sino el resultado «de una educación sentimental obligada y coercitiva para adecuarse a los valores unilateralmente dictados por una minoría que se autodesigna veladora de esa esencia arbitrariamente definida». El resultado es que *España* se «convertiría en un fetiche independiente de los *españoles*, la mayoría de los cuales serían excluidos de su seno para ser ingresado en la cárcel, refugiarse en la vida privada o tomar el camino del exilio».

Irónicamente, sin embargo, la «comunidad española tiene la gloria» de no haber alcanzado «la completa aniquilación de las culturas y las lenguas anteriores a la puesta en marcha de la trituradora centralista». Es esa una objetiva «fortuna histórica» que hace de España una «nación de naciones, una comunidad plurilingüe y pluricultural». Su enemigo no es tanto el pasado como la miopía del «esencialismo abstracto del centralismo», empeñado en imponer «mediante la coacción una patria fantasmal despoblada de seres humanos y habitada por delirios ideológicos». La «única España civilizada posible sería aquella que renunciara al fetiche de las sustancias, muchas veces alimentadas de un pasado inexistente», y capaz de expulsar tanto al esencialismo españolista como a otro «sustancialismo no menos nefasto» en Cataluña y el País Vasco. «Ni que decir tiene», escribía Pradera en otro editorial de junio de 1980, «que la historia española pagará cara la universalización por las fuerzas políticas de las reivindicaciones regionalistas como estrategia de contención y disolución de las instituciones de autogobierno en Cataluña y el País Vasco.» O dicho todavía mejor, y de nuevo con un espectacular catalejo en la mano, «carecería de sentido tratar de anegar las diferencias históricas y políticas materializadas en los Estatutos de Sau y de Guernica con la consigna difuminadora y reglamentista de café para todos», que es precisamente lo que pasó. La igualación de los *techos* autonómicos sería la víspera «de una nueva escalada de reivindicaciones de catalanes y vascos, convencidos de haber sido anteriormente engañados sobre el máximo límite posible de sus instituciones de autogobierno».

Tampoco esta vez era una reflexión abstraída de la realidad, sino precisamente fundada en el análisis histórico. Las advertencias iban inútilmente destinadas a las operaciones políticas que preparaban la LOAPA. Con esos mimbres continuistas iba a ser difícil, gobernase quien gobernase, la culminación efectiva de una ruptura pactada, o ruptura democrática. La transición sin traumas estaba viviendo su trauma entre la clase política en forma de freno y marcha atrás, en forma de prevención cauta e incumplimiento temeroso de un programa mínimo de democracia liberal. Sería mala noticia que la primera prueba fuerte de estrés democrático, después de febrero de 1981, se saldase con una ristra de claudicaciones o renunciaciones que devaluasen objetivos primarios o incluso retrocediesen gravemente en los estándares exigibles de democracia europea. Uno de ellos iba a ser la deficiente solución que los partidos mayoritarios ofrecieron al problema territorial, en particular para Cataluña y el País Vasco.

El empeño de Pradera había sido dotar a la izquierda moderada de las razones e instrumentos para culminar el proceso que dejara atrás el cambio de régimen para empezar a dejar atrás al país entero y cambiarlo por fin. Esos cinco años de transición podían acabar como los cinco años de la República o ser la ocasión por primera vez en la historia de España para que el país diera el salto que jamás había sabido dar. Seguía sin estar suficientemente amortizada ni utilizada la herencia del castellano más federalista que había dado el último medio siglo, o el siglo entero, y por eso el quinto aniversario de la muerte de Ridruejo se conmemoró con un despliegue insólito en un periódico que parecía heredero de su legado. La creación del Centro de Estudios Dionisio Ridruejo da pie al editorial del día siguiente, 5 de junio de 1981, sobre su figura, y el día anterior

fue Antonio Tovar quien ofreció una semblanza autobiográfica sobre Ridruejo. Ese mismo día Juan Luis Cebrián intervino en la presentación de un libro, junto a los exministros González Seara y Fernández Ordóñez, a pocas fechas de otro homenaje en El Burgo de Osma con numerosos amigos, incluidos Gonzalo Torrente Ballester, Luis Rosales y Fernando Sánchez Dragó, con cierre del acto del entonces ministro Jaime García Añoveros.

La apropiación del liberalismo por una sola marca política parecía condenada al fracaso, o desde luego era una mala noticia. Y ese intento fue el pretexto también para reivindicar una tradición liberal histórica de la que nada ni nadie sacaría ya a Pradera ni a muchos como él, incluido el periódico. Por eso no podía estimar en exceso los intentos de «un club de notables de la buena sociedad» de hacerse dueños de «un bien común cuyos ideales políticos, tensiones morales y legado intelectual inspiran a muchos otros españoles, quizá sin apellidos ilustres, pero con un bagaje de actitudes y presencias imposible de borrar» ni de reducirse a una «maniobra política».

Han fecundado la «tradición del liberalismo» demasiados y «notables esfuerzos reformadores y modernizadores durante los dos primeros tercios del siglo XIX, bajo la Restauración alfonsina y en la Segunda República» como para verse ahora sometida a los intereses de un grupo político. Esa tradición fue la causa y el motor que enriqueció «la cultura española desde la Ilustración hasta nuestros días». Cuando algunos hemos usado la expresión «tradición liberal» sin describirla o cuestionarla –como hice yo mismo hace muchos años en *La resistencia silenciosa*–, pensábamos exactamente en esta suerte de corriente reformadora que se encarna en múltiples formas, testigos, disciplinas y hasta actitudes, precisamente porque repudia cualquier reduccionismo sectario o excluyente. Los trasciende porque nutre por igual al centro derecha como a la izquierda, es su hábitat propicio y condición misma de civilización, a pesar de su precariedad e incluso a pesar de que a veces se sabotea a sí misma, intimidada por la ferocidad de otras tradiciones autoritarias, religiosas y dogmáticas.

Quizá era verdad que el golpe pudo aglutinar a los demócratas, pero a la vez el golpe iluminó las temibles deficiencias de una Transición ralentizada e internamente saboteada. Lo que de verdad enseñaba era la perduración disfrazada de un poder que acampaba donde antaño y apenas había visto mermada su influencia y su control. El fantasma de la *gran derecha* nacía no solo contra el miedo a un posible Gobierno socialista, sino con la voluntad de una frenada forzosa del proceso de construcción de las libertades democráticas individuales y colectivas. Por lo mismo, tampoco estaba dispuesta a ceder puestos o perder oportunidades de enriquecimiento e influencia, como si de veras la continuidad discreta del franquismo en la democracia fuese solo un nuevo atajo en la escalada de poder iniciada con la Guerra Civil y la victoria franquista. La brutalidad de los ataques contra viejísimos falangistas históricos como Tovar, Laín y Aranguren servía para regresar en junio de 1981 a Ridruejo y demandar no solo inteligencia «contra el golpismo criminal» sino la defensa de «una historia intelectual de España digna y dialogante, no uniforme», ni «excluyente, sino dialéctica, respetuosa y al mismo tiempo creadora». Tampoco era mal momento para recordar que la lección ética principal de Ridruejo consistió en regirse «por la indomeñable convicción de que una dictadura convierte en cómplices de la opresión a quienes se refugian en la vida privada y renuncian a combatir para devolver la dignidad a la vida pública».

La crítica de la Transición mítica empezó, pues, en directo y en el curso mismo de la Transición. No todos vivieron bajo el síndrome del narcisismo sino a menudo bajo la sofocante sospecha de la insuficiencia, la precariedad y las limitaciones objetivas de una etapa que necesitaba más madera, más coraje, otro cambio, otros hombres y otras ambiciones. El más grave

error de la Transición podía acabar siendo su equivocada inhibición a la hora de neutralizar el poder social y económico fraguado durante la dictadura, su connivencia con la prepotencia y la avidez de quienes ingeniaron contorsiones inverosímiles para perpetuar sus condiciones objetivas revestidas de aclimatación democrática.

La frustración o el desengaño que Pradera no ocultará años más tarde, tras la larga etapa socialista, late ya en esta primavera de 1981, con su nombre y sin su nombre. En la práctica, el golpe pudo ser el trauma de una Transición sin traumas, pero, como el resultado adverso de los socialistas en 1979, tampoco debía ser «nada más» que lo que fue: el síntoma más grave del impulso involucionista en amplios sectores sociales nostálgicos del antiguo régimen.

CÓMPLICE CRÍTICO

El final del consenso y la salida de la catatonia desencantada habían sido enérgicamente fomentadas desde el triunfo de Felipe González en el segundo congreso de 1979, y definitivamente reforzadas con la moción de censura defendida en mayo de 1980. No había razones para alimentar el escepticismo o el desengaño por lo mucho que faltaba por hacer y que la derecha exfranquista no había hecho. Pero había aún un doble camino por recorrer en una especie de concubinato necesario: la consolidación de la democracia era solidaria de un relevo formal en el poder. Solo de un Gobierno socialista futuro, quizá en 1983, podría esperarse el desarbolamiento de las herencias más obscenas del franquismo, el final de una democracia permisiva con el pasado y una nueva capacidad operativa para neutralizar a los dueños del botín de la victoria. Todavía la Transición estaba lejos de ser nada parecido a eso.

Demasiados indicios estaban acercando la práctica política del PSOE a los viejos usos del consenso adulterado y cómplice con costumbres reprobables y oscurantistas que ninguna democracia debería tolerar. No calló Pradera entonces ni callaría después sobre esas prácticas ni sobre algunas de las razones políticas que permitieron perpetuarlas. Tanto antes como después de la apabullante victoria socialista de octubre de 1982, Pradera miró al presente con el ánimo del arúspice que detecta las semillas del mal en el subsuelo de la actualidad florida y atosigante. Tanto el golpe como el runrún involucionista, tanto su trama civil como las agresivas campañas antisocialistas del *lobby* empresarial, obligaban a acentuar la vigilancia sobre los enveses, las entrelíneas y las incoherencias de los dos grandes partidos, y sobre todo el socialista. Por supuesto que el periódico, incluido Pradera, fueron y seguirían siendo cómplices y cooperadores necesarios de la victoria de 1982, pero ni estuvieron abducidos por ellos ni anegaron su página editorial de la baba de caracol adulatora y sumisa. Cuando escuché a Felipe González evocar a Pradera de forma espontánea y un tanto ensimismada como alguien «muy especial», como dijo por dos veces, pensé que quizá se acordaba de los múltiples disgustos que le llegaron del comentario editorial y de los artículos firmados en la siguiente década y media.

Las exiguas conquistas de la oposición democrática bajo el franquismo debían servir como prueba de laboratorio sobre la complejidad y las resistencias de una sociedad moderna y capitalista: «la batalla de las costumbres» era «la única que la oposición ganó bajo el franquismo, quizá porque nunca supo que la estaba librando». No era poca cosa, pero el escepticismo racionalista, la alergia al autoengaño y la frialdad del analista se aliaron para subrayar melancólicamente en 1981, en la resaca del golpe, que el cesto de la democracia necesitaba cambiar muchos más mimbres aún intactos o apenas *tuneados*. Estuvo lejos de su visión, desde el

principio, el mundo feliz de un antifranquismo hegemónico o de una transición inmaculada. Ni los poderes financieros y empresariales habían visto mermados sus privilegios heredados, ni se habían recortado las vías para un medro covachuelista y patrimonializador del Estado, ni se había intentado la reforma de la judicatura (y su lealtad a la causa franquista, por convicción o por inercia), ni se había emprendido a fondo la remoción de los altos cargos policiales y militares para garantizar la lealtad a la monarquía constitucional.

La relectura de centenares de editoriales de los años ochenta indica más bien que la victoria socialista acentuó el sentido crítico del editorialista y afinó el sensor capaz de detectar fallas, síntomas inquietantes, déficits incipientes o formas potenciales de la erosión democrática, tanto antes como después de gobernar. Si la metáfora de la *caja negra* valía en agosto de 1981 para explicar el sanctasanctorum del PCE –la comisión de candidaturas, excluidas del debate público– es quizá porque ese era el espacio propio de desarrollo del talento de Pradera: no tanto la negociación, la persuasión y el diálogo, el consenso y la discusión, como la dirección desde un lugar protegido de las leyes de la democracia –la caja negra de *El País*– y donde la autoridad funciona sin argumentaciones interminables y debates enrevesados: todo es rápido y claro como un criterio acatado o refutado.

Ahora debía calar un mensaje más complicado todavía: el compromiso radical con formas de democracia intransigente con las herencias del pasado, incluidas las coyunturales, simbólicas o inerciales. Esas subsistencias o las puras chapuzas democráticas podrían ser no solo errores políticos de los socialistas sino síntomas estructurales de inmadurez y semillas de una quiebra del crédito, larvada o futura. La conciencia de estar construyendo los cimientos de un proyecto a largo plazo traspasa de arriba abajo la línea editorial política de un periódico que acogió como propia la victoria socialista pero no desactivó las alarmas instaladas durante los últimos años de gobiernos ucedistas.

Aunque el periódico defendió sin suerte la constitución de un gobierno de transición para unas elecciones inmediatas tras el golpe, los análisis se concentraron sobre todo en evaluar sus causas y sus secuelas. Si Calvo-Sotelo retrocedía o rebajaba los proyectos reformistas que Suárez impulsaba desde su crisis ministerial de septiembre, el golpe de los «sediciosos» estaría triunfando por otras vías y enfangaría al país en algo casi peor que el golpe real: «Un golpe de Estado *blanco* o gris, que no sería más que el primer paso hacia la involución completa de las instituciones democráticas.» La línea crítica más dura de los meses que llevarían a la victoria socialista en Andalucía, en mayo de 1982, y finalmente a la aplastante mayoría socialista de octubre, consistió en un férreo sabotaje de Pradera y de *El País* a la «política de concertación» que habían acordado, sin publicidad e incluso con presiones extraparlamentarias, el presidente Calvo-Sotelo y el partido de Felipe González con él mismo a la cabeza: hasta los desacuerdos pactaban, como ha recordado a menudo González.

Pradera mantuvo una crítica consistente y tenaz a esa «concertación» como hija espuria o versión actualizada del consenso que había adulterado la conciencia democrática de la España de la Transición. Favorecía una democracia de perfil blando y demasiado apegada a usos políticos antiguos. No era mala la negociación, el consenso y la concertación; lo eran solo si operaban en las trastiendas, en los pasillos, sin información pública ni explicaciones claras, a espaldas de la población. Lo que estaba faltando era el coraje democrático de enfrentar a la población a la realidad objetiva, sumiéndola todavía en una presunta minoría de edad que seguiría disminuida con la sobreprotección a medias paternalista y a medias arrogante de los partidos mayoritarios. El

poder de la izquierda reclamaba tanta transparencia e información como capacidad de ser consecuente con la realidad, con sus esquinas, sus baches y sus deformidades.

Ni fue complaciente con esa estrategia ni abonó la ruta de esos acuerdos subterráneos porque venían a plegarse a las exigencias tácitas de los golpistas. *El País* no respaldó esa concertación pacificadora ni cuando su victoria era ya presumible ni cuando era segura, ya desde el verano de 1982, con encuestas y sondeos que invariablemente ofrecían el cuadro de una victoria incontestable. La autodestrucción de la UCD garantizaba esa victoria electoral, los juicios a los golpistas alimentaban la identificación pública de una amenaza real en el involucionismo y el tirón de Alianza Popular y Fraga atraía a nostálgicos del viejo régimen antes que a las nuevas generaciones conectadas con el mensaje de regeneración ética y cambio que Felipe había sabido encarnar.

Pero demasiados de estos objetivos estrictamente democráticos parecían no estar entre las prioridades efectivas de los socialistas. Entre sus debilidades estructurales seguía estando el autoritarismo interno, la sacralización de la dirección, la beatería de la unidad forzosa, el anacronismo analítico y una intermitente inflamación ideológica que sabotaba las rutas hacia el cambio real en lugar de favorecerlo. El momento era histórico pero demasiados protagonistas seguían debatiendo como en las asambleas universitarias, en imagen ridiculizadora que Pradera prodigó en los comentarios editoriales. No hablaba ni sentía así el fatalismo de un pesimista histórico de perfil ferlosiano; hablaba un ideólogo excomunista escarmentado ante la catástrofe de forzar la realidad a parecerse a los ideales en lugar de insertar los ideales en las resistencias de la realidad.

Las visiones críticas sobre el modo de proceder de los socialistas en su connivencia con la UCD de Calvo-Sotelo se acentúan de diversos modos y cada vez más enérgicamente. En septiembre de 1981, la UCD ya no puede enmascarar más su auténtica naturaleza y la mera descripción de sus biotipos políticos parece la mejor munición para aumentar el respaldo socialista. Cuando acaba de dimitir Fernández Ordóñez –en gesto ejemplar e insólito en un país que prefiere morir antes que dimitir, dice un editorial– conviene recordar la auténtica composición política de UCD, y el exiguo número que hay en él de «antiguos militantes de partidos de la izquierda entonces revolucionaria», como José Pedro Pérez-Llorca, Eduardo Punset y José Luis Leal, junto a algunos democristianos, como Óscar Alzaga o Javier Rupérez. El resto no solo no procede «de la oposición al franquismo» sino que engrosan un conglomerado de hombres bregados «en el Movimiento y en la Organización Sindical», altos funcionarios de la Administración y empresas públicas, «profesionales y ejecutivos que vivieron en paz con el anterior sistema, intercambiando su neutralidad en la vida pública con la prosperidad en la vida privada».

Los pactos secretos con ese partido no dignifican a los socialistas, y menos aún la operación más preocupante en que se han embarcado juntos. La conciencia autonomista o la lucidez sobre el gravísimo problema político que implicaba una falsa solución de los casos de Cataluña y el País Vasco estuvo menos extendida de lo que hubiera deseado Pradera. Del centralismo visceral o de la inopia sobre el significado íntimo del autonomismo catalán y vasco no estaban libres tantos como podía imaginarse, pese a los avances ciertos. Era necesario todavía «reivindicar la idea de otra España *posible*, que asuma sin mitologías su historia, renuncie al retórico macizo de la raza en nombre de las diferentes culturas, lenguas, etnias y tradiciones» y capaz de reconocer «institucionalmente en el presente esa diversidad que nos viene dada por nuestro pasado», decía un editorial con toda la pinta de ser suyo a mediados de junio de 1980.

Pronto sin embargo había de activarse una venenosa campaña contra la política lingüística de la naciente Generalitat, iniciada con un manifiesto firmado por numerosos intelectuales en Cataluña. Lideraba las dos mil y pico firmas un brillante intelectual y joven profesor de instituto aragonés instalado en Barcelona, Federico Jiménez Losantos, y avalaban su protesta otros intelectuales de prestigio como Amando de Miguel o Esteban Pinilla de las Heras. Reclamaban sobre todo la urgencia de «restaurar un ambiente de libertad, tolerancia y respeto» para el castellano frente a una Generalitat en manos del nacionalismo conservador. La delatora fórmula del manifiesto hacía demasiado fácil el comentario editorial del 5 de mayo de 1981 sobre el lugar al que había que remontarse para encontrar ese ambiente de libertad que añoraban cuando lo urgente y necesario era la protección de una lengua perseguida.

Contra ese manifiesto se habían concitado firmas próximas a Pradera, para empezar las de Carlos Barral y José Agustín Goytisolo, pero también Jaime Gil de Biedma o Francisco Candel. Parecía más bien un síntoma de la inadaptación o la pura resistencia corporativa a la restitución de los derechos de la lengua catalana en la nueva democracia, al margen de que el propio Jiménez Losantos hubiera sido firma especialmente invitada a escribir en *El País* por parte de Pradera desde 1979. Por supuesto, el periódico condenó sin paliativos el atentado perpetrado por los matones de Terra Lliure contra quien pugnaba entonces en defensa de un nuevo liberalismo español: el primer lugar donde vio la luz un capítulo de su ensayo de 1979 *Lo que queda de España* fueron las páginas de *El País* a invitación expresa de Pradera. El editorial condenaba el atentado como «agresión repugnante» y «atentado terrorista», pero prevenía a la víctima de caer en las mañas del agresor y alimentar el peor efecto posible. El «canibalismo cultural» solo favorecía a una derecha reaccionaria que usaría ese ataque para encoger o incluso invalidar las indispensables políticas lingüísticas destinadas a rehabilitar el catalán.

La respuesta solo podía articularse desde la «intelectualidad coherente y nada histórica». El «tiro en las piernas» no podía ser la excusa para descartar «las vías del diálogo pacífico y de la democracia como sistema de resolver las diferencias». Pradera conocía demasiado bien a su autor y su «dignidad intelectual» como para presumir que rechazaría, «como nosotros, el orquestado y pueril concierto de oportunismos edificado en torno a su propia herida». Pero nada de todo ello alteraba el error de perspectiva sobre la discriminación del castellano en Cataluña, recién iniciada la campaña de normalización del catalán, ni había razón alguna para reducir esa lengua «a la *tolerancia y convivencia* que lo encerraba en la vida privada», como sucedió durante el franquismo. Eso significaba «no comprender lo que desde 1975 se ha iniciado en nuestro país» y bloqueaba las condiciones para dar «por cerrada y muerta la etapa anterior».

No habían entendido nada, en realidad, a pesar de la estimulante defensa de Azaña y de la riqueza de ideas (y algunas cabriolas) que tanto Jiménez Losantos como Alberto Cardín y otros amigos prodigaban en las páginas de varios medios, como su revista *Diwan* o en el mismo *El País*. Su abandono conjunto de la colaboración en el periódico tendría con los años consecuencias menos benignas que la discrepancia ideológica. Esta polémica estuvo en el origen personal y rencoroso de la durísima campaña contra Pradera que la nueva derecha moderna y reaccionaria habría de emprender en los próximos años.

DÍAS DE VÍSPERAS

Ningún caballo de batalla hubo como la «desventurada», «desgraciada» y en todo caso

equivocada gestación de la LOAPA, es decir, la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico. «La LOAPA de nunca acabar» habían titulado ya un editorial, todavía con los socialistas en la oposición, para señalar la ilegitimidad misma de una ley que penalizaba el compromiso autonomista de las dos nacionalidades históricas. Había demasiados indicios que invitaban a insistir una y otra vez en el cierre en falso que comportaba la LOAPA para las aspiraciones de autogobierno. Podía ser una suerte de pata coja crónica en la mesa de la democracia y cualquier día podía hacer caer los trastos. El debate autonómico tras el golpe de Estado había pecado de irresponsable demagogia cuando la clase política se desbocó para «suscitar artificiales, insostenibles y desmesuradas expectativas respecto a la virtualidad de los estatutos de autonomía». A pesar de algunos socialistas, en ningún caso debían estar concebidos para resolver «situaciones de subdesarrollo económico y miseria social, supuestamente superables a corto plazo y de forma mágica por las instituciones de autogobierno». Desde abril de 1981 habían censurado «la insinceridad de la política autonómica» de Calvo-Sotelo en su propósito de provocar «nacionalidades donde no existían» e ignorar irresponsablemente «la presencia y pujanza de los contenciosos nacionalistas allí donde son patentes», es decir Cataluña y el País Vasco.

Pradera no dejó de combatir lo que llamó explícitamente en un editorial la «reforma encubierta» del título VIII de la Constitución a través de la LOAPA, pactada bajo «presiones extraparlamentarias» y a espaldas de los partidos nacionalistas. Parecía concebida para sofocar o incluso recortar las condiciones aprobadas en las Cortes Generales y en sendos referéndums por catalanes y vascos en sus respectivos Estatutos: «los autores o perpetradores de la LOAPA han utilizado el neutro material de la técnica jurídica, tan buen conductor de los propósitos políticos como el cobre lo es de la electricidad, para realizar una reforma encubierta del título VIII de la Constitución y de los Estatutos de Sau y de Guernica». Es posiblemente la primera vez en que el Pradera jurista vocacional se alía con el analista político para asignar a cada uno sus fueros y respetar primero la razón jurídica y destilar después la razón política.

El grave error compartido con los socialistas consistía en un buen diagnóstico y una mala solución. Habían detectado, «con buen criterio, que era disfuncional y peligroso multiplicar parlamentos y Gobiernos con competencias políticas y no solo administrativas». Pero, en lugar de ser consecuentes con el diagnóstico, «concluyeron –con absurda lógica– que lo oportuno era rebajar los techos vasco y catalán, a fin de homogeneizar, por abajo y según criterios de descentralización administrativa, las instituciones autonómicas». Tenían razón los nacionalistas cuando denunciaban una reforma encubierta o hecha por la puerta de atrás del título VIII, como dijo una y otra vez *El País*, y tenía pésimo pronóstico emplazar al Constitucional a pronunciarse sobre la ley, como acabó sucediendo.

Por eso con más sorna que respeto aluden a la LOAPA en marcha como unos «nuevos Pactos de la Moncloa» que excluyen a los partidos minoritarios e incluso a los gobiernos autonómicos ya vigentes. Contra los abanderados de una *emoción* de España, incluidos los socialistas, no había una autopista política predibujada que concibiese el autogobierno «como el primer paso de una dialéctica interna que llevaría ineluctablemente a la ruptura de la unidad española». En cambio, el sabotaje tácito de los Estatutos aprobados y en funcionamiento desde 1980 sí podía alimentar los recelos y la desconfianza de catalanes y vascos sobre los acuerdos entre UCD y PSOE. Desgraciadamente, ese macizo núcleo de prejuicios facilitaba la «injustificada y subversiva identificación entre autonomía e independentismo», como repetía la derecha nacionalista y ultramontana. Incluso a veces parecía que «los fantasmas autonomistas» naciesen «de los armarios

centralistas de los juristas que asesoran a los ministros». Era ese el mismo «terrorismo ideológico» que practican «los enemigos de las libertades, de la Constitución y de la democracia» para justificar su golpismo.

Por eso seguía siendo esa ley incluso en julio de 1982 «una pesadilla» de la que centristas y socialistas «desearían despertarse para comprobar que este monstruo del Derecho Administrativo solo era el fruto de un mal sueño». En realidad, la LOAPA era «un remedio peor que la enfermedad que se proponía curar o, para ser más exactos, una medicina que no se aplica a quienes presentaban los síntomas de la epidemia del desmadre autonómico, sino a las instituciones de autogobierno que habían entrado en funcionamiento hace más de dos años». Lo verdaderamente grave para Pradera estaba en el fondo de la cuestión y menos en la torpeza gestora de esa ley. El problema de fondo era el mismo que había explicado en el artículo de mayo de 1981 y consistía en deplorar la incultura autonomista de la derecha y de buena parte del socialismo español. El error estaba en la gratificación demagógica de una *emoción* de España que debía ser entendida como *idea* pactada y plausible. Por eso se hace cruces el editorialista y se pregunta un punto exasperado: «¿Será posible que nuestra clase política no sepa leer el pasado y no entienda que los estatutos de Sau y de Guernica fueron, sin hipérbole, verdaderos compromisos históricos?» Es una grave irresponsabilidad romperlos «alegre e irreflexivamente para satisfacer presiones extraparlamentarias, para rehuir las propias responsabilidades de centristas y socialistas en el desmadre autonómico, y para seguir el consejo de unos expertos que se engañan a sí mismos al creer que la política y la ideología ni siquiera salpican la blanca túnica de sus conocimientos tecnocráticos».

En realidad, «el desbordamiento» de las autonomías es imputable a «la UCD y el PSOE, que en su día manipularon con fines electorales los agravios comparativos respecto a Cataluña y el País Vasco de otros territorios españoles». Por tanto, no eran precisamente las autonomías catalana y vasca «lo que se necesitaba reconducir», sino «la estrategia autonómica de centristas y socialistas» para no «hacer pagar los platos rotos de sus anteriores grescas» a las autonomías que ya funcionaban.

De cara a la futura y previsible victoria socialista, sospecha Pradera que en el PSOE no existe margen para remediar ni las «torpezas cometidas» ni «sus demagogias» durante la primera hora de la transición. Tampoco parece que vaya a tener remedio la contradicción «entre su proclamada vocación federalista y una práctica mucho más cercana al centralismo de tradición jacobina». El PSOE había actuado «con ligereza en el terreno autonómico, rivalizando con UCD en la puja de los agravios comparativos y en la miopía para dibujar un desarrollo racional del título VIII». La LOAPA había sido un «engendro jurídico» con «aparatosas grietas antes de comenzar a navegar», pero era solo uno de los pilares de una estrategia errada.

Demasiados indicios abonaban la «reincidencia en la práctica de las ciencias ocultas del consenso», aunque ahora se llamase *concertación*, igualmente nefasta para los intereses democráticos de la mayoría pero también de la propia opción socialista. La lista podía ser abrumadora, dada la importancia de las leyes *acordadas* y los «errores lamentables» cometidos por los socialistas. Entre ellos está haber votado «la represiva Ley de Defensa de la Democracia» o el bloqueo de los dos partidos mayoritarios del desarrollo de una ley electoral, pese a ser mandato constitucional. Incluso la tramitación «a galope» que había hecho Calvo-Sotelo del ingreso de España en la OTAN sigue revelando que «la estrategia de concertación ha sido un acuerdo sin contraprestaciones» para los socialistas, con «costes políticos tan importantes para el futuro» como dificultar gravemente alianzas con los «nacionalistas vascos y catalanes». A ellos

«les perdonarán menos fácilmente que a UCD» la operación de la LOAPA. Algo de su parte iban a poner la misma empresa y el empuje de Polanco al inaugurar el 6 de octubre de 1982, en vísperas de la campaña electoral, la redacción de *El País* de Cataluña con un comentario editorial que invocaba la valiente tradición liberal de Joan Maragall y terminaba con la memoria del exilio republicano y federalista de Pere Bosch Gimpera.

De aquella ley de defensa de la Constitución Cebrián había dicho en junio de 1981 que era una «ley de prensa camuflada», en un debate en el Colegio de Abogados, junto a Clemente Auger. Llegaba dictada por la resaca del golpe: de acuerdo con el editorialista, que debió asistir sin duda al acto, era una «norma democráticamente impresentable», concebida para recortar las libertades democráticas de expresión y opinión en lugar de reforzarlas. La víctima principal volvía a ser la información y las libertades públicas, de la misma manera que otros recortes «concertados» entre UCD y socialistas habían encogido bajo «presiones extraparlamentarias» la ley de autonomía universitaria hasta desnaturalizar el estimulante proyecto originario de González Seara.

También la primavera informativa que había inundado durante unas semanas RTVE en 1981 se había acabado de golpe en mayo con la «jupiteriana destitución» de su jefe de informativos, Iñaki Gabilondo, por parte de Calvo-Sotelo. Pero tampoco el programa político socialista dejaba demasiado tranquilo sobre su voluntad de ampliación de las libertades en España. Algún «intimidatorio aviso» hacía presumir con fundamento que «un futuro Gobierno del PSOE» podría sucumbir a una doble tentación: por un lado «rebajar los techos de la libertad de la Prensa para informar, opinar y criticar» y por el otro, «financiar, con cargo a los presupuestos, una cadena de periódicos al servicio del poder ejecutivo». Ese era el horizonte previsible si prosperaba la intención socialista de rescatar y rediseñar la ya suspendida prensa del Movimiento, cosa extravagante en cualquier democracia y simplemente «inaceptable». Era solo el principio de una línea editorial hipercrítica con la política informativa del futuro Gobierno socialista que reprobó desde la impericia de su portavoz, Eduardo Sotillos, hasta las prolongadas incomparencias públicas de Felipe González.

La libertad era también un bien desprotegido en el interior del PSOE, y es otra vieja batalla de Pradera que no cesará. El estrangulamiento de la disidencia es de nuevo la fuente de inquietud más grave con vistas al congreso de los socialistas de octubre de 1981. El Felipe de marzo de 1979 (noqueado por la derrota electoral) «tal vez hubiera sido bastante menos autocomplaciente y algo más autocrítico». El periódico ha ido desgranando y acumula ahora en dos editoriales seguidos una serpentina de déficits que no son menores sino acumulativos. Pradera una y otra vez denuncia el peligro de anquilosamiento de una maquinaria de poder sumisa y unánime. El fantasma comunista no escapó nunca de su memoria y la reeducación democrática lo hizo persistente y hasta obsesivo en la defensa de las galerías interiores de opinión libre en un partido que un día u otro habría de gobernar. La ausencia de canales de participación de los ciudadanos delataba una carencia democrática grave que los desprotegía contra el aislamiento del poder, contra la incomunicación con sus ciudadanos o contra la propensión autista y autocompasiva que acecha a todo gobernante. El periódico, y su responsable de Opinión a la cabeza, deciden abrir una sección nueva para el periódico dominical, titulada «Temas para debate». No hay casualidad alguna en que el primer artículo de Luis González Seara el 28 de junio de 1981 defienda la pertinencia de crear asociaciones, fundaciones o clubs de opinión política, a pesar de la «mal disimulada reticencia» con que habían acogido la iniciativa «los dos partidos mayoritarios, PSOE y UCD». Eso decía al menos la entradilla anónima que explicaba la sección: su objetivo era promover los

«cauces de participación» ciudadana y fortalecer su conexión con la Moncloa. Pero será ese otro de los tempranos desengaños de Pradera con los socialistas.

Para ese momento, no había empezado todavía el intenso carrusel de reuniones que iba a vivir la ejecutiva del PSOE en la primavera de 1982, volcada en la estrategia electoral de mayo en Andalucía y de octubre en las elecciones generales. Pero sí había empezado el trabajo de laboratorio e ideas de un partido que buscó aclimatar a lo largo del verano de 1982 sus programas a la nueva sociedad gestada desde los años sesenta en España. Mientras Enrique Múgica censuraba en algunas de esas reuniones la «indeterminación programática» del PSOE, y Felipe González creía, como casi todo lo que procedía de Múgica, que «no era preocupante» –si interpreto bien sus notas manuscritas colgadas en la web de la Fundación–, un buen puñado de militantes de primer nivel se afanaban en explorar los programas del socialismo europeo para trasladar sus ideas y proyectos al contexto español. Ahí anduvieron algunos de los socialistas más estrechamente vinculados con Pradera, como Maravall y Joaquín Almunia.

Pero los verdaderos nubarrones estaban instalados en otro sitio. El PSOE sigue a rajatabla sus nuevas ordenanzas de 1979 y se mantiene fiel a un funcionamiento interno «gravemente dañino» donde persiste el «autoritarismo y falta de respeto hacia las minorías». Como «la experiencia enseña», ese es el camino para el «fortalecimiento de los aparatos burocráticos» y el «silenciamiento de los discrepantes», y esa inercia «rara vez tiene regreso». Puede que Felipe haya desasistido al partido para promover y proyectar su imagen como futuro presidente, pero el riesgo es grande porque habrá de ser el partido quien suministre los futuros equipos de gestión y gobierno: «Un PSOE empobrecido, escaso de técnicos y sobrado de clientelismo sería una piedra atada al cuello de Felipe González.»

Y eso puede agravar la propensión inquietante a las «saunas de unanimidad», como sucederá en el congreso de 1981: sin debate, sin discusiones, y con una creciente conformidad estática. Su esquema organizativo está preocupantemente fuera de las tradiciones de la Internacional Socialista y hasta parece calcado de un modelo «ideado por los bolcheviques» y duramente criticado por los socialistas «con el plausible argumento» de que «invertía los papeles y transformaba a los mandatarios en mandantes». Todo ello está demasiado cerca de «prácticas leninistas» que podrían revertir ese sarcasmo chistoso contra el propio Alfonso Guerra. De hecho, alguna vez incluso sería preferible que se mordiese la lengua y no olvidase que «sus palabras trascienden a su persona y comprometen al partido cuya vicesecretaría desempeña». Cuando menos, sería la vía para evitar que «el pueblo español se cree ilusiones por encima de la realidad», como ha defendido Felipe González ante las evidentes expectativas favorables al PSOE. Conviene por tanto desoír a Guerra y «alejarse de la campaña electoral toda demagogia y toda falsa o vana promesa».

Las elecciones de mayo de 1982 en Andalucía adelantaron convincentemente lo que podía pasar en las generales de octubre, pero también adelantaron dos cosas más: la doble hecatombe del PCE y de la UCD, y la ferocidad de la campaña del miedo de la «gran derecha» empresarial contra los socialistas. Empezaban a ser, o eran ya, el nuevo lobo feroz, y quizá por eso había que acentuar todavía más el perfil moderado del partido. Felipe González había tranquilizado desde agosto de 1981 a la militancia en una «carta urgente» para hacer frente tanto a la «campaña de intoxicación y desestabilización» que vivían los socialistas como a la campaña «infamante» contra el rey que alentaban entonces los «círculos de extrema derecha» y era parte de la estrategia de la defensa de los golpistas en el juicio del 23-F. Las filtraciones interesadas activaron una defensa frontal del rey en el periódico contra la «bellaca» y «villana» utilización de su figura. La implicación inicial

y retirada final del rey era el argumento que iba a inundar la prensa golpista desde aquellos meses y durante el juicio celebrado en las vísperas de las elecciones generales de octubre de 1982. La única respuesta ante el inicio de esa «guerra sucia» contra los socialistas, contra «el insulto y la calumnia», contra sus «acuerdos con el gobierno», incluso cuando «no lo merecen», había de ser la calma, el rigor y la madurez —explicaba Felipe González—, porque lo contrario «podría ser el principio del fin del régimen de libertades».

Las condiciones objetivas favorecieron también el goteo de deserciones y desprestigio que vivió el PCE de Santiago Carrillo, con la dimisión de Ramón Tamames y el perceptible y «progresivo alejamiento de los profesionales, técnicos e intelectuales de la militancia comunista», como subrayaba un editorial de mayo de 1981. La «autofagia comunista» se había puesto en marcha y culminaría en noviembre con la destitución de Manuel Azcárate, pronto llamado por Cebrián para el equipo editorial de *El País*, para estupefacción del propio Azcárate y conformidad segura de Pradera. Probablemente esos comunistas díscolos no se resignan «a desempeñar el papel de convidados de piedra en la elaboración de las decisiones» del partido y en el fondo saben —y vuelve a hablar la memoria de Pradera— que el aparato los tiene por «picos de oro» que apenas han aportado nada sustancial a los resultados electorales.

Los movimientos de supervivencia de UCD se antojan de una crueldad abusiva también. Cuando Calvo-Sotelo ha propuesto como presidente y candidato de UCD a las nuevas elecciones a Landelino Lavilla, cuando circulan rumores de un nuevo partido de centro puesto en marcha por Suárez y ha sido ya víctima de todo tipo de abusos desde su propio partido, *El País* reacciona con la piedad y la justicia que no tuvo antes. No solo callan ahora aquella falta de coraje que le imputaron o el error de una dimisión cobarde, sino que —quizá después de haber compartido con Suárez una cena privada— prefieren recordar que «gobernó magistralmente la destrucción del régimen y las instituciones dictatoriales», «encabezó en dos elecciones generales las listas del partido más votado y nucleó en amplios sectores de la derecha moderada y del populismo conservador los deseos de transformación que en aquellos momentos tenía todo el país». Había logrado demostrar «una admirable coherencia personal con los valores democráticos al desafiar a los asaltantes» en «la infausta tarde del 23 de febrero», quizá con el «salero» de los adjetivos de Cebrián activado (como bromea Alejandro Pradera), aunque procediese de «una provechosa y rápida carrera en el anterior régimen movida por una desnuda ambición». El aroma de la culpa asomaba también en el balance de su presidencia, con un Suárez «mucho más audaz e intuitivo» que su sucesor Calvo-Sotelo: comprometió «su vida entera en el ejercicio de su cargo y no vaciló en apostar sobre los rumbos a seguir en una navegación por aguas desconocidas en la que no pocas veces naufragó con daño ajeno». Su dimisión de enero de 1981 ahora quedaba ya solo reducida a una «peligrosa finta personal».

El único lobo feroz que ve *El País* en el horizonte no son los socialistas sino el golpismo y los movimientos de alguna derecha tentada por las escarpadas rutas «ultramontanas» y donde «coexisten conservadores demócratas, muy probablemente minoritarios, y abundantes especímenes de la derecha cavernaria española, con un pie en la Monarquía parlamentaria del presente y el otro en una eventual dictadura fascista del futuro». El reflejo de semejante engrudo está en la «ambivalencia de Manuel Fraga, cuya verdadera identidad política, como demócrata o como autócrata, ni siquiera él mismo conoce». Sin llamar abiertamente al voto socialista —tampoco lo han hecho en anteriores elecciones—, *El País* se acuerda ahora de los tiempos en que Fraga, como ministro de Información entre 1962 y 1969, había rechazado «desdeñosamente la petición de algunos dirigentes de la oposición democrática —entre otros, Dionisio Ridruejo— para

exponer desde la pequeña pantalla su discrepancia con el célebre referéndum de 1966», ciertamente aprobado, incluso «por más ciudadanos que los registrados en el censo». Es muy probable que un escenario abierto y plural le impediría «recurrir a las embellecedoras reconstrucciones de su biografía política, a las réplicas evasivas ante las preguntas comprometidas y a las falacias destinadas a disfrazar las contradicciones y grietas de su programa económico».

GAME OVER

El hito histórico de la victoria del 28 de octubre de 1982 no activa las locomotoras de la revolución sino las de la moderación socialdemócrata predicada por Felipe González. El voto que lo ha llevado a la Moncloa es de «carácter interclasista y plural, nada dogmático ni integrado en un tronco unánime de pareceres», aunque sí aspira a la «necesaria transformación del Estado franquista, cuyos vicios y distorsiones han sobrevivido al proceso de transición». Con buena parte del Estado franquista no ha acabado la Transición y tendrá que hacerlo ya, por fin, el Partido Socialista. Por eso habrá de ser «respetuoso con sus propuestas de programa electoral sin intentar, ante las presiones internas partidarias, hacer honor, y desde el primer día, a lo que bien podría llamarse el programa máximo socialista».

No ha ocultado Felipe González en los últimos años que la consigna que recibió, para sorpresa suya, de dos íntimos amigos como Pradera y Auger cenando con ellos en las vísperas de su investidura fue precisamente esa: la finalidad de su mandato había de ser durar, porque durar cuatro años sería la mayor conquista de la democracia y la garantía de su consolidación. Lo mejor que podían hacer los socialistas era básicamente no hacer nada, o nada que fortaleciese la convicción de una revancha, los temores a una marxistización de la sociedad, los recelos ante el uso del Estado contra las grandes empresas y los viejos poderes: máxima prudencia cuando la reflexión abstracta o la demanda potencial se convierten en decisión ejecutiva. El poder era otra cosa y el país había sido intensamente sometido a la tormenta del miedo contra la llegada del lobo, como los eslóganes y la publicidad se habían encargado de recordar una y otra vez. Llegaban los rojos, aunque no llegasen nada más que un puñado de socialdemócratas de amplio espectro, sin la menor convicción revolucionaria, aunque hubiesen jugado durante mucho tiempo a esa retórica y parte de su electorado la reclamaba como seña de filiación. Incluso algunos de ellos surtían a la clientela de frases, invectivas y desplantes aliados a esa sensación histórica de toma del palacio, de acceso al poder vetado, de conquista literal de una propiedad ajena.

Pero lo más delator es el inicio a mediados de noviembre de 1982, antes de la investidura de Felipe González, de una serie larga y minuciosa de artículos editoriales bajo el titular explícito de «El cambio que se espera». Debió de ser recibido entre sectores socialistas como la prueba definitiva del arrogante intrusismo de un poder mediático ya incontestable y otro argumento más contra las pretensiones del periódico y del mismo Pradera. De ahí que se defiende *El País* otra vez de la suspicacia socialista al reprobar que una «opinión adversa –por ejemplo, sobre el calendario de la investidura presidencial– sea recibida de uñas por el poder incoado como un *consejo* insolente o una *presión* inaceptable». Solo «indica su falta de familiaridad con el funcionamiento autónomo de la Prensa». Pero sin duda el propósito era más modesto y al mismo tiempo más ambicioso, porque iban a combinar el intento de adivinar los ingredientes del «mínimo común múltiplo» que explica el voto por el cambio y, a la vez, conjurar la tentación de

«transformar la victoria del PSOE en patrimonio de sus militantes», porque constituyen «aproximadamente el 1 % de los votantes socialistas».

Esa es la traducción fáctica del consejo privado de Pradera: no hacer nada que pudiera suscitar el enconamiento gratuito, la rebeldía rencorosa, el acelerón golpista y garantizar la efectiva culminación de un cambio de régimen hacia un cambio de país. Pero no es fácil traducir materialmente el significado de esas consignas porque a la vez el periódico propuso un inventario completo y minucioso en dos largas series de artículos y editoriales en torno al estado de la nación. El desmenuzamiento del programa reformista de *El País* no era muy distinto del socialista. Y el periódico advertía, sin obviar las resistencias de la realidad, que «las leyes difíciles de la Transición» anteriores a la llegada de los socialistas –la de Incompatibilidades, la de Autonomía Universitaria, la propia Reforma de la Administración– enseñaban «hasta qué punto el peso conservador y egoísta del aparato burocrático» podía actuar como «oposición cerrada» a la voluntad de que el «país funcione», tal como decía uno de los lemas centrales de campaña.

Entre el programa de máximos de la militancia y la sumisión al orden heredado había un amplísimo margen de maniobra que permitía renunciar a cambiarlo todo y a la vez activar los cambios fundamentales para consolidar un Estado social y de derecho respetablemente democrático. Y ese sería el eje de la línea editorial, al menos en los dos años siguientes, mientras las primeras decepciones iban dejando de ser heridas sentimentales o errores de inexperiencia y se convertían en munición y metralla crítica contra los socialistas. Demasiadas de las medidas que habían incluido en su larga serie de artículos en torno a «El cambio que se espera» (con una formulación impersonal tan delatora) estaban sin cumplir dos y tres años después de su acceso al poder, y no todas ellas demandaban revolución alguna, sino una labor de limpieza y reeducación democrática del país.

La acritud sería creciente, también lo fue la expresividad de los desacuerdos, incluida la condena de vicios subterráneos. *El País* había abierto el foco al máximo en las semanas anteriores a las elecciones de octubre de 1982 para contar el estado de la nación y tras la victoria socialista las instrucciones eran casi un decálogo o la lista de los deberes escolares. Habían hilvanado una interminable ristra de obligaciones políticas para cada uno de los ámbitos de la acción gubernamental con no poca irritación y hasta desdén ofendido de los afectados por la prepotencia del periódico. Javier Solana recuerda todavía un encuentro privado con Pradera en el verano de 1982, cuando la victoria socialista era ya segura, para asentar y priorizar los cambios indispensables que el futuro e hipotético ministro de Cultura debía impulsar. Lo dirían por escrito también, asignándole la responsabilidad de un departamento cuyas «funciones tendrán que ser replanteadas de forma radical en el futuro» desde el edificio y el funcionariado que heredan del antiguo Ministerio de Información. De hecho, el cambio en la cultura era el «más profundo y serio que puede esperarse» del nuevo poder socialista, porque abarca lo inasible y subcutáneo, «un cambio en los criterios de participación de los ciudadanos, en los arcaicos esquemas mentales de las instituciones culturales, en los obsoletos mecanismos que configuran eso que se llama la cultura oficial y que en gran parte solo es alcanfor y burocracia».

Pero por supuesto la línea general no es esa, sino la exigencia de humildad ante lo «abultado» de la victoria, triunfal y euforizante en la calle pero causa también de pánico en los despachos socialistas: no ha ocultado Felipe González tampoco que la primera reacción fue paralizante, no solo por haber ganado sino por haberlo hecho de forma tan aplastante. Es posible que algunas de las prácticas de moderación institucional que usó entonces Felipe –en sus discursos públicos en el Parlamento y fuera del Parlamento– reflejasen algo de aquella súbita sobrecarga de

responsabilidad. Su victoria disminuía «las posibilidades de que la terrible metáfora de las dos Españas pueda seguir helando el corazón de nuestros hijos», según el editorialista. Hoy era ya verdad que el Estado había dejado de ser «el monopolio de una clase ni de una ideología» y que «el acceso al poder está abierto a todos los ciudadanos». Ese triunfo arroja al pasado más sombrío el «período de incomprensión de casi un siglo entre la forma monárquica de Estado y la izquierda socialista y democrática». Culmina así «el ambicioso proyecto histórico de la Corona», como una y otra vez ha repetido *El País*. Pero se trata sobre todo de que dure esa inédita noticia histórica y no sea solo una efímera primavera doméstica.

La extraordinaria responsabilidad que asumían empezaba en el objetivo de dismantelar las prácticas del viejo régimen enquistadas en la lenta y nueva democracia. Ese fue una y otra vez el argumento central que dominó la línea editorial del periódico cuando evaluaba los distintos ámbitos del ejercicio del poder socialista, casi siempre a la caza de las inercias que contaminasen de opacidad o de pasado al nuevo Gobierno. La inquietud estuvo menos fundada en el programa reformista que aplicaría Felipe que en las arraigadas y poderosas suspicacias que despertó en Pradera su permisividad y hasta su tolerancia con lo intolerable. El debate dejó de ser ideológico –porque la batalla estaba ganada para la moderación– y se convirtió en propiamente político, hipersensible e incluso intransigente hacia los rastros viejos o las averías nuevas de una democracia frágil. Ya no era solo el lobo golpista el que amenazaba su credibilidad ni era siquiera la ofensiva de la gran derecha, política y empresarial, lo que amenazaba a la democracia. Ahora su solvencia podía estar amenazada por el uso espurio, impropio o equivocado que los socialistas hiciesen de sus instituciones.

En cierta medida, con Pradera en el equipo editorial de *El País*, los socialistas dispusieron de una suerte de mala conciencia locuaz y fiscalizadora, pero también consoladora y compensatoria, una suerte de magisterio a distancia ante el que dar cuentas íntimas. A menudo su tono y la orientación de sus observaciones asumieron tácitamente el ejercicio libérrimo de una autoridad paterna sin paternalismo, vigilante y argumentada, como la aprobación que secretamente se busca o cuya reprensión se teme. Fue una suerte de conciencia de primera instancia o fiscal democrático cómplice y a la vez desconfiado, informado, receloso y preventivo, alérgico a la contagiosa euforia del poder. Sería también implacable en la identificación de las averías graves de una etapa cuya complejidad podía acabar desbordando a un equipo de ministros jóvenes y bien preparados, pero con escasa experiencia empresarial o de poder y entre los cuales había varios amigos personales.

Había contribuido a reblandecer la pureza identitaria e ideológica del PSOE como partido de clase y marxista y alimentó una línea de moderación con un doble objetivo, coyuntural uno e histórico el otro: la conquista del poder era una virtuosa solución política frente a cualquier otra combinación, pero sobre todo ratificaba la culminación democrática en España, respaldaba su definitiva institucionalización y neutralizaba –por la vía de las mayorías potentes– las tentaciones involucionistas que encarnaban los ultras y a ratos la aspiración a una nueva y gran derecha en Alianza Popular. La responsabilidad histórica de todo ello recaía en los socialistas y elevaba el nivel de exigencia de su propio mandato no solo para huir de la sombra del pasado sino para consolidar creíblemente una democracia adulta.

El desengaño empezó con la misma investidura de González y un discurso presidencial que llevó dentro el primer síntoma del futuro síndrome de la Moncloa. Volvió a asomar el mal que habían señalado ya, aquella ausencia de «pasión por las ideas», y echaron de menos casi sentimentalmente «su característica forma, ayer extraviada, de concebir la política y de hacer

llegar a los españoles sus ideas y sus emociones». Pese al inmenso respaldo obtenido por Felipe, y sin duda «para su persona emocionante», había sacrificado la sinceridad y la convicción «a la idea de que los hombres de Estado, tribu en sí misma de localización incierta, deben ser circunspectos, graves y abstrusos», como lo fue en un discurso «insuficiente como punto de arranque de un auténtico debate parlamentario». Había más sorpresa que otra cosa ante la impostura presidencial y la sospecha de que ni el aparatoso boato del protocolo ni el tono del nuevo presidente transmitían *cambio* alguno –y será un *leitmotiv* de los próximos meses–, sino más bien la servidumbre a un pasado de «convenciones artificiales y oxidadas, heredadas de una cultura estatal basada en la hermética separación entre gobernantes y gobernados». El cambio debería servir «para que las palabras no suenen huecas, los sustantivos no se emparejen inercialmente con los adjetivos de ritual y el desarrollo de los discursos no persiga fundamentalmente orillar los problemas, rehuir las definiciones y esconder el pensamiento».

¿Era ese el sentido de la consigna de prudencia y moderación? Probablemente no, o mejor dicho, creo que no: en buena medida aquella obstinada voluntad de durar que reclamaba Pradera a Felipe tenía menos que ver con el ritmo reformista de la transformación de España que con la extinción de viejas prácticas del franquismo o la corrección de prácticas mal aprendidas durante la Transición y perpetuadas en democracia. El campo de acción de la crítica de Pradera será una y otra vez la subsistencia de rémoras indeseables y la sumisión a inercias aborrecidas, antes que el rechazo concreto a medidas concretas del nuevo Gobierno. La atonía o la conformidad no existió entonces ni por vía aduladora ni por vía de inhibición: lo intolerable para el editorialista, cuando creo identificar a Pradera detrás del anonimato, es sobre todo la impotencia socialista para dotar al Estado de instrumentos democráticamente limpios, transparentes y congruentes con un Estado de derecho.

Claro que la crisis económica seguiría siendo galopante y el acoso combinado del terror involucionista y terrorista no iba a cejar en muchos años, pero ninguna de las dos circunstancias eximían al Gobierno, y al partido que lo respaldaba con una mayoría aplastante, del cumplimiento de los protocolos democráticos que una y otra vez perseguirá Pradera. La holgada mayoría absoluta socialista propiciaba la extirpación legal y jurídica del antiguo oscurantismo, del ventajismo del poder y la manipulación descarnada de la información. Pero ni el discurso de investidura de Felipe ni el culebrón sentimental que protagonizó Guerra tras la victoria de su partido transmitían buenas vibraciones. Nadie se creyó las vacilaciones de Guerra sobre su ingreso en el Gobierno porque «son literalmente increíbles», aunque siga siendo cierto que es «hombre dotado de una notable creatividad e imaginación política» y ha sido «en gran parte artífice de la victoria electoral del PSOE». Pero ni «el espectáculo» de sus dudas ni su propensión a filtrarlas en «lenguaje confidencial e intimista» exime de solventarlas «como era exigible, mediante un debate político en regla».

Era verdad que el Gobierno nombrado por Felipe «respira por lo menos un aire socialdemocrático», pero la crisis económica ha reducido «enormemente los márgenes de maniobra». Pese a los programas nacionalizadores que había defendido Miguel Boyer muy poco tiempo atrás, nada hacía pensar hoy en su aplicación real, cuando además solo «la ética, o quizá también la estética», habían impedido que ocupase un ministerio con la UCD antes de 1982. El veterano militante Boyer había vuelto al PSOE tras seguir a Fernández Ordóñez en la breve aventura del partido socialdemócrata, sin dejar de pertenecer –escribe seguramente Pradera el 4 de diciembre de 1982– a «la élite de técnicos financieros –la *beautiful people*–» formada y crecida «bajo el anterior régimen» y sin duda con los saberes necesarios «para impedir que el

Gobierno irrumpa en los mecanismos del mercado como un elefante en una cacharrería». Con los dirigentes de UCD «compartía, además de amistades y gustos, buena parte de las orientaciones generales de política económica».

Menos disculpable parecía en aquel primer gabinete socialista –en vaticinio lúgubre– la ausencia «de ningún antiguo trabajador manual en el Gobierno de un partido que todavía tiene el apellido de obrero». La otra mayor carencia doblemente reprochable procedía de su lealtad a «la conocida misoginia de nuestra vida pública» y la consiguiente ausencia de mujeres en ningún «alto cargo». A cambio, el nombramiento en Defensa de Narcís Serra valía como «una de las demostraciones más evidentes de que algo puede estar cambiando en España», a pesar de que la extracción social de la mayoría de los ministros se correspondía «abrumadoramente con la clase media urbana acomodada», con escasa «experiencia e imagen política» y un excesivo «tono mesocrático» que solo compensaban los dos líderes.

Pero no va a ser al principio la política económica lo que despierte las reservas más agrias del periódico, sino la continuidad subterránea de actitudes y medidas en terrenos de ética política. Algunas primeras conductas parecían «prolongar los vicios de una forma de concebir y practicar la política menos preocupada por la seriedad y la transparencia que por el espectáculo y la noticia», mientras insistían los socialistas en anunciar «grandes sorpresas» sin que sucediese nada, y esa parece «una mala táctica de cambio». La confianza en que Felipe González tome distancia del «experimento apasionante» de Mitterrand en Francia permitirá asumir «la vía realista y pragmática seguida por la socialdemocracia alemana» y reforzar el rechazo a «esa combinación de voluntarismo burocrático y brillantez retórica de la que hacen gala los socialistas franceses»: en los meses posteriores, el goteo de decepciones procedentes de Francia parece un argumento para aprender la lección en país ajeno y defender la coexistencia de «la iniciativa privada y la intervención estatal» como «clave de arco de los sistemas socioeconómicos que imperan en el resto de la Europa democrática». Pronto los socialistas franceses serían solo quienes «vendieron el cambio y no lo tenían». Y su lección debía llegar a «una izquierda definitivamente más joven» y «más débil teóricamente también», como la española, que opera sobre «tradiciones e instituciones de libertad menos sólidas».

Cuando Helmut Schmidt abandone la política «para unirse al pequeño limbo de talento y viejo prestigio donde ya está Willy Brandt», no habrá solo el sentimiento de una «cierta orfandad» en la socialdemocracia, sino también la ejemplaridad de una lección cuya estela seguirá en la memoria de muchos en los años venideros, cuando las dificultades acosen a los socialistas, porque «la verdadera nobleza de Schmidt consiste en abandonar cuando cree que su persistencia en el cargo puede ser más perjudicial que beneficiosa».

Tampoco hubo nunca complicidad alguna con el programa socialista de perpetuar «la corrupción periodística –en adelante de signo ideológico distinto– a que nos han acostumbrado en este país». Las prácticas del portavoz socialista, Eduardo Sotillos, serán condenadas con acritud progresiva e intransigente, como lo será con inaudita dureza la figura de José María Calviño. Exigen su cese apenas meses después de desempeñar el cargo de director de RTVE por su incompetencia pero también por defender una vieja cultura informativa, bien sea con un «zafio acto de censura» en TVE, bien sea para que deje de ser el «juguete privado del Gobierno y su partido», bien sea con la dosificación selectiva de la información, bien sea alimentando la adulación cortesana como vía propicia para la información reservada. La gravedad de ese veto a una emisión de *La Clave* podría llevar incluso a que el Gobierno se arrepintiera «de esa actitud combinada de arrogancia y medrosidad» y quisiera cesar a Calviño más tarde, cuando ese acto

«no signifique un gesto de coherencia con su programa y una prueba de la sinceridad de sus promesas, sino un acto arrancado por las circunstancias».

Cuando Guerra en la oposición «se cansó de llamar *chorizos y tahúres del Misisipi* a sus adversarios políticos», la posible censura de un programa televisivo, o el encubrimiento de «los torquemadas de turno», parece «no solo un mal sueño sino también una contradicción entre las denuncias del pasado y las conductas del presente». Mantener en sus puestos a los censores es una forma de empezar a fabricar el desencanto de quienes los votaron pero confían en que «el ejercicio del poder» no haya hecho «desaparecer de quienes lo detentan la capacidad de análisis de la realidad. La realidad es evidente». Solo conservará la credibilidad el presidente si los «buenos propósitos» expresados ante Ramon Colom en una entrevista en TVE «adquieren significación política sustantiva», con «actos de Gobierno concretos que demuestran sin titubeos que a las palabras les suceden los hechos».

Pero posiblemente la «pieza clave» del futuro sean las evidentes dificultades que presenta el compromiso electoral de convocar un referéndum sobre la OTAN. La *realpolitik* ha sido la probable causa inmediata de una «relación cada vez más ambigua del PSOE» con la OTAN, que enseguida viró hacia una «prudencia» que fue *in crescendo* durante la campaña. Durante más de un año quedará suspendido ese asunto en una indefinición que exaspera al periódico hasta reclamar a mediados de 1983 una explicación «nada neutral sino claramente beligerante, sobre los pros y los contras de nuestra salida y de nuestra permanencia en la OTAN». Aunque posiblemente este Pradera siguiera siendo contrario a la permanencia, irá calando en él sobre todo el riesgo político de la indefinición y a la vez del referéndum. La reprobación de la política informativa vuelve a ser el eje de su disparidad: el legítimo cambio de opinión de Felipe exige a la vez del PSOE y de su Gobierno una explicación cabal, compleja y adulta de las motivaciones. El marcaje casi personal a González en este asunto fue constante y consideró el periódico que el compromiso de la consulta iba a ser una patata caliente muy difícil de gestionar: por eso desde el principio señala la conveniencia de dejar «el referéndum para mejor ocasión, que algunos sitúan incluso en la siguiente legislatura». Cabe suponer que sus «electores conocen los parámetros de presiones internacionales sobre esta cuestión», y no los defraudará «si aplaza el referéndum sobre la OTAN».

TEMPO LENTO

Pese al balance moderadamente positivo de los primeros cien días de gobierno, el inventario de errores se lleva la parte del león del análisis, empezando por mantener su rechazo a la precipitada medida de nacionalizar Rumasa. En su momento fue un auténtico bombazo: ratificaba las sospechas de quienes veían en los socialistas una vanguardia proletaria y nacionalizadora y enmudeció de emoción a quienes recelaban del valor de los socialistas para hacer lo que debían hacer. Pero el periódico no aprobó la medida: parecía nacer antes del «ensañamiento» personal y la «inaudita batalla» del ministro de Economía Boyer contra el empresario Ruiz-Mateos que de la conveniencia de que el Estado se viese «inopinadamente convertido en empresario de una cadena de grandes almacenes, algunas bodegas de vino y unas famosas tiendas de artículos de lujo». Era la versión elegante del sarcasmo privado que los amigos recuerdan —¿qué pintaba el Estado como dueño de los bolsos Loewe?—, con la memoria añadida de las burlas del propio presidente contra los afanes estatistas de algunos sectores del PSOE.

Agrava la circunstancia que en otros ámbitos se han mostrado «demasiado pactistas con los poderes fácticos, quizá cuando más duramente pudieron hacer valer su victoria electoral». El *sotto voce* de la impunidad propiciada por la ley antiterrorista, con sus «espacios oscuros» y las tentaciones policiales «de utilizar sus armas y sus uniformes para fines privados de venganza corporativa», se convertirá de inmediato en condena formal y crónica contra el titular de Interior, José Barrionuevo, cuando había pocas dudas ya sobre los GRAPO como tinglado montado desde instancias estatales, cuando las siglas del GAL empezaban a hacerse familiares a los españoles y la presión de los muertos de ETA destiñó en la sociedad española y en algún responsable político, como Jordi Pujol, una tolerancia hacia ese terrorismo de Estado. No hubo tregua en el acoso a Barrionuevo, porque podía ser el maquillador de las cloacas del Estado y algunos de sus antecedentes eran poco prometedores, y no únicamente por su «vieja amistad política» con el anterior titular de Interior, Juan José Rosón. Al parecer, González llegó a pensar en él como su primer ministro de Interior y ante la inviabilidad obvia, acabó optando por su amigo José Barrionuevo, socialista hoy y antiguo carlista en su juventud.

Recién nombrado, sin embargo, y como si en el periódico algo supiesen de esa tentativa, Barrionuevo «no lo ha podido hacer peor» si quería demostrar «que en algo es diferente un ministro de policía de este gobierno a otro del pasado». No parece haber asumido que «el garantismo constituye el núcleo esencial del legado de la izquierda democrática y una de sus señas de identidad» frente a otros regímenes y frente «a la insensibilidad adormecida de los conservadores que prefieren la injusticia al desorden». No solo no ha eliminado la inquietante *línea de sombra* que propiciaba la ley antiterrorista, sin derogarla, sino que ha ampliado su radio y su profundidad «al permitir la completa incomunicación durante nueve días de los sospechosos», como si hubiesen olvidado los socialistas tanto «el carácter sagrado de los derechos humanos» como el hecho de ser «cuestión de principio que no admite excepciones ni tolera cegueras o sorderas temporales». La ineficacia de Barrionuevo «en la instrumentación del cambio» parece obviar que una democracia «no puede perseguir la delincuencia con métodos no democráticos», y menos todavía «con el argumento de que las víctimas han sido antes verdugos».

Su incapacidad activa la duda sobre si «las torpezas arbitrarias de Barrionuevo son solo eso, torpezas, o responden a una ideología y a un programa consciente» concebido «para tranquilizar a los famosos poderes fácticos a base de poner a sus pies los diez millones de votos» que obtuvieron en 1982. Ese descenso a los infiernos ha llegado a «ser ovacionado y adulado, contra su voluntad, por la derecha autoritaria», seguramente por la «sorprendente mimetización con los procedimientos de sus predecesores». Piden poco menos que formalmente la dimisión por el desastre global del ministerio en marzo de 1984, a pocas fechas de una demanda del ministro contra *El País*, que vapulea de nuevo al ministro como responsable del «mantenimiento de un connotado represor de la izquierda democrática como jefe de los servicios antiterroristas, y la fracasada política policial de todo su departamento», sin que aún nadie sepa «quién asesinó a Santiago Brouard y por qué».

Contra lo que pretende el ministro, tales preguntas «para nada afectan al honor del señor Barrionuevo, sino a la credibilidad del Gobierno de Felipe González», cuando el fantasma de los GAL comparece en el editorial del día 3 de abril de 1983 con sus siglas en el titular e involucra a González y su desafortunada idea de calificarlo de «terrorismo de respuesta». No haber cesado antes, a seis meses de ganar las elecciones, a «un ministro que perdió los papeles poco después de jurar su cargo» ha sido un grave error y no cesarlo ahora lo es también. Hace tiempo que tomó «en préstamo la ideología y la retórica de los reaccionarios» e incluso «pretende compensar con

puñetazos en la mesa, demandas intimidatorias a los periódicos y gestos desafiantes, su propia inseguridad y su patética incapacidad».

Por supuesto, de aquella esperanzadora «invención de canales para la participación ciudadana» en los partidos y el Gobierno no queda rastro alguno, y «es el gran desafío» de González y condición necesaria «para la modernización del Estado». Lo es también «hacer posibles formas de democracia directa, aunque carezcan de fuerza jurídica vinculante, sobre cuestiones locales» para difundir el ejemplo y la sensación de que «el poder político no es una fuerza extraña y opuesta a la sociedad, sino su mandatario y su servidor». La pugna por la «descentralización de las decisiones y la participación de los ciudadanos» está abiertamente perdida a un año y pico de gobernar, incluidos sarcasmos sobre la frecuencia de las cenas y los encuentros en Moncloa con periodistas dóciles o adiestrados.

Tampoco parece ya siquiera imaginable que emprendan la reforma de la Administración y la función pública, cuando había sido una de las ideas capitales del cambio que se esperaba un año atrás, según el periódico. Sigue siendo la Administración, tal como era, «elefantiásica, cara, ineficiente, torpemente intervencionista, mal preparada para dirigir una sociedad industrial en tiempos de crisis y atrincherada tras gruesos muros de piedra insolidaria que la aíslan de unos administrados a los que ignora». Tampoco ha sido un síntoma estimulante que las elementales «tareas de moralización referentes al cumplimiento de los horarios, el absentismo, el pluriempleo, etcétera», hayan empezado «con los sectores más numerosos y débiles del funcionariado». Ponerlos a ellos «en la picota con indelicada saña» parece obviar que tales hábitos generalizados «les fueron enseñados a los de abajo por los de arriba», que siguen a su libre albedrío. Ese no es tampoco *el cambio que se esperaba*, precisamente porque en los cuerpos de élite anida la «altanería» de quienes han terminado «por creerse que son los dueños y no los servidores del Estado». El contagio ha crecido en lugar de disminuir, con gestos de «arrogancia» en altos cargos y ministros o venganzas con cargos de UCD.

Puede ser todo ello parte del sarampión que los socialistas deben pasar, pero «a veces los sarampiones devienen en enfermedades más graves y hasta incurables». Si el Gobierno no traduce «en hechos tangibles y sólidos las abstractas promesas de moralizar la vida pública», es probable que los votos emitidos en octubre de 1982 acaben «siendo arrastrados por el viento». El PSOE parecía estar dilapidando, a un año de la victoria, buena parte del patrimonio de credibilidad y de ilusión de cambio con continuidades peligrosas con el pasado, además de exhibir una hipersensibilidad enfermiza hacia la crítica pública, demasiadas veces confundida con el acoso al poder y no con el ejercicio de un deber democrático inviolable. De ahí que el menudeo de gestos de arrogancia y prepotencia fuese tan temprano y que *El País* censuraba una y otra vez, desde la extraña propensión del presidente Felipe al silencio y la incomparecencia parlamentaria hasta los desplantes de su vicepresidente: no hubo tregua en esa crítica, como no la hubo en la incertidumbre prolongada sobre la posición del Gobierno en la OTAN o el empecinamiento con una LOAPA que restaba credibilidad democrática a los socialistas, incluidas las sospechas de acuerdos secretos con la derecha de Alianza Popular y en particular su líder aborrecido, Manuel Fraga Iribarne.

Paradójicamente, los socialistas fallaban donde la acción política dependía únicamente de sí mismos y del cumplimiento de consignas de democratización del país. Pero quizá nada exaspera tanto al periódico como su «desastrosa política informativa, destinada al fracaso por sus irrefrenables deseos de control, lindantes con el ánimo censor». Eso incluye la confianza en que González no «convierta en regla la actitud excepcional de aislamiento adoptada» desde las

primeras semanas de gobierno (pero no enmendada en lo sucesivo). Otros síntomas alarmantes producen «la misma vergüenza ajena que producían comportamientos parecidos en los tiempos de Suárez o del anterior régimen». Es un rasgo más inquietante que González no haya sabido librarse de los cortesanos que tienden «a convertir en figuras de cartón-piedra a los dirigentes políticos y a secuestrarlos mediante un cerco de incienso». Los socialistas son demasiado sensibles a la crítica, incluso a aquella que procede de sus electores o de los sectores sociales que desean ver funcionar su programa. Su política informativa galopa hacia atrás a grandes zancadas y sin remedio a la vista; no ha habido nada parecido a la «metafórica línea caliente» prometida de conexión entre la Moncloa y la sociedad y es cada día peor la «falta de encaje de las críticas» y la «creciente desconfianza» ante opiniones ajenas. El «cuadro de arrogancia» apenas un año después de acceder al poder hace al poder a menudo irrespetuoso con «las normas jurídicas que limitan» su ejercicio o con sentencias desfavorables a sus intereses.

Las inquietudes que una y otra vez suscita «la cuadratura del círculo» a que aspiran los socialistas no arruinan las esperanzas en el Gobierno, cuya gestión es globalmente positiva, pero dañada y hasta gripada por una excesiva ristra de recelos y errores. La «clave de arco» de su reformismo consiste en descontentar a todos sin contentar a nadie, en plena crisis económica y con la obligación «de conjugar contrapuestas voluntades incluso dentro de su propio electorado». Las «resistencias de la realidad» siempre seguirán ahí y «la cuasi bancarrota del Tesoro estrecha al máximo el margen de maniobra» de un Gobierno obligado a elegir «entre demandas igualmente perentorias y justificadas».

Pero la prueba de los hechos frente a las buenas palabras –en otro latiguillo del editorialista– sigue en contra de los socialistas, con «síntomas inquietantes de que el estilo tradicional y suntuario» ha seguido en demasiados cargos conformistas ante «el más decepcionante vacío» y «la ausencia de un proyecto ambicioso de reforma estructural de la Administración pública». La progresiva distancia con los sindicatos y en particular con el socialista UGT pudiera ser el anuncio de turbulencias graves en el futuro, y de nuevo la lección combinada de gobiernos como los de la Francia decepcionante de Mitterrand y de la Inglaterra que sacó del poder a los laboristas y colocó a Thatcher pudieran ser útiles para la presión sindical contra el PSOE. Pero el Gobierno está gestionando mal su mayoría al «intentar someter a la población trabajadora a unos sacrificios que no ha sabido pactar ni explicar», pese a ser su única solución, «si no quiere hacer un uso contundente de eso que la derecha llama el rodillo socialista». Por eso dilapidar esa mayoría «es una responsabilidad histórica. Y negociar desde él es lo que todo buen gobernante haría». A veces los errores rozan el absurdo, como la sobreprotección que el Senado ha impuesto a la fuerza al editor y senador socialista Carlos Barral ante una demanda judicial. El propio interesado había reclamado la suspensión de «esa ayuda indeseada, impuesta mediante la demagogia de quienes prefieren protegerse tras unas prerrogativas artificialmente transformadas en privilegios antes que someterse a las leyes que rigen a los demás mortales», condenan la «inmunidad parlamentaria» cuando se confunde con la «impunidad privilegiada», en este caso de un senador.

El embrollo no es pequeño porque suma y sigue en un encadenamiento corporativista de actitudes que ponen «en entredicho la honestidad del cambio y que desdice del regeneracionismo moral predicado por Felipe González». La medida proteccionista de un aforamiento que ha rechazado Barral se despliega como «vergüenza» y como «insulto dirigido a los diez millones de votos que creyeron en la sinceridad del discurso electoral del PSOE». Si los socialistas no saben frenar esos instintos, «las urnas se encargarán en su día, sin duda, de hacerlo». La lista de motivos

de desafección crece con una ley antiterrorista «cuyos contenidos pertenecen, doctrinaria y técnicamente a lo peor de nuestra tradición autoritaria», a la vez que suscriben en diciembre de este 1983 la crítica de un año atrás al «nerviosismo» y la precipitación en que incurrió Boyer al nacionalizar Rumasa, además de seguir igual «la política incoherente» hacia la OTAN.

Más dolorosa es, por razones históricas e ideológicas, «la escasa generosidad de su proyecto de ley reguladora del derecho de asilo, que limita, con asombrosa incoherencia», la anterior proposición del mismo PSOE en 1980, y *El País* hace suyo el reproche de Miquel Roca Junyent: «La memoria histórica exigiría cuando menos una normativa que permitiera materializar nuestro agradecimiento colectivo a los países que dieron a los vencidos en el desgarrador conflicto fratricida la oportunidad de salvar la vida, conservar la libertad y rehacer su existencia.» Más grave todavía es que la exposición sobre el exilio que se inaugura ahora «fingiera ignorar», en aras de un mal entendido y sobreactuado monarquismo constitucionalista, que el «dramático exilio de 1939 se realizó bajo los símbolos de la II República».

A finales de 1983 se incrementa gravemente la lista de daños innecesarios o remediabiles sin que Felipe González los atienda o afronte, quizá porque ha empezado la «enfermedad de las alturas». Apenas comparece en el Parlamento y hasta renuncia a dialogar bajo la presión de la calle, olvidando que es la calle la que lo ha llevado a la Moncloa. Las calamidades de Barrionuevo siguen en aumento con actitudes más propias de los «personajes de Dostoievski que de políticos responsables», sin que nada vaya a mejorar en los meses siguientes. Empieza a aducirse formalmente como excusa para la *guerra sucia* contra ETA la siniestra razón de Estado. La dictadura militar en Argentina argumenta de modo parecido, pero ni allí ni aquí deja de regir «la imperiosa necesidad de no conculcar las leyes y los valores del sistema democrático». Algunos cargos públicos aparecen como «arrogantes descubridores de las entrañas del Leviatán» y parecen creer frívolamente que «los defensores de las garantías constitucionales y de los derechos humanos son tan solo incordiantes profesionales, desconocedores de los arcanos de la vida pública, o ridículos puritanos». Pradera se arremanga los puños de la camisa porque «la demagogia de las manos sucias, esa mala herencia de Sartre, nunca logrará desmentir que los demócratas pueden regatear con los intereses y transigir con las ideas, pero en ningún caso deben sacrificar los escasos principios sobre los que descansa la existencia civilizada».

Los peores temores llegan en forma de nuevo asesinato y confirman «el comienzo de operaciones de *guerra sucia* en el País Vasco francés» en diciembre de 1983. Esa expresión en cursiva no es «más que un hipócrita eufemismo para designar actividades criminales» que buscan «hacerse perdonar su infamia» y «acogerse a la protección, supuestamente ennoblecedora, de los móviles políticos». La ferocidad de la dictadura argentina deja sin coartada cualquier tentación de legitimación de «los patrocinadores de esta barbarie», equiparables al «terrorismo estatal» argentino y a «los asesinatos, desapariciones y torturas de la Triple A» y sus fuerzas armadas. Los crímenes cometidos por los Montoneros no actúan como excusa ni fuente de legitimidad sino de viciosa atracción mimética, se funden unos y otros, guerrilleros y Estado, «en una misma suma de horror y brutalidad».

En el caso del terrorismo de ETA, «las operaciones de guerra sucia, además de su carácter intrínsecamente abominable, no harían sino arrojar material inflamable sobre la hoguera del País Vasco y propiciar acciones aún más desesperadas de las bandas terroristas en nuestro propio suelo». Felipe González está obligado a informar «sobre este grave asunto, a indagar las eventuales conexiones en nuestro territorio de esa fantasmal pandilla de asesinos autotitulada GAL y a utilizar los poderosos resortes del Estado en la persecución de los autores, cómplices y

encubridores de los criminales». No parece creíble que, «según el presidente, los policías españoles que pasan la frontera, con pasaporte y sin armas, ejercen simplemente su derecho a satisfacer la curiosidad y a tomarse unas copas».

El editorial del 24 de diciembre de 1983 lleva poca piedad y algo de sarcasmo desde el título, «Feliz Nochebuena, señor presidente», mientras dictamina que la última conferencia de prensa de Felipe González «no aclaró nada y aburrió mucho». Tampoco se ha reducido la susceptibilidad del presidente a las críticas, que no son fruto «de una campaña contra el Gobierno instrumentada por la masonería y el judaísmo, sino de un análisis de sus aciertos y de sus errores», ni parece que vaya a mejorar «la nebulosa doctrina oficial sobre la OTAN», ni asumió la veracidad de los informes sobre la persistencia de la tortura en España («prefirió marcharse a los cerros de Úbeda y amenazar a los activistas del nacionalismo radical»), ni las respuestas «más elusivas» sobre la ley antiterrorista ayudaron a disipar la equivocidad sobre ella hasta asegurar, «sin miedo a la contradicción, que esa norma es a la vez difícilmente aceptable y difícilmente eludible». Desde luego, tampoco «se ha avanzado para nada en materia de libertad de expresión con el Gobierno del *cambio*».

A estas alturas, sin embargo, ninguno de esos relevantes asuntos corrige un balance globalmente positivo. Pero las causas de la reticencia y una ausencia de rectificación pueden conducir a un desencanto progresivo de su electorado y a una conflictividad social creciente. El horizonte catalán y vasco tampoco se ha despejado como sería deseable y hubiese sido relativamente sencillo hacer. Ya todos conocen «los peligrosos rumbos» de la política autonómica socialista y el «empecinamiento gubernamental de mantener a flote los restos del naufragio de la LOAPA». Tres meses atrás, en agosto de 1983, el Tribunal Constitucional resolvió el recurso, y lo hizo a favor de las demandas nacionalistas y a favor también de la lectura crítica que había hecho *El País*, tanto de su articulado como de las medrosas razones políticas que la explicaban. Habían reprobado ya tres años atrás que no se hubiese dado «entrada dentro del Tribunal Constitucional a una sola voz que pueda defender, aunque en mínima minoría, las interpretaciones y posiciones de los nacionalistas vascos y catalanes». Pero ahora, además, sobra fundamento para dudar de esa ley y el Constitucional despojaba a la LOAPA tanto de su carácter *orgánico* como de su carácter *armonizador*. Era lo que el periódico venía señalando desde el origen de los tiempos, es decir, en la resaca del 23-F, con los socialistas en plena política de *concertación* con la UCD. El Constitucional se inclinaba por «dar la razón sustancialmente» a los nacionalistas, por mucho que el ministro socialista Tomás de la Quadra-Salcedo pretendiese lo contrario y explicase, «de manera tan patética como inconvincente», que al Gobierno nadie le había quitado la razón. Su «combinación de insolencia y ceguera», decía el editorial, hacía recordar «las peores estampas de UCD en su plenitud», cuando no había cumplido un año todavía el Gobierno socialista en el poder.

CUESTIONES CATALANAS

El debate político, sin embargo, no se agotaba ahí y el pragmatismo volvió a actuar como instrumento de pacificación y de control de daños potenciales para una materia hipersensible. Sin duda, Pradera estuvo en la sala de máquinas de unas jornadas públicas sobre Cataluña, celebradas en Gerona en febrero de 1984, y paradójicamente tituladas *¿Qué es España?* La convocatoria partía de *El País* e involucraba al semanario *El Món*, dirigido entonces por Lluís Bassets, con la

implicación de Ferran Mascarell, historiador y director de la revista *L'Avenç*. Fue de Pradera, sin duda, la labor de persuasión que acabó llevando a un muy refractario Rafael Sánchez Ferlosio a hablar en público sobre los nacionalismos en España. Entre treinta páginas de texto y diecisiete de apéndices quedó repartida, según cuenta el incisivo cronista Juanjo Navarro Arisa, su repulsa del nacionalismo, aunque el «esquematismo y virulencia dialéctica» que empleó para «descalificar el catalanismo sentaron definitivamente mal entre los asistentes catalanes», es decir, y entre otros, Josep Maria Castellet, Xavier Rubert de Ventós, Borja de Riquer, Josep Ramoneda y el mismo Mascarell.

Seguramente estuvieron concebidas esas jornadas a medias para respaldar solidariamente algunas legítimas demandas nacionalistas y a la vez conjurar las amenazas involucionistas en materia de autogobierno. O mejor dicho, para defender un efecto federal del vigente instrumento autonómico. Pradera abogó por eludir cualquier reforma de la Constitución, porque abriría el riesgo subterráneo, latente, de un involucionismo auspiciado no solo por la derecha sino por importantes sectores socialistas. Pero Pradera sobre todo defendió el perfeccionamiento del Estado de las autonomías en una culminación federal innostrada e innostrable. Su misma defensa en aquellas fechas de la «ley de uso del catalán», la importante ley de normalización promovida por la Generalitat, estaba destinada a despejar dudas sobre la credibilidad de las diversas posiciones: o «estamos construyendo un castillo de naipes retórico» en torno al Estado autonómico o «existe en España una voluntad auténtica de respetar los derechos de las diferentes nacionalidades y regiones que la componen, sin que ello menoscabe ni la unidad del Estado ni la coherencia de la práctica». Esa ley está pensada, cree Pradera muy en solitario, para que «la sociedad catalana sea *operativamente* bilingüe a corto plazo, y *efectivamente* bilingüe dentro de unos diez años».

En ese plazo la política debe hacer su trabajo si es capaz de identificar los aspectos de la Constitución «que pueden desarrollarse con el tiempo» bajo un supuesto rotundo y terriblemente vigente: «Si bien el Estado de las autonomías no es lo mismo que el federalismo, la operatividad del primero –si se desarrolla bien– puede ser homologable a la del segundo.» Los obstáculos para lograr algo parecido a esa maduración federal del Estado autonómico serán sin duda «los prejuicios centralistas y burocráticos en la Administración central» y también «los agravios comparativos entre las diferentes comunidades autónomas», bombeados por la derecha y sectores socialistas.

No hay nada extraño por tanto en que el 29 de febrero de 1984 *El País* editorialice precisamente sobre el encuentro de Gerona con lo que parece una toma de posición afín con la sentencia del Constitucional contra la LOAPA. La tentación de abordar una reforma constitucional podría abrir la puerta a los peores reflejos del españolismo centralista y acabar con resultados «diametralmente» opuestos a los buscados. Podría ser la vía para canalizar tendencias hoy aún sofocadas o reprimidas, contra lo que creen o imaginan los nacionalistas más críticos con la LOAPA. De hecho, una reforma parcial del título VIII podría equivaler «a marcar un campo de juego no solo para las fuerzas del involucionismo, sino también para el neocentralismo de algunos sectores de la izquierda», y creo que el editorial alude a la izquierda socialista. Era tan condenable «el carácter patológico» de una como de otra posición, la del PSOE y el Gobierno cuando «desentierra la retórica del nacionalismo unitarista» y la de quienes «alientan la utopía de un Estado propio».

Cuesta imaginar otra mano que la de Pradera en ese editorial, porque él mismo había intervenido en las jornadas de Gerona y fue quien afirmó, en una mesa redonda con Fernando

Savater y Josep Ramoneda, que la maldita pregunta «de *qué es España* no tiene respuesta». En «el mejor de los casos, tiene una respuesta acumulativa, en el sentido de enumerar todas las características que definen al Estado». Pero también rechazó Pradera el diagnóstico de algún ponente anterior, imagino que Borja de Riquer, en torno al «fracaso histórico de España como proyecto aglutinador». Por supuesto que el título VIII de la Constitución adolecía de visibles insuficiencias, pero «cualquier intento de reforma constitucional beneficiaría al involucionismo». No había margen razonable para experimentos ni convenía incentivar pulsiones recentralizadoras de viento sureño: había que asumir la imposibilidad de «cambiar el Estado de las autonomías sin involución, de modo que el Estado de las autonomías tiene que funcionar».

Ni los enjuagues practicados a oscuras para recortar los estatutos democráticamente aprobados, ni la guerra sucia contra ETA, ni la pésima e insensible gestión de Barrionuevo en Interior, ni el aplazamiento o el olvido de demasiadas medidas estructurales de reforma de la función pública y la Administración, ni la indefinición en torno a la OTAN, ni el secretismo de la política informativa o la nueva desconfianza hacia la prensa provocaron, un año después de la victoria de 1982, una condena global de la gestión socialista al frente del Gobierno. Pero sí revelaban el primer fondo de un desengaño imprevisto, porque nacía de las mismas ubres que habían parido la expectativa creíble de un cambio real: esas carencias no nacían de la coyuntura de crisis económica, sino de la insuficiente convicción para frenar o extirpar herencias del antiguo régimen que podían enquistarse como prácticas legitimadas por los apabullantes diez millones de votos de octubre de 1982.

No llegó a sorprenderse el periodista José Martí Gómez cuando Pradera desplegó por entonces un desnudo y tempranísimo diagnóstico sobre la primera gestión socialista. Antes de leer los editoriales del periódico, dudé de la fecha que aduce Martí Gómez en unas memorias un tanto caóticas, porque 1983 era demasiado pronto. Dejé de dudar tras leerlos, porque en ellos está diseminada la gradación de desengaños evitables: «El PSOE ejerció el poder en sentido escatológico», le dice Pradera a Martí Gómez. Habían «tomado posesión del reino de Dios» en un atracón de poder que dejó secuelas y malformaciones de pronóstico reservado todavía pero ya íntimamente turbadoras.

13. EL ARTE DE LA INDEPENDENCIA

Sin que fuesen exactamente explosivas, las mañanas editoriales tampoco transcurrían en la neumática mansedumbre del editor de salón, de clásicos inmortales o de joyas bibliográficas. La salida de la crisis en Alianza iniciada en 1978 había sido agobiante y difícil, mientras los títulos de Revista de Occidente salían con exasperante lentitud. Una crisis aguda estaba diezmando a editoriales potentes y a editoriales pequeñas mientras el mercado latinoamericano vivía todavía un hundimiento peligroso para el sector en España.

Lo nuevo de veras hacia 1976 había sido la entrada en combustión de Pradera con la realidad política a través de *El País* y la adquisición gradual de una lucidez pragmática sin claudicación ética. O dicho al modo antiguo, se aplicó la autocrítica antes de que se la aplicasen. La reeducación socialdemócrata había madurado en aquellos años entre manuscritos, albaranes, informes de lectura y borradores de contraportadas en Alianza Editorial y Siglo XXI, y quizá por eso los socialistas encontraron en él a un aliado tan arrogante como leal en su solvencia analítica y su independencia ética. Pero no hay ruptura o cesura entre sus dos oficios: el trabajo editorial siguió siendo carburante necesario de su función analítica y política en el periódico porque nunca fueron dos hemisferios escindidos, sino una continuidad lógica entre el oficio del editor de mañana y el analista político de tarde.

Cualquier lector de *El País* de aquellos años estuvo mejor informado que nadie sobre los padecimientos del sector editorial. Pradera difundía dos veces cada año el sermón sobre sus problemas, y ni la indolencia de UCD ni la falta de reflejos de los socialistas evitaron la cita con el lector cada 23 de abril y cada Feria del Libro de Madrid, como mínimo. Los habituales tintes sombríos de sus balances procedían, al menos desde 1981, de «la elevación de costes, las subidas de tarifas de transporte, la repercusión de la coyuntura en la caída de una demanda tan elástica como la del libro, la estrechez y envejecimiento de los canales de comercialización interior, los obstáculos para la exportación y venta en América y la desatención generalizada de los poderes públicos hacia los fenómenos culturales».

Desde luego, la crisis rebasa el aspecto financiero de un sector industrial porque este incide «en la propia organización y desarrollo de nuestra cultura». Como hubo de repetir muchas veces desde entonces, «el libro es, a la vez, una mercancía y un bien cultural». Ni cedía a la superstición audiovisual que atacó entonces al sistema ni negaba que «la galaxia Gutenberg se dispone a extraer enseñanzas del mundo de la galaxia McLuhan». Pero la Administración pública española no acababa de entender la trascendencia de «la revolución de la informática» como «el cambio tecnológico más importante de los últimos siglos», y eso exige planes propios de «reconversión para todo el conjunto de la industria cultural», explica muy presumiblemente Pradera en un editorial de 1982. La grave crisis de 1973-1979 podía darse por superada, «sin ayuda gubernamental», y el crecimiento era sostenido. Pero siendo como era España la quinta potencia editorial en orden de importancia, esa indiferencia estatal aumenta las dificultades específicas de un sector dañado por «la cortedad de las tiradas» y de «una débil demanda, el aumento de los costes de papel nacional (protegido mediante barreras arancelarias), los estrangulamientos de la distribución interior, el escaso número de bibliotecas públicas y su irrisoria dotación, la obsolescencia de la red librera, las deficiencias de la información bibliográfica, los riesgos para

la exportación creados por las espectaculares devaluaciones latinoamericanas, la falta de apoyo estatal a la difusión en el exterior de la obra de los creadores españoles, los elevados costes de los fletes transoceánicos, etcétera».

El temible etcétera que remata el panorama no parece suficiente para incentivar una ley del libro ni una reforma de la ley de propiedad intelectual, no consigue siquiera que las cámaras profesionales recuperen el protagonismo que les quitó el INLE franquista («un artilugio gubernamental de corte corporativo que aún no ha sido reconvertido a las necesidades de un sistema democrático») y sigue sin funcionar el Consejo General del Libro. La Feria del Libro en mayo de 1982 sirvió para recordar que también el sector librero, «atomizado, desorganizado y estancado», puede sufrir doblemente si se condena a los libros a una «comercialización masiva e indiscriminada a través de los grandes almacenes», la venta a plazos o por correo.

La crisis acechó en ese cambio de década a las editoriales de forma casi asfixiante. La muy roja editorial Crítica hubo de retractarse en 1980 del proyecto (o «saco sin fondo») imaginado a medias entre Manuel Sacristán y Gonzalo Pontón de editar en cien volúmenes las *Obras completas* de Marx y Engels, cuando llevaban solo doce volúmenes impresos: «Están suspendidas», escribe Sacristán en carta particular, «porque el mercado ya no da para eso.» Tanto la editorial Anagrama como la editorial Tusquets, fundadas ambas en 1969, se habían salvado por los pelos de la quiebra en el cambio de década con sorpresas comerciales que fueron desde una popular Patricia Highsmith hasta un desconocido John Kennedy Toole, o referentes internacionales como Marguerite Duras y Milan Kundera. Pero no se salvó un proyecto fuertemente político como Comunicación, nacido el mismo año 1969, con Valeriano Bozal, Alberto Corazón y Ludolfo Paramio.

A finales de los años setenta, cuenta Jorge Herralde, «de golpe y porrazo buena parte de aquellos lectores inquietos que se interesaban por *todo*, dejaron de leer no solo textos políticos sino también libros de pensamiento, de teoría», hasta llevar al colapso a la mayoría de las «editoriales progresistas». Anagrama reconduce su catálogo hacia la literatura de creación extranjera y hacia la nueva literatura indígena (como estaba haciendo Feltrinelli en Italia), a la vista de un lector súbitamente abstencionista de ensayo crítico, literatura política, doctrinal y revolucionaria, y funda el Premio Herralde de Novela (además de sus dos colecciones de narrativa: amarilla y verdegris).

Carlos Barral no tiene ya editorial propia después de haber salido de Seix Barral, haber perdido Barral Editores y estar bogando para sacar adelante una colección propia en Argos Vergara. A Bruguera le queda muy poco para el final de una buena etapa literaria (bajo la dirección de un hombre con pasado guerrillero, Ricardo Rodrigo, y la promoción comercial de un excomunista recrudescido hacia la derecha, Ricardo Muñoz Suay). Para entonces, Seix Barral ha sido vendida ya a Planeta, Destino ha sido intervenida, con su histórico Premio Nadal de capa caída, y también ha entrado en la macroestructura de Planeta la editorial de ensayo universitario Ariel, sin rastro tampoco de la valiosa colección universitaria que *Cuadernos para el Diálogo* puso en marcha a mediados de los años sesenta. Plaza y Janés ha reorganizado un catálogo literario de primer nivel que no evita que quede absorbida por el grupo alemán Bertelsmann desde mediados de los ochenta. No existe ya tampoco la fundamental editorial de José Martínez, Ruedo Ibérico, que intentó resucitar tras la muerte de Franco con una nueva colección sin suerte, Al otro lado, ni existen tampoco otras nacidas al calor de la resistencia antifranquista como Ciencia Nueva, o subsisten agónicamente, como Laia. Alfaguara no arrancó tampoco y ahora estaba en las manos expertas de José María Guelbenzu. Taurus diseña por entonces un catálogo de teoría

literaria y estudios filológicos de poca audiencia no especializada, y sin semejanza con el bombo de ensayo crítico e ideológico que la había caracterizado desde su nacimiento.

Sin embargo, y pese a semejante trasiego de desgracias, tampoco parecía que los socialistas hubiesen entendido con su llegada al poder en 1982 la relevancia cultural del sector. O, al menos, no surtió el efecto deseado el tercer grado que aplicó Pradera a Javier Solana en las vísperas de ser ministro, cuando quizá no contaba todavía en las quinielas ministeriales de Felipe González, o quien podía contar para Cultura, como Salvador Clotas, fue desestimado por públicas razones de moral pública (o quizá se desestimó a sí mismo por su potencial tasa de peligrosidad en manos de la prensa de la caverna). Casi un año después de la victoria, a finales de 1983, el enfoque sigue siendo económico para un sector amenazado «por la deuda exterior» pero también «subdesarrollado en su demanda de lecturas». Algo habrá de paliar el primer Salón Internacional del Libro, Liber, en octubre de 1983, pero siguen siendo graves los embates de una crisis que castiga «con especial dureza al continente latinoamericano» y pone en peligro «la continuidad de nuestras exportaciones», explica Pradera. Apenas unos meses antes había ofrecido un informe confidencial a Marta Williams, de la editorial estadounidense Random House, para valorar su proyecto de instalarse en España: «Ni que decir tiene», dice Pradera, que sus observaciones «son personales pero puedes hacer el uso que quieras de ellas». Y es que a pesar de la aparatosa diferencia de población entre América Latina y España, las cifras de negocios reales allí y aquí desmienten el espejismo de que el mercado esté al otro lado del Atlántico: las condiciones a la exportación son muy favorables, en efecto, pero entre el 70 % y el 75 % de las ventas de los editores españoles se realizan en España.

Era paradójico, pero «los libros llegan mejor a Argentina desde España que desde México y mejor a México desde España que desde Argentina, por no hablar de la distribución en Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador». De ahí que «a título particular no dudaría en aconsejar a Random House que utilizara España como cabeza de puente para su proyecto de edición en castellano», aunque la legislación le impediría constituirse «con su nombre y con un capital suscrito al 100 %». Pero «siempre sería posible intentar una *joint venture* con una editorial española para desarrollar alguna línea editorial específica. Por ejemplo, a Alianza Editorial le interesaría sobremanera estudiar» una colección con Random House de libros infantiles y juveniles. Es quizá el primer apunte de un proyecto que fermentará lentamente de la mano de otro viejo amigo, Xavier Folch, cuando al frente de Empúries promueva una coedición de libro infantil y juvenil con asesoría de Quim Monzó, Manuel Vázquez Montalbán y Sergi Pàmies. Este último, cuenta Folch, es «un escritor joven, listo, lector infatigable», y lleva ya entonces la memoria turbia y sentimental de su *hombre de la gabardina*, a medias entre su padre Gregorio López Raimundo, su madre Teresa Pàmies y un amigo de casa, Jorge Semprún.

Más turbadores han sido otros cambios del paisaje impreso. Tras la inútil conversión en revista semanal de *Cuadernos para el Diálogo*, desaparece también un poco después, en junio de 1982, la revista *Triunfo*. No ha servido de nada su conversión inversa a mensual (con envío dentro de una faja de papel marrón), pese a haber enseñado «a la izquierda española a sustituir las imprecaciones por los análisis, los insultos por los argumentos y el radicalismo verbal por el rigor de los diagnósticos». Algo funciona mal, «o no funciona en absoluto», si la monarquía parlamentaria no es capaz de auxiliar a las revistas que «anticiparon en sus columnas» durante el segundo franquismo los valores constitucionales, pese a las «amenazas de multas y de cárcel a sus redactores». No todas las culpas son oficiales y quizá es la misma izquierda quien perdona mal la

independencia sin condiciones: «el lema ilustrado de *atrévete a pensar* sigue siendo una práctica nefanda que los administradores de consignas difícilmente perdonan».

No existe ya tampoco la plataforma ácrata y contracultural que fue *Ajoblanco* ni existe la estupenda revista de literatura *Camp de l'Arpa* –con su extravagante dirección colegiada entre un tradicionalista como Juan Ramón Masoliver, un editor rojo puro como José Batlló y colaboradores de la neovanguardia comunista de Manuel Vázquez Montalbán–. La agonía económica había intentado salvarse con la ayuda de sugerencias y anuncios de los editores nuevos, pero no bastó con el voluntarismo colegiado, y hacía años que no quedaba rastro del humor político y descerrajado de *Por Favor*, con Jaume Perich, Juan Marsé y el mismo Vázquez Montalbán, ni existía ya la revista fundada en 1979 *En Teoría*, de Ludolfo Paramio, pero sí sobrevivía *Zona Abierta*, mientras *Revista de Occidente* languidecía tras sortear mal que bien la crisis que estuvo a punto de llevársela al otro mundo.

Es verdad que nacen revistas literarias de batalla como *Quimera*, producto de otra revista radical abatida por entonces, *El Viejo Topo*, o una maravilla de confección material y calidad cultural como *Los Cuadernos del Norte*, de Juan Cueto. Pero quizá el diagnóstico de Miguel Ángel Aguilar en *El vértigo de la prensa* mide mejor lo que pasa a partir de 1981, cuando los lectores «han cancelado sus antiguas solidaridades e indulgencias hacia los medios informativos» y parecen haber «jubilado a los excombatientes por las libertades. Han perdido memoria histórica».

EL EDITOR EN LA INTIMIDAD

Tampoco las cosas han cuajado en la nueva etapa de Alfaguara, a pesar de la contratación de Jaime Salinas para reflotarla. Los números no salen y en 1980 el grupo Timón (creado en 1973 por Jesús Polanco y Francisco Pérez González) adquiere formalmente la editorial por una peseta la acción (parece que el negociador de la operación es Pradera). Dimite el equipo de dirección de Salinas y Salinas mismo, que había incorporado a finales de 1976 a un compacto grupo de asesores literarios con sueldo, todos en la órbita praderiana y también casi todos colaboradores de *El País*: Juan Benet, Carmen Martín Gaité, Juan García Hortelano, Luis Goytisolo o Esther Benítez, mientras Enric Satué fue el encargado del sobrio y morado diseño para traducciones solventes sin fortuna comercial de Thomas Bernhard o Peter Handke. Benet acababa de identificar en la sección de Opinión del periódico una suerte de exigente gimnasio intelectual al aceptar que esas páginas valían lo que vale el estímulo de contar con un «cuerpo de opiniones», a veces «concordantes o discrepantes con las propias», pero que «obliga a reconsiderar estas».

La profesionalización de Pradera durante esos mismos años no había alterado de forma sustancial sus prácticas de dirección artesanal, amistosa o ambulante. La secuela del método descrito por Herralde –despachito, teléfono y máquina de escribir– ha sido la escasez de documentación para la etapa más fecunda de su vida editorial. Las cajas que desplegó Natalia un día en el comedor de la casa que compartieron Javier y ella en la calle Apolonio Morales de Madrid contenían apenas los restos del naufragio, los pecios de un oficio cursado a mano, en conversaciones, almuerzos, encuentros, teléfonos, tertulias, impulsos y apenas algún papel escrito.

Tampoco ayuda a la reconstrucción del período un grave percance detectado hacia 1985. Manuel Andújar tuvo que lamentar en carta a la dirección de Alianza de agosto de ese año que «en una empeñosa tarea de ordenación y recuperación, ha desaparecido, sin dejar un solo rastro, el

archivo de correspondencia del departamento de promoción, de 1967 a 1983, nada menos». Faltaban también «todos los materiales, o casi todos, que en carpetas se reunieron, del número 1 al 400 de la colección “El Libro de Bolsillo”». La eliminación del archivo incluye las encuestas contestadas por los compradores de los libros de Alianza a través de tarjetones rellenables: no quedaba ni uno de los siete mil que llegaron a recibir, según carta que transcribe Blas Medina en su tesis doctoral.

La continuidad de la colección más minoritaria, Alianza Tres, estuvo garantizada a pesar de la ausencia de Jaime Salinas y a pesar de las economías precarias. En los libros de Alianza Universidad iba a ser difícil «arañar costes» de fabricación, cuenta Pradera, pero podría ayudar algo pasar a «solapas plastificadas» los libros de Alianza Tres. Es en todo caso «muy difícil que lleguemos a los precios de Seix Barral, Anagrama, etcétera». A cambio, la coherencia de la serie con sus orígenes es altísima al entregar desde una obra maestra absoluta del modernismo literario como *La muerte de Virgilio* de Hermann Broch o *La mansión* de E. M. Forster, traducida por Eduardo Mendoza, hasta *La muerte del rey Arturo* editada por Carlos Alvar, pasando por las revelaciones póstumas y maliciosas de Rafael Cansinos Assens en *La novela de un literato*, la plenitud de Vicente Aleixandre en *En un vasto dominio* o la obra nueva de autores personalmente próximos a los editores. Ese fue el caso de José María Guelbenzu, de la tentación de la novela del ensayista y profesor Josep M. Ferrater Mora o la reedición de *Las semanas del jardín* de Rafael Sánchez Ferlosio, tras su aparición en la minúscula y doméstica Nostromo.

En ese hermoso catálogo siguieron vivos durante muchos años autores de excelencia marginal y sofisticada, con títulos impopulares pero cruciales de Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo, la prosa y la poesía de Jorge Luis Borges, y también un José María Arguedas o un Ciro Alegría. La poesía de T. S. Eliot traducida por José María Valverde podía atraer a otro puñado de lectores exigentes, y siguieron Drieu La Rochelle, o Italo Calvino con *Nuestros antepasados*, también traducido por Esther Benítez. La moda Rilke que había vivido la posguerra no alcanzó a sus notas personales de *El testamento*, traducidas ahora por Feliu Formosa, y por Alianza Tres pasaron algunos de los nombres nuevos capitales como Peter Handke y *La mujer zurda* o William Golding, Thomas Bernhard, una *Antología general* de Alfonso Reyes, Beatriz Guido, Iris Murdoch, Doris Lessing, Eugène Ionesco y Mijaíl Bulgákov, Leonardo Sciascia y Julio Cortázar, Miguel Hernández y César Vallejo, las memorias de Lou Andreas-Salomé, los relatos de Mercè Rodoreda y la poesía de Fernando Pessoa y de Cavafis.

Cuando Pradera está a punto de confirmar la contratación de las memorias chispeantes y esquinadas de Francisco Ayala contrata también las semblanzas humanizadoras de *Galería de raros*, de Ramón Carande. Cree probable que Octavio Paz pueda armar una antología de Vicente Huidobro, mientras Gimferrer se ofrece para montar una antología frustrada del propio Paz, aprobada por él. También recela Pradera de la propuesta de José Manuel Caballero Bonald de reeditar su ya veterana novela *Dos días de septiembre*. A menudo aplaza inmoderadamente respuestas a editores y autores, a veces por razones políticas, a veces por sobreabundancia de trabajo. Alfredo Bryce Echenique le apremiaba para saber si saldría o no su libro *Todos los cuentos*. Si fuese así, Bryce incluiría el título en el programa universitario que imparte en Montpellier para ponerlo «a la sombra de los bombos y platillos de la nueva aventura BarralArgos Vergara con mi última novela» (en alusión a su irresistible *La vida exagerada de Martín Romaña*, contratada con Carlos Barral).

No es raro en esos años que se muestre Pradera «abochornado» por retrasos abusivos en las respuestas a los autores y colaboradores. Uno muy enfadado es el ensayista, poeta y responsable

de *Ínsula*, José Luis Cano, que ha editado ya *Los cuadernos de Velintonia* de Vicente Aleixandre en Seix Barral y aspira a prolongar la obra en Alianza con un epistolario (que acabaría publicándose). «Como sé por amigos que eres tú quien decide en Alianza, te agradeceré unas líneas sobre el particular.» No escribió a Cano la negativa que escribió al autor de una *Historia de los impuestos en Suecia*, y tampoco sabe si deben cobrarle o no cobrarle a Julián Marías el juego de *Obras completas* de Ortega que ha pedido en julio de 1984. Ignora si entra en «el cupo de obsequios a los consejeros», pero «me parece inexcusable, en este caso, hacer la entrega sin cargo».

Posiblemente Pradera compartía con Herralde más de «uno de los rasgos del oficio». Pero el que señala Herralde más crudamente es la «insensibilidad romana para rechazar –malos originales». Un NO rotundo con redondel a rotulador es la respuesta a la anárquica propuesta de libro que ofrece Xavier Rubert de Ventós –«me das el sí en una semana»–. Pero a veces dice sí, y redacta las contraportadas en un santiamén, despacha infinitas cartas dictadas de una sentada, a toda marcha y sin vacilar, decide qué sí y qué no se edita y por qué. Accede a la oferta para que «la familia Ferrater Mora patrocine (anónimamente) la edición –si Alianza está dispuesta a emprender» sus obras completas (que no lo serán porque «no deberían ser nunca completas»). A Francisco Rodríguez Adrados le explica pacientemente en 1983, año del centenario de Ortega, que no hay desidia orteguiana en Alianza sino que el fondo de «el-quelodijo-antes-de-Heidegger» empezó «a venderse con alguna dificultad» cuando dejaron de aparecer novedades y sus esfuerzos «a lo largo de cinco años para promover las ventas de este catálogo no han tenido resultados».

Las gestiones pueden remontarse respetuosamente hasta un «querido maestro» como José Ruiz Castillo para que intervenga contra las ediciones pirateadas en México del fondo de Freud; Raúl Morodo aspira a publicar una antología del Fernando Pessoa político traducido por Pilar Álvarez y editado por él; escucha la buena fe de Fernando Morán mientras ofrece unas memorias «al estilo de las de Carlos Barral», nada menos; ha de recordarle a Francisco Rubio Llorente el compromiso de entrega de un *Tratado de derecho constitucional español*, se enfada porque la editorial Tusquets se ha adelantado a editar el epistolario de Jorge Guillén y Pedro Salinas que él había encargado ya a Christopher Maurer para Alianza Tres (claro: «paciencia y barajar»); escribe felicísimo a Neus Espresate para ratificar el acuerdo con Era para sacar «la primera edición en España del *Paradiso*» de José Lezama Lima a mediados de 1983 (aunque no era verdad que fuese la primera) o contrata por medio millón de pesetas la edición reducida de la *historia mágica* de España, *Gárgoris y Habidis*, que Pradera había rechazado a Fernando Sánchez Dragó en la versión extendida porque el autor no quiso podar la mitad del texto.

El lenguaje mudo –puerta abierta, puerta cerrada– decide si sus adjuntos pueden o no irrumpir en el despacho mientras hace uso de la doble militancia de editor en Alianza y editorialista de *El País*. Se impacienta ante consultas banales o preguntas tontas que debe resolver el responsable de turno y solo en último extremo acudir a su dictamen. Ángel Viñas anda a vueltas con *El franquismo y los Estados Unidos, 1947-1953*, convencido de que si no le interesa a Pradera «como editorial, sí te interesase como editorialista de *El País*». Atiende a las consultas sin dejar de atender a lo que hace y el laconismo encriptado de una respuesta gutural debía desarrollarse en el magín del interlocutor (como tantas veces hacía por teléfono). O, como recuerda Ezequiel Méndez, una intemperancia llevaba dentro una advertencia y una instrucción, habitualmente «con las palabras precisas, nunca más allá de las necesarias», «sin sermones ni imposiciones», fiel a un «sabio mecanismo intelectual para no derrochar tiempo inútilmente».

Pero no es imposible imaginar en otro modo más locuaz e imperativo, impaciente y hasta despótico a Pradera mientras instruye a un hombre sin experiencia en el mundo editorial como Diego Hidalgo. En un párrafo de sus memorias inéditas, que me autoriza a citar, Hidalgo transcribe la única consigna que recibió para no «sucumbir a las presiones que vas a recibir como principal directivo de Alianza», cuando acaba de morir José Vergara Doncel en 1983, ha sido nombrado consejero delegado y promueve una ampliación de capital (que Pradera considera innecesaria). Era conveniente adelantarse a la presión «para que edites este o aquel título», porque «muchas personas con manuscritos van a venir a pedirte que Alianza los edite». El consejo se afina en previsión de que sean «personajes famosos o amigos», y entonces «diles que NO, con cortesía pero con firmeza». Cosa diferente es que sean amigos personales, porque entonces, «cuando te lo propongan, te levantas, les coges por las solapas, les alzas en el aire y les dices: “mastuerzo, salga inmediatamente de mi despacho o le estrello contra la pared”». Dadas las limitadas posibilidades de todo editor, «si antepones tu cortesía, no te vas a librar de ellos nunca». Si se avisa al autor de que no podrá publicarse su libro hasta 2037, «te sacarán la pluma y te dirán: “firmo para 2037”». Pero también pueden ofrecerse a pagar ellos mismo la edición, y entonces «sacarán el bolígrafo y dirán “dónde firmo, por supuesto que pago la edición”». Eso irremediamente «deteriorará el catálogo», de modo que «la única solución es amenazarlos con estamparlos contra la pared».

UNA ALIANZA FERROZ

Fuese con las palabras de Diego Hidalgo o con la economía expresiva que evoca Ezequiel Méndez, su gestión editorial estuvo marcada por una personalidad inapelable, muy segura de sí misma y experta en los engaños y autoengaños de los escritores. Lo que empezaba a ser seguro y casi dogma público era la conversión cultural que estaba viviendo un país sometido al tratamiento electrificante y policromo, descarado y permisivo de la nueva cultura en democracia.

Se había acabado, o se estaba acabando, el déficit cultural que José-Carlos Mainer había diagnosticado con rotundidad en 1974 en su comentario al libro de Elías Díaz *Notas para una historia del pensamiento español actual* (era entonces una pionera e informadísima historia intelectual bajo y contra el franquismo, incluido el exilio). Faltaba en España todavía, decía Mainer en su artículo, «la presencia correctora de la alienación del pueblo español y quién sabe si la del bizantinismo de muchas de las actividades culturales que han contribuido a ahondar una escisión entre el público y los pensadores, jamás mediada por unas instituciones –estatales o privadas– de eficacia mínima». Pese a la férrea disciplina de estilo de la época, diez años después ya no era exactamente así y los trabajos de Alianza habían actuado como ese corrector que echaba de menos Mainer. Era en sí misma una metáfora editorial de la transformación íntima, intelectual y ética que estaba cambiando la sensibilidad media del país, más porosa a las raíces modernas, menos entronizada en sus prejuicios étnico-raciales y más dispuesta a comprender la complejidad de las sociedades contemporáneas desde una fiable pluralidad de saberes: las condiciones de una cultura democrática solvente.

Incluso parecía existir algo parecido al mundo feliz. O al menos la alianza entre cultura y poder socialista parecía tocar la cumbre más alta de toda fortuna en marzo de 1984 con la celebración del libro 1.000 de la colección El Libro de Bolsillo: tuvo algo de simbólica y coyuntural apoteosis de un final feliz incontestable. Se hizo cargo de la conmemoración un hombre recién

incorporado a la empresa como jefe de marketing y promoción, Ezequiel Méndez, cuando Manuel Andújar redujo su jornada a la mitad tras quince años en el cargo. No era la primera colección en alcanzar esa cifra, pero sí era la primera que encarnaba bastante más que un proyecto editorial de éxito: habían rebasado los mil títulos la histórica Austral (fundada en Buenos Aires en 1937) y el año anterior la turbadora *Carta al padre* de Kafka llevaba al Libro Amigo de Bruguera a la misma cifra.

Pero esa afortunada dimensión comercial carecía del valor y la intención cultural, ideológica y política que explicaba la rotundidad de la fiesta de 1984. El Libro de Bolsillo era una aventura diferente y pudo haber sido también una especie de primer ensayo para empujar a Pradera a la luz pública. La apabullante conmemoración lo mantuvo a él detrás, parapetado en las señas de identidad gráficas de Alianza a través de Daniel Gil y sus brillantes portadas. Esa celebración ecuménica y abrumadora tuvo mucho de reconocimiento al hombre invisible, que no intervino, no habló ni actuó en ninguno de los múltiples actos programados, pero estuvo en todos y sin duda un par de cabezas por encima y a la vista de todos. Una exposición en la Biblioteca Nacional de Madrid concentró la atención periodística y fotográfica en el diseñador: se inauguraba el 28 de febrero de 1984 con un centenar de portadas bendecidas por los ministros Javier Solana y Fernando Morán, además de la edición del catálogo con un texto de Francisco Calvo Serraller (asesor de Alianza por entonces e íntimo amigo de Pradera). La colección de portadas viajaría (ampliada) a Barcelona un mes después para que fuese Jordi Pujol, presidente de la Generalitat, quien inaugurase la muestra, flanqueado por el altísimo Josep M. Castellet y el ministro habitual ya, Javier Solana, además del reciente consejero delegado y director general, Diego Hidalgo.

El salón Neptuno estuvo colapsado como pocas veces por tantos bríos y títulos en la selectísima multitud que acudió al hotel Palace el 8 de marzo para celebrar ese número 1.000. Pero fueron dos: los volúmenes 1.000 y 1.001 reproducían el *Quijote* de 1604 y la segunda parte de 1615 en edición de Joaquín Casaldueiro, con el gancho comercial de entenderlas como dos novelas diferentes. También era imposible deshacerse de la nube de golfos intelectuales e históricos que rodeaban a Pradera allí, una especie de nueva caterva cultural del poder rojo con muy antiguos amigos como Jaime Salinas, Elías Querejeta, Juan García Hortelano, Juan Benet o Sancho Gracia, todos ellos habituales de sus habitualísimas tertulias. ¿Estuvo también José Martínez? En todo caso a él le había confesado poco antes que «la correspondencia me plantea un serio problema», porque «lo que de verdad me gusta son las tertulias y las charlas», harto de ocupar el día en cartas de tres y cuatro folios y de dictar otras tantas (para rechazar originales, que es la función básica de un editor).

Esta vez la tertulia fue gigantesca. El entonces columnista José María Alfaro constataba desde la rimbombancia del viejo falangismo reciclado que aquella fiesta del Palace «fue algo más que un acontecimiento literario o intelectual, erigiéndose en apoteosis para ser constatada en unos anales de sociología literario-política». La página de cromos de *Abc* daba fe (literalmente) al día siguiente de un Adolfo Suárez sonriente, mientras charlaba con un Pradera de gafas grandes y patillas a cuchillo ante la mirada de Hidalgo, y poco antes o después de firmar Suárez decenas de ejemplares del *Quijote* (apenas sin tiempo para saludar a otro expresidente, Leopoldo Calvo-Sotelo, porque discretamente llegó y salió en un visto y no visto).

Pradera, por supuesto, no habló. Fue Hidalgo quien abrió el acto; intervino después el director de la RAE, Pedro Laín Entralgo, y luego el ministro de Cultura, Javier Solana, viejo amigo de Alianza, de *El País*, de Pradera y de Hidalgo. Entre el auditorio escuchaba la mitad del gabinete socialista de 1982, con Miguel Boyer y Narcís Serra, José María Maravall, Tomás de la Quadra-

Salcedo y Julián Campo, aunque estaba también un exministro muy próximo desde años atrás a Pradera, Francisco Fernández Ordóñez, y una interminable lista de invitados que debieron estorbarse unos a otros entre copas, puros y libros, anduviesen o no así emparejados Francisco Umbral y Luis Goytisolo, Salvador Clotas y Álvaro Pombo, Juan Benet y Julio Caro Baroja, Fernando Claudín y Julián Marías, Jesús Aguirre y la duquesa de Alba, Manuel Vicent y Santiago Carrillo, Marcelino Camacho y Manuel Fraga Iribarne. Solo faltaba Felipe González porque la celebración con él había sido anterior y privada, citados en un despacho de la Moncloa Agustín Vergara, presidente de Alianza desde 1983, Hidalgo y el equipo de dirección editorial con Javier Pradera, Daniel Gil y Carmen González.

La feroz intimidación entre poder y cultura que exhibió aquella fiesta llegó a resultar irritante para algún heterodoxo vocacional o temperamental. Alberto Cardín creyó necesario rebelarse contra la pleitesía de los medios y ofrecer su «contrapunto del triunfalismo desplegado por figurones y suplementos». Otro columnista reprochaba a esas alturas «la degradación del impulso inicial de renovación» de Alianza (casi veinte años atrás) y hasta censuraba que de El Libro de Bolsillo originario ya solo quedara el tamaño, pero no el precio. Lo pudieron comprobar todos ante las 130 páginas del catálogo expresamente editado para entonces y el boletín conmemorativo donde recogían diversas entrevistas con los responsables y elogios a la colección (agradezco las fotocopias del inencontrable folleto a Valeria Ciompi). Los fueron recabando de Adolfo Bioy Casares, Gonzalo Torrente Ballester, Ramón Tamames y un hombre que ya no estaba en la casa, Jaime Salinas, pero la había fundado, y otro que se había sumado muy temprano, al menos como lector y estrecho amigo del grupo de amigos de Pradera, Fernando Savater.

En aquellos papeles se podía leer que la colección había «tratado de poner a disposición de un público mayoritario, de una manera moderna, lo que siempre se pensó en este país que era patrimonio exclusivo de las élites». El inconfundible aire populista y callejero de la frase exime de muchas puntualizaciones sobre el lugar ideológico y hasta el destinatario natural de colección tan popular como jaleada desde los más altos salones: es la luna de miel del poder político socialista y casi toda la cultura de izquierdas, cuando todavía el deterioro, las decepciones y los engaños son soportables, transitorios, provisionales o perdonables. Algunas de las cifras que aportaba el boletín añadían la dosis de ciencia ficción o comedia romántica hollywoodiense. Podían exhibir el millón largo de ejemplares vendidos de *El Principito*, el medio millón de lo que era ya entonces (¡y es todavía!) lectura escolar, *El árbol de la ciencia*, de Pío Baroja, el cuarto de millón que compartían tantos títulos de Proust, de Camus, de Sartre o *La metamorfosis* de Kafka, la *Introducción a la economía española* que Tamames había publicado veinte años atrás o un superventas excepcional como las recetas de cocina de Simone Klein, esposa de Ortega Spottorno, que firmó con su apellido.

Alguno más recelaba, como el joven Valentí Puig en otra columna de este 1984, que «la poco recomendable influencia de Freud tal vez provenga de su aparición en formato y precio de bolsillo» en LB, y tenía razón al menos en lo que hace a su difusión. Pero casi todos estarían de acuerdo con Carmen Rico Godoy –entonces influyente columnista de *Cambio 16*– cuando evocaba delatoramente y, desde la otra orilla ideológica, que «el progre o la progre que tenía una firme actitud antifranquista llevaba siempre un libro de Alianza bien a la vista», igual que a la vista de todos amarilleaba el póster clavado con chinchetas del *Guernica* o del Che, o de ambos, y en las repisas traseras de los coches podía dejarse con obscuro descuido algún título de Bertrand Russell o *El lobo estepario*, de Hermann Hesse, quizá un tomo de Proust (o alguna otra de las traducciones de Consuelo Berges, como Flaubert o Stendhal), o alguno de los once títulos de

Lovecraft, o alguno de los diez de Albert Camus o de los catorce de Jean-Paul Sartre. No todos llegaron a ese cuarto de millón de ejemplares vendidos pero todos los citados superaron en mucho los cien mil, como *La Regenta*, que anduvo por encima de los doscientos mil, mucho más que el número 21 de LB, los estupendos *Solos de Clarín*, junto a otro buen puñado de novelas españolas del XIX.

Debía tener razón el artículo anónimo de *El Socialista* cuando decía que al bucear en el catálogo de Alianza cada cual «se ve a sí mismo». También podía ser verdad lo que el propio Pradera declaraba en una entrevista dos meses después. No renunciaba hombre tan poco iluso a la ilusión de que la colección «tal vez haya contribuido a empujar algo ese cambio» que estaba viviendo la sociedad española. Fue la primera vez que se permitió semejante condescendencia. El número 1.002 de LB solo podía entenderse como una broma privada o un chiste editorial de Pradera porque iba a ser *El horror en la literatura*, de Lovecraft.

Pradera había concebido su papel editorial no solo como mediador y difusor de información flotante para adustos académicos y opositores juiciosos. Entendió que había llegado a sus manos de agitador civil y político un instrumento de modernización integral a través de la multiplicación de las minorías cultas para acabar con el recelo al cambio, la reticencia a las novedades, la devoción supersticiosa y desinformada, la rutina mental conformista, la suspicacia hacia el extranjero, la reserva ante la crítica, la impermeabilidad a las razones ajenas, la intolerancia ante las soluciones diversas y pactadas.

El poder de la izquierda había sido ese también, expansivo, reequilibrador, solidario, corrector. La multiplicación en marcha de las minorías intelectuales conjuraba en gran medida la orteguiana obsesión de una minoría técnica, absorta y selecta que derramaba sus soberbios saberes sobre las demás cabezas expectantes. A lo largo de la Transición y de la democracia cuajó una operación intelectual profundamente democratizadora del saber en la que participaron muchos intelectuales y editores, y sin duda también Pradera. La vieja y casi feudal noción de las élites iluminadas quedó deshabilitada y hasta despojada de sentido gracias a la multiplicación híbrida, horizontal y vertical, de minorías y élites especializadas y no especializadas. Era el fin de la era orteguiana y de la confianza premoderna en una clase para ensanchar insospechadamente los estratos de la riqueza intelectual, ética, cultural y política de un país que escapaba por fin a su crónico subdesarrollo cultural.

EL FINAL DEL IDILIO

Pero es posible que esa fiesta tuviese algo de preludio del fin o de resplandor epigonal. Sin saberlo estaba dando por terminada y amortizada una larga marcha ejemplarmente próspera. Había empezado a mediados de los años sesenta y hoy entregaba sus mejores brillos para morir con el ritmo lento de la flor de la azabara, intensamente amarilla mientras sus hojas erizadas de púas desfallecen y se pudren. Algo de ese largo final sin previo aviso latía en esa fiesta que aún no podía registrar a Javier Marías, quizá presente en el séquito de Juan Benet, con Álvaro Pombo, Vicente Molina Foix, Eduardo Chamorro, quizá Carmen Martín Gaité, José María Guelbenzu, Félix de Azúa, Francisco Rico, Antonio Martínez Sarrión, Rosa Regás o Blanca Andreu. Tampoco podía estar todavía Antonio Muñoz Molina, que por entonces redactaba obsesivamente tras cumplir con su horario como funcionario municipal en Granada una primera espléndida novela, aunque quizá sí anduviesen ya allí Soledad Puértolas y Jesús Ferrero, pero no muchos más de

quienes rápidamente iban a capitalizar la sensación de una nueva literatura en democracia y desde la democracia.

Probablemente era Rafael Conte el editorialista de *El País* que sancionaba en esta primavera de 1984 los cambios que estaba experimentando la literatura en España y su misma libertad de experiencia, desde «todos los colores» políticos y ya sin miedo: «cuando la obra se pone al servicio» de las ideologías puede desaparecer, ya que «el creador puede ostentar su fe, pero no su partidismo». Ya no era verdad que el lector español medio y masivo se identificara con Fernando Vizcaíno Casas, como Pradera había deplorado años atrás, al principio de todo. Hoy «las grandes campanadas» las dan los intelectuales «que abandonan esas formaciones para recuperar su identidad» como parte de «una gran desesperanza colectiva, pero que no es en sí negativo». La otra cara de la moneda podía ser la mercantilización galopante y la sobreabundancia de premios comerciales e irrelevantes: pudieran ser los «funerales de la literatura», como creía agoraramente Rafael Conte, aunque no tuvieran nada que ver con el «descompromiso» del escritor de la democracia.

Frecuentan las sedes y las redes de Seix Barral, Alfaguara, Anagrama o Tusquets escritores nuevos con sus nuevos nombres a cuestas, Juan José Millás, Lourdes Ortiz, Almudena Grandes, José María Merino, Rosa Montero, Luis Mateo Díez, Enrique Vila-Matas, Ignacio Martínez de Pisón, Julio Llamazares, Rafael Chirbes, Luis Landero, Arturo Pérez-Reverte y hasta Javier Cercas, que termina *El móvil* en 1986, cuando Rafael Sánchez Ferlosio deja de contentarse con entregar artículos sueltos a Pradera para *El País* y parece ya dispuesto a desembarcar de nuevo en las letras con tres libros importantes.

Algo estaba cambiando subterráneamente con el nuevo color político del poder y el impulso en marcha de nuevos nombres. También empezaban a erosionarse algunas de las convicciones que habían movilizado a la izquierda intelectual antifranquista y en cuyo sueño fabricaron los acuerdos de la Transición, los enjuagues entre responsabilidad, reforma y estabilidad, las esquinas rotas de proyectos precipitadamente desestimados. Ese año 1984 pudo tener mucho de primera cristalización o aterrizaje forzoso de una izquierda reeducada en una democracia capitalista, proeuropea y burguesa. Ese no era ya el enemigo sino la circunstancia deseada y curso natural de un país que se iba a hacer europeo del todo no solo con el deseo sino con los tratados internacionales en 1986, el mismo año en que la izquierda viviría su mayor trauma con la diatriba en torno a la OTAN, resuelta en un traumático referéndum.

El poder de la izquierda había entrado en colisión con el tiempo real de la Europa contemporánea y a la vez con algunos de sus postulados históricos y sentimentales; también entró en ebullición hiperactiva con otros nuevos e imprevistos: empezaba a desmocharse la presunta coherencia doctrinal de una izquierda transformada con y desde el poder, y enfrentada a la nueva realidad social que ella misma estaba contribuyendo a cambiar. Su propio éxito político abocaba a una moderación imprevista y hasta a la claudicación ante algunos de sus principios idealmente vertebradores. O quizá solo empezaba a arreciar la melancolía del cumplimiento. El ejercicio del poder contagiaba nuevos hábitos y un reguero de altanerías insufribles para quienes venían de batallas más antiguas, como el propio Pradera, con menos prisa que otros pero más seguro de los requisitos o las condiciones mínimas de la higiene democrática. Algunos de los textos anónimos de Pradera en estos años respiran perplejidad ante renunciadas excesivas y dañinas de la izquierda, y ese recelo ceba editoriales destinados a moderar o detener el salto desde el vivaz pragmatismo virtuoso de la Transición hacia el pragmatismo cínico como dolencia fatal y típica del poder en democracia.

La izquierda había ganado pero podía empezar a perder, en crédito, en solvencia, en dignidad. La conquista del poder no exigía una renuncia sumisa a las ideas pero tampoco justificaba el encastillamiento en la pureza ideológica: la transacción de un mal acuerdo había de ser siempre mejor que un buen pleito, aunque el maximalismo idealista de la izquierda tendiese a sabotear ese principio pragmático de eficiencia política. No todo fue comprensiva indulgencia de Pradera hacia las mutaciones políticas de los socialistas ni abnegada resignación ante los costes de la consolidación democrática. A los dos años de mandato socialista las facturas empiezan a abultar en los archivadores, los celos se multiplican y algunas prácticas del nuevo poder repelen abiertamente a una conciencia política no solo de izquierdas sino democrática. Los socialistas provocan disgustos inesperados, perpetúan prácticas innobles, incurren en desmanes inaceptables y equivocan los mecanismos para garantizar la confianza de un electorado gigantesco.

Pudieron empezar a tensarse por entonces las costuras del pacto que en algún momento de 1982 establecieron el presidente González y Pradera para proteger la fluidez de sus intercambios de criterio, de análisis o de juicios. Me contaba Carmen Romero que estuvo siempre claro, a instancias de Pradera, que su actividad reticente, aguafiestas o abiertamente crítica llegaba blindada por su imperativa libertad pero también por la acordada asunción de sus respectivos papeles: el error crítico de Pradera sería confundir su papel de interlocutor problemático o fiscal incómodo con el del asesor y consultor político. La responsabilidad del poder y sus constricciones pertenecían a Felipe González, pero la suya era pensar en voz alta sin más limitación –incluso agria, incómoda o furiosa– que su propia imaginación crítica.

Pero como había advertido *El País* desde muy temprano, González seguía sin interiorizar el fuego amigo de la crítica periodística. Su hipersensibilidad la hacía sentir como una forma de traición de quienes habían contribuido necesariamente a su victoria electoral. En abril de 1984 todavía no hay asomo de aquella presunta línea caliente entre ciudadanos y Estado, excepto en su peor versión posible, «esas variopintas cenas que se celebran los viernes en Moncloa, donde los progres de hogaño emulan a los marqueses de antaño en adulación y sonrisas al poder». Algunos lo sienten en el periódico, según un editorial, como «una burla sonrojante para cuantos creyeron que el cambio era un proyecto político de altura y no la corte de los milagros». Tampoco ayudaba la propensión a la jactancia del vicepresidente, que decía no frecuentar editoriales de periódicos porque, según Guerra, «no leía anónimos sin firma» y, según el periódico, porque «el vicepresidente del Gobierno solo lee los anónimos con firma».

Ya nada salvará tampoco al portavoz socialista Eduardo Sotillos, al menos mientras la terquedad de «mantenerla y no enmendarla» sea «la norma que parece cundir en el Ejecutivo», junto a otros «hábitos *tercermundistas* de nuestra clase política». Era ya un error en diciembre de 1983 preferir «el principio de autoridad al de la lógica» ante una política informativa equivocada. Si «a los ministros no se les debe dar la oportunidad de dimitir sino que es preferible echarlos», como aseguró el presidente por entonces, a Pradera ese ventajismo le repatea porque «la figura del que los echa» gana mientras daña «la eventual dignidad del que dimite». Para entonces la dimisión tanto de Barrionuevo como de De la Quadra-Salcedo eran parte del *predictor* político del periódico, junto a otros candidatos con innumerables boletos, como José María Calviño. Hace tiempo que son parte del problema más que de la solución, sin que lleguen a saber en junio de 1984 «si es una casualidad, una torpeza, una arrogancia, un reto o una tontería que siga precisamente como ministro» Tomás de la Quadra.

Porque 1984 había traído graves problemas nuevos plagados de «torpezas» repartidas entre socialistas y nacionalistas catalanes. Ya no era solo «el desciframiento del misterio de los GAL»

lo que exigía urgentemente del presidente dejar de «hurtar el bulto» en abril, sino también la querrela interpuesta en mayo contra exdirectivos de Banca Catalana y, entre ellos, el presidente Jordi Pujol. Acababa de ser votado por el 46% de los electores catalanes en su primera mayoría absoluta y la inquietud mayor este 24 de mayo no está tanto en el posible delito de Pujol como en el hecho de ser «un líder popular y un gobernante en ejercicio»; lo «escabroso» del asunto aumenta porque interfiere con «cuestión tan delicada –y tan mal gobernada por el Ejecutivo socialista– como es el Estado de las autonomías». Por eso el extenso editorial se lleva un buen pedazo de portada con una alarma muy honda. Interponer la querrela «quizás era necesario, pero, en cualquier caso», sigue siendo «demasiado para nuestra joven democracia», dada la evidente contaminación política del caso. Las «frasescitas y alusiones impertinentes» de Alfonso Guerra solo harán más difícil todavía demostrar que la querrela «no incluye aspectos de erróneo cálculo político». Sigue siendo un lastre excesivo e imprudente la «falta de sensibilidad» socialista hacia las «nacionalidades históricas». Tanto si acaba siendo Pujol culpable como inocente, el caso puede «llegar a afectar a la estabilidad del sistema institucional sobre el que descansa la Monarquía parlamentaria».

A estas alturas, el Gobierno debería «saber ya que gobernar no es aplicar la tabla de multiplicar» y Pujol y su partido «deberían haber aprendido, con el propio desastre de Banca Catalana, los riesgos de mezclar el sentimiento nacionalista con los intereses personales». La larga pelea que se avecina va a servir solo para que todo lleve a un enredo mayúsculo: solo vale una rotunda inocencia o una rotunda culpabilidad y cualquier otro efecto será «malo» tanto para el Gobierno socialista como para el propio Pujol. Ese «populismo» que practica resulta «siempre rentable a corto plazo en política» pero es «siempre peligroso a medio y largo plazo», aunque siga siendo verdad la urgencia de un cambio de Gobierno que Felipe no se decide a afrontar.

También seguían sin definir, tanto Felipe González como el partido, la posición que adoptarían en relación con la OTAN, aunque quizá las cosas estaban más claras en privado de lo que pudiera parecer en público. La posición netamente anti-OTAN de González había cambiado ya. Recuerda Maravall la expresión de Felipe en julio de 1982, con todas las expectativas favorables ante las elecciones, y la convicción de que el sapo de la OTAN «nos lo vamos a tener que tragar». El compromiso del referéndum había sido una solución electoral que aspiraba a respaldar la posición del Gobierno futuro, sin explicar la posición de ese Gobierno. El problema creció desde entonces en otra dirección: la mera posibilidad de convocarlo, fuese cual fuese el resultado, podía crear un precedente desestabilizador tanto en los países de la Alianza Atlántica como en el Pacto de Varsovia, y por tanto apenas nadie podía ver con demasiada euforia un compromiso que solo generaba inquietud.

Tampoco era ya presumible esperar demasiado de la reforma de la Justicia prometida por los socialistas. El periódico sigue pidiendo «un saneamiento no solo técnico» y espera aún la implantación del jurado. Incluso el anteproyecto de reforma de la Función Pública transmite sin querer «el profundo desaliento y el resignado sentimiento de fracaso» con que ha nacido. Apenas «ha dado a luz más que el modesto ratón de los controles de horario de los funcionarios modestos» y el «demorado envío» de otras «medidas urgentes». La reforma de la Administración «llega, si llega, una vez más, tarde y mal», con la temible expectativa de que el siglo XXI podría coger a España con una «Administración plenamente identificada con las corruptelas, los privilegios y las ineficiencias de una burocracia pública que marcha cada día más a la deriva y se enquistaba en posiciones de privilegio y poder absolutamente miserables».



Entre otros, con Isabel Pérez, Clemente Auger, Carmen Romero, F. González y Natalia Rodríguez-Salmones, seguramente en el Coto de Doñana (quizá 1986).

Nada debía intranquilizar el futuro de los socialistas en el poder. No había competencia política a la vista y se veía objetivamente beneficiado tanto por la impotencia caótica, gritona y desbaratada de Manuel Fraga como por la consunción súbita y dramática del PCE. Ningún sondeo ahora ni en el cercano futuro amenazará la hegemonía socialista ni reducirá la confianza de un electorado masivamente comprensivo con la dificultad de gobernar. Pero era precisamente eso lo que hacía más incomprensible la pasividad de González ante errores graves de gestión de política, de imagen y de dignidad ética. La regeneración predicada e icónica se tambaleaba día sí día no, sin rectificaciones claras de errores clarísimos.

Ni siquiera parecía dispuesto el Gobierno a modificar las reglas del juego manifiestamente injustas de la ley electoral. Esconder «la cabeza debajo del ala» y mantener incólume esa «poderosa herramienta de ingeniería política» solo revelaba la insensata convicción sobre «la cualidad inmarcesible» del poder socialista. Con razón protestan los partidos minoritarios contra una «ley para los poderosos», mientras redoblan el ataque del periódico contra «las listas bloqueadas y cerradas para el Congreso». Mantener ese mecanismo degrada la calidad de una democracia nueva, «fortalece el poder y fomenta la arbitrariedad de los estados mayores de los partidos políticos» y relega a los electores «a la pasiva condición de aceptar o rechazar en bloque la oferta que se les somete». La «indisimulada complacencia» con ese modelo es ley entre los grandes partidos con representación parlamentaria, pero «constituye una seria enfermedad de nuestro sistema democrático e imposibilita un acercamiento real entre las instituciones y los ciudadanos».

Tampoco es ya aceptable escudarse en la improvisación posfranquista para proteger las aguas turbias de la financiación de los partidos. Es otra falla estructural cada vez más patente y, a la altura de 29 de septiembre de 1984, no hay razón alguna para eludir la investigación de las denuncias de corrupción en el PSOE. Por entonces los rumores sobre su financiación irregular empezaban a dejar de ser rumores para cobrar entidad delictiva. Por eso «pocas declaraciones del presidente del Gobierno han resultado tan desafortunadas» como su comentario a informaciones «sobre eventuales casos de corrupción institucional». No hay otro remedio que investigarlos «sin mayor dilación», como parte de «un problema general de falta de control público sobre las finanzas de los partidos políticos». Sigue siendo una grave anomalía española en el contexto europeo la carencia de «controles efectivos» y es esa «una de las más espectaculares fisuras de nuestro sistema democrático». Sin rendición forzosa de cuentas no hay posible control de un

sistema en el que «los grupos que votan los impuestos, asignan los recursos, administran el patrimonio colectivo y ordenan los gastos no explican voluntariamente las fuentes de su propia financiación».

Con este diagnóstico de 29 de septiembre, Pradera toma carrerilla para aumentar al día siguiente la dosis de acidez y deplorar ya sin reservas la ley antiterrorista que «los socialistas se disponen ahora a refundir y a agravar». Cuentan «con el entusiasta apoyo de una derecha conservadora» ocupada en sabotear «la reforma de la enseñanza, de la sanidad y del poder judicial». Pero esa ley no puede merecer más que el rechazo de quienes condenan sin paliativos el «bárbaro salvajismo» terrorista y ven a la vez «con inquietud cómo la razón de Estado o el simple miedo a los poderes fácticos» empuja a los socialistas a «respaldar una normativa que ofende los principios de un Estado de derecho y que brinda amplias facilidades, en la práctica de su aplicación, para la abierta conculcación de las libertades fundamentales». Pero además es inefectiva y contraproducente con un agravante decisivo: la persistencia de la tortura en el País Vasco «es la *única* bandera que los ideólogos de ETA» pueden usar como justificación cínica e inaceptable de sus crímenes. Esa ley pone «en riesgo las libertades tan duramente conquistadas por la democracia española» y contribuye «menos a erradicar a la banda terrorista que a conservar sus bases sociales».

UN PREMIO A TRAICIÓN

Mientras escribe estas cosas desapacibles con el poder socialista faltaban apenas quince días para que se fallase, el 18 de octubre de 1984, la segunda convocatoria del premio de periodistas para periodistas Francisco *Cuco* Cerecedo en favor de Pradera. Una conspiración de amigos se había confabulado para sacarlo del anonimato y proyectarlo a una luz pública hasta entonces eludida a conciencia o usada como pantalla de protección. Mientras los focos acribillaban a Daniel Gil o a Diego Hidalgo en la fiesta de Alianza Editorial de marzo, o a Juan Luis Cebrián y a Jesús Polanco en los muchos méritos de *El País*, él seguía disfrutando de un margen de libertad e impunidad protegido por el anonimato. Las cosas iban a cambiar por sorpresa desde que el 19 de octubre *El País* informa en un breve de que el Premio Cerecedo ha recaído en el «jefe de la sección de Opinión» del periódico, donde Pradera «figura entre sus editorialistas» desde el principio.

Era verdad lo que repetía Pradera cada vez que podía y en esos días lo repitió mucho. La línea editorial de un periódico era responsabilidad exclusiva de su director. Pero también era verdad que todos los miembros del jurado sabían que el papel de Pradera en la caja negra del periódico y en la caja negra (o disco duro) de la democracia había sido algo más que consultivo o anecdótico. Por eso suscribieron todos ellos el fallo, encabezado por el presidente Carlos Valle-Inclán, seguido de Sánchez Ferlosio, premiado del año anterior, Carlos Luis Álvarez, *Cándido*, José Luis Leal, Eduardo Haro Tecglen, Miguel Logroño y Miguel Ángel Aguilar. La deslealtad sería perpetrada, para definitiva desesperación de Pradera, por antiquísimos amigos, varios de ellos excomunistas, compañeros de viaje o solo comunistas melancólicos. Por su culpa empezaba a desmoronarse el tinglado a la sombra que Pradera había montado desde hacía años, aunque todo hubiese sucedido de carambola, según me cuenta Aguilar. Actuaba solo como secretario sin voto y nunca había sido ni comunista ni compañero de viaje, pero su candidato al premio no era Pradera sino José Antonio Novais, con todos los méritos habidos y por haber para ganarlo (lo haría al año

siguiente, con Pradera en el jurado). Pero la negativa tajante de Haro Tecglen a esa candidatura (por agravios viejísimos relacionados con su etapa en el diario *España* de Tánger) acabó desembocando en la propuesta del mismo Haro de premiar a Pradera, y nadie dijo ni mu, como era imaginable.



En la *bodeguilla* de la Moncloa. En primer término, Natalia Rodríguez-Salmones; en segundo plano, Miguel Ángel Aguilar, Aida del Campo, Demetria Chamorro, Carmen Romero, Rafael Sánchez Ferlosio y Juby Bustamante; detrás: Felipe González, Carlos Luis Álvarez *Cándido*, Isabel Pérez, Clemente Auger y Pradera (1987). Cortesía de M. Á. Aguilar y Juan de Oñate.

Era más preocupante, y también lo sabía Pradera, que el premio se lo entregara tres meses después, el 18 de diciembre, el presidente Felipe González en un acto con el boato y la pompa que ya había desplegado la concesión el año anterior a otro amigo de casa, familia y fratría, Rafael Sánchez Ferlosio (con final feliz *after-hours* en la *bodeguilla* de Moncloa). En esos tres meses de intervalo entre el fallo y la entrega, sin embargo, la agenda política que afrontaría Pradera como editorialista iba a ser particularmente comprometida: el acta explicaba a traición y con alevosía su «labor continuamente anónima en el terreno de la opinión dentro del campo del periodismo» y su «constante incitación al libre examen de los problemas españoles». Reconocía esa nota al Pradera que trabajaba de forma invisible en la trastienda del periódico como inspirador de la línea editorial o, en acuñación contundente de Vázquez Montalbán, como «ideólogo de *El País*». Había sido además en buena medida responsable de atraer a las páginas de Opinión una exuberante lista de autores que habían formado parte de su ya larguísima vida de editor. Estaban todos tan seguros de su incomodidad con los halagos públicos como de su auténtico papel en la tramoya política y cultural de los últimos veinte años.

La virtud es secreta, pero el poder también. Quizá por eso el buen humor de su secretaria, Carmela Berzal, no ha borrado el recuerdo de un Pradera encabronado al conocer el fallo del premio: decididamente hundía su cuidadosa invisibilidad mediática. No era exactamente ausencia de vanidad, desde luego, sino la sospecha de un desequilibrio en las condiciones óptimas para ejercer una libertad efectiva e independiente (a veces, incluso de sí mismo). Todo parecía conjurarse no solo para sacarlo de la sombra sino quizá para reducir la libertad protegida en que había vivido hasta ahora. No era exactamente lo mismo redactar editoriales políticos bajo gobierno socialista con ese reconocimiento encima que hacerlo a oscuras.

Los quince días anteriores al fallo parecían dar la razón a la traidora felonía del jurado. El 9 de octubre reprobaba el periódico el «monopolio exorbitante» que pretendía proteger el Gobierno al

restringir la circulación de los sondeos electorales únicamente a los partidos, sin publicidad ni prensa; el día 11 celebraba la rectificación fulminante de esa medida por parte del Gobierno y el 17 condenaba la decisión del «Ministerio del Interior de desparramar un lote de condecoraciones entre quienes han sido formalmente acusados de un delito tan grave como es la tortura». Resultaba difícil de aceptar que, «en nombre de la estabilidad democrática y de la continuidad del Estado», el Gobierno hubiera olvidado sus promesas electorales de reforma de la Policía y la Guardia Civil, pero «desborda cualquier capacidad de comprensión» condecorar a presuntos torturadores con la conformidad directa o indirecta de Barrionuevo y el Gobierno.

En la misma víspera del fallo, el periódico deploraba otra «agresión a la libertad de expresión» perpetrada por RTVE y su jefe José María Calviño, decorada con «los extremos de ridículo que alcanza la ausencia de sentido del humor y el patrimonialismo de la clase política». Parecen estar olvidando los socialistas las condiciones de apenas dos años atrás que hicieron que UCD «se gasificara y desapareciera de la faz de la tierra después de haber manipulado, utilizado y manoseado la televisión pública hasta extremos que solo Calviño ha demostrado era posible rebasar».

Es sin duda verdad que Pradera desconfiaba «de las estatuas ecuestres» y prefería «los monumentos al soldado desconocido», como escribió Miguel Ángel Aguilar meses después de su muerte. El desvelamiento podría exigirle a partir de ahora una sobredosis de energía para mantener la disciplina crítica, la acritud necesaria, el rigor analítico y la independencia que exhibió hasta entonces. Había un problema más, de hecho, y era la sobrecarga de responsabilidad que conllevaba suceder en el premio a Sánchez Ferlosio, por entonces un clásico vivo incontestable y muy activo como articulista receloso del poder y, en particular, del poder socialista. Pradera se sentía a años luz de su excuñado, porque mientras Sánchez Ferlosio era una firma canónica, Pradera era solo un editor metido a editorialista y articulista muy ocasional: su inexistencia como autor reforzaba una libertad que habría que pelear doblemente ahora, cuando apenas su firma estaba asociada a unos pocos artículos políticos y a un puñado de incursiones tauromáquicas y futbolísticas motivadas a medias por las escapadas con los amigos y a medias por su pasión donostiarra por la Real Sociedad, incluido el Mundial de Fútbol celebrado en España en 1982. No había manera de señalar documentalmente, de forma positiva y concreta, qué otros méritos cabía aducir para premiarlo, pero era muy fácil probar la regularidad con que se veían los amigos en el restaurante José Luis de la calle Rafael Salgado, frente al mismísimo Santiago Bernabéu: allí estuvo emplazada la tertulia habitual con Benet y Ferlosio, Auger y Patxo Unzueta, Juan García Hortelano, Eduardo Chamorro y Manuel Matji, Jorge Lozano y Perico Moreno, Elías Querejeta y Sancho Gracia, con invitados intermitentes o selectivos (incluida ocasionalmente Carmen Romero y más frecuentemente otros como Alberto Oliart, Enrique Múgica, Pablo Lizcano o José Leguina).

Durante muchos años en la web de la Asociación de Periodistas Europeos, que entrega el Premio Cerecedo todavía hoy, ha seguido figurando como discurso de agradecimiento un artículo que no leyó nunca Pradera pero servía como broma privada entre amigos. Era una apología del fútbol de la selección brasileña porque ella sola «constituye una radiante demostración de que la felicidad es el estado de ánimo adecuado para hacer cualquier cosa en la vida que merezca de verdad la pena». Parecía una parodia de Ortega y Gasset pero no lo era: está escrito en vísperas de un encuentro de España contra Inglaterra durante lo que llamó un editorial del periódico de julio de 1982 «el Mundial de los horrores», tanto en sentido deportivo como organizativo. Apenas

cabía señalar, decía Pradera con su nombre el 15 de julio, más que «los fracasos y la amargura» de una selección (la española) y un Mundial como auténtica ocasión perdida.

La afición venía de lejos y durante años había escrito ya sobre victorias extasiantes de la Real Sociedad –dos veces consecutivas campeón de Liga por entonces– y alguna derrota depresiva, o narró en forma de crónica tardes majestuosas de toros y toreros con una de las varias pandillas de amigos mencionados por sus nombres: Juan García Hortelano, Miguel Ángel Aguilar, José María Guelbenzu, Antxon Eceiza, Elías Querejeta. Todavía siente Marcelo Díaz el orgullo retrospectivo de haber encontrado para todo el grupo de amigos entradas para las Ventas en 1981 cuando él era un recién llegado de México y acababa de incorporarse a Alianza. En la falsa calma chicha de vísperas, en pleno *consenso* recambiado en *concertación* de los años 1981 y 1982, dedicó Pradera numerosos artículos al fútbol y a los toros, pero en realidad era una manera melancólica de evocar las pandillas de amigos o la «infinita paciencia pedagógica» de Domingo Dominguín ante las opiniones y disparates que profería la fraternidad taurina, aunque «el primero de la clase era siempre Ignacio Aldecoa», cuenta en mayo de 1981, mientras cubría metódicamente los avatares de la Feria de San Isidro en Madrid. Con los años se fue quitando, aunque ya en la primera década del siglo XXI se vino con Natalia y otros amigos a Barcelona para seguir a la última figura, José Tomás. El humor negro a veces podía destilarse como una variante del optimismo de la voluntad, como hizo apenas unas semanas después del golpe de febrero de 1981, en un editorial que encontraba «un poco de fiesta» en el partido de España contra Inglaterra en el estadio de Wembley. «Aunque solo sea como testimonio sociológico», gracias al fútbol y pese a los días «luctuosos» que se vivían, el editorialista creyó que muchos ciudadanos se fueron a la cama «alegres y felices, y algo sorprendidos y bastante satisfechos de que tres jugadores vascos – Arconada, Zamora y Satrustegui– hubieran contribuido de forma decisiva a la victoria» de España.

El Premio Cerecedo en octubre de 1984 no iba a cambiar nada cuando hubo de afrontar en las próximas semanas el debate sobre el estado de la nación, las condiciones y resoluciones del congreso del PSOE y hasta el balance de los primeros dos años de poder socialista en diciembre. Quizá buena parte de la negociación íntima de Pradera entre la conveniencia y la independencia, entre la amistad y la veracidad, está concentrada en estos tres meses sin concesiones al oportunismo, sin neutralidad crítica y sin apenas variación del juicio, o incluso lo contrario: el premio pudo agudizar su sentido de la responsabilidad frente a los excesivos síntomas de «autocomplacencia acrítica» y «triumfalismo injustificado» de Felipe González, como escribió tras el discurso del presidente en el debate sobre el estado de la nación.

Solo tres días después de ganar el premio, el domingo 21 de octubre, *El País* se anticipaba al debate que empezaría el martes y lo hizo en sus modos habituales de entonces, en parte con las arrogantes admoniciones que a tantos debieron irritar y en parte con la propensión a leer la cartilla al poder con puntero y pizarra pedagógica. El periódico identificaba los problemas, disponía soluciones y dificultades y jerarquizaba las cosas para general ilustración. Venía a ser, también esta vez, el guión deseable del discurso del presidente, aunque no ocultaba su escepticismo sobre los resultados ni tampoco la inconveniencia de un formato anestésico y disuasorio para el gran público. Todo hacía prever la sobredosis habitual de «cuadros macroeconómicos y magnitudes estadísticas».

Pero nada justificaría eludir las explicaciones urgentes sobre las prácticas turbias de los GAL, las condecoraciones a presuntos torturadores, las negociaciones subterráneas con ETA, el espionaje y el contraespionaje en el CESID, la impropiedad de una ley antiterrorista «que

recuerda ominosamente a los bodrios represivos de la dictadura», la persistencia de las denuncias de tortura (que no son «simples maniobras de los compañeros de viaje de ETA ni tampoco delirios paranoicos de abogados y jueces demasiado sensibles»). Convenía además armarse de «una moral a prueba de bomba» para compartir la entusiasta satisfacción gubernamental por dos áreas todavía fallidas, la reforma de la Administración y el funcionamiento del Estado de las autonomías.

Entre tantas urgencias, las páginas editoriales aún encontraban sitio para reclamar que Felipe abandonase la «ambigüedad controlada» sobre la OTAN y se pronunciase «clara y terminantemente». La «estrepitosa marcha atrás» emprendida desde mayo de ese mismo 1984 podía nacer de «algunas realidades que solo el ejercicio del poder permite conocer». Pero el Gobierno debía dar esas explicaciones y es eso lo que hizo González en su discurso para favorecer «el fin de la ambigüedad», de acuerdo con el título del editorial del 24 de octubre. Tanto la permanencia en la OTAN como la convocatoria del referéndum atraerán «graves quebraderos de cabeza a los hombres en el poder. Pero los costes políticos que ello implique para el Gobierno palidecerían frente a los que tendría que pagar si la consulta no se realizara». No hay ya más remedio, aunque «la sostenida mayoría anti-OTAN» que registran las encuestas «sin duda será difícil de cambiar», como no sea por una «larga tarea de explicaciones y convencimientos» para ganar el referéndum y mantener a España en la Alianza.

En alguno de aquellos consejos editoriales de los martes, breves y rápidos, Miguel Ángel Aguilar sugirió que las explicaciones podía darlas también el propio periódico, visiblemente cómodo desde hacía un tiempo, según él, con la nueva posición socialista sobre la OTAN (pese a desmentirlo categóricamente Cebrián). Escribe en sus memorias Aguilar que *El País* llevaba un tiempo acompañando «sin escándalo esa mutación», cuando él mismo estaba a punto de abandonar, en la primavera de 1984, un periódico que sentía sin margen para la discrepancia. Es posible que por entonces el esquema de funcionamiento respondiese al habitual después: las sucesivas intervenciones con propuestas de temas y criterios aplazaban hasta el final de forma más o menos tácita o convenida la intervención *vinculante*, por decirlo así, de Pradera.

Con las encuestas claramente a favor de Felipe González, resulta difícil explicar su crispación creciente, como si «la sombra de la arrogancia y del poco encaje para recibir críticas» siguiera alimentándose de «los círculos de la adulación» y de un insuficiente espíritu crítico. Ese era un grave problema, sin duda, pero solo era uno más de los que empezaban a asediar a los socialistas. Aunque «el problema no es Flick» (que fue el nombre que identificó una fuente irregular de financiación socialista), según un editorial del 6 de noviembre, siguen siendo turbias «las arenas movedizas sobre las que se desarrolla» la «incruenta batalla» entre partidos sobre su financiación, agresivos en la forma y muy prudentes en el fondo. Ha sido «materia reservada durante demasiados años» y ha «engendrado, a resultas de su opacidad y misterio, un cúmulo de conjeturas, rumores y fantasías desbordadas» que ahora afectan a los socialistas. Las antiguas «circunstancias atenuantes» que validaban «la necesidad de crear, casi de la noche a la mañana, las estructuras de los partidos políticos» han dejado de funcionar: son un «auténtico secreto de Polichinela de la etapa de la transición». Pradera empieza a cargar las ingobernables carpetas que tapizaban su despacho con recortes, noticias, papeles que irán nutriendo lentamente las bases empíricas de la denuncia más implacable y más temprana contra la corrupción en España: el trabajo no estará listo hasta diez años después, pero han arrancado tanto la labor de documentación como la creciente exasperación contra un sistema de partidos dopado.

Inevitablemente el balance de los dos primeros años de gobiernos socialistas tampoco esconde

ya las decepciones ni apela a la amortiguación de circunstancias especiales o a la improvisación inexperta. Hay demasiadas sombras y quizá la peor es que «el *cambio* no es todavía algo tangible para los españoles». Los vicios de origen (franquista) siguen ahí sin remedio, como «la incompreensión política e histórica de los problemas catalán y vasco», la «insensibilidad del Gobierno entero» ante las sospechas de violaciones de derechos humanos y brutalidad policial, el «desparpajo» derrochador de dinero público y lo que ya no es solo minoritario y sigue dañando gravemente al partido y al Gobierno en forma de «una infatuación ridícula, resistente a la crítica, y una preocupante tendencia a descalificar a los discrepantes». Tampoco se ha hecho nada por detener «la patológica degeneración de Televisión Española», convertida en «sedicente *espejo* del cambio» con un «incompetente director general» incomprensiblemente no cesado todavía: «las críticas arrecian contra el Gobierno socialista porque no ha cambiado la forma de vivir» de los ciudadanos.

Pero no es esa la óptica que preside el congreso del PSOE en diciembre de 1984. La actual batería de desengaños y frustraciones alejan exageradamente en el tiempo los orígenes de un partido que en 1979 estuvo a «punto de estallar por los aires» a causa de «la inmadurez ideológica y las maniobras de pasillo», en plena «terapia de grupo» y entre «las abigarradas estampas del 28.º congreso». No parecía quedar nada ya de aquel primigenio partido «con pocos militantes activos, bastantes sueños ideológicos y grandes esperanzas políticas». Hoy explica Felipe González con crudeza «ese período como el traumático ajuste de la acumulación ideológica de los tiempos de la clandestinidad y la oposición a las necesidades de una política realista, orientada a la conquista del poder mediante una desahogada mayoría electoral». Había de ser así para dejar de ser un partido «puramente testimonial, rebosante de verbalismo revolucionario y aferrado a mitos decimonónicos disfrazados de ropaje científico».

Pero era ya demasiado flagrante el «sobrepeso de realismo político» que el PSOE estaba pagando «en sus tratos para desembarazarse del lastre ideológico del pasado». Los debates que suscita esa *realpolitik* «son algo más que convencionales» y entre ellos están las frustraciones por el «giro» en la OTAN, «la destrucción de puestos de trabajo» (contra la promesa de los 800.000 nuevos empleos), «el papel subalterno de la UGT» y su desplazamiento «en beneficio de las organizaciones empresariales». Todo ello debería ser parte del debate de un congreso que sin duda no será «tormentoso», pero «solo a base de ignorar la realidad que le rodea».

El congreso iba a ser decepcionante y la nueva ejecutiva resultante también. La escabechina ha sacrificado a Javier Solana, Joaquín Almunia, Raimon Obiols, Joan Lerma y J. M. Maravall («uno de los escasísimos teóricos del PSOE»). Esa operación ha estado al servicio de consolidar y aumentar «de manera abrumadora» el poder de Felipe González y Alfonso Guerra. Ya «definitivamente» el PSOE ha decidido ocupar el centro político con el fin de «mantenerse el mayor tiempo posible como partido hegemónico sin alternativa a su poder». Es el triunfo de Felipe González, pero «será también su miseria histórica si no sabe aprovecharlo para promover el cambio que prometió a sus electores», a más de dos años de su investidura.



Con Felipe González en el Hotel Ritz durante el acto de entrega del Premio de Periodismo Cuco Cerecedo (18 de diciembre de 1984). Asociación de Periodistas Europeos.

Seguramente era verdad que los buenos y felices tiempos se estaban acabando, pero en las fotografías tomadas al día siguiente de publicarse este análisis no hay rastro visible de tensión alguna entre los comensales reunidos. En la mesa presidencial y entre humaredas de cigarrillos y recios habanos se sientan el 18 de diciembre Felipe González y Carmen Romero para que el presidente haga entrega a Javier Pradera, en los señoriales salones del Ritz, del Premio Cerecedo. Con razón el tema de la cena iban a ser «las tensiones manifiestas» entre políticos y periodistas, según contaba cándidamente la crónica sin firmar de *El País* del día siguiente. Posiblemente conocía bien González la debilidad de Pradera por lo «quevediano» –como dijo allí, significase lo que significase lo de *quevediano*–, porque añadió Pradera que mientras a los periodistas les dañaba la «propensión a la megalomanía», a los políticos los estropeaba la «propensión a la aberrancia del poder», que es el extraño neologismo praderiano que recoge la crónica del periódico. La etapa dorada de las complicidades se acababa y era el mismo Pradera quien invocaba la memoria de Cerecedo para «apaciguar el actual clima de enfrentamientos entre los políticos y los periodistas», cuando estaba ya muy lejos el tiempo en que Felipe González viajaba a Santiago de Chile en 1977 como miembro del equipo de abogados en apoyo de los socialistas detenidos bajo la dictadura de Pinochet. En una de las escalas de aquel viaje moriría casi en sus brazos Francisco *Cuco* Cerecedo de un aneurisma, en un hotel de Bogotá, junto a otro periodista de *El País*, Joaquín Prieto.

Las nuevas reglas del juego estaban descubriéndose sobre la marcha y cada cual empezaba a resignarse a su nuevo papel. No iba a variar la lupa crítica a lo largo del año siguiente, en vísperas de saber cómo se resolvía el auténtico agujero negro que sería el referéndum de la OTAN. Dan por seguro en el periódico desde principios de 1985 «otro “cambio” frustrado», y es solo uno más de los muchos que han ido registrando. Tampoco Ernest Lluch ha conseguido vencer en Sanidad «las reivindicaciones corporativas» y ha vuelto a perderse la «oportunidad de establecer una sanidad democrática y progresista para todos los españoles». A la vez, reclaman menos contemplaciones con los propagandistas antiaborto «dispuestos a imponer sus convicciones a quienes no las comparten y crear un clima enrarecido y crispado». Quienes aceptaron de mala

gana la integración de los homosexuales están usando el sida ahora «con la misma fruición con que los monjes analfabetos y sus más sutiles dirigentes esgrimían cualquier desgracia natural colectiva como una forma especialmente concebida del castigo divino».

También la corrosiva conflictividad en la calle debería hacer recapacitar a un Gobierno que olvida que la insatisfacción social suele «desbordar los cauces de expresión legales». Lo peor en democracia ha sido siempre sofocarlas «mediante el uso arbitrario de la violencia». En julio sigue siendo «urgente» recomponer el diálogo social, cada vez más tensionado en torno a las múltiples reconversiones industriales en marcha, quizá necesarias pero siempre mal explicadas o mal planificadas. El Gobierno debería «reflexionar sobre las causas últimas» de otras movilizaciones, como las universitarias, cuando además sobre la reforma de las pensiones el Gobierno solo ha sido capaz de convencerse «a sí mismo».

Lo definitivamente inquietante, sin embargo, es el «viraje de la política económica, difícilmente tildable ya de socialista» en 1985. Miguel Boyer está situado en la órbita «del neoliberalismo sugerido por las *reaganomics* y un giro notable respecto a posiciones anteriores», que a su vez comportaban un giro radical con respecto a los planes defendidos sobre el papel en los años setenta. Quizá no es tan grande el actual giro «que pueda hablarse de una nueva era o de un nuevo ministro», pero tampoco es tan pequeño «que el Gobierno no tenga que reconocer sus errores». Sin sumarse a la huelga general convocada para la primavera de ese año 1985, sí exigen una campaña más convincente y metódica para justificar «los sacrificios del presente por perspectivas de futuro tangibles» y no únicamente por vía de cuadros macroeconómicos.

Ni siquiera la remodelación del Gobierno en julio de 1985 levanta los ánimos del periódico porque «el presidencialismo está ganando terreno». Para demasiados ciudadanos lleva «resabios autoritarios» la pantomima pública de tres semanas llenas «de absurdos, misterios y tragicomedias de salón» para remodelar al equipo de gobierno. Ni el cese de Fernando Morán en Exteriores ni el modo de gestar el nuevo gabinete, que no es «precisamente mejor que el anterior», promueven «giro de políticas, sino la continuidad».

Quien «más ha perdido en esta historia de la crisis es el propio presidente», y quizá lo dicen pensando en que las aspiraciones de Boyer de ser vicepresidente se han saldado con el «asombroso desenlace que implica» su dimisión, sin que ahí hubiese «una maniobra calculada, sino el resultado de que al presidente la crisis se le deslizó entre las manos». Lo lamentable es el empeño de Felipe González en justificar en unas razones personales que nadie cree la dimisión de Boyer, frustrado por no poder «decidir él los nombres de los restantes ministros del área económica» y derrotado en «el enfrentamiento Guerra-Boyer», convertido al final «en un desafío al propio» Felipe. La insinceridad de las explicaciones —«nada entre dos platos»— en su «lamentable conferencia de prensa» daña la imagen de Felipe porque nadie se cree la versión oficial. Solo corrige «ese horizonte de renovada grisura» la incorporación de Fernández Ordóñez como ministro de Asuntos Exteriores y la continuidad de Serra en Defensa, de Ledesma en Justicia y de Maravall en Educación, pese a la continuidad de Barrionuevo en Interior. Al menos, «los políticos ahora alejados del poder no tienen por qué seguir estando calladitos». El respeto por Boyer aumentó desde entonces, cuando fue habitual durante un tiempo que Pradera, Natalia, Clemente Auger y su mujer acudiesen a su casa en compañía de Carlos Solchaga. Allí sedujo a Pradera el Boyer más brillante y culto, exayudante de Javier Muguerza en la universidad, quizá con la complicidad añadida de haber sido particularmente cruel con Alfonso Guerra en su cortante arrogancia durante los consejos de ministros hasta su dimisión de 1985.

La mitad de las tarascadas contra el nuevo Gobierno se las sigue llevando Barrionuevo, pero

también ya el respaldo incomprensible de Felipe González a la Guardia Civil, que «rebasa las fronteras de la prudencia para entrar en el campo de una especie de incondicionalidad» inquietante, mientras siguen las denuncias y las sospechas de torturas. Tampoco parece inteligente empeñarse en prohibir la legalización de Herri Batasuna cuando es en realidad «condición necesaria, aunque no suficiente, para la normalización del País Vasco». El Gobierno debe quitarse «sus dogmáticas anteojeras» en el problema vasco y «examinar autocriticamente sus propias responsabilidades en esa deteriorada situación», con un espectáculo lastimoso una vez más «de impertinencia, nervios incontrolados y agresividad» representado por Barrionuevo. La desaparición de Mikel Zabala a finales de 1985 solo despierta las peores sospechas, expresadas en tres editoriales distintos, sobre los paralelismos en España con las desapariciones de la dictadura argentina: los delitos del Estado legitiman los delitos del terrorismo.

No está agotado el crédito socialista y tampoco hay alternativa política creíble a la vista. Pero nada de ello justifica los errores de un Ejecutivo que ha perdido frescura y sentido de la realidad, incurre en prácticas democráticamente nefandas y ha desviado su proa ideológico-política hacia la derecha con una naturalidad insólita. Algún error más grave está a punto de hacer saltar el sistema nervioso de la izquierda social y el periódico se hace eco con algo de crisis íntima de confianza en la música del poder. La «insensata excursión marítima» de Felipe González en el *Azor*, el yate habitual del dictador en sus vacaciones, desató una catarata de críticas ese mismo verano de 1985. Ahora se encarnaba en el mismo presidente el síntoma visible en demasiados socialistas instalados «con tal fruición en la cumbre del Estado que han embotado su antigua sensibilidad para sintonizar con las preocupaciones y los problemas de los ciudadanos», demasiado «encerrados en el recinto donde las cifras macroeconómicas, los cuadros estadísticos y los sondeos de opinión» acentúan «el peligro de la ceguera y la sordera políticas» en los gobernantes. No merece ya disculpa «esa reciente avidéz por la solemnidad, el boato y el protocolo». En las formas está también el fondo, y pedir a la ciudadanía «sudor y solidaridad» ante la crisis y las reconversiones a matacaballo no puede obviar «el valor de la ejemplaridad ni ahorrar tampoco un solo gesto». Al *Azor* habría que mandarlo al desguace antes de que cause males mayores o lleguen nuevas tentaciones presidenciales.

Con algo de humedad nostálgica, la resistencia antifranquista y el pasado más honorable volverían a los periódicos con José Antonio Novais, premiado en el siguiente Cuco Cerecedo, sin Haro Tecglen en el jurado: nadie había olvidado que salir en una crónica suya en *Le Monde* llevaba dentro alguna forma de inmunidad contra la tortura, el maltrato policial o la misma detención. El fallo fue el 16 de noviembre de 1985 y la entrega de manos del presidente el 15 de enero de 1986, con un discurso soliviantado de Novais. Parecía retomar la conversación abierta el año anterior para preguntarse ante Felipe González «por qué en un régimen de libertades el periodista tiene que autocastrarse políticamente».

EN LA PENDIENTE DE LA OTAN

En alguna medida el desencanto ha llegado también a Pradera por la sucesión de errores o discrepancias fuertes con el gobierno socialista, e intuyo que parte del refugio ante ese desánimo político estuvo en una de las pasiones sofocadas por él durante años. El jurista reprimido, o al menos el jurista encogido que llevaba dentro, empieza a exhibirse en los comentarios editoriales, en particular al filo de la renovación del Tribunal Constitucional en febrero de 1986, cuando

Manuel García-Pelayo renuncia a la presidencia y es elegido Francisco Tomás y Valiente (junto a otro amigo de Pradera, Francisco Rubio Llorente, magistrados del tribunal desde su fundación en 1980). Algo más tarde sería ya muy común que llegase Pradera a los consejos del periódico pertrechado de sentencias y dictámenes concienzudamente leídos y contrastados.

Quizá el primer y mejor ejemplo de ese refugio en el derecho contra los desengaños de la política llega en agosto de 1985, en «Privilegio y poder», para frenar el abuso político del aforamiento como figura legal que delata «una concepción corporativista de las prerrogativas parlamentarias». La sentencia del Constitucional da la razón, por decirlo así, al editorialista al rechazar la concepción de la inmunidad parlamentaria «como un privilegio personal». Los cargos políticos suelen confundir «el *papel institucional* que les corresponde» y «su propia condición personal *como actores*» que lo representan. Dos días después vuelve a otra sentencia del Constitucional y se encarga también del análisis y la estimación del trabajo del tribunal en el momento de su renovación, con elogio incluido a Manuel García-Pelayo y la profesionalidad de una institución que ha sabido «acomodar sus decisiones a un punto de vista estrictamente *jurídico*», descartando «los enfoques *políticos* (progubernamentales o antigubernamentales) o los criterios *ideológicos* (progresistas o conservadores)».

Pero quizá la decepción más honda e imprevista llega con el discurso del presidente sobre el estado de la nación en octubre de 1985. De hecho, el debate fue «Menos que un debate», como tituló el editorial a 16 de octubre de 1985, devaluado por un «autocomplaciente inventario» de Felipe González que ya solo viene a confirmar «la pérdida de sensibilidad política y de capacidad de comunicación» del dirigente socialista y dispara las alarmas. Poco queda del que fue, apenas «reconocible en el plumizo tono de su intervención», sin las clásicas «exhortaciones regeneracionistas, la confianza en la creatividad de las libertades y la apuesta en favor de la participación democrática». A cambio, ese vacío lo ocupa ahora «la peculiar jerga tecnocrática – económica o jurídica–» con la aspiración tácita «de convertir el ocaso de las ideologías en doctrina justificatoria de sus acciones», lo cual lleva dentro una carga moral de profundidad corrosiva porque remonta el reproche a los tiempos más oscuros del fin de las ideologías del tecnocrático Opus del segundo franquismo. González «está tratando de transmitir el mensaje de que la etapa de creatividad política inaugurada con el fallecimiento de Franco ha concluido y de que los ciudadanos deben asumir una larga resaca cuaresmal administrada por los socialistas». De esta forma, pues, «las viejas banderas reivindicativas tendrían que ser guardadas en los arcones tras haber desempeñado la función de elevar al poder a los socialistas». Nada atenúa el triunfalismo que elude las «estampas molestas, las promesas incumplidas y cualquier referencia no despreciativa a otros caminos alternativos», en una «visión unidimensional de la realidad» que solo conduce a la resignación y la entrega del ciudadano a sus «benevolentes administradores políticos» del «monopolio de la información, las ideas y las responsabilidades».

Volvían los viejos fantasmas y tanto Fraga como González parecían seguros de los respectivos réditos políticos. O eso hacía presumir una reunión privada entre ambos «sin luces ni taquígrafos» para que ninguno de los dos se apuntase la victoria en el debate, pero los «dos quedaron derrotados ante la opinión pública». Estaba en marcha ya el «brillante negocio» en el que creen que ganan ambos partidos, aunque también «requiere averiguar quién paga los gastos» de ese bipartidismo por el que «apuestan tanto los socialistas (convencidos de que Fraga es su mejor seguro para mantenerse en el poder) como los conservadores (temerosos de que la reconstrucción del centro-derecha les despoje de millones de votos)».

En realidad, mientras Felipe aplaza irresponsablemente su decisión sobre las condiciones del

referéndum sobre la OTAN, cultiva con Fraga una nueva versión inquietante del viejo consenso en forma de nueva concertación, aunque no lo nombren directamente, como si fuera una pesadilla o una monomanía del editorialista. Regresa hoy y ya fuera de lugar «la apología de la política pura, en detrimento de los debates reales sobre la situación de los ciudadanos». Ni siquiera el debate sobre los presupuestos ha escapado «a la apatía, al absentismo» y a modificaciones mínimas acordadas en «negociaciones extraparlamentarias» sin convicción y sin alentar un debate real. La «escena de abandonismo y desolación» es la mejor confirmación de que «la modernización del Estado y el adecuado comportamiento de sus representantes se encuentran lejos de haberse cumplido».

El cambio prometido seguía en el alero y otros cambios más trepidantes parecían dispuestos a arrasar de forma súbita o incluso irreversible el decreciente crédito socialista. El debate sobre la permanencia en la OTAN hubo de desatar a lo largo de 1985 y hasta el 12 de marzo de 1986, fecha del referéndum, las tensiones indisimuladas de una izquierda en el poder vertiginosamente aclimatada al realismo político, pero sobre todo incapaz de asumir de forma pública las razones de su cambio de criterio. Esa campaña electoral desataría los demonios y exigió de muchos una rectificación gravosa, a veces solo vergonzante pero en todo caso traumática.

Pradera será uno de ellos, rendido resignadamente al tacticismo político de una operación en cualquier caso dañina y quizá incluso equivocada. Como diría años después, el 9 de julio de 1997, la consulta fue «transmutada deslealmente por los adversarios del gobierno socialista en un litigio de política interior». Muy al principio de la legislatura, algún editorial había invitado a aplazar el referéndum prometido a la siguiente legislatura (al parecer, Cebrián era particularmente reticente a convocarlo), pero la misma gestión —opaca, lenta e incierta— del asunto lo había convertido en un problema inaplazable. Ha sido abusivo el plazo de tiempo que González «se ha tomado para ir descabalgando de la montura» y hoy «se encuentra en los cuernos del dilema», en expresión típica de Pradera: incumplir un compromiso electoral «serio» o convocar la consulta y perderla. Cualquier subterfugio o falsa solución será peor, porque un referéndum no «es un juguete», aunque pueda ser utilizado por la derecha para forzar la caída del gabinete en caso de un resultado negativo. La crisis política podría ser «aún mayor que la pérdida de la consulta por el Gobierno», con lo que habría que ir a elecciones anticipadas, a pesar de haber tenido la mayoría parlamentaria y diez millones de votos: «Un final bastante caótico».

Lo desolador no era tanto el cambio de criterio de los socialistas con la OTAN como la incapacidad «argumental» y la ausencia de claridad para ser convincentes: «Ni el Gobierno ni el PSOE han explicado de forma sistemática y clara las razones de su cambio de actitud.» Han hecho lo peor, han inyectado confusión en lugar de claridad y hasta han incurrido en humillantes tentaciones de «reescritura de la historia» con el fin de «salvar la cara a cualquier precio y de resistirse a cualquier forma de autocrítica». Y eso empieza por Felipe, incapaz de «confesar paladinamente sus cambios de opinión» y confiado en que «sean los demás los equivocados hasta hoy mismo y aguardar a que la sociedad le suplique la permanencia de España en la OTAN». Por tanto el referéndum ha de cumplir requisitos democráticos que no permitan su manipulación —hasta cinco tentativas cuenta Pradera—, sin los cuales sería un «fraude político», de manera que «una pregunta trucada, la negación del carácter vinculante de la respuesta o la carta escondida en la manga de unas elecciones generales» que anulasen el resultado «privarían de veracidad a la consulta popular».

El debate está ya emplazado a finales de 1985 en un lugar diferente de la política exterior, porque «estamos ante una simple confrontación de estrategias electorales» de política interior. La

decisión de la derecha de promover la abstención «tiene una racionalidad funcional», porque un triunfo de Felipe valdría como «herramienta plebiscitaria» en su favor. Y «una derrota de los socialistas» los pondría «contra las cuerdas, en vísperas de las elecciones generales». Sin subterfugios y de frente será la única manera de salvar la cara y quizá lograr, por la vía de la honestidad y la confesión pública, un resultado menos malo. Pese a la improbable victoria de la opción de González, al menos salvaría la credibilidad política. Si lo gana, sería «un auténtico plebiscito a su favor. Si lo pierde, sería un honroso y joven jubilado de la política», pero no hay opción intermedia. Esa era también la recomendación privada que había emitido por carta Maravall a González con fecha de 22 de noviembre de 1985: era la misma credibilidad de la democracia la que estaba en juego al convocar o no el referéndum y, según Maravall, «la sociedad española está dispuesta a atender a razones, pero esas razones le deben ser suministradas». Dicho de otro modo, en esa misma carta particular citada en *El control de los políticos*, «la gente pide información y creo que la gente pide liderazgo».

En todo caso, la estrategia de la ambigüedad calculada deja de existir a partir del 28 de noviembre de 1985, «cada día menos ambigua y en absoluto calculada», aunque el PSOE siga incapaz de emitir un documento con su opinión sobre la OTAN. Cuando lo hagan poco después, su «aire profesoral resulta perfectamente adecuado para su átono contenido doctrinal». Reproducen las mismas tesis de UCD «hace cuatro años» en favor del ingreso en la Alianza y «combate abiertamente los argumentos que los socialistas expresaron contra esa medida». Dos días después, el 30 de noviembre, la comparecencia de Felipe en televisión explica por fin la posición oficial y el compromiso de convocar la consulta.

Ahora es ya evidente que «tienen mucho que perder si son derrotados en el referéndum, pero también mucho que ganar si obtienen la victoria en esa apuesta». Con ella aspiran a «conservar la credibilidad del presidente» y a convencer a los electores de los «beneficios comparativos de la permanencia de España en la OTAN». Todo ello favorece unas «excelentes condiciones para afrontar las próximas elecciones generales». El periódico no olvida el espectro político de su lector y mantiene la legitimidad de la abstención para aquellos que no quieran castigar al Gobierno socialista pero a la vez mantener su rechazo a la OTAN. Habrá que intervenir más a fondo, y por eso puede que esté fraguándose en la cabeza de Pradera un sí táctico y desganado para evitar una derrota socialista de consecuencias incalculables.

14. UN BIENIO NEGRO

El error que cometería Pradera iba a ser táctico pero no estratégico. Forzado por la encerrona de la derecha contra el presidente, equivocó el movimiento que iba a dejarle fuera del periódico y sin argumentos convincentes para defenderse: le asistiría la razón política pero equivocó el método. La izquierda había entrado en combustión desde que Felipe González asumió públicamente en noviembre de 1985 la convocatoria del referéndum comprometido en la campaña electoral de 1982. El ancestral biotipo anti-OTAN activó en la izquierda el debate más potente y dramático que había vivido desde el congreso de la desmarxistización del PSOE en 1979.

Ningún sondeo daba la menor expectativa de victoria del sí a finales de 1985 y tampoco a principios del siguiente (con el referéndum convocado para el 12 de marzo de 1986). Hasta finales de enero no se fijó la fecha de la consulta, pero todavía no se conocía la pregunta que se sometería a la población. Lo que seguía siendo verdad es que la mayoría del votante socialista y la totalidad del votante a la izquierda de los socialistas eran partidarios del no. Todavía nadie había construido una consistente batería argumental que justificase el cambio de criterio, pero ese cambio de criterio solo ganaría verosimilitud, credibilidad y legitimidad con las razones claras y explícitas.

El periódico había insistido una y otra vez en la necesidad de salir del vergonzante armario y abordar la mutación a cara descubierta. La prolongada indefinición de Felipe González no había favorecido la aclimatación social del nuevo criterio. Tampoco lo habían hecho las tentativas de neutralizar con mecanismos dudosos un resultado adverso, y ahí *El País* había sido intransigente: no valía promover una consulta jurídicamente consultiva cuando era inequívoca su naturaleza política vinculante. Con fecha de 16 de enero de 1986, el Gobierno sigue sin ofrecer las «razones por las que creen –contra lo que creían– que es bueno que España permanezca en la OTAN», dice un editorial. En la realidad social de cada día, la población sigue a comienzos de 1986 «tan deficientemente informada sobre nuestra política de alianzas militares como en 1982». Tampoco ayuda la propensión a la jactancia que cunde en ese Gobierno –el propio González dijo que la derrota era una hipótesis que no contemplaba–, ni desde luego ayudan las declaraciones de Alfonso Guerra al anunciar la pregunta y desmentir la prolongada y pública incertidumbre que ha paralizado al Ejecutivo sobre qué hacer: sus palabras sitúan al vicepresidente entre el «absurdo» y el «sinsentido».

Cuando se conoce por fin la pregunta del 12 de marzo parece evidente que lleva dentro la voluntad «de confundir a la opinión pública», porque «el sí a la decisión del Gobierno es un sí a la pertenencia a una alianza militar y no a otra cosa». La intención de emplazar al electorado a un plebiscito sobre el Gobierno socialista podía ser la vía de salvación del Ejecutivo, pero a la vez tergiversaba una consulta ceñida a la permanencia en la OTAN. Y sobre todo ofrecía el pretexto óptimo para concebirla como protesta simbólica contra el poder socialista. Hubiese sido preferible el «escueto enunciado de que el Gobierno socialista ha resuelto permanecer en la OTAN y las motivaciones para el hecho». En el fondo el argumento central del periódico sigue siendo el mismo: solo habrá legitimidad para el resultado si el Gobierno da explicaciones sobre la OTAN y la política de seguridad, y «no regañinas a los periódicos, a los medios de

comunicación y a la opinión pública», como han hecho Alfonso Guerra y José María Txiki Benegas.

EL MANIFIESTO DE PRADERA

Todo va a cambiar con el debate parlamentario en el que por fin Felipe González expresa de forma convincente, según el editorial del 4 de febrero de 1986, las razones que explican el cambio de posición socialista. Los sondeos siguen sin mostrar mejora alguna del sí, pero el debate parlamentario ha puesto al descubierto una estrategia de la derecha con altísimo riesgo político para el Gobierno. A toda página la ultraderecha refugiada en *El Alcázar* defiende el no como voto de castigo contra los socialistas y el mismo Manuel Fraga empieza a coquetear fuera del recinto de una abstención hipócrita. Desde la inicial y equivocada *ambigüedad calculada* del Gobierno socialista durante tres años se está pasando ahora, a un mes y pico del referéndum, a la *equivocidad planeada* de la derecha.

Fraga «parece tentado de colonizar un segmento del voto adverso, con el argumento de que el cuerpo le pide votar no». Todos supieron siempre, en lenguaje muy Pradera, que «el temperamento de Fraga era demasiado canicular para entregarle el gobierno de este país». Pero si además ahora, en este 6 de febrero de 1986, un «otamista convencido» como él sucumbe a sus «humores gástricos, o de los otros, habrá que empezar a preocuparse sobre el entendimiento que tiene de la política en general». Por eso, Fraga «amenaza con llevar hasta el paroxismo esta incoada ceremonia de la confusión». Cada día es «más difícil para el votante saber el significado real de su próximo voto en el referéndum».

Sospecho que fue aquí donde Pradera empezó a proyectar el manifiesto que acabaría publicándose en las páginas de *El País* el día 18 de febrero. La «codiciosa voluntad» de Fraga de ocupar el mayor campo posible pudo ser el detonante definitivo para impulsar lo que enseguida se conoció como el manifiesto de Pradera. Tres días después del debate parlamentario los sondeos seguían siendo netamente desfavorables para el Gobierno: el 42 % del votante socialista de 1982 se inclina a un mes del referéndum por el no y es cada vez más verosímil que el votante de derecha y de centro elija «el no como un instrumento para desgastar al Gobierno, provocar la derrota en las urnas de su propuesta y someter a un fuerte castigo a Felipe González».

Esas eran las consecuencias indeseables que quiso sofocar Pradera forzando hasta el límite su posición en el periódico y también su ascendiente entre numerosos amigos y colaboradores de *El País*. Precisamente porque la pelota sigue en el tejado, como dice otro editorial de entonces, Pradera decide auxiliar a González poniendo en riesgo su propia posición en el periódico. Probablemente muy a la desesperada, como el propio Felipe, Pradera descarga sobre algunos de sus amigos la presión de suscribir un manifiesto en favor del sí, aparecido en las páginas de un periódico sin posición franca o explícita en esa materia caliente. Cebrián estuvo informado desde el principio. A pesar de sus recelos ante la rotundidad del sí del «manifiesto de Pradera», y a pesar de que decantaba al periódico en el sentido contrario a la mayoría de sus lectores, no se opuso a su difusión o apenas lo intentó, «sabedor en cualquier caso de que [Pradera] iba a hacer lo que él quisiera con permiso o sin él», como apunta en sus memorias.

En realidad, el manifiesto hecho público el 18 de febrero, y cuya redacción atribuye el periódico a Juan Benet, actúa preventivamente contra el «voto de castigo» al Gobierno antes que defender la permanencia en la OTAN. El *no* ha sido «usurpado ahora por sectores reaccionarios»

y la misma abstención ha quedado «adulterada por el burdo oportunismo de cierta derecha», según dice un texto con huellas praderianas obvias. Se trata de combatir «un estado de confusión e incertidumbre que puede acarrear consecuencias indeseables para el normal funcionamiento de nuestra vida democrática», de acuerdo con las firmas no solo de diversos redactores del periódico o colaboradores sino también de la élite intelectual de la democracia. Lo han firmado todos «a despecho de las evidentes contradicciones y culpables errores de los dirigentes socialistas en este y otros asuntos», pero ninguno de ellos basta para propiciar un «voto de castigo» ventajista. El editorial del día siguiente, 19 de febrero, consiste en una durísima carga contra las responsabilidades gubernamentales en el GAL y un reguero de preguntas secas y directas sin respuesta: quién los organiza, financia y protege.

Firmaron el manifiesto Juan Benet y Sánchez Ferlosio junto a una lista exaltante de nombres totémicos y no totémicos de la izquierda: Eduardo Chillida, Jorge Semprún y Jaime Gil de Biedma, Juan Marsé y Juan Cueto, José María Guelbenzu, Álvaro Pombo y Eduardo Úrculo, Sancho Gracia, Blanca Andreu, Luis Antonio de Villena, Beatriz de Moura, Toni López de Lamadrid y Tomás Llorens, Amancio Prada y Adolfo Domínguez, Julio Caro Baroja y Antonio López, Santos Juliá, Federico Correa y Oriol Bohigas. Con él ratificaban la ruptura traumática de los socialistas con los valores de la izquierda y situaban al poder intelectual en la zona de conveniencia de un partido ideológicamente desquiciado: en mi mocedad fervorosa debí sentirme más cómodo y expresamente reconfortado con los dos artículos contra la OTAN, consecutivos y algo abstrusos, que había publicado en el mismo periódico Manuel Sacristán. Eran una descalificación rotunda de otros dos firmados por Fernando Claudín y Ludolfo Paramio en favor de la permanencia, y parte de la campaña en favor del sí que había empezado a defender discretamente el Gobierno. Sospecho que yo debía creer lo mismo que Carlos Piera había escuchado a Sacristán: según él, parte del «hundimiento de la izquierda» se debía a la traición del PSOE.

Tengo la seguridad de que para el cándido y adicto lector de veintiún años que yo era entonces de *El País*, ese manifiesto en favor del sí constituyó una prueba más de la traición de las élites a la izquierda genuina y por definición anti-OTAN con la que me identificaba. El lector hizo como yo, y vinculó al periódico con la posición que defendía el manifiesto firmado por su jefe de Opinión: hasta entonces el debate había pivotado menos en torno a la conveniencia o inconveniencia de la permanencia en la OTAN que en torno al compromiso socialista del referéndum. El sí inequívoco no había sido en absoluto la posición pública y explícita del periódico ni desde luego era la posición mayoritaria de sus lectores, a pesar de las razones globales que pudieran justificar la permanencia en la Alianza Atlántica. Se entendía como condición implícita para ratificar el ingreso formal y definitivo en la Comunidad Europea (acababa de decirlo explícitamente el secretario general de la OTAN en visita a España).

Pero la movilización en la calle y las encuestas seguían favoreciendo el no a la OTAN, a pesar del viraje de González y del PSOE al menos desde su congreso de diciembre de 1984 en favor de permanecer en la Alianza Atlántica. Como decía por entonces González, no casarse era menos traumático que separarse, y algunos miembros relevantes del partido, como Maravall, habían defendido por escrito que ese ingreso neutralizaba o ayudaba a neutralizar las posibles intenciones golpistas que siguieron sofocándose al menos hasta 1985. Pero ese no era el talante general del lector del periódico. La iniciativa de Pradera comportaba necesariamente una confusión de papeles entre su criterio privado como editor (en Alianza, que es como lo firmó) y el papel que le correspondía en el equipo del periódico.

El efecto de ese manifiesto en una izquierda muy polarizada fue fulminante en numerosos lectores. En los días posteriores al 18 de febrero el defensor del lector recibió numerosas protestas por la violación de la neutralidad del periódico y por exhibir sin disimulo una posición favorable al Gobierno respaldada por el jefe de Opinión. Su credibilidad y la independencia quedaban directamente afectadas. Tanto el Comité de Redacción como el *ombudsman* (cargo que existía desde el año anterior) abordarían críticamente el asunto al domingo siguiente, 23 de febrero, sin que Pradera, al parecer, estuviese ni avisado ni informado por parte del redactor jefe de Opinión, Vicente Verdú, ni del defensor del lector, Ismael López Muñoz.

Ese mismo domingo 23, sin embargo, aparecía un editorial con rastros patentes de Pradera —y es el último que identifiqué con él— para comentar la inflexión hacia el sí que apuntaban las últimas encuestas, cuando apenas quedaban tres semanas para el referéndum. El cambio era perceptible en particular entre los votantes socialistas de 1982 y, aunque fuese solo una tendencia, el editorial recordaba de nuevo la dificultad de que «en el plazo de un mes escaso la mayoría de los españoles asuma un cambio de opinión que [Felipe González] necesitó tres años para realizar».

Sin embargo, la bomba ese domingo 23 iba en el artículo de López Muñoz, y en particular en las declaraciones que incluía del director del periódico a propósito de la polémica y la adhesión al manifiesto de relevantes colaboradores y redactores del periódico (Ramón Tamames, Francisco Umbral, Rosa Montero). Lo que violentó de veras a Pradera pudo ser tanto su ignorancia de la gestación del artículo del defensor del lector como la literalidad de las palabras de Cebrián para justificar *su* manifiesto. Cebrián aduce hoy que quiso desdramatizar la situación diluyendo la responsabilidad editorial de Pradera en el periódico, pero es posible que esa creíble estrategia acabase surtiendo el efecto contrario. Cebrián explicaba a Ismael López que «por encima [de Pradera] existe un redactor jefe, Vicente Verdú, que dirige un equipo de 15 editorialistas que mantienen una reunión semanal con los subdirectores, directores adjuntos y el director». Y «ahí es donde se toman las decisiones editoriales fundamentales». Había que saber que «el cargo de Javier Pradera, que no es el único que escribe editoriales políticos, no es funcional, no tiene redactores a sus órdenes». Tal como expone el estatuto de la redacción recientemente aprobado, la línea editorial del periódico «la marca el director» y es él «el único responsable ante la opinión pública de la opinión editorial del periódico». Se desprendía de todo ello, por tanto, que la firma de su jefe de Opinión no comprometía necesariamente la posición del periódico. Cualquier futura toma de posición sobre el referéndum «se hará sobre la base de borradores en los que contribuirá mucha gente y es ingenuo pensar que la línea del periódico en este tema vaya a ser la individual de Javier Pradera o de cualquier otro redactor».

Esa misma mañana de domingo, Javier Pradera instaló en el rodillo de la máquina de escribir un folio dirigido a su director Juan Luis Cebrián para dimitir de forma irrevocable del cargo de jefe de sección de Opinión y de su papel en la caja negra del periódico. Era la única salida que encontró Pradera para conciliar la efectiva voluntad de decantar el voto del día 12 a favor del sí y el error táctico cometido al firmar el manifiesto, en lugar de mantenerse en la cocina o la trastienda de un documento plagado de amigos personales.

Posiblemente tenga razón Cebrián y la motivación más profunda de Pradera para dimitir no estuviese tanto en los argumentos del *ombudsman* haciéndose eco de las protestas de los lectores como en el papel que el mismo Cebrián asignaba públicamente a Pradera en sus respuestas. Cuanto decía Cebrián era verdad administrativa, pero sin duda también tergiversaba flagrantemente su papel y su función en el periódico. Debió de sentirse desautorizado o, como mínimo, relegado a un plano secundario y ese es el sentimiento de despecho que transmite el

recuerdo de varios testigos de entonces. Pradera explicaba a bote pronto y en privado que dimitió por razones de dignidad mientras Cebrián subraya en sus memorias que los dos sabían, «y también Jesús Polanco, que el motivo fundamental de su marcha lo constituían mis palabras sobre su responsabilidad exacta en el periódico». Quizá es eso lo que contiene la expresión que algunos de sus íntimos colaboradores recuerdan entonces: «Yo no puedo aceptar eso.»

Hasta el miércoles 26 de febrero el periódico no informa de la baja de Pradera, lo cual permite imaginar que las presiones para hacer revocable la dimisión irrevocable firmada el domingo 23 fueron muchas. Pero Pradera ya no cedió, y bajo el titular «Javier Pradera dimite como jefe de Opinión de *El País*» el periódico transcribía primero su carta de dimisión a Cebrián y después la nota que había hecho pública el Comité de Redacción ante la situación creada en el periódico.

Querido Juan Luis: Siempre he creído, como tú, que la soberanía de un periódico se halla, en última instancia, en manos de sus lectores. Las críticas recogidas en el artículo publicado hoy [por el domingo] por el *ombudsman* de *El País* sobre mi participación en un llamamiento pidiendo el sí en el próximo referéndum sobre la OTAN me parecen, en líneas generales, fundadas. Dicho sea de paso, confío en que esas protestas, para mí justificadas, han sido dirigidas contra cualquier pronunciamiento público que yo hubiera podido suscribir (incluido el consejo a favor del no, la abstención, voto en blanco o voto nulo) y no contra la recomendación específica que contenía.

A mi entender, no es lo mismo que un colaborador habitual de prensa firmante de sus propios artículos apoye una determinada opción política a que lo haga una persona cuyo nombre figura en la mancheta de un periódico, sobre todo si tiene a su cargo la jefatura de la sección de Opinión y participa en la discusión y realización de los editoriales. Sirva como explicación (claramente insuficiente a la vista de los acontecimientos) de mi decisión, objetivamente equivocada, que confié al firmar ese llamamiento en que mi nombre no fuera percibido exclusiva o predominantemente como el de un periodista de *El País* (al que estoy jurídico-laboralmente vinculado como colaborador), sino como el de un editor (mi profesión desde hace 20 años).

En cualquier caso, me parece inexcusable que aceptes mi dimisión como jefe de la sección de Opinión de *El País*. En nada debe afectar esta decisión, para mí dolorosa, a la amistad que me une a ti y al resto de los compañeros del periódico. Desde luego, me gustaría seguir colaborando en vuestras páginas, pero, a partir de ahora, con artículos firmados. Un fuerte abrazo.

Le cogió a traspíe o por sorpresa el revuelo y ya no pudo dar marcha atrás: prefirió ser consecuente antes que disfrazar su posición con cualquier martingala marrullera. La nota que hizo pública el Comité de Redacción el mismo 26 de febrero reivindicaba el «derecho constitucional incuestionable» de Pradera a exhibir su punto de vista en favor del sí y consideraba desproporcionado el presunto daño causado a la independencia frente al «daño cierto que provocaría a los lectores y a esta redacción la pérdida de quien ha sido una pieza fundamental» y que «tan generosamente ha trasvasado sus conocimientos y su prestigio intelectual en favor del colectivo de este periódico».

Ese mismo texto o uno muy parecido fue el que le dieron a conocer Carlos Yárnoz y otro miembro del Comité de Redacción, desplazados a su casa alguno de esos días y desarbolados ante la resignada conformidad con que Pradera aceptaba la situación que había creado él mismo. Un vulgar orgulloso hubiese encontrado a mano el argumento suficiente para una transacción de última hora, pero en Pradera habitaba la soberbia satánica de quien se hace cargo de sus errores y de sus aciertos: en este caso, iban promediados los unos y los otros. Cuando los invitó a comer al día siguiente, en La Ancha de Príncipe de Vergara, sospecharon que la valía humana de Pradera estaba todavía un poco por encima de lo que habían creído, como recuerda con nitidez Yárnoz. Otra cosa es que la mayoría del comité juzgase necesario su relevo como editorialista, en

particular cuando Yárnoz mismo se ocupaba entonces en el periódico de materias de Defensa y Ejército.

La información que incluía todos estos materiales llevaba todavía una especie de coda sobre el papel de Pradera en un periódico que, según su carta de dimisión, ya no era «nuestro» sino «vuestro». Según la noticia sin firma, a Pradera se debía una «aportación decisiva a la formulación de la línea del diario» en los últimos diez años: «Su trabajo constante y cotidiano ha tenido puntual reflejo en la página editorial. Su capacidad intelectual, su entusiasmo profesional, sus dotes para el análisis político y la finura de sus criterios han servido para dilucidar no pocas cuestiones complejas sobre las que *El País* se ha pronunciado desde la fecha de su aparición.»

Parecía la segunda versión del acta del jurado del Premio Cerecedo, aunque fuese esta vez a las puertas del final de su vínculo semiorgánico con el periódico. Con todo, alguien en el equipo editorial mantuvo aún en parte las espadas en alto al puntualizar *El País* el mismo día 26 que en algunos «manifiestos, por añadidura, el acuerdo de los firmantes llega a veces a ser tan frágil o improvisado que no faltan las cartas de quienes desmienten haberlos suscrito y de quienes figuran en listas incompatibles». Enredó las cosas un poco más el artículo de Cándido en *Interviú* en esas mismas fechas. Lo glosaba *Abc* el 12 de marzo en su página de «Actualidad gráfica» para malmeter contra el periódico y señalar a Pradera como «auténtico cerebro gris del diario oficioso y hombre ante el cual Juan Luis Cebrián no era otra cosa que un redactor jefe de cierre». En realidad, Luis María Ansón [*sic*] se ponía las botas a cuenta del artículo de Cándido, al que seguía citando: «La vejación a que ha sido sometido el señor Pradera por Cebrián queda resumida en esta frase de Carlos Luis Álvarez: “Todos los enanitos juntos no lograrán jamás ser Blancanieves”.» Tampoco desaprovechaba Ansón otro ángulo del asunto al extractar la amargura de Cándido cuando denuncia «con amargura la actitud de “desviacionista contrito adoptada por Javier Pradera”». Y remata Ansón su aprovechado pie de foto citando la corrosiva comparación final de Cándido: «Esta cruel escena de una inteligencia genuflexa reproduce una situación de “gulag”. Es Padilla tiritando ante Fidel Castro.» A sabiendas de esta marejada, y en privado, Pradera reconoció abiertamente a Carlos Yárnoz y a los demás miembros del comité de redacción que «debiera habérselo pensado dos veces antes de firmar, entre otras razones porque su firma acabó siendo presentada como una de las más notables» en apoyo del manifiesto, y transcribo un email de Yárnoz.

Iba a ser verdad que el resultado del referéndum quedó en manos del «potencial de convencimiento» del presidente, y así fue. Con casi un 60% de participación, el sí ganó holgadamente con algo más de nueve millones a favor y un 52 %, frente al 39% de votos en contra, en torno a casi siete millones. Pradera debió votar sí aunque el corazón le pidiese una abstención crítica: sin castigar al Gobierno socialista, desaprobaba la gestión política de la permanencia en la OTAN. Posiblemente la presión de Felipe González hizo el resto y Pradera se resignó a un interés mayor que le costó el puesto. Desde aquellas fechas de febrero, los editoriales políticos del periódico se desdibujaron en una caída libre insólita, como si parte del andamiaje que sostenía al periódico hubiese sido desguzado sin aviso y por sorpresa.

TURBULENCIAS EDITORIALES

De un día para otro, la mitad de su jornada laboral cobró una tonalidad diferente y nada fue como había sido. La gestión íntima de su propio error táctico frustró su regreso pese a las

demandas insistentes de Cebrián para hacerlo con artículos firmados, como el mismo Comité de Redacción proponía, como había anunciado él mismo, o como insistía Miguel Ángel Aguilar por su parte al director del periódico (cuando Aguilar desde 1984 no trabajaba ya allí, recuerda Cebrián). No volvería a escribir en *El País* por una mezcla de orgullo herido, de amor propio mal gestionado y de resignación consecuente con el error cometido: actuó en buena medida como el «moralista kantiano» que veía en otro gran amigo de siempre, Luis Ángel Rojo, como escribió a su muerte.

Pradera entraba ahora en una nueva etapa frustrante y dolorosa porque reclamaba de él un funcionamiento escindido o amputado. Había perdido una de las dos naves que contribuyó a pilotar en los últimos años y se sumergía en una nueva condición profesional de viudedad forzosa o divorcio imprevisto. La propensión autista del editor había entrado en combustión con la realidad política a través de *El País* y por su mismo oficio de editor: había sido una suerte de naturaleza simbiótica e indiscernible de su función política en el periódico. Los socialistas perdían en la cabina de mando a un aliado leal, si la lealtad se mide por la capacidad de mantener la distancia crítica, la disparidad analítica, la independencia que solo da la autoridad moral.

Un viejo amigo de la política y la edición, Juan Grijalbo, se entera de su renuncia al cargo con mucho retraso, ya en julio de 1986. A sus setenta y cinco años confiesa que nunca se le ocurrió escribir a Pradera a Alianza porque «siempre te identificaba con *El País* y, aunque tarde, quiero manifestarte mi solidaridad con tu conducta». Lo peor es que «encuentro a faltar tu *opinión*, a la que ya estábamos acostumbrados», le escribe Grijalbo. Parece estarlo también un prometedor ensayista y joven traductor en Naciones Unidas, Antonio Escohotado, que cuenta a Pradera que «todos los traductores de aquí leímos con consternación que dejas el sufrido e importante lugar de editorialista» de *El País*, aunque también le felicita «por la decisión de dejarlo a tiempo».

¿A tiempo de qué exactamente? Porque nada hacía imaginar ni cansancio alguno ni sobrecarga en aquella función de apoyo a los intereses de una izquierda que podía estar jugándose la legislatura por un error cometido en 1981, cuando el PSOE imaginó con mal cálculo de futuro que la promesa de un referéndum tendría su recompensa en forma de botín electoral. Quizá fuera verdad, pero hoy todavía González cree que fue un error convocarlo, mientras que un amigo y aliado histórico como José María Maravall entiende que el error hubiese sido no convocarlo. González salía ratificado de esa consulta, como mostraría el resultado electoral inmediato de 1986. Pero era verdad también que el horóscopo empezaba a situarlo fuera de la calidez de la izquierda. Desde entonces el PSOE y los socialistas dejaron de ser *progres*, como dice expresivamente Maravall.

Los desengaños se empujan unos a otros y acaban a menudo en una pandemia de decepción. La erosión de confianza hubo de trabajar en este caso como una carcoma de doble función porque en su casa editorial también las cosas estaban empezando a cambiar de color, como estaba cambiando de color el espectro de lectores, las nuevas tecnologías y su influencia en el consumo libresco. Con Diego Hidalgo había llegado a Alianza en 1983 una nueva mentalidad empresarial para la edición literaria, pero no era privativa de España. Estaba sucediendo lo mismo con otro histórico editor, Giulio Einaudi. Había sido y era todavía uno de los referentes internacionales de la edición pero temblaban ahora los cimientos de la casa, cuando ya nadie recordaba en Einaudi ni los tiempos de Cesare Pavese en los años cuarenta, ni los de Italo Calvino en los cincuenta y sesenta. Ahora aceptaba el propio Einaudi la presencia de un *comisario* que vigilaba la actividad de la editorial, y eso se parecía mucho a la experiencia que empezó a vivirse por entonces en Alianza. Les esperaban cambios semejantes al resto de los editores también, o cuando menos a la

mayoría de ellos, con muy pocas excepciones. El ecosistema editorial estaba cambiando industrial y empresarialmente y el ecosistema literario estaba en vísperas de hacerlo también.

El lector de *El País* lo supo en tiempo real porque Pradera había seguido colocándole sus dos editoriales anuales sobre el asunto, sin ocultar el viso de una amargura que parecía contagiada de otras decepciones de distinta etiología. Tampoco de Javier Solana parecía posible esperar nada bueno para el sector del libro o incluso más genéricamente para el impulso de la cultura. Hacia abril de 1985 nada hacía pensar que Solana fuese capaz de activar políticas públicas que aliviase a las empresas privadas de una situación económica catastrófica en América Latina. Las suspensiones de pagos son generalizadas y dañan gravemente las cuentas y la estabilidad de los editores. España sigue siendo la quinta potencia mundial en la edición de libros –lo había repetido Pradera imperturbablemente en los últimos ocho años–, pero la política del libro sigue siendo tercermundista y subdesarrollada.

Lo había dicho de varias maneras en sus editoriales. Pese a llevar Solana varios años al frente de Cultura su curiosidad parecía «más fascinada por otros temas» que por la atención a los museos o al libro. No había aún «una ley del Libro, otra de Bibliotecas» y no habían ajustado la nueva ley de propiedad intelectual, cuando la «vasta red de bibliotecas públicas» que llevaban años demandando era «algo absolutamente necesario para una auténtica política del libro» en una sociedad desarrollada. Tampoco habían entendido que «mientras otros países europeos plantean la exportación de libros dentro de la estrategia de una política *cultural*, España ha subsumido desde siempre ese renglón dentro de la política *comercial* a secas». Por eso reclamaban la creación de «réplicas españolas a instituciones tan eficaces como la Alianza Francesa o el British Council y que el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura tendrían que coordinar sus actividades» para constituir lo que aún tardaría cinco años en crearse, el Instituto Cervantes, cuando seguiría igual el «mínimo interés» en las esferas oficiales hacia la «política del libro».

Otra decepcionante decisión de Felipe González había sido el «error de bulto de atribuir a Javier Solana» la gestión del Ministerio de Cultura y la portavocía del Gobierno, «dos tareas difícilmente compatibles entre sí». A la altura del tercer Libro, en octubre de 1985, parecía ya empapado de un punto de desesperanza por el «mínimo interés concedido por las esferas oficiales a la política del libro». Tanto si disponía de tiempo como si no, Solana «no ha sabido o no ha podido defender al libro ante el resto de la Administración con el mismo celo aplicado al cine, al teatro, a la ópera o a la política de exposiciones». No ha actuado contra la reprografía ilegal y sus «perjuicios irreparables» a editores y autores y «no solo hace la vista gorda ante ese negocio subterráneo» sino que tolera la conversión de las universidades «en zocos de producción y venta de ese fraude». No hay muchas dudas, por tanto, y forzoso será reconocer una inesperada insensibilidad socialista en un terreno que «desborda el mundo de los negocios para invadir el de los valores y las ideas».

En Alianza nada está parado ni nada parece transmitir los temblores de crisis tras superar el bache inducido de 1977 con la decisiva participación de Diego Hidalgo. Los autores mayores de la editorial siguen en confianza y nada aparenta una crisis inminente, pese a los percances de salud que empiezan a asediar a Pradera. A sus cincuenta años convalece en marzo de 1985 de la extirpación de un riñón, según comunica a un autor la editora María Cifuentes. Cifuentes acaba de incorporarse a la editorial, por recomendación de Natalia Rodríguez-Salmones, para hacerse cargo del libro infantil y juvenil, pero enseguida Javier la integra con él para el ámbito de ensayo, así como Carmen Criado o Manuel Pérez Ledesma se encargan de historia. Fue allí donde

Cifuentes aprendió el oficio con un Pradera burlón —«muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias» era su irónica consigna telefónica cuando se olvidaba de algún encargo reciente— o muy exigente para aceptar el borrador de esta o aquella contraportada: «No, esto no es para el nene y para la nena.» Aunque llegó el día en que sí, por fin dijo sí, y le devolvió una contraportada sin enmiendas: «Para ti el jamón», cuando era ya frecuente compartirlo de verdad con él, con autores y otros colaboradores de la editorial.

Las contrataciones de autores internacionales no han bajado ni ha bajado tampoco el ritmo de reimpressiones, vital para las ediciones de bolsillo y de fondo. Aunque a Borges apenas le quedan fuerzas para caligrafiar una firma microminimalista cuando se dirige a Pradera el 18 de abril de 1985 para ofrecer la edición de su último libro, *Los conjurados*, y adelanta también su preferencia para que Alianza se encargue de su *Obra completa*, «aunque ello significara un menor anticipo, en razón de ser el editor de la casi totalidad de mi obra en España».



En la Moncloa con Jorge Luis Borges, C. Romero, María Kodama, F. González, Francisco Rico y Javier Solana (junio de 1985). © Archivo Fundación Felipe González.

Es verdad que Borges está muy cansado, pero no resignado del todo. Con Pradera había acudido disciplinadamente a casa del editor Joan B. Cendrós en Barcelona para programar un prólogo a la traducción castellana de *Lo somni*, de Bernat Metge, que al final no prospera, quizá porque la fatiga empieza a ser arrasadora. En esos meses ha sido hospitalizado en Ginebra durante unas semanas, ha intentado suicidarse sin éxito ni demasiado empeño, ha hecho heredera universal a María Kodama en un testamento y a los dos días de su muerte su hermana Norah duda de que su última voluntad fuera ser enterrado en Ginebra. Pero quizá lo fue, a la luz de una carta dirigida a la Agencia Efe, ya en mayo de 1986, que Pradera recibió también y que publicó incompleta hace unos años el diario *La Nación* de Buenos Aires. Incluyo la fotografía porque la carta es sobrecogedora de principio a fin, escrita un mes y medio antes de morir, cuando «con todo aprecio se despide de ustedes»:

Ginebra, 6 de mayo de 1986

Queridos amigos de la Agencia E.F.E:

Les envío estas líneas para que las publiquen donde quieran. Lo hago para terminar de una vez por todas con el asedio de los periodistas y con las llamadas y las preguntas de las que estoy cansado.

Soy un hombre libre. He resuelto quedarme en Ginebra, porque Ginebra corresponde a los años más felices de mi vida. Mi Buenos Aires sigue siendo el de las guitarras, el de las milongas, el de los aljibes, el de los patios. Nada de eso existe ahora. Es una gran ciudad como tantas otras. En Ginebra me siento misteriosamente feliz. Eso nada tiene que ver con el culto de mis mayores y con el esencial amor a la patria. Me parece extraño que alguien no comprenda y respete esta decisión de un hombre que ha tomado, como cierto personaje de Wells, la determinación de ser, un hombre invisible.

Con todo aprecio se despide de ustedes



Jorge Luis Borges.

Reproducción de la carta de Jorge Luis Borges a la agencia Efe (6 de mayo de 1986).

Pradera había asumido para entonces la propuesta de una Biblioteca de Cultura Catalana impulsada por Enciclopèdia Catalana para colocar en el mercado entre 1986 y 1987 unos treinta títulos traducidos al castellano. Según su director, Joan Carreras, «acudimos a Alianza, y el entendimiento fue prácticamente instantáneo». La Biblioteca se presentó en Madrid el 23 de abril de 1986 con Carreras como director de Enciclopèdia, bajo el amparo del presidente de la RAE (entonces Laín Entralgo), los ministros Solana y Serra, además del consejero delegado de Alianza, Diego Hidalgo, y evidentemente Pradera, que quiso recordar que Alianza había publicado ya la traducción de *Tirant lo Blanc*, y ahora apostaba por un repertorio que iba desde la concordia de Francesc Cambó hasta la creatividad de Joan Perucho, prologado por Pere Gimferrer, y ensayistas más previsibles como Jaume Vicens Vives, *Las formas de la vida catalana* de Josep Ferrater Mora, algunos de los *homenots* de Josep Pla o *Castilla adentro*, de Agustí Calvet Gaziel.

Pero la bomba atómica del año la reservaba Pradera para la resurrección editorial de Sánchez Ferlosio, que contó con un tratamiento estelar por parte del periódico en el que ya no escribía. El 10 de diciembre de 1986 llegaba a las librerías una suerte de misil de tres cabezas, editado con el mismo diseño geométrico en las cubiertas pero con distintos colores para cada uno de los tres libros. *Campo de Marte* nacía de la reflexión sobre el Ejército español entre diciembre de 1982 y noviembre de 1984, cuando gobernaban los socialistas en sus bautismales primeros meses; *Mientras no cambien los dioses, nada ha cambiado* se anclaba en el presente de 1986, mientras que la noticia aparente y más resultona consistía en el regreso a la novela con un fragmento narrativo, *El testimonio de Yarfoz*, que Pradera debió arrancar a Sánchez Ferlosio con violencia

física y asfixiante intimidación. A cambio, debieron divertirse sin freno con el texto de contraportada que desde entonces iba a entregar Ferlosio para la solapa de cada nuevo libro: es la mejor microautobiografía para un escritor que «habiéndolo emprendido todo por su sola afición, libre interés o propia y espontánea curiosidad, no se tiene a sí mismo por profesional de nada».

La fratría en pleno estuvo en la presentación en Madrid, con Ferlosio custodiado por Juan García Hortelano y Juan Benet, además de Pradera. Quizá con un punto de amargura, el triple misil literario de Ferlosio se remataba con otro más, los ensayos escritos en *El País* a iniciativa de Pradera mientras fue jefe de la sección de Opinión, y publicados por el periódico con el título conjunto *La homilía del ratón*. *El País* glosaba ampliamente el día 11 el acto como la reaparición de un escritor tímido, con una crónica de Pedro Sorela y una superficial aproximación crítica de Rafael Conte, con todo el aire de no haberse leído los libros. Cinco días después, el 15 de diciembre de 1986, todos volvían a verse para celebrar con un almuerzo la boda de Sánchez Ferlosio con Demetria Chamorro, a quien iba dedicada la novela *El testimonio de Yarfoz*.

En una foto jovial que campa por casa, se ve en José Luis al núcleo duro o el círculo más íntimo, con Benet y Pradera en primer plano, y un Ferlosio abacial al fondo con Chamorro, con Jesús Aguirre y Sancho Gracia, Miguel Ángel Aguilar y Juby Bustamante, el mismo José Luis, Manuel Matji y Perico Moreno, Patxo Unzueta y Clemente Auger, Juan García Hortelano, Elías Querejeta y Natalia Rodríguez-Salmones. Se veían menos de lo que se habían visto y la distancia había crecido entre algunos de ellos. Apenas un mes y medio después de ese encuentro, la tertulia de periodistas que se reunía en la Taberna del Alabardero en torno a Luis Carandell y Manuel Gutiérrez Aragón, con Aguilar, Vicente Verdú y otros, designaba como *tonto contemporáneo* a Jesús Aguirre, con la cautela de que solo «está tonto» (un año y pico atrás, en la primera convocatoria, se «hacía constar» en el acta que «la tertulia del José Luis» se adhería al premio que recayó sobre el presidente de Telefónica, Luis Solana: para la designación de Aguirre no había adhesión). Todavía hasta mediados de los años noventa fueron frecuentes las convocatorias de Aguirre en el palacio de Liria, o de Polanco después en su finca de Valdemorillo, para cenar entre amigos que iban desde Auger hasta Savater. Pero también empezó por entonces el hartazgo de Pradera con las quisicosas de Aguirre, y es Chino Moya quien recuerda sus llamadas a casa, en Apolonio Morales, y la imperturbable respuesta habitual de Javier: dile a Jesús que no me voy a poner al teléfono.



Foto de grupo en la boda de R. Sánchez Ferlosio y D. Chamorro (15 de diciembre de 1986).

De aquel reencuentro de la fraternidad pudo salir todavía un nuevo encargo de Pradera. A principios de 1987 pone por escrito la ocurrencia que ha propuesto a Juan Benet de «recoger en un volumen de “Alianza Tres” los textos de *Memorias* que ha venido publicando en los últimos años», explica en uno de los informes internos que desde la llegada de Hidalgo quisieron registrarlo todo. Acabará titulándose *Otoño en Madrid hacia 1950*, y aunque fuese de Juan Benet, o precisamente por serlo, «tal vez fuera conveniente hacer una mínima campaña de publicidad». Eso es exactamente lo que convendría aprovechar a cuenta de la nueva programación matutina de TVE de la serie basada en la novela de Jorge Amado *Gabriela, clavo y canela*. En julio de 1987 toma la decisión de «hacer un experimento con ese mercado de culebrones» para satisfacer las ansias de explotación comercial de nuevos públicos. Aunque la audiencia televisiva de la mañana es «baja y sesgada (jubilados, amas de casa, desempleados, enfermos), tal vez podremos llevarnos una sorpresa».

Le quedase a Pradera el resquemor que le quedase, en la editorial también había malas noticias de oficio. Sus lamentaciones habían sido a menudo muy expresivas, como la frustración porque la oferta de la editorial Crítica a John H. Elliott por *El conde-Duque de Olivares* hubiera sido más persuasiva que la de Alianza: «Como dice el clásico, paciencia y barajar», anota una vez más Pradera. A veces es al revés, y Pradera trata de colocar en mejores manos cosas que no ve en Alianza, como la invitación a Antonio López de Lamadrid, de Tusquets, para que se haga cargo del *Diario a dos voces* de un viejísimo amigo, Manuel Lamana: las «incertidumbres del género hace que no encajen en el catálogo de Alianza» esas *dos voces* que Pradera prologaría muchos años después con una cala autobiográfica emocionante. Tampoco era en Pradera tan extraño, porque una veta íntima o casi secreta de su ocio tendía hacia la cultura popular y hasta la sentimentalidad rendida, fuese a través del culpable gusto por Chaikovski y su concierto para violín, fuese por la vía de Zeffirelli y sus dos encantadores adolescentes en *Romeo y Julieta*, incluida la irresistible melodía de Nino Rota (me cuenta Máximo).

Tampoco olvida Pradera encargos de otra naturaleza que se dilatan en el tiempo, como *el Azaña* que tiene comprometido Santos Juliá desde hace tiempo y tras aceptar la contraoferta de Pradera. En lugar de la edición de los discursos electorales, todos inéditos, como quería Santos Juliá, quizá lo conveniente era redactar una biografía del personaje más maltratado por el reaccionarismo franquista y no franquista de la España contemporánea. Hacia marzo de 1988, Juliá no ha olvidado el libro, «¿cómo podría?». Pero «diversos avatares académicos me tienen obligado a dejarlo en el cajón a medio terminar», al menos hasta octubre, para abarcar después «la experiencia republicana, guerra incluida».

LA DERROTA DEL EDITOR

Pero otra guerra había empezado en otro frente y con muy mal pronóstico para Pradera. Sospecho que apremiaba a Santos Juliá por más razones que las estrictamente literarias, porque la agitación interna en Alianza se había acentuado tras el verano de 1987. Menudean desde entonces los retrasos con autores a causa de reuniones «para estudiar una reorganización general de la empresa», quedan sin respuesta nuevos proyectos e incluso llegan a «suspender provisionalmente la contratación de nuevos originales», según escribe Pradera. Siguen gestionándose con normalidad los títulos de Borges, Mario Benedetti, Roberto Arlt o el mismo Manuel Andújar, pero la inseguridad se ha instalado en la editorial y proliferan mensajes cruzados con incertidumbres o

simples excusas redactadas en las plantillas impresas y regladas que había impuesto Diego Hidalgo. En aquella oficina circuló entonces una coplilla malévola sin mayor delito porque «querer editar aquí / no es sin duda un desatino. / Pero me parece a mí / que es arduo nuestro destino». El resultado final, con bromas o sin bromas, ya lo adelanto, iba a ser la segunda catástrofe personal y profesional de Pradera. Quizá volvió a medir mal sus fuerzas, quizá la soberbia y la seguridad en sí mismo acabaron llevándole a un camino sin salida, quizá sus *sarcasmos homicidas* (como los llamó Herralde) y su radical autonomía de funcionamiento sembraron temerariamente las condiciones para un castigo velado.

Si tardaba mucho Santos Juliá en entregar su libro quizá no iba a estar ya Pradera ahí para hacerse cargo de la edición. Los tambores de guerra en Alianza emitían mensajes altamente inquietantes. Acababan de retomarse los planes de venta frustrados en 1986 y seguía vivo el síndrome del crecimiento a toda costa, general en el sector. Según Hidalgo, una de las operaciones fracasadas de fusión había contado con el apoyo de Pradera, cuando ambos estuvieron en un tris de culminar un acuerdo de venta a Hachette con Jean-Claude Lattès en París. Pero un resto de desconfianza frenó el acuerdo a ultimísima hora, cuando estaba prácticamente decidido y el champán descorchado.

Ahora la situación era otra, más imperativa por ambas partes. O dicho de otro modo, los planes de Pradera y los planes del consejero delegado, Diego Hidalgo, estaban orientándose nítidamente en direcciones opuestas e incluso contradictorias. En el fondo, la editorial había ido sobreviviendo bajo esa bicefalia estratégica en los últimos años, sin complicidad ni seguramente empatía de ningún tipo entre la dirección empresarial y la dirección literaria. Al mismo tiempo que en mayo de 1988 Hidalgo hacía pública una tentativa de venta del 60% de sus acciones a otra empresa extranjera, Presses de la Cité-Larousse, Pradera ponía en conocimiento de la empresa el inicio de sus gestiones para una solución alternativa. Prefería evitar la venta a terceros con el apoyo de nuevos socios y desde esa misma primavera dispone de autorización formal. Su plan consiste en garantizar la continuidad. Dos banqueros, José Ángel Sánchez Asiaín y Pedro de Toledo, presidentes respectivamente de los Bancos de Bilbao y de Vizcaya, respaldaban la propuesta con el objetivo de «conseguir que Alianza, parte integrante del patrimonio cultural de este país, no pasase a manos extranjeras». María Cifuentes recuerda la euforia contenida de Pradera mientras comunicaba a su equipo la noticia: Alianza no se vende.

En la práctica, sin embargo, las cosas no fueron de ese modo, a pesar de las garantías que ofrecía Pradera. Hidalgo desconfiaba de ellas, le parecía un plan con demasiadas «inconcreciones» y mantuvo sus gestiones de venta en marcha sin contar con el proyecto de la dirección literaria histórica y los accionistas minoritarios. En el fondo, las disparidades eran demasiado profundas porque Pradera e Hidalgo pertenecían a esferas condenadas a no entenderse y quizá ni siquiera a sobrellevarse, como acabaría sucediendo desde 1988, cuando Hidalgo apenas comparecía en las oficinas de la calle Milán. Pradera tenía a Hidalgo por «hijo de papá y señorito extremeño», según relata el mismo Hidalgo, heredero de una abultada herencia a la muerte de su madre en 1969. Había destinado parte de ese dinero a fundar una empresa de ayuda directa a los países más pobres del África subsahariana, FRIDA, y otra parte a invertir en proyectos, como Prisa, desde su misma fundación. Su 3 % inicial se había incrementado, tras el reflotamiento de Alianza en 1977, y había pasado a ser de en torno a un 4% tras la compra de las acciones de Ortega Spottorno en el delicado momento que lleva casi a la quiebra.

Cuando en 1983 Hidalgo se convierte en consejero delegado es ya el segundo accionista de Prisa, después de Jesús Polanco, con el 8 %. Pero sigue sin experiencia ni la menor familiaridad

con el medio editorial. Por entonces confiesa Hidalgo haber delegado demasiado en algunos de los ejecutivos de confianza que había contratado en la editorial, como Agustín Antúnez. Quiso seguir Hidalgo un «curso acelerado» de tres semanas en Boston, con el director de la Northeastern University Press, y exalumno de la misma promoción de la Harvard Business School en la que Hidalgo cursó en 1968 su MBA. Aquel «curso exhaustivo» («durante el cual resucité mis conocimientos de analista financiero», escribe en sus memorias inéditas) había de servir para tomar las riendas y «aplicar esas lecciones norteamericanas sobre la editorial ideal a una empresa dominada por Javier Pradera». No es extraño que Hidalgo se sintiese «algo extranjero en Alianza», pese a la buena acogida inicial y pese a las consignas intempestivas de Pradera sobre los manuscritos de amigos y allegados. Pero mientras él se esforzaba por ir «asimilando todos los pormenores», algunos de sus nuevos ejecutivos conspiraban a fondo evaluando de forma muy negativa la actividad de la editorial con el fin de relevar tanto a Pradera como a Daniel Gil. El descubrimiento del sabotaje en marcha se saldó con el despido inmediato de Agustín Antúnez, y un año y medio después, también cesaba una antigua y estrecha colaboradora de Pradera en la editorial, Alicia Bleiberg.

El cambio de rumbo que buscaba Hidalgo está bien explicado en el informe final que redactó Pradera cuando todo estaba ya perdido y él sabía que no iba a seguir en Alianza, en enero de 1989. De hecho, los entrecomillados que cita Pradera proceden de un documento que Hidalgo hizo público entonces para razonar su mala valoración de la empresa: Pradera, en efecto, no diversificaba «su producción hacia “otros productos (vídeos, *cassetes*) más prometedores” que los libros de su actual catálogo». A Pradera había de sonarle a cuerno quemado semejante programa. Hidalgo «echa de menos que “no nos dediquemos al *best seller*”, y muestra admiración hacia los editores cuyas ventas en el mundo “equivalen de cien a cuatrocientas veces” a las ventas de Alianza». Lo que Pradera llama «desmoralizante falta de fe en la producción actual de Alianza» se traduce en la sospecha de que Diego Hidalgo es «totalmente insensible a esa otra dimensión cultural» de la empresa. Hacía al menos una década que el propio Pradera sentía que la edición literaria perdía consistencia y se volcaba a una dimensión industrial y mercantil cada vez más desconectada de sus motivaciones culturales. En la entrevista a Arnaldo Orfila de 1978 había detectado ya «los nuevos rumbos que marca la transformación en gran industria de una actividad tradicionalmente personal y artesanal».

De hecho, Alianza había aceptado en buena medida las nuevas reglas del juego y las sucesivas adquisiciones de otros sellos editoriales estaban animadas, a junio de 1986, por el «convencimiento de que las compañías editoriales que no crezcan están condenadas a desaparecer». Desde entonces las responsabilidades de Pradera en Alianza fueron también crecientes, con la intención de afianzar la empresa y al menos desde 1986 era el «candidato para llevar la dirección editorial del *holding* de Alianza», según un documento de la empresa. Están ya integradas en el grupo la editorial Labor, por entonces «poseedora de la mayoría de las acciones de Distribuciones de Enlace»; Barral Editores –penúltima invención de Carlos Barral–, Paidós (bajo la dirección de otro amigo de Pradera, Enric Folch), también Ediciones Guadarrama y ya pronto la tormentosa Siglo XXI para salvar una situación crítica. Pradera no le ve en este momento «viabilidad como empresa editorial» y ofrece desde Alianza una participación accionarial de un 51 %, o más, con Pablo García-Arenal como consejero delegado. Pero para entonces uno de los cofundadores, Javier Abásolo, había aceptado ya, en mayo de 1985, la dirección del Centro del Libro y la Lectura del Ministerio (con Javier Solana). Reconoce también la «desmoralización ante el callejón sin salida» en que se encuentra la editorial, según escribe en

carta el mismo Abásolo, a pesar de que Pradera garantiza que Siglo XXI sería «totalmente respetada»: su «máximo empeño» consiste en conseguir el regreso de Abásolo a la dirección editorial, «descargado ahora de la gerencia».

Las distintas estrategias de Hidalgo para controlar a Pradera no surtieron efecto alguno, ni había funcionado el intento de oponer «un contrapoder que pusiese límite a la parte editorial». Iba a ser difícil la conciliación entre ambas partes porque «Pradera no avisaba, ejecutaba», como recuerda Marcelo Díaz, jefe del área de Iberoamérica entonces, y lo hacía como si fuese un Dios omnipotente y ejerciese como tal (porque «soy Dios, según Marcelo», decía socarronamente Pradera). Por supuesto, había hecho poco o ningún caso al director comercial que había designado Hidalgo, Faustino Linares (procedente de Edicions 62), a pesar de enviar regularmente a la editorial «paracaidistas» para que «les enseñasen los dientes», como cuentan Marcelo Díaz y Ezequiel Méndez: eran el equivalente a los *comisarios* que recibía también Einaudi.

MALES DE ALTURA

No había de ser todo negro, sin embargo, y posiblemente ni a Hidalgo ni a Pradera ni a los paracaidistas habría de parecerles mal el negocio de publicar un libro del director del periódico que Pradera acababa de abandonar. La respuesta a Juan Luis Cebrián llegó en julio de 1987. Pradera negocia desde su condición de director general medio millón de pesetas de anticipo por su ensayo *El tamaño del elefante*, en la convicción de que, «de añadidura, nos convendría para “engrasar” mejor todavía nuestras relaciones con *El País*». Pradera no ha vuelto a escribir en el periódico, a pesar de la colaboración prometida al final de su carta de dimisión. Volvería ahora, tres meses después de aquel contacto editorial con Cebrián, pero además lo haría con una potente tribuna dominical en noviembre de 1987.

Había aprovechado el largo descanso para algo más que la descompresión. En aquel verano estuvo un par de meses establecido en una casa a las afueras de Oxford, y compartió entonces numerosas charlas, conversaciones y paseos con un joven doctorando, Charles Powell, y su entonces pareja, Sylvia Fernández-Shaw, inmerso él en su propia tesis doctoral sobre la Transición española e imantado por el relato y la memoria de Pradera. Allí le oyó su ácida vivencia tanto del comunismo de Santiago Carrillo como del excomunismo de Jorge Semprún y su *Autobiografía de Federico Sánchez*. Allí Javier también hizo lo que pudo por mejorar su inglés, socorrido por las más altas competencias idiomáticas de Natalia, sin que los rastros de la mejora en Javier fueran significativamente audibles. O eso recuerdan los amigos y su hijo Alejandro, que compartió una semana de agosto de esas largas vacaciones *british* con Javier, Natalia y su hijo Chino.

La fortaleza electoral de los socialistas podía no ser eterna o imperecedera, como ellos parecían creer, y la lista de carencias y errores empezaba en realidad por el mismo presidente del Gobierno, inadvertidamente aquejado de los síntomas del mal de altura, o síndrome de la Moncloa. Los reiterados avisos no habían surtido efecto en el pasado, ni parecía ganada tampoco la batalla por la libertad de expresión interna en el PSOE: el propio Felipe González había confesado en público, en octubre de 1986, que «hay miedo en el partido» y también «graves signos de oligarquización y de intolerancia» dentro de él, como recuerda José María Maravall en *El control de los políticos*. Apenas unos meses después es el mismo Maravall quien define al PSOE sin demasiadas contemplaciones en carta privada a González: «mucha mafia y pocos

principios». La conflictividad social no cedía y la distancia con la calle, con el votante socialista y con los sindicatos empezaba a ser una amenaza grave.

Su artículo de noviembre, «El diseño del poder», parecía la respuesta pública a esa situación. Llevaba dentro mucho de manifiesto alarmado porque no ocultaba el empeño personal y civil, de pasión política y vicio secreto que lo animaba para prevenir catástrofes todavía futuras y hoy invisibles. La actual deriva presidencialista y populista del presidente podía arruinar el futuro si no se atajaba con rapidez. Cuando se fue Pradera de *El País*, en febrero de 1986, Felipe González todavía no había ganado el referéndum de la OTAN ni tampoco el PSOE había revalidado la mayoría absoluta en las elecciones de junio (dejándose por el camino un millón y cuarto de votos). Más de un año después de esas elecciones, convocadas a rebufo de los agónicos y temerarios esfuerzos de financiación para ganar la consulta, Pradera llenaba de escrúpulos e inquietudes cifradas su extenso artículo de regreso a casa: vaticinaba un revolcón político e ideológico grave para el PSOE si su distancia de la izquierda seguía creciendo como crecería (hasta la traumática convocatoria de la huelga general de diciembre de 1988). Con un título abstracto, adelantaba las incipientes pero ya perceptibles causas de la erosión de los socialistas, con alusión muy directa a González y a los riesgos de un ejercicio del poder que seguía fiando su éxito a los «liderazgos populistas». El suyo lo era, como lo había sido el anterior de Suárez y como lo serían los siguientes de José María Aznar y Julio Anguita, en persistente diagnóstico crítico de Pradera.

ANÁLISIS

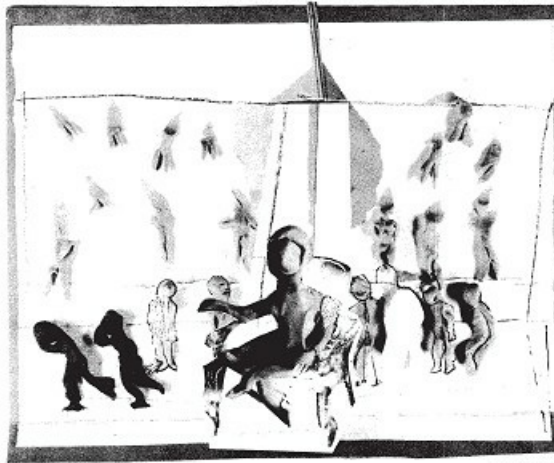
Los resultados electorales del pasado mes de junio fueron un sistema de que el diseño de poder aplicado por los socialistas desde la anterior legislatura comenzaba a perder popularidad entre los ciudadanos. Ese modelo descansa, obviamente, sobre la triple posición de Felipe González como presidente del Gobierno, secretario general del PSOE y candidato con capacidad de arrastre electoral más allá de la fuerza de atracción de su propio partido. El vigor expansivo de todo proyecto victorioso explica que las características de esa forma de gobernar (centralización de las decisiones, personalización del poder, ausencia de debate político, acentuación de las relaciones jerárquicas) se hayan transmitido miméticamente al resto del aparato del Estado.

Si el retroceso en las urnas no está hace seis meses la disminuida eficacia de la maquinaria electoral socialista tras cuatro años y medio de funcionamiento, las dimisiones como diputados de Nicolás Redondo y Antón Sarrucbar, precursoras, tal vez, del eventual desencanto de la UGT de la locomotora gubernamental, no han hecho sino confirmar que el cansancio de los materiales termina por agrietar cualquier prototipo. Porque las ventajas a corto plazo del modelo adoptado por los socialistas implicaban, quisieran o no sus usuarios, la inevitabilidad de su desgaste a plazo medio.

Es cierto que los socialistas no inventaron las líneas generales de ese diseño, puesto en práctica por los centristas, con Adolfo Suárez como líder, en 1977. Sin embargo, fue mérito suyo perfeccionarlo y hacerlo funcionar de manera más efectiva desde 1982. En cualquier caso, los materiales para su construcción fueron proporcionados por la transición democrática. Las normas y los usos constitucionales otorgan al presidente del Gobierno competencias y símbolos de prestigio superiores a los concedidos normalmente a los primeros ministros de los sistemas parlamentarios. También el régimen electoral, especialmente el sistema de listas cerradas y bloqueadas encabezadas por unas siglas y un líder, contribuye a realzar la figura del candidato a jefe del Ejecutivo. Finalmente, la cultura política de la sociedad española, más apropiada para respaldar liderazgos populistas que para asumir responsabilidades participativas, facilita la oportunidad de triunfar en las urnas sólo a quienes son capaces — como Adolfo Suárez y Felipe González — de obtener votos al margen de las lealtades partidistas e incluso de las afinidades ideológicas.

Soporte sindical

Sin embargo, las analogías en las trayectorias de estos dos candidatos a héroes de unas nuevas vidas paralelas no pueden ocultar otras notables diferencias entre ellos. Dejando a un lado las respectivas capacidades personales para desempeñar la jefatura del Gobierno y sus contrapuestas andanzas del mo y del otro bajo el franquismo, el soporte partidista y sindical del que ha dispuesto hasta ahora Felipe González para gobernar le concedía una clara ventaja retrospectiva respecto a Adolfo Suárez. Cualquier intento de comparación entre las



JUSTO BARROZA

El diseño del poder

JAVIER PRADERA

experiencias de gobierno de la UCD y el PSOE, relacionándolas con la disciplina interna, la cobertura territorial, la presencia social o la coherencia ideológica de ambas organizaciones, inclina aparatosamente la balanza a favor de los socialistas. Hasta la aparición de las recientes tensiones entre el PSOE y la UGT, ramas funcionalmente especializadas de un mismo proyecto político e ideológico, el control de la llamada familia socialista desde la secretaría general del partido concedía al diseño de poder de Felipe González mucho mayor solidez de la que nunca pudo soñar Adolfo Suárez, hostilizado desde las indisciplinadas filas de la UCD y carente de apoyos sindicales. Pero, además, Felipe González, cuyo historial de oposición al franquismo era congruente con los valores del sistema democrático, llegó al Gobierno arrastrado por la resaca de los sentimientos de incertidumbre y de temor creados por el 23-F y obtuvo en las urnas la mayoría parlamentaria.

Así pues, el apoyo de un partido disciplinado, el respaldo sindical de la UGT, la hegemonía en las cámaras, el miedo al vacío de poder previo al frustrado golpe de Estado y la ausencia de alternativas verosímiles a la derecha y a la izquierda del PSOE reforzaron la capacidad de mando de ese sistema presidencialista que las normas y usos constitucionales, el régimen electoral y la cultura política de los españoles favorecían. Y ese dispositivo, cuya clave de arco es la esión al jefe del Gobierno de los poderes de decisión, fue aceptado incluso por quienes teóricamente deberían compartir las responsabilidades (en el Consejo de Ministros, en

la ejecutiva del PSOE y en el grupo parlamentario) para la elaboración de las estrategias políticas.

Si este análisis fuese correcto habríamos asistido durante estos años a la configuración de un diseño de poder para cuyo análisis serían escasamente iluminadoras las interpretaciones formuladas en términos de ambiciones individuales, rasgos de carácter o móviles psicológicos. Tan sólo resultaría pertinente introducir tal vez en el cuadro la valoración del actor político al que le haya correspondido en cada caso desempeñar el papel de jefe del Ejecutivo, y quizá comparar a los tres presidentes constitucionales entre sí (y también con otros candidatos a ocupar ese cargo bajo el actual diseño de poder), de acuerdo con patrones de responsabilidad en el oficio, capacidad de trabajo, cualificación intelectual, resolución para adoptar decisiones, claridad de proyectos, respeto hacia las libertades y compromiso democrático.

Inhibiciones

Sin embargo, comienza a ser dudoso que ese diseño de poder logre mantenerse en pie sin deteriorar la marcha de la Administración y sin poner en riesgo el normal funcionamiento del sistema democrático en su conjunto. La concentración de la capacidad de decisión en el vértice de la pirámide resulta inadecuada para la resolución de los problemas y conflictos en una sociedad compleja. A efectos de esta reflexión, poco importa que el depositario, de derecho o de hecho, de esas atribuciones extraordinarias las ejerza acertada o equivocadamente. Todavía más grave que los cortocircuitos eventualmente

producidos en los organigramas administrativos son los vacíos de actuación derivados de las prudentes inhibiciones que lleva aparejados el temor de equivocarse cuando el poder real reside en otra parte (en este caso, arriba).

Otro efecto pernicioso de ese modelo, altamente concentrado y jerarquizado, es que tiende a repetirse miméticamente en las elecciones descendentes, quien se inhibe ante su superior forzará luego la inhibición de sus inferiores, los cuales, a su vez, proseguirán indefinidamente esa cadena de monólogos y silencios que forman las relaciones desequilibradas. Quienes no acepten esas reglas de juego serán primero vistos con sospecha, luego quedarán marginados y finalmente resultarán excluidos. De añadidura, el dispositivo tiende a promover el aislamiento del centro último de decisión o a favorecer su secuestro burocrático, al ocultar los canales de comunicación a través de los cuales deberá circular (en todas las direcciones) no sólo la información, sino también ese abigarrado conglomerado de escenarios alternativos, análisis divergentes y enfoques críticos que se resumen en la expresión *debate político*.

Analogías UCD-PSOE

Pero quizá el argumento más concluyente en favor de la modificación — en un sentido participativo y de multiplicación de centros de decisión — de la actual forma de gobernar sea el recordatorio de que el sistema democrático otorga al cuerpo electoral el decisivo papel de juzgar, cada cuatro años, los méritos de los candidatos. Y no es fácilmente imaginable que el actual diseño de poder, agotado en muchos aspectos, impugnado por el resto de las fuerzas políticas, atacado por los medios de comunicación y criticado por la UGT, pueda repetir en las urnas el triunfo excepcional de 1982, la decorosa victoria de 1986 o incluso los aceptables resultados de 1987.

Las analogías entre Adolfo Suárez y Felipe González, entre la UCD y el PSOE, no tienen necesariamente que reducirse al pasado. Por ejemplo, parece seguro que una eventual ofensiva de los socialistas discrepantes o descontentos para emprender la caza y derribo de Felipe González haría saltar por los aires al PSOE, al igual que ocurrió antes con el centrismo. Tanto en uno como en otro caso, el liderazgo no es un átomo de lujo desechable, sino el vértice de una pirámide invertida asentada sobre su capacidad de resistencia. Ahora bien, tampoco las conclusiones de la comparación entre ambas experiencias se hallan a salvo de la incertidumbre. Algunos extraerán la moraleja de que el diseño del poder bajo el centrismo estalló por la falta de decisión o de medios de Adolfo Suárez para imponer disciplina a sus barones. Otros, sin embargo, sacarán una enseñanza inversa: que fue la incapacidad de ese modelo para distribuir poder y para promover el debate político lo que liquidó a la UCD y puede también desgarrar al PSOE.

Reproducción del artículo de Pradera en *El País* del día 29 de noviembre de 1987.

El Gobierno no podía depender ya más de la «centralización de las decisiones, personalización del poder, ausencia de debate político, acentuación de las relaciones jerárquicas». Pradera

sospecha que ese modelo «ha dado de sí cuanto tenía dentro» y dejará de ser viable o directamente suicida «la sacralización fetichista» de ese «viejo modelo». Las voces discrepantes en el partido, la dimisión de Nicolás Redondo y el creciente desapego de UGT eran indicios demasiado consistentes de la necesidad de repartir el juego ahora concentrado en una sola cabeza: en González recaía el poder ejecutivo, la secretaría general del PSOE y el liderazgo electoral. De hecho, terminaba Pradera, pudo ser «la incapacidad de ese modelo para distribuir poder y para promover el debate político lo que liquidó a la UCD y puede también desgarrar al PSOE».

El argumento de fondo apelaba a la continuidad de prácticas políticas poco democráticas y demasiado afines al antiguo régimen, además de prevenir una derechización creciente en la política económica con Carlos Solchaga al frente. No era una música nueva pero esta vez llevaba su firma. También el subdirector de la edición dominical en la que había aparecido el artículo, Joaquín Estefanía, recelaba abiertamente de los derroteros del socialismo en el poder en términos ideológicos, económicos y políticos. El 27 de agosto de este mismo 1987, Estefanía aprovechaba el número que *Mientras Tanto* dedicó a Manuel Sacristán, dos años después de su muerte, para deplorar «el pragmatismo que ha inundado el estanque dorado de la izquierda instalada». A estas alturas, Estefanía no era ya el joven periodista formado en *Informaciones* (con Jesús de la Serna y Juan Luis Cebrián), ni era el periodista de *Cuadernos para el Diálogo* que llegó hasta el final de la aventura con Sol Gallego-Díaz. No era tampoco el director de la revista roja *El Cábaro*, de 1977, ni se identificaba ya con el redactor de Economía que se incorporaba a *El País* en 1981 convencido de las virtudes de la dictadura del proletariado (como me contaba mientras salíamos de casa de Natalia hace un par de años). Pero todavía evocaba la ejemplaridad de un Sacristán muy crítico con «el frenesí pragmático» de las direcciones del PSUC y del PCE para ser aceptados en la «transición pactada» e integrarse en España como «país neocapitalista».

La alarma de Estefanía enfocaba todavía otra dirección más peligrosa. La «derecha liberal» en 1987 está «incrustada cada vez más en las formaciones denominadas clásicamente de izquierdas», donde hay que entender evidentemente al PSOE, vencedor con su segunda mayoría absoluta un año y pico atrás pero cada vez menos empático con las movilizaciones sociales y la resistencia a las transformaciones industriales. El ejemplo que propone Estefanía es el prestigioso novelista y «apologeta del liberalismo económico» Mario Vargas Llosa, cuando incluso Carlos Solchaga reconoce, como ministro de Industria, que los efectos beneficiosos de la reconversión y otras medidas duras tardan demasiado en llegar a la población o fuera de los cálculos socialistas.

No fue el único aviso, espaciado e intermitente, del regreso guerrillero de Pradera. Solo un mes más tarde, el domingo 13 de diciembre de 1987, publicaba otra especie de tácita carta abierta a Felipe González, de nuevo muy intencionadamente titulada «El mal de altura». La meditación preventiva era críptica pero iba destinada a considerar que «tampoco la conciencia teórica de la provisionalidad del poder en un régimen democrático implica necesariamente la inmunidad ante el mal de altura»: es probable que empiece a acechar al presidente semejante dolencia. La experiencia antigua no se ha de repetir obligatoriamente ni todos deben reproducir el síndrome «de un militar africanista transformado en hombre providencial y caudillo vitalicio», lo cual elevaba el tono contra el presidente, a las puertas de la celebración del 31.º congreso socialista en enero de 1988.

Como en los viejos tiempos, sería Pradera quien cubriría el desarrollo de sus actividades. La mira estaba puesta en restablecer la comunicación con una calle soliviantada pero aún mayoritariamente confiada en el don carismático del liderazgo de Felipe para contener posibles fugas de voto. No era la mejor noticia, sin embargo, la exclusión de los medios de comunicación

en los debates sobre el proyecto político, o al menos «se da de bofetadas» con las victimistas «jeremiadas habituales» de los socialistas sobre no ser comprendidos cuando en el partido sigue imperturbable la «insaciable sed de control del aparato burocrático», «poco dispuesto a que nada escape de la vigilante mirada del Gran Hermano» con las gafas de pasta de Alfonso Guerra.

Nada logrará ocultar, aunque cierren las puertas, «las insuficiencias de la política socialdemócrata a secas», entendida como ampliación del Estado del bienestar y ya muy lejos del socialismo defendido en 1979, con sus «imprecisas recetas a medio camino entre la reforma y la revolución», e inspiradas en doctrinas propias del tránsito del siglo XIX al XX. Pradera podría estar escribiendo bajo el influjo o la sombra de Adam Przeworski en *Capitalismo y socialdemocracia*, traducido en Alianza ese mismo 1988. En la contraportada se preguntaba Pradera retóricamente si «la lucha por el socialismo» había que librarla «al margen de las instituciones establecidas o por el contrario ha de realizarse a través de la democracia representativa». Parecía absurdo «dedicar todos los esfuerzos y energías a la total abolición del capitalismo» en lugar de «apostar por las reformas y las mejoras parciales» porque ya no era «la clase trabajadora el único agente de transformación al servicio del socialismo». Trabajadores y obreros tienen «buenas razones para luchar por la mejora del capitalismo».

Quizá cuando Felipe González declaraba que en 1979 Alfonso Guerra estuvo más cerca de los marxistas que de su apuesta socialdemócrata sabía lo que decía, aunque lo dijese quince años después de aquel congreso traumático en conversación con María Antonia Iglesias. La posición actual de los socialistas en el «mapa político –un centro escorado a la izquierda–» acentúa las discrepancias con la UGT, a pesar de que el discurso de Nicolás Redondo «fue todo lo firme y claro que los usos de la cortesía permitían». Acecha al partido, como dijo Raimon Obiols, la sensación de que el Gobierno «abandona arrepentido su arsenal de sueños» mientras asisten todos estupefactos a una ceremonia engolada y aparatosa, entre película de romanos y procesión de Semana Santa, sin autocrítica alguna y apenas con pálidas conquistas en términos de libertad de opinión. Tampoco la cuota aprobada de un 25% de mujeres es más que un «rudimentario artificio mecánico», muy escaso para «contrarrestar las oscuras pulsiones hacia el poder del machismo dominante» y sin duda insuficiente para revertir «los estragos causados por la estupidez machista en la cultura de la izquierda española».

Es posible que la reanudación regular e intensa del articulismo político en *El País* después del verano de 1988 esté directamente vinculada con las magras expectativas en Alianza y el relevo en la dirección del periódico que ahora dirige, desde octubre, Joaquín Estefanía. Es verdad que se había sumado al nuevo proyecto de Polanco, la revista *El Globo*, que apenas duró un año, hasta septiembre de 1988, y en el que Pradera escribió semanalmente. Pero al menos desde ese mismo octubre, confiesa a algún autor que, «como seguramente habrás visto, existen posibilidades de cambios accionariales en Alianza y de acuerdos de colaboración de otras firmas». Joaquín Marco es en ese momento alto directivo de Salvat y recuerda que algo debía estar rondando a Pradera entonces, porque tanteó de forma más o menos informal su interés en asumir la dirección de Alianza, como si de veras empezase a sospechar que la venta era irreversible y dejaba de tener sentido para él seguir ahí. Aunque Hachette no había acabado comprando Alianza en 1986, sí entró en negociaciones a lo largo de este 1988 con un antiguo socio de Alianza, justamente Salvat, para adquirirla en septiembre (con el tiempo, por cierto, Hachette acabaría haciéndose también con el nuevo dueño de Alianza, el Grupo Anaya).

El cambio de Gobierno de julio de 1988 parecía la toma de conciencia más clara sobre los problemas estructurales. Invitaba a algún optimismo, decía Pradera, con sus «gestos de

renovación» y una «originalidad indiscutible», como si de veras González hubiese asumido la necesidad de dar un nuevo aire, que esta vez pasaba por algo más que cosmética y promesas nebulosas. Hay dos mujeres en el equipo, Matilde Fernández y Rosa Conde, lo cual rectifica «en buena hora la más asombrosa anomalía» de los anteriores gabinetes, además del valor objetivo de destituir por fin en Interior a Barrionuevo (aunque lo reabsorba en Transportes) e incorporar a dos veteranos antifranquistas tan íntimamente ligados a su biografía como Enrique Múgica (a quien sin embargo dedica un duro artículo apenas días después) y Jorge Semprún. En cualquier caso, el cambio abre la esperanza de que ese Gobierno «pueda devolver a los socialistas el pleno ejercicio de esa sensibilidad social e imaginación política» que arrolló electoralmente seis años atrás y que han perdido.

Con el regreso de Semprún a España como ministro de Cultura, en medio de las dificultades socialistas para mantener su velamen socialdemócrata y el empeoramiento galopante de la situación en Alianza, cobra sentido una extraña proposición. ¿Pudo existir algún contacto ahora para involucrar a Pradera en la cocina de la política informativa del nuevo Gobierno, mientras las condiciones laborales en Alianza se ponían de color oscuro? No es inimaginable que aceptase Pradera la fugaz invitación a dirigir los servicios informativos de RTVE, cuando la mitad de los ministros del Gobierno de González eran parte del círculo íntimo de amistades en casa. Chino Moya tenía entonces doce años y vivía con su madre, Natalia, y con Javier desde hacía tres o cuatro, y no olvida comprensiblemente su sorpresa al ver en *El País* como nuevos ministros a muchos de los amigos habituales de casa, como si hubiese una extraña forma de continuidad entre la sala de estar, Javier y el Gobierno socialista. Allí estaban amigos tan directos como Jorge Semprún, José María Maravall, Enrique Múgica, Francisco Fernández Ordóñez, Claudio Aranzadi, el mismo Felipe González o incluso una antigua amiga de Natalia como Rosa Conde. Ángel S. Harguindey y Patxo Unzueta recuerdan que la tentación de aquel cargo en RTVE fue real, cuando la venta de Alianza a Anaya no estaba resuelta pero sí en marcha, y había reanudado una colaboración todavía intermitente con *El País*. Pradera estuvo en un tris de decir sí a esa oferta, o incluso dijo sí, pero Alfonso Guerra dijo no, y todo quedó en nada.

Hoy no queda tampoco rastro documental de esa propuesta, ni tampoco recuerdan nada en este sentido ni González ni Guerra ni Solana ni Estefanía. Quizá se trató solo de una conversación o una tentativa de encargo fraguado en alguna de las múltiples cenas que Pradera recuperó con Semprún. ¿A qué pudo ser candidato Pradera, junto a Javier Baviano, según las notas del presidente González tras un encuentro con Semprún de noviembre de 1988, tal como aparece en uno de sus cuadernos de la fundación? Lo significativo para mí es que la tentación de la política y la acción cerca de los fogones había tocado también a Pradera, y parece lo más natural del mundo.

Nadie acaba viéndole en ese cargo, pero tampoco se cumplen las expectativas de un Gobierno renovado y original. La crispación creciente en la UGT, el control estricto del partido por parte de Guerra y la intransigencia de Solchaga condujeron fatalmente a la convocatoria y el seguimiento masivo de un paro general el 14 de diciembre de 1988 que despertó simpatías en múltiples sectores sociales. La ironía negra que cada vez más usa Pradera subraya que no hay noticia alguna en la convocatoria de la huelga; la noticia está en «la reacción de asombro del gobierno», por lo visto inconsciente del «deterioro –o encabronamiento– de las relaciones» del Gobierno y el sindicato socialista. El 20 de noviembre de 1988 cree que «nada impide que la socialdemocracia pueda gobernar en el futuro en España –como lo hace hoy en Suecia– con los votos parlamentarios de los comunistas». Por eso gasta una fingida perplejidad y se pregunta con retranca irónica: «¿A qué viene, entonces, la pícaro referencia de Felipe González a un “desplazamiento hacia el rojo”

de la estrategia sindical que tendría “connotaciones políticas no explicables o al menos no explicadas”?)»

Aquella convocatoria en buena medida nacía del relevo en la dirección de CC. OO. y el acceso de Antonio Gutiérrez al puesto que había desempeñado un mítico Marcelino Camacho. Una UGT sobrecargada de razones sindicales había aceptado la atrevida propuesta del nuevo secretario general de Comisiones. Pero no parece la mejor estrategia del Gobierno a 29 de noviembre su «respuesta numantina» desde «la ciudadela sitiada», menos aún cuando su portavoz está tan nítidamente encuadrado en las filas guerristas como Txiki Benegas, «un Peter Pan político que no ha conseguido dejar de ser *txiki* pero que puede terminar en *txotxoli*». El PSOE hoy «refleja el ceño fruncido y el gesto crispado de unos gobernantes que se creen salvadores de la patria». Ya solo comparecen para «asestar aburridas lecciones de economía a los ciudadanos» y «regañarles por díscolos, individualistas o derrochadores». En la cabeza de Pradera, sin embargo, los destinatarios de la reprimenda no son varios de sus amigos en el Gobierno, o no lo son ni Aranzadi, ni Maravall (aunque había cesado en julio de 1988), ni Semprún ni Fernández Ordóñez. Discrepa de la huelga Pradera, le parece de una «evidente desproporción», pero a la vez la justifican los «malhumorados y amenazadores» esfuerzos del Gobierno y sus «torpes premoniciones sobre desórdenes callejeros». Esa equivocada defensa casi anima a sumarse al paro en lugar de relajar las ganas de bronca. Ni se suma a las «revolucionarias incitaciones doctrinarias» de Guerra ni se toma en serio el «desparpajo arbitrista» de algunos sindicalistas, pero acaba disparando contra González en la medida que la población prefiere «conductas materialmente *razonables* guiadas por la flexibilidad y un moderado escepticismo antes que comportamientos formalmente *racionales* dominados por la rigidez y un cierto fanatismo», en clara sintonía con el mensaje que la calle arrojaba hacia las alturas de Moncloa.

A Pradera sin embargo le sigue sublevando sobre todo el enroque socialista cuando acaba de empezar el procesamiento por los GAL y repudia sus mensajes «orientados a diluir las responsabilidades penales individuales derivadas de los crímenes de los GAL en una especie de compota formada por los intereses generales, la defensa de la democracia y la política comparada». No es precisamente muy sutil la estrategia socialista de cargar contra el gasto superfluo de Pilar Miró por un vestido de más o de menos frente a los «espesos silencios» en asuntos tan graves como la presunta defensa de la razón de Estado. Podría ser buen pretexto para adoptar medidas de control comunes en otros países, aunque particularmente difíciles en un país con un «espectacular rebosadero de dineros especulativos» y una sociedad «permeada por la lógica del mercado y la moral del éxito», imprudentemente fomentada por declaraciones ministeriales y un tono vital de opulencia, frivolidad y ostentación que aborreció el puritanismo moralista que a veces asaltaba a Pradera.

Aunque Sánchez Ferlosio excluyó más adelante de sus ensayos su adhesión a la huelga general de diciembre de 1988, entre octubre y diciembre encadenó varios artículos a favor, no publicados en *El País*, sino en *Diario 16* y en *El Independiente*. En ellos no ahorra sarcasmos contra Jorge Semprún ni desde luego contra Felipe González. Reprueba su «marrullería verbal» y hasta despacha con choteo zumbón su afición a las lecciones del tao, y todo a cuenta de sus bonsáis (se los había enseñado en persona González en alguno de los encuentros en la *bodeguilla*, como recuerda bien Carmen Romero). A cuatro días del éxito de la huelga, el 19 de diciembre de 1988, denostaba la «vocación extremadamente liberal del actual régimen socialista español» para concluir que el PSOE «promete menos de lo que cincuenta años antes propugnaba el sindicalismo católico», lo cual bastaba para confirmar «su profunda conversión a la mentalidad derechista».

El artículo sigue sin la menor circunspección, pero se dirige después al otro lado de la calle, una vez que ha triunfado ya la huelga general del 14 de diciembre y los sindicatos creen haber vivido una «jornada histórica». Pero es ahí donde el autor se acuerda de un artículo de Pradera (que se inventa o toma al dictado de alguna de las tertulias, porque no he dado con él) que distinguía como «opuestos “hacer historia” y “hacer política”». La cavilación de Ferlosio le lleva a la contundencia de que «sería muy de lamentar que los hoy victoriosos sindicatos cayesen en esa rimbombante y siempre trágica tentación de hacer historia». La diferencia es crucial, porque «hacer política es ejercer la ciudadanía y apoderarse del presente». Pero «hacer historia es entregarse al futuro y cumplir un destino». Lo segundo, hacer historia, «es intrínsecamente fascista».

No he localizado ese artículo, pero en todo caso Pradera vivirá compungido en casa de Aranzadi el fundido en negro de TVE. Aquella huelga desvanecerá «el ensueño de los endiosados líderes socialistas» al descubrirles que no «llevaban inscritos en el código genético la imposibilidad de equivocarse en política». Había margen de maniobra, contra lo que González y Solchaga repitieron una y otra vez. Después de ese momento tuvieron que hacerlo a la fuerza: González leyó el mensaje de inmediato y ofreció una negociación que UGT y CC. OO. encararon con la prepotencia de la victoria. Pero si el presidente sabía perder, ellos debían saber ganar, entre otras cosas porque ese éxito había de servir para moderar la altanería de algunos ministros o su rigidez con las cuentas. Un documento nacido de una corriente interna del PSOE, Izquierda Socialista, se sitúa en la «zona templada de la discrepancia» con el *felipismo*, por mucho que los medios oficiales del PSOE reprueben la pobreza del análisis: «La pedantería de ese control ideológico de calidad es solo comparable con su escasa pertinencia», cree Pradera en otro artículo. No debería impedir que el PSOE abra por fin la «discusión aplazada desde el 14-D» y se atrevan todos a hablar con libertad y sin miedo a las represalias.

Es verdad también que el editorial de *El País* del 22 de diciembre de 1988, tras un pleno de debate sobre los efectos de la huelga general, sin Pradera ya en el equipo formalmente pero muy cerca del director Estefanía, describe a «un Felipe González humilde y generoso –y por consiguiente, inédito–», que devolvió el debate político al Parlamento. La política económica actual «sí tiene graduaciones, matices y alternativas en algunos puntos de la discusión», y hacia esa ruta empuja también Pradera en los artículos de este fin de año. Cuando meses después la complicada negociación entre sindicatos y Gobierno culmine en algo parecido a un acuerdo, resultará «bastante incongruente» que la cifra resultante hubiese sido manejada ya al principio.

UN FINAL TRAUMÁTICO

Apenas un mes después del 14-D, mientras Pradera veía fundirse a negro la pantalla del televisor, estaban fundiéndose también sus posibilidades de salvar Alianza de una venta ya acordada al Grupo Anaya de Germán Sánchez Ruipérez. Todo podía tener aire de conjura pero, en realidad, el capítulo más negro de su desgraciado final en la editorial había empezado antes, sin que nadie se diese cuenta, o no en apariencia, de que los nuevos estatutos acordados con Diego Hidalgo podían dinamitar la continuidad de la empresa y la de Pradera en ella.

Ni él ni nadie pudo hacer nada en defensa de un plan alternativo al que inflexiblemente defendió años después, en 1989, el accionista mayoritario. Se sentirían engañados «por haber aceptado ingenuamente», tiempo atrás, «que desapareciese de los estatutos de la sociedad» el derecho de

tanteo de los accionistas minoritarios. Hidalgo había adquirido la mayoría de las acciones «solo después» de que desapareciese ese derecho con el fin «tener las manos libres para la enajenación de su paquete», escribe Pradera cuando todo está ya perdido, en enero de 1989. A Pradera apenas le queda el amparo moral de «que la cultura jurídica inspirada por la Constitución de 1978» no es «congruente con esa especie de dictadura de la mayoría y esa desprotección de las minorías». Hidalgo había faltado a su palabra y los demás habían actuado «en la errónea creencia de que Diego Hidalgo respetaría su promesa de que nunca enajenaría la mayoría absoluta de la compañía a un tercero».

Lo que seguía creyendo Pradera es que Alianza se había mantenido «en niveles de salud patrimonial, eficacia laboral, prestigio cultural y rentabilidad lo suficientemente altos como para que» no faltasen «compradores dispuestos a pagar un precio bastante atractivo por el control de la compañía». No había razón alguna de alarma ni nadie de su equipo creía en una falla sistémica o en una emergencia de ningún tipo. Pero sí lo creía Carmen González, la persona de confianza que había designado Hidalgo para suplir una larga ausencia durante ese año 1988. A la vuelta del verano, y tras una operación quirúrgica complicada, Hidalgo recibió informes de su colaboradora que probaban el más que presumible desacato, desobediencia o autonomía de funcionamiento de la editorial en su ausencia y contraviniendo sus criterios. Según ella, la consecuencia había sido una ampliación sustancial del programa de publicaciones y un endeudamiento insoportable. Según Hidalgo en sus memorias, la única salida posible a la situación consistía en una «fusión con otro grupo mayor» y puso en marcha entonces lo que denomina «una subasta».

A Pradera le quedaban ya muy pocos cartuchos y los usó, aunque no hubiesen de tener ninguna eficacia. El día antes del tormentoso Consejo de Administración que enfrentaría a ambas partes, 18 de enero de 1989, *El País* informaba de la posición ventajosa de Anaya para la compra de Alianza, según medios financieros, «habida cuenta que el presidente de Anaya mantuvo contactos en los últimos dos años con [Diego] Hidalgo ofreciéndole constituir un grupo editorial español de mayor envergadura». Se trataba de hallar «fórmulas de colaboración» que incluyesen «una fusión para hacer frente a la creciente competencia extranjera». El informador Carlos Schwartz, sin embargo, no pudo consultar con Germán Sánchez Ruipérez «sobre la operación porque estaba regresando de un viaje a América Latina».

Pero debía de ser verdad esa sucesión de contactos entre Hidalgo y el dueño de Anaya, porque la venta se resolvió cuando «no aguanté más y la compré a golpe de teléfono, hablando con Diego Hidalgo, que estaba en Nueva York, y entre él y yo lo resolvimos», según explicó Sánchez Ruipérez en una conversación grabada en 2000 y publicada en 2006. Con una frivolidad que explica la incompatibilidad editorial de Pradera con él, cuenta el empresario que esa compra fue «un capricho que uno tiene en la vida porque Alianza Editorial era la empresa cultural, el proyecto cultural más bonito de los últimos treinta años y eso, a mi grupo de empresas, le iba a dar una categoría muy grande».

Todavía no ha sucedido nada irreversible en los primeros días de enero, pese a los malos augurios desde octubre de 1988. Pradera escribe a principios de año a Ferrater Mora «sin noticias ciertas sobre la venta por Diego Hidalgo de su participación mayoritaria en Alianza. Posiblemente la semana que viene» se conozcan ya los «accionistas mayoritarios». Al día siguiente del consejo, el 20 de enero de 1989, *El País* informaba de lo que había sucedido ahí: «Un grupo de accionistas minoritarios representados por el director de la compañía, Javier Pradera, reiteraron a Diego Hidalgo la solicitud de un derecho de tanteo que impida la venta a Anaya.» Sin embargo, «no parece factible que pueda prosperar», conjeturaba el redactor de la noticia, porque «este derecho

de tanteo fue retirado de los estatutos de Alianza Editorial en el año 1986». La garganta también amarga esta vez para el dato crucial de la operación hubo de ser sin duda Pradera, enfrascado en la batalla más dura y difícil de su carrera profesional como editor, y seguramente a sabiendas de que esa batalla estaba perdida. Lo contaba *El País* sin la crudeza que emplea en un documento privado de 2014 Ezequiel Méndez, al considerar que la venta de Alianza a Anaya se llevó a cabo «ante la imposibilidad de mangonear en la política editorial y expansiva de la empresa» por parte de Diego Hidalgo. No había logrado que «las decisiones editoriales» se supeditasen «al criterio del aparato comercial, que pasaría a ser el tribunal de última instancia».

Dijese lo que dijese la auditoría que Hidalgo encargó entonces a Arthur Andersen, la decisión estaba tomada. Ni el Consejo de Administración pudo conocer el resultado antes de la venta, ni ha aparecido en sus archivos; tampoco el informe al que Pradera replicaba en el consejo del 7 de febrero, tres semanas después. Pradera volvía a dirigirse a todos ellos –con la venta ya decidida– para desmentir el diagnóstico catastrófico que Diego Hidalgo había hecho en el consejo del 19 de enero. Se trataba de un documento de veinte páginas y nueve más de anexo ante el que «se diría que, a su juicio, faltan cinco minutos para que suenen las doce horas de la catástrofe». El vendedor parecía paradójicamente interesado en rebajar el valor de su propiedad, «convencido de poseer una mula ciega y un comprador a quien se le haría creer que se le ofrece un caballo de carreras». Pero eso «convertiría al vendedor en un pícaro y al comprador en un isidro», cuando era evidente que a Sánchez Ruipérez la operación no solo no le parecía ruinoso sino óptimo.

Ni Pradera ni sus colaboradores directos –Daniel Gil, José Luis Turullols, Marcelo Díaz, Ezequiel Méndez, María Cifuentes, Carmen Criado– compartían el «sombrio cuadro de la situación actual de Alianza» que pintaba Hidalgo. De hecho, «ese –para él inverosímil sobreprecio que ofrecen por Alianza los compradores» localizados por Pradera no es «otra cosa que el resultado, también en dimensiones estrictamente empresariales, de una política editorial que tan poco le gusta y que tan escasamente aprecia» su actual socio mayoritario. La historia de aquella editorial hasta ese momento había sido «el resultado de otra forma de entender las relaciones entre cultura y negocio, entre proyecto cultural y rentabilidad empresarial, entre creatividad y comercio». Por eso Alianza ha «sobrevivido durante más de veinte años y se vende ahora a nueve veces su valor nominal». La posibilidad de que siguiera «en el mismo lugar que hoy le corresponde en la cultura española» dependería, por tanto, de «que siguiera distinguiendo entre la maximización de sus beneficios económicos a corto plazo y la optimización del difícil equilibrio entre cultura y negocio». Cuando murió su fundador, José Ortega Spottorno, Pradera evocaría con resquemor y con la cabeza puesta en esa peripecia final que «nuestro trabajo no tenía como móvil principal la maximización de la cuenta de resultados y la búsqueda oportunista de *best sellers*». Alianza iba a ser vendida a un personaje del ecosistema literario detestado por Pradera y sin la menor sintonía con el significado cultural de Alianza. El «humillante desarrollo del proceso negociador de la venta» hacía inevitable también «concluir que Alianza es ya difícilmente habitable» desde febrero de 1989.

Pradera pudo haber sido víctima tanto de la arrogancia de sus sarcasmos como de sus convicciones editoriales más hondas. Sus dos meticulosos informes, reproducidos íntegramente en *Itinerario de un editor*, constituyen una poderosa protesta contra la deslealtad de Hidalgo y a la vez un alegato justificatorio de la decisión de abandonar la editorial de su vida. Hidalgo había saboteado la propuesta de Pradera para impedir la ruina futura de accionistas minoritarios y directivos, en una especie de sobreprotección paternalista difícil de comprender en términos racionales. Tampoco hoy Hidalgo acierta a explicar las razones de su determinación para impedir

que Alianza permaneciese en manos de sus propietarios morales e históricos, por muy irresponsable o equivocada que juzgase la operación. Consideraba el plan de Pradera «inviabile en tanto que empresa independiente». Según explica Pradera, «no quería que los socios minoritarios se suicidasen» de manera que «todos los intentos de refutar ese argumento, que trata como menores de edad a personas adultas, fueron inútiles». Nada logró vencer la «cerrada negativa a reconocer a los accionistas minoritarios la posibilidad de ejercer una opción de tanteo o de retracto ante la venta a un tercero».

Y debió ser así, efectivamente, porque Hidalgo reconoce en sus memorias no haber consultado la operación con ellos: «Estaba seguro» de que «no pondrían ningún obstáculo a la venta», porque «no tenía ninguna lógica» que lo hicieran. De ahí que nunca llegase «a suponer que Pradera se opondría frontalmente». De forma un tanto ingenua, es posiblemente la mejor pista sobre la profunda incomprensión de Hidalgo sobre qué había sido y qué aspiraba a seguir siendo Alianza con Pradera al frente. Tampoco su valoración de un personaje como Francisco Gracia (nada que ver conmigo) desdice de un enfoque antagónico y subraya esa incomprensión del significado de Alianza. Creía Hidalgo que «todos» sus directores en Alianza carecían de la «visión editorial y empresarial a la vez» de ese «magnífico ejecutivo» que era Francisco Gracia, pese a haber contribuido al ruinoso final de Carlos Barral en Labor. Su caricatura vengativa está diseminada en la única novela que escribió Barral, *Penúltimos castigos*, y su procesamiento por presuntas injurias contra Gracia fue seguido hasta en tres editoriales por parte de Pradera cuando aún estaba en la caja negra del periódico.

A finales de febrero de 1989 Pradera contrata todavía la poesía completa de Jaime García Terrés, que ha sido director de FCE, y «no será un éxito loco de venta, pero nos cubrirá holgadamente los gastos». El propio García Terrés sabe que el momento es delicado, a la vista de los «cambios jurídicos y financieros ocurridos en Alianza», que «han transformado explicablemente todas las labores de esa benemérita empresa». Las últimas cartas de Pradera llevan fecha de 11 de marzo para excusar una respuesta cumplida, ya que –le cuenta a Jesús Mosterín–, «lamentablemente, estoy recogiendo los papeles y no tendré ocasión de hacer tu [Gottlob] Frege» (acabaría apareciendo en *Crítica* seis años después).

Hasta junio de 1989 no recibirían autores y colaboradores una suerte de circular firmada por Diego Hidalgo para comunicar la venta. El nuevo director general era Fermín Vargas, y el departamento editorial incorporado a Anaya seguía en manos del mismo equipo, «pese a la sentida marcha de Javier Pradera». Pero solo en una pequeña parte era cierta esa presunta continuidad porque ni el *staff* directivo de la Alianza histórica ni el de los años ochenta seguía seis meses después ni en Alianza ni en Anaya: ni Pradera, ni Daniel Gil, ni Marcelo Díaz, ni Ezequiel Méndez. Todos seguían creyendo con Pradera que «una editorial no es solo una empresa mercantil sino también un proyecto cultural». Como recuerda Ezequiel Méndez en un documento inédito sobre aquella historia, la editorial ya bajo el control de Anaya padeció al poco tiempo una «continuada pérdida de derechos de edición» inimaginable con la dirección antigua al frente. Tiene razón Hidalgo: ni Pradera ni Gil estuvieron acostumbrados ni nunca se acostumbraron a trabajar bajo la supervisión disciplinada de nadie y menos del departamento comercial. Tampoco Gil encajó en el traspaso y el 31 de julio de ese mismo 1989 renunciaba a la dirección artística del grupo Anaya. Según él, en la nueva casa prevalecía la rentabilidad antes que el perfil «culturalista».

En dos años todo había cambiado bruscamente para aquel editor metido a editorialista que abandonaba casi a la vez la dirección literaria de Alianza y la dirección editorial de *El País*.

Pradera había sido un editor inesperadamente vocacional a lo largo de casi treinta años y se acercaba a un final frustrante y hasta depresivo. Su abandono de la edición desde entonces fue una quiebra moral e íntima, pese a la suculenta indemnización de cincuenta millones de pesetas negociada por Matías Cortés y acordada con Hidalgo antes de la venta a Anaya (equivalente a seis años de su sueldo).

Empezaba su regreso a casa desde la India, como los viejos coroneles británicos, según parodiaba él mismo, y también la íntima conciencia de un final de etapa prematuro y abrasivo. No quiso continuar bajo otros sellos o en otras condiciones: rechazaría propuestas muy tentadoras, entre ellas la de José Manuel Lara para incorporarse a Planeta, o la de Juan Tomás de Salas para sumarse al Grupo 16. En buena medida, su papel en el periódico desde 1976 había consistido en desplazar al día a día del periodismo lo que había ido concibiendo en plazos dilatados y con el *tempo* lento de la edición literaria. La añoranza, la nostalgia del mejor oficio del mundo, como puso por escrito varias veces, seguiría latiendo durante mucho tiempo en el corazón de Pradera. Cuando en casa le oían bisbisear o pronunciar en voz alta sin más comentario y con una vaga perplejidad insoluble «¡qué hijo de puta!», según recuerda Chino Moya, hijo de Natalia, todos sabían en quién pensaba. Y pensó en ello durante mucho tiempo.

Con cincuenta y cinco años en 1989, sus análisis sobre el mundo editorial se contagian de resonancias lúgubres, tocadas de una melancolía irreprimible. No durará demasiado tiempo, pero alguna vez ha hablado Natalia Rodríguez-Salmones de la «depresión de caballo» en que se sumió Pradera en este momento. El pesimismo enturbia el análisis de los cambios sistémicos, estructurales y hasta intelectuales que ha vivido la edición en los últimos años, en España y fuera de España. También había razones accidentales para una melancolía justificada. Carlos Barral moría solo unos meses después de las trifulcas de Pradera en Alianza, casi como cruel epílogo de una crisis más vasta para quienes rechazan «estos tiempos de amnesia generalizada respecto a la sordidez del franquismo, combinación de censura atrabiliaria y de persecución rencorosa de la libertad de expresión». El «estilo de trabajo» de Barral «también parece condenado desgraciadamente a un cierto olvido». Su muerte llegaba asociada este 12 de diciembre de 1989 a la muerte editorial del mismo Pradera, al menos cuando redacta este artículo y necesita apuntar sombríamente que «estos años de democracia han afectado paradójicamente de forma negativa a los sectores de la industria cultural que no buscan de manera exclusiva la rentabilidad del negocio y que no pretenden maximizar las ganancias de sus balances a costa de los contenidos de su producción editorial».

Lo sabía bien por experiencia propia y ajena. Editores de primer nivel internacional como Einaudi estaban viviendo o acababan de vivir situaciones muy semejantes a la de Alianza. La consecuencia es que a menudo desaparecen de la mentalidad del editor los «beneficios inmateriales: las gratificaciones de orden cultural y profesional que anteriormente interesaban a los inversores en empresas editoriales». Desde entonces Pradera también disemina aquí y allí, casi siempre por encargo o a instancias de terceros, sus meditaciones en torno al crucial significado del exilio cultural español y sobre algunas figuras capitales de la edición literaria y humanística (Arnaldo Orfila y Pancho Pérez González, Mario Muchnik, Jordi Herralde), casi siempre sin callar los pesimistas augurios que acechan al viejo mundo de la edición cuando él ya no está allí.

Ya casi nada parece ser como era en la Galaxia Gutenberg, amenazada de apagones quizá reales pero sin duda también ahora, en 1990, aumentados por la amarga peripecia final en Alianza. Los viejos equilibrios están amenazados a causa del «reforzamiento hasta la hipertrofia del momento

empresarial de las editoriales y del carácter mercantil del libro, al convertir esos criterios en exclusivos y excluyentes». Su contribución al suplemento especial de *El País* dedicado a la Feria de Frankfurt, en octubre de 1991, tampoco estuvo animada del mayor de los optimismos cuando la exigua cifra de un 18% de lectores habituales en España derrumbaba las «esperanzas puestas hace veinte o treinta años en que el restablecimiento del sistema democrático permitiría reparar los daños infligidos por la dictadura franquista a la continuidad de nuestra cultura escrita». Pradera recelaba ya entonces de que «las estrategias mercantiles para extender el hábito de lectura y ganar *nuevos compradores* para la industria del libro resultasen finalmente lesivas para los *viejos lectores* que podrían quedarse en pocos años sin la oferta de los editores vocacionales, expulsados de las librerías y de las grandes superficies por los *best sellers* y con el agua hasta el cuello por la baja rentabilidad de sus negocios». Por eso no renuncia a que «el Estado otorgue una protección selectiva, fundamentalmente a través de las adquisiciones bibliotecarias» a una edición de calidad con lectores desde hace décadas pero necesitada de «algo más que el mercado para subsistir».

Tampoco las circunstancias políticas contribuían a levantar el ánimo. El enrocamiento político de Alfonso Guerra, la permisividad un tanto ausente de Felipe González, la emergencia de una nueva derecha con ínfulas y una presumible agenda secreta refulgían en la oscuridad como diabólicas luciérnagas.

15. EN LA BORRASCA INTERMINABLE

Del batacazo en Alianza se rehízo tarde y mal, pero se rehízo. La depresión desmovilizadora fue disipándose a medida que Pradera volvía a lo largo de 1989 a los debates en la redacción de *El País*, a la colaboración asidua y a una presencia estable e influyente en la tercera planta del periódico que dirigía Joaquín Estefanía. El doble paliativo para el insólito limbo profesional llegó de nuevo de Prisa por dos vías. Tampoco esta vez hubo plan trazado de antemano ni nada hacía prever que Pradera regresaría semiorgánicamente a *El País* e inventaría a la vez una nueva nave, la revista *Claves de Razón Práctica*.

CON NUEVAS CLAVES

Apenas dos meses después de su abandono de Alianza en marzo de 1989, el presidente de Prisa y amigo, Jesús Polanco, lo designa adjunto al nuevo consejero delegado de la empresa, que es Juan Luis Cebrián, y también lo hace miembro del Consejo de Administración de Prisa «con el respaldo» de la «participación accionarial» del mismo Polanco en junio de 1989. Allí reencontraba a amigos como Pancho Pérez González, Jaime García Añoveros, Matías Cortés o Jesús Aguirre, que asistía poco. Su incorporación venía también a perpetuar una convivencia profesional con Cebrián, superados los desencuentros de los años anteriores, y en particular la crisis de 1986. Pero sobre todo ratificaba su vinculación con Polanco y Prisa al incorporarlo también, y por fin, al Consejo Editorial que semanalmente se reunía en la sede de Gran Vía.

Del respaldo accionarial de Polanco habló el mismo Pradera en carta al presidente de Prisa once años más tarde, cuando Pradera está ya decidido a abandonar su puesto de consejero. No olvidaría nunca «las circunstancias personales y societarias» del nombramiento, cuando atravesaba «una de las peores épocas de mi vida». Su salida de Alianza en 1989, explica en esa carta a Polanco de abril de 2000, no había tenido motivaciones laborales e incluso incubó «la esperanza de que *El País* comprase Alianza»; su renuncia había nacido de «la convicción – desgraciadamente confirmada por los hechos años después–» de que la venta a Anaya «desbarataría un proyecto editorial y cultural» al que había dedicado veinte años y con el «que me sentía personalmente muy identificado». El hecho de que el vendedor de Alianza fuese uno de los accionistas más importantes de *El País*, Diego Hidalgo, hizo todavía más valioso «tu gesto de designarme consejero», le dice a Polanco, y fue «un apoyo moral de incalculable valor para mí en esos momentos».

La consecuencia necesaria fue el desdoblamiento de su actividad como miembro del Consejo de Administración de Prisa y miembro de su Consejo Editorial («creo que todavía se llamaba Consejo de *El País*»). En el primero actuaría, por decirlo con sus palabras de 2000, asumiendo el «mandato imperativo» de votar en favor de las posiciones de Polanco, «moralmente obligado contigo» en cuantas cuestiones relevantes o estratégicas hubiese que decidir. Pradera usa una comparación desafortunada o, como mínimo, viciada para explicar su actuación por analogía con los diputados escogidos en las listas de un partido y su «obligación de aceptar la disciplina de voto» (contra la que había escrito numerosas veces). Sobre el papel todo tenía todavía el aire

escuálido de una asesoría flotante y nebulosa. Lo compromete a aportar «algunas ideas de carácter general sobre la futura actividad editorial de Prisa», según el informe que Pradera dirige a Cebrián el 29 de septiembre de ese mismo 1989. De ahí nace la revista de ideas *Claves de Razón Práctica*, tras un memorando detallado de Pradera con propuestas de nombres, secciones y condiciones que se materializan en un primer número de principios de 1990.

En el Consejo Editorial, sin embargo, su función era otra y estaba determinada por la libertad de juicio y de criterio, incluido discrepar «seriamente de tus apreciaciones sin que llegara a pasármeme siquiera por la cabeza la idea de silenciar mis opiniones». La disciplina del autoimpuesto *mandato imperativo* en el Consejo de Administración de Prisa duraría once años y se rompería en gran medida en el fragor de la batalla más dura del periodismo político de la democracia.

Pero tampoco hacia 1990 nada era igual que antes ni las formas del poder socialista dejaban margen para euforias ingenuas o expectativas demasiado elevadas. Pradera reanudaba sus asiduas colaboraciones firmadas en *El País*, se incorporaba a la Cadena Ser, activaba una colaboración más directa con el equipo de *Babelia*, suplemento cultural creado en este 1990, y restituía también una forma invisible del poder concurriendo a las reuniones editoriales de los martes tanto del periódico como del consejo de Prisa: las batallas del futuro tendrían a Pradera como ideólogo y testigo de un izquierda integrada en las ferocidades del poder duro. Todavía no había empezado la batalla con la derecha resucitada, pero las razones de la inquietud eran múltiples. En una larga charla con José María Maravall, durante un viaje a Brasil entre marzo y abril de 1989, Pradera quiso saber si ante las elecciones de 1989 Maravall volvería al Gobierno si el presidente se lo proponía: *ni muerto* volvería, pero tampoco Pradera reingresaría en la *caja negra* del periódico. Tanto Joaquín Almunia como Maravall, tanto Claudio Aranzadi como Carlos Solchaga recuerdan a un interlocutor tenaz y obstinado, inconforme con las respuestas vagas y persistente en sus inquisiciones en torno a motivaciones, objetivos políticos y a menudo implacable en los juicios, fuese cual fuese la posición ajena («sin celofán», dice Almunia). Felipe González recuerda la misma persistencia intrigada por la mecánica interior o la anatomía secreta del paso entre la meditación indecisa y la ejecución decidida del poder.

Pradera no volvería a escribir editoriales, pero la relación con Joaquín Estefanía —«a Pradera le debo mi esqueleto intelectual», ha dicho alguna vez— fue muy estrecha y con él y su equipo ejercía informalmente el papel que había ejercido hasta 1986. En la memoria de Estefanía su incorporación al consejo del periódico fue natural, tras casi dos años sin acudir a él, de la misma manera que al Consejo de Administración de Prisa acudía en calidad no de potentado económico ni inversor relevante (porque figuraba entre los «decididamente pequeños accionistas» con el 0,0024 %, según María Cruz Seoane y Susana Sueiro), sino como autoridad intelectual y quizá tácito portavoz de una redacción sin representante o enlace en aquel consejo. Quizá también esa diferente función en el periódico explica que algunos de los artículos de esta etapa de los años noventa incluyan cargas de profundidad que trascienden la mera función del analista político y asumen un nivel de compromiso muy explícito. De algún modo aumentaba ahora la carga nominal y de exposición pública de una dirección que antes fue anónima.

Pradera estaba cambiando: empezaba a dejar de ser un hombre de acción y empezaba a ser sobre todo un hombre de pensamiento. Cuajaba ahora una renovada plenitud intelectual menos atada al control y la fiscalización del poder político y más atraída por la anatomía política del poder y el desmontaje de la historia como maquillaje de oportunistas. Había estado cerca de los fogones sin meterse en la cocina, pero la experiencia vivida ofrecía una perspectiva y hasta unas

condiciones objetivas únicas para restituir relatos edulcorados, corregir deformaciones interesadas, compensar debilidades coyunturales o incluso desvelar omisiones y claudicaciones imprevistas. Cuando los amigos dicen en forma un tanto irónica que habían creído a Pradera ágrafo y en realidad fue prolífico y secreto, aluden sobre todo a esta etapa que concentra un volumen de perspicacia, dedicación, compromiso civil y batalla periodística que no tiene comparación con el resto de su vida. El comentario cotidiano de la actualidad será ya solo una pata más de una tarea de ensayista que examina con el escáner cerebral las debilidades del presente y pronostica con la experiencia escarmentada las averías en las capas profundas. En esa oscilación entre el análisis de coyuntura y la identificación experta de los nervios dañados de un sistema político cuajan las mejores cualidades de un ensayista atrincherado en la pelea por la mejor democracia posible: fue su generosidad intelectual, autónoma y sin otra motivación que el altruismo y la fascinación intelectual por el poder en democracia, negociado, limitado, contrapesado. Muchas veces desde ahora el artículo de periódico funciona como laboratorio de ideas de más largo alcance, aparentemente desconectado de la actualidad pero, en realidad, secretamente suscitado por ella.

También de las feroces nostalgias de la edición pudo curarse en parte a través de las páginas y los números mensuales de *Claves*. Nació como compensación tras la frustrada compra de Alianza por Prisa y el Grupo Timón y también como recompensa de Polanco tras el larguísimo historial de servicios prestados a *El País*. A *Claves* le dedicó una insospechada humildad, hedonista y disciplinada a la vez, atenta al montaje de las secciones y a la gestión de espontáneos, a las posibles prepublicaciones y a colaboradores potenciales. Tuvo algo de tabla de salvación, y en ella proyectó lo más parecido a una doble prolongación de su labor de editor y de editorialista. ¿El título? El título «se le ocurrió a la desesperación», según contestó Pradera en televisión con media sonrisa arqueada sobre las cejas, en marzo de 2000. Teóricamente la revista vendía entonces diez mil ejemplares, a la altura de su número 100, aunque lo único seguro para los dos directores, Fernando Savater y él, era su fe en la «razón práctica». Sin duda Pradera la aplicó a rajatabla haciéndose cargo de manuscritos y pruebas de imprenta que revisaba una y otra vez, como atestiguaría su histórica secretaria y amiga Nuria Claver, mientras imaginaba temas, proponía autores, sugería cambios y se resignaba también a las manías y *prisillas* de atolondrados como yo.

El ágrafo aparente concibió su primer número a finales de 1989 como un autorretrato del conspirador antifranquista, analista político y editor literario. Cerraba el número con la traducción de un artículo con historia Francis Fukuyama, «¿El fin de la historia?», pero lo abría con un antológico ensayo de Rafael Sánchez Ferlosio y otro misil intelectual de su codirector, amigo y el más poderoso y creativo ensayista que había dado hasta entonces la democracia, Fernando Savater. Con ellos comparecían veteranísimos amigos y contertulios como Luis Ángel Rojo, compañeros de militancia comunista y complicidades desde los tiempos de Ruedo Ibérico, como Manuel Castells, amistades políticas integradas en la red de Prisa y del poder, como Jaime García Añoveros, o colaboradores editoriales que pronto cooptaría para el periódico y para la tertulia semanal, como Santos Juliá. Francisco Calvo Serraller llegaba también tanto desde Alianza como desde el periódico, pero era, desde unos pocos meses atrás, cuñado de Pradera.

Aunque parezca increíble, entre los dos informes al Consejo de Administración de Alianza de principios de 1989, Natalia y Javier tuvieron tiempo de casarse, una vez resueltos los escollos personales de un divorcio difícil de Gabriela Sánchez Ferlosio, separada Natalia también de su primer marido, Carlos Moya. Para entonces habría empezado lo que Matías Cortés llama con

retranca el *nataliato*, seguramente concentrado en sofrenar la negligencia de los faldones de la camisa fuera del pantalón o corregir una tendencia que podría haber entrado en franca dejadez en su ropa, su aspecto y su aire. Se acuerda Miguel Ángel Ruiz Carnicer del roñoso jersey con un deshilachado agujero en la codera que vestía Pradera cuando le entrevistó con toda formalidad hacia 1987, en un almuerzo con Elías Querejeta en La Ancha de Príncipe de Vergara, como se acuerda también del alboroto de la melena despeinada.

Por entonces, empezó también un nuevo círculo geográfico que iría cuajando en forma de sociabilidad estival o navideña, pautada por el calendario de vacaciones. En 1988 Natalia Rodríguez-Salmones compró una hermosa casa en Gandarilla, en el municipio de San Vicente de la Barquera, y poco después fue atrayendo de forma gradual a amigos que acabarían constituyendo una suerte de esponjada y abierta tertulia de exterior, montaña y excursiones a la playa (en la playa de Gerra, en San Vicente, pidió Pradera que se enterrasen sus cenizas). Dos años después llegaron cerca de ahí el novelista y editor José María Guelbenzu y la también editora Ana Rosa Semprún, poco antes de acudir Joaquín Estefanía y su mujer Ana Cañil a pasar temporadas breves en la casa de Gandarilla. Cuajaría ahí la amistad que llegó hasta el final, y cuando Estefanía tuvo casa propia, Gandarilla siguió hospedando en los veranos a viejos y fieles amigos como Ramón Recalde y María Teresa Castells (protegidos también allí por sus guardaespaldas). Un poco más allá estaban la hermana de Natalia, Betina Rodríguez-Salmones, y Francisco Calvo Serraller, Miguel Ángel Aguilar y Juby Bustamante, y también otros veteranos de la zona, como Antonio López de Lamadrid y Beatriz de Moura, e incluso Francisco Rubio Llorente recaló allí. Semana a semana se añadían los amigos invitados a los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, desde intelectuales como Semprún, Carlos Castilla del Pino, Pepe Álvarez Junco, Santos Juliá o José María Ridaó hasta políticos más o menos en activo como Solchaga, Almunia o Maravall. Todos vivían lo suficientemente lejos y lo suficientemente cerca para estar cada uno en su casa y reunirse en la playa al mediodía o al atardecer en casa de alguno, sobre todo en casa de Natalia y Javier, que era verdaderamente la casa madre de este círculo concéntrico. El último verano, en 2011, recuerda Estefanía y recuerdo yo también, Javier era muy consciente de que muy probablemente no volvería ya allí.



Foto de amigos en Gandarilla (San Vicente de la Barquera). En primer término, N. Rodríguez-Salmones, J. Bustamante, Ramón Recalde, José María Guelbenzu y Joaquín Estefanía; detrás, Pradera, Ana Cañil, María Teresa Castells, Ana Rosa Semprún y M. Á. Aguilar (2010).

REGRESO AL CAMPO DE BATALLA

Aún el tono general respiraba con el velamen del éxito y el reconocimiento internacional inequívoco. El cambio de la vida pública parecía consolidado y el Estado empezaba a funcionar; el público apoyaba masivamente su nueva oferta de exposiciones y teatro, nuevos auditorios y programaciones a veces vacías de sentido, como las cajas que denunció Sánchez Ferlosio, y a veces perfectamente sensatas. El Premio Príncipe de Asturias había colocado en el centro de la imagen a tres escritores en la madurez de sus trayectorias, Ángel González, Carmen Martín Gaité y José Ángel Valente; el Premio Cervantes había reivindicado la resistencia veterana de Antonio Buero Vallejo, el legado del exilio en los nombres de María Zambrano y Francisco Ayala y la potencia de la literatura de América Latina con Adolfo Bioy Casares y Carlos Fuentes. El Premio Nacional de las Letras se había acordado de un hiperminoritario escritor catalán, Josep Vicenç Foix, y tampoco olvidó la tenacidad de Joan Coromines, del mismo modo que auxilió a Rosa Chacel y Gabriel Celaya. Un digno Estado cultural parecía ya cosa factible tras diez años de poder, aunque los espectadores preferían llorar y reír a mandíbula batiente con la policromía estilizada y gamberra de *Mujeres al borde un ataque de nervios*, de Pedro Almodóvar, mientras el nuevo pop español se había hecho invasivo, descreído, irreverente y provocador. El blanco y negro del franquismo claustral ha desaparecido del mapa abatido a golpe de modernidad compulsiva e inexperta, acelerones finales de la movida y una sensación de cambio de época irrefutable.

Pero el desgaste del poder político asociado a esa transformación va a llegar enseguida, y más allá del aviso o la alarma que contenía la huelga del 14 de diciembre de 1988. Apenas dos meses después de la victoria electoral tranquilizadora de 1989 se difunden sospechas inquietantes sobre los abusos del hermano del vicepresidente Alfonso Guerra. Dejan de percibirse como anecdótico picaresco o apicarado algunas prácticas socialistas: el ejercicio del poder se ha subido a la cabeza de numerosos cargos, el dispendio de dinero público es casi ofensivo, la invitación a un enriquecimiento personal se justifica por siglos de humillación histórica, y un tácito consentimiento a la revancha social parece cundir entre demasiados cuadros de un socialismo que gobierna hegemónicamente en las distintas escalas de la Administración, municipal, autonómica y central.

El campo de batalla está infestado de minas y algunas especialmente dañinas: irán explotando bajo los pies de los socialistas tras su tercera ajustadísima mayoría absoluta de 1989, pero ya con una nueva derecha mediática y política dispuesta a la batalla sin tregua por el poder. La sucesión de escándalos políticos y financieros que habrá de vivir el presidente González desde entonces llegó a descolocarlo, noqueado por una realidad insospechada y a la vez incapaz de determinar la gravedad de los daños y sus efectos colaterales. Las expectativas eufóricas para un 1992 *mitológico* podían diluir en la pasajera miseria rutinaria los problemas de fondo, pero pronto cualquier pretexto se antojaría óptimo para descalificar al poder socialista: bien porque Felipe González encarna para algunos un populismo idéntico al de Omar Torrijos, bien porque su esposa Carmen Romero presentaba su candidatura por Cádiz para las elecciones de octubre de 1989. Contra ella se desataron «las ilimitadas reservas para la injuria de las zonas más amarillentas o parduzcas de la vida política española», escribe Pradera en septiembre de 1989, cada vez más soliviantado por las nuevas exigencias democráticas de quienes habían sido maniobreros mediáticos del antiguo régimen, hoy súbitamente instalados en las más altas cotas de ejemplaridad ajena. No seguían siendo más que «gracias chocarreras de los comentaristas de la caverna»:

empezaban ahora las andanadas de Pradera contra las subsistencias correosas del veterofalangismo converso en la prensa democrática y en particular las páginas del *Abc* o las rediseñadas de Pedro J. Ramírez en *El Mundo*, además del satélite moscardón de «la radio de los Obispos», como rebautizó Pradera a la COPE cuando ahí concelebraba Jiménez Losantos.

La disparatada analogía con Torrijos no se la inventaba Pradera. Era una observación tomada de *La ambición del César*, escrito por dos periodistas de *Diario 16*, su director, José Luis Gutiérrez, y el sociólogo Amando de Miguel. El primero había sido amigo de Felipe González, como lo había sido la mitad del periodismo de la Transición, y el segundo actuaba entonces como defensor del lector del periódico. Su diagnóstico apocalíptico y los dramáticos llamamientos contra la «apisonadora» socialista sintonizaban ya con un frente mediático y político renovado. Tanto la fundación en 1989 del diario *El Mundo*, dirigido por Pedro J. Ramírez, como la deriva dura de *Diario 16* con Gutiérrez y la conversión en diario el mismo año del semanario *El Independiente* (fundado en 1987) constituyen primeros indicadores sobre la ofensiva que los socialistas van a tener que encajar en el futuro como partido de gobierno progresivamente cuestionado, no solo desde la derecha sino desde buena parte de su mismo electorado. Empieza a crecer la desconfianza en torno a la capacidad de control de los socialistas sobre sus propios poderes y Felipe González acentúa su temprana propensión al retiro monclovita.

Para Pradera, sin embargo, el interrogante real tenía un calado histórico y enigmático: consistía en comprender, «sin descalificaciones injuriosas» ni «simplificaciones reduccionistas», la verdadera revolución vivida en muy pocos años, con «el fulgurante ascenso del PSOE, los cambios programáticos e ideológicos» y las «transformaciones que el ejercicio del poder» ha producido en los socialistas. Pradera empieza a apilar en su despacho de la tercera planta del periódico carpetas de colores y recortes de papeles que expliquen tanto la transformación del país como la mutación de sus protagonistas. En buena medida empieza a barruntar la respuesta del médico al paciente de un antológico chiste de Forges de 1997:

—No estuve en París en el 68 ni con los Beatles en las Ventas; nunca he llevado barba, ni trenka; no tengo ni adosado ni BMW; no entiendo de vinos ni de cocina; tengo dos hijos y llevo 25 años casado; no juego ni al golf ni al tenis; leo 2 libros a la semana y mi perro es un chucho que recogimos en la calle. ¿Qué tengo, doctor?

—Razón.

No retrata a Pradera por poco, pero sobre esta mutación iba a reflexionar con una parecida combinación de melancolía y herida emocional en los próximos años. Demasiadas de sus columnas y artículos habían sembrado desde muy temprano el mapa de aprensiones políticas y prevenciones prácticas dirigidas tanto al partido socialista como a su secretario general y presidente del Gobierno. Demasiados de sus artículos podrían cargarle de razón (contra la sabia prevención de Sánchez Ferlosio) y demasiadas de las prácticas socialistas asociaban su ejercicio del poder con quiebras democráticas indeseables. Ante el nuevo Gobierno que ha de salir de las elecciones de 1989 se pregunta con cautela si el cierre de persianas y pantallas del 14-D «abrió una época o cerró más bien el período de grandes expectativas incoado con la muerte de Franco».

Y sospecha sin duda lo segundo, sin que puedan corregir el diagnóstico las prácticas disciplinarias de partido ni parezca precisamente ejemplar el «secuestro» de las encuestas del CIS por parte del Gobierno. Es un «exorbitante privilegio» que justifica la virulencia crítica de los partidos contra la «patrimonialización electoralista de las instituciones estatales». Pero las lecciones parecen llegar demasiado lentas y a diciembre de 1989 el nuevo Gobierno de González

no pasaba de ser, pese a las sacudidas recientes, más que una «réplica clónica» del que había nacido en julio de 1988, o «tan nuevo como los capítulos del *Quijote* manuscrito por el erudito Pierre Menard en la fantasía de Borges»: decepcionante y apenas esperanzador, aunque detecte «resquicios de esperanza de una concertación social efectiva». Siguen en el Gobierno algunas amistades como Solchaga, Almunia, Aranzadi, Semprún o Múgica. El clima social es otro tras el choque entre «los conversos al mercado», es decir, los socialistas en el Gobierno, y la «cólera de los fieles a la ortodoxia estatalista», con Solchaga como protagonista del cambio desde la inflexibilidad antigua a la voluntad negociadora actual.

Todo iba a cambiar apenas dos meses después de las elecciones, en enero de 1990, cuando los medios empezaron a difundir en público lo que algunas redacciones de periódico habían mantenido en la nevera. A Pradera se le encendieron todas las alarmas porque en esa desatada tormenta en torno a Juan Guerra «las nueces están a la altura del ruido». Los asuntos del hermano del vicepresidente podían converger en un ataque múltiple y a la vez debilitar a un Gobierno todavía preferible a cualquier alternativa: su ejecutoria entera podría verse comprometida y altamente expuesta si aquel asunto no encontraba una vía rápida de explicación o una solución fulminante.

Pero se mezclaban ahí dos batallas: una implicaba la enemistad de Pradera por los modos guerristas de control del partido y otra implicaba la línea ideológica de un nuevo Gobierno socialista en el que figuraba ya bien delineado un frente de oposición o de disidencia guerrista de *línea bujarinista*: la expresión pertenecía a Semprún y la usaba Pradera para identificar a un grupo de afectos súbitos, creados en torno a la mesa del consejo de ministros desde julio de 1988, y que agrupaba a Semprún, Solchaga y Aranzadi, incluido otro referente incuestionable para Pradera, Luis Ángel Rojo, por entonces ya subgobernador del Banco de España. Pradera había empezado su colaboración sobre libros en *El País*, en junio de 1976, con el largo artículo que defendía como lección de futuro la estrategia del reformismo *bujarinista* como «una vía gradualista y pacífica para la construcción del socialismo» y había sido Semprún quien había defendido desde París en 1965 su viabilidad frente a la lectura revolucionaria del marxismo: las acusaciones de *derechismo* serían en todos los casos inevitables frente a quienes defendiesen un modelo expansivo pero insostenible (como promovía por entonces el sector guerrista). De ahí la designación despectiva del *comando (o sindicato) del gasto* que prodigó Pradera contra algunos de los miembros del Gobierno como Josep Borrell o Solana frente a las contenciones de Solchaga cuando las sombras de la crisis empezasen a cebarse en las efusiones de 1992.

González iba a tardar un año en cesar a su vicepresidente, y cuando lo cesase seguiría sin haber ninguna explicación convincente sobre las razones para mantener una situación desgastante, indefendible en términos políticos y bajo un acoso mediático que solo anunciaba futuras batallas. En el fondo, para Pradera ese caso valía como munición contra el mando prepotente, demagógico y penitencial que Guerra había impuesto en el partido. Por eso convenía corregir la «maniquea pretensión» que alentó Alfonso Guerra al identificar de forma «cuasi-ontológica» a la derecha con la corrupción y a la «izquierda con la incorruptibilidad». Podía estar acabándose el «monopolio del altruismo moral» de quienes habían sido «implacables fiscales de UCD hasta 1982», cuando estaban en la oposición, mientras hoy eran acusados de corrupción estructural con indicios crecientemente creíbles: «Los inquisidores pasan a convertirse en reos predilectos de sus antiguas víctimas.»

Si aquella operación de acoso y derribo contra Suárez había sido nefasta para la salud democrática, esta iba a serlo también más allá del beneficiario coyuntural de la operación: era una

irresponsabilidad política, y así lo había editorializado entonces el periódico. Tras el rearme de la derecha con la refundación de Alianza Popular en el Partido Popular y José María Aznar como candidato a la presidencia en 1989, las cosas podrían salirle mejor y borrar parte del lastre de su pasado franquista. Al menos en abril de 1990, cuando Aznar accede a la presidencia del PP, el Pradera más burlón y todavía benigno le ha visto protagonizar «una enternecedora parodia chaplinesca en un pleno parlamentario» que sirve para recordar al nuevo líder tanto su «apatía cívica» como la «pasividad guardada durante el franquismo». Frente a la sobrecarga de galones franquistas de tantos líderes de la derecha, «el adanismo político de Aznar ofrece al menos las garantías de inocencia propias de los habitantes del limbo». Para entonces, Pradera había despedido ya en público a uno de sus peores demonios, Manuel Fraga Iribarne, repasando una biografía que incluía «una ininterrumpida sucesión de rectificaciones y volteretas, guiadas por un oportunismo tan infaliblemente orientado hacia el poder como torpemente ejecutado».

La insensatez ostentosa del nuevo poder socialista y el olvido de la austeridad como ley moral estaban hundiendo su crédito sin que González encontrase los resortes de corrección o redefinición del rumbo de sus huestes en el partido y fuera del partido. El mismo Maravall creyó entonces que el caso Juan Guerra «poco a poco fue revelando la existencia de una compleja red de financiación ilegal» que acabaría cristalizando en el caso Filesa. La lista de culpas socialistas ha instalado en la opinión pública un «cambio de humor colectivo» hacia ellos, dice Pradera. Ya no convence a nadie la antigua «necesidad de improvisar miles de cargos públicos (municipales, autonómicos, estatales) en poco tiempo» porque es entera responsabilidad del ya veterano poder «la patrimonialización de la función pública por el denominado sector *guerrista*, la arrogancia de las mayorías absolutas, el verticalismo propiciado por las listas cerradas y los contradictorios mensajes lanzados desde el Gobierno acerca de las bondades del enriquecimiento personal y de los grandes y rápidos negocios».

EL PRINCIPIO DE LA GANGRENA

Había munición para empezar una «nueva *causa general* contra el PSOE», como escribe Pradera recordando las campañas del miedo de 1982, y seguían aumentando las ocasiones para engrosar carpetas y carpetas de recortes que un día avalarían lo que escribe tan temprano como en el mismo estallido del caso Juan Guerra, a 21 de enero de 1990: «El dinero de la corrupción tiene siempre el mismo color, con independencia de la ideología invocada para ocultar las culpas y las trapacerías.» Las explicaciones de Guerra en el Parlamento poco después dejaron ya para siempre un «aire sucio, triste y humillante» en una sesión parlamentaria en la que «rozó la mala fe» al establecer una novedosa y alarmante doctrina: confundir las responsabilidades penales del caso con las responsabilidades políticas. La obstinación de Guerra por presentarse «como el único vecino justo de Sodoma y Gomorra» dejaba intacto el hecho de que «la corrupción encuentre siempre hueco en las bodas entre el puritanismo doctrinario y la demagogia populista». Por eso «después de haber abusado tanto de la moralina como condimento ideológico sería abusivo que los socialistas recetasen ahora a sus compatriotas el purgante de un realismo sucio». En lugar de representar «el gallardo papel del héroe en *Solo ante el peligro*», Guerra buscó «el cobijo de las multitudes al embanderarse como símbolo moral del partido socialista, de los humildes y de la estabilidad democrática». Prefirió temerariamente alimentar su papel de víctima mientras sus adversarios celebraban la «perspectiva de verle chamuscarse a fuego lento en la parrilla».

Parecía que nadie estuviese en disposición de prever «los efectos perversos que puede producir en el futuro esta solidaridad de las trincheras sobre los comportamientos de los gestores socialistas de bienes públicos». Cuando todavía se «está a tiempo de impedir en España las degeneraciones a la italiana del régimen democrático», los socialistas han perdido la oportunidad de abrir con valentía el debate sobre la corrupción, quizá porque también «parecen haber perdido la sensibilidad para escuchar los mensajes sociales y hasta el sentido común». El hecho de que el PP estuviese informado desde meses atrás de estas irregularidades solo revelaba que «la financiación irregular de los partidos» se vehicula «a través de comisiones ilegales pagadas por la adopción de decisiones administrativas sobre licencias y concesiones»: esa es «la cabeza de la solitaria de la corrupción». Afecta «en mayor o menor medida a nuestras principales formaciones parlamentarias», como lleva escribiendo Pradera desde hace muchos años y como seguirá haciendo hasta culminar en 1994-1995 la redacción de un libro que ceba la misma realidad día a día, aunque será póstumo, *Corrupción y política*.

Se había puesto en marcha la estrategia corrosiva no solo de los socialistas sino de la misma democracia al esgrimir la presunción de inocencia para lo que de hecho eran, sobre todo, responsabilidades políticas que pudieran ser un día, o no, responsabilidades penales. La equiparación entre ambas que había utilizado Alfonso Guerra en su defensa funcionaría desde entonces como argumento legitimador de las trapacerías políticas de cualquier color hasta que no hubiese definición jurídica y penal. En ningún lugar fue tan contundente Pradera como en una visión retrospectiva del 17 de marzo de 1999 para puntualizar que ahí, en febrero de 1990, «los socialistas empezaron a labrarse la ruina», cuando Guerra obvió sus responsabilidades y optó por «embestir zafiamente contra la oposición» mientras era jaleado y animado a mantener que solo habría caso cuando hubiese sentencia. Esa estrategia involucraba necesariamente a todo el partido y contagiaba de la misma sospecha a quienes no habían incurrido en ninguna de esas prácticas, las ya afloradas y las que estaban en marcha y se conocerían pronto como caso Filesa. En el origen de la patología Pradera creyó siempre que estuvo esa intervención de Guerra, pero también la incapacidad de González para cortar de forma rápida y audaz el daño que iba a producir no solo en el partido sino en la misma credibilidad democrática.

Nada irá a mejor porque «la gangrena ha empezado a realizar su trabajo», en abril de 1990, y nadie puede predecir «hasta dónde llegarán sus efectos necrosadores». La persistencia de la «compota populista y demagógica del guerrismo, ajena a las mejores tradiciones del socialismo», será incapaz de hacer olvidar a muchos socialistas el elemental mandamiento que prohíbe enriquecerse utilizando la función pública. No había solo una obstinación higiénica detrás de ese acoso contra Guerra ni era solo perfección democrática lo que buscaban los empujones de Pradera al presidente para que lo cesase. Había también una lucha entablada a cara descubierta en el interior de un PSOE que seguía gobernado en régimen de monogamia, monopolio o monocultivo por Alfonso Guerra.

En la reunión de la Ejecutiva Federal del 7 de julio de 1990 Antonio García-Santesmases había reprobado la ausencia de discusión en el partido, Manuel de la Rocha aludió a las «actitudes morales de los responsables públicos» e Ignacio Sotelo también señaló la diferencia entre la responsabilidad política y la responsabilidad penal, y afirmó que solo la llegada a los tribunales debería ser «suficiente para dimitir», según las notas que tomó el secretario general del partido, colgadas hoy en la web de su fundación. Pero numerosos nombres relevantes empezarían también a expresar discrepancias en público. Jorge Semprún había sido muy explícito en una entrevista en el verano de 1990 y al menos José María Maravall alertaba por entonces a Felipe González en

carta privada contra «las tendencias sectarias y los brotes paranoicos referidos a supuestos “enemigos interiores”». En realidad, decía Maravall, «ven enemigos por todas partes, generalizan imprecisas e infames sospechas sobre supuestos cómplices», incluidos aquellos a quienes pronto se les llamará *renovadores de la nada*, tal como dijo Txiki Benegas meses después. No es extraño así que tanto Guerra como José María Cuevas, el líder de la CEOE «trabucaire e intolerante», se equiparen hoy, según Pradera, en el «lenguaje incivil para intimidar, herir y descalificar al adversario». Encarnan ambos modélicos usos del «mal estilo, la sal gorda y la violencia verbal».

El caso Guerra iba a servir de parteaguas público para dos actitudes en un partido escindido entre renovadores y el núcleo duro de un aparato en torno a Guerra con Felipe González como último recurso, casi siempre ausente o inhibido. El reparto histórico de papeles –González en el Gobierno, Guerra en el partido– mostraba ahora secuelas indeseables. Pradera encuentra en aquel caso la palanca para emprender una campaña de largo aliento justificada por las firmes sospechas de financiación ilegal. Serán el definitivo pretexto para el combate ideológico de fondo contra el guerrismo populista.

En «la borrasca interminable» del caso Guerra que sigue en octubre de 1990, Pradera se alinea con quienes no son ya solo altos cargos socialistas sino amigos personales, como Maravall y Almunia o el propio Semprún, que hizo tan buenas migas con Solchaga como malas fueron las relaciones de todos con Guerra. Esos amigos han hecho declaraciones duras contra «la esclerosis del aparato socialista», o han librado batallas «contra el riesgo de patrimonialización del PSOE por sus dirigentes», cuenta Pradera. El congreso del PSOE de septiembre de 1990 ha permitido escuchar «la valiente toma de postura de Solana, Almunia, Barrionuevo, Maravall y Borrell en favor de la apertura y la tolerancia» a la disidencia dentro del partido. A Pradera le parece difícil «mantener por más tiempo la artificiosa simulación del PSOE como bloque monolítico ontológicamente inmune a las divergencias», mientras emite y recibe mensajes de varios relevantes socialistas directamente afectados por el monocultivo guerrista. De esa «paz octaviana» solo puede derivarse el aumento del «autoritarismo interno» y la «patrimonialización» de las siglas del partido por «reducidos grupos de militantes en detrimento» de los electores, cada día menos atraídos por un partido ensimismado y mimetizado con la Administración del Estado.

Hace tiempo que la financiación ilegal ha dejado de ser el *secreto de Polichinela* de la Transición mientras día a día los partidos siguen «más cerca de las sociedades secretas que de las instituciones públicas». En su interior no rigen las mismas normas que rigen en el exterior, incluido el miedo a la discrepancia y el rechazo que acaba de expresar Solchaga al «monolitismo» de la ejecutiva del PSOE. Las investigaciones judiciales en marcha ponen al descubierto «operaciones delictivas de cohecho que fijan un elevado precio (en forma de comisiones clandestinas) para la adopción de determinadas decisiones (licencias, recalificaciones o subvenciones) por las Administraciones Públicas». Ya no hay razón para disimular que «la corrupción personal es una consecuencia de la corrupción institucional» y que esta no anda lejos de las «extorsiones mafiosas» cuando fuerza el «cobro de comisiones ilegales» destinadas a «las insaciables burocracias partidistas» para cubrir los «sueldos de los dirigentes, nóminas, alquileres de locales, viajes y gastos de representación, etcétera».

Pero tampoco Felipe González parecía libre del contagio, o al menos eso cree Pradera a la vista de su empeño por «imponer al resto de los mortales su percepción de la realidad como la única perspectiva posible para las personas honradas». Este argumento valía hoy para la decisión de sumarse a la Guerra del Golfo en septiembre de 1990, pero había valido también para la posición socialista contra los sindicatos en las vísperas del 14-D. Lo grave es el intento de

teorizar la distancia entre la Moncloa y la calle aduciendo un «desafortunado juego de palabras» en torno a la distancia entre la opinión pública y la opinión publicada: pretende así «restar importancia» a las críticas con el recurso a un «chiste malo –como suele ocurrir con todas las paronomasias disfrazado de distinción analítica». El presidente ha acentuado sus prácticas herméticas de comunicación y hoy es ya una auténtica heroicidad traducir sus mensajes cifrados, dada su acentuada «tendencia a expresarse mediante acertijos o charadas y a utilizar un galimatías comunicativo» que está «llegando últimamente a extremos enfermizos» (por donde llegaba una nueva lanzada contra los errores de Rosa Conde, portavoz del Gobierno).

Incluso en los «ratos de peor humor», y uno acaba de llegarle a Pradera, los críticos «más duros del gobierno podrían aventurar» que en ocho años los socialistas «han olvidado todo y no han aprendido nada en lo que se refiere a los delicados equilibrios entre la libertad y la seguridad»: está en marcha la ley de seguridad ciudadana, popularmente conocida como la ley de la *patada en la puerta* del ministro José Luis Corcuera, y que Pradera califica por entonces de «mamarracho legal».

LA MÁQUINA INFERNAL

Son ya disciplinadas brigadas de carcoma las que debilitan las instituciones democráticas y son muchos los frentes que bajo el socialismo en el poder infligen una y otra vez su mordisco letal. La autojustificación exculpatoria y la indulgencia cínica pueden ser los motores de una erosión galopante del marco global y no solo del partido socialista. Los partidos funcionan como «réplicas de sectas religiosas o de salas de banderas», sin respeto a las libertades democráticas en el interior en contraste «demasiado estridente» con el exterior.

Estas palabras de Pradera no tenían exactamente el tono celebratorio que cabría esperar de su extensa contribución al número 5.000 de *El País* el 28 de diciembre de 1990. Con el título de «Máquinas y democracia», es el antecedente condensado de un clásico de la crítica política, «La maquinaria de la democracia», publicado en versión más sistemática y extensa en *Claves de Razón Práctica* pocos años después, en 1995. Para entonces la decepción con los gobiernos socialistas y la frustración personal ante la impotencia del presidente González han hecho mella en Pradera. El subtítulo de 1990 acotaba tres problemas de la política española que requerían alguna forma de solución sin retórica (y sin la aborrecida consigna usual de la *imaginación* o la *reinención*): el «abstencionismo» ciudadano, los «brotes de corrupción» y la conversión de los partidos en «máquinas autoritarias de poder», o «partitocracia». El enemigo empezaba a estar visiblemente instalado en casa, y con abuso manifiesto de la confianza, la hospitalidad electoral y hasta la buena fe ciudadana.

Cuando sigue pudriéndose a finales de 1990 el asunto de «Alfonso Guerra y su extraña familia», que es ya un «auténtico cuello de botella de una situación políticamente obturada» que el presidente «no logra desatascar», Pradera se ha propuesto «la adivinación de las tendencias capaces de imponer su dominio a medio o largo plazo» en nuestro sistema democrático. Ninguno de los tres bichos tóxicos va a hacer otra cosa que crecer hasta nuestros días. Avisado de la esterilidad de casi todos los pronósticos de politólogos y especies semejantes, se propone solo indicar «metas programáticas para el afianzamiento del régimen democrático, susceptibles de realización gradual y relativamente independientes del contexto europeo y mundial». Los socialistas no han corregido la tradicional debilidad del asociacionismo español y, de hecho, el abstencionismo de la ciudadanía de la vida política sigue como siempre, o incluso peor. La actual

«desertización participativa» aleja a la sociedad civil de los partidos bien por indiferencia, bien por «rechazo de los humillantes ritos iniciáticos impuestos para la militancia».

La demoledora radiografía reprueba la asimilación que los socialistas han propiciado entre Administración y partido con un reguero de claudicaciones y ventajismos que subtitula delatoramente como «un mal viaje»: esa expresión estaba entonces estrechamente asociada a la peor experiencia con estupefacientes y alucinógenos. Nada logra romper el «amurallamiento de la clase política dentro del castillo encantado del Estado», porque en él encuentra una fértil «oferta de privilegios» con una grave consecuencia histórica que ahonda la «brecha heredada de la dictadura» de «costumbres endogámicas». La política se limita a no ser más que una «fuente de ingresos, un símbolo de *status* y una cura para las neurosis», muy olvidada la presumible vocación de servicio originaria. La corrupción detectada se cultiva de forma óptima en «ese asfixiante clima cerrado de invernadero», del mismo modo que la financiación ilegal —«un secreto a voces amparado por mil complicidades»— favorece las prácticas de «desvergonzados intermediarios» que se lucran con «comisiones pagadas por debajo de la mesa a las tesorerías de los partidos» a cambio de licencias, recalificaciones, subvenciones o contratos de la Administración.

El *mal viaje* había empezado «con el abuso de los bienes públicos, el nepotismo clientelista, la desviada aplicación de los gastos de representación y el despilfarro de recursos presupuestarios». La abusiva «aplicación de la receta» de las élites políticas españolas explica «los procedimientos cuasimilitares» de los dirigentes de los partidos «para tener bajo control a sus organizaciones». En la puerta del partido saben que dejarán los derechos de los que disfrutaban como «simples ciudadanos», y deberán adquirir siniestros «hábitos cortesanos» teóricamente desterrados del sistema democrático, como «el culto al jefe, la adulación, el doble lenguaje, la docilidad, la hipocresía y el temor» a las burocracias partidistas.

El «Estado de partidos» fue la expresión que Pradera tomó del último libro de Manuel García-Pelayo para denominar esa partitocracia con cúpulas copadas «por la fracción vencedora». En ellas, los «derrotados en las luchas internas carecen de derechos y los dirigentes —respaldados por votaciones del 100%— eligen previamente a los delegados encargados luego de aclamarles en los congresos», en alarmante similitud con el funcionamiento de los últimos congresos del PSOE (o al menos desde el congreso fundacional de 1979). Dentro de casa, en el interior del partido, los militantes «ven recortada su libertad de expresión, pueden ser expulsados si critican en público a sus jefes y están inermes frente a unos comités disciplinarios que actúan como juez y parte de los pleitos intrapartidistas».

Las desventuras no terminan ahí, porque el último auxilio para un sistema degradado consiste en la «multimillonaria financiación legal» que obtienen los partidos, ya sin necesidad de cuotas de afiliados ni de su colaboración voluntaria porque sus reglamentos someten a «disciplina cuartelana, bajo el mando de un sargento portavoz», la actividad parlamentaria de diputados y senadores. Sin derrota electoral de por medio, y el PSOE hace tiempo que no pierde, aunque no lo mencione, «la oligarquía partidista» crece solo «por cooptación y se autoperpetúa». Está describiendo, de acuerdo con una de las referencias clásicas de Pradera, la «ley de hierro de la oligarquía» que examinó a principios de siglo Robert Michels en una obra que Pradera usará muchas veces, *Los partidos políticos*: las principales organizaciones políticas de una democracia no son democráticas. Quizá por eso reserva Pradera una de sus frases preferidas para respaldar el mandato constitucional para que los partidos sean también democráticos aunque esté en su naturaleza la invisible y contraria ley de hierro. Como había dicho Scott Fitzgerald, «la gente

inteligente puede mantener en vilo dos ideas opuestas y seguir a la vez pensando», en frase que también citaba a menudo Jorge Semprún. La necesidad inherente a la democracia de los partidos «no solo no impide sino que exige la transparencia de sus finanzas, la renovación de sus dirigentes, la protección de las minorías y el respeto de los derechos y libertades de los militantes». La democracia no puede estar sustentada en un estercolero moral donde el militante renuncia a su condición de ciudadanía.

Detrás de este durísimo ataque había también el más consistente empujón para que Felipe González cesase a Alfonso Guerra, como iba a suceder apenas una semana más tarde de publicarse ese artículo, a principios de enero de 1991. Mientras redacta su memorando diabólico sobre las patologías de la partitocracia, Pradera también identifica rasgos más benévolos en torno a una «nueva sensibilidad de los socialistas para cambiar de rumbo y escuchar los mensajes de la opinión pública, cuya separación de la opinión publicada no resulta tan enorme como Felipe González supone». Por entonces es posible que la relación personal con el presidente se haya resentido ya, pero Pradera sabe probablemente, por Solchaga, por Almunia, por Solana o por el mismo Semprún, que González piensa no en remodelar el Gobierno sino en un cambio de consejo de ministros que reanime la acción política y se saque de encima el letargo y hasta la abulia ante tantos desencantos.

Llevaba en realidad desde agosto de 1990 en «el filo de la navaja», según Pradera, y tras el cese de Guerra en la vicepresidencia, el cambio de Gobierno se fragua con decepciones y tensiones durante el fin de semana del 8 al 10 de marzo de 1991. Narcís Serra sustituye a Guerra en la vicepresidencia y Fernández Ordóñez continúa en Exteriores. Semprún seguía siendo íntimo amigo y su posición enfática y favorable a la Guerra del Golfo, muy impopular entre la izquierda, quizá pudiera garantizar su continuidad en Cultura pero no será así. Tampoco José María Maravall accede a regresar al Gobierno. Se lo había adelantado ya a Pradera en su viaje a Brasil (*ni muerto volverá*) y se lo repitió una y otra vez esa noche porque una y otra vez Pradera le pidió que aceptase la cartera. Se lo pedían también otros excluidos, como Almunia y Barrionuevo, o quienes continuaban, como Solchaga, Solana, Aranzadi. Se incorporaron Josep Borrell o Tomás de la Quadra-Salcedo, pero el relevo más doloroso no debió incomodar particularmente a Pradera: se había distanciado ya de Enrique Múgica y más de una y de dos veces había escrito contra su gestión en Justicia.

Mandaron sin duda los equilibrios internos y Semprún abandonaba el Ministerio de Cultura, probablemente sin esperarlo, o habiendo obviado el cese tácito que llevaba una carta de Felipe González a raíz de sus declaraciones del verano anterior. Había nombrado apenas un mes antes a Santos Juliá como nuevo director general del Libro, sin que el brillante historiador y autor de Siglo XXI y Alianza quisiera continuar en ese puesto tras el cese del ministro. En mi sospecha, que no en la de Juliá, pudo ser Pradera el inductor del nombramiento, tanto si Semprún confiaba en seguir como ministro gracias a los servicios prestados en la campaña de la Guerra del Golfo, como si ya estaba descartado para apaciguar las tensiones creadas en el partido. Nadie ignoraba en público las críticas de Semprún y Solchaga, en buena sintonía, contra el guerrismo y el aparato del PSOE, pero además Semprún había apostado en un movido debate televisivo y con un acre enfrentamiento con Vázquez Montalbán en favor de una guerra «justificada y necesaria» (mientras Vázquez Montalbán creía que era «injustificada por innecesaria»). Aunque no es fácil de probar, Semprún me dijo una vez que había pactado su dimisión como ministro de Cultura con Felipe González tras la carta del verano de 1990. Pero es posible también que no quisiera descifrar el mensaje de cese que llevaba la carta del presidente y que la Guerra del Golfo difirió seis meses.

Pero ¿pudo llegar a creer Semprún que su beligerante defensa de la guerra reconquistaba posiciones en los cálculos del presidente? De hecho, Pradera insinúa algo parecido en un análisis cargado de premoniciones funestas ante el nuevo Gobierno de marzo de 1991. Las innegables «habilidades de trapecio» del presidente permitían descartar los rumores sobre su retirada —«parecen más una sincera ensoñación que un plan operativo racional»—, pero además abrían esperanzas «para rectificar una línea política sumida en las perplejidades y las indecisiones» desde el estallido del caso Guerra un año y pico atrás. Sin embargo, el *lanzamiento* de dos ministros como Semprún y Almunia «por sus valientes tomas de posición contra el sectarismo guerrista» podrían llevar dentro alguna alarma susceptible de complicarle la vida a Felipe, pese a sus *habilidades de trapecio*. Podrían no servirle de nada si el guerrismo soliviantado y no resarcido de forma suficiente con los dos *lanzamientos* decidiese pasar a la acción. Entonces «el presidente y sus ministros tendrían que irse abrochando los cinturones para una agitada travesía».

La rivalidad abierta entre Semprún y Guerra venía de lejos, fue sangrienta y tuvo secuelas literarias que Pradera conoció verbalmente mucho antes de que Semprún publicase en 1993 *Federico Sánchez se despide de ustedes*. La colisión entre ambos empezó recién constituido el Gobierno de julio de 1988 y no podía ser de otro modo ante los modos redichos y pseudocultos de un napoleón de partido y el bagaje biográfico e intelectual de un escritor europeo con vasta experiencia literaria y política. Jorge Semprún había sido uno de los objetivos directos tanto del aparato socialista como de la vieja y la nueva derecha. El acoso emperrado contra él y su adhesión a la Guerra del Golfo despertó al polemista homicida que había en Pradera para identificar «las flechas críticas disparadas» como productos de «la alegre muchachada procedente de las oficinas de censura, los departamentos de propaganda del Movimiento, las nóminas de confidentes policiales y el sindicalismo vertical». Es verdad que en este 12 de marzo de 1991 Semprún ya no era el que había sido, pero «frente a las injurias de los franquistas reciclados» seguía siendo «un superviviente con memoria de Buchenwald» y «un antiguo dirigente de la oposición a una dictadura con la que coexistieron tan pacífica como lucrativamente tantos farsantes que juran ahora en nombre de la libertad».

Con el libro terminado, Semprún no dudó en repetir la dedicatoria a Pradera, pero algo más expresiva de lo que fue la lacónica y precavida de 1977 al frente de su problemática autobiografía: «À Javier Pradera, comme toujours, pour toujours.» El segundo destinatario del libro no era ya un torero exfalangista y comunista como Domingo Dominguín, sino un reciente amigo común y próspero empresario, Plácido Arango, «pour l'amitié nouvelle». Cuando a Semprún le concedieron tres años después el Premio de la Paz de los librereros alemanes, Pradera se apresuró a situarlo fuera de la esfera política provinciana para «rectificar una visión unidireccional», incluso contra su hermano Carlos, «tonto y envidioso». La existencia de Semprún ha «sido una legítima venganza contra la brutalidad totalitaria, una apasionada apuesta por la libertad y una prolongada respuesta a ese lejano descubrimiento hecho en un campo de concentración nazi». Es quizá en estas líneas de entonces, dictadas no por su muerte ni por la presión ajena sino por la pura admiración personal, donde Pradera señaló la lección del mejor Semprún al comprender «el mal moral como parte constitutiva de la condición humana, como consecuencia inevitable de su libertad y como demonio interior siempre dispuesto a romper las ataduras de la civilización para imponer la lógica de la destrucción y la muerte».

Para entonces el nuevo líder de Izquierda Unida, Julio Anguita, había interiorizado ya la pírrica pinza entre el PP de Aznar y su partido, adulado hasta el sonrojo por Pedro J. Ramírez desde *El Mundo*, a pesar de la endeblez de lo que Pradera llamaba alianza contra natura. A ojos de

Pradera, Anguita nunca llegaría mucho más allá de donde había llegado en diciembre de 1991, «esmerado recitador de obviedades y audaz teorizador de la nada». La izquierda cambiaba sus mimbres en la calle a fuerza de radicalidad con ese sacerdote de una nueva fe: de las dos orillas que dividían el mundo, según Anguita, él ocupaba la buena y el resto ocupaba la mala, y entre ese resto estaba el partido socialista al completo empezando por el capitán del barco. La vida pública estuvo entonces sometida al tácito acuerdo entre la derecha aspirante a gobernar con Aznar y el refundador de la izquierda contra un poder socialista ya grogui: la ensoberbecida e inmadura egolatría de Anguita le hizo creer lo que nadie podía creerse de veras y mantuvo esa pinza asfixiante hasta el final, convencido de erosionar al PSOE y también convencido de las futuras deferencias que sus esfuerzos le reportarían.

En Anguita, Pradera identificaba los residuos de un izquierdismo retórico y de buena conciencia crónica donde el bien no era el mal y el mal no era el bien. Aquella Guerra del Golfo había sido el estimulante inicial, aunque era «a la vez inevitable e indeseada», según Pradera. Pero desató la mezcla de ilusionismo bondadoso y narcisismo patriótico de la izquierda, sin advertir que fundamentalmente ponía a prueba por primera vez en el plano internacional el nuevo papel de la España democrática. Afloraban todavía entre los españoles las secuelas de su tradicional aislamiento exterior, con una ciudadanía incapacitada aún «para aceptar su condición irremediable como parte de una sociedad mundial e interdependiente». Con ese nuevo estatus llegaban derechos pero también deberes: no cabe «una ingenua megalomanía cargada de vanidad patriótica» (que presume decisivas posibilidades mediadoras para España) pero tampoco un «autismo neutralista de campanario que solo aspira a quedar al margen de los conflictos y a endosar a los vecinos la tarea de resolverlos y de pagar sus costes».

Esa guerra había activado la «vívida memoria de las movilizaciones contra la Guerra de Vietnam de los campus universitarios» y algunas otras más recientes, incluida «la impresión freudiana del *déjà vu*» en las protestas por el referéndum de la OTAN y la huelga del 14-D. En el fondo, sin embargo, latía también una mezcla de intolerancia física e irritación política contra el papel que Anguita había asumido como *edecán* de los intereses de la derecha, instrumentalmente adulado por ella y mesiánico redentor de las masas obreras. Dentro de todo, sin embargo, ese era un mal menor porque el peso de las culpas recaía aún en los socialistas. Su tono es tan bajo que Pradera vuelve a su vieja convicción sobre las condiciones de una democracia saludable frente a este «clima derrotista de aburrimiento, pasividad y desánimo». El alicaído nervio político conduce a una «vida vegetativa y monótona que fomenta el absentismo y el fraude en el parlamento». Los socialistas mantienen inexplicablemente una «imperturbabilidad» que parece ajena a las irregularidades y a las «exacciones corsarias» de los partidos, como si hubiese de ser tolerable «que una flotilla pirata» hubiese estado «abasteciendo durante los últimos años de forma clandestina y nocturna los arcones de unos partidos insaciables», escribe el 9 de junio de 1991.

Siente a la ejecutiva socialista íntimamente demolida por el cinismo y el más burdo pragmatismo. No dejaban de encarnar una variante del «aborrecible lema de que *resistir es vencer*», popularizado entonces con la decidida contribución de Camilo J. Cela. Su figura pública se había visto asediada por jóvenes cachorros de las letras como Julio Llamazares o Antonio Muñoz Molina, posiblemente con la activa complicidad de Pradera desde *El País*. No había sido nunca Cela personaje de especial valor para Pradera, pero cuenta Natalia, socarrona y segura, que un encuentro casual visitando la Expo de Sevilla en 1992 fue pretexto suficiente para parar en seco y encarar poco después una complicada operación de coronarias: la próxima vez estaría en condiciones de darle una buena hostia, sin miedo a un sobreesfuerzo físico o a padecer otra angina

de pecho como la que acababa de vivir. En todo caso, la «pétrea capacidad» socialista para negar «la evidencia o sostener que los burros vuelan» conduce indefectiblemente a la depauperación democrática para medirlos a todos por el mismo rasero: el fin secreto de una estrategia irracional está en que «el aburrimiento del público termine por enterrar» los escándalos.

Por estas fechas empezó la experiencia íntima que Felipe González confesaría años más tarde a María Antonia Iglesias al reconocer que la corrupción le «dejó paralizado, desconcertado» y sí, «reaccioné tarde, es cierto». Es verdad también que la hipótesis del fuego amigo que manejaba Pradera en público podía ser solo fruto del agravio o el despecho por los amigos *lanzados* del Gobierno. Pero no rebaja la dureza de sus sospechas cuando asocia la agitada travesía futura que espera a González con la conspiración fraterna alentada contra él. El «caricaturesco socialismo de Puerto Hurraco» fue invento de Pradera inducido por un salvaje asesinato en ese pueblo extremeño, el 26 de agosto de 1990, y designa una actitud incompatible «con cualquier política modernizadora». Parece ya flagrante que la hiperactividad del guerrismo y las «reyertas callejeras» que propicia conducen a la altura de abril de 1991 a la convicción de que «el liderazgo de Felipe González es el objetivo último de esos cañonazos». Guerra y el guerrismo trabajan con «vistas a la sucesión de Felipe González».

En el fondo, la batalla que había abierto el caso Guerra y su cese en la vicepresidencia del Gobierno ahora se resolvía con una agridulce victoria débil. González creía dormir tranquilo al compensar a los guerristas con la exclusión de dos renovadores, pero quizá el amor propio herido, el control del partido, la ambición personal y la misma prepotencia podían acabar activando el sabotaje de la candidatura de González a las siguientes elecciones. Guerra aparecía ahora como el «San Jorge protector de las esencias socialistas» cuando sus funciones consistían en «controlar al PSOE, recompensar a los leales, intimidar a los tibios y castigar a los adversarios». Puede que al PSOE le «haya llegado la hora de los demagogos» con autoprotectoras medidas de sus gobernantes «tan obscenas» que solo «suscitan tristeza, bochorno y vergüenza». Solo buscan proteger a Guerra de las pesquisas sobre su hermano y de las informaciones progresivamente alarmantes sobre ese «grueso cabo de la financiación ilegal del PSOE» que es Filesa, «tan elemental como el mecanismo de un chupete».

La pasividad de Felipe González sublevó a Pradera. Quizá el pacto tácito entre ambos empezaba a resquebrajarse por el lado más vulnerable y cada vez González iba siendo menos transigente ante las crecientes críticas de Pradera, en público y en privado, o Pradera dejaba de morderse una lengua que nunca se había mordido demasiado. Hoy las causas objetivas de la vergüenza pesaban más que cualquier forma de tacticismo ante operaciones que deslegitimaban al PSOE pero también a quienes les apoyaban críticamente: dejaban con el culo al aire a los medios afines y, en particular, dejaban al albur de la selva mediática a quienes habían respaldado con su firma a los socialistas y su honradez centenaria.

El desengaño o la impotencia llevaban a Pradera a confidencias desoladas. Los llamamientos a la renovación del presidente solo sonaban a «ensoñación voluntariosa sin consecuencias prácticas», mientras en el PSOE prevalecía el «encastillamiento» en el «sectarismo autoritario», el castigo a los insumisos, el «hermético cierre» frente a la sociedad en una disociación que está «alejándolo de los sectores sociales más dinámicos». Pradera reclama con la memoria activada un vendaval parecido al de los «aires renovadores» de 1974, porque a los socialistas casi «se diría que solo les importa ya asegurarse posiciones de poder sin reparar en los medios ni en el precio» en una «obscena muestra de cinismo político», en julio de 1991. Por eso a la vuelta de las vacaciones acusa el nuevo Gobierno el desvanecimiento de su aliento reformista y un

envejecimiento prematuro que ha llegado apenas seis meses después de nacer, en marzo de ese mismo año. Su obvia «disfuncionalidad estructural» además corre el riesgo de que gane el «incoado *sindicato del gasto*» contra la política «sostenida contra viento y marea» en los últimos diez años, y eso significa reprobador las políticas que promueven Solana o Borrell, frente a la disciplina que lidera Solchaga.

Pero había una lógica superior para esa campaña de Pradera, que no era solo coyuntural sino estructural, y no aspiraba a prevenir al PSOE de la codicia del poder sino a la misma democracia contra las lacras inscritas en su sistema vascular. Por eso quiso destinar a la distancia media de sus ensayos en *Claves* un segundo artículo analítico sobre las imperfecciones y carencias del sistema de partidos en España: que hoy el PSOE fuese el partido más visiblemente afectado no significaba que la patología no estuviese extendida en otros y, sobre todo, en el PP que acababa de refundarse con Aznar a la cabeza desde abril de 1990. Había sido candidato en las elecciones de 1989 pero su conquista del partido llegaba en plena tormenta por el caso Guerra y había actuado con reflejos más ágiles ante el caso Naseiro (todavía vivo hoy en los medios) con un fulminante cese del tesorero del partido frente al «agarrotamiento y obstruccionismo del PSOE» en el caso Guerra.

Lo que solo era un mal sueño, o una incipiente amenaza, en las conversaciones todavía amistosas con ocasión del Premio Cerecedo en 1984 había entrado en un puro «conflicto interminable» entre «Políticos y periodistas», según el neutro título que utilizó para su artículo en *Claves* de septiembre de 1991. Ni siquiera una maquiavélica y solvente cabeza como la suya podía imaginar lo que iba a llegar, pese a detectar ya una supervivencia subterránea de prácticas franquistas. La «singular virulencia» y las «agresiones imprevistas» que se cruzan políticos y periodistas están fomentadas por «una especie de indulto retrospectivo sobre cuatro décadas de autoritarismo». Esas nuevas trifulcas de «insolencia y agresividad» las animaban personajes señeros entre los «propagandistas de la dictadura» que hoy «ocultan su activa colaboración con el franquismo y falsifican su pasado». Se fingen los genuinos liberales y demócratas que nunca fueron: el objetivo final es de largo alcance, porque no se trata solo de ganarse una legitimidad como demócratas sobrevenidos, que a fin de cuentas es lo que fueron todos, sino también algo mucho peor, que es la «trivialización del franquismo», en una de las primeras ocasiones en que subraya la letal estrategia de alguna derecha viva hasta nuestros días: se vivía en paz, España crecía, *aquello* tampoco era tan malo, cada cual sabrá lo que hacía, etcétera.

El optimismo ilustrado del racionalista Pradera se alarma de veras, pese a su fondo imperturbable, ante el «grado de implacabilidad con que llega a ejercerse» el poder social de la prensa desde una noción profundamente corporativista del oficio. Algunos han puesto en circulación la «teoría del pesebre» para asfixiar la mera posibilidad de la crítica: o conmigo o contra mí es la nueva consigna y el pesebrismo sería entonces la práctica de quienes sostienen globalmente al Gobierno a la vez que deploran sus aspectos reprobables. Los pesebristas serían reacios al acoso sistemático y sin ley, sectario y absolutista, al Gobierno porque «estarían a sueldo del gobierno todos los que no critiquen siempre y a propósito de cualquier medida» al poder socialista.

Esa es la mano que mece la cuna del *Abc* con su director al frente, Luis María Anson, y Jaime Campmany como columnista atrincherado en el neofalangismo casticista, pero también José Luis Gutiérrez y *Diario 16* enfilan contra los socialistas y sus «gentes del pesebre» desde 1990. Son los primeros mugidos de una futura batalla donde tanto los micrófonos de la COPE como las páginas de *Abc* («órgano del conservadurismo autoritario») hacen «nauseabundo leer» los ataques

al Gobierno. Los mismos «periodistas venales» que los firman hoy organizaban no hace tanto tiempo «linchamientos morales». Se suman a ellos los «actuales anarcoconservadores» o quienes «alardean de independencia ácrata», y cuyos nombres pivotan en torno a Federico Jiménez Losantos, Pablo Sebastián o el mismo José Luis Gutiérrez. En ese sentido gremialista del oficio, los periodistas que renuncian a la «descalificación personal» o actúan con sentido crítico, y a veces respaldan al poder y a veces no, son «expulsados a las tinieblas exteriores del conformismo sospechoso» por parte de los mismos periodistas «que suelen organizar las cacerías de colegas discrepantes», incluida la caza del Gobierno socialista, «haga lo que haga y diga lo que diga».

Pradera había rehusado poner nombres y apellidos a su artículo, aunque había dejado pistas patentes que algunos de los aludidos aprovecharon para entrar al trazo y de frente. Lo hizo de inmediato Jiménez Losantos en las páginas de *Cuenta y Razón*, a finales de este mismo 1991, la primera de las muchas embestidas que vendrían después. Esta llegaba a cuenta del «conflicto interminable» entre *felipismo* y periodismo, sin ocultar en el subtítulo que era una «Crítica a Javier Pradera». Denunciaba como «cortesía polémica, no como fobia al autor», su confortable «hábito de comisario» como articulista que «sigue implacablemente los derroteros del gubernamentalismo desafortunado». Cuando Pradera reprobaba el pasado de algunos de los actuales agresores obviaba el acoso al que el Gobierno actual sometía, según Jiménez Losantos, a los medios privados: el *felipismo* habría «impuesto un auténtico toque de queda informativo» con el afán de empujar «una labor de exterminio de las minorías en el orden intelectual –se entiende–». El fondo del ataque iba a la encarnadura moral de Pradera y su transición desde el rojo al rosa, o del marxismo al bujarinismo, o de la revolución a la socialdemocracia: no pasaba de ser un cínico defensor de la «obscenidad sin límites» de los socialistas, acosado por «la mala conciencia que produce el haber favorecido durante tanto tiempo a un partido que ha demostrado ser un fervoroso enemigo de las libertades y de la ética». Ha dejado de ser el que fue y hoy «pelea contra la propia sombra» mientras defiende como felipista «un estado de cosas que con otro nombre y en otra época le hubiera avergonzado».

Cuando todavía no ha empezado de veras el tráfico frenético de dossiers encargados por banqueros y todavía el chantaje no forma parte rutinaria de la vida política, Pradera está ya en el punto de mira de la derecha intelectual como responsable de una defensa crítica de los socialistas, sin incurrir en el apocalipsis antigubernamental pero tampoco inmerso en el devoto entreguismo. Sin embargo, una íntima dolencia de Pradera crecerá en los próximos años para cuajar en una desesperanzada reprobación de conductas de partido y de Gobierno sin remedio posible: para ese desenlace faltan todavía unos cuantos socavones inimaginables en la autopista socialista y otras tantas decepciones.

CONTRA LAS CUERDAS

La pandemia de escándalos arrecia en el año milagroso de 1992 y sus múltiples consagraciones internacionales: la Exposición Universal de Sevilla se inauguraba en abril, los Juegos Olímpicos se celebraban entre julio y agosto en Barcelona y durante todo el año Madrid era Capital Europea de la Cultura. Pero a Pradera se le ve sudando tinta para salvar aquí y allí al Gobierno que ha de capitalizar semejante saturación de éxitos. Sigue siendo preferible a cualquiera de las combinaciones posibles pero se apaga y degrada el fulgor al cumplir una década en el poder, como si viviese inmerso en la melancolía del cumplimiento. La recesión económica ha empezado

a dejar sentir sus efectos a la vez que cala en la opinión pública el explosivo combinado de casos graves de corrupción, tráfico de influencias, financiación ilegal, terrorismo de Estado, arrogante prepotencia y desconexión ciudadana.

Es probable que a estas alturas la relación personal con el presidente se haya suspendido ya y conjeturo que el episodio más corrosivo es la financiación ilegal del partido a través de Filesa y la incapacidad de Felipe González para asumir y castigar las responsabilidades políticas del caso. El acorazamiento rocoso contra evidencias flagrantes dejaba a Pradera inerme y expuesto incluso a la crítica de la más indulgente mirada pública, cuando las campañas de acoso de la nueva derecha mediática cuestionaban o directamente asaltaban su integridad moral como sostén, ideólogo o incluso guionista de la acción política de Prisa y de *El País*.

Sin duda Pradera sabía que en mayo de 1992 el caso Filesa había ocupado a los miembros de la Ejecutiva Federal del PSOE. Mientras unos negaban las informaciones inculpatórias o minimizaban su gravedad, otros intentaron explicar –y Maravall lo cuenta en *El control de los políticos* sin mencionar al orador, pero inequívocamente ha de ser él mismo– la inutilidad de la «política del avestruz» y la necesidad de que todos sepan dentro del partido qué ha sido Filesa, «quién y por qué dio luz verde» a esa aventura, por qué la estrategia ha sido obstruccionista y quién se ha enriquecido. «La situación es dramática por la incapacidad de responder suficientemente como partido ante el país y como dirección ante el partido.» La única vía para «recuperar terreno» consiste en asumir «responsabilidades políticas» y cualquier otra cosa que no sea esa garantiza el «repudio de amplios sectores de la sociedad civil y el desgarramiento fratricida».

Tampoco fue Pradera por entonces exactamente complaciente con el presidente ni con los socialistas. Pero Felipe González entendió desde algún rincón de la conciencia y la memoria que Pradera no actuaba por rencor o despecho sino desde la lealtad a una concepción del poder menos permisiva o justificadamente intolerante con las fallas estructurales. A finales de aquel año, González no dejó de interesarse personalmente en llamadas diarias a la clínica en la que había sido intervenido del corazón, como recuerda con gratitud Natalia, aunque Pradera regresaría a la escritura de inmediato. Pudieron ser el trabajo metódico y la disciplinada obstinación, como tantas otras veces, el mejor lenitivo para averías físicas o sentimentales o incluso graves convalecencias.

Es tan innegable como abusiva la iniquidad de demasiados gobernantes, pero es bajo ese «diluvio de contratiempos» cuando el socialismo español y el PSOE en particular celebran el décimo aniversario de su acceso al poder. El *perfil de una década* que propone *El País* en un suplemento extraordinario de octubre de 1992 es para Pradera necesariamente positivo, a pesar de la recesión que había llegado de golpe en el año de los fastos, y a pesar de los «síntomas de fatiga parecidos a la usura de los materiales». Los había ido rastreando una y otra vez en sus columnas firmadas desde 1987 y apenas habría semana que no quedase monopolizada en el futuro por una u otra de las innumerables esquinas rotas de un mapa de poder dañado.

Parte de esos males llegaban de origen, diez años atrás, por la «deficiente información» del presidente sobre la Administración. Quizá incluso infravaloró «la complejidad de la sociedad civil». Pero la «aceptación –necesaria– de la realidad» no comprometía fatalmente a lo que ha acabado sucediendo en términos ideológicos: una «reconciliación –gratuita– con otros aspectos tan negativos como evitables» de la gestión del poder. La desconexión social, la lentitud reactiva, el obstruccionismo jurídico, la permisividad hacia la corrupción del partido o la justificación de Estado para delitos intolerables debilitan la acción de gobierno. Incluso alguna vaga socarronería

alienta contra la fidelidad del presidente a su «solipsista teoría» de que la «corrupción no sería un problema real sino solo un espejismo reverberado por la opinión pública». Parecía estar retomando imprudentemente, o «demasiado en serio», su «chistosa distinción entre opinión pública y opinión publicada». La estrategia de explotar indebidamente la presunción de inocencia conducía por fuerza a la «judicialización extrema de la vida política». En ese ámbito los problemas quedan sometidos a los plazos judiciales sin margen de maniobra para el Gobierno y demasiado expuesto a creerse su propia excusa política. En casos tan graves como el GAL, el primer impulso de «horrorizado rechazo» de la menor vinculación del Ejecutivo con la «guerra sucia contra ETA ha ido dejando paso a la cómplice aceptación de los asesinatos de los GAL o a la cínica defensa de su necesidad».

Mientras tanto sigue sin existir «una hipótesis alternativa verosímil», y «hasta ahora ninguna fuente oficial» ha dado explicación alguna «mínimamente convincente» sobre el caso. La condena a cien años de prisión de los dos policías encausados, José Amedo y Michel Domínguez, «deja entrever un desolador escenario, donde el Estado hace la vista gorda ante la conducta delictiva de dos funcionarios policiales y les ayuda incluso a ocultar las huellas de sus crímenes». Posiblemente este es el momento que recuerda Pradera, en conversación con Paddy Woodworth, al revelar que los dirigentes socialistas negaban verbalmente su participación pero el lenguaje no verbal delataba su incomodidad. A algunos de ellos Pradera les dijo que «this is a road where you know the beginning, but you don't know where it will end».

Pero ya lo había dicho antes y lo repite ahora: los «crímenes de la razón de Estado» suelen ser una «abstracción encubridora casi siempre de la sinrazón de gobernantes de carne y hueso». Pradera no calló en marzo de 1992 que había sido el mismo Felipe González quien había pedido en rueda de prensa, cinco años atrás, la presunción de inocencia para los dos policías. Por eso ha de recordar ahora que «más allá de la *responsabilidad penal* y de la *responsabilidad civil* por los atentados de los GAL se sitúa la *responsabilidad política* de quienes ordenaron –por acción– o posibilitaron –por omisión– esos oscuros capítulos de la lucha antiterrorista realizada con métodos terroristas». La «ominosa» posibilidad de un indulto sería «la única pieza que falta para completar el rompecabezas y elevar las sospechas a la categoría de certeza». Pero la razón de Estado seguiría siendo el «habitual disfraz de los gobernantes para ocultar sus sinrazones». Con ella se «vacía de aliento moral a la profesión política para someterla por entero a los pragmáticos dictados del poder». Por eso «un estafalario *patriotismo de Estado*» podría ser el último recurso innoble para que los antiguos antifranquistas hoy en el poder «se solidaricen emocionalmente con unos *servidores* públicos a quienes siempre les resultó indiferente que su amo fuese una dictadura o una democracia». Las improvisaciones de la Transición eran ya excusa mohosa y gastadísima porque la responsabilidad del poder recaía íntegramente en la gestión de la década socialista, deficiente e incluso temerariamente negligente.

Pero la reflexión sobre ese problema escondía una metáfora sobre otras erosiones del tiempo, cuando muchos votantes y la mayoría de los políticos y periodistas conservaban muy viva todavía la memoria de la refundación del PSOE en torno a Felipe en Suresnes y sus entonces 3.580 militantes de 1974, en precisión aritmética que lleva dentro toda su carga emocional. Había empezado entonces una «audaz cooptación» de «buen número de dirigentes y cuadros que habían militado en grupos de la oposición antifranquista de izquierda y extrema izquierda», también «comunistas expulsados por Carrillo», y por delante de todos Fernando Claudín (y era su mismo caso, en el fondo), democristianos de izquierda, etcétera: eran los «representantes de la izquierda

de toda una generación» unidos por «un vínculo de solidaridad forjado por la memoria antifranquista».

Lo imprevisto fue comprobar que esa acción de 1974 había desatado «las pasiones del poder», como malévolamente titulaba Pradera su artículo en *Claves* de octubre de 1992. Esa «temprana orientación hacia el poder» fue patente sobre todo desde que la «desescalada doctrinaria» de 1979 terminó con la «indefinición ideológica» que mezclaba y reunía a social-liberales como Indalecio Prieto, revolucionarios como Largo Caballero y reformistas morales como Julián Besteiro. Se había resuelto desde entonces la lucha interna «dignificándola con los vuelos teóricos de una discusión escolástica» en la que Pradera tomó parte activamente. Lo que había parecido la conquista de la unidad acabó convertido en la neutralización de la diferencia. Por eso puede asomar alguna forma de rencor cuando identifica en los eslóganes de campaña de 1982 –por el cambio y por la modernización– una doble consigna que «absorbió en la oquedad de su abstracción, ajena a la retórica obrerista, las aspiraciones difusas de la sociedad española».

Desde entonces no todo había fluido como era deseable y algunas de las «exhortaciones gubernamentales al enriquecimiento individual» –que fue error verbal de Carlos Solchaga profundamente dañino– se daban de bofetadas con la inequidad del reparto social y de las cargas de la reconversión industrial de mediados de los ochenta. Se estaba arruinando con ese talante, con las fundadas acusaciones de clientelismo y algunos rasgos más de nepotismo y arrogancia, «la vieja tradición de austeridad» del socialismo español. Pese al compromiso personal de Felipe González, no se atendió la alarma de Fernando Claudín poco antes de su muerte en 1990 contra la conversión del PSOE en un «partido de cargos». Había sido ya abusivo el «corrimiento de sus apoyos sociales hacia el centro derecha», mientras se incendiaban el partido y el Gobierno cada dos por tres con las pugnas entre los guerristas cortijeros y descamisados y los renovadores de uno u otro signo, unas veces Maravall, otras Almunia y Aranzadi o, desde luego, Semprún.

En sus columnas los había respaldado críticamente Pradera frente a la amenaza involucionista de un guerrismo anacrónico y demagógico. Sin embargo, en ese artículo Pradera afina el diagnóstico de las dificultades de los socialistas y sin mencionar ningún nombre y sin asumir tampoco la dialéctica de *guerristas* y *renovadores* delimita tres corrientes internas. Una de ellas encaja con él mismo como reformista posiblemente de *línea bujarinista*, es decir, réprobos socialistas rechazados por vocación contrautópica. Es verdad que podían tener *recaídas* de diverso pronóstico e intensidad, como decían en clave paródica, pero casi siempre transitorias o apenas nostálgicas de otros tiempos menos correosos con las ilusiones y las fantasías políticas. Hoy se sitúan fundamentalmente y a la vez contra «el escepticismo de los pragmáticos y el cinismo de los populistas, reivindican los viejos valores socialistas, tratan de analizar las razones por las que algunas políticas socialdemócratas» han fracasado o han obtenido resultados perniciosos, y «buscan nuevos caminos en medio del desconcierto producido por las dificultades del Estado del bienestar» y el «derrumbamiento» del socialismo real.

Sin decirlo abiertamente, esa descripción es la de un socialdemócrata que rechaza el predominio actual del sector pragmático en el Gobierno, pero teme también que vaya a entrar «en colisión abierta con la orientación populista afincada en el aparato del PSOE». Es lo que estaba sucediendo desde el cambio de Gobierno de marzo de 1991, y esa situación «dejaría espacio a la orientación reformista para tratar de mediar» y ofrecer «soluciones conciliadoras e integradoras» entre el populismo guerrista y el social-liberalismo pragmático de Solchaga: los reformistas socialdemócratas.

Pradera apuntaba directamente la ruta para acabar con el anquilosamiento funcional del PSOE y

el cortocircuito entre partido y Gobierno. El propio Felipe González había fomentado «los rumores sobre una próxima retirada» y eso había desatado, escribe el 4 de octubre de 1992, «una guerra de posiciones por el control del PSOE». Pero nadie sabe «a ciencia cierta –tal vez ni siquiera el propio interesado–» si encabezará o no las listas socialistas en las próximas elecciones. Se ha activado el cierre de filas en el aparato contra el sector de renovadores, más afortunado en Cataluña y en Madrid, exiguo en Extremadura, «pero con una apreciable influencia sobre los militantes», a pesar de que la recesión económica está teniendo «vitriólicos efectos» sobre el prestigio de «los socioliberales del área económica del Gobierno».

Lo que inquieta de veras a Pradera es el posible camino triunfal del socialismo de Puerto Hurraco y el éxito de su «involución de corte *tercermundista*». Entre quienes encarnan esa deriva hay «guerristas acérrimos como Rodríguez Ibarra –atizadores del odio entre las zonas rurales y las áreas urbanas o entre la España meridional y Cataluña y el País Vasco». Si ellos fuesen «los sacerdotes del nuevo evangelio, la ideología socialdemócrata quedaría enterrada por la acción conjunta de un izquierdismo retórico, una demagogia carente de ingenio y un populismo mechado de corrupción». Lo que teme es que «ese PSOE replegado en el sectarismo podría atrincherarse» en algunas comunidades y ayuntamientos, e incluso «controlar enteramente una organización rica en recursos económicos y capaz de proporcionar empleo público a miles de clientes».

Cuando Filesa sigue amargando los desayunos socialistas día sí día también, sin capacidad de réplica y sin justificación ni ética ni política alguna, lo peor sería a 25 de octubre de 1992 que los socialistas siguieran recurriendo «a todas las tretas imaginables para salir del atolladero», abonados a la «artera búsqueda de la impunidad desplegada por los profesionales del poder que hacen la ley para los demás y la trampa para sí mismos». La hipotética apelación a la razón de Estado que no sirvió para los GAL tampoco ha de servir «para exonerar a los culpables: la justificación del Leviatán nunca podría cubrir algo tan garbancero como la intendencia partidista».

Los posibles «rasgos de continuidad» con el franquismo no parecían dibujarse en diciembre de 1992 por el lado de las instituciones políticas sino en otros ámbitos sociales donde la acción reformadora no llegó, llegó mal o fue incapaz de actuar. Las huellas del viejo régimen persisten, en pleno aniversario de la década socialista, en «las posiciones de poder social». Contra lo que pensó Pradera mismo, «la victoria de la reforma sobre la ruptura dejó intactas las viejas fortalezas franquistas en la vida económica, la sociedad civil, el mundo académico y los medios de comunicación». En alguna medida, «los pactos explícitos o implícitos de la amnistía, la amnesia o el silencio perpetuaron las posiciones ventajistas de privilegio» conquistadas por algunas élites en la dictadura gracias a «los dados cargados y la ruleta trucada». Esa es una «página negra de la Transición» que solo ahora parece resucitar con nuevas energías, en buena medida gracias a una nueva prensa que trabaja abiertamente ya para expulsar a los socialistas del poder. Entre los rastros del franquismo está buena parte del decálogo de la actual crítica a la democracia: «La obsesión por la armonía unánime y la satanización del conflicto; la identificación del Gobierno con la nación; la reificación de lo *social* y lo *económico* como adjetivos transformados en sustantivos; la búsqueda de metas justificadoras al sistema democrático más allá de las libertades ciudadanas; la hipertrofia del Ejecutivo frente a los restantes poderes del Estado y a la sociedad civil; el crecimiento económico como único indicador del éxito político; un nacionalismo abstracto tendente a la contraposición entre España y los españoles».

Las «marcas del tiempo» llegaban ya a demasiados rincones y también a la Constitución convenía sacarla del mausoleo de la intangibilidad fetichista. Sus imperfecciones eran tan visibles en ella como lo eran las marcas del tiempo en los socialistas. Quizá una reserva de última hora

había evitado hablar de *manchas* en lugar de *marcas*, y así titulaba en marzo de 1992 su más compacta reflexión sobre las debilidades constitucionales. Había «buenos argumentos» para revisar la Constitución porque ella misma tenía mucho de comprometido galimatías. Sus «ambigüedades, equivocidades» y sus mismas «inconcreciones» delataban la falta de acuerdo originaria entre los redactores de 1978. Pero mientras subraya, consulta y señala una y otra vez uno de los múltiples ejemplares de la Constitución que campan por su casa, y seguramente tras consultar con Rubio Llorente y Clemente Auger, confía al Tribunal Constitucional la «labor interpretativa» que adapte el texto a la realidad cambiante y logre hacer hablar «de manera comprensible y coherente» a un texto «tartamudo, contradictorio y enigmático».

Para evitar que perdiese «vigencia social» no podía seguir cautiva de las «delicadas cuestiones» que habían quedado sin definición y exigía de todos el acuerdo tácito y pragmático (pero puramente voluntarista) de interpretar «con un amplísimo margen» sus zonas de ambigüedad. Sus temores a una revisión del texto eran antiguos y su defensa de una amplitud y flexibilidad interpretativa también. Había escrito ya en 1984 que una reforma constitucional podría alentar las tentaciones recentralizadoras de una derecha incómoda con el desarrollo autonómico. Pero tampoco el título VIII sobre administración territorial debía convertirse, escribe a 8 de diciembre de 1994, «en un fetiche» ni debía incurrirse en «la sacralización de sus puntos y sus comas». Era verdad que en 1978 se logró «el audaz experimento de crear desde la nada el Estatuto de las Autonomías», pero la experiencia política había mostrado demasiadas veces «la impía alianza entre las reverencias en público a la Constitución y su manoseo en la oscuridad». Esa fosilización del texto promueve «reformas encubiertas llevadas a cabo por quienes más gritan en favor de la intangibilidad de su letra».

Había sucedido así al menos desde la LOAPA inducida tras el golpe de 1981 y seguiría sucediendo con la ley de seguridad ciudadana. En 1993, «el paisaje constitucional» seguía alejado de su «forma idílica» y seguía ofreciendo «zonas de sombra». La experiencia había permitido detectar en el articulado del texto errores y omisiones de carácter sustancial o procesal: «desde la incapacidad del Senado para transformarse en Cámara de representación territorial hasta las disfuncionalidades del régimen electoral, pasando por la renovación de los órganos constitucionales». La reforma que había exigido el Tratado de Maastricht había roto «el tabú de la reforma constitucional» y abierto «el camino para futuras modificaciones del texto». Aunque el discurso refundador y adánico de la izquierda alentaba una especie *gran* reforma, inviable e indeseable, la hoja caduca de la Constitución no podía ni debía arruinar la hoja perenne: ahí seguimos más de veinte años después.

ÚLTIMA FE Y PENÚLTIMO REVOLCÓN

¿Le queda a Pradera algún resto de convicción para confiar en la capacidad regeneradora y autocrítica del socialismo y de Felipe González en particular? No parecía fácil revertir «el vaciamiento interior» de las instituciones «inducido por la corrupción, la patrimonialización de la Administración por los partidos, el falseamiento del Estado de derecho y la creciente apatía de unos ciudadanos desilusionados por el corporativismo de los políticos». Las heridas de Pradera se han macerado en la añoranza sentimental de otro PSOE posible. Sin alternativa de gobierno deseable, no ha tirado la toalla pese al inequívoco desenganche del proyecto socialista. A un mes del comité federal de enero de 1993, las condiciones objetivas son tan desalentadoras como

bloqueada está la acción de un Gobierno «con un ojo puesto en las urnas, soterradamente combatido por el aparato de su propio partido, y con un programa legislativo sabotado en parte por su grupo parlamentario».

Hace meses que el partido no despierta la menor confianza tras activar una «torpe estrategia» publicitaria ridícula, como «el cómic de los diez años, las visitas domiciliarias, la campaña contra jueces y periodistas» o incluso «la negación de la evidencia en el caso Filesa». El caso nacía de la financiación ilegal del PSOE para enjugar la gigantesca deuda que generó la campaña en favor del sí a la OTAN. Una presunta absolución dejaría intactas las sospechas y los extendidos recelos porque «el cadáver insepulto del caso Filesa apestaría con su mal olor nuestra vida pública y vaciaría de credibilidad las grandes palabras y los nobles propósitos expresados desde las tribunas por los dirigentes socialistas». Durante los primeros meses de este 1993 las notas de Felipe González se llenan de preguntas sin respuestas sobre «cómo reaccionar», «cómo responder», cómo «pensar una estrategia para Filesa» cuando el 20 de marzo de 1993 también anota «lo que es obvio: Filesa cobró de empresas y pagó facturas por cuenta del PSOE». Ya había dicho en un comité federal de enero de ese año que vivían una «época de emergencia» y sabía también, una semana después, a 11 de enero, que algunos compañeros creen que «tal vez conviniera perder las elecciones para recuperar la fortaleza del partido». Algunos, como José Luis Corcuera, incluso creían que «todo va a pasar».

Pero algo de desesperación íntima transmiten también cuatro borradores inacabados de Felipe González conservados en su fundación: intenta reprobar por carta al presidente de la CEOE por afirmar que el pago de comisiones ilegales es práctica rutinaria, según había declarado al *Abc*. Y dedica otro desahogo a escribir en febrero de 1993 una carta al lector clásico de un periódico que «miente, desinforma, calumnia, en esta ocasión como en otras». Había sido el periódico que dirigía Anson lo que ya no era, «otrora sensato, si bien siempre de derecha». Menudean también por entonces en sus cuadernos y papeles los contactos, las visitas y llamadas de Polanco y del fundador del Grupo Zeta, Antonio Asensio, del director de *La Vanguardia*, Joan Tapia, y de *El Periódico*, Antonio Franco, después de las turbulencias fuertes vividas en 1992 en torno a Antena 3 Radio. Al final, lo que pareció una operación de control de la radio donde Antonio Herrero y José María García ejercían su crítica al Gobierno, acabó con un acuerdo entre Polanco y Godó para el control del único competidor real de la Ser.

Por entonces el presidente González clasificaba en privado a la prensa escrita española con un ranking nada descabellado sobre la «Disposición de medios conmigo». Ahí figuraban «muy bien» Joan Tapia y Antonio Franco, «bien» Joaquín Estefanía y *El País*, «bastante bien» el Grupo Correo con José Antonio Zarzalejos, y «mal» *Abc* y *El Mundo*. El que figuraba en medio, «regular», era el *Diario 16* de J. L. Gutiérrez, con una nota que aclara que «depende de Ferraz (los que escriben de política)» y, entre el grupo «periodistas», solo aparece el nombre de José Luis Martín Prieto como «disponible».

Las gravísimas dificultades que atraviesan Gobierno y partido exigen una «renovación de ideas, moral, audacia y legitimidad que solo unas elecciones generales pueden proporcionar», a pesar de «la polución verbal producida por ese histrionismo populista» que practican los dos grandes partidos del bipartidismo. El envilecimiento de la atmósfera política es creciente ante una derecha que aspira a ganar convencida de que la debilidad socialista es irreversible. Los populares se apoyan hoy en una «estrategia de guerra sin cuartel (incluido el belicoso precepto del *todo vale*)», imitada de la que dieron los socialistas contra Adolfo Suárez («hasta que el golpe de Estado del 23-F moderó sus ánimos»), sin advertir que aquella fue una de las heridas que más daño hicieron

a la democracia. Hoy ha regresado la «escalada de improperios y acusaciones» con grave daño del juego limpio pero sobre todo capaz de «inferir heridas de difícil cicatrización que obstaculicen luego los acuerdos y coaliciones», ante la expectativa probable de que solo haya mayorías relativas en las elecciones de 1993.

De hecho, estaba ya a pleno rendimiento el acuerdo entre la derecha rampante y renovada de José María Aznar y el nuevo hiperliderazgo de Julio Anguita en IU. Ambos venían a ratificar el «empacho carismático» que Pradera diagnosticó desde el principio a la democracia española, primero con Suárez y después con González. Pero en Anguita el fenómeno adoptaba una versión que sacaba a Pradera de sus casillas: su intolerancia hacia el personaje era poco menos que biopolítica y un encuentro personal, en un almuerzo del líder político con la cúpula de *El País* el 7 de mayo de 1993 en La Ancha, solo sirvió para que perdiera toda esperanza en su *reeducción* política. Al día siguiente, el título del artículo de Pradera era el desahogo de una inquina duradera, tras la depuración política en IU de Nicolás Sartorius, Pablo Castellano y Cristina Almeida: «La sombra errante de Caín». De momento, a ese «redicho orate solitario» que lidera IU «le falta humor, le sobra pomposidad, es impermeable a los razonamientos y su inclinación por lo sublime le hace bordear el ridículo».

Pradera no había abandonado a los socialistas pero marcó de cerca al partido y al Gobierno. Sintió al menos desde enero de 1993 y hasta las vísperas electorales de junio que había muestras públicas e informaciones privadas que permitían creer en una toma de conciencia de Felipe González sobre la necesidad de cambiar. En la reunión ejecutiva de enero de ese año, González había desautorizado implícitamente el informe de un guerrista medular como Txiki Benegas al proponer el suyo propio. Por fin aceptaba González que no solo «los comportamientos perseguibles criminalmente sino también los aprovechamientos indebidos y las actuaciones impropias» debían ser entendidos como corrupción, a pesar de que «buena parte de las indecencias que sirven de ganzáa para los enriquecimientos a la sombra del poder» no figuren tipificados como delitos. Pero los partidos pueden complementar «el Código Penal con un código deontológico que sancione los abusos» de sus afiliados. Hubiese bastado con que González exigiese a los cargos públicos «la respuesta democrática de responsabilizarse políticamente por sus fallos de gestión», como defendió en la campaña electoral de 1982. Habría evitado así un desgaste corrosivo y quizá no sería necesario usar el retrovisor, como hace Pradera este mayo de 1993, y se sentirían los socialistas menos «acosados dialécticamente por las acusaciones de estar actuando como simples profesionales del poder, interesados únicamente por continuar disfrutando de ese paraíso de economías externas, símbolos de estatus y satisfacción de vanidades que es el Estado para quienes hacen de la política tan solo un lucrativo oficio».

¿Había emprendido de veras el presidente su «camino de Damasco» con el fin de «erradicar esa metástasis del sistema democrático» que es la corrupción institucional? Pradera lo creyó y actuó como analista en la confianza de dar una última oportunidad a Felipe González. Ya no era un secreto para nadie que «la corrupción individual resulta demasiadas veces inseparable de la corrupción institucional», emparentada con «las prácticas mafiosas» y nutrida de «formas corsarias de financiación» que permiten «a los avispados recaudadores de esos impuestos partidistas desviar en su provecho parte del dinero negro originariamente destinado a la caja B de sus organizaciones». Tanto PSOE como PP están involucrados en esos usos a la escala del poder que tienen para «chantajear a constructores y concesionarios». A esas alturas, los «estropicios causados al Estado de derecho» eran ya «difícilmente reparables» y Filesa había revelado la

puesta en marcha de «un mecanismo infernal de obstruccionismo procesal» que incluso un «alma sensible» podría interpretar «como una burla o una provocación».

Pradera sigue sudando tinta para crear un espacio crítico contra las tropelías y abusos socialistas y a la vez contra las vilezas disfrazadas de investigación periodística que la derecha mediática y política había emprendido. La degradación socialista no legitimaba la turbamulta de maledicencias y presunto periodismo con que la derecha azotaba, muchas veces con razón, a los socialistas. En mayo de 1993 había insistido desde *Claves*, en un alarmado artículo sobre el tono de los medios periodísticos, en el empobrecimiento democrático de partidos que han «achicado los espacios del debate público» al convertir la presunción de inocencia en una fortaleza tan inexpugnable como cínica. Pero tampoco los medios contribuían a mejorar el mapa porque estaban «al servicio de otros centros de decisión», convertidos ellos mismos «en poder corporativista». El banquero Mario Conde y sus conexiones flagrantes con el periódico dirigido por Pedro J. Ramírez, *El Mundo*, eran los destinatarios del mensaje contra la «grosera violencia verbal» y la «bajeza moral de esas máquinas de insultos personalizados» al «servicio de turbios submundos policiales». Ya era evidente también que la *radio de los Obispos* ostentaba un «bien ganado monopolio de la injuria» con Jiménez Losantos a la cabeza y otros periodistas como Antonio Herrero y Luis Herrero, «*hooligans* a sueldo de Mario Conde», como los llamaría tiempo después.

Estaban en juego varias cosas a la vez y solo parecía creíble un remedio para remontar los desfavorables resultados que pronosticaban las encuestas. No se trataba solo del riesgo de perder el Gobierno, sino de que la facción guerrista del partido rentabilizase el fin de la vida política de Felipe en su provecho. La victoria de González era la condición para impedir el acceso al poder de Aznar y su temible agenda oculta, pero era a la vez el mecanismo que neutralizaba la candidatura de Alfonso Guerra como su relevo y sustituto al frente del partido y potencial candidato a la presidencia del Gobierno. Había sido siempre cruel con ese sector y lo fue más que nunca en estas fechas, cuando reprobaba la campaña descalificatoria contra la investigación judicial por Filesa —«en la que sobresalen por su cobarde vileza las embozadas reticencias del presidente de Extremadura», por entonces Juan Carlos Rodríguez Ibarra—, del mismo modo que no endulzó su visión de primera mano sobre la gestión «pilotada desde su Comisión Ejecutiva» de «algunos desfachatados bribones» para «seguir monopolizando el *aparato*».

Los malos augurios obligarían «probablemente a Felipe González a hacer las maletas», y eso era francamente malo. Pero era peor que la derrota electoral le obligase también «a entregar las llaves del PSOE a Guerra». Para este momento, Pradera tiene la certidumbre de una conspiración interna dispuesta a favorecer la derrota del presidente en las elecciones de junio de 1993 como venganza por el cese de Guerra dos años atrás y a la vez como instrumento para corregir el rumbo del PSOE y situarlo en el izquierdismo populista frente a la *beautiful people*, Carlos Solchaga y las políticas de control del gasto. La operación era de alto riesgo e incluso rayaba en lo inverosímil o torpemente maquiavélico. Pero cuando Pradera subrayaba la «impávida indiferencia del guerrismo» ante las malas expectativas socialistas de 1993 aludía a esa estrategia destinada a favorecer la «demagógica mezcla de corporativismo sindical, populismo ruralista y agravios comparativos del Sur contra el Norte» que tanto las «tonterías paranoides» de Guerra como de los guerrista habían alentado. La derrota de hoy sería la condición para la victoria de mañana con el liderazgo radicalizado de Alfonso Guerra.

Era verdad que Felipe ya no era la estimulante encarnación «igualitaria, cercana y juvenil» de 1982 sino un «padre de familia distante, maduro y exigente» con propensión a regañar. Pero lo

«asombroso» de veras era que los socialistas todavía no fueran «conscientes del perjuicio que les ocasionó aquella bochornosa sesión parlamentaria del 1 de febrero de 1990 en la que Guerra marcó una cínica línea a seguir ante las acusaciones» de corrupción: airear los trapos ajenos sin asumir las responsabilidades políticas propias. El concepto mismo de responsabilidad política se había volatilizado en la democracia española, y así iba a seguir durante tantísimos años más. Pero de nuevo el pecado ascendía de escalón hasta llegar al último teléfono, como suele decir Felipe González. Casi dos años después del cese de Guerra en enero de 1991, ni el presidente ni nadie había explicado todavía por qué «soportó pasivamente durante un año el deterioro político y moral creado por el exvicepresidente, aferrado compulsivamente al poder y refugiado bajo los faldones del PSOE para eludir sus responsabilidades» dejando al partido en una «prolongada agonía».

Hoy no parece ningún secreto que la campaña electoral de 1993 estuvo trufada de medidas preventivas. Siguió bajo la dirección de Guerra, como en los últimos años, pero hubo de transigir con un comité estratégico destinado a proteger a González de la pasividad o el fuego amigo. O dicho de otro modo, González quiso confiar a un equipo paralelo y ajeno a la ejecutiva el control de su campaña como garantía y gesto público de su compromiso regenerador. En los papeles de aquellos meses se llama «Comité de Estrategia político-electoral». El propio Felipe González anota el 20 de abril de 1993 que «instalarse aquí es imposible», y el aquí es Ferraz, evidentemente. Lo constituyeron Narcís Serra, Ramón Jáuregui y Raimon Obiols bajo la dirección de un hombre de confianza directa, y único superviviente de la quema en la ejecutiva salida de 1991, José María Maravall. No había querido relevar a Semprún como ministro de Cultura en 1991 (el relevo fue Jordi Solé Tura) y tampoco quiso hacerse cargo de la secretaría política en Moncloa, pero ahora no tuvo elección ante la determinación de González. Maravall se emplearía a fondo para salvar la papeleta más complicada, a pesar de que un comité estratégico era muy poco para tanto descrédito público. Activó un manifiesto de intelectuales en apoyo de Felipe González que no mencionaba al PSOE («Intelectuales en favor de presidente», titulaba *El País*) y acompañaría a Felipe en sus mítines electorales para alejarlo del aparato. Al fin y al cabo, como le dijo Pradera, era catedrático de Sociología Política y parecía el mejor preparado para afrontar el aluvión ingobernable de desgracias, tan asfixiante como la misma campaña mediática de la derecha. En el murmullo de las confidencias, por entonces quizá Pradera todavía preguntaba a Maravall entre la cándida ironía y la fundada inquietud: «Oye, Josemari, ¿tú crees que Felipe es el jefe de los buenos o es el jefe de los malos?»

De momento, las palabras, los gestos y la información privilegiada parecían «probar la sinceridad de un proyecto de rectificar la tolerancia de los socialistas hacia la corrupción y de liberar al PSOE de su secuestro por el *aparato*». Por eso abrían la propuesta a una lista de independientes que Felipe González numeró en sus anotaciones privadas y cuyos tres primeros nombres eran Baltasar Garzón, Francisco Tomás y Valiente y Victoria Kamps (que ha de ser Kamps). El golpe de efecto más notorio fue la incorporación del juez Garzón en puestos relevantes de las listas socialistas y tenía el valor de poner en evidencia tanto a la izquierda como a la derecha. Los «demagógicos artífices del mito Garzón» habían creado desde la izquierda «simulada» el «azote de socialistas» y ahora proyectaban «psicoanalíticamente sobre el ídolo caído sus pulsiones instrumentalizadoras». Sustituían «las impúdicas adulaciones de ayer al superjuez por las insultantes descalificaciones de hoy al juguete roto».

Las reservas de Pradera eran las reservas de otros socialistas y probablemente todos compartirían que solo tras el resultado de junio «sabremos si el fichaje de Garzón ha sido solo

una brillante operación de *marketing* electoral o el comienzo de una ambiciosa empresa de renovación política y moral de los socialistas españoles». Pradera creyó en ella, al menos en público, y pudo saber de primera mano que González accedió a hacer lo que no había hecho nunca antes en campaña electoral. La misma insistencia en tener cerca a Maravall parecía acreditar su voluntad autocrítica. Si el primer debate televisado con Aznar había mostrado a un Felipe sin preparación, acosado y vapuleado por un opositor aplicado de bigote retro, en el segundo, el opositor aplicado reencontró al político seguro de sí mismo y armado hasta los dientes tras pasar por el laboratorio de Maravall y entrenar preguntas y respuestas que diesen la vuelta al desánimo: en la web de la fundación del presidente se pueden ver los cuestionarios y hasta el croquis de situación del debate televisivo. El escarmiento era ya la medicina común de todos y González no quiso repetir la experiencia del «misterioso ensimismamiento autista» que lo encogió en ese primer debate, según Pradera. Aquella «impávida indiferencia del guerrismo» estaba jugando a favor de la derrota de Felipe. Quizá cosas como estas explican que Guerra en sus memorias sitúe a Pradera en el paquete de los «aduladores» de Felipe González.

El clamor aliviado de «campeones, campeones» se oyó literal y retumbante en la redacción de *El País* esa noche electoral del 6 de junio de 1993. La amenaza había sido muy real, y a pesar del casi millón de votos que los socialistas sacaban al PP, habían perdido la mayoría absoluta sin que Anguita obtuviese un rédito parlamentariamente significativo ni de su majadería de las dos orillas ni de la humillante pinza con el PP. Por supuesto, Pradera votó a los socialistas, aunque lo hiciese con otras pinzas, con la nariz tapada o incluso con el irónico y resignado fatalismo que recuerda su hijo Máximo: «A los socialistas los va a votar su puta madre... y yo.»

Lo había dicho con algo más de sutileza en el periódico al identificarse tácitamente como uno de los «veteranos militantes de todas las izquierdas habidas en el mundo» que «susurran a sus amigos» una «avergonzada confidencia»: esta vez «caerán en la sonrojante claudicación de votar al PSOE para impedir el triunfo de Aznar». Compartía y combatía el mismo escepticismo, el mismo hartazgo y la misma desazón: en las vísperas electorales, el 4 de junio, desactivaba las tentaciones de tantos, incluido él, del voto de castigo contra González. El daño colateral de una victoria del PP sería el primer paso para algo casi peor: al desalojo de la Moncloa de Felipe González podía seguirle su relevo al frente de la secretaría general del partido.

Aznar vivió aquella derrota con un despecho rencoroso de efectos devastadores. En el PP disfrazaban a los pocos días «como santa cólera ante la injusticia» lo que solo era «el vulgar despecho ante la derrota», decía Pradera. Parecían emular a los socialistas de 1979, cuando tampoco encajaron su frustración electoral «con excesiva deportividad». Ambos incurrían en la tendencia a «confundir los malhumorados síntomas del dolor de estómago con los alarmantes indicios de la decadencia de Occidente»: eran esas las «malas pasadas» que solían correr los profetas desde siempre. Es posible que a los dos les hubiese convenido superar la «depresión post-electoral después de aclarar sus ideas: el mensaje de moderación» logró imponerse en los socialistas contra quienes «atribuían a un déficit de radicalismo la derrota». Quería pensar Pradera que lo mismo sucedería ahora en el PP, «a costa de los dinosaurios que aguardan en sus escondrijos la oportunidad de volver a los buenos viejos tiempos de AP».

De nuevo había salido en auxilio de los socialistas y directa y explícitamente de la credibilidad política de Felipe González. Polanco estuvo en contacto entonces con frecuencia con el presidente —le había dicho: «Enhorabuena. Otra oportunidad»—, como lo estuvo Antonio Asensio de cara a la adquisición de Antena 3 Radio, que llevaría a cabo en efecto Polanco entonces, o como la llama en una anotación González «la AntiCOPE». Pero la victoria y la campaña tan solo habían

aplazado los choques entre las facciones socialistas, en un partido todavía demasiado poblado de «dirigentes enmadrados» en las burocracias para perseguir a «sus adversarios en nombre de las siglas». En octubre es patente ya «la lenta deriva que está distanciando irreversiblemente a los seguidores de Felipe González y a los leales de Guerra», y nada alivia la inquina contra los guerristas que confiaron en que «una derrota socialista liquidase políticamente» a González.

No había sucedido, por fortuna, pero podría todavía suceder. Ese «socialismo de Puerto Hurraco es una túnica ideológica demasiado burda para proteger las desnudeces que las ambiciones personales y los ajustes de cuentas dejan al descubierto». Más allá de sus «latiguillos demagógicos», lo que lleva dentro es «nacionalismo exasperado, izquierdismo verbal, populismo agrario, obrerismo retórico y enfrentamiento Norte-Sur». No había representación guerrista en el Gobierno salido de junio de 1993 y algunos ausentes o incluso castigados hoy –Solchaga, Aranzadi y Tomás de la Quadra– habían asumido riesgos políticos de partido por criterios «de interés general», mientras las esperanzas puestas en los nuevos ministros –Juan Alberto Belloch, Carmen Alborch y Cristina Alberdi–, o en Luis Ángel Rojo en el Banco de España, no acallan el eco lejano de un reproche a González por la ausencia de Garzón en el equipo de gobierno. Era verdad también que el discurso de investidura del presidente había rehuído la concepción del partido como «vanguardia sagrada de la que la sociedad es simple feudataria». Parecía querer poner fin al «enclaustramiento privilegiado de la clase política», parecía decidida «la lucha contra la corrupción institucional», parecían ciertas «las medidas para disminuir la desafección ciudadana» y parecía clara la voluntad de controlar la financiación de los partidos, «garantizar su democracia interna e impedir su oligarquización».

Pero la frustración de las expectativas de 1993 fue muy rápida. Apenas seis meses después de las elecciones era inconfundible «el paso cansino, el tono mortecino y la falta de vibración» de un Gobierno próximo al «cuadro depresivo», a pesar de la «competencia y la honradez de Luis Ángel Rojo» al decidir el 28 de diciembre la intervención de Banesto contra Mario Conde. En aquellas fechas menudearon las largas conversaciones entre Pradera y Rojo, y mientras el primero inquiría incansable, el otro intentaba remediar los largos desvelos con las anotaciones epigramáticas y lapidarias de *Vendrán más años malos y nos harán más ciegos*, de Sánchez Ferlosio.

Pese a todo, ya parecían también inútiles «los esfuerzos voluntaristas de algunos bienintencionados mediadores», entre los que sospecho que se cuenta a distancia él mismo, y todo contribuye a acentuar «las líneas de fractura interna» en el partido. Otro medio año más tarde, Pradera parece lanzar la toalla, en particular al final de la primavera de 1994, cuando todo tiene «un aire de provisionalidad fantasmagórica» y no queda margen para arropar a un Gobierno que sacude la conciencia ética de sus afines con maniobras obscenas, negaciones absurdas, atrincheramiento institucional y el afloramiento sucesivo y desleal de nuevos escándalos inimaginables. Tampoco alguno de los ministros, como José Luis Corcuera, ayuda a mejorar el cuadro, dado «el temple autoritario, la crudeza expresiva y la bravuconería fanfarrona» que lo decora, todo muy lejos de ser el mejor método para frenar la «peligrosa deriva hacia el cinismo político». Resultaba doblemente indigesto, además, que en plena ofensiva mediática y política «preclaros guerristas» como Gregorio Peces-Barba y Enrique Múgica difundiesen «como testigos falsos su fundamentalismo socialdemócrata» en «esa prensa conservadora» que seguía aplicando a 25 de enero de 1994 «las mismas técnicas de difamación ensayadas con éxito» contra Enrique Ruano en 1969, como había hecho el *Abc*.

Los piadosos deseos de moderación que Pradera había aconsejado a la derecha no surtieron el menor efecto. Desde el día siguiente de la inesperada derrota de 1993 el PP de Aznar reactivó

todas las armas de la futura *posverdad* para explotar cada gesto, cada síntoma y cada error socialista en una magnificación incesante y apocalíptica. Sin embargo, e igual que se había ganado al *ruido de sables* quince años atrás, había que ganar ahora al *ruido de chantajes* o a «la batería de rumores porno-políticos con que Mario Conde y sus escritores han estado polucionando la atmósfera nacional». La alianza entre el PP e IU, como «instrumento subalterno al servicio de los populares», encontró una vía de relanzamiento en casa del «mamporrero mediático» y director de *El Mundo* Pedro J. Ramírez en un almuerzo del 22 de julio de 1994 entre Aznar y Anguita destinado a «extender a otros niveles» el acuerdo anti-PSOE y «conseguir derribar, desde orillas opuestas y democráticamente, a Felipe González». Ese mismo abril Aznar había empezado la murga del «váyase, señor González».

Si a los socialistas los salvaba electoralmente una y otra vez un Felipe imbatible, había que aumentar la dosis de metralla mediática para desalojar al partido y a Felipe de la Moncloa. Al parecer, y según Félix Santos, fue Juan Luis Cebrián quien denunció en público en una conferencia pronunciada ante la Sociedad Interamericana de Prensa a principios de 1993 la existencia de un «grupo de profesionales» al que «algunos llaman el “sindicato del crimen”» en privado, y confirma hoy Cebrián que la invención fue cosa de Pradera, no sé si inspirado en un grupo musical de entonces con ese mismo nombre. Cuando cinco años después Luis María Anson desveló en la revista *Tiempo* la constitución formal de ese grupo en el verano de 1994, en la Marbella señoreada por su alcalde Jesús Gil y Gil, Pradera sospechaba irónicamente que su «testimonio no resultaba imprescindible» para adivinar la existencia de esa «estrategia mediática de concertación». Había aplicado ya en numerosas columnas «las técnicas del análisis de contenido» que permitían «sacar a la luz los rasgos comunes de la política informativa y editorial» de un conjunto de medios protegidos financieramente por un banquero agraviado, Mario Conde. Incluso antes de la intervención de Banesto a finales de 1993, habían proliferado los «linchamientos morales» de discrepantes con las «prácticas gansteriles» de una «sociedad mafiosa de bombos mutuos» con algunos líderes natos como el «matón» Jiménez Losantos, todavía indignado porque Santos Juliá le sacase los colores deontológicos al delatar el uso libérrimo que había hecho de *Retrato de un desconocido*, de Cipriano Rivas Cherif, en su libro sobre Azaña. Tampoco nadie, ni el moderado democristiano Javier Tusell, podía toserle a Luis María Anson a cuenta de su *Don Juan*.

El resultado había sido la «fijación de los temas de la agenda, la jerarquización valorativa de las noticias y la *espiral del silencio* en torno a las informaciones molestas para sus sesgados enfoques». Se desató la agresividad contra el Gobierno, y «contra los colegas que no aceptaban sus dictados», incapaces de propinar «el espectáculo de los ridículos sombrerozcos de admiración recíproca entre los colaboradores y tertulianos de la COPE, *El Mundo* y *Diario 16*». A este nuevo «secreto de Polichinela» le dio curso legal el acto de contricción de Anson de febrero de 1998 y cuando había dejado la dirección de *Abc* en junio de 1997. Convivía el «sonrojante cruce de elogios entre los miembros de esa sociedad de bombos mutuos» y una acordada «uniformidad de los insultos lanzados por estos adalides de la libertad de expresión contra los periodistas que no cedieron a sus intimidaciones y chantajes».

Ese dominante «clima de agresividad sistemática» y el «linchamiento» actual de Felipe González solo era comparable con la «crueldad y la implacabilidad del acoso del que fue víctima» Suárez a mediados de 1980. Incluso Francisco Umbral debió pensar que la caza iba demasiado desatada y sabotó en julio de 1994 la línea editorial del que era ya su propio periódico, *El Mundo*, al reducir al absurdo una encuesta sobre líderes de opinión a cargo de

Amando de Miguel. Ya eran «ganas de mezclar churras con merinas, putas con lagarteranas, u ocas con dromedarios» pretender que el nivel de influencia del periodista deportivo José María García fuese más alto que el de Manuel Vázquez Montalbán o el de Javier Pradera, que, «más o menos contradictorio, hace país (o lo deshace)». Por *polanquistas* salían mal parados en la encuesta de Amando de Miguel, «lo cual es partir de unos aprioris y unos prejuicios personales, cosa muy poco científica en tan importante sociólogo». Era una buena pista sobre la enemistad que suscitaba Pradera como el hombre secreto, como el *deus ex machina* o el turbio poder oculto tras el «Jesús del Gran Poder» (Polanco). La variedad de damnificados empezaba a ser cuantiosa y el *todo vale* funcionaba ya desde hacía tiempo también en los medios.

Pradera no había eludido la identificación de portavoces y terminales mediáticas de esa campaña, y por eso en *Babelia* maltrataba en octubre de 1994 el libro que Jesús Cacho, otro experiodista de *El País*, como Francisco Umbral, había dedicado a Mario Conde. Ha asumido ahí el papel de «oxidado camión de la basura cuya misión sería vaciar sobre la vida pública toda la maloliente porquería que el exbanquero consideró inelegante transportar en su aséptico vehículo». Valdría la pena que el lector se informase más fiablemente a través de Ernesto Ekaizer y *Banqueros de rapiña* para entender lo que no contaba tampoco Mario Conde en otro libro de autodefensa, *El Sistema*. Lo reseña también Pradera el 10 de septiembre de 1994, un mes antes del de Cacho, sin rebajar las «dimensiones delirantes» que alcanzó el «ego-trip» de Mario Conde durante 1993 y hasta la intervención de su banco por Luis Ángel Rojo. Entre confidencias y fabulaciones, las verdades servían de «coartadas a las mentiras».

Lo que había logrado de momento aquella campaña era una exagerada y también reprobable «inversión de las expectativas acusatorias»: la opinión pública empezaba «a cambiar la presunción de inocencia por la presunción de culpabilidad» cuando algún nuevo caso aparecía en público, «sin importarle demasiado la verosimilitud» de las denuncias periodísticas y su desbocada terapia de monocultivo antisocialista. Ese era el mapa de descrédito total y acoso sin respiro que había buscado crear el *sindicato del crimen* como «coalición negativa» de «fuerzas para sacar el máximo provecho de los escándalos políticofinancieros» y «los sumarios judiciales» que afectaban al presidente González. Era Conde quien «financió *El Independiente* de Pablo Sebastián, *El Mundo* de Pedro J. Ramírez y la revista *Época* de Jaime Campmany», y «también distinguió con sus favores a una larga lista de periodistas y publicistas encabezada por Jesús Cacho y Ramón Tamames».

La única vía de salvación que habrían tenido los socialistas era «contar simplemente la verdad sobre los abusos cometidos con los fondos reservados y sancionar a los responsables de esas tropelías», escribía Pradera el 16 de marzo de 1994 a propósito del GAL, pero ni siquiera Felipe parecía convencido de eso. En pleno derrumbe de la credibilidad socialista solo cabe reconocer su «irresponsable permisividad» con la corrupción, pero sigue, al menos en mayo de 1994, sin acreditar su «limpieza» y sin cambiar el obstruccionismo que practica el PSOE con Filesa, como suelen hacer «los delincuentes ordinarios». La dimisión de Garzón como delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas ese mayo parece llevar dentro otra sobredosis de melancolía, aunque no secunde Pradera la simplificación de los motivos de su abandono. Nunca le había gustado a Pradera quedarse en «la letra grande de manuales pequeños» y en su rueda de prensa, Garzón era un hombre con «visible desencanto y una notable amargura», sin que lo tuviese tampoco por «inocente protagonista de una cruel versión política de *La señorita de Trevélez* teatralizada por Arniches».

Pradera se siente ya cerca de los tres millones de votantes que han abandonado a los socialistas

en las elecciones europeas de 1994, «desencantados por el incumplimiento del programa de impulso democrático prometido hace doce meses» y asqueados por una torpe estrategia de resistencia. Parecían haber olvidado los socialistas que la «épica asociada a sitios como Numancia es la música de la derrota». Incluso rumia desde la Cibeles un brindis por el Barça y fabula un voto a *Convergència i Unió* en las europeas ante el agobiante clima del «anticatalanismo más mostrenco» alentado por Aznar y Anguita, «con su inimitable acoplamiento de ignorancia osada y afectación endomingada». Han activado las «nuevas variantes del españolismo esencialista», disfrazado de «nacionalismo democrático por los guerristas», a cuenta del apoyo parlamentario que González necesita de Jordi Pujol en esa legislatura.

El «españolismo esencialista» ha vuelto y el «anticatalanismo visceral» también. Unos y otros agitan «viejos estereotipos antinacionalistas» y el guerrismo se apunta a las «tradiciones populistas del lerrouxismo» sin advertir que amenazan «la estabilidad presente y futura del sistema democrático». Las alertas apuntan al futuro (sin duda) pero el actual clima de «flojera, parsimonia y poquedad del impulso democrático prometido» se ha hecho irrespirable cuando desde mayo es ya casi insostenible sobrevivir con dos nuevos casos, Mariano Rubio y Luis Roldán. Parecen «machihembrados en la leyenda negra de la corrupción», aunque eso no absuelve a «beatas viperinas y plumas venales» para que «calumnien a una persona íntegra, honrada y decente como Luis Ángel Rojo» por su intervención de Banesto, escribe el 6 de julio de 1994. El GAL no queda atrás tampoco y hay que volver a recordar que aquella «criminal aventura» con más de veinte asesinatos degrada a un Estado de derecho porque «no puede volver contra esos sanguinarios asesinos [de ETA] sus aborrecibles métodos ni permitir tampoco que otros lo hagan por su cuenta».

Más de doce años después de la victoria de 1982 no llegaba un *annus horribilis*, como había dicho el presidente en 1995, sino la descomposición de una legislatura sin otra pauta que la sucesión de nuevos casos de corrupción y un degradante sentimiento de humillación pública para quienes habían sido y seguían siendo simpatizantes socialistas, sin alma, sin aliento y con una profunda vergüenza histórica. Tampoco Felipe González ha enmendado su «escasa afición» a comparecer ante el Parlamento ni piensa en lo único que podría restituir su credibilidad, cree Pradera el 15 de febrero de 1994: acudir a las ruedas de prensa para «afrontar los zarpazos antipáticos, malevolentes o impertinentes de cualquier periodista agresivo». Están fraguándose las convicciones de finales de 1995, tras la frustrante certeza de que el nombramiento de Javier Solana como jefe de la OTAN deja a González sin el candidato previsto para relevarle. Tampoco esto había salido bien y en un día se había volatilizado el largo programa de salida: Felipe González sería de nuevo candidato a unas elecciones sin esperanza alguna.

La memoria de los buenos tiempos está ampliamente amortizada y el enganche con el futuro ha dejado de existir. Pradera hace tiempo que cree en el efecto benefactor de una renuncia de González, y hasta invita formalmente al presidente a considerar una dimisión paliativa. Con las esperanzas ya perdidas, y en pleno noqueamiento y acoso de la derecha, Pradera era partidario de esa solución decorosa, o al menos de la preparación de un relevo que no *dejase las llaves* del PSOE al sector guerrista. Lo peor que arrastraba la noticia de la séptima candidatura de Felipe González era la tentación socialista de «buscar en las urnas la absolución política, moral y penal de las acusaciones en sede judicial (corrupción, fondos reservados, escuchas ilegales, financiación ilegal, guerra sucia), lanzadas contra el Gobierno durante estos últimos años». La aparente solución de hoy sería solo el origen de problemas «mucho más graves el día de mañana». Muchos años después, el 22 de julio de 2000, Pradera recordaba la frase de González sobre la

posibilidad de «morir de éxito» y lamentaba que no hubiese sido consecuente y hubiese preferido «el obcecado seguimiento de la abominable máxima» que tantas veces defendió su detestado (y a menudo detestable) Camilo José Cela, según la cual «quien resiste, gana». Fue semejante lema el que «llevó al expresidente del gobierno a ignorar» el consejo de dimitir «y a pagar costes abrasadores por no abandonar el poder cuando todavía estaba a tiempo».

Los aniversarios y efemérides se volvieron una maldición bíblica. El 16 de octubre de 1994, el 20.º aniversario del congreso de Suresnes llegaba «bañado por la melancolía otoñal», cuando los escándalos de corrupción «han sustituido por una mala conciencia difusa la arrogante pretensión socialista de tener el monopolio de la honradez en los asuntos públicos». Tras doce años de poder han conquistado a pulso la enemistad con los sindicatos y «con los medios de comunicación», y tanto sus políticas de ajuste como «la imposibilidad de seguir expandiendo las prestaciones del Estado de bienestar» les han «enajenado las simpatías de sectores de su electorado tradicional».

Cerca de la cincuentena, el grupo que promovió el relevo del partido en Suresnes no ha escapado a la endogamia y «tampoco ha sabido promover la renovación generacional». La división interna es inocultable, sin que Suresnes valga ya como narcótico estímulo sino como tramposo origen de todos los males. La consagración de Felipe empezaba a ser cuestionada como error histórico, en «un nombramiento que Nicolás Redondo considera hoy equivocado y que Guerra y sus seguidores probablemente lamentan en silencio». Pero en el contexto de las maniobras sucesorias en marcha, la actual «crisis de melancolía» no debería convertirse en una falsificación del pasado: el PSOE había «desempeñado un papel subalterno en la oposición activa a la dictadura» y «sería una solemne tontería o una bajuna vileza tratar ahora de reescribir la historia». No es suficiente para hacerlo «el único y vengativo propósito de regatear al actual secretario general del PSOE su decisiva contribución a la hazaña de conducir en ocho años a un pequeño e inexperto grupo de jóvenes militantes desde la clandestinidad hasta el Gobierno del Estado».

La depresión arrasa como una pandemia y «las luces no predominarán sobre las sombras al hacer el balance de esta agonizante legislatura» a finales de 1995: «Las expectativas suscitadas hace dos años y medio por el *cambio del cambio* han quedado frustradas.» Las promesas del presidente se han vaciado de contenido y nada parece capaz «de acabar con la corrupción, aproximar el poder a los ciudadanos, abrir el PSOE a la sociedad y dar un *impulso democrático* a la vida pública española.» Incluso la misma figura del presidente ha quedado seriamente comprometida cuando el 30 de julio de 1995 escribe Pradera sobre las diligencias sumariales que Garzón (de regreso a la judicatura tras su fugaz y frustrante paso por el Gobierno) ha mandado al Supremo con indicios de delito en el presidente: si las motivaciones de esa que ha llamado «ejemplar instrucción» son la venganza, como quieren los socialistas, tendrá que decirlo un psicoanalista... De nuevo es *El Mundo* quien publica poco después documentos secretos del CESID presuntamente inculpatorios contra González, pero «la tibia respuesta del gobierno y del fiscal ante el chantaje» resulta «inaceptable», escribe el 24 de septiembre de 1995. Lo relevante en ese escándalo no son «los eventuales delitos de terrorismo cometidos por Felipe González y sus ministros, sino el aprovechamiento del asunto por Conde para extorsionar al Estado». Los aborrecibles crímenes de los GAL no pueden servir de moneda de cambio para favorecer la causa judicial contra Mario Conde y Banesto porque «pertenecen a *otro* caso sometido a la investigación de los tribunales».

Entre una improbable ignorancia total del presidente en el caso GAL y el papel directivo que le asigna la oposición, con «virulentos ataques lanzados al unísono por el PP e IU en una maniobra

envolvente desde los flancos», la falta de transparencia y de valentía política sigue dañando día a día al presidente. Tampoco su tono «cercano al temple autoritario» en una entrevista a principios de año con Iñaki Gabilondo –«¿Organizó usted los GAL?»– parecía la mejor vía para recuperar la credibilidad. Las «abstractas exhortaciones a comprender los crímenes de los GAL» y a «disculparlos por nobles motivos» imaginarios obligaban a no callar, como decía el 14 de diciembre de 1994, contra la «aplicación delictiva» de los fondos reservados y el «olor del latrocinio y la sangre del crimen». Mientras González «continúe parapetado tras la estrategia jurídico-procesal de negar la evidencia y no exponga una versión plausible del origen y desarrollo de la banda criminal una parte significativa de la opinión pública seguirá sin poder creerle». Entre los dos extremos, nadie sabe dónde está Felipe González, «pero dentro de esa línea trazada por la imaginación no se inscriben solo las responsabilidades penales sino también las responsabilidades políticas de la siniestra e innecesaria historia de crimen, corrupción y abuso de poder escrita a sangre y fuego por los GAL durante los primeros años de Gobierno socialista».

El inventario de desgracias y desastrosos había sido ese año insoportable y a partir de julio de 1995 el «formidable desgaste de credibilidad producido por los escándalos del último lustro» llega como llegan «los amargos frutos de la *judicialización* de la vida política». Había sido «una estrategia favorable para los intereses a corto plazo del PSOE, pero letal a medida que los tribunales avanzan en su trabajo». Ese «insensato curso de *judicialización de la política*» que empezó con el caso Guerra, escribía el 3 de septiembre de 1995, ha desembocado «en una *politización de la justicia* no menos demencial» y «la abusiva utilización extraprocesal de la *presunción de inocencia* para proteger a los militantes del propio partido ha tenido como respuesta la manipulación simétrica de la *presunción de culpabilidad* dictada contra los adversarios políticos». Nada ha funcionado como debiera y ha generado sus propios efectos más allá de todo control: «aparentar normalidad como si nada ocurriese» desde el Gobierno «cobra un aire de irrealidad al recordar que el Supremo tiene en sus manos una causa penal de terrorismo donde aparecen citados el jefe del Ejecutivo y dos exministros».

Con un González ya inhabilitado para la dimisión decorosa o paliativa, la melancolía transpira sola: la «política es un oficio cruel y brutal que arrincona en oscuros callejones sin salida a sus más dotados profesionales». El presidente estaba ante la encrucijada de abandonar el barco cuando se hundía o presidir el funeral. Su capital electoral había resistido más o menos entero hasta «la oleada de escándalos de 1994», pero desde entonces ningún cálculo de conveniencia partidista, «siempre aproximativo», justificaba el «achicharramiento a fuego lento en la parrilla de un político tan importante para la España democrática como Felipe González».

Unos pocos días de diciembre de 1995 han «añadido una nueva condena a las dictadas anteriormente contra el hermano» de Alfonso Guerra, se ha hecho pública «la apertura del juicio oral del caso Filesa», la «exdirectora del BOE ha sido condenada», el exdirector de la Guardia Civil, Luis Roldán, «comparecerá próximamente ante los tribunales», continúan «las diligencias por el uso ilegal que altos cargos de Interior dieron a los fondos reservados», sigue «la instrucción contra Mariano Rubio, exgobernador del Banco de España», han sido «inculcados ya dos exsecretarios de Estado de Interior en el caso GAL» y, por fin, «el Supremo estudia el procesamiento del exministro Barrionuevo».

Los éxitos parciales, como la detención de Roldán, la presidencia de la Unión Europea y la aprobación del Código Penal no logran compensar «las decepciones producidas por la impune persistencia de la financiación ilegal de los partidos, la opacidad del estilo de gobernar, la sectaria endogamia del PSOE y la falta de aliento de las reformas políticas emprendidas». Los

atentados mortales de ETA alcanzan entonces una fiereza inaudita en otro año sangriento –asesinan en vísperas de las elecciones del 3 de marzo de 1996 en poco más de una semana a Fernando Múgica y a Francisco Tomás y Valiente–, con mezquinas consideraciones de Aznar sobre el atentado contra quien había sido presidente del Tribunal Constitucional y amigo personal de un Felipe González hondamente afectado. La antipatía coriácea de Pradera contra Aznar no tenía razones solo políticas, pero nada debía alterar la certidumbre de que «la guerra sucia y la tortura para combatir al terrorismo significan una indigna mimesis de los enemigos de la libertad y corroen por dentro el sistema constitucional». Desertar del Estado de derecho ante «este cerco de barbarie» estaría «incubando los huevos de la serpiente y entregando las llaves de la fortaleza democrática a los bárbaros».

Ni el presidente supo dimitir a tiempo, como le había pedido Pradera, ni supo dar explicaciones convincentes para tranquilizar a su votante y a la ciudadanía entera. Pero tampoco Aznar y sus alianzas secretas con banqueros, periodistas y escritores obtuvo legitimidad moral y política alguna contra un Gobierno desahuciado y un presidente desfondado tras los trabajos de Pedro J. Ramírez como «celestino de la pinza» de Aznar con Anguita, su función de «correvedile» del excoronel Perote y «alcahuete de Conde en el chantaje del exbanquero al Estado en 1995». Lo que había empezado como la segunda campaña de acoso y derribo de la democracia rozó «la estabilidad del propio Estado», según la confesión compungida de Anson, católico arrepentido. A Pradera no le quedaba ya fondo alguno del que sacar argumentos ni políticos ni morales para justificar al presidente, pero creyó hasta el final que «el rito de la dimisión permitiría dejar a salvo el prestigio de las instituciones y el respeto por las reglas de juego».

16. MEMORIA Y MELANCOLÍA

Su entrega al mejor oficio del mundo se había visto salvajemente reducida en los últimos años a la dirección de la revista *Claves* y a una paliativa gestión directa en el consejo de *Babelia* hasta 2001. Su función ahí va seguramente más allá de la autoasignación de libros, a fuerza de convicción y de corpulencia, y escribe con frecuencia, casi siempre sobre pensamiento e historia, teoría política y memorialismo selectivo. Siete años después de la *caída* del mundo de la edición, su temple analítico vuelve a ser relajadamente irónico, pese a «los profundos y espectaculares cambios producidos en el ecosistema cultural». Lo dice en una semblanza autobiográfica de 1996 pensada para un encuentro sobre la edición en Santander. Está empezando a corregir sus más aprensivas cavilaciones derrotistas, como si fuese ya «uno de esos coroneles británicos destinados en la India que se retiraban a la metrópoli a una temprana edad para cultivar su jardín».

En su caso ese jardín fueron el diario *El País* y la revista mensual *Claves de Razón Práctica*, y tanto esa colaboración escrita como su asesoría áulica en Prisa mitigaron parte de sus murrias o funcionaron al principio como la paliativa metadona del jaco que había sido la edición humanística. A esas alturas, tras casi treinta años como editor y fuera ya de la edición, no valía la pena ocultar que había sido «un predicador desde muy pequeño. Seguramente tuve vocación sacerdotal cuando era bachiller y luego milité en el Partido Comunista, que también era una forma de ser predicador». De hecho, cuando entró «a trabajar en *El País*» lo hizo «como predicador, como pelmazo, en el año 1976».

La dirección de la revista constituyó enseguida otra cosa, estimulante y adictiva: en ella estuvo su trampolín para pensar los problemas a escala global y las enmiendas a escala local que la deficiente experiencia democrática española exigía. Su intolerancia despótica a los parlanchines iluminados (o «arbitristas», en su idioma) estuvo delicadamente combinada con una suerte de optimista confianza en las soluciones racionales, difíciles y complejas. El mismo impulso que identificaba en Johan Cruyff, en Jorge Valdano y en los herederos futbolísticos del optimismo de la Ilustración, servía también para abordar la complejidad de las soluciones realistas. Cuenta Fernando Vallespín su asombro al recibir el encargo de Javier para dirigir los seis volúmenes de la *Historia de la Teoría Política*, empezada en las vísperas de su final en Alianza en 1990 y rematada en 1995. La tradición marxista de la que procedían las fuentes clásicas de Pradera agradecía el nuevo mapa de autores desconocidos como John Rawls, de la misma forma que años atrás José María Maravall había propiciado su encuentro personal con Adam Przeworski o su frecuentación de Leszek Kołakowski.

LA PLENITUD DEL ENSAYISTA

Lo que posiblemente sí podía hacer Pradera era desacelerar el desgaste democrático que asfixiaba al país y corregir deformaciones interesadas sobre el pasado reciente. El asalto de la derecha contra los socialistas supervivientes en 1993 produjo un doble efecto en Pradera: lo condujo a la melancolía ante la degradación pública de la vida política española, y a la vez a una reactivación de la memoria de lo vivido como periodista, como editor y como conspirador. La

inmersión en las fallas de la democracia y la rehabilitación fidedigna de la Transición estimularon a Pradera a acentuar su más venenosa veta de polemista corrosivo en la espuma de la actualidad: hay una secreta ley de reequilibrios interiores entre las embestidas contra los falsificadores del pasado y la subsistencia del franquismo en democracia y la fusilería graneada que ha de disparar contra quienes transgreden cualquier ética política y pública para derribar al adversario. Esa fue su forma de depurar higiénicamente la melancolía invencible de fondo.

En el coleccionable *Memoria de la Transición* que editó *El País* en 1995, Pradera ya no aparecía ni como jefe de Opinión, porque no lo era, ni como editor, porque había dejado de serlo. Era «Politólogo y periodista», pero esa era una filiación muy rúcana para lo que estaba escribiendo entonces. Cuando las peores decepciones socialistas lo abrumaban, Pradera reencontró una ruta compensatoria hacia el ensimismamiento reflexivo y analítico. El abandono de la edición le había redirigido a una actividad que ha quedado desdibujada u omitida pero fue entonces absorbente. Actuó como el historiador más perspicaz de la Transición y el mejor analista en marcha de las deficiencias de la democracia, sin que apenas haya quedado lugar donde recordarlo hasta después de su muerte, con la publicación póstuma tanto de *Corrupción y política* como de *La transición española y la democracia*. Pero son muchos los artículos en *Claves* y en *El País* que ratifican una solvencia documental, una perspicacia analítica, una independencia de criterio y una valentía moral que lo sitúan como el más temprano, fiable y consistente analista de la Transición y la primera madurez democrática.

Ingresaba en el taller del ensayista para abordar con una visión única las tramas internas de sucesivas etapas, sin apelar a las confidencias presidenciales o de ministros y exministros amigos (pese a sus interrogatorios implacables, a veces inquisitoriales, en largas sobremesas, cenas amistosas, fines de semana o incluso partidos de fútbol inflamables). A Pradera no se le oíría nunca sermonear con redichas advertencias de quien *ya lo había dicho*, pero los historiadores tendremos que decir que ya lo había dicho. Los análisis que diseminó con voluntad preventiva antes incluso de la última mayoría absoluta de 1989 no afectaban ya a la continuidad en el poder de los socialistas sino a las lesiones que una decadencia patética podrían infiltrar en la democracia española. José María Ridaó escribiría a su muerte que «no eran los hombres y mujeres ejemplares quienes llamaban su atención, sino esos otros que se equivocaban con pasión y con pasión reconocían sus errores», precisamente porque «abominaba de la hagiografía y concedía el máximo valor a la palinodia». Eso incluía las suyas, convenientemente ironizadas, y a veces fruto de obcecaciones menores o menudencias obsesivas que no comprometían la fundamental virtud de ver lejos.

La subterránea pelea por la memoria histórica estuvo en su radar intelectual desde el principio –aquel editorial de 1977 titulado «Memoria histórica» era suyo *de todas, todas*, por decirlo con expresión praderiana–, pero no siempre sobrellevó bien la exhibición gráfica de los trabajos materiales de excavación: recuerda vívidamente Lluís Bassets la intolerancia, la angustia casi física de Pradera ante las fosas abiertas tantas veces reproducidas en periódicos y televisiones tras la movilización que vivió el país desde el año 2001. Desde el principio está también en su radar la deformación egoísta de la Transición y del mismo franquismo por muchos de sus protagonistas.

Sus apuntes arrancaban de muy atrás, a medida que crecían también discursos correctivos y embellecedores del pasado protomítico. Quizá el mayor de los embustes empezaba con la Transición y su proceso en marcha de beatificación épica. Al menos desde octubre de 1988 Pradera no había callado su irritación de observador contra una «fábula a medio camino entre la

ingeniería social y la concepción conspiratoria de la historia de un modelo patentado y exportable» de Transición. El ensueño de Torcuato Fernández-Miranda como autor de una obra escenificada por una compañía con Suárez a la cabeza y el rey como empresario –defendida en numerosos libros y tempranamente por Rodolfo Martín Villa– no era más que una ficción abusiva contra la pluralidad de papeles y circunstancias azarosas que convergieron ahí. No hubo una «operación planeada hasta el último detalle en laboratorios ideológicos secretos», porque esa perspectiva no «resiste la más mínima prueba empírica». De ahí que resulte a menudo ridículo el empeño de los gobernantes, dominados por «la vanidad patriótica y la megalomanía política», en la convicción de que «los españoles descubrieron la fórmula mágica de la Transición exportable a otros países como la patente de un crecepelo». Y fue ese el crecepelo que empezaría a impugnar los albores del siglo XXI, sin demasiado que ver con la complejidad viscosa pero afortunada de la historia real.

El desbroce de malentendidos o equívocos deformados por el presente fue desde muy temprano un motor intelectual de Pradera. Nadie tuvo entonces una idea mejor que «la ruptura pactada», aunque la izquierda empezase ya a cebar en los noventa (como dos décadas después) el discurso denigrador de la democracia remontándose al principio. Es quizá una «de las paradojas más sangrientas» ese regreso de la «mentalidad del todo o nada» que rige para quienes fueron víctimas de la dictadura y sienten deslegitimado «el sistema constitucional, acusado de falsear la voluntad popular». Cargaría varias veces Pradera contra las tentativas de «descalificar» a la Transición como «una fraudulenta amnesia del pasado que viciaría de raíz la autenticidad de las instituciones democráticas». Quienes lo hacen fingen «ignorar el obstáculo que hubiera supuesto para la convivencia pacífica de los españoles la perpetuación de una memoria de duelo políticamente escindida». Mantener esa «sectaria cristalización de las emociones» habría impedido tanto «la reconciliación entre los adversarios» combatientes en las trincheras como «la superación del rencor familiar heredado» a sus descendientes.

Mientras el incienso sobre la Transición arreciaba, e incluso sus antiguos saboteadores ahora la exaltaban, Pradera prefería retomar el hilo de los papeles y la memoria para frenar la reescritura de un pasado resistente a la melaza del mito o la revisión narcisista. En «Los pozos de la memoria», el 5 de julio de 1995, muy poco antes de sus demoledores diagnósticos sobre la «agonizante legislatura» socialista, subrayaba «las grandes lagunas producidas en el relato» de la Transición, a menudo causadas por «aventureros y megalómanos» autorrepresentados como «los falsos héroes de la lucha contra la dictadura» después «de maquillar sus biografías». Algunos habían prolongado de forma inmoderada, incluidos los socialistas, «el pacto implícito de silencio» de 1976 entre «reformistas del franquismo» y dirigentes clandestinos y eso relegó «al olvido o situó en un segundo plano» a la lucha antifranquista. Ni siquiera después de 1982 el PSOE había honrado a sus primeros renovadores, anteriores a Suresnes.

Pradera sí se acordaba de sus nombres –Antonio Amat, Luis Martín-Santos– y allí «está enterrada también» la figura de Dionisio Ridruejo, a pesar de que «prácticamente todos los rasgos definitorios de la Constitución de 1978 (incluida la compatibilidad entre soberanía popular y monarquía constitucional) fueron teorizados y defendidos» en un tiempo en que la oposición no tenía «un compromiso irreversible con la democracia representativa». Había sido un «adelantado de la reconciliación» y el primero en señalar «el decisivo papel que debería jugar Cataluña». Pese a que nadie se acordase, «su síntesis de liberalismo y socialdemocracia se hallaba abierta a todas las posibilidades político-partidistas de centro e izquierda moderada»: lo recuerdo musitando la pregunta sobre el lugar en que hubiese militado Ridruejo de seguir vivo tras la

muerte de Franco, ¿en la izquierda de UCD?, ¿en la derecha del PSOE?, ¿en el partido socialdemócrata de Francisco Fernández Ordóñez?

A los veinte años de la muerte de Franco, *El País* había programado bajo la coordinación de Joaquín Prieto, Santos Juliá y Javier Pradera la serie de fascículos *Memoria de la Transición* cuyas entregas tantos coleccionamos religiosamente (y algunos perdimos después: Taurus reeditó el libro al año siguiente, 1996). Caía en el peor momento posible para el socialismo en el poder desde 1982, el verano de 1995, y ahí publicó Pradera tres artículos: «El despegue de la reforma», «El coste de la democracia», «La bola de nieve». Con los tres aspiraba a amargar el azúcar del pasado, corregir la deformación teleológica y reprobar la simple mentira como coartada justificativa del presente. El «mito de la Transición» se convirtió en «bola de nieve» que rodó por su cuenta falseando una navegación que sus protagonistas emprendieron «sin cartografía fidedigna, desprovistos de brújula, temerosos de no llegar nunca a la tierra prometida». El rápido paso «de la miseria a la opulencia» llevó a algunos políticos «a recurrir de forma narcisista a los elogios de fuera» para vestir con ese celofán una operación que tuvo tanto de azar improvisado como de necesidad condicionada: «Ese complejo, azaroso y multidireccional proceso quedó reducido» por interés vanidoso e instrumental a unos «planes de ingeniería política». Iban desde la famosa pizarra de Suresnes en que Alfonso Guerra «fantasea haber escrito» el desarrollo de la década siguiente hasta el papel de presunto demiurgo que habría desempeñado Torcuato Fernández-Miranda. Ambas fantasías no pasaban de ser «jactanciosas reivindicaciones».

Pero era más grave el silencio general sobre «el coste de la democracia», porque «el ritmo acelerado e improvisado de la Transición» no había sido corregido después. Seguían vigentes algunas de las decisiones letales para el funcionamiento de una democracia limpia y ni la ley de partidos de 1978 ni la ley de financiación de 1987 quisieron enmendar las ventajistas averías que amenazaban al sistema en su conjunto. Hoy ya dañaban irreversiblemente la credibilidad socialista y amenazaban a la vez la fiabilidad democrática y la mera decencia del resto de los partidos, en particular de un Partido Popular pronto dopado y de una CiU visiblemente afectada de males parecidos tras veintitrés años gobernando Pujol en Cataluña. Es esa «una patología institucional» con «efectos desmoralizadores» en los ciudadanos que ha logrado difuminar a través de una «variante del cohecho» el «pago forzoso de comisiones». Esa invisibilidad de la «frontera entre corrupción individual e institucional» se llamaría en Cataluña el 3 % años después, pero no era diferente el mecanismo que adulteraba la competición política a través de una financiación irregular a veces verdaderamente desmedida, como sucedió durante muchos años en el PP.

El poco alarmista Pradera se mostraba expresamente alarmista ante esta «mala herencia de la Transición» porque su enmienda dependía de los mismos infractores y su persistencia podía poner «en peligro la supervivencia misma del sistema constitucional». De nuevo desembocaban en la escritura del periódico los mimbres que de forma más sistemática y desnuda estaba desarrollando en *Corrupción y política. Los costes de la democracia*. Hubo de ocupar buena parte de 1994 y 1995 en una escritura minuciosa y ampliamente documentada. Cuando su secretaria Carmela Berzal recuerda a Pradera atareado e incluso perdido en su despacho entre carpetas de gomas y recortes ingentes, con su código de colores y su orden caótico, resucita en parte el taller de un ensayo de expiación de culpas ajenas y redención voluntarista de una grave falla del sistema.

De ese estudio anatómico de la corrupción apenas publicó por entonces algunos apartados, en un libro colectivo y en parte en una colaboración en *Claves*. El núcleo del libro siguió en casa y sin circular hacia editor alguno. Al parecer, una alusión escrita a la existencia del libro, cazada

quizá al vuelo en alguna tertulia, fue suficiente para que Pradera bloquease su publicación, aunque es probable que no sea esa la única razón. Apenas nadie supo nada de ese libro hasta después de su muerte, también porque en él se esconde una dimensión cabal de la intimidad de Pradera. Vino a ser el testigo de cargo que dejaba indemne su honestidad analítica a la vez que lo blindaba secretamente y lo excluía del comportamiento vengativo o revanchista que demasiadas veces había visto en otras víctimas de desengaños políticos parecidos.

¿Hubiera dado pie la dimisión dos veces reclamada de Felipe González a que Pradera se repensase la publicación de su anatomía de la corrupción? La prolongada agonía socialista era la atmósfera moral que pidió a Pradera un regreso al pasado y a la vez una contribución clave a la higiene democrática contra la corrupción. La ofensiva desesperada y embrutecedora que la derecha había trabado para acabar con González a cualquier precio no era tampoco el escenario más propicio. Pradera se salvaba escribiendo en secreto ese libro, sin ceder al chantaje emocional pero sin usarlo tampoco como sierra mecánica justiciera contra el árbol caído. Prefirió no actuar como los excomunistas habían actuado con su antiguo partido cuando ya no estaban en él: el rencor cebado durante años convertía al testigo crítico en víctima falsamente inocente. Tampoco lo había hecho Manuel Azcárate con sus excamaradas y había sabido escapar al patrón de excomunista sin nada que reprocharse, de aquellos que «ingresaron y salieron del partido por móviles igualmente nobles», «siempre víctimas y nunca verdugos», como escribía Pradera el 30 de noviembre de 1994, a la muerte de Azcárate. Quizá por eso también animó a Santos Juliá por entonces a compartir espacio en el encarte dominical en *El País* bajo la nueva dirección de Jesús Ceberio. En alguna medida, la menor implicación política de Santos Juliá facilitaba su acritud crítica frente a la dimensión más analítica o interpretativa o incluso autocensurada de un aliado histórico de los socialistas hoy en caída libre.

No había sido nunca excomunista anticomunista y tampoco ahora sería, en plena debacle socialista y asaltado justa e injustamente su poder, el azote de una corrupción que estuvo extendida a casi todos los grupos políticos. El diabólico diagnóstico de su ensayo era hipercrítico con ellos pero también con el pandémico cinismo democrático. No ansiaba depurar responsabilidades ni saldar cuentas, sino abrir una vía de análisis para documentar las consecuencias lesivas de decisiones equivocadas, desgranar los enjuagues y las dolencias profundas de una democracia con metástasis. La impotencia de la democracia para defenderse a sí misma estaba en cada renglón de un manuscrito cuya publicación solo incendiaría el campo de juego sin contribuir a reformarlo. Demasiadas veces los defensores de una «democracia *intransigente*» a derecha e izquierda entroncaban «con la tradición furiosa y exasperada del viejo regeneracionismo». Sus agónicas protestas contra el mundo y un «moralismo indistinguible de la moralina» acababan jugando a favor de las «jeremiadas de los profetas que denuncian la inautenticidad» de la democracia. Esa «irracional irresponsabilidad» cristalizaba en quienes demandaban para la Constitución –había escrito el 6 de diciembre de 1995– una «macrorreforma dirigida a liberarla de los grilletes» que se supone que le dejó la transición, en actitud «inseparable de las apocalípticas condenas regeneracionistas de la democracia realmente existente».

Con ese libro mitigaba la jesuítica e injustificada mala conciencia o incluso conjuraba íntimamente la complicidad que los más venenosos asperjaban día sí día también. A los Anson, Campmany, Sebastián, Jiménez Losantos, Gutiérrez o Pedro J. Ramírez no los callaría ni ese libro ni ninguna otra acción, pero escribirlo servía de consuelo laborioso contra la frustración. Tenía algo de venganza privada contra el poder y contra la misma sospecha de que hubiese acabado siendo verdad que a partir de un punto Felipe González fuera el jefe de los malos.

LA ÚLTIMA TRINCHERA

A los socialistas los retiró del poder su indulgencia suicida con la corrupción, la emergencia de una generación saturada de gobiernos socialistas (desde 1982 hasta 1996) y la efectividad de una operación mediático-política coordinada. Su derrota tuvo algo de martirio autoinfligido o quizá de expiación morbosa de culpas propias: las brasas de la mortificación final tuvieron algo de ritual entrega a una derrota probable y algo también trágico en la defensa de un partido y una ejecutoria a esas alturas tan plagada de errores y culpas. No quedaba otro margen que votar en blanco y favorecer al PP o votar al PSOE por segunda vez «con la nariz tapada».

Los socialistas perdieron las elecciones del 3 de marzo de 1996, pero solo trescientos mil votos los separaron de los populares, y esa fue otra jugada cruel de la historia que no ayudó a los socialistas a escapar del delirio e infundió en muchos el espejismo de un regreso inmediato al poder. Era verdad, sin embargo, que los resultados frustraban «dramáticamente las elevadas expectativas» de Aznar, que solo podría gobernar «con el agua al cuello», y a la espera de «aplicar con mayoría absoluta propia un programa oculto de españolismo castizo y catolicismo tridentino».

El decepcionante resultado obligó a Aznar a rebajar buena parte «del credo superespañolista y ultraliberal» defendido en la oposición y jaleado en la noche electoral a las puertas de Génova («¡Pujol, enano, habla castellano!»). Se apresuró entonces Aznar a hablar catalán en la intimidad en busca de los votos del catalanismo conservador, azuzado y reprobado con desorbitada acritud en la anterior legislatura, cuando respaldaba al Gobierno en minoría de González. Igual que el hugonote Enrique IV comprendió a tiempo «que París bien valía una misa, el españolista Aznar vio enseguida que el palacio de La Moncloa bien valía un viraje catalanista». Tuvo que poner a «remojo el ideario ultraespañolista del PP para conseguir los votos» de Pujol, pero solo a cambio de convencer a los suyos de que la «efectiva ocupación de las palancas del poder les permitiría conseguir en el futuro la mayoría absoluta necesaria para aplicar su programa máximo». La buena noticia es que desde mayo era ya perceptible el forzoso «viraje dado por el PP en sus relaciones con los nacionalistas catalanes y vascos», y quizá haya sido «demasiado pronunciado y espectacular para ser reversible». La retranca de fondo es, por supuesto, irónica porque siguen siendo reales las «dificultades del neocentrismo popular para establecer con claridad su linaje ideológico».

La indisimulada frustración de Aznar acentuó también la urgencia por reducir el riesgo de resurrección del resistente electorado socialista. Solo una semana después de la derrota socialista, el 10 de marzo de 1996, Pradera ya ha subido a su columna la transcripción pública del encuentro de julio de 1994 en casa de Pedro J. Ramírez entre Aznar y Anguita. La *pinza* había logrado erosionar al PSOE, el poder había vuelto a manos de la derecha y Anguita parecía ahora un predicador sonámbulo desde la orilla buena. En febrero Pradera se había permitido pronosticar el éxito de la estrategia de Aznar y el fracaso de Anguita con su «satanizadora doctrina de las dos orillas» y su «oratoria sagrada» de «capellán castrense». Seis meses después de la victoria conservadora, había terminado la «luna de miel» con Aznar del «falangista temprano antes de ser leninista tardío» por incumplimiento de compromisos anteriores. Aznar no iba a desclasificar como presidente los papeles del CESID, lo cual dejaba a Anguita ante un «burdo dilema que lo presentaría como un tonto de remate (susceptible de ser engañado por el más rudimentario trilerio)

o como un redomado sinvergüenza (fingidamente escandalizado por un viraje de 180 grados fácilmente previsible por cualquiera)».

Lo inesperado fue la frustración de algunos de los peones mediáticos más activos en la conquista del poder porque vieron defraudadas sus expectativas. La primera legislatura de Aznar exigía el prudente desifonamiento de los principales portavoces de la campaña mediática. Después llegó una evidente distensión del panorama y una rebaja sustancial de la agresividad, al menos la clásica. Lo nuevo empezó a ser, incluso sin cumplirse aún los primeros cien días de gobierno, la proliferación de «vitriólicos insultos de significados miembros de la antigua corte del PP», descartados o no elegidos «a la hora de repartir cargos y tomar decisiones»: hoy se les ve como «recrecidos críticos de los publicistas que trabajaron para el PP hasta hace pocos meses», escribe el 18 de septiembre de 1996.

Llegaban nuevos tiempos presumiblemente desapacibles y quizá también asaltos imprevistos. El *sindicato del crimen* podría no haber nacido solo para derribar a Felipe González o incluso al revés: el éxito de la operación y la efectividad del clima «porno-político» pudo animar a acabar también con lo que llamaban el *felipismo polanquista* o el *polanquismo felipista*. El linchamiento de Prisa podría equivaler a arruinar cualquier posible resurrección para los socialistas, a pesar de estar apenas a 300.000 votos del PP. Eso significaba ir contra Prisa, *El País* y la SER con Pradera en la sala de máquinas como ideólogo o referente de la acción política de la empresa de medios más poderosa de España.

Incluso la derecha de Aznar, según Jiménez Losantos en un artículo publicado poco después en *La Ilustración Liberal*, llegó a creerse el invento de «los fariseos del polanquismo» (o sea, Pradera como «gurú ideológico de Prisa») sobre el *sindicato del crimen* como instrumento concebido para el acoso y derribo de Felipe González. Cuando dejaron de ser útiles se sintieron abandonados por el poder y «objeto de todas las atrocidades, desde la persecución laboral al descrédito personal y familiar, sin vacilar ante el asesinato civil». Ahí contaba Jiménez Losantos su «defenestración de *Abc*» en el momento en que Anson y Cebrián ingresan en la RAE (elegidos el 19 de diciembre de 1996, Anson ingresa el 8 de febrero de 1998 y Cebrián el 18 de mayo de 1997), aunque fueron muchos otros los damnificados o abandonados por Aznar en una «depuración política» de «gravísimos perjuicios laborales».

El damnificado más esforzado fue Jesús Cacho en *El negocio de la libertad*, de 1999. El desplegable central estaba dedicado a Pradera por «sátrapa de Prisa», además de «patético Beria del felipismo». A pesar de tener el «riñón averiado» (eso era verdad desde muchos años atrás), lo tenía también «bien forrado», según las sutiles explicaciones del biógrafo y confidente de Mario Conde. Era para Cacho «uno de los tipos más oscuros que ha dado este país» y «hombre que constantemente destila bilis por los acantilados de su pluma» (¿por qué acantilados?) y, según él, atrapado en el enredo neurótico de haber traicionado a su familia y a sus muertos. En la misma imputación chapoteó también Jaime Campmany por entonces, «un chocarrero exdirector de *Arriba* y exjefe del Sindicato Vertical del Espectáculo, especialista en desenterrar a la familia de sus críticos para agredirles o chantajearles a golpe de cadáver». Por eso aludía a Pradera como *el huerfanito* en sus columnas castizas y de timbres neofalangistas. Se lo decía también Carmen Polo cuando era niño, y cuando creció y se hizo comunista se lo había dicho su tío Juan José Pradera —«ahora estás con los que mataron a tu padre»—. En buena medida era verdad que aquello parecía el «regreso de los muertos vivientes del franquismo», como Jaime Campmany y «otros esbirros de la dictadura que dictan ahora lecciones de liberalismo» y «democracia a diestro y siniestro». Según Cacho, sin embargo, Pradera era «prisionero de un trauma infantil» e incapaz de

evolucionar «de acuerdo con sus sentimientos más profundos» hacia la derecha, cautivo de su pasado e individuo «atormentado que destila toneladas de mala baba en sus escritos, el hombre a disgusto dentro de su propia piel».

La partícula de verdad se perdía anegada en el vómito del rencor, pero es posible que la conciencia escrupulosa de Pradera se viese afectada o incluso humillada por la bajada a los infiernos que iba a emprender arrastrado por la campaña que se avecinaba. Cacho reduce a Pradera a un traidor a su destino de clase y hombre «moralmente castigado por el drama de saberse defensor de una ideología, de un partido y de un líder que han traicionado sus mejores aspiraciones enfangándolas en el barro de la corrupción y el crimen de Estado». Debía leer poco a Pradera este Cacho porque eso era precisamente lo que una y otra vez había denunciado de todas las maneras imaginables en sus artículos firmados de los últimos quince años.

Lo que sí pudo atosigar a Pradera fue la determinación de salir a cara descubierta contra un atropello político-judicial que dejaría tanto la piel como el estilo maltrechos. La batalla más sucia que ha vivido el periodismo español de la democracia giró en torno a la voluntad política de Aznar de reducir la influencia y el poder de Prisa en favor de la creación de un grupo de comunicación alternativo, liderado y avalado desde el nuevo Gobierno popular. La naturaleza política del conflicto era inocultable y a un año del acceso de Aznar al poder, a 4 de mayo de 1997, «la amenaza del exclusivismo» no era solo una intuición de Pradera sino una práctica rutinaria a la luz de «la intimidatoria política contra la libertad de empresa y la libertad de expresión impulsada por el vicepresidente político y por el secretario de Estado de Comunicación». En realidad, explica el 27 de julio de 1997, el Gobierno persigue el «doble objetivo extrajurídico de expulsar del mercado a Canal Satélite», perteneciente a la empresa Sogecable, participada minoritariamente por Prisa, «y conceder una posición dominante o monopolista a Vía Digital», liderada por Telefónica, «que ha sido incapaz hasta ahora de iniciar sus retransmisiones» cuando su competidora lleva «velocidad de crucero» y cien mil abonados. La cadena de pago Canal Plus existía desde 1990 bajo la imaginación insumisa de Juan Cueto.

Detrás de una pugna empresarial había sobre todo una batalla política y Pradera no esquivó el bulto entonces, cuando las acciones judiciales y la misma gestión política del PP fueron acosando de múltiples maneras a los consejeros de Sogecable y a los máximos responsables de Prisa, Jesús Polanco y Juan Luis Cebrián. Ignoro el nivel de convicción que comprometió Pradera en una operación que le llevó por entonces a matutinas y casi diarias conversaciones con un viejo amigo y consejero de Prisa, Matías Cortés, pero el desgaste periodístico y moral de aquella etapa fue corrosivo al arrastrar a la prensa española a comportamientos todavía inéditos en los veinte años de democracia: los medios convirtieron sus páginas y tertulias en instrumentos de una batalla que generó un lodazal de dimensiones estratosféricas. Hubo un antes y un después tras aquella descarnada instrumentalización mediática y política de intereses empresariales, a las puertas de la revolución digital que era la que de veras lo iba a cambiar todo. En todo caso, parecía ya seguro el diagnóstico que Josep M. Colomer formulaba por entonces y suscribía Pradera en junio de 1998 sobre las «carencias y disfunciones» del sistema constitucional. Eran «el fruto inevitable de la acertada forma en que se realizó la Transición», pero hoy «las virtudes de la Transición se han convertido en vicios de la democracia».

Entre 1997 y 1999, Pradera afrontó la tercera y última fase de una operación que había fracasado en 1993 en el intento de derrotar al partido socialista; radicalizó después temerariamente la discrecionalidad de los ataques para trinchar a Felipe González en 1996 y solo más tarde, tras la victoria del PP, emprendía la etapa final para «liquidar a Prisa» a través de la «instrucción inquisitorial» que emprendió el juez Javier Gómez de Liaño contra Polanco y Cebrián. Esa «mafiosa operación político-periodísticajudicial» iba dirigida contra el «polanco-felipismo», en expresión acuñada por Pedro J. Ramírez. No era un monstruo tomado del *Manual de zoología fantástica*, de Borges, dice Pradera, sino «una ridícula manera de denigrar a los periodistas y a los colaboradores» de Prisa «que no están al servicio del PP o que no satanizan al PSOE».

Las circunstancias forzosas de un ataque en toda regla a la empresa y al periódico sometieron a Pradera a una humillante explotación de su versión de polemista sarcástico, agrio y ofensivo. Regresaba sin chaleco antibalas a la primera línea de la trinchera, tras asistir al abrasamiento en directo del liderazgo más potente de la política española del siglo XX y a la descomposición del partido que había encarnado lo mejor de la izquierda social de la democracia. La lógica bélica del pragmático frío se impuso sobre la tentación plausible del silencio o la prudente inhibición. Había en juego no solo el poder de Prisa o el poder de los socialistas, sino la dignidad privada y pública de quien una y otra vez pasaba por ser «la auténtica eminencia gris» de Prisa, como había dicho Luis María Anson, o el «gurú ideológico» en palabras de Jiménez Losantos, o el «sátropa de Prisa», según Jesús Cacho.

Por eso pensaba que podían converger dos intereses no exactamente idénticos en aquella batalla: mientras a los cabecillas financiados por Mario Conde pudo guiarlos la oportunidad de una desnuda revancha contra Prisa, por parte del Gobierno pudo haber solo una batalla instrumental para sus propios intereses políticos de futuro. O dicho por Pradera, «tal vez el Gobierno del PP aplique básicamente una *estrategia de debilitamiento* para imponer sus condiciones» a Prisa, «mientras que sus aliados mediáticos –los diarios *El Mundo* y *Abc*, el semanario *Época* y la radio de los Obispos– se propongan una *estrategia de destrucción* para dar *la vuelta a la tortilla*» y acabar con el primer grupo de comunicación en España. De hecho, las demandas judiciales habían sido interpuestas precisamente por Jaime Campmany y por Jesús Cacho, ambos estrechamente relacionados con el juez Gómez de Liaño, y vinculados también con el exbanquero Mario Conde y sus obvios afanes de defensa y venganza desde la intervención de Banesto en 1993 del gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, íntimo amigo de Pradera.

Entre mayo de 1997 y septiembre de 1999 se sustancia la batalla que estuvo a punto de llevar a la cárcel a los consejeros de Sogecable Leopoldo Rodés y Carlos March y a los máximos ejecutivos de Prisa, Polanco y Cebrián. En las mismas fechas de la declaración de Polanco ante Gómez de Liaño, el 19 de junio de 1997, Prisa obtenía los mejores resultados económicos de su historia, Canal Plus lograba el millón de abonados, *El País* rondaba los cuatrocientos mil ejemplares y algo menos de tres mil millones de pesetas de beneficios. La historia acabó con la inhabilitación durante quince años del juez Gómez de Liaño en octubre de 1999 por prevaricación continuada (después de ver revocados «siete de sus disparatados autos»). Ignoro en qué medida había fundamento legal o no para la actuación contra Sogecable y el alquiler de los descodificadores de Canal Plus que comercializó la empresa, pero el resultado jurídico fue el sobreseimiento de la causa, la condena del juez, y poco después el acuerdo empresarial para fundir las dos plataformas digitales en litigio (Canal Satélite, de Prisa, y Vía Digital, de Telefónica, y Televisa, presidida entonces por Anson).

A instancias del ya veterano Jaime Campmany, «franquista castizo y grafómano chocarrero», el objetivo había sido no tanto la condena real de los procesados como «someterles a la *pena de banquillo*, aun siendo consciente de la inexistencia de los supuestos delitos que se les achacaban». Se trataba de ponerlos al mismo nivel público de delincuentes probados como Mario Conde, Javier de la Rosa o José María Ruiz-Mateos. Las actuaciones desde febrero de 1997 del juez venían dictadas por las «órdenes impartidas» desde *Abc* y *El Mundo* y firmadas por la «alegre muchachada», como los había llamado ya en 1991 con resonancias inequívocamente franquistas. Eran un puñado de «falangistas valerosos, periodistas corruptos, izquierdistas de boquilla y mercenarios de Conde» confabulados para «linchar al grupo Prisa». Aunque «el carácter subterráneo de las alianzas político-mediáticas dificulta su interpretación», al menos a 4 de mayo de 1997, «no se sabe bien si el Gobierno de Aznar controla los diarios *Abc* y *El Mundo*, el semanario *Época* y la radio de los Obispos o si, por el contrario, esos medios llevan de la brida al presidente Aznar». Diez días después, sin embargo, varios miembros de la AEPI, «humorísticamente denominada Agrupación de Escritores y Periodistas Independientes» (y creada en 1994 por un «grupo de energuménicos adversarios del PSOE»), han «sacado su patita de censores por debajo de la puerta» para «exhortar» a Aznar a «emprender un proceso de limpieza del mundo de la comunicación». Era el *sindicato del crimen*, en invento venenoso de Pradera cuyo origen sin embargo no he registrado por escrito o se me ha escapado. «Matones de papel» sí los llamó, a 29 de octubre de 1997, con un completo inventario de firmas, desde el presidente de AEPI, Camilo José Cela, hasta *Aurora Pavón*.

En todo caso, el efecto real es que «esa sectaria política de comunicación se prolonga en la ofensiva lanzada» contra medios independientes sin «temor a las represalias del poder y sin necesidad de sus ayudas». Por eso Cebrián y Polanco, este mayo de 1997, «podrían ir ya preparando el equipaje para pasar una temporada en prisión o para prestar una fianza multimillonaria». En realidad, esos mismos publicistas «que adulan de forma obscena al magistrado Gómez de Liaño» han expresado ya sus «más gozosos y negros pronósticos sobre la suerte procesal de Cebrián y Polanco». De ahí que el papel del Gobierno en esta «bochornosa historia mediático-judicial» da que pensar e incluso «existen dudas respecto a sus eventuales connivencias con la instrucción de un sumario orientado» a «hacer doblar la rodilla» a Prisa «a costa de saltar por encima de los principios constitucionales de libertad de información y de empresa». Las conexiones funcionaban de forma óptima para evitar la información indeseable, y a eso lo había llamado Elisabeth Noelle-Neumann en 1995, escribe el 12 de octubre de 1997, la *espiral de silencio*, en este caso destinada a omitir del mapa la sentencia del Supremo que contradecía a «esos jugadores de ventaja». Su «mal perder» les lleva «hasta ocultar que los tribunales han desautorizado sus maliciosas imputaciones: ni el Gobierno socialista prevaricó con su acuerdo de 1989, ni la televisión de pago es contradictoria con el servicio público, ni la licencia conseguida por Canal + ofrece la más ligera mácula de ilegalidad».

En los mismos días en que Anson ingresaba en la RAE, el 8 de febrero de 1998, hacía público en *Tiempo* el ya deslucido *secreto de Polichinela* sobre la conspiración político-mediática armada contra Felipe González en 1993 y fortalecida en 1994. Pradera no dejó pasar la ocasión de atender a la escabechina que le esperaba a Anson por desleal y traidor a sus antiguos socios de sindicación en AEPI. «La cólera desatada» contra él por la «brutalidad de los epítetos utilizados por Jiménez Losantos, Sebastián, Ramírez, Gutiérrez y Herrero» era solo el prólogo a nuevas explicaciones. Ahora Anson cargaba con los efectos y la misma medicina que él había aplicado como exdirector de *Abc* en «infames campañas de desprestigio» contra personalidades que iban

desde Aranguren, Benet, Ferlosio o Calvo Serraller y hasta Miguel Bosé, Elías Querejeta u otro amigo tan próximo como Fernando Savater (como buen pura sangre, no dejó pasar tampoco la ocasión para deplorar «la catadura moral (en su caso, caradura inmoral) de Pablo Sebastián» cuando dirigía *El Independiente*).

La ferocidad de los «zarpazos lanzados ahora contra Anson por quienes solo una semana antes le alababan de manera impúdica enseña que los aprendices de brujo terminan antes o después por saborear su propia medicina». En el «calvario de desmentidos, puntualizaciones y franciscanas humillaciones» que siguió a la entrevista de *Tiempo* llegaba también la puntualización de que – transcribe Pradera– «esa “operación de fondo” no había sido “solo y ni siquiera fundamentalmente periodística”»: también intervinieron “partidos políticos” de la oposición y “algunos medios financieros”». Apenas unos días después, el Tribunal Supremo condenaba a Mario Conde a cuatro años de prisión y seis meses por apropiación indebida, mientras era desbaratada por la Audiencia Nacional el 21 de junio de este 1998 «la infamia judicial denominada Sogecable» promovida por «el ruidoso sindicato de columnistas y tertulianos que han utilizado fríamente su vanidad y sus agravios para tratar de infamar a la empresa que edita *El País*».

Ya son públicas por entonces las inquietantes investigaciones de Ernesto Ekaizer para probar «que el exbanquero utilizó a Anson como recadero y a Ramírez como instrumento en su estrategia de chantajear a las instituciones del Estado con los papeles del Cesid». En octubre de 1999 es condenado Gómez de Liaño a quince años de inhabilitación por prevaricación continuada, pese a la campaña en su defensa de los afiliados a la «alegre muchachada», y en particular el «insultorio dominical» de Pedro J. Ramírez en *El Mundo*. La lealtad en la derrota debió ser estrecha porque, según contaba a Joana Bonet la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada, ya separada del periodista, el único amigo al que frecuentaba hacia 2017 el exdirector de *El Mundo* era precisamente el exjuez Gómez de Liaño y actual abogado de causas de perfil torcido.

A toro pasado y «en definitiva, se trataba de someter arbitrariamente y sin justificación» a Polanco y convertirlo «en el blanco principal de esa calumniosa embestida por su condición de presidente de PRISA», escribe el 19 de septiembre de 1999. También es público que el «denunciante Jaime Campmany» recibió «de Conde cientos de millones de pesetas para salvar *Época* –el libelo semanal que dirige– de la quiebra; el querellante Jesús Cacho, despedido de *El País* después de publicar una falsa información dictada por Javier de la Rosa, es un hagiógrafo del exbanquero; finalmente, un hermano de Javier Gómez de Liaño ha sido socio de Conde y ha actuado como abogado suyo». Esa operación había convertido a Conde en el «capo de la mafia política», dice Pradera el 6 de octubre de 1999, tras «la masiva compra de periodistas y de medios de comunicación antes de la intervención de Banesto a finales de 1993» y la justificada beligerancia de sus «aduladores» Ramírez, Sebastián (y su seudónimo *Aurora Pavón*), Campmany y Cacho. Es natural que «la tribu mediática protectora de Liaño» reclame el indulto para el exjuez en estas fechas de finales de 1999, sin olvidarse de Julio Anguita, su «pedestre paleoleninismo» y la tenaza que fomentó contra el PSOE. Es probable que el fragor de la batalla explique la crueldad que gastó Pradera entonces con Anguita, que «devolvió al hemiciclo los días de gloria de don Emilio Castelar» y «los diputados tuvieron oportunidad de escuchar una de las más encendidas, autocomplacientes y demagógicas oraciones del tribuno de Fuengirola» (resonaría en muchos otra escondida maldad: el auténtico León de Fuengirola había sido durante años el falangista José Antonio Girón de Velasco).

OTROS FINALES

Los efectos de este larguísimo y cruento episodio llegaron muy poco tiempo después. Su batalla a sangre y fuego pudo ser el último acto de servicio a Polanco porque era también un acto de justicia y de gratitud por su rescate profesional en junio de 1989, «en una de las peores épocas de mi vida». Llegaba a Pradera ahora otra «endemoniada situación» relacionada con los planes de Prisa de cotizar en Bolsa. El 16 de marzo de 2000 había asistido al Consejo de Administración celebrado en Sevilla, sin disponer con tiempo suficiente de información relevante y con el apremio del consejo de acudir al funeral de Jaime García Añoveros. Su desacuerdo con la decisión de salir a Bolsa era firme pero el «mandato imperativo» autoimpuesto le obligó a votar en favor de la medida. Desaprobaba la operación por varios motivos pero sobre todo uno: dejaba a *El País* en una posición demasiado vulnerable frente a futuros accionistas.

El desdoblamiento que había practicado en la última década entre la adhesión a Polanco en el consejo de Prisa y la libertad discrepante en el Consejo Editorial condujo a Pradera a una «sensación de incomodidad creciente» sin otra salida honrosa que la dimisión del Consejo de Administración, cuando ya no estaban en él ni Jesús Aguirre, por reiterada incomparecencia, ni Jaime García Añoveros. Se dio dos semanas para redactar las seis páginas a un espacio destinadas a explicar a Polanco tanto las razones de su discrepancia con el tema de fondo como su discrepancia sobre el procedimiento utilizado. Lo que complicaba decididamente las cosas era el papel que había asumido en la batalla de los tres últimos años contra «la manipulada instrucción del caso Sogecable y de la inicua persecución de que fuisteis objeto tú, Juan Luis y los demás consejeros». De la misma manera que no tuvo «el más mínimo problema a la hora de aguantar el chaparrón de groseras injurias lanzadas sobre mí por el sindicato del crimen», a cuenta «de mi vinculación profesional con *El País* y la Ser, la circunstancia de ser consejero de Prisa me ataría las manos para continuar la pelea si esa gentuza volviese ahora a la carga por decisiones adoptadas con mi voto emitido en términos de mandato imperativo». Había otras causas de discrepancia, desde luego: creía injusta con los accionistas minoritarios de Prisa la fusión de Santillana en el grupo, cuyo precio estimaba sobrevalorado, y tampoco simpatizaba con la transferencia del 1 % del capital de la autocartera de Prisa a Cebrián, no tanto porque no lo mereciese como por el procedimiento ideado y porque se «hubiese podido hacer lo mismo con otras personas (repito: no figuro entre los eventuales agraviados)».

Sin embargo, hay un *sotto voce* que traspasa la carta entera y quizá explica mejor que nada la decisión de apartarse de una empresa que ha dejado de ser lo que era. Ese bajo continuo tiene dos caras. Una es la insuficiente protección de *El País* frente a «los futuros accionistas que puedan entrar en la compañía tras su salida a Bolsa» y la necesidad de «garantizar la independencia» y la «fidelidad a sus principios fundacionales». El asunto era complicado, y «hasta tal punto lo sé que no estoy en condiciones de hacer» ninguna propuesta, pero la fórmula de «blindaje de *El País*» es insuficiente.

La segunda cara asoma de otro modo e ilumina otra forma de desencanto o automarginación de un mundo que ha dejado de ser el suyo. En el fondo, se repiten agravadas las causas de su incompatibilidad con Diego Hidalgo en Alianza y que hoy acentúa Prisa con una actividad ajena al mundo de la edición y el periodismo. No parece que Pradera fuese entusiasta del negocio televisivo y quizá tampoco de la programación para adultos de Canal Plus, aunque sirviese para ver los partidos de fútbol en casa de los amigos y con amigos (desde Joaquín Almunia hasta Claudio Aranzadi pasando por Jorge Semprún, Miguel Ángel Aguilar y tantos otros). En los

últimos años, Prisa «ha ido desplazando insensible e inevitablemente sus focos de interés desde la Galaxia Gutenberg hasta el mundo audiovisual, la industria del entretenimiento y el futuro digital».

Pero ese es ya un mundo «que me resulta profesionalmente ajeno» y por tanto la «eventual autoridad de mis opiniones cubre actualmente una zona mínima de los asuntos de Prisa». También a Andrés Ortega le explicó entonces que seguir en la empresa ya no era seguir en el periódico que había fundado su padre, Ortega Spottorno. Durante un tiempo fue verdad que sus «contribuciones como consejero desde la *lógica profesional* podían conjugarse con la *lógica empresarial* y resultar útiles al grupo». Pero esa etapa ha «terminado definitivamente» y no cree desempeñar ya «ninguna función en el consejo de Prisa que justifique mi presencia» (y copio de la carta que agradezco a Mercedes Cabrera). Seguro que empezó a abusar por entonces con amigos y cómplices de la frase irónica que le gustaba repetir entre ataques de nostalgia y achaques de melancolía, «con lo que hemos sido»...

La mutación del sistema editorial se sumaba ahora a las complicadas «limitaciones» asumidas desde el principio en su papel de consejero, «de manera plenamente voluntaria y por razones deontológicas». El desacuerdo de fondo con la desprotección de *El País* ante la salida de Prisa a Bolsa pudo ser el definitivo motivo para quebrar el difícil equilibrio entre ese «mandato para mí vinculante» de «votar de acuerdo» con Polanco en las decisiones cruciales y a la vez «no forzar más allá de lo razonable la autonomía de mis propias opiniones». La ocasión había llegado esta vez al «no poder dejar de votar a favor de tus propuestas aunque esté en desacuerdo». Por eso no queda otra salida que dimitir del consejo, y Pradera mantuvo desde entonces su vinculación solo con el Consejo Editorial de los martes. Ni las gestiones de consejeros como Manuel Varela, ni las medidas adoptadas para mejorar el blindaje de *El País* ni el soberano enfado de Polanco ante su renuncia fueron suficientes para revertir la decisión tomada. Seguramente el conjunto de causas inmediatas pesaba menos que la sensación íntima de pertenecer al pasado de la empresa y a otro mundo profesional.

No había ya trauma alguno en esa marcha en el año 2000 ni los cambios del ecosistema editorial condenaban necesariamente a un futuro infierno poblado de iletrados y adictos digitales. Pradera hacía años que había rehecho sus fúnebres diagnósticos tras convalecer del trauma de Alianza. En realidad, ni había abandonado el mundo de la edición ni la edición lo había abandonado a él, aunque le gustara decirlo. Se había instalado desde 1989 en una zona de penumbra o lógica borrosa, en un ángulo invisible desde el que actuaba sin actuar, en que insinuaba sin decir, en que sugería sin imponer. Contra lo que repitió tantas veces, Pradera no dejó nunca la edición, ni la edición lo dejó a él. Hasta 1996 al menos había mantenido en Taurus una suerte de asesoría externa que *capeó* los recios temporales de finales de los ochenta y principios de los noventa, cuando estaba a punto de sumarse a la dirección efectiva María Cifuentes en 1999. Dejaba de ser indispensable que el buen libro de historia social, cultural o política sobre España llevase firma anglosajona en la portada porque la profesión avanzaba hacia una renovación evidente. La nostalgia de maestros aislados y totémicos como Manuel Tuñón de Lara había pasado a la historia también y en la nómina de autores de aquella Taurus es imposible no adivinar la sombra de Pradera, con veteranos amigos como Santos Juliá, Álvarez Junco, Víctor Pérez-Díaz, Gabriel Tortella y José María Maravall, o algo más jóvenes como Mercedes Cabrera, Fernando Vallespín o Rafael del Águila, prematuramente fallecido.

Tras el cese de María Cifuentes en Taurus, buena parte de ellos la seguirían años después hasta Galaxia Gutenberg, con intervención del mismo Pradera, y cuando estaba ya ahí José María Ridaó. Galaxia publicaría en 2012 sus materiales de la etapa comunista, cuidadosamente editados

por Santos Juliá, *Camarada Javier Pradera*, y dos años después se encargaba Fernando Vallespín del manuscrito que Pradera abandonó en 1996, *Corrupción y política*. Ese mismo 2014, otros dos libros echaban por tierra la presunta imagen del ágrafo recalitrante: FCE reunía algunos artículos fundamentales sobre *La Transición española y la democracia*, en edición reivindicativa de Joaquín Estefanía, mientras que José Álvarez Junco razonaba la categoría intelectual del manuscrito más antiguo, *La mitología falangista*, en su edición aparecida en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Quizá entre aquellas «sombrias tentaciones» de principios de los noventa pudo estar alguna de las gestiones de Pradera para vender Taurus a la editorial Tusquets, aunque el resultado pudo ser paradójicamente otro. Su fundadora Beatriz de Moura y Antonio López de Lamadrid habían creado, contra los prejuicios de la cultura literaria española, un pionero premio para biografías y memorias. Empezó con pie titubeante en 1988, cuando obtuvo el Premio Comillas Carlos Barral por su tercer y más deslavazado volumen autobiográfico, *Cuando las horas veloces*, pero el jurado dejó desierto el premio al año siguiente. Solo a partir de 1990, tras su salida de Alianza y en su tercera convocatoria, presidiría Pradera el jurado durante los siguientes diez años, constituido por Mario Vargas Llosa, José Álvarez Junco, Gonzalo Orgaz, José María Guelbenzu y Antonio López de Lamadrid.

Intuyo que tanto su primer premiado, Jorge Edwards con *Adiós, Poeta...*, como otros de los galardonados tuvieron el respaldo rotundo de Pradera, y entre ellos Javier Tusell y su biografía militar de Franco en la guerra; un viejo amigo de luchas y editorialista de internacional en *El País*, Manuel Azcárate, y María Esther Vázquez con su biografía de proximidad de Jorge Luis Borges. Otro manuscrito lo había aportado Pradera al premio, porque hacía cuarenta años que ayudaba a Carlos Castilla del Pino con sus trabajos. Lo hacía «muchas veces sin proponérselo de manera explícita» y, «aunque le pese, quiero dejar constancia de mi agradecimiento», escribe Castilla en las primeras páginas de su extraordinaria autobiografía *Pretérito imperfecto*, de 1996. Le siguió el festival de humor, sexo, veracidad y cotilleo que entregó Adolfo Marsillach, *Tan lejos, tan cerca*, y que hubo de divertirle sin duda más de lo que lo entretuvieron las memorias de Alberto Oliart, otro viejísimo amigo político vinculado a la UCD y escritor estrechamente conectado al entorno catalán de Barral y Castellet.

Era suya ya también la percepción de un renovado sistema que restituía de otras maneras y por otras vías los viejos valores culturales de la edición. Todo estaba dejando de ser como había sido (aunque nunca había sido como fue), pero convenía no confundir «la decadencia del propio mundo personal con la decadencia de la humanidad». Invitado por Jordi Herralde a otro encuentro sobre edición en Santander, volvió sobre ello en 2001 para no «convertir nuestros problemas personales, o nuestra mala pata, o nuestra mala suerte biográfica, en una elegía por la decadencia de la cultura occidental o del mundo editorial». Estaba sucediendo lo contrario, y «lo cierto es que en esa brutal revolución por destrucción schumpeteriana que se ha producido en estos años, la edición española está más viva que nunca».

En ese momento abandonaba el jurado del Premio Comillas (lo relevó Jorge Semprún, y se incorporó otro amigo íntimo, Miguel Ángel Aguilar), y aceptaba seguir pasando por predicador editorial sin catastrofismo morboso. Decididamente remiso a creer en «el advenimiento del Apocalipsis», tampoco profetizaba para el futuro «la pesadilla de una rigurosa dieta de *best sellers* de ínfima calidad comercializados por grandes superficies construidas sobre las ruinas de pequeñas librerías desahuciadas». De hecho, resultaban «demasiado ominosos para resultar creíbles» los frecuentes «pronósticos pesimistas sobre un futuro *orwelliano*» dominado por

grandes corporaciones proclives «a empobrecer la cultura impresa en nombre de la rentabilidad a corto plazo y las altas tiradas». Nada justificaba la abolición de la vieja «complementariedad existente entre el egoísmo racional y el altruismo, el ánimo de lucro personal y el beneficio social, el valor de cambio y el valor de uso, la mercancía y el bien cultural».

Empezó a asumir alguna púdica forma del autorretrato de editor incorregible y hasta teorizó tentativamente sobre lo que había sido su aprendizaje y su experiencia con Arnaldo Orfila. Había sido un extraordinario editor a cuenta en gran medida de su talento para encontrar asesores y ejercer como *vampiro*, que fue una imagen predilecta de Pradera, y lo es hoy de otros editores educados en su escuela, como María Cifuentes y Miguel Aguilar. Pradera bromeó muchas veces con el príncipe de los vampiros (Jesús Aguirre), pero asumió que en efecto esa era la esencia de su oficio, posiblemente porque un editor se dedica a una «especialidad infinitamente más próxima a los escritores y a los lectores que a los banqueros y a los contables». En realidad, su destino acabó siendo dejar de ser vampiro para empezar a ser vampirizado, de acuerdo con la lógica secreta de un oficio que tenía en esa una de sus leyes fundadoras. La memoria de un editor está unida «para siempre a los miles y miles de títulos que contrató y publicó en su día» y ese es, como dijo de Orfila, «el mausoleo y la pizca de inmortalidad» que le cabe.

Ya sabía Pradera, cuando escribió estas palabras en 1998, que otra pizca de perdonable inmortalidad le correspondía también a él. Pero siguió creyendo que no había abandonado la edición «sino que la edición me abandonó a mí, desgraciadamente, porque creo que el oficio de editor es el mejor oficio del mundo».

EPÍLOGO SENTIMENTAL

Era ya verdad que todo había dejado de ser como era, y probablemente él mismo había perdido parte de la furia y la obstinada pasión por la política como laboratorio de antropología humana, quizá ya también con un desencanto invencible ante la evolución de la democracia española. Las pugnas recientes y la nueva ferocidad habían pasado factura a la calidad democrática, pero también a Pradera. España había entrado en una madurez morbosa, con demasiadas averías latentes, demasiadas reformas sin acometer, demasiadas dolencias profundas sin corregir para una sociedad que había salvado etapas a mucha velocidad y con pruebas de esfuerzo de alto riesgo. El relativo sentimiento de fraude o de desengaño que asoma aquí y allá en el nuevo siglo, sin embargo, no contamina retroactivamente su juicio sobre la etapa en la que tuvo un alto protagonismo en la sombra. Seguía siendo el mejor ciclo de prosperidad que España había vivido en su historia y, en el fondo, y por vías impensables, los años ochenta cristalizaron la nueva sociedad que la República ni pudo ni supo culminar. Los graves desperfectos de fondo que subsistían, algunas de las llagas más vivas, incluso las brasas temibles de nostalgias neofranquistas o de intolerancia maciza no bastaban para corregir el diagnóstico positivo sobre la democracia pero dejaban huellas inquietantes para el futuro y amenazas latentes. El negro pasado en este país pesaba todavía más de lo deseable y un mal viento, una coyuntura desfavorable, una crisis galopante podría despertar la bestia dormida del neonacionalismo castizo de vieja estirpe franquista. La democracia había sido un éxito, pero nunca sobraría la vigilancia higiénica sobre los virus más nocivos de una sociedad con rencores larvados e inquietantes zonas de sombra.

Empezaba a tener mucho de coronel británico de vuelta a casa, aunque no inactivo ni perezoso, tampoco cínico ni desahuciado. No lo era desde luego el temible gigantón agigantado por el mito que conocí en 2001, pero sí era la autoridad atenta, la escucha intrigada, la perplejidad interrogativa: la humanización del ogro era patente para todos. No había rastro ya, en aquella estatura interminable y algo inestable, del tótem cultural y político omnipresente en las batallas de los intelectuales antifranquistas y la batalla de la democracia.

Una cierta sensación de impotencia o de irrelevancia pudo ir acercando a Pradera al análisis cada vez menos político de la actualidad y más técnico. Parecía recuperar tardíamente la pasión jurídica que solo intermitentemente había diseminado en su articulismo. Quizá eran las sombras chinescas del «abogado de época» que Matías Cortés adivinaba en Pradera («era el único que se tomaba en serio la Constitución», me dijo risueño y sin pestañear). También fue de entonces una labor más áulica que nunca, apuntando con indolencia calculada esta idea, sugiriendo sin énfasis aquella otra, descubriendo un posible autor nuevo o la madurez de un nuevo ensayista. En sus esporádicas colaboraciones en *Babelia* dejó su rastro de lector minucioso y meditativo, sin ganas ya para la crítica negativa y con una voluntad de pedagogía civil todavía immaculada. Incluso alguna forma del ensimismamiento autobiográfico asomaba de forma titubeante en un escritor púdico por definición, cada vez con más frecuencia activado por solicitudes ajenas, jornadas, conferencias y encuentros sobre edición, sobre franquismo, sobre la Transición, sobre sí mismo. Lo hizo en aquellos años en torno al mundo de la edición y sus avatares, o sobre figuras ligadas sentimentalmente a su vida. Con Semprún en el barco urdimos en 2005 y a iniciativa de Pradera el homenaje cabal que por fin le llegaba a Dionisio Ridruejo, a los treinta años de su muerte.

No daba ya el miedo que había dado, pero algunas fuentes de irritación seguían incólumes y entre las mayores estaba la beatificación de la Transición en una confitura pegajosa. Pero tampoco fue precisamente tolerante con las parvas deformaciones que difundió el uso masivo de una metáfora naïf en la izquierda y el independentismo, el candado del 78 (y él había hablado ya irónicamente de los *grilletes* de la Constitución). Los «demoledores» de la Transición no suelen «avanzar hipótesis contrafácticas» sobre el deber de la oposición entonces: ¿boicotear las elecciones del 77, votar contra la Constitución, compadrear con ETA? Roza la «necedad o la vileza» describir a veteranos antifranquistas (Santiago Carrillo, Josep Tarradellas, Ramón Rubial) «como los isidros de un espejismo colectivo», cobardemente incapaces de detectar un supuesto «tsunami de posibilidades purificadoras de la sociedad». Pradera recelaba de los motivos que a muchos les conducían a derogar una etapa porque esa visión del «trienio de la Transición», entre 1976 y 1978, suprimía «con el ventajismo de conocer *ex post* sus resultados, las incertidumbres de quienes tuvieron que adoptar las decisiones eligiendo en encrucijadas con mil caminos» (en un artículo particularmente rotundo, «La Transición por dentro», del 7 de mayo de 2011).

Por eso fue también intransigente con quienes quisieron equiparar en los últimos tiempos la ley de punto final argentina con la ley de amnistía de 1977 para cargar sobre la Transición «un cierto déficit democrático». Como ha recordado Patxo Unzueta, Pradera condenó esa equiparación en un consejo de *El País* de octubre de 2008 como «disparate jurídico y una ofensa para los antifranquistas que lucharon por ella» como «victoria de la democracia y también una norma necesaria para culminar la reconciliación entre los españoles». No incurriré en la vulgaridad que hubiese sublevado a Pradera de llamarlo padre ni padrastro de la Transición, ni siquiera comadrona, que quizá hubiese sobrellevado mejor en lo que tiene de cómico. Lo que sí sé es que se burló corrosivamente de tanta parentela como le salió a la Transición desde muy temprano: unos en forma de *vedette* guerrera e incombustible, otros como afectados coristas remilgados, muchos como fabulados maquinistas, y algunos como gendarmes y revisores con gorra de plato.

Uno de sus últimos viajes, con Claudio Aranzadi, llevaba una carga emocional íntima para seguir los pasos de Lenin en San Petersburgo (y antigua Leningrado). Allí seguía latiendo algo de lo que fue el vínculo primordial con un sueño absoluto. Le sucedía quizá como a Eric Hobsbawm en sus memorias. En algún remoto pliegue de la conciencia, «el sueño de la Revolución de Octubre» seguía emitiendo una forma de luz retrospectiva, apagada, incluso desconectada, pero sin haber conseguido borrarla. Por eso leer a Hobsbawm en su *Entrevista sobre el siglo XXI* podía ser en cierto modo leerse a sí mismo, sus fantasmas y sus melancolías, sin sucumbir al descarriamiento de la edad y el autoengaño. La fuerza de la verdad propia se colaba a veces en las páginas de los otros, quizá difícil o inconfesable, pero veraz como el desconcierto de saber que «los imperativos morales» de la militancia política marxista de Hobsbawm «estuvieron al servicio de inquietantes pulsiones perfeccionistas». Era una manera exquisitamente delicada de hablar de temibles pasiones como el mismo estalinismo que experimentaron uno y otro, o las dolencias que afectaron a Giangiacomo Feltrinelli, fundador de los Grupos de Acción Partisana y próximo al principio de los años de plomo a «grupos izquierdistas italianos» como Potere Operaio, Lotta Continua y Brigate Rosse hasta sumergirse «en un mundo alucinatorio de inminencias revolucionarias»: un «ambiente demencial y desquiciado» que le llevó a creer en la conversión de «Córcega en la Cuba del Mediterráneo».

Había sido verdad su pronóstico y la segunda legislatura de Aznar destapó entre 2000 y 2004 un ideario que retrotraía a etapas siniestras del pasado y fomentaba hasta el impudor, a través de propagandistas sin escrúpulos, una relectura del franquismo falseada, maquillada y comprensiva

demasiado insultante. En abril de 2004 la sonrojante gestión política que hizo el Gobierno del PP de la matanza yihadista de Atocha pudo decantar una victoria de José Luis Rodríguez Zapatero que Pradera no había descartado en sus artículos. El «mal perder de un rencoroso Aznar» empujó al ya expresidente «a esparcir malévolamente ruindades, vilezas e insidias» contra Zapatero que no mejoraron su opinión sobre el expresidente. Su discurso sobre el estado de la nación en 1997 no había pasado de ser «aseado, encogido y obvio», pero los *Retratos y perfiles* que publicó en abril de 2005 llegaban con ideas «más bien pedestres, obvias y previsibles».

Había respaldado en el año 2000 el liderazgo solvente pero débil de Joaquín Almunia y su estrategia en favor de la unidad de la izquierda, acordada con el nuevo líder de IU, Francisco Frutos. Pero sobre todo respaldó la «ejemplar» dimisión de Almunia ante el fracaso de los socialistas y la mayoría absoluta de Aznar. El «aire mortecino, oscuro y autista» del PSOE en esa época no había ayudado a mejorar sus malos resultados. Por eso vivió con simpatía pública (y escepticismo privado) el relevo generacional que traía en julio de 2000 Rodríguez Zapatero como nuevo secretario general con la regocijante y «estruendosa derrota» del guerrismo, tan vengativo y ocurrente como siempre. Ahí empezó a circular la malevolencia intrapartidista de Guerra, que rebajaba al nuevo líder al *Bambi* pánfilo del cromó, pero también existía ya asentadísimo el recelo por la persistente influencia de la voz de Pradera entre la militancia: Rodríguez Ibarra había llegado a deplorar en declaraciones radiofónicas en este 2000 la influencia de un «tal Pradera» desde *El País* porque cuando aconsejaba algo acababa votándose en el partido lo que había recomendado en el periódico. Tras la victoria socialista en marzo de 2004, creyó que Zapatero «no debería doblar siempre a la izquierda para llegar al patio central del laberinto», a pesar de que desde entonces el PP de Mariano Rajoy regresase «a la estrategia de oposición aplicada con perseverancia y dureza desde 1989 hasta 1996».

Parecía que nada se hubiese aprendido del pasado y sus consecuencias democráticamente letales. Cuando hubo de escoger en 2000 un libro para conmemorar los veinticinco años de literatura en democracia para *Babelia* se refugió en una antigua querencia de 1986, *El Estado de partidos*, de Manuel García-Pelayo. Pero fueron más las fuentes de la alegría intelectual. Su avidez estuvo hasta el final tan viva como su generosidad, cuando señalaba en *Contra la historia* de José María Ridaó en 2000 «la audacia intelectual, la cultura omnívora y el talento literario» de un colaborador de *El País* al que no conocía (o acababa de conocer) y que pronto ingresaría en el núcleo duro del periódico, como sucedería con Rafael del Águila, Fernando Vallespín y tantos otros. Por entonces presentaba burlón a Ridaó como «el hijo de Ridaó, ese señor mayor que escribe en *El País*», como a mí me presentaba jocosamente como «apoderado de Cercas» para justificar mi presencia en un almuerzo sobre el 23-F al que ya he aludido antes (y después de discrepar minuciosamente de esto y aquello en torno a *La resistencia silenciosa*). No dejaba de seguir la obra de Alain Touraine para escapar a la «polución porno-política» invasiva en España, aunque no siguiese a Giovanni Sartori en el temor al «advenimiento del apocalipsis digital» ni a Jon Juaristi en la pesadilla orwelliana que profetizaba para el siglo XXI en *Sacra Némesis*, ni tampoco a Xavier Rubert de Ventós en su propósito de fondo en *De la identidad a la independencia* porque la «primera liga simbólica» de Galicia, País Vasco y Cataluña sería entendida en el resto de España como la defensa de una posición de privilegio.

Pero sí presentó *El control de los políticos* de J. M. Maravall junto a Felipe González en 2003, y leyó y analizó los nuevos ensayos de Paolo Flores d'Arcais, de Norberto Bobbio o, de forma especialmente conmovida el 9 de marzo de 1996, *A orillas del Estado* de Francisco Tomás y Valiente tras su asesinato. Otro íntimo amigo, José Ramón Recalde, había sobrevivido a otro

atentado de ETA y lo había contado él mismo en *Fe de vida*, en 2004. Cuatro años atrás compartían Pradera y Natalia desayuno en San Vicente de la Barquera con Recalde y María Teresa Castells, cuando aún hacía falta organizar manifiestos contra los comandos etarras y cuando aún las agresiones a su librería Lagun, en San Sebastián, permanecían impunes. Llegó entonces la noticia del asesinato de Juan María Jáuregui a manos de ETA, a sabiendas de que Recalde podía ser el próximo. El atentado contra él del 14 de septiembre de 2000 expresaba «la venganza de los cobardes contra un ciudadano valiente» en plena «ulsterización del País Vasco». Creía entonces Pradera que «los evangelistas del nuevo credo de la equidistancia» equivocaban la estrategia si cedían a una negociación en pie de igualdad.

No había dejado de pensar que Maquiavelo seguía siendo útil «a quienes pretenden entender el mundo del poder, bien sea para explotarlo en favor de sus intereses, bien sea para civilizar su ejercicio», como hizo él en los últimos años de su vida. En *El expediente* de Timothy Garton Ash encontraba una poderosa defensa de la «indagación completa sobre el pasado» y precisamente por eso era (francamente) «fallido» el diccionario de la transición de Victoria Prego, o era pésima su opinión sobre Jorge Verstrynge, «antiguo fascista nacional-bolchevique», después socialista «a fuer de antiliberal» y hoy en la órbita de Podemos.

Era lo mismo que explicaba la empatía cómplice con que leyó las memorias honradas de Jordi Solé Tura o el «excepcional» ensayo de Michael Ignatieff *El honor del guerrero*, y siempre a Enzensberger en cada nuevo libro traducido en Anagrama, o a Todorov en *Memoria del mal, tentación del bien* para condenar con él la trivialización de la «sanguinaria represión» franquista que promueven las «desatinadas comparaciones» entre la democracia y la dictadura promovidas por ignorantes osados o por delincuentes morales. A él también le parecía que el mejor Javier Marías había llegado con *Tu rostro mañana*, mientras disfrutaba con *Bowling for Columbine* del «virulento M. Moore». La emoción tras leer *Soldados de Salamina*, de Javier Cercas, se trocaría ante el manuscrito de *Anatomía de un instante* en deslumbramiento, y fue suya la idea de incorporar el apéndice de fuentes bibliográficas para neutralizar a los más suspicaces.

Siguió siendo hasta el final hombre de tertulia y sobremesa, aunque no estuviese ya en ella la «magistratura oral» de Juan Benet y Juan García Hortelano, fallecidos en 1992 y 1993, pero sí la virtud activa de un «espacio privado acogido al principio de extraterritorialidad», protegido «de la curiosidad ajena» y abierto a la intemperancia de alto riesgo, la agresividad sorpresiva o la prepotencia arrogante (sobre todo, la suya). Para entonces se había desplazado ya al restaurante vasco El Frontón y había ido mudando también por dentro con incorporaciones como Joaquín Estefanía, Santos Juliá, Francisco Rubio Llorente, o más jóvenes como Fernando Vallespín y José María Ridaó. Tras algún desencuentro, o lo que Ridaó llama maniobras que «transparentaban simultáneamente al viejo comunista y la víctima infantil de la guerra», seguía siendo verdad que a Pradera se le quería a pesar de él mismo, como si subsistiese todavía el instintivo mecanismo del huérfano que mide el afecto ajeno con provocaciones que fuercen el abandono o la ruptura personal. Mi padre fue huérfano también e identifiqué un parecido fondo invencible, esa incontinencia emocional que pone a prueba la resistencia de los demás y temerariamente desafía su lealtad afectiva o su fidelidad. «Al fin y al cabo, cuenta Ridaó, entendí que hacerse comunista fue una forma desesperada de mostrar amor a un padre asesinado reprochándole al mismo tiempo su ausencia irremediable.» Querérle a pesar de él fue, en algunos casos, la forma forzosa de querérle, aunque a la vez la ternura podía ser insoportable, como en sus últimas semanas de vida, cuando mi hijo pequeño Guillem le abrazó sin poder abrazarlo a la altura del abdomen porque *té un bulto molt gran*, sin que Pradera dejase de reírse.

Siguió siendo la legendaria firma de un periódico aunque sin el poder que habían tenido ni él ni el periódico. Sus artículos me los había saltado infinidad de veces porque preveía lo que dirían o incluso me aburría el tecnicismo constitucionalista o jurídico del que abusaba en su última etapa. También las columnas desmañadas y torrenciales de otra veterana devoción, Manuel Vázquez Montalbán, acabaron con mi creciente impaciencia de lector ante el desmayo de la prosa y las autoparodias involuntarias. Lo mismo me sucedía culpablemente con Pradera: era la firma del domingo en el periódico pero yo no era ya el joven adicto de años atrás. Había empezado a cultivar la sutil petulancia de quienes prejuzgan la letra del texto porque adivinan el espíritu.

Pero tampoco hay aquí ley absoluta que valga, porque seguía sobresaliendo en sus análisis la originalidad de perspectiva, el desmantelamiento del tópico y el don para hacer simple lo complejo e identificar la estructura central de un problema por debajo de la polución retórica. Cuando la mayoría del catalanismo repetía que Rodríguez Zapatero se había comprometido a respetar el Estatut que aprobase el Parlament, Pradera reducía tanta hipocresía a mero «estribo» para criticar al PSOE: nadie pudo imaginar que aquella «inocente jactancia» (o «candorosa bravata») pronunciada en un mitin de 2003 como líder de la oposición pudiera ser utilizada dos años después como «abusiva coartada» para «tratar de imponer al PSOE la aceptación a ciegas del Estatuto», según escribe a 30 de octubre de 2005.

Del alma de jurista de Pradera hubo otros rastros persistentes hasta el final. Lo explicó muy expresivamente Natalia Rodríguez-Salmones cuando ya no podía Javier ocupar su mesa de trabajo en casa pero ahí seguían «una Constitución de la editorial Civitas manoseada, llena de pòsits, de subrayados, de anotaciones, junto con un ejemplar de *Las leyes políticas del Estado* y otro de *La legislación básica de Derecho de la Información*, textos que comparten protagonismo y espacio con la Biblia y con el Diccionario de la RAE». La Constitución se podía encontrar «por cualquier rincón de la casa», y es probable que a alguna acudiese para tasar, recién salido de la UVI, el significado de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya. Así «intentábamos que volviera a la vida», cuenta Natalia, tras oírle preguntar «con el mismo hilo de voz de sus últimos días» sobre la sentencia. Había salido ese julio de 2010 y «pidió que le consiguiéramos un ejemplar. Llamé, como siempre, a Paco Rubio [Llorente] e inmediatamente recibí una llamada del magistrado Manuel Aragón que me dijo que se la enviaba al Hospital. Y con ella entre las manos, reclamando los votos particulares, volvió poco a poco a la vida».

Y volvió a escribir desde ese septiembre de 2010 con consultas aquí y allí, echando mano «de autos y de sentencias, de recursos, de anexos, de votos discrepantes, de jurisprudencia», para acabar, como siempre, contrastando su criterio con el de «sus amigos juristas», Rubio Llorente, Clemente Auger, Matías Cortés, Tomás de la Quadra. En mayo de 2010 había deplorado ya el «visible deterioro» de un Tribunal Constitucional que exhibía «su vasallaje a la lógica del poder y a los intereses partidistas». Medio año más tarde, en enero de 2011, entendía que esa sentencia sobre el Estatut había «disipado definitivamente las dudas de buena fe que pudieran existir sobre la posibilidad de hacer una lectura de la Constitución que permitiera una interpretación confederal del Estado de las Autonomías».

Por entonces debió aceptar el encargo compartido con Tomás de la Quadra para ocuparse de la sentencia, a propuesta de Joaquín Estefanía como director del *Informe sobre la democracia en España* de la Fundación Alternativas —en cuyo consejo asesor participaba Pradera—. Allí estimaban que «una sentencia 31/2010 contraria al nuevo Estatuto no dejaría al nacionalismo catalán otra salida que romper el equilibrio» que materializa la Constitución de 1978, y «optar a medio plazo por el soberanismo». Gracias a una genérica «actitud de deferencia» hacia el

Estatuto, el TC «no entró a saco» pero tampoco «aceptó las retorcidas lecturas» de la ley «para hacer cuadrar el círculo de sus realidades y deseos». Hacía demasiados años que se había «enterrado» el principio que hubiera permitido desarrollar un Estado autonómico diferente, «en muy buena medida por la comprensión de las peculiaridades de Cataluña». Las «patas de gallo» le habían salido muy temprano a la Constitución y al título VIII, y al menos quince años atrás ya parecía urgente la reparación de averías. Contra el actual «equipo habitual de salvadores de la patria» que arremetía desde la izquierda contra ella, seguía siendo partidario más de «reformas – con minúscula»– que de ninguna Gran Reforma, en sintonía con las posiciones de Rubio Llorente. Lejos de la «indeseable multiplicación de iniciativas de corte arbitrista», tan aborrecidas siempre, había defendido en 1995 la reforma de la ley de partidos, la reforma del Senado y del sistema electoral, al menos.

El futuro se iba a llevar muchas de esas disquisiciones por delante, pero al menos desde 1999 creía que una «redefinición federalista» de la Constitución «sería perfectamente compatible con el respeto y la protección de los hechos diferenciales que los nacionalistas desean legítimamente defender». No sé del todo si mantendría hoy el temple irónico con el que bromeaba en los últimos tiempos sobre el horizonte a la vista de una Cataluña independiente: no era un gran partidario de esa salida, pero si sucedía sería el primero en pedir la nacionalidad catalana. A Lluís Bassets tampoco le ocultaba en privado una suerte de fatalista asunción del futuro de una Cataluña independiente, más tarde o más temprano. Tampoco sus risas ahogadas y explosivas ese mismo verano de 2011, en la casa que compartió en Gandarilla con Natalia, dejaban adivinar el menor contagio apocalíptico, mientras revisaba el manuscrito de un panfleto contra depresivos culturales que publiqué entonces en Anagrama, *El intelectual melancólico*. Le divertía andar a la caza de los sindicatos en la melancolía recalcitrante y posturera, conjeturaba malévolamente con nombre y apellido un candidato y yo cabeceaba a cada candidato sin perder la sonrisa. Para entonces, se había tomado ya en serio la redacción de sus memorias, pero Javier no iba a decir en voz alta que había encontrado por fin el tono, la voz o las maneras para un relato autobiográfico convincente. Ni estaba seguro del todo ni sabía del todo si era verdad. Tampoco había accedido a imprimir ninguno de los dos libros que había empezado y terminado a lo largo de su vida, y menos iba a hacerlo con el riesgo de la autoindulgencia compasiva que practicaron antes decenas de memorialistas de los tiempos heroicos.

Había tenido tiempo para consultar con sus amigos pejugueras constitucionales y tuvo lucidez para recurrir a la flema irónica hasta el final. Pradera murió en noviembre de 2011 a causa de la reaparición de un melanoma en la cabeza, después de haber peleado el verano anterior contra un tumor benigno en el estómago, en un largo y difícil posoperatorio, y tras llevar ya muchos años sin un riñón. A su médico personal, Luis Audibert, le dijo en los últimos días que él quería *vivir, no durar*, y por eso murió vivo. Entonces supo Joaquín Estefanía que a él y a Claudio Aranzadi los había designado albaceas de su herencia. La nostalgia se había acentuado en los últimos tiempos, o la pura melancolía sin más. Ese mismo 2011 morían en quince días dos de los pilares personales más firmes de su vida: el 24 de mayo Luis Ángel Rojo y el 7 de junio Jorge Semprún. A ambos les dedicó textos conmovidos. A Semprún porque lo había sido todo desde siempre y a Rojo porque había sido desde 1950 la persona «que encarnaba la moral kantiana», que es lo que muchos le asignamos al mismo Pradera: «Un sentido del deber que parecía aprendido en Königsberg» y, en el caso de Rojo, volcado como casi nadie al «servicio civil» en un «modelo de honor de la burocracia de un Estado moderno». Quizá alguna más de las virtudes de Rojo cuadran con las del

propio Pradera cuando recuerda que dirimía las discusiones «sin la pedantería del maestro» sino «por consenso de los iguales que se sometían al arbitraje de su opinión».

Obedeciendo a ese pequeño jesuita que todos llevamos dentro, como diría él mismo, dictó a Natalia la columna que tituló con ironía impávida «Al borde del abismo», antes de morir la madrugada del 21 de noviembre de 2011 (o eso dice el parte de defunción del médico que lo atendió, Luis Audibert). El único día en que Pradera no iba a morir era otro 20 de noviembre, confabulados de un modo u otro, y una vez más, para que fuese así los amigos que estuvieron cerca en sus horas finales, Estefanía, Calvo Serraller, Maravall, Juliá, Savater, Miguel Ángel Aguilar, Ridao. Menos todavía ese domingo electoral que daría el Gobierno por mayoría absoluta al «omnisciente registrador de la propiedad de Santa Pola», Mariano Rajoy. Lo contó de forma emocionante Natalia cuando José Luis Rodríguez Zapatero le entregó el 16 de diciembre de 2011 la medalla al Mérito Constitucional concedida a Pradera a título póstumo. «Cinco días antes, Joaquín Estefanía y Emilio Ontiveros habían estado visitándole en su cama pues ya no se podía mover y casi no podía hablar. Para despertar su interés le preguntaron si creía que el gobierno en funciones podía tomar medidas ante la crisis de la deuda que se avecinaba. Lo negó con la cabeza, pero me dijo llama a Paco, a Paco Rubio Llorente, este coincidió en el dictamen. Al día siguiente me pidió que le buscara en la Ley del Gobierno los artículos referidos al gobierno en Funciones; se los imprimí en un cuerpo muy grande porque casi no podía ver, subrayó lo que le interesaba y me dictó la columna.» No podría verla ya impresa pero tampoco importaba: la leeríamos los demás con el corazón todavía en un puño.



El último verano en la playa de Gerra, en San Vicente de la Barquera.

PIES DE ILUSTRACIONES

Como en tantos otros lugares de este libro, el autor agradece a Natalia Rodríguez-Salmones, a Máximo y a Alejandro Pradera el permiso para reproducir fotografías procedentes del archivo familiar. *(N. del A.)*

Edición en formato digital: noviembre de 2019

© imagen de cubierta, Ediciones El País S. L.

© Jordi Gracia, 2019

© EDITORIAL ANAGRAMA, S.A., 2019

Pedró de la Creu, 58

08034 Barcelona

ISBN: 978-84-339-4099-5

Conversión a formato digital: Newcomlab, S.L.

anagrama@anagrama-ed.es

www.anagrama-ed.es

Jordi Gracia

**Javier Pradera
o el poder
de la izquierda**



**Medio siglo de
cultura democrática**


ANAGRAMA
ARGUMENTOS